



# ***TESIS DOCTORAL***

## ***La influencia del poder en la construcción histórica de la libertad de prensa de la Restauración (1874-1914)***

**Autora:**

***María López de Ramón***

**Director:**

**Prof. Dr. Manuel Ángel Bermejo Castrillo**

**DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL  
DERECHO**

Getafe, Febrero de 2016





## TESIS DOCTORAL

### ***La influencia del poder en la construcción histórica de la libertad de prensa en la Restauración (1874-1914)***

**Autora:** María López de Ramón

**Director:** Prof. Dr. Manuel Ángel Bermejo Castrillo

Firma del Tribunal Calificador:

Firma

Presidente: (Nombre y apellidos)

Vocal: (Nombre y apellidos)

Secretario: (Nombre y apellidos)

Calificación:

Getafe, de de



## ÍNDICE

SUMMARY .....	11
INTRODUCCIÓN.....	25
PRIMERA PARTE. RECONOCIMIENTO DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL PERIODO DE LA RESTAURACIÓN (1874-1883): LEY DE POLICÍA DE IMPRENTA DE 1883	
1. INSTAURACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO Y TRANSFORMACIÓN DE LA PRENSA	
1. Modernización política ficticia con el fenómeno del “encasillado”.....	41
2. La era de las masas “neutras” .....	46
3. El control de la información a través de los fondos de reptiles.....	49
4. La política represiva de Cánovas frente al reconocimiento constitucional de la libertad de prensa .....	54
5. La Ley de Prensa de los conservadores	
1. El sistema preventivo ideado por Cánovas.....	62
2. Aumento de la persecución de los tribunales especiales.....	70
2. TURNO DEL PARTIDO LIBERAL: HACIA UNA VERDADERA LIBERTAD	
1. Primeras concesiones legales a la prensa. Los debates en torno a la libertad de imprenta.....	75
2. La ruptura con el pasado: El Proyecto de Ley de Venancio González.....	84
3. LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO DE LIBERTAD DE PRENSA: LEY DE POLICÍA DE IMPRENTA DE 1883	
1. Fin de los delitos especiales de imprenta.....	93
2. Negación del sistema preventivo y principio de responsabilidad del gobierno.....	97
3. Remisión de todos los delitos de imprenta al Código Penal.....	102
4. Fundamentos legislativos para configurar la libertad de prensa	
1. Clasificación de los impresos y restricción de la noción de publicar...	106

2. Supresión de la licencia previa y del depósito previo.....	112
3. El director: nuevo representante legal del periódico. Responsabilidad contemplada en el Código Penal.....	116
4. Tutela judicial del derecho de rectificación y prohibición de escritos impresos en el extranjero.....	120
5. Separación de poderes: desconfianza en la autoridad gubernativa y aumento de competencias para la autoridad judicial.....	125
6. Rechazo del sobreseimiento de causas pendientes e ineficacia de la ley en las colonias españolas.....	131

## SEGUNDA PARTE. CONSOLIDACIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y PRIMERAS TRABAS GUBERNAMENTALES A SU EJERCICIO (1883-1898)

### 1. DESARROLLO DE UN CLIMA PROPICIO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE IMPRENTA

1. Afianzamiento del turnismo sustentado por el caciquismo estatal y territorial.....	137
2. El progresivo aumento de la influencia política y social de la prensa.....	141
1. El florecimiento de la libertad de prensa en EEUU y los países europeos industrializados.....	142
1. La libertad de crítica estatal en EEUU y las restricciones por obscenidad.....	143
2. El sistema liberal inglés y el nacimiento del “New Journalism”.....	149
3. La Ley de Prensa liberal francesa de 1881.....	152
4. La autocensura de los periódicos alemanes por las restricciones de la Ley Imperial de Prensa de 1874.....	156
2. Implantación gradual en España del nuevo periodismo.....	161
3. Hegemonía de la prensa política. Nuevas formas de intervención informativa.....	164

## 2. ACTUACIONES GUBERNAMENTALES RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD DE PRENSA RECONOCIDA EN LA LEY DE IMPRENTA DE 1883

1. Consagración del principio de separación de competencias en materia de delitos de imprenta.....172
  1. La utilización sistemática del artículo 22 de la Ley Provincial.....177
  2. Anomalías en la administración de justicia respecto a la aplicación de la Ley de Imprenta.....183
2. El uso abusivo de los instrumentos legales para coartar la libertad: la suspensión de garantías constitucionales.....187
3. Orientaciones gubernamentales a la prensa. El monopolio informativo durante la Guerra de Melilla (1893-1894)..... 193
4. La censura telegráfica en épocas de conflicto.....197
5. Las arbitrariedades gubernativas contra los periódicos de la oposición. El atropello constante a la prensa republicana.....201

## 3. LA INJERENCIA DEL PODER MILITAR EN EL SISTEMA INFORMATIVO ESPAÑOL

1. Del proyecto civil canovista al militarismo imperante a finales del Siglo XIX.....209
2. El tratamiento de los asuntos militares en los medios de información
  1. La existencia de los órganos de prensa castrense.....213
  2. La difusión de las ideas antimilitaristas en la prensa.....216
3. Los recortes a la libertad de imprenta de los militares
  1. Prevalencia del honor frente a la libertad de información.....219
  2. La restricción informativa contenida en la Circular de Chinchilla...226
4. El problema de competencia en los delitos militares realizados por medio de la imprenta
  1. Origen del conflicto de jurisdicciones.....235
  2. Ataques del ejército a las redacciones de *El Resumen* y *El Globo*....242
  3. La ruptura entre el poder civil y el poder militar.....249
  4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo a favor de los tribunales ordinarios.....257

#### 4. LA POLÍTICA DE REPRESIÓN CONTRA LOS ÓRGANOS DE PRENSA ANARQUISTAS

1. Las primeras manifestaciones anarquistas en la Restauración.....	269
2. El nacimiento de la “Propaganda por el hecho”.....	272
1. Aplicación del Código Penal para reprimir los motines andaluces.....	274
2. La respuesta legislativa y policial ante los ataques terroristas de 1893.....	278
3. Aumento de la represión informativa tras el atentado de la Calle Cambios Nuevos	
1. La privación de la libertad en la nueva ley antiterrorista de 1896.....	285
2. El forzoso silencio de la prensa española durante el Proceso de Montjuich.....	291
4. Ampliación del delito a la “apología del anarquismo” tras el asesinato de Cánovas en 1897.....	298

#### 5. EL CONTROL INFORMATIVO DURANTE LA GUERRA DE CUBA (1895-1898)

1. La diferente aplicación de la ley de prensa en Cuba.....	309
2. La intervención del telégrafo como primera medida gubernamental.....	313
1. La irresponsabilidad de la prensa española y su exaltación del patriotismo.....	316
2. La manipulación de los rotativos estadounidenses.....	319
3. Política restrictiva del gobierno conservador	
1. La persecución sistemática de la prensa separatista.....	324
2. Represión gubernativa por la campaña de prensa contra Weyler.....	329
4. Turno del gobierno liberal: la censura militar	
1. La concesión de la autonomía colonial: El motín de la Habana (12 de Enero de 1898).....	342
2. Inicio de la intervención armada de EEUU: la “ficticia” libertad.....	350
3. Suspensión de las garantías constitucionales y declaración del estado de guerra en la Península (14 de Julio de 1898).....	358
4. El Protocolo de Washington: Trabas sobre la información parlamentaria.....	368



5. Firma del Tratado de París (10 de Diciembre de 1898). Prolongación de la previa censura.....	382
5. Consideraciones finales.....	394

### TERCERA PARTE. IMPEDIMENTOS EN EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

#### 1. EL REGENERACIONISMO ESPAÑOL Y SUS EFECTOS EN LA PRENSA

1. Debate en torno a la decadencia política y social.....	401
2. El inicio del reinado de Alfonso XIII	
1. Inestabilidad política en los partidos monárquicos.....	404
2. Los gobiernos largos de Maura y Canalejas.....	407
3. El crecimiento desigual de la prensa de masas.....	410

#### 2. PROLIFERACIÓN DE MECANISMOS DE PRESIÓN GUBERNAMENTAL PARA LIMITAR LA LIBERTAD DE IMPRENTA

1. El aumento de trabas legales al derecho a emitir libremente las ideas.....	415
1. Los atropellos ministeriales bajo la suspensión de garantías constitucionales.....	416
2. La inflexible aplicación de la Ley de Imprenta por las autoridades judiciales.....	421
3. Aprobación de nuevas medidas legales para constreñir la libertad.....	427
2. La permanencia de instrumentos de control encubiertos	
1. La práctica habitual de la censura telegráfica y el uso frecuente de los fondos reservados.....	431
2. Los abusos cometidos por los tribunales de justicia.....	437
3. Las denuncias en el Parlamento por las ilegalidades cometidas contra los periódicos de la oposición.....	441
3. La influencia de la Iglesia Católica en la limitación de la libertad de imprenta.....	448



### 3. LA SUMISIÓN DE LA PRENSA AL PODER MILITAR

1. El acoso del ejército a los periódicos como respuesta a la línea continuista jurisprudencial.....457
2. El antimilitarismo de los periódicos catalanes. Ataques al *¡Cu-Cut!* y la *Veu de Catalunya*.....462
3. El recorte de las libertades públicas con la aprobación de la Ley de Jurisdicciones de 1906
  1. Cambios en el partido liberal y aumento de la represión contra los diarios catalanes.....467
  2. La adopción de una ley opresiva bajo el mandato liberal.....475
4. La represión de los delitos de imprenta en manos de los militares.....480

### 4. LA CENSURA EN BARCELONA: EL PROBLEMA DE LOS CATALANISMOS Y LA GUERRA DE MARRUECOS

1. La huelga como nuevo medio de lucha anarquista.....489
2. La enérgica campaña de la prensa ante un nuevo intento de legislación antiterrorista.....494
3. La protesta social contra la guerra de Marruecos.....504
  1. La reacción de la prensa y el pueblo catalán: La semana trágica de 1909.....505
  2. El aumento de la represión informativa tras la insurrección popular.....510
4. Los recortes al derecho a informar sobre la guerra bajo el régimen liberal.....514

CONCLUSIONS.....527

FUENTES CONSULTADAS.....543

APÉNDICE.....559

## SUMMARY

This research work analyses the influence that the authorities had on the historical articulation of press freedom in Spain under the Bourbon Restoration, during which the right to freely express ideas and opinions through the press was guaranteed by the Press Police Act that was adopted on 26 July 1883. The objective is to determine whether press freedom was real and effective in Spanish society in the late nineteenth and early twentieth century. To this end, it is necessary in first place to establish whether this fundamental right was efficiently recognized in the 1883 Press Act. To do so, one has to take into account the legal provisions and measures that were approved by Cánovas since 1874, and which conformed the press policy that was followed during the first period of the Restoration, between 1874 and 1881, and that constituted the legal precedent of the subsequent liberal Act. In general terms, it can be stated that the information system devised by Cánovas was based on a “neutral masses” scheme according to which citizens were guided by the state, and their opinion neglected or silenced by the Conservative president –a situation that was incompatible with the effective recognition of press freedom. Two of the most common practices of the newly established regime contributed to this state of affairs: “el encasillado”, with which a ‘custom-made’ government was constituted, and the ‘reptile funds’ of the Ministry of Interior, which completely annulled the true and free opinion of society. For the Conservative government, the press was a threat to the stability of the Restoration, and through those fraudulent practices it succeeded in turning journalism into an ally, which it subjected and guided according to its interests.

The press policy of the Conservative leader licensed techniques that harmed the freedom such as censorship or prior deposit, as well as the penalties of suspension and withdrawal of newspapers. Those mechanisms that were typical of authoritarian regimes were incompatible with a democratic state based on the rule of law, for the main objective was to stabilize the regime through newspapers that were conceived as mere tools for strengthening the foundations of the new political system. This system was further consolidated with the approval of the 1879 Act, which gave the state the power to control newspapers, with the objective of procuring an absolute defense of the monarchy. The Conservative Act incorporated a long list of crimes committed through the press, for which special judges were rendered competent and directly elected by the government, thus calling into question the impartiality and independence of judicial decisions.

Following the constitution of the Liberal government led by Sagasta in 1881, the will for change regarding press freedom was manifested in a series of measures that were aimed at the recognition of the right to freely express ideas through the press, which was enshrined in Article 13 of the 1876 Constitution. The analysis of the parliamentary debates on press freedom that took place in those years has enabled us to determine the position of every ideological trend with respect to the formulation of the new information system. The first of these positions was defended by the Conservative current, which asserted that the fundamental basis of a Press Act consisted in the implementation of a preventive system based on restrictive norms and strict punishments. The second position was completely contrary to the Conservative one and was supported by the Republicans, who called themselves radicals for claiming broad

freedom for journalists, on the basis of the belief that the press exerted a very positive influence on public opinion and was a chair of decency.

The last of those positions was the Liberal position that was held by the party which was led by Sagasta, who argued for the need for press freedom on the basis of two principles: the principle of accountability and the rejection of preventive measures. The first principle was aimed at guaranteeing the interests of society, and ran contrary to the idea that the right to write was absolute and ought not to be regulated. The second constituted a rejection of the restrictive system that had been established by the Conservatives, and an affirmation that press freedom was based on the complete lack of any kind of preventive measures that could thwart or substantially hinder its exercise. The Press Police Act that was adopted on 26 July 1883 was based on those liberal postulates. From a regulatory point of view, the new legislation marked the peak of press freedom in the history of Spanish constitutionalism, and would remain in force beyond the Restoration period in which it was approved.

It was therefore particularly significant that despite the legal precedents that existed regarding the press, the Act broke with the abusive practices that many governors had oppressively employed in the past, and positioned itself in favor of a real affirmation of press freedom. Indeed, mass journalism was slowly beginning to emerge in a hitherto silenced society that had the need to talk and to feel heard. This transformation in the role that citizens were expected to fulfill in society directly influenced public opinion, which would be taken into account by the Liberal government that considered the education of citizens essential for their active participation in public affairs.

Among the many new features of the Act, it is worth noting that it put a definitive end to the special tribunals that had depended on the government, and subjected the crimes committed through the press to the Criminal Code and the ordinary courts. The approval of the new Act also put an end to the need for a prior authorization to publish newspapers and the requirement of the prior deposit with regard to their publication, which were replaced with the mere notification of the competent authority. Through those measures, the Liberal government granted newspapers the possibility to enjoy real freedom without governmental obstacles. However, it left certain powers regarding the press in the hands of the authorities, which ran contrary to the independence and complete objectivity that it proclaimed. Therefore, from the perspective of the orientation of the regulation, the Press Act passed by the Liberal government was an innovative and courageous norm, which broke with the restrictive policy followed by previous governments, and introduced a number of safeguards which, as asserted by the literature, enabled the development of a real press freedom. However, in order to gauge the true effectiveness of that freedom during the period between 1883 and 1914, it is necessary to determine the extent to which, in practice, the Restoration government that was represented by the two royalist forces that took turns in power, respected the liberal nature of the legislation, without hampering the free exercise of that freedom.

The historical approach to the subject matter of our thesis calls for an analysis of the social and political circumstances that influenced the application of the Act within the indicated time-frame, as well as the various forms of control carried out by the authorities and other existing pressure groups. To this end, we have consulted a series of sources that are adapted to the demands of historical documentation, which is necessary for the elaboration and justification of the conclusions of this dissertation.

The research work carried out includes a more detailed analysis of the following: all the legal instruments that were adopted by the government during those years; the jurisprudence generated by the different judges and courts with regards to the determination of the content and the limits of this important fundamental freedom; the legal literature developed by authors on this fundamental right; and the debates and controversies that were raised among the journalists and writers who were involved in the press of that time.

Basing our thesis on the analysis of those historical sources, we can assert that, despite the progress that the 1883 Press Act represented, the possibilities that the authorities enjoyed to control and intervene the newspapers of the time were manifold. They not only disposed of various legal instruments, but also resorted to indirect control mechanisms, such as the ‘reptile funds’ of the Ministry of the Interior, which continued to exist because of the political corruption upon which the Restoration rested and the limited material resources of many of the publications of the time. This was possible thanks to the despotism that fed into the regime of the Restoration, and made it possible for governments to control sufficient political and legal levers to impose their will according to their own political interests, while seriously hindering the work of journalists and rendering the positive reactions that the approval of the Press Act had generated void.

Among all the legal measures used by the government to restrict press freedom at its convenience, one ought to underline the repeated suspension of the constitutional guarantees that were expressly recognized in Article 17 of the 1876 Constitution, “when state security thus required it, under extraordinary circumstances”. Despite what was

contained in the 1883 Act, the declaration of exceptional states throughout the Restoration, particularly during the early years of the twentieth century, granted the public administration discretionary powers that were used to limit the right to report freely which was enshrined in the 1883 Act. In addition to the adoption of these situations of constitutional exceptionality, the government abused its power by demanding from the judges and courts that were competent to judge press crimes a rigorous and restrictive application of the provisions of the Criminal Code. Having examined the extensive jurisprudence that they produced, we can affirm that there were three crimes that were systematically invoked by the authorities to restrict this right: libel, contempt of civil servants, and the incitement to rebellion or sedition. In most decisions, the courts arbitrarily sanctioned those anti-regime newspapers. In addition, the direct and constant pressure of the authorities led to notoriously irregular judicial proceedings and arbitrary and restrictive resolutions, which were ostensibly contrary to the free expression of ideas.

Direct government control of the Spanish press was complemented with the approval of other acts on different subjects, which had a decisive impact on the effective recognition of the freedom of the press. This reality was mainly reflected in periods of greater social and political upheaval, which determined government policy with regard to press entities. One of the great problems of the Restoration was Anarchism, which became more violent in the nineties with the use of “propaganda by deed”, which was characterized by the commission of terrorist attacks through individual revolutionary actions. On the occasion of the attack on General Martínez Campos and the bombing of the Liceo theater of Barcelona –both perpetrated in Barcelona in 1893– the Liberal government promulgated the first anti-terrorism law in Spain on 10 July 1894, which



was especially severe with the Anarchist mediums of expression, and drastically restricted their press freedom.

On 2 September 1896, in response to a new Anarchist crime on Cambios Nuevos street –this time against a religious procession– the Conservative cabinet approved a new anti-terrorism law, which introduced a number of novelties to the 1894 Act. The new legislation established a direct link between terrorism and Anarchism, transferred the jurisdiction over terrorism crimes to the military courts, and significantly increased some penalties, not only for the bombers, but also for those who, by word or deed, cooperated in the execution of crimes through concealment or conspiracy, which were punishable by life imprisonment. The Act also extended the powers of the authorities, granting them the right to suppress Anarchist newspapers. In addition to this legislation, which violated the fundamental right to freedom of the press, a disproportionate repressive policy was deployed, which sought at all times to silence the press entities that opposed the regime. This excessive action turned against the government, and unleashed a strong media campaign against the Montjuic trial, which set the focus on the tyranny with which the authorities had acted in the proceedings against the perpetrators of the attacks instead of the violence of the terrorists.

As of 1904, the frequency of the attacks increased again, and most were perpetrated in Barcelona, which was where all the actions of the liberation movements in those early years of the twentieth century were concentrated. The bombs that were detonated daily in Barcelona, and the aggressiveness of most of the radical newspapers, especially those that sympathized with Lerroux, increased the concern of the citizens, whose sense of insecurity was reinforced with the manifest inability of the authorities to maintain order in the city. The most conservative sectors began to strongly demand a harsher repressive

policy to combat terrorism, which came with Maura and a new anti-terrorism draft law that was submitted on 24 January 1908. The document granted the government the right to freely suppress Anarchist newspapers and centers, and to expel from Spain all those who propagated Anarchist ideas in any way. The draft law showed that the ideas of those who wanted to reform society and criticized the vices of power through their words were still sanctioned. At the end, the total opposition of the Spanish press was instrumental in impeding the approval of the legislative text. A campaign was orchestrated in which not only the draft presented by Maura was attacked, but so were, in general terms, all the arbitrary procedures the authorities employed to unfairly punish journalists under the umbrella of the crimes of opinion.

Moreover, the colonial problem also affected the effective recognition of the freedom of press at the time, for, during the international conflicts that arose in those years, the authorities abused indiscriminately of the option to restrict certain military information, and imposed a forced silence with regard to everything that they did not consider it convenient for society to know about. Both in the War of Melilla in 1893, and in the Cuban War of the late nineteenth century and the Moroccan War that began in 1909, the two political parties detached themselves from the guidelines set by the 1883 Act, and imposed a policy of information suppression that was fundamentally aimed at the survival of the Restoration system itself, in detriment of the effective recognition of the fundamental right to write and report freely. One of the instruments that were most frequently used by the government in times of political contention was sending notices to the newspapers, which, under threat of suspension, prevented them from addressing certain political issues. This instrument of control went unnoticed by the citizens, but not by the press.

In addition to this mechanism, the intervention of the national information networks –both the telephone and telegraph services– was frequent in times of war. Of all the ways in which the telegraph censorship was practiced, the most common was the interruption of the telegram, which never arrived at its destination. However, other irregularities were equally denounced, such as the cuts that were made to the communiqués of the correspondents, the preference given to the ministerial newspapers over the press of the opposition press by allowing them to publish the news hours in advance, or even the retention for a given period at the telegraph service of those telegrams they did not wish to see publicized until they became outdated. The public administration also took advantage of its control over the telephone to overhear the conference calls between correspondents and news organizations, and cut the lines when it was understood that the information which was being exchanged was contrary to the political interests of the government.

In the Cuban War the information control imposed by both governments was evident, although the criticisms of most Spanish publications focused on the figure of Sagasta, who, despite having adopted a liberal stance regarding freedom of the press and generated the 1883 Act, unjustifiably prolonged military censorship of Spanish publications after the cessation of hostilities, when the fundamental reason given by the Liberal government had been to preserve the national interests of information that could favor the enemy. Under the criticism of the press of the time, the prior censorship adopted by the Liberal administration at the closing stages of the Cuban conflict was considered the worst attack on freedom since the adoption of the Press Act. This measure symbolized the distrust of the government of the Restoration in its own

political performance, for, overwhelmed by international circumstances, the only escape route it found was to block the opinion of the newspapers.

Unlike the war in Cuba, the armed intervention in Morocco, which started in 1909, did not have the support of the Spanish newspapers. To neutralize the mass protest against the African conflict, the government of Maura sharpened intervention policy on all information relating thereto, abusing military power to prosecute and censor the press, and prohibiting the circulation on African soil of Peninsular newspapers that opposed the war. Although, as happened in the colonial disaster of 1898, the Liberal government initially tried to leave more room for press freedom, finally, in January 1913, military censorship was imposed on the territory, and a control apparatus was unleashed against the journalistic entities, which silenced any information and newspaper that were not in line with the guidelines set by the state, showing, once more, the patent unevenness with which the right to inform was guaranteed.

The relevance of the social events that unfolded throughout the period reveals the clear tendency of public authorities to repress the information of the newspapers that had a different ideology or did not follow the guidelines dictated by the state, such as the Republican or Catalanist papers. One of the practices most commonly used to indirectly censor those publications were the systematic complaints that were filed by prosecutors on the basis of mere suppositions or assumptions, which ended in illegal seizures that were executed by the police. The preventive system to which the newspapers of the opposition were subjected limited their freedom and resulted in great inequality with regard to the manner in which the Press Act was implemented. While in proceedings against monarchist newspapers the prosecutors indicated the text that was denounced

ahead of time, allowing for their free circulation following its removal, actions taken against the radical press were harmful to their material interests, for their papers could not be circulated in their entirety nor distributed in the provinces. This occurred because the complaints were both filed late and did not indicate the article or piece that was considered pernicious. Other mechanisms that were used to limit the freedom of those press entities were aimed directly against their writers, who were assaulted in the street by the authorities, or interrupted in their offices, where they were prevented by force to continue holding a meeting. They were equally directed against the directors, who were unduly imprisoned –a situation that was exploited by the government, which retained them for months and then absolved them or dismissed their case for absence of a crime.

In addition to the control exercised by the political authorities, during the Restoration, information intervention by the military authorities became gradually more significant as they increasingly restricted freedom of the press through a number of actions. At that time, one of the few matters that were not placed under the jurisdiction of the Army were the military offenses committed through the press, which were in the hands of the ordinary courts by virtue of the jurisprudence of the Supreme Court. With the firm determination to place all military matters under their exclusive competence, and thus preserve their extensive autonomy with regard to civilian authorities, the military subjected the crimes of libel against the Army to martial courts –an illegal practice that rendered press entities defenseless.

To those military abuses, one must add the violent attacks against newspapers expressing ideas and opinions opposed to the Armed Forces. Of particular importance

was the attack on the editorial offices of *El Resumen* and *El Globo*, which was followed by others, and revealed the lack of protection of journalistic entities that could not exercise their right to freely express their views without being punished violently and illegally by individuals belonging to the military establishment. This practice, which was neither punished by the military high command nor by the central government, became commonplace in the late nineteenth and early twentieth century to combat the proliferation of anti-militarist newspaper articles. Following two new abuses committed in 1905 against the Catalan magazine *Cu-Cut!* and the daily *La Veu de Catalunya*, the Liberal government, then in power, was willing to repair the honor of the military, and curb the freedom of expression of the Catalan dailies through new legislation that it brought forward in 1906. The Jurisdiction Act was an arbitrary and repressive measure that placed the complete control of press freedom under military jurisdiction and that, far from resolving social problems, merely concealed the contradictions of the Spanish government. Under this law, the military could, at last, try offenses committed by journalists, even if they had no link to the military body, and in the absence of extraordinary circumstances in the territory. In this way, both the offenses against the Army and military honor and the crimes against the homeland were at the mercy of the jurisdiction of the martial courts in what constituted a victory for the military and a great loss for the effective recognition of the freedom of press.

Another of the political actors influenced the implementation of the 1883 Act, albeit to a lesser extent, was the Catholic Church, which was a cornerstone of the Restoration system. The institution saw many of its demands on the restriction of the right to express ideas satisfied, especially under the mandate of the Conservative Maura, who imposed harsh repression against publications that attacked religion. The information

control of the church was also carried out by the direct intervention of the ecclesiastical authorities in the press that the faithful read, through the propaganda centers of the “good press”, which distributed pamphlets that attacked the anticlerical newspapers, Another common practice was ecclesiastical censure, which was carried out by a board made up of priests appointed for that purpose, who examined what was sent to them, and granted publishing licenses if the information was compatible with Catholic dogma.

In conclusion, although the 1883 Press Police Act guaranteed a legal framework for the exercise of press freedom in the Spanish society of the Restoration, the analysis of the implementation of this Act between 1883 and 1914 shows that there was no effective recognition of a freedom accepting and allowing for a free and independent press. Both the Liberal and Conservative Parties, like other political actors that influenced the implementation of the norm, broke away from the guidelines set by the Press Act, and adopted a policy of information restriction that was mainly aimed at ensuring the survival of the political regime, to the detriment of the effective recognition of the fundamental right to write and report freely. The peculiarity of the Restoration system, with alternating ideologies expressed by the ruling party, reveals that, despite the different vision held by the Conservatives and Liberals regarding the freedom, in the periods of greatest conflict, both used all instruments at their reach to silence the information that was contrary to their interests. Information intervention was discretionary, and especially occurred against those newspapers that professed an ideology that was contrary to the monarchical regime, such as the Republican and Catalanist publications.





## INTRODUCCIÓN

La presente investigación se plantea como objetivo principal comprobar si el derecho a emitir libremente las ideas y opiniones a través de los periódicos que garantizaba la Ley de Policía de Imprenta de 1883 fue real y efectivo en la sociedad española de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A lo largo de los años ha quedado patente la importancia de la libertad de prensa en las sociedades, un derecho fundamental reconocido y garantizado por todos los Estados democráticos, cuyo contenido y delimitación han sido muy debatidos a lo largo de los años por los distintos gobiernos y legisladores, la doctrina y la jurisprudencia.<sup>1</sup> Con el transcurso del tiempo, ha quedado claro que la plena existencia de la libertad de prensa y de la libertad de expresión define a un Estado de Derecho, y que su ausencia, derivada en muchas ocasiones de la presión y los abusos de poder ejercidos por los diferentes gobiernos, que se resisten a las opiniones contrarias a su política, enturbia la democracia. En la historia contemporánea de España, estas premisas han chocado en numerosas ocasiones con el creciente intervencionismo estatal sobre la actividad informativa, lo que ha impedido la plena eficacia de este derecho fundamental.

La importancia de este derecho se encuentra, además, en que ejerce de contrapoder (o “cuarto poder”), al realizar la función de control del gobierno en los Estados democráticos, lo que tiene como consecuencia inmediata que su buen ejercicio sea

---

<sup>1</sup> El derecho de libertad de prensa se recogió por primera vez en el Bill of Rights del Estado de Virginia de 1776, redactado por Thomas Jefferson, en cuya sección 12 expresaba: “The freedom of the press is one of the great bulwarks of liberty, and can never be restrained but by despotic governments”. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 se posicionaba en esta misma línea, y afirmaba en su artículo 11: “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi”. A su vez, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 18 declaraba: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

indispensable para que otros derechos constitucionalmente protegidos (el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, entre otros) no se vean afectados por la misma. Por este motivo, los órganos informativos deben tener siempre como directriz esencial la veracidad y deben ser imparciales e independientes de los gobiernos, reflejando la pluralidad de ideas y aspiraciones que mueve la sociedad y facilita el progreso en sus diferentes órdenes, lo que constituye una de las grandes metas a alcanzar por las tecnologías de la información. La íntima conexión entre la libertad de prensa y la opinión pública hace necesario que el Estado garantice la plena existencia de este derecho fundamental, pues, de otro modo, el periodismo se convierte en una fachada tras la que se esconden unos intereses empresariales que degradan la democracia y hacen que los ciudadanos se conviertan en simples actores pasivos al servicio del poder.

Por estas razones, hemos realizado un estudio de la libertad de imprenta desde una perspectiva histórica, que nos aporta una visión, que se pretende completa, del diferente grado de control ejercido por las autoridades cuando tienen que aplicar una misma ley, que, en principio, reconoce eficazmente la libertad. La orientación de nuestro trabajo no solo ha girado en torno a los instrumentos legales utilizados por la administración pública, sino, también, a los mecanismos con los que se canalizaban las restricciones de la libertad de prensa, una zona menos visible y más difícil de desentrañar del control informativo. En este sentido, la investigación presentada resulta novedosa, puesto que existe muy poca bibliografía al respecto, a pesar de que, como hemos señalado, las cuestiones examinadas resultan de plena actualidad. La historia de los derechos fundamentales ha disfrutado en los últimos años de una intensa atención por parte de los especialistas. Sin embargo, el enfoque que hemos dado al objeto de nuestra tesis, apenas

ha merecido aproximaciones que hayan partido desde una perspectiva histórica; siendo especialmente significativa, además, la total ausencia de trabajos monográficos que hayan ahondado en esta temática desde una óptica interdisciplinar, como lo es la histórico-jurídica.

En esta línea, la mayoría de las obras que se han publicado sobre esta materia se han centrado en indagar acerca del origen, el contenido, el lenguaje y otros aspectos formales del fenómeno periodístico, descuidando la faceta propiamente jurídica, que requiere un análisis profundo de este derecho fundamental. Entre las obras a destacar, que nos han servido de referencia en nuestra investigación, se encuentran: *“Restauración y prensa de masas: Los engranajes de un sistema (1875-1883)”* (Pamplona, Universidad de Navarra, 1981), de Álvarez Junco; las obras del periodista Gómez Aparicio: *“Historia del Periodismo español: De la revolución de septiembre al desastre colonial”* (Madrid, Nacional, 1971), e *“Historia del periodismo español: De las guerras coloniales a la dictadura”* (Madrid, Nacional, 1974); así como los trabajos de Cruz de Seoane, historiadora española especializada en periodismo: *“Historia del Periodismo en España, vol. 2. El siglo XIX”* (Madrid, Alianza, 1983) y *“Historia del Periodismo en España, vol.3. El Siglo XX: 1898-1936”* (Madrid, Alianza, 1996).

Por otra parte, los escasos estudios monográficos que se han centrado en la libertad de prensa como derecho fundamental lo han hecho de modo muy general, como sucede en el libro de Gómez Reino: *“Aproximación histórica al Derecho de la Imprenta y de la Prensa en España (1480-1966)”*, (Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977); o se ha abordado a través de estudios específicos de la materia, enfocados hacia otras etapas políticas de la historia del constitucionalismo español, pero que en ningún caso

han localizado su interés en el análisis de la aplicación efectiva de la propia Ley de 1883: “*El nacimiento del periodismo político: la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1814)*” de Álvarez Junco y De la Fuente Monge; “*El ejercicio de la libertad: La prensa española en el Sexenio Revolucionario (1868-1874)*” de Checa Godoy; “*La libertad de expresión en la Segunda República*” de Gómez-Resino; y “*Poder Político, prensa y opinión pública en el régimen franquista*” de Baldomero Oliver León. La tesis doctoral de Pascual Martínez “*Escritores y editores en la Restauración Canovista (1875-1923)*” (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992) es la que más se aproxima a nuestra investigación, aunque, en su caso, el estudio del derecho de libertad de prensa se realiza a través del análisis de los libros de la época, lo que le lleva a obtener unas conclusiones distintas a las nuestras. El único precedente directo con el que contamos es, pues, una aproximación general realizada en 1982 por el profesor Carlos Soria en su trabajo “La ley española de Policía de Imprenta de 1883”, aparecido en la revista *Documentación de las Ciencias de la Información* de la Universidad Complutense de Madrid, y que recoge en 30 páginas los antecedentes de la ley y sus artículos más relevantes.<sup>2</sup>

Además de con la escasez de aproximaciones históricas, nos encontramos con el gran desafío de descubrir si la libertad de prensa que enunciaba la Ley de Policía de Imprenta de 1883 fue real y efectiva, teniendo en cuenta que la doctrina especializada la ha considerado como la legislación más liberal en este campo del constitucionalismo español. En esta línea se manifiesta Gómez Reino cuando señala que la Ley de 1883 “es quizás la más liberal de todas las dictadas en nuestro país hasta la época presente”,<sup>3</sup> y en

---

<sup>2</sup> SORIA, C., “La ley española de Policía de Imprenta de 1883”, *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. IV, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1982, pp. 11-40.

<sup>3</sup> GÓMEZ REINO, E., *Aproximación histórica al Derecho de la Imprenta y de la Prensa en España (1480-1966)*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977, p.171.

el mismo sentido, Desantes Guanter expresa que “es la de más perfecta técnica y la más consecuente con el principio de libertad que enuncia, conforme con el artículo 13 de la Constitución de 1876”.<sup>4</sup> Con este propósito, analizaremos el contenido y delimitación de la Ley de Imprenta, para averiguar si, tal y como apunta la opinión dominante, la norma reconoce y protege eficazmente el derecho a emitir libremente las ideas, recogido en el artículo 13 de la Constitución de 1876.

Ahora bien, para llegar a unas conclusiones fiables sobre si existió plena libertad de prensa, no basta solo con examinar el marco legal, sino que se hace imprescindible prestar atención a los agentes que intervinieron en la puesta en práctica de la ley, así como al contexto histórico en el que se enmarcó la misma. En consecuencia, perseguimos identificar qué fuerzas políticas o grupos de presión controlaron la información vertida en las publicaciones españolas de la época, y el grado de intervención de cada una de ellas. Concretamente, pretendemos averiguar el criterio utilizado por la administración pública al aplicar la ley, teniendo en cuenta que la Restauración es un período histórico que se caracterizaba por tener un gobierno “a la medida”, en el que los dos partidos monárquicos que se turnaban en el poder, conservador y liberal, defendían diferentes planteamientos acerca de la libertad de prensa. De este modo, buscamos comprobar si la ideología del partido que gobernaba influyó en que los periódicos gozaran de una mayor o menor libertad, o si cada gobernante manejó un criterio distinto a la hora de aplicar la legislación de 1883. De igual forma, el enfoque histórico de la materia objeto de la tesis hace que resulte clave evaluar las circunstancias políticas y sociales en las que se formuló y aplicó la ley, puesto que el gran número y la importancia de los acontecimientos desarrollados

---

<sup>4</sup> DESANTES GUANTER, J.M., *Fundamentos del derecho de la información*, Madrid, Confederación Española de Caja de Ahorro, 1977, p. 67.

durante estos años pudieron mermar los efectos de la misma. Finalmente, para dar una respuesta completa al propósito fundamental de esta investigación científica, es preciso concretar, también, si todos los periódicos, independientemente de su ideología, disfrutaron de la libertad que amparaba la Ley de 1883, o si, por el contrario, ésta se aplicaba de forma eficaz solo para unas publicaciones, mientras que otras sufrían los rigores de las trabas gubernamentales o policiales.

En cuanto al arco cronológico en el que se enmarca nuestra investigación, pese a que la Ley de Imprenta estuvo vigente hasta 1966, hemos centrado el estudio entre 1874, año en el que se precipitan los acontecimientos que conducen a la Restauración, y 1914, porque, durante esta etapa es cuando más presentes estuvieron los postulados de la norma. Desde este punto de vista, el estallido de la Primera Guerra Mundial repercutió de forma considerable en la configuración del sistema periodístico español, presentando unas peculiaridades que no se habían dado hasta entonces, por lo que sería necesario un estudio específico y detenido de los años que abarcó el trascendental conflicto que afectó a toda Europa para poder medir la magnitud de los importantes cambios que trajo consigo en el ámbito periodístico. En definitiva, el período temporal delimitado nos facilita dar una respuesta coherente al objetivo principal de la tesis, porque la riqueza de acontecimientos existentes a lo largo de estos años nos permite evaluar un gran número de factores respecto a la aplicación práctica que tuvo la ley, y nos ilumina sobre algunos aspectos historiográficos que resultan claves para la comprensión del desarrollo de la configuración del sistema informativo desde la formulación de la Ley de 1883.

Con el fin de englobar todos los elementos que nos serán de utilidad para responder al propósito fundamental de esta investigación, hemos dividido el trabajo en tres partes. La

primera de ellas consta de tres capítulos que nos presentan el contexto histórico y el marco legal de nuestra investigación, y que pretenden dar contestación a una de las cuestiones esenciales planteadas en nuestra tesis: ¿Reconoció eficazmente la libertad de prensa la Ley de Imprenta de 1883? Tomando como punto de partida el primer mandato conservador de Cánovas del Castillo, se analizan las distintas disposiciones adoptadas en materia de imprenta, con especial atención a la Ley de 1879, que configuraron el sistema informativo creado por el líder conservador, y que constituyen el antecedente legal inmediato de la Ley de Imprenta de 1883. Asimismo, se analizan las distintas posturas de los partidos, según su ideología, respecto al derecho de libertad de imprenta, a través de los debates parlamentarios que tuvieron lugar antes de la aprobación de la nueva norma, dando cabida a las voces más críticas de la época. Por último, realizaremos un estudio detallado de los preceptos más importantes de la Ley de 1883, y de los que generaron mayor polémica entre los distintos sectores políticos.

Por otro lado, en la segunda y tercera partes de la tesis, se evalúa el posterior desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial de la Ley de Imprenta, abordando la actuación del Gobierno, de los Tribunales y del Ejército a la hora de aplicar la misma, así como el estudio de los abusos y limitaciones introducidos por el poder. La puesta en práctica de la ley por los diferentes actores políticos, sociales y jurídicos nos acerca a la realidad del derecho fundamental tal y como se vivió durante aquellos años: cómo se aplicó la Ley de Imprenta; cuál fue el grado de intervención informativa de cada uno de los agentes que influyó en su ejecución; qué instrumentos se utilizaban para reprimir las ideas, y saltarse, así, los postulados liberales contenidos en la legislación de 1883; o qué periódicos sufrieron las consecuencias de estas prácticas. En ambos bloques hemos resaltado los acontecimientos que marcaron los picos de mayor constreñimiento de la

libertad de prensa. Concretamente, la segunda parte abarca el período comprendido entre 1883 y 1898, una etapa caracterizada por el terrorismo anarquista de los años noventa y la guerra de Cuba. El cambio en el pensamiento político y social a raíz del conflicto cubano afectó, indudablemente, a la configuración del sistema informativo español de principios del siglo XX. Durante estos años, que coinciden con el inicio del reinado de Alfonso XIII, nos centraremos en el problema de los catalanismos y en la guerra de Marruecos, así como en la promulgación de la Ley de Jurisdicciones de 1906.

Al efecto de situar el tema de la investigación y el desglose de su desarrollo en el contexto científico en el que debía desenvolverse, hemos realizado una detenida y exhaustiva disección de las fuentes más relevantes existentes sobre la materia.

En primer lugar, por lo que se refiere a las fuentes normativas, para averiguar la eficacia que tuvo la libertad de prensa en el período de tiempo acotado en nuestra investigación, hemos analizado cuál fue el tratamiento constitucional y legal, con inclusión de su reflejo en la legislación penal, que el reconocimiento y protección de esta libertad tuvo entre 1874 y 1914. Con este propósito, hemos examinado todos los decretos y normas que componen el sistema jurídico relativo a la materia informativa ideado por Cánovas, que proporciona el antecedente legal más inmediato de la Ley de 1883, haciendo referencia al artículo 13 de la Constitución de 1876, a partir del cual se desarrolló la misma. Asimismo, junto al estudio pormenorizado de la Ley de Policía de Imprenta de 1883, base de nuestra investigación, hemos abordado las numerosas circulares y disposiciones legales aprobadas durante la vigencia de la misma, que ampliaron el marco de libertad, o limitaron el derecho reconocido.



Por otra parte, se han analizado los Diarios de Sesiones de las Cortes Generales correspondientes a las legislaturas del período entre 1874 y 1914. En este estudio sobre el reconocimiento de la libertad de prensa de la época, ha resultado imprescindible tener en cuenta las declaraciones que los dirigentes políticos realizaban en las Cámaras, por ser sujetos principales, no solo a la hora de redactar la norma, sino en la puesta en práctica de la misma. Por ello, hemos sometido a examen los discursos parlamentarios relativos a la libertad de imprenta, que son esenciales para entender el comportamiento de cada fuerza política respecto a la intervención informativa. De la misma forma, estos debates nos han permitido esclarecer la línea de pensamiento de cada tendencia ideológica respecto a la formulación del nuevo sistema informativo. Es importante destacar que, gracias a las diversas denuncias realizadas por los diputados y senadores de la época, hemos podido conocer cuáles fueron algunos de los instrumentos utilizados por el poder político o los militares para ejercer su control sobre los periódicos.

Un punto importante de nuestro trabajo ha residido, además, en el examen de la expresión jurisprudencial generada por los distintos jueces y tribunales, en cuanto a la determinación del contenido y los límites de esta destacada libertad fundamental. Conocimientos que hemos perseguido a través del estudio de las distintas sentencias dictadas por jueces y tribunales ordinarios y militares en relación con los delitos cometidos por medio de la imprenta, así como los importantes pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre los diferentes conflictos generados por la aplicación de la ley. En este sentido, el análisis de estas decisiones judiciales ha suministrado datos sobre la dimensión más práctica de la libertad de prensa: cómo, cuándo y en qué circunstancias se permitía, o se obstaculizaba la libertad; cuáles eran los motivos más repetidos a la hora de condenar a los periodistas; o qué periódicos eran los más perseguidos por los

órganos de justicia. De la misma manera, con la observación de la evolución de las líneas jurisprudenciales a lo largo de los años, hemos podido comprobar los cambios experimentados en la configuración del derecho de imprenta desde 1883 hasta el momento de cierre de nuestro estudio.

El relato de la expresión legal y jurisprudencial de la libertad de prensa no es suficiente para ofrecer una imagen completa sobre el alcance real que tuvo su eficacia en la sociedad si no va acompañada de un cuidadoso examen de la literatura jurídica elaborada por los autores respecto a este derecho fundamental. El principal interés que presenta abordar la investigación desde el punto de vista doctrinal consiste en la posibilidad de adquirir una idea más precisa acerca de cuáles eran los debates y polémicas que se suscitaban en torno a la Ley de Imprenta, y qué influencia tuvieron los múltiples acontecimientos sociales y políticos en el desarrollo de la misma. Doctrina que hemos perseguido a través de los comentarios publicados en la prensa o las revistas jurídicas especializadas, así como en los libros editados durante los años en los que se enmarca la tesis, y los redactados a lo largo de los años posteriores, en los que la cuestión haya sido abordada, sea de forma nuclear o tangencial.

La prensa de la época ha sido, también, una fuente histórica de valor esencial en la investigación realizada, aportándonos un testimonio directo de la percepción de la sociedad respecto a la libertad de prensa, así como de la evolución de la misma con el desarrollo de los acontecimientos y el transcurso de los años. En particular, ha proporcionado la mejor herramienta para averiguar en qué medida se veían afectados los periodistas y directores por el control y la vigilancia ejercidos por los distintos gobiernos, así como las reacciones que tenían éstos, como principales sujetos afectados

o beneficiados por el derecho a la libertad de prensa. Por este motivo, hemos encarado de forma exhaustiva la consulta de los principales periódicos de la época, tanto de los que apoyaban al poder, como de aquellos que sufrieron los mayores rigores de la censura gubernamental o militar, teniendo siempre presente que la ideología de un periódico podía influir decisivamente en la forma de exponer sus ideas y opiniones.

Por último, aunque sin perder de vista que la orientación de nuestra tesis radica, fundamentalmente, en el análisis de la libertad de prensa en España, nos ha parecido interesante incorporar un estudio, que no ha pretendido abordarla en profundidad, sino ofrecer una visión panorámica de las principales líneas de evolución de la configuración adquirida por la libertad de prensa, y de las medidas llevadas a cabo por los distintos gobiernos en los principales países europeos (Alemania, Francia, Gran Bretaña) y en EEUU. Este análisis comparativo nos ha permitido evaluar la auténtica eficacia de la Ley de Imprenta española en confrontación con la realidad paralela observable, en este mismo período, en otros sistemas de información. Para realizar este estudio nos ha sido de gran utilidad la estancia durante tres meses en el Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte de Frankfurt am Main, centro dedicado a la investigación en el ámbito de la historia del derecho. La investigación desarrollada en esta prestigiosa institución europea ha resultado de gran utilidad para orientar nuestra labor científica hacia la realidad histórica de otros países, lo que ha posibilitado un sustancial avance en el estudio jurídico completo sobre la construcción histórica de la libertad de prensa, y, por extensión, un enriquecimiento en la capacidad investigadora. En particular, el acceso a la extraordinaria riqueza y variedad de los fondos bibliográficos y documentales disponibles en el Max-Planck-Institut ha posibilitado el análisis de un importante volumen de fuentes normativas y bibliográficas de los principales países europeos. Al

respecto, hemos prestado especial atención a las dos leyes de prensa europeas que, junto a la española, se adoptan a finales del siglo XIX: la Ley Imperial de Prensa alemana de 7 de mayo de 1874 y la Ley de Prensa francesa de 29 de julio de 1881; así como el estudio de la política de intervención informativa del gobierno estadounidense y el tratamiento dispensado en los rotativos norteamericanos durante el conflicto de Cuba, que también afectó a España.

Mención especial merece, por último, el apoyo que ha supuesto la gran obra multivolumen realizada por el jurista Martínez Alcubilla: *“Boletín jurídico administrativo. Anuario de legislación y jurisprudencia”* (Madrid, Administración Augusto Figueroa, 1875-1914), en la que se encuentra una extensa recopilación de todas las disposiciones legales, así como los dictámenes, circulares, reglamentos y otras medidas aprobadas por las autoridades que influyeron en la determinación de los contornos de la libertad de prensa; así como, una compilación de los fallos más importantes dictados por el Tribunal Supremo en relación con los delitos de imprenta, y valiosos comentarios doctrinales respecto a estas líneas jurisprudenciales, en cada uno de los años del período cronológico estudiado.

En definitiva, la presente tesis doctoral ha querido abordar un aspecto crucial en la configuración del sistema jurídico-político del liberalismo español del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX: el reconocimiento real y efectivo del derecho a emitir libremente ideas y opiniones a través de la imprenta. Una investigación que busca contrastar la expresión legal de este derecho fundamental con su verdadera efectividad práctica y con la realidad de su frecuente adulteración e instrumentalización por parte de los sucesivos gobiernos para acomodar su aplicación a sus fines particulares. El estudio



histórico-jurídico de la libertad de prensa ofrecería resultados incompletos sin esta doble vertiente, que nos ha permitido acercarnos al verdadero concepto de libertad de prensa que se perfiló y manejó en la decisiva y conflictiva etapa histórica de la Restauración. Así podremos llegar a una conclusión más fundamentada y sólida acerca de si la ley española consiguió materializar un reconocimiento eficaz de la libertad de prensa, esencial para la supervivencia y el desarrollo de la democracia en la sociedad española, o si bien resultó ser una mera ficción en manos de los sucesivos gobiernos de la Restauración que manejaba a los ciudadanos en su propio interés.





## **PRIMERA PARTE**

### **RECONOCIMIENTO DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN LA RESTAURACIÓN: LEY DE POLICÍA DE IMPRENTA DE 1883**





# **1. INSTAURACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO Y TRANSFORMACIÓN DE LA PRENSA**

## **1. MODERNIZACIÓN POLÍTICA FICTICIA CON EL FENÓMENO DEL “ENCASILLADO”**

El 29 de diciembre de 1874, con la proclamación de Alfonso XII como rey de España, tuvo lugar el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto con el apoyo de las fuerzas militares, inaugurándose con ello la Restauración Borbónica, que puso fin al Sexenio Democrático y que perseguía reponer la monarquía y construir un nuevo Estado. El cambio se produjo tras una acción civil previa llevada a cabo por Cánovas del Castillo, en la que se preparó a la opinión pública para la transformación que vivió España tras el fracaso y agotamiento de todas las fórmulas de gobierno ensayadas en el periodo revolucionario.<sup>5</sup> El mismo 30 de diciembre se formó un Ministerio de Regencia, que asumió provisionalmente el poder, y que fue el encargado de disponer la venida del soberano y de crear los instrumentos constitucionales en los que se apoyó la nueva monarquía.<sup>6</sup> Pocos días más tarde, el propio Cánovas asumía el poder y formaba el primer gobierno conservador de la Restauración, que contaba con el apoyo expreso del monarca, y se sustentaba en una serie de medidas de carácter restrictivo y de defensa del nuevo sistema instaurado, que eran plasmadas en la *Gaceta de Madrid*, convirtiéndose en el diario oficial del nuevo régimen.

---

<sup>5</sup> CRUZ DE SEOANE, M., y DOLORES SAIZ, M., *Historia del Periodismo en España. El Siglo XX: 1898-1936*, Madrid, Alianza, 1996, p. 249.

<sup>6</sup> SÁNCHEZ AGESTA, L., *Historia del Constitucionalismo Español*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1974, p. 312.

Durante los primeros años, España vivió un proceso de modernización política y económica que ayudó a la mejor instauración del régimen, de tal manera que las medidas represivas y restrictivas adoptadas bajo la jefatura de Cánovas suponían un progreso si se comparan con las malsanas costumbres impuestas anteriormente.<sup>7</sup> Distintos historiadores aseguran que la Restauración fue un sistema pseudo-liberal y democrático, que tuvo las características económicas del capitalismo y que, tal y como señala David R. Ringrose: “por corrupto y semilegítimo” que pareciese, capitaneó “los procesos de adaptación al siglo XX”.<sup>8</sup> En la misma línea, Fernández Almagro afirma que a partir del advenimiento de la Restauración, en España existía un régimen liberal cuyas dos instituciones básicas eran el Rey y las Cortes, y en el que la vida pública se basaba en un espacio caracterizado por la libre concurrencia de las ideas, de los partidos políticos y de las fuerzas sociales.<sup>9</sup>

Con la instauración del nuevo sistema, Cánovas se propuso crear un espacio político amplio, en el que tuvieran cabida todos los partidos que aceptaran la monarquía, y con ello conseguir la anhelada estabilidad del país y acabar con el exclusivismo político, evitando las revoluciones y pronunciamientos militares característicos de los años anteriores. Para el líder conservador, la esencia del nuevo régimen instaurado era la flexibilidad constitucional, de tal manera que pudieran gobernar todos aquellos grupos políticos que aceptasen los principios esenciales del sistema. Por este motivo, configuró un esquema de turno de partidos en el que éstos se alternaban en el poder de manera pacífica, haciéndose mutuas concesiones.<sup>10</sup> Finalmente, los dos únicos grupos políticos que formaron parte de este entramado gubernamental fueron el partido conservador de

---

<sup>7</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España dirigida por Miguel Artola. Restauración y crisis de la monarquía (1874-1931)*, Madrid, Alianza, 1991, p. 26.

<sup>8</sup> RINGROSE, D., *España: 1750-1900: el mito del fracaso*, Madrid, Alianza, 1996, p. 522.

<sup>9</sup> FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., *Cánovas, su vida y su política*, Madrid, Ambos Mundos, 1951, p. 322.

<sup>10</sup> CRUZ DE SEOANE, M., *Historia del Periodismo en España*, p. 250.

Cánovas y el liberal de Sagasta, lo que dejó fuera de la configuración de este nuevo sistema al resto de fuerzas políticas.

El primer grupo que asumió la tarea fundacional del nuevo régimen fue el Partido Liberal-Conservador liderado por Cánovas, en el que tenían refugio los grupos católicos y tradicionalistas que aceptaban a Alfonso XII, así como el Partido de Unión Católica fundado por Alejandro Pidal y Mon, y que, a partir de 1884, pasó a llamarse Partido Conservador. En el otro bando se encontraban las llamadas izquierdas liberales, que en la primera etapa pasarían por una fase de actitudes oscilantes,<sup>11</sup> y se caracterizaban por invocar la Constitución de 1869 como bandera del partido. Durante esos primeros años, dos destacados dirigentes liberales iniciaron los pasos necesarios para reconocer el nuevo régimen instaurado, dando legitimidad a la figura del monarca. Por una parte, el general Serrano, que se encontraba exiliado, volvió a Madrid y visitó al Rey como signo inequívoco de que reconocía la nueva dinastía; por otra, el líder del Partido Constitucional, Práxedes Mateo Sagasta, en una asamblea de partidarios celebrada el 6 de diciembre de 1875 afirmó que su grupo era “el más liberal dentro de la monarquía constitucional de don Alfonso XII”,<sup>12</sup> dando con ello legitimidad al nuevo sistema político.

En virtud del esquema diseñado por Cánovas, éstos eran los únicos partidos que se turnaban en el gobierno del nuevo régimen, quedando fuera otros grupos no dinásticos como los republicanos y los carlistas, que, pese a ser enemigos históricos de la monarquía constitucional, en esta primera etapa no constituyeron una amenaza real para la estabilidad de la Restauración. Asimismo, se encontraban excluidos los movimientos

---

<sup>11</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España*, p. 30.

<sup>12</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España*, pp. 30-31.

obreros en sus dos vertientes anarquismo y socialismo, que, con la llegada al poder de los liberales en 1881, salieron de la clandestinidad forzada a la que se vieron sometidos desde enero de 1874. En definitiva, tal y como afirma Sánchez Agesta, se trataba de un gobierno parlamentario utópico, en el que los líderes de los dos grandes partidos, Cánovas y Sagasta, mantuvieron la hegemonía del nuevo sistema, aceptando las reglas del juego como un “*compromiso político de honor*”.<sup>13</sup>

En esta ficción jurídica cobraba especial relevancia el falseamiento electoral o encasillado, que consistía en manipular al sufragio, dejando en manos del ejecutivo la formación por medios fraudulentos de mayorías y minorías parlamentarias.<sup>14</sup> La corrupción en los votos de los ciudadanos se encontraba en el sistema constitucional español desde sus orígenes, y en la Restauración tuvo un papel muy destacado, siendo la base y esencia misma del régimen. La razón fundamental estriba en que la sociedad española había adquirido peso durante años anteriores y contaba en este período con cierto nivel de conciencia de los problemas políticos, que, además, se veía refrendado por el reconocimiento del sufragio universal masculino, directo y secreto, de tal manera que solo la institución o partido político que estaba legitimado por el mismo tenía representación en la Cámara.<sup>15</sup> Por esta razón, Cánovas se decantó por un “*mecanismo de manipulación abierta*”<sup>16</sup> del sistema electoral, basado en la celebración de elecciones debidamente orientadas y controladas gubernativamente.

---

<sup>13</sup> SÁNCHEZ AGESTA, L., *Historia del Constitucionalismo Español*, p. 328.

<sup>14</sup> FRANCISCO FUENTES, J. Y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., *Historia del Periodismo Español*, Madrid, Síntesis, 1998, p. 136.

<sup>15</sup> El sufragio universal masculino para mayores de 25 años se reconoció por primera vez en España con la Constitución de 1869, aunque la primera vez que se tuvo este derecho fue en enero de ese mismo año, en las elecciones a Cortes Constituyentes para redactar la propia Constitución. Cánovas volvió a introducir el sufragio censitario en la Ley Electoral de 28 de diciembre de 1878, y no fue hasta la Ley Electoral de 26 de junio de 1890 promulgada por Sagasta cuando se reconoció de nuevo, y de forma definitiva, el sufragio universal.

<sup>16</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España*, p. 31.

El primer día del gobierno, el ministro de Gobernación, Romero Robledo, puso en marcha la viciada maquinaria electoral por la que solo quedaban inscritos en el encasillado ministerial los miembros conservadores y de la oposición liberal, que lucharían por sus investiduras gozando de todo el apoyo del ejecutivo, pero no así los simpatizantes carlistas o las familias republicanas. Este sistema fraudulento creado en la Restauración quedó reconocido además en la Constitución de 1876, que concedía al Congreso de los Diputados la atribución de autorizar o desautorizar los gobiernos con sus votos, y al rey la facultad de elegir libremente y de autorizar a sus jefes de Gobierno, así como la posibilidad de disolver las Cortes que negaran la confianza al ejecutivo. Se trataba de una “*cámara a la medida*”,<sup>17</sup> ya que, como hemos señalado, los cambios de gobierno no eran el resultado de unas elecciones democráticas, sino que procedían de la potestad de la Corona que, a petición de los partidos, aceptaban la dimisión de la jefatura del Gobierno y encargaban al líder de la oposición formar un nuevo gabinete quién, a su vez, disolvía las Cortes y convocaba elecciones que nunca perdería debido a la utilización del caciquismo en todos los territorios de España.

En opinión de Varela Ortega, la Restauración era “una forma de organizar un sistema político en libertad estable a cambio de sacrificar eficiencia administrativa y democracia política”,<sup>18</sup> que hacía que la rotación de partidos, característica del nuevo sistema, y el régimen parlamentario creado constitucionalmente no tuvieran autenticidad. Conforme a esta idea, eran muchos los críticos, la mayoría regeneracionistas y noventayochistas, que señalaban que el nuevo régimen era una gran farsa en la que, bajo una apariencia democrática, se daban cita la oligarquía y el caciquismo como verdadera forma de gobierno. Así lo afirmó en 1914 José Ortega y Gasset, quién definió la Restauración

---

<sup>17</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España*, p. 31.

<sup>18</sup> VARELA ORTEGA, J., *Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900)*, Madrid, Alianza, 1977, p. 463.

como un “espectáculo de fantasmas” y a Cánovas como el “gran corrupto”.<sup>19</sup> En definitiva, el sistema construido por Cánovas no se caracterizaba por ser un régimen basado en la voluntad de las mayorías sociales, sino que, muy al contrario, se trataba de un reparto en el que la élite política negociaba entre sí la parte de poder administrativo que le correspondía, contando siempre con la aceptación expresa del monarca.

## **2. LA ERA DE LAS MASAS “NEUTRAS”**

Como hemos indicado en el punto anterior, el régimen creado por Cánovas se identificaba por ser un sistema en el que la presión que ejercían los líderes políticos estaba por encima de la opinión pública, entendida como “el resultado de un influjo mutuo, de una acción recíproca o interacción del medio y el público”.<sup>20</sup> Este esquema político provocaba la desmotivación de la población respecto a los asuntos de orden público, pues su voluntad se encontraba ensombrecida por el falseamiento del sufragio, ya que los partidos contaban siempre con los votos necesarios para acceder al poder.

En este sentido, y tal y como desarrollaremos en el siguiente capítulo, las medidas aprobadas en el gobierno de Cánovas restringían la información, de tal manera que no solo se ocultaba todo aquello que no interesaba revelar, sino, también, se despreciaba a la democracia y a la opinión pública y, por tanto, a los ciudadanos que no disponían de los conocimientos suficientes para tomar decisiones y votar racionalmente. Teniendo en cuenta que solo con la libertad de imprenta se conseguía que éstos tuvieran acceso a una información veraz, plena y contrastada para poder desarrollar y formarse una opinión con sus propios criterios, y que, todos los gobiernos están obligados a subordinarse a la

---

<sup>19</sup> CRUZ DE SEAONE, M., *Historia del Periodismo en España*, p. 252.

<sup>20</sup> GOMIS SANAHUJA, L., *El medio media. La función política de la prensa*, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1974, p. 216.

voluntad del pueblo, cuya manifestación imperativa en la democracia es la opinión pública,<sup>21</sup> el hecho de que en este período existiera la misma resulta de vital importancia para determinar la efectividad o no de la libertad de prensa.

Las posturas que defendían los dos partidos que gobernaron en la Restauración respecto al papel que debía ocupar la sociedad en el entramado político eran diferentes: por una parte, los conservadores entendían que los ciudadanos eran incapaces de forjar su propia conducta, por lo que se les negaba toda competencia y eran considerados “masas neutras”; en el lado opuesto se encontraban los liberales, que apostaban por la educación de la gente con el fin de incorporarla al sistema constitucional, dando así la posibilidad de participar activamente en el gobierno. Algunos políticos pertenecientes a las filas conservadoras, que no apoyaban la idea de sociedad neutra creada por Cánovas, seguían esta línea argumentativa liberal. Entre otros, Francisco Silvela, presidente de Gobierno en los primeros años del siglo XX y gran defensor del movimiento regeneracionista, quien señaló en su célebre artículo “Sin pulso” su preocupación por la ausencia de reacción popular, que podía producir el “total quebrantamiento de los vínculos nacionales”.<sup>22</sup>

Para entender mejor el papel que en aquella primera etapa del nuevo régimen ocupaba la libertad de prensa, que, como hemos indicado, estaba estrechamente relacionada con la opinión pública, es necesario analizar los postulados de Cánovas respecto al papel social y político que le correspondía a las llamadas “masas neutras”, ya que todo el entramado legal en materia de imprenta desarrollado durante estos primeros años estaba en manos del líder conservador. En primer lugar, atendiendo únicamente al contexto social en el

---

<sup>21</sup> RUBIALES MORENO, F., *Periodistas sometidos: los perros del poder*, Madrid, Almuzara, 2009, p.50.

<sup>22</sup> *El Tiempo*, “Sin pulso”, 16 de Agosto de 1898.

que nos encontramos, Cánovas consideraba que la opinión pública se reducía a una minoría de propietarios y de hombres cultos capaces de atenerse a un criterio meditado en materia política, por lo que razonaba que el gobierno no debía someterse a una sociedad manipulable que “nunca se ha tomado el trabajo de aprender a juzgar los negocios públicos”,<sup>23</sup> sino que, además, se podía sentir atraída por un partido u otro en función de intereses pasajeros. El líder conservador entendía, asimismo, que una buena acción política se encontraba cimentada en la conciencia nacional, cuyo espíritu se constituía por “*pocas pero fundamentales ideas*”. Estos postulados justificaban el sistema canovista, que se caracterizaba por la desconfianza hacia la opinión pública a la hora de elegir a sus representantes, entendiendo que la dirección de la sociedad no debía encomendarse a mayorías libremente designadas por un electorado “inepto, incompetente y sumiso”.<sup>24</sup>

Este esquema diseñado por el líder conservador repercutía en la prensa, a la que se le negaba su función principal como medio de expresión de la opinión pública española. Durante estos primeros años de la Restauración, el medio informativo no tenía capacidad para influir en sociedad y crear estados de opinión, ya que, tal y como señala Sánchez Illán, la estructura política del sistema canovista era “impermeable a la presión ejercida por la movilización de un potencial electorado”, lo que tenía como consecuencia directa la ficción de la representación política, y por tanto, la inexistencia de la opinión pública en el período de la Restauración.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> FRANCISCO FUENTES, J., *Historia del Periodismo Español*, p. 138.

<sup>24</sup> FRANCISCO FUENTES, J., *Historia del Periodismo Español*, p. 138.

<sup>25</sup> SÁNCHEZ ILLÁN, J.C., *Prensa y política en la España de la Restauración: Rafael Gasset y El Imparcial*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 53.



Para Cánovas, las masas no estaban suficientemente formadas para dirigir la sociedad y establecer límites a los periodistas, por lo que el ejecutivo asumía de manera subsidiaria la función de defensa del orden social, suplantando la opinión de los ciudadanos a través del falseamiento electoral que, como hemos señalado, constituía el motor del nuevo régimen. Por esta aparente carencia de educación en la opinión pública, el líder conservador entendía que el derecho a la libre información debía ser limitado y no absoluto, y que el orden del sistema estaba por encima de ésta: “la libertad ilimitada de la prensa no puede establecerse sin que haya peligros para el orden público”.<sup>26</sup> En virtud de esta idea, el presidente conservador certificaba que la libertad absoluta solo se podía permitir en aquellos países afortunados en los que existía el “tribunal severo de la opinión pública”, y en los que ésta era “bastante hecha, formada y severa para servir por sí misma de castigo a los excesos de esa prensa”,<sup>27</sup> así como para limitarla, condición que no cumplía el sistema español, en el que, según Cánovas, la prensa periódica producía extravíos que se debían combatir a través de una política de represión, llevada a cabo por “las minorías inteligentes” que “gobernarán siempre el mundo”.<sup>28</sup>

### **3. EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS FONDOS DE REPTILES**

El sistema de “masas neutras” creado por Cánovas facilitaba el control de toda la información vertida en la prensa por parte del gobierno conservador como medio más eficaz para intervenir la sociedad. De esta manera, los ciudadanos se convirtieron en

---

<sup>26</sup> Congreso, 25 de noviembre de 1878, Cánovas. Reproducido en FRANCISCO FUENTES, J., *Historia del Periodismo Español*, pp. 158-159.

<sup>27</sup> Congreso, 25 de noviembre de 1878, Cánovas. Reproducido en FRANCISCO FUENTES, J., *Historia del Periodismo Español*, pp. 158-159.

<sup>28</sup> CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., *Problemas contemporáneos*, Madrid, Colección Escritores Castellanos, 1884. Reproducido en FRANCISCO FUENTES, *Historia del Periodismo Español*, p. 139.

títeres al servicio de las autoridades, y con ello resultaba más fácil dirigir la opinión pública, lo que dañaba seriamente la libertad de prensa. La principal consecuencia del esquema mantenido por Cánovas era que, mientras el poder público, al que se accedía con medios fraudulentos a través del falseamiento electoral, se convertía en el peor enemigo para llegar a la auténtica democracia, la prensa, que no tenía independencia crítica, pasaba a ser un mero instrumento utilizado para empujar la conducta de los ciudadanos hacia los intereses estatales.

Teniendo en cuenta este contexto, ¿era posible la verdadera libertad de prensa? Es interesante destacar la visión crítica que sobre este tema ofrece el periodista Francisco Rubiales, quien considera que no solo los políticos echaban por tierra el sistema democrático, sino que en muchas ocasiones el periodista, que debía ser “perro guardián” del mismo, se convertía en un “perro del poder”. La opinión pública es fundamental para la existencia de un sistema democrático, siendo ilegítimos y opresores los regímenes políticos que reprimen y aplastan al ciudadano, así como los que ignoran y marginan la opinión de éste o los que han sido elegidos en procesos electorales fraudulentos, como ocurría en la Restauración. En palabras de Rubiales, “sin un periodismo libre, independiente, valiente y crítico con los poderes, la democracia se extingue y se transforma irremediabilmente en una oscura oligarquía de cleptómanos”.<sup>29</sup>

Durante esta época, el Estado empezó a desarrollar unas redes de financiación clandestina, comúnmente conocidas como *fondos de reptiles*,<sup>30</sup> que servían para

---

<sup>29</sup> RUBIALES MORENO, F., *Periodistas sometidos: los perros del poder*, pp. 24-26.

<sup>30</sup> La costumbre de mantener una prensa oficiosa o de silenciar a los periódicos mediante ayudas subterráneas fue llevado a cabo por el ministro Walpole en Gran Bretaña a principios del siglo XVIII, y a lo largo del siglo los ingleses crearon un modelo que fue imitado por las diferentes naciones europeas.

subvencionar de manera oculta a algunos órganos ministeriales y periódicos de la oposición a través de “gastos reservados” del fondo público, que incluían estos pagos ocultos a la prensa. Con estas subvenciones, el gobierno conseguía manejar a la opinión pública, salvándose de las críticas de los periódicos, y haciendo que éstos transmitieran la posición más favorable a sus intereses políticos o que no publicaran noticias que les perjudicaban. Estos sobornos no tenían control parlamentario, y se daban de varias formas: a través de pagos en metálico, mediante credenciales o empleos en la administración pública, o bien mediante suscripciones a una publicación determinada. Era una práctica habitual en el periodismo de la Restauración, siendo mayor la tentación en aquellas publicaciones que carecían de recursos para mantenerse por sí solas.

Este esquema de “masas neutras” adoptado por Cánovas, a las que controlaba a través de sobornos a los periódicos y periodistas, se debe analizar en paralelo con el proceso de transformación de la sociedad española, iniciado en 1870, y que ha sido conceptualizado por algunos autores como la “era de las masas”.<sup>31</sup> Esta evolución coincidió, a su vez, con un fenómeno de conversión de la prensa española desde el modelo de periódico de opinión, dependiente de los partidos políticos, al de empresa, abierto a una variedad temática que pretendía satisfacer los más diversos intereses de los lectores.<sup>32</sup> Como veremos más adelante, el proceso de transformación de los periódicos españoles respecto a los países europeos avanzados fue tardío e incompleto, debido a las condiciones existentes en la sociedad, ya que el analfabetismo seguía siendo muy elevado y la comunicación se reducía a una pequeña élite. Además, dado el escaso

---

Concretamente, el término *fondo de reptiles* proviene de la célebre frase pronunciada por Otto Von Bismarck: “Utilizaré su dinero para perseguir a estos reptiles malignos hasta sus propias cuevas”, refiriéndose al fondo secreto creado tras ganar la guerra prusiano-austriaca en 1866 con la fortuna del rey Jorge V, y utilizado por el rey Guillermo I y el propio Bismarck para fomentar las actividades propagandísticas y para la creación de un sistema informativo dentro y fuera de las fronteras alemanas.

<sup>31</sup> FRANCISCO FUENTES, J., *Historia del Periodismo Español*, p. 139.

<sup>32</sup> CRUZ DE SEOANE, M., *Historia del Periodismo en España*, p. 23.

desarrollo de los núcleos urbanos, las tiradas estaban desigualmente repartidas geográficamente, de tal manera que la mayoría de los periódicos se editaban en Madrid y Barcelona, y entre todos ellos muy pocos mantuvieron una influencia real y duradera a nivel nacional. Esta circunstancia provocó que, durante la década de los ochenta, las tres principales cabeceras españolas fueran madrileñas: *La Correspondencia de España*, *El Imparcial* y *El Liberal*.

En España, durante la primera etapa de la Restauración, tuvo más presencia el periodismo político, siendo muy común que los mandatarios recurrieran a la prensa, bien de forma directa, ejerciendo ellos mismos como redactores en periódicos afines, o bien indirecta, financiando sus propias publicaciones, de las que se servían para dar a conocer sus ideas y para promocionarse. El proceso también se dio al revés, siendo muchos los periodistas que se dedicaron después a la política, con lo que ambas Cámaras tuvieron como representantes a un alto número de periodistas. La participación de los políticos en la prensa nos da una idea del papel fundamental que tenía ésta como motor de los partidos políticos. En esta época, además, se publicaban los debates parlamentarios en los periódicos, habilitándose una tribuna de periodistas para ello, lo que hizo que se desarrollara entre los dirigentes un nuevo lenguaje con el que, a través de la oratoria de los discursos parlamentarios, poder comunicarse con los ciudadanos. El periódico quedó afianzado como medio más importante de transmisión de ideas, especialmente, aquellas que el gobierno quería trasladar a la sociedad. Esta politización del medio impreso tuvo como efecto inmediato que los diarios no informaran sobre los

grandes problemas nacionales.<sup>33</sup> Para Mari Cruz de Seaone la prensa debía informar a la opinión pública y, sin embargo, favorecía “con todo su poder a extraviarla”.<sup>34</sup>

Por su parte, el periodismo de masas afectó en un primer momento a un selecto grupo de publicaciones vanguardistas, aunque, con el paso de los años, el número de periódicos “independientes” fue aumentando.<sup>35</sup> Uno de los más críticos con este tipo de prensa fue el reaccionario Cándido Nocedal, que hizo hincapié en la falta de decisión de la opinión pública española con este tipo de publicaciones, y aseveró: “nunca se ha podido decir con tanta razón como ahora que toda muchedumbre es rebaño. El periódico es una especie de servidor doméstico que no exime del trabajo mental. ¿A qué molestarnos formando opiniones si por muy poco dinero podemos lograr que se nos den hechas?”.<sup>36</sup> Entre las circunstancias que propiciaron la aparición de la prensa de gran circulación podemos citar la afición a la lectura de las publicaciones periódicas entre un amplio sector de la sociedad no afiliada a un partido determinado, y el descrédito de los procedimientos llevados a cabo por Cánovas, que utilizó los periódicos como instrumentos para manejar a su antojo hechos y personas. De este modo, nació el periódico independiente ligado a los intereses generales, publicaciones que no se escribían para “grupos y banderías políticas”, sino que iban dirigidas a “todo el mundo, sirviendo a los intereses del gran público, a las conveniencias generales”.<sup>37</sup> Entre los diarios que conformaban la llamada “prensa de masas” destacaba *El Imparcial*, fundado el 16 de marzo de 1867 por Eduardo Gasset y Artime, que, según León Roch,

---

<sup>33</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo español: De la revolución de Septiembre al desastre colonial*, Madrid, Nacional, 1971, p. 94.

<sup>34</sup> CRUZ DE SEAONE, M., *Historia del Periodismo en España* p. 315.

<sup>35</sup> Para Rafael Mainar el periódico independiente es “hijo legítimo de la industria de periódicos” y “todo hasta la independencia es relativo, no ha podido existir hasta que la hoja impresa no ha tenido que ser pensada más que para el público y con el público”. SÁNCHEZ ILLÁN, J.C., *Prensa y política en la España de la Restauración*, p. 42.

<sup>36</sup> FRANCISCO FUENTES, J., *Historia del Periodismo Español*, p. 140.

<sup>37</sup> SÁNCHEZ ILLÁN, J.C., *Prensa y política en la España de la Restauración*, p. 42.

se convirtió en la primera empresa periodística madrileña con rasgos auténticamente modernos.<sup>38</sup>

A pesar de estos avances, y teniendo en cuenta el sistema tejido por Cánovas durante estos primeros años, el volumen de tirada de las publicaciones no estaba directamente relacionado con la influencia real de las mismas. Esto significa que, aunque *El Imparcial* era el periódico español de mayor circulación, el diario conservador *La Época*, de escasa tirada, se erigió como uno de los más influyentes del periodo. El *Imparcial* criticaba este doctrinarismo político fomentado por el jefe del Gobierno, y señalaba con buen criterio que, para los conservadores, la prensa de gran circulación era una verdadera pesadilla porque constituía uno “de los pocos elementos de la España política que escapan a su presión”.<sup>39</sup>

#### **4. LA POLÍTICA REPRESIVA DE CÁNOVAS FRENTE AL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA**

Como hemos adelantado, el contrincante más peligroso para los partidarios de la Restauración era el fiel instrumento concebido por la burguesía para combatir a sus enemigos históricos: la prensa, cuyo papel agitador podía afectar a la estabilidad del sistema recién instaurado.<sup>40</sup> Este hecho, sumado a la desconfianza que sentía Cánovas hacia los periódicos de gran circulación sobre los que no tenía influencia, hizo que el dirigente político promulgara una serie de disposiciones restrictivas en materia de

---

<sup>38</sup> LEÓN ROCH, *Setenta y cinco años de periodismo. Aportaciones para la historia del periodismo madrileño*, Madrid, Ramona Velasco, 1923, p. 262.

<sup>39</sup> SÁNCHEZ ILLÁN, J.C., *Prensa y política en la España de la Restauración*, prólogo de Manuel Gasset, p.12.

<sup>40</sup> La primera de las normas en materia de imprenta fue impuesta por el partido liberal la misma tarde de la instauración del nuevo régimen, y establecía la censura previa para todas las publicaciones.

imprensa que configuraron el sistema informativo español de estos años. Estas medidas suplían la falta de disposiciones legales específicas en la materia y buscaban afianzar el nuevo régimen establecido, evitando las posturas contrarias que pudieran provenir de las plumas de los periodistas. La política represiva de la prensa adoptada por Cánovas contaba con una legislación minuciosa y previsor, y a la vez con unos fuertes resortes judiciales y administrativos, que obligaban a cumplir la misma. La característica principal de este sistema era la regulación y sanción de los delitos de imprenta por medio de los tribunales especiales directamente elegidos por los gobernadores.

El primero de los textos normativos de carácter restrictivo dictado en materia de prensa antes de la promulgación de la Constitución de 1876 fue el Decreto de 31 de diciembre de 1874. En su virtud, se establecía una rígida censura previa, que se aplicaba a todos los periódicos de tendencias políticas partidistas, a excepción de la considerada prensa adicta.<sup>41</sup> En este decreto cobraba especial importancia el reconocimiento del tribunal especial considerado “hijo legítimo del decreto de 1874”,<sup>42</sup> que Cánovas utilizaba para tener vigilada a la prensa y garantizar de esa manera la política de su gobierno. La presión del Estado contra cualquier pronunciamiento hostil hacia la monarquía se realizaba a través de la rigurosa actitud de los fiscales de imprenta y de la discrecionalidad de los gobernantes civiles, que aprovechaban su posición en el ejecutivo para suspender las publicaciones que consideraban contrarias a sus intereses.

La libertad de imprenta, vigilada y limitada parcialmente durante el año 1874 bajo el gobierno liberal de Serrano-Sagasta, se vio sometida a nuevos tipos de restricción que

---

<sup>41</sup> Esta medida se suavizó poco a poco, y un mes más tarde, con la siguiente disposición, de 29 de enero de 1875, se permitió la reaparición de todos los diarios suspendidos, siempre que los mismos no se adscribieran expresamente al ideal republicano, enemigo de la monarquía recién instaurada.

<sup>42</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo Español*, p. 273.

se consolidaron con el Decreto de 29 de enero de 1875, precepto en el que quedaba concretada la política de prensa de Cánovas. Esta nueva norma establecía un sistema muy acorde a las concepciones conservadoras, sometiendo a la prensa a un control total para garantizar el régimen constitucional. De un lado, se permitía a los periódicos la discusión doctrinal de todas las disposiciones de carácter administrativo y jurídico, pero, de otro, se prohibía la discusión de una serie de cuestiones que se consideraban “peligrosas” para el nuevo régimen establecido, siguiendo “el ejemplo de todos los países regidos constitucionalmente”, que no consentían que ciertas materias estuvieran sometidas a discusión en las páginas de los periódicos.<sup>43</sup>

La disposición establecía la prohibición de atacar de forma directa, indirecta o de manera encubierta al sistema monárquico constitucional o al Rey o su familia, y prohibía, además, proclamar una forma de gobierno que no fuera la monárquica-constitucional, discutir sobre temas que produjeran discordia, o informar sobre noticias que favorecieran al enemigo.<sup>44</sup> El decreto contenía, también, fuertes medidas restrictivas, como la exigencia de licencia previa concedida por el ministro de la Gobernación, por aquel entonces Romero Robledo, para la publicación de nuevos periódicos, al que debía preceder un informe favorable del gobernador de la provincia,<sup>45</sup> que estaba orientado a evitar que los diarios burlasen la ley con simples cambios en sus títulos. Asimismo, la norma recogía la pena de suspensión de quince días para el que incumpliera cualquiera de las disposiciones del decreto.<sup>46</sup> En la misma línea represiva, el texto otorgaba la posibilidad de crear, adscrita al gobierno de cada provincia, una

---

<sup>43</sup> Decreto de 29 de enero de 1875: “Regularizando el ejercicio de la libertad de imprenta”. *Gaceta de Madrid*, 30 de enero de 1875. *Colección legislativa de España*. Tomo CXIV, p. 141. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°7.

<sup>44</sup> Artículo 2-5 del Decreto de 29 de enero de 1875, p. 142.

<sup>45</sup> Artículo 10 del Decreto de 29 de enero de 1875.

<sup>46</sup> Artículo 6 del Decreto de 29 de enero de 1875.



oficina, que tenía como función revisar los periódicos y proponer a la autoridad gubernativa las resoluciones que procedieran respecto a ellos.<sup>47</sup> Además, se señalaban otras medidas restrictivas como la suspensión de hasta ocho días o la supresión definitiva de los diarios por insultos o injurias, la exigencia de depósito previo de los ejemplares con dos horas de antelación a la puesta en circulación del periódico y la censura gubernativa.<sup>48</sup>

Con la promulgación del Real Decreto de 18 de mayo de 1875, quedaba sin efecto la prohibición de plantear o discutir cuestiones constitucionales, debido al interés de Cánovas por preparar un adecuado clima social y político para las futuras Cortes Constituyentes.<sup>49</sup> Así lo señalaba el mandatario en la exposición de motivos de la norma, en la que aseguraba que la prensa era libre para hablar de los asuntos estatales, y que no tenía más limitación “que la que impone forzosamente el restablecimiento de la Monarquía constitucional”.<sup>50</sup> El decreto permitía, por tanto, un mínimo debate político ante la formación de Cortes constituyentes, manteniéndose en vigor el resto de disposiciones de la prensa formuladas en el anterior decreto.

La siguiente medida en materia de imprenta aprobada bajo el mandato conservador fue el Real Decreto de 31 de Diciembre de 1875, que se publicó veinte días antes de la reunión de las Cortes para sancionar una nueva Constitución; circunstancia que evidenciaba que la creación de una nueva regulación de imprenta no resultaba

---

<sup>47</sup> Artículo 11 del Decreto de 29 de enero de 1875.

<sup>48</sup> Artículos 7, 8 y 11 del Decreto de 29 de enero de 1875, pp. 142-143.

<sup>49</sup> Artículo 1 del Real Decreto de 18 de mayo de 1875: “Autorizando a la prensa para plantear y discutir las cuestiones constitucionales y declarando vigentes las anteriores disposiciones sobre reuniones, asociaciones e imprenta, en cuanto no se opongan a la ejecución del presente Decreto”. *Gaceta de Madrid*, 19 de mayo de 1875. *Colección legislativa de España*, Tomo CXIV, p. 795. . Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°8.

<sup>50</sup> Real Decreto de 18 de mayo de 1875, p. 794.

imprescindible a efectos legales, pero sí para los intereses gubernamentales. Gómez Aparicio afirma que la promulgación de esta disposición solo se podía explicar por la actitud temerosa de Cánovas con respecto a la prensa, a la que culpaba de los problemas políticos que sufría España en la época anterior a la Restauración.<sup>51</sup> Como ocurría en los demás ordenamientos, el político conservador justificaba el sistema represivo adoptado por su partido sobre la libertad de escribir por medio de la imprenta con razones tales como las de impedir “que en un momento se ponga en peligro la tranquilidad pública”, “se favorezca la insurrección armada” o “se ataque el principio fundamental del Gobierno”.<sup>52</sup>

La norma establecía una lista de posibles abusos que en el ejercicio de la libertad de imprenta podían cometer los periódicos, tales como las alusiones ofensivas o irrespetuosas a los actos u opiniones del Rey; el ataque directo o indirecto al sistema monárquico constitucional; injuriar a cualquier senador o diputado por sus opiniones o votos en el Senado o el Congreso; dar noticias que produjeran discordia entre los distintos cuerpos del Ejército; publicar noticias de guerra o noticias falsas, peligrosas para el orden público o inferir insultos a las personas o instituciones religiosas.<sup>53</sup> Tal y como señala Castro Fariñas, a diferencia de la norma anterior, en ésta no se encontraban las improcedentes distinciones entre el Estado y otras instituciones,<sup>54</sup> de tal manera que las ofensas que se cometieran contra el sistema político quedaban equiparadas a las efectuadas a personas o cosas religiosas sin distinción de culto, ya que en esta época regía el sistema de libertad reconocido en la Constitución de 1869.

---

<sup>51</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo Español*, p. 270.

<sup>52</sup> Real Decreto de 31 de diciembre de 1875: “Dictando reglas para reprimir los abusos que en el ejercicio de la libertad de imprenta cometan los periódicos, y creando Tribunales especiales para la aplicación de las penas en que aquellos puedan incurrir”. *Gaceta de Madrid*, 1 de enero de 1876. *Colección legislativa de España*, Tomo CXVI, p. 1000. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°9.

<sup>53</sup> Artículo 1 del Real Decreto de 31 de diciembre de 1875, Tomo CXVI, p. 1004.

<sup>54</sup> CASTRO FARIÑAS, J.A., *De la Libertad de Prensa*, Madrid, Fragua, 1971, p. 82.

De este decreto surgió la figura del fiscal especial de imprenta, que se encargaba de la censura previa y el secuestro de los periódicos que vulnerasen los principios políticos establecidos por el ministro de Gobernación. Asimismo, recogía la pena de suspensión del periódico dictada por un tribunal de imprenta, compuesto por magistrados especiales que se organizaban en audiencias, que eran los encargados de controlar y juzgar las cuestiones políticas.<sup>55</sup> Para Martínez Cuadrado, lo único que lograban esas sanciones penales y administrativas, especialmente la amenaza de suspensión que recaía sobre los periódicos, era herir y recortar la libertad de expresión en todos los órdenes y particularmente en la prensa.<sup>56</sup> De cualquier manera, esta norma permaneció en vigor hasta la aprobación de la Ley de Imprenta de 1879, por lo que mantuvo su efectividad hasta tres años más tarde de que se publicara la Constitución de 1876, que prohibía la censura previa. Esta circunstancia fue posible ya que las prácticas represivas contenidas en el decreto continuaban disfrazadas bajo la fórmula de “consulta voluntaria”, que obligaba a las empresas periodísticas a presentar sus ejemplares ante las autoridades con anterioridad a su publicación, siendo éstos los encargados de realizar el secuestro cuando lo consideraban oportuno, antes incluso de su puesta en circulación.

Para completar el procedimiento restrictivo creado por Cánovas en materia de libertad de imprenta, el político conservador dictó una Real Orden de 6 de febrero de 1876 en la que señalaba las faltas que se podían cometer por medio de los periódicos, estableciendo además las reglas de simple policía sobre la publicación de folletos, carteles y hojas sueltas. Con esta nueva disposición se ampliaba, por tanto, el marco de intervención gubernamental frente a los posibles abusos que pudieran cometerse por medio de estos impresos. En opinión de Cánovas éstos se repartían con “facilidad” por las calles y

---

<sup>55</sup> Artículos 5-15 del Real Decreto de 31 de diciembre de 1875, Tomo CXVI, pp. 1005-1007.

<sup>56</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España*, p. 27.

establecimientos públicos, pudiendo propagar escritos “contrarios a la moral, la religión y las buenas costumbres, o ideas esencialmente hostiles al orden social”, lo que hacía necesario “dictar disposiciones de policía que corten semejantes atentados”.<sup>57</sup> Al respecto la norma prohibía la publicación de todo impreso, no solo de libros y periódicos, sin la previa autorización del gobernador de cada localidad, así como su venta y pregón en lugares públicos sin la licencia correspondiente emitida por las autoridades.<sup>58</sup>

Junto con estas primeras normas de carácter represivo que conformaban la política de prensa adoptada por Cánovas,<sup>59</sup> el 30 de junio de 1876 se aprobó una nueva Constitución, ratificada por unas Cortes Constituyentes compuestas por una amplia mayoría conservadora. La Constitución de 1876, sancionada por Alfonso XII, se inspiraba en los textos constitucionales de 1845 y 1869, siendo la más duradera de la historia española con una vigencia de cuarenta y siete años. Esta norma fundamental recogía los principios habituales del constitucionalismo español ya adoptados en la de 1869, aunque planteaba dos novedades: por una parte, establecía un principio parlamentario, por el que el gobierno dependía de la doble confianza de la Cámara y del Rey, y, por otro lado, se reconocía una dualidad de partidos bajo la premisa de que ambos podían tener cabida en el marco constitucional con su programa político propio.<sup>60</sup> Con buen criterio, Sánchez Agesta señala que con esta última inferencia

---

<sup>57</sup> Exposición de motivos de la Real Orden de 6 de febrero de 1876: “Dictando algunas disposiciones relativas a las faltas que pueden cometerse por medio de los periódicos y estableciendo además reglas de simple policía sobre la publicación de folletos, carteles y hojas sueltas”. *Gaceta de Madrid*, 7 de febrero de 1876. *Colección legislativa de España*, Tomo CXVI, p. 127. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°10.

<sup>58</sup> Artículos 3 y 5 de la Real Orden de 6 de febrero de 1876, p. 128.

<sup>59</sup> Antes de la promulgación de la Constitución de 1876 se publicó una última disposición de escasa importancia, que declaraba ilícito que los periódicos sirvieran las suscripciones de otros que hubieran sido suspendidos gubernativamente, haciendo para ello tiradas especiales con el mismo formato y papel que aquellos. RO de 19 de febrero de 1876. *Gaceta de Madrid*, 20 de febrero de 1876.

<sup>60</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España*, p. 15.

quedaba patente la esencia misma del régimen liberal, ya que reconocía no sólo una serie de derechos propios de los individuos, sino lo más importante, una vida pública marcada por el principio de libre concurrencia de las ideas, de los partidos políticos y de las fuerzas sociales.<sup>61</sup>

El derecho a la libertad de prensa quedaba recogido en el artículo 13 de la Constitución de la siguiente manera: “todo español tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa”. Como hemos analizado anteriormente, a pesar de que el derecho a libre manifestación de ideas se reconocía constitucionalmente, éste se encontraba limitado en la práctica por la normativa concreta en materia de imprenta aprobada en la primera parte del régimen, y no se hizo efectivo hasta la llegada al poder del partido liberal de Sagasta, el 8 de febrero de 1881. El texto constitucional señalaba, además, que las garantías reconocidas para la imprenta sólo podían suspenderse temporalmente y por medio de una ley, cuando así lo exigiera la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias. Así pues, sólo en casos graves y de notoria urgencia, y no estando reunidas las Cortes, podía acordarse la suspensión de las mismas bajo la responsabilidad del gobierno.<sup>62</sup> Además del reconocimiento expreso de la libertad de imprenta, la norma establecía que las leyes debían dictar las reglas oportunas para asegurar a los españoles el respeto recíproco de los derechos, sin menoscabo de la nación ni de los atributos esenciales del poder público.<sup>63</sup> En definitiva, la Constitución de 1876 sentaba las bases del derecho de la libertad de prensa de ésta época, y establecía el marco teórico en el que se desarrollaron dos leyes de imprenta

---

<sup>61</sup> SÁNCHEZ AGESTA, L., *Historia del Constitucionalismo Español*, p. 381.

<sup>62</sup> Artículo 17 de la Constitución de 30 de junio de 1876. Página Web del Congreso de los Diputados. Área: Historia y Normas. Sección: Constituciones Españolas 1812 - 1978: Constitución de 1876. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°11.

<sup>63</sup> Artículo 14 de la Constitución de 30 de junio de 1876.

muy diferentes entre sí: la Ley de 7 de enero de 1879 y la Ley de Policía de Imprenta de 1883.

## **5. LA LEY DE PRENSA DE LOS CONSERVADORES**

### **1. EL SISTEMA PREVENTIVO IDEADO POR CÁNOVAS**

El 7 de enero de 1879, bajo la tutela del gobierno conservador de Cánovas, y promovida por el entonces ministro de Gobernación, Francisco Romero Robledo, se aprobó una Ley de Imprenta que regulaba las reglas para el ejercicio de la libertad de prensa y reemplazaba al Real Decreto de 31 de diciembre de 1875. Era una legislación extensa y compleja, que se caracterizaba principalmente por defender de manera absoluta al régimen monárquico y sus instituciones, y por una extensa enumeración de infracciones sometidas a los tribunales especiales.<sup>64</sup> Esta amplia lista de delitos de imprenta que regulaba la ley, hasta dieciocho figuras, ponía en entredicho la proclamación de la libertad de prensa reconocida en el artículo 13 de la Constitución, precepto en el que se sustentaba la nueva legislación de imprenta. A juicio de Miguel Artola, la norma consideraba todas las acciones delito, incluso algo “tan inofensivo” como cuestionar el sistema político y social de la Restauración.<sup>65</sup>

Los delitos de imprenta se recogían en varios artículos, entre los cuales destacaba el artículo 16, en el que se regulaba la mayoría de ellos, tales como ofender la inviolable persona del rey, aludiendo irrespetuosamente, ya de un modo directo o indirecto, a sus

---

<sup>64</sup> La legislación de 1879 establecía una clara distinción entre los delitos cometidos por medio de los periódicos, sometidos a los tribunales especiales de imprenta, y aquellos que se realizaban por medio de los libros, que se sancionaban con arreglo al Código Penal. Además, para la edición de éstos solo era necesario que figurara el pie de imprenta. Esta permisividad en el control de los libros se debió a que, por su naturaleza, tenían escasa difusión, lo que provocó que las autoridades de la época centraran toda su actividad informativa en las publicaciones periódicas y otros medios impresos como las hojas sueltas o folletos.

<sup>65</sup> ARTOLA, M., *Partidos y Programas políticos 1808-1936*, Madrid, Aguilar, 1975, p. 139.

actos y opiniones e insertar noticias respecto de su persona o de cualquier miembro de su familia y dar cuenta de hechos que tuvieran relación con ella, si al hacerlo podían “racionalmente” considerarse publicadas en su desprestigio.<sup>66</sup> El apartado cuarto del artículo creó mucha controversia entre los distintos partidos, ya que consideraba delito atacar directa o indirectamente la forma de gobierno o las instituciones fundamentales, proclamar máximas o doctrinas contrarias al sistema monárquico constitucional, y conspirar directa o indirectamente contra el orden legal, haciendo imposible su continuación o su ejercicio y alentando de cualquier modo las esperanzas de los enemigos de la paz pública.<sup>67</sup> Para Venancio González, futuro ministro de Gobernación en el primer gobierno liberal de la Restauración, ese apartado bastaba por sí solo para censurarlo todo, ya que cualquier publicación podía alentar “de cualquier modo” a los enemigos de la paz pública. El político liberal avanzó que, cuando gobernara su partido, se aplicaría el precepto de forma muy moderada. Venancio González alegó además que la norma contenía frases vagas, que ponían de relieve la discrecionalidad utilizada por los conservadores a la hora de tipificar los delitos de imprenta, y se preguntaba al respecto: “¿Qué quiere decir esto de conspirar contra el orden legal? ¿Conspirar contra el periódico? ¿Qué quiere decir esto de directa o indirectamente? ¿Qué quiere decir esto de alentar de cualquier modo las esperanzas de los enemigos de la paz pública?”.<sup>68</sup>

Uno de los periódicos más perjudicados por las disposiciones de la nueva legislación de imprenta fue el diario madrileño *El Liberal*, condenado a veinte días de suspensión por la publicación de un artículo que cubría un acto político del entonces ministro de Estado, en el que simplemente se declaraba: “Medrados andarían los pueblos que han

---

<sup>66</sup> Artículo 16.3 de la Ley de Imprenta de 7 de enero de 1879. *Gaceta de Madrid*, 8 de enero de 1879. *Colección legislativa de España*, Tomo CXXII, p. 25. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°12.

<sup>67</sup> Artículo 16.4 de la Ley de imprenta de 7 de enero de 1879, p. 25.

<sup>68</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3443.

logrado instituciones más o menos libres y realizando reformas progresivas con tales temperamentos de conciliación y tales cuidados de no suscitar enemistades. ¿Qué progresos, qué planteamiento de institución libre no ha herido a eso que llaman clases conservadoras, a esas castas de privilegiados a quienes se quiere que no se cause ofensa para que ellos den a su vez el ósculo de la declaración de guerra a los que con ella han de perder preeminencias, privilegios y aprovechamientos insostenibles?”. A pesar de ser un artículo completamente inofensivo, el tribunal especial consideró que era una conspiración directa contra el orden legal, como así lo señalaba su fallo: “El periódico *El Liberal* al exponer y defender doctrinas que tienden y se encaminan a concitar unas clases contra otras, conspira directamente contra el orden legal, alentando así las esperanzas de los enemigos de la paz pública, ha cometido infracción de los número 4º y 9º de la ley”.<sup>69</sup> Analizando la sentencia, para el tribunal el diario no solo incumplía el apartado 4º del precepto legal, sino que además infringía el apartado 9º del mismo artículo 16, que tipificaba como delito la defensa o exposición de doctrinas contrarias a la organización de la familia y de la propiedad, o que se encaminaran a enfrentar unas clases contra otras o a concertar coaliciones con el mismo objeto. En virtud de la opinión de González, “¿qué clases concitaba el artículo por el hecho de decir que la libertad llevaba siempre consigo la muerte de algunos privilegios?”.<sup>70</sup>

Junto a esa disposición, la ley también tipificaba como delitos de imprenta la injuria y la calumnia reconocidas en el artículo 20, aunque en esos casos la legislación remitía a la jurisdicción ordinaria, que era la que tenía atribuida competencia para conocer de los mismos, aplicándose el artículo 475 del Código Penal, que exigía probar la verdad de las imputaciones en todos los delitos de injuria dirigidos a los ministros o a las

---

<sup>69</sup> Artículo y sentencia reproducidos por Venancio González. Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3443.

<sup>70</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3444.



autoridades públicas.<sup>71</sup> La exigencia establecida en la norma penal para comprobar la existencia de ofensas no convenía al gobierno conservador que, en su afán por castigar cualquier extralimitación de la prensa, creó un “delito de insultos a los ministros” contenido en el párrafo 2º del artículo, que se sometía a la legislación especial de imprenta y no a la común como el resto de ofensas, y por la que no se admitían pruebas al respecto. En la práctica, era un recurso muy utilizado, de tal manera que si un periódico criticaba alguna medida de los ministros, en lugar de calificarse como injuria, para dejar actuar al Código y dar la posibilidad al agraviado de tener el libre derecho de defensa para probar su inculpabilidad, se consideraba como insulto y se condenaba por el tribunal de imprenta sin ser oído el imputado.

El número de denuncias por este delito fue desmedido, consiguiendo el dudoso “honor” de ser la principal causa por la que se condenó a la prensa. La arbitrariedad de los tribunales especiales llevó a sancionar a *El Liberal*, por la difusión de un artículo en el que se reprobaba la conducta del ministro de Ultramar respecto a la liquidación de bonos en la isla de Cuba, alegando que “si tales hechos fueran ejecutados por un particular le llevarían a entablar relaciones con el Código Penal”.<sup>72</sup> El juez de imprenta consideró la noticia como un insulto al ministro, por lo que se le aplicó al diario madrileño la pena de suspensión de veinte días, sin que su director pudiera demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Entre los más perjudicados por la medida se encontraba la publicación *La Lealtad Española*, condenada a doce días de suspensión por los insultos proferidos a las autoridades gubernativas al declarar: “(...) Cada alcalde es un cacique obediente a tres o cuatro bajalatos que encadenan sus influencias desde la

---

<sup>71</sup> Artículo 20 de la Ley de Imprenta de 7 de Enero de 1879, p. 27.

<sup>72</sup> *El Liberal*, “Otra arbitrariedad”, 29 de agosto de 1880.

Presidencia del Consejo a la pobre comunión de contribuyentes, mártires mudos que pagan (...).<sup>73</sup>

Por el mismo delito se condenó también al diario provincial *Los Debates* a causa del artículo “Gonzalo Morón, o locura o vanidad”, en el que se decía: “Los dos tienen talento, los dos fueron unos monstruos del saber y del entender, los dos se volvieron locos. ¡Pobre Gonzalo Morón! ¡Pobre Cánovas del Castillo! El primero tuvo la desgracia de no hallarse en el poder en sus primitivos ataques... El segundo se encuentra privado de la razón en el momento más crítico de su vida y de la vida del país”. La sentencia informaba que la publicación contenía insultos dirigidos al presidente del Consejo de Ministros, “toda la vez que la apreciación que hace de su persona y la manera y forma con que la trata, atribuyéndole una afección o vicio orgánico, rebaja y amengua su crédito, respetabilidad y valía”, por lo que se le condenaba a veinte días de suspensión.<sup>74</sup> Por citar un último ejemplo, se declaró culpable al periódico *Los Dos Mundos* por un artículo titulado “La persecución”, en el que se aseveraba que “la persecución de la imprenta es el último asidero de los tiranos. Así se explica que la prensa sufra hoy tan ruda y constantemente la persecución del pequeño Bismarck, o mejor aún, del moderno Tiberio: de ese Tiberio cómico que sin ninguna de las condiciones grandes que tenía aquel famoso tirano, le iguala tan solo, y aun le aventaja, en soberbia y vanidad”.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Artículo reproducido por Venancio González. Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3444.

<sup>74</sup> Artículo y sentencia reproducidos por Venancio González. Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3445.

<sup>75</sup> Artículo reproducido por Venancio González. Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3445.

Otro de los delitos contemplados en la Ley de 1879 consistía en atacar directamente o ridiculizar los dogmas de la religión del Estado, el culto, los ministros de la misma o la moral cristiana.<sup>76</sup> A diferencia de los analizados anteriormente, éste era de los más concretos en su redacción y de los que a simple vista se prestaba menos a la interpretación, ya que no aparecían expresiones tan vagas como “indirectamente” o “de cualquier modo”, muy utilizadas en otros preceptos. Sin embargo, en la línea de política represiva iniciada años antes por el gobierno conservador, era una figura muy socorrida por el poder público, que acudió a ella haciendo una interpretación muy estricta.

Por citar un ejemplo, el periódico *La Nueva Prensa* fue denunciado a tenor de este precepto por una publicación sobre la historia de los faraones, que el ejecutivo consideró que ridiculizaba “clara, ostensible y directamente el culto y los ministros de la religión del Estado”.<sup>77</sup> La parte del artículo periodístico, que según los conservadores, contenía temática religiosa era la siguiente: “si para los faraones contemporáneos no hay varita de virtudes, hay la indiscutible razón del derecho soberano, que será preciso respetar; si para los pueblos de hoy no existe un Moisés elegido por Dios como libertador, habrá una doctrina sagrada cuyo catecismo debe ser, cuyo credo seguir, cuyo culto adorar (...)”. La publicación continuaba en estos términos: “cuando se llega a la altura del Sr. Cánovas del Castillo y se han prestado a la Nación los servicios que él ha prestado, puede ponerse todos los entorchados que quiera, hasta los codos, y si le parece bien, porque el país vería en eso y en todo bien poca recompensa para lo que se merece”.<sup>78</sup> Con esta segunda parte, quedaba demostrado que el verdadero motivo de la denuncia no se ligaba a un asunto religioso, sino más bien político, ya que la única

---

<sup>76</sup> Artículo 16.1 de la Ley de Imprenta de 7 de Enero de 1879, p. 25

<sup>77</sup> Sentencia reproducida por Venancio González. Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3447.

<sup>78</sup> Artículo reproducido por Venancio González. Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3447.

persona a la que se criticaba era al presidente del Gobierno, y no a los faraones como alegaban desde el ejecutivo. Definitivamente, para los conservadores era más conveniente atenerse a la excusa de la religión a la hora de prohibir un periódico que no estaba siendo afín a sus intereses políticos, y así centrar el foco de atención en ella, no abusando de otros apartados que utilizaban con asiduidad para conseguir ese objetivo.

La Ley de 1879 regulaba, también, una serie de infracciones de policía como insertar artículos y noticias políticas en periódicos o folletos que no tuviesen este carácter o no realizar el depósito previo.<sup>79</sup> La pena que se contemplaba para este tipo de delitos era el secuestro y la multa, y en caso de reincidencia, la supresión de la publicación. Por su parte, aquellos delitos que no se contemplaban en la nueva norma, pero se cometían por medio de la imprenta, eran juzgados por la jurisdicción ordinaria y llevaban una sanción accesoria de suspensión del periódico. Por su parte, la responsabilidad de la sanción recaía en el fundador-propietario de la publicación, no en el director de la misma. Según Gómez Aparicio, la razón de que la acción sancionadora se destinara al propietario residía en que éste representaba el “punto más sensible” para la prensa española: el aspecto económico empresarial.<sup>80</sup> La norma imponía a los mismos un pago previo de quinientas pesetas en concepto de subsidio industrial para todos aquellos que no pagaran doscientas cincuenta pesetas de contribución territorial, medida que obligó a que muchos de los periódicos, que contaban con escasos recursos económicos, solicitaran prórrogas para la retribución que se reclamaba.

Como hemos adelantado, la competencia para enjuiciar los delitos recaía en los tribunales especiales, nombrados por el gobierno mediante un procedimiento análogo al

---

<sup>79</sup> Artículo 79 y ss. de la Ley de Imprenta de 7 de Enero de 1879, p. 36.

<sup>80</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo Español*, p. 395.

citado en el último decreto, y contra los fallos de los mismos sólo existía el recurso de casación en determinadas ocasiones.<sup>81</sup> La elección de los miembros de los tribunales de imprenta por el ejecutivo no estuvo exenta de polémica, ya que, en la mayoría de los casos, seguían fielmente las consignas de las autoridades públicas, y cuando se negaban a denunciar un hecho que las autoridades consideraban delito, eran cesados de sus funciones o trasladados a otros territorios. Venancio González denunció en el Congreso algunas irregularidades que quedaban manifiestas cuando un juez o fiscal especial no seguía las directrices que le llegaban del poder público. Así se puede deducir de la medida impuesta a un presidente de un tribunal de imprenta, a quién se ordenó el traslado a la Audiencia de Baleares tres días después de que éste absolviera al periódico *El Mercantil Valenciano*, que previamente había sido denunciado por los conservadores por el artículo “La llaga”. En otro de los ejemplos aportados por el político liberal, un fiscal de imprenta, competente para conocer la legalidad de otro artículo del mismo diario, había sido cesado de su cargo por considerar que la publicación no violaba ningún precepto contenido en la ley de 1879, oponiéndose así a la denuncia previa del gobernador. Razones todas ellas suficientes para Venancio González, quién exteriorizó su repulsa hacia una legislación “cruel”, que sometía a la prensa a la arbitrariedad de los tribunales y fiscales especiales, y dejaba la libertad de imprenta en manos de “los ardides políticos de los partidos”.<sup>82</sup>

Debido a la preocupación del gobierno por la difusión de los periódicos, la ley tipificaba entre sus numerosos artículos las condiciones que debían reunir los vendedores y los repartidores de las publicaciones, lo que llevó a establecer en cada población un registro de personas que poseían la licencia obligatoria para repartir impresos y

---

<sup>81</sup> Artículo 31 de la Ley de Imprenta de 7 de Enero de 1879, p. 29.

<sup>82</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, González Fernández, cif. 3444.

periódicos. Asimismo, la norma regulaba la facultad del gobierno de prohibir la entrada y divulgación en territorio español de impresos publicados en el extranjero que se difundieran en España, con la sola excepción de los libros impresos en idiomas foráneos, que circulaban con libertad sin que las autoridades gubernativas aplicaran medida represiva alguna, siempre que no se presentara una querrela o denuncia criminal contra los mismos.

## **2. AUMENTO DE LA PERSECUCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES (1879-1881)**

Publicada la Ley de Imprenta de 1879 bajo el mandato del partido conservador, Cánovas aconsejó a Alfonso XII para que designara como nuevo presidente del Consejo de Ministros al general Martínez Campos, un militar y político conservador que gozaba de gran prestigio por su papel en la Paz de Zanjón de 1878, que puso fin a diez años de guerra en Cuba. De esta manera, el 7 de marzo de 1879 comenzaba una nueva etapa política con el nombramiento del general como líder de un gobierno constituido íntegramente por conservadores. El cambio en la presidencia llevó consigo una renovación de las Cortes elegidas en 1876, y, por tanto, una convocatoria de elecciones en un contexto novedoso tanto por el nuevo marco constitucional proporcionado por la aprobación de la última Constitución española, como en el plano de los derechos civiles y políticos reconocidos durante el nuevo período de paz posterior a la guerra de Cuba.<sup>83</sup> Durante los nueve meses en los que permaneció Martínez Campos como presidente del Gobierno, se practicó una mayor tolerancia con la prensa, con un control más flexible de las publicaciones de la oposición, que contrastaba con la estricta vigilancia promovida

---

<sup>83</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España*, p. 44.

por Cánovas años atrás. A pesar de la apertura social y política propiciada por este nuevo gabinete conservador, en diciembre de 1879 Martínez Campos dimitió tras presentar en el Congreso su propuesta de abolir la esclavitud en Cuba, medida que había sido pactada por el propio general en la Paz de Zanjón, y que no contó con el apoyo de su partido.

La vuelta de Cánovas al poder, el 6 de diciembre de 1879, ocasionó una nueva oleada de denuncias y suspensiones de los órganos de la prensa, con motivo de la inflexible política de represión llevada a cabo por el mandatario. Ésta fue especialmente cruel ese mes de diciembre en el que fueron denunciados doce periódicos en tan solo diez días.<sup>84</sup> En esta nueva etapa de Cánovas, que duró hasta el cambio de gobierno en 1881, se produjeron 171 denuncias, de las cuales 50 periódicos fueron suspendidos y solo 23 absueltos por los tribunales especiales. Gracias al análisis realizado por Timoteo Álvarez sobre la base de los datos publicados por la prensa diaria de la época,<sup>85</sup> las regiones que más sufrieron la persecución de los fiscales de imprenta fueron Madrid y Barcelona. En relación al número de publicaciones existentes en cada una de ellas, se puede observar que existió una alta proporción de denuncias y suspensiones en otros territorios como el País Vasco, Valencia o Aragón, aunque fue Vizcaya la provincia más

---

<sup>84</sup> En estos términos se lamentaba *El Liberal*: "El *Fígaro* denunciado. El *Pabellón Nacional* denunciado y condenado a quince días de suspensión. El *Mundo Político* expuesto a sufrir igual suerte que el anterior. La prensa sigue aguantando un Cánovas deshecho. Nota: el temporal reinante no causó ayer ninguna víctima en Madrid. Verdad es que sólo se publicó *La Gaceta*. Pues por eso". *El Liberal*, "A vuela pluma", 26 de diciembre de 1879.

<sup>85</sup> Timoteo Álvarez toma como fuente principal al periódico madrileño *El Liberal*, comparando la información vertida en éste con los datos de otras publicaciones como *El Imparcial*, *El Globo* o *La Época*, entre otros. TIMOTEO ÁLVAREZ, J., *Restauración y prensa de masas: Los engranajes de un sistema (1875-1883)*, Pamplona, Universidad de Navarra, 1981, pp. 79-91.

castigada por la censura, lo que coincidía con el foco de mayor conflicto de entonces: el carlismo.<sup>86</sup>

El análisis realizado por Timoteo Álvarez muestra, además, las principales causas por las que era sancionada la prensa en aplicación de la legislación de 1879. El delito al que más recurrían los tribunales especiales a la hora de castigar a los diarios era por injurias al Gobierno o las instituciones del mismo, que, curiosamente, fue el más utilizado por los tribunales ordinarios a la hora de aplicar la futura Ley de Imprenta de 1883. A éste le siguieron las condenas por la exaltación de la libertad y la República, y a continuación los ataques en la prensa al Ejército o la Guardia Civil. Por su parte, las publicaciones más perseguidas según su línea política fueron las democráticas, contabilizándose 83 denuncias entre 1875 y 1883, y entre las más castigadas se encontraban *La Unión*, *La Nueva Prensa*, *El Imparcial*, *El Figaro*, *El Tribuno*, *Irurac-bast* y *El Liberal*. La prensa que apoyaba la monarquía fue más respetada por el gobierno conservador. Aun así, quedaron recogidas 48 denuncias a los periódicos fusionistas, que se concentraron, especialmente, en estos tres diarios: *El Constitucional Español*, *Los Debates* y *El Pabellón Nacional*, mientras que solo se registraron 31 denuncias contra publicaciones conservadoras. Para Timoteo Álvarez queda probado que Cánovas conocía a la perfección la utilidad de la prensa y supo utilizar la ley de 1879 como un instrumento a su "propio servicio".<sup>87</sup>

En paralelo a estas actuaciones, y con motivo de la constitución de un nuevo gabinete conservador bajo el mandato de Cánovas a finales de 1879, se aceleró la conformación

---

<sup>86</sup> El problema de los nacionalismos hizo que, a principios del siglo XX, el foco de conflicto se trasladara a Cataluña, concretamente, a Barcelona, que fue el territorio peninsular que más sufrió los rigores de la censura estatal.

<sup>87</sup> TIMOTEO ÁLVAREZ, J., *Restauración y prensa de masas*, p.97.



del partido fusionista, que debía relevar a los conservadores en la presidencia del gobierno. Esta organización política, que durante estos años se encontraba en la oposición, quedó oficialmente creada el 23 de mayo de 1880 con el nombre de Partido Liberal Fusionista, de corte liberal y de izquierdas. La nueva formación resultaba de la integración de dos grupos políticos: el Partido Constitucional, presidido por Práxedes Mateo Sagasta, dotado de una fuerza institucional suplementaria durante estos últimos años, al unirse al mismo varios generales pertenecientes al partido conservador como Martínez Campos, Manuel Pavía o Primo de Rivera; y por otro lado, el Partido Centralista, dirigido por Alonso Martínez, en el que destacaba la figura de Venancio González, futuro ministro de Gobernación, quién se reveló como un gran defensor de la libertad de prensa y fue el encargado de redactar el Proyecto de ley previo a la publicación de la Ley de Policía de Imprenta de 1883. En 1885 esta organización política pasó a llamarse definitivamente Partido Liberal después de la incorporación del grupo formado por Serrano y Martos, y se caracterizó por el servicio a la monarquía constitucional, la fidelidad al sistema representativo y la oposición al gobierno conservador de Cánovas.<sup>88</sup>

La propia existencia de la corriente liberal, que contaba con grandes defensores en materia de prensa, los cuales pretendían darle una mayor apertura y libertad, provocó una disminución de la acción represiva contra la imprenta llevada a cabo por Cánovas a finales de 1880, con el objetivo fundamental de facilitar el turnismo de partidos reconocido constitucionalmente. Por este motivo, el gobierno conservador emitió el Real Decreto de 25 de noviembre de 1880, con el que se reducía a la mitad de la pena a todas aquellas publicaciones que tuvieran sentencias pendientes de suspensión dictadas

---

<sup>88</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo Español*, p. 408.



por los tribunales de imprenta, en aplicación de la estricta ley de los conservadores que se encontraba en vigor.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Real Decreto de 25 de noviembre de 1880: “Indultando de la mitad de la pena de suspensión a los periódicos que por sentencia de los Tribunales de imprenta se encuentren extinguiéndola actualmente”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXXV, pp. 498-499.

## **2. TURNO DEL PARTIDO LIBERAL: HACIA UNA VERDADERA LIBERTAD**

### **1. PRIMERAS CONCESIONES LEGALES A LA PRENSA. LOS DEBATES EN TORNO A LA LIBERTAD DE IMPRENTA**

Con estos últimos sucesos vividos en España, y a pesar de haberse celebrado elecciones en 1879, la opinión pública empezó a demandar un nuevo gobierno que, conforme a la Constitución de 1876, dependía de la confianza de las Cámaras y del Rey. Por medio de un discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 19 de enero de 1881, Sagasta, jefe del recién instaurado partido liberal fusionista, apeló a la regia prerrogativa, solicitando el poder de Alfonso XII para efectuar el cambio, que a su vez otorgó el poder a los liberales. Una vez refrendado el decreto de disolución de las Cortes de 1879 y otorgada la confianza de las Cámaras, se formó el primer gobierno de izquierdas liberales con Sagasta como presidente del Consejo de Ministros, confirmándose la alternancia pacífica de los partidos monárquicos reconocida en la Constitución. El nuevo equipo ministerial lo formaba, entre otros, el general Martínez Campos al frente del ministerio de Guerra, Venancio González en el ministerio de Gobernación y Alonso Martínez, tercer líder de la fusión, que ocupaba el ministerio de Gracia y Justicia.

Desde el inicio del gobierno liberal en febrero de 1881, Sagasta dio los pasos necesarios para reconocer una verdadera libertad de imprenta. La postura del partido liberal, en clara oposición a las prácticas represivas de Cánovas, especialmente a la censura previa y los tribunales especiales, tuvo su reflejo inmediato en el Real Decreto de 14 de febrero

de 1881. El precepto establecía el sobreseimiento de todas las causas pendientes y el indulto general a todas las publicaciones y periodistas que estaban cumpliendo la pena de suspensión dictada por la Ley de 1879.<sup>90</sup> Con el texto se abría una nueva fase para la libertad de imprenta española, la cual representaba la voluntad de cambio del nuevo gobierno. Para los liberales, el espíritu restrictivo de la ley conservadora se oponía a esta nueva línea de actuación gubernativa que pretendían implantar en España, aunque, “por fortuna”, la vaguedad de sus preceptos autorizaba benignas interpretaciones, por lo que podían garantizar la libertad de los periódicos, hasta la aprobación de una nueva legislación en la materia.<sup>91</sup>

A partir de ese momento, y debido a la importancia que había adquirido la prensa para las distintas corrientes políticas, las dos Cámaras fueron testigos de intensos debates producidos entre las diversas formaciones, que mantenían diferentes posturas respecto a la regulación de la libertad de imprenta y de la política de control que debía adoptar el poder público. Las opiniones y alegatos de la clase política de la época sirvieron de base para la redacción del Proyecto de ley de Venancio González, antesala de la legislación de imprenta de 1883. Entre todos los políticos que participaron en estas acaloradas discusiones hay que destacar a Venancio González, abogado y político liberal que ocupaba el cargo de ministro de Gobernación, y Esteban Collantes, político conservador y periodista, propietario del periódico *La Integridad de la Patria*.

---

<sup>90</sup> Antes de aprobar la nueva Ley de Imprenta de 1883 se concedió otro indulto análogo el 23 de noviembre de 1882 con motivo del nacimiento de la infanta Doña María Teresa.

<sup>91</sup> Real Decreto de 14 de febrero de 1881: “Alzando a todos los periódicos la pena de suspensión que estén cumpliendo o deban cumplir por sentencia firme, dictada antes de la publicación del presente decreto”, *Colección legislativa de España*, Tomo CXXVI, pp. 572-573. Véase apéndice de la Tesis: ANEXO N°13.

El 21 de marzo de 1882, Esteban Collantes inició una serie de interpelaciones en las que mostraba su malestar por la política de prensa adoptada por el nuevo gobierno liberal, al entender que introducía un desbarajuste en materia de imprenta. Por esta razón, el político conservador exigió una relación de las denuncias realizadas por los fiscales de imprenta y de las medidas gubernativas que se dictaban, a su juicio, “sin más criterio que el capricho y con un desconocimiento completo de la legalidad vigente”.<sup>92</sup> En la segunda demanda, Collantes señaló nuevos datos en torno a los percances sufridos por la prensa, más concretamente noventa y tres incidentes soportados por los periodistas durante los dos años de mandato liberal, frente a los ochenta y uno, una vez, y setenta y seis, la segunda, del conservador. Dos días después de estas declaraciones, el diputado conservador se burló del “espíritu expansivo y liberal” adoptado por el ejecutivo liberal, aseverando que en la práctica se estaba aplicando la censura previa sobre los telegramas que los corresponsales extranjeros y de provincias expedían, a lo que había que añadir además los secuestros de varios periódicos de Madrid en distintas provincias sin denuncia previa o sospecha de delito respecto a ellos.<sup>93</sup>

Ante estas acusaciones, el ministro de Gobernación aclaró que los periódicos habían tardado en repartirse por “descuido de un ambulante”, pero que los mismos ya habían llegado a su destino.<sup>94</sup> En referencia a los telegramas, González aseguró que su partido actuaba al amparo de la ley, acogiéndose al reglamento para el servicio interior de telégrafos, en el que se recogía la censura previa. El telégrafo no solo se consideraba un instrumento del poder público, sino que además tenía el deber de “impedir que se convirtiera en un medio de desorden, favorable solo a los que tienen interés en perturbar

---

<sup>92</sup> Congreso, 21 de marzo de 1882, Esteban Collantes, cif. 2273.

<sup>93</sup> Congreso, 5 de abril de 1882, Esteban Collantes, cif. 2571.

<sup>94</sup> Congreso, 5 de abril de 1882, ministro de Gobernación, cif. 2571.

ciertas poblaciones”.<sup>95</sup> Tal y como ocurría con los decretos y con la ley adoptada por Cánovas, la idea de mantener el orden público como base para mantener la estabilidad del régimen seguía vigente con el gobierno liberal, de tal manera que los telegramas quedaban sin curso en los casos en los que se consideraba que éstos contenían noticias falsas o estaban encaminados a dar “proporciones exageradas” a hechos que realmente no las tenían y a “excitar a la rebelión”. En cualquier caso, y como el propósito del ejecutivo liberal era dar una mayor transparencia a este tipo de procesos, obligaban al jefe del gabinete y al director de telégrafos a devolver la tasa del envío del telegrama y además se hacía saber al interesado que había incurrido en alguna de las causas señaladas anteriormente.

Para contrarrestar la opinión del ministro, Collantes aseguró que se había practicado censura previa con un telegrama que únicamente declaraba: “no extrañe Vd. recibir a las cuatro mi telegrama, porque ha quedado sin curso”, y cuestionaba irónicamente al político liberal: “¿cree que ese telegrama ha podido alterar el orden público? ¿Pues bueno habéis puesto el orden público?”.<sup>96</sup> González, sin embargo, se preguntaba si “¿ha de haber un gobierno tan insensato que detenga telegramas porque transmitan lo que en este sitio se dice?”,<sup>97</sup> un comentario que ponía de relieve la fuerza de la prensa como medio de comunicación social y como mecanismo de denuncia de los actos gubernamentales que se dictaban contra ella. Además, el ministro dejaba entrever que, en ese momento, era más importante que nunca cuidar la política de imprenta llevada a cabo por la autoridad gubernativa, ya que eran cada vez más los órganos de prensa a los que podían recurrir los españoles.

---

<sup>95</sup> Congreso, 5 de abril de 1882, ministro de Gobernación, cif. 2572.

<sup>96</sup> Congreso, 5 de abril de 1882, Esteban Collantes, cif. 2572.

<sup>97</sup> Congreso, 5 de abril de 1882, ministro de Gobernación, cif. 2572.

A medida que transcurrían las sesiones del Congreso, las encendidas discusiones entre ambos políticos tomaron forma para el objeto final de los mismos, llegar a configurar un sistema legal sobre la libertad de imprenta. Para ello, Collantes requirió nuevos datos al gobierno relativos a los percances sufridos por la prensa que habían sido ocasionados por los tribunales de justicia, ya que entendía que los que habían sido aportados eran inexactos, porque entre los impresos a través de los cuales se podía cometer delito no se estaban incluyendo otros medios como las caricaturas, litografías o grabados.<sup>98</sup>

Finalmente, el 10 de mayo de 1882 se presentó ante el Congreso una proposición promovida por Esteban Collantes y firmada, entre otros, por los conservadores Cánovas del Castillo y Romero y Robledo, en la que se afirmaba: “Pedimos al Congreso se sirva declarar ha visto con disgusto que el gobierno, faltando a las leyes vigentes y a sus solemnes promesas, haya hecho sufrir 190 persecuciones a la prensa periódica, a pesar de la prudencia y sensatez con que, a juicio de los actuales ministros, ejerce su misión”. El diputado conservador reveló que todavía existían diarios acosados por las autoridades gubernativas, y que resultaba un verdadero sarcasmo que, por ejemplo, al periódico *El Clamor de Galicia* se le castigara con la máxima pena por publicarse siete minutos antes de lo debido, reprochando que la persecución se hiciera por un gobierno liberal que se enorgullecía de que, en su mandato, “jamás la prensa ha gozado de mayor libertad y jamás un gobierno ha tenido un criterio más amplio y más expansivo”.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Para probar la inexactitud de los datos aportados por el gobierno liberal respecto a los percances sufridos por la prensa en los primeros años del mandato de Sagasta, Esteban Collantes hizo referencia a la persecución que desde hacía meses venía sufriendo el periódico *La verdad de Tortosa* con arreglo a la Ley de Imprenta de 1879, publicación que no aparecía en la lista aportada por el gobierno liberal. Congreso, 15 de abril, de 1882, Esteban Collantes, cif. 2757.

<sup>99</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, Esteban Collantes, cif. 3423.

Del mismo modo, denunció una serie de ilegalidades cometidas a *El Albaredo*, periódico andaluz que “aplaude a los que silban”, por haber difundido los abusos cometidos por las autoridades de su provincia.<sup>100</sup> Concretamente, el gobernador había prohibido la difusión de la publicación, argumentando que su director no pagaba la contribución que le correspondía según el artículo 4 de la Ley de Imprenta de 1879. Sin embargo, tras una conversación mantenida entre la autoridad de la provincia y el director, quién pretendía informar a sus lectores de las razones por las que el diario no podía seguir publicándose, se aprobó un nuevo oficio gubernamental en el que se declaraba que el director de *El Albaredo* no se encontraba incluido en el supuesto legal, pero que, aun así, debía regular su situación, dejando, además, a un lado todos aquellos asuntos que molestaban al político, o, de lo contrario, se le retiraría la autorización que se le había concedido para publicar.<sup>101</sup> El atropello gubernamental suponía una “falta de formalidad”, como aseguraba Collantes,<sup>102</sup> quedando suficientemente probado que se pretendía sancionar al periódico por una falsedad, ya que al poco tiempo se negó la misma con la condición de retirar aquellos sueltos que podían molestar personalmente al gobernador. Al cabo de unos días, la autoridad suprimió el periódico andaluz, justificando la medida sobre la base de los artículos 4 y 7 de la Ley de 1879, que regulaban los requisitos exigidos a los contribuyentes al tesoro, aunque el verdadero motivo del gobernador era silenciar las críticas recurrentes vertidas en el diario a su gestión política.

Para el ministro de Gobernación, estas acusaciones realizadas por Collantes estaban injustificadas, no solo por el fondo, sino especialmente por la procedencia de los mismos, ya que aseguraba que la situación de “tolerancia y absoluta libertad” que venía

---

<sup>100</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, Esteban Collantes, cif. 3437.

<sup>101</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, Esteban Collantes, cif. 3437.

<sup>102</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, Esteban Collantes, cif. 3438.



disfrutando la prensa desde que los liberales asumieron el poder, nada tenía que ver con la circunstancias pasadas en las que la imprenta sufría todos los días perjuicios por “caprichosas” denuncias y se sentía “cohibida”.<sup>103</sup> Durante todo el discurso realizado en esa sesión del Congreso, González realizó una valoración y análisis de la política llevada a cabo por su partido, dejando claro el espíritu de cambio del nuevo gobierno respecto a la ley de los conservadores. El político liberal consideraba que la situación de la imprenta había cambiado de tal manera que, en ese momento, se podían escribir artículos que antes no solo no hubieran pasado la censura, sino que no se hubieran escrito, “porque entonces se escribía con la sombra del fiscal delante, y la prensa tuvo que transigir, y la prensa tuvo que encerrarse en los estrechos límites de aquella ley, que no era otra cosa que el capricho del presidente del Consejo de Ministros (Cánovas del Castillo)”.<sup>104</sup>

Para remarcar la diferencia entre su partido y el conservador, González aseguró que ninguno de los diarios conservadores había sido denunciado por el gobierno liberal, y recordó que en su época como abogado “se me ha caído a mí de los hombros la toga durante la porción de tiempo, ocupándome mi profesión de abogado casi exclusivamente en defender periódicos”.<sup>105</sup> El ministro rememoró, también, alguna de las medidas adoptadas por los liberales cuando llegaron al poder, como levantar una denuncia impuesta a *El Siglo Futuro*, procesado doblemente por la Ley de Imprenta y por la legislación común, y denunció ante la Cámara la injusticia cometida por el partido conservador contra el director de *La Iberia*, Bernardo Iglesias, quien había sido condenado por el Tribunal Supremo con ocho años de prisión por escribir un artículo en el que aconsejaba a los periodistas a no defenderse de las denuncias ante el tribunal de

---

<sup>103</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, ministro de Gobernación, cif. 3445-3446.

<sup>104</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, ministro de Gobernación, cif. 3449.

<sup>105</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, ministro de Gobernación, cif. 3447.

imprensa, “porque no había abogados ni defensas, ni nada que fueran bastantes a librarla de las redes de estos artículos de la ley”.<sup>106</sup> El ministro se cuestionó si este caso se podía comparar con alguno de los denunciados por Collantes, pues, era notorio, que la situación de la prensa en ese momento era más saludable que la que gozaba con el gobierno conservador.

González lamentaba, especialmente, que la libertad de imprenta estuviera sometida a la legislación de 1879, que era “tan amplia en su redacción”, como era interpretable liberal o restrictivamente.<sup>107</sup> Por este motivo, el ministro defendía que la única forma que existía de aplicarla era realizando una interpretación expansiva que no dejara a la arbitrariedad del fiscal de imprenta la aplicación de la misma: “Es la primera vez que he visto a un Gobierno acusado por interpretar en sentido liberal una ley; es el primer ejemplo de un Gobierno que teniendo en su mano medios para matar a la prensa, como la de esa ley cuya eficacia demuestra la experiencia de cinco periódicos muertos en poco tiempo durante el mandato de los conservadores, renuncia voluntariamente a esas armas”.<sup>108</sup>

De la misma forma, González aprovechó para mostrar la línea de actuación que perseguía al realizar la nueva ley de prensa, asegurando que lo peor no era el número de los percances, “sino la calidad y el género de las persecuciones y la injusticia de las mismas”.<sup>109</sup> En eso cobraba especial relevancia la definición de los delitos de imprenta que hacía la ley conservadora, que era lo que marcaba su “dureza y severidad”, y no sólo la gravedad de la pena que imponía la misma, como argumentaba Collantes. Todo

---

<sup>106</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, ministro de Gobernación, cif. 3447.

<sup>107</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, ministro de Gobernación, cif. 3449.

<sup>108</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, ministro de Gobernación, cif. 3448.

<sup>109</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, ministro de Gobernación, cif. 3446.

ello explicaba que la legislación de los conservadores se estuviera utilizando las menos veces posibles por los fiscales y fuera sustituida por el Código Penal. La medida de González marcó un antecedente importante que fue utilizado en la futura norma liberal cuyo objetivo fundamental fue evitar la discrecionalidad de los tribunales de imprenta: “¿De qué se nos acusa? ¿De qué pudiendo aplicar a la prensa el Código Penal o la ley de imprenta, y considerando por Collantes que la ley de imprenta es más benigna que el Código Penal, los fiscales llevan los periódicos a los tribunales ordinarios en vez de llevarlos ante el tribunal especial de imprenta creado por una ley hecha por los conservadores?”.<sup>110</sup>

Durante el transcurso de estas sesiones del Congreso, se despertaron discrepancias internas en el partido liberal, que se fundamentaban en que los distintos líderes de las diferentes fracciones de las que se componía el mismo no encontraban acomodo en las palancas de poder. En la composición liberal se podían identificar hasta cinco tendencias: la encabezada por Sagasta, presidente del Consejo, líder del Partido Constitucional; el Partido Democrático dirigido por Moret; la Izquierda Dinástica fundada por Serrano, Posada Herrera y López Domínguez; el grupo radical alentado por Cristino Martos, Beranger y Montero Ríos; y por último, las fracciones centralistas herederas de la Unión Liberal, representadas por Alonso Martínez y Martínez Campos.<sup>111</sup> Las tensiones tuvieron su manifestación práctica cuando Serrano, duque de la Torre, reveló su disidencia contra Sagasta durante el verano de 1882, al mostrarse molesto por las concesiones realizadas por el presidente al conservadurismo y al sistema político de pactos. Finalmente se produjo un cambio en el poder el 13 de octubre de

---

<sup>110</sup> Congreso, 10 de mayo de 1882, ministro de Gobernación, cif. 3442.

<sup>111</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España*, pp. 54-55.

1883, momento en el que el líder de Izquierda Dinástica, José Posada, se hizo con la jefatura del Gobierno.

## **2. RUPTURA CON EL PASADO: EL PROYECTO DE LEY DE VENANCIO GONZÁLEZ**

Tras los duros enfrentamientos protagonizados en el Congreso entre el diputado conservador Esteban Collantes y el ministro de Gobernación, Venancio González, éste último presentó un Proyecto de ley sobre Imprenta el 22 de diciembre de 1882, que actuó como antecedente legal inmediato de la futura Ley de Policía de Imprenta de 1883. El documento establecía la orientación legislativa del gobierno liberal en materia de prensa, anunciada por Sagasta años atrás y delimitada por González durante los últimos debates parlamentarios. El texto entendía la libertad de prensa, no sólo como el deber de amparar la libre manifestación de ideas y de pensamiento consagrado en la Constitución, sino como el deber de garantizar además a los ciudadanos la práctica de la misma sin menoscabo de los intereses del Estado.<sup>112</sup> El punto de partida del proyecto era la ruptura con el pasado legislativo conservador en materia de imprenta, al entender que la Ley de 1879 tenía un carácter autoritario y contrario al artículo 13 de la Constitución de 1876. En virtud de esta idea, el nuevo gobierno consideraba que la ley de los conservadores era inconstitucional por reconocer la existencia de unos delitos especiales de imprenta, además de los comunes, lo que producía incongruencias tales como imponer dos sanciones simultáneamente por la comisión de un solo delito: la pena personal al periodista y la de suspensión al periódico.

---

<sup>112</sup> Preámbulo del Proyecto de ley sobre imprenta presentado por el ministro de la Gobernación Venancio González. Congreso, 22 de diciembre de 1882, Apéndice primero al nº15, cif. 1.

Por tanto, el principio fundamental del documento presentado por González era la reforma de la ley anterior, suprimiendo los delitos de imprenta y dejando en exclusiva al Código Penal de 1870 tanto la definición de los abusos que en el ejercicio del derecho de imprenta regulado en la Constitución pudieran revestir carácter criminal, como la determinación de las penas para sus autores.<sup>113</sup> Además, se reservaba a los tribunales ordinarios la aplicación de estos preceptos, prescindiendo de los jueces especiales de imprenta, por lo que el proyecto reconocía la existencia del principio de separación de poderes, respetaba la dignidad e independencia del poder judicial y negaba al ejecutivo el conocimiento o la intervención en el castigo de delitos y faltas.<sup>114</sup> Venancio González recalcaba también la importancia de la opinión pública, a la que calificaba como la “base firmísima del sistema constitucional y norma de conducta ineludible para los gobiernos liberales”.<sup>115</sup>

La norma contenía veintidós artículos, en los que se garantizaba el derecho a emitir ideas por medio de la imprenta, o cualquier procedimiento utilizado para fijar o reproducir las palabras sobre papel, tela o cualquier otra materia, como la litografía o la fotografía, y que adquirieran forma de libro, folleto, hoja suelta, cartel, dibujo o grabado.<sup>116</sup> Tanto en la Ley de 1879 como en la posterior legislación liberal se precisaban todas las formas de impreso, lo que no ocurría en el texto legal presentado por González, en el que solo se definía el folleto como el impreso, que sin ser periódico, se componía de más de setenta y menos de doscientas páginas. Respecto a la publicación de éstos, se entendía realizada cuando se sacaban más de seis ejemplares de

---

<sup>113</sup> Preámbulo del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882, cif. 1, 2.

<sup>114</sup> Preámbulo del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882, cif. 2.

<sup>115</sup> Preámbulo del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882, cif. 1.

<sup>116</sup> Artículo 1 del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882.

la imprenta en la que se tiraban.<sup>117</sup> Para el libro y el folleto se requería que llevaran estampado el nombre y señas de la imprenta en la primera y última página, mientras que en la difusión de un folleto, una hoja suelta y un periódico era necesario depositar tres ejemplares ante la autoridad correspondiente, que era la encargada de resolver, en un plazo máximo de diez días, si se habían cumplido los requisitos que exigía el proyecto. De cualquier manera, a diferencia de lo que ocurría en la legislación conservadora, si la autoridad consideraba que el diario no podía ser publicado por incumplimiento de los requisitos, existía una segunda vía de recurso ante la autoridad del territorio en un plazo de cinco días.<sup>118</sup> Debido a la importancia que tenía Madrid como centro de comunicaciones, se estableció, además, la obligación de presentar tres ejemplares ante el ministro de Gobernación para todos aquellos periódicos que se difundieran en la ciudad.<sup>119</sup>

En el documento quedaban recogidas también las causas de cese de los periódicos, tales como la incapacidad legal del fundador o propietario, cuando no se realizaba la sustitución del mismo, o el incumplimiento de los requisitos señalados anteriormente respecto a la publicación por transmisión de propiedad de un periódico político o por variación del establecimiento tipográfico.<sup>120</sup> El proyecto delimitaba la representación legal del periódico ante las autoridades y tribunales y la dejaba en manos del propietario del mismo, mientras que en el caso particular de las sociedades que fundaban o adquirían la propiedad de una publicación era el gerente designado por ésta.<sup>121</sup> Además, quedaban definidas las publicaciones clandestinas como aquellos periódicos o impresos que circulaban sin tener reconocidos todos los requisitos exigidos por ley, o sin que

---

<sup>117</sup> Artículo 3 del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882.

<sup>118</sup> Artículo 8 y 9 del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882.

<sup>119</sup> Artículo 11 del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882.

<sup>120</sup> Artículo 14 y 15 del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882.

<sup>121</sup> Artículo 6 del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882.

pasase el plazo máximo de diez días antes de la resolución de la autoridad.<sup>122</sup> En estos supuestos concretos se permitía el secuestro judicial, y los propietarios o impresores de los periódicos quedaban sujetos a la responsabilidad señalada en el Código Penal.

En los últimos artículos se establecía el delito de ofensas, que obligaba a los periódicos a insertar la comunicación que el agraviado le dirigía para negar, aclarar o rectificar los hechos,<sup>123</sup> la cual debía incorporarse en uno de los tres primeros números de la publicación después de la entrega, e insertarse o bien en primera plana o en la página y columna iguales a la del artículo en el que se contuviese la ofensa. Cuando el representante legal del periódico no reconociese el perjuicio causado y se negara a realizar la comunicación, el perjudicado tenía la posibilidad de demandarlo en juicio verbal, que podía terminar en sentencia condenatoria. En el caso de que ésta fuera desobedecida, el representante legal del periódico cometía un delito penado con arreglo a lo regulado en el Código Penal de 1870. Además, para todos aquellos asuntos previstos en el proyecto que no constituyeran delito según las disposiciones del mismo, se establecía una multa de cincuenta a doscientas cincuenta pesetas o de arresto subsidiario de un día por cada cinco pesetas en el caso de insolvencia de los representantes legales del periódico.

Tras la publicación del Proyecto de Venancio González se intensificaron las discrepancias internas que venía sufriendo el gabinete liberal desde el inicio de su andadura política, lo que obligó a Sagasta a reorganizar su gobierno cediendo cargos importantes a otros miembros del partido, como ocurrió con el ministerio de Gobernación, que pasó a manos de Pío Gullón el 11 de enero de 1883. El ministro retiró

---

<sup>122</sup> Artículo 13 y 16 del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882.

<sup>123</sup> Artículo 17 del Proyecto de ley de 22 de diciembre de 1882.

un día más tarde el texto de su antecesor, y se dispuso a redactar un nuevo documento que estuviera en relación con la orientación general presentada en el anterior, pero que hiciera mayor hincapié en los aspectos de policía.<sup>124</sup> Conforme a lo anunciado previamente, este mismo mes se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley de Policía e Imprenta suscrito por Pío Gullón, que respondía a los principios fundamentales y conservaba igual carácter que la medida redactada por su predecesor. Sin embargo, la supresión de algunas prescripciones, la importante variación en los plazos introducidos y otras modificaciones que fueron plasmadas en la redacción definitiva de la Ley de 1883, bastaron para justificar “el trabajo de revisión y unificación” realizado en el nuevo texto. Entre las novedades introducidas, podemos resaltar la ampliación de la noción técnica de publicación y el cambio respecto a la persona que representaba legalmente el periódico, que pasaba a corresponder al director, y no al fundador o propietario del mismo como hasta entonces.<sup>125</sup> Además, se reducían las competencias de las autoridades gubernativas en los trámites de fundación de un periódico, y se perfilaba con mayor claridad la no interferencia de la ley en el ámbito penal, eliminando el artículo 13 del Proyecto de González y modificando la multa de cincuenta a doscientas cincuenta pesetas prevista en el artículo 21.<sup>126</sup>

Para evaluar esta nueva disposición, se nombró una Comisión mixta de políticos con diferente ideología, liderada por el ex ministro demócrata Manuel Becerra, que aprobó un Dictamen el 21 de febrero de ese año, que siguió fiel a las ideas y principios del proyecto de Pío Gullón. El texto legal presentado por la Comisión contenía algunas

---

<sup>124</sup> Congreso, 12 de enero de 1883, ministro de Gobernación, cif. 427, 429.

<sup>125</sup> La novedad respecto a la representación del periódico fue muy importante para los directores de los periódicos republicanos que, por su tendencia ideológica, sufrían más los rigores del control gubernamental, puesto que permitió la existencia de un director real o gerente y del director ficticio o de paja, que en último término, era el que asumía las responsabilidades penales ante las denuncias de las autoridades.

<sup>126</sup> Congreso, 12 de enero de 1883, ministro de Gobernación, cif. 427.



modificaciones “de escasa importancia” respecto al mismo, que se realizaron para dar una mayor precisión en la definición de las distintas clases de impreso y para enunciar de forma más clara el criterio seguido por el gobierno liberal en materia de imprenta, expresado por los dos ministros de gobernación anteriores, Venancio González y Pío Gullón, en sendos Proyectos de ley.<sup>127</sup> Para la corriente conservadora se trataba de un texto deficiente, confuso y extravagante, que no continuaba las líneas marcadas por el ministro de Gobernación, entre otros motivos porque no coincidía en su articulado. Sin embargo, tanto el presidente de la Comisión como el propio Gullón señalaron que, en ambos casos, el concepto fundamental era el mismo, y que solo existían diferencias de forma y variaciones de método y estilo.<sup>128</sup>

Conviene resaltar dos ideas sobre la concepción de la libertad de imprenta que se encontraba formulada en el preámbulo del Dictamen y que marcó la orientación política de la futura Ley de Prensa liberal. En primer lugar, se señalaba que la libertad de pensamiento expresada por la palabra hablada o escrita no dependía de la voluntad de los gobiernos, razón por la cual la legislación sobre imprenta debía limitarse a regular su libre ejercicio, y no impedir o poner obstáculos con disposiciones preventivas.<sup>129</sup> El objetivo perseguido por la Comisión era dignificar a la prensa, acabando con el sistema represivo aplicado por el partido conservador, y conseguir con ello una opinión pública sincera y libre.<sup>130</sup> En segundo término, siguiendo con la línea política marcada por Sagasta, y mantenida por González y Gullón, no se aceptaba la existencia de delitos de imprenta y, consecuentemente, tampoco se admitían las leyes especiales. Con esta

---

<sup>127</sup> Dictamen de la Comisión relativo al proyecto de Ley de Pío Gullón regulando el ejercicio del derecho a emitir ideas por medio de la imprenta. Congreso, 21 de febrero de 1883, Apéndice vigesimotercero al nº48, cif. 1.

<sup>128</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, ministro de Gobernación, cif. 1958/ Congreso, 16 de abril de 1883, Becerra, cif. 2001.

<sup>129</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Becerra, cif. 1958.

<sup>130</sup> Dictamen de 21 de febrero de 1883, cif.2.

norma quedaba derogaba la Ley de 1879 y se devolvía a los tribunales ordinarios y al Código Penal el conocimiento exclusivo de los delitos y faltas que se cometieran por este medio.<sup>131</sup> El dictamen, con algunas ligeras variaciones resultantes de los debates parlamentarios posteriores que se sucedieron en ambas Cámaras con motivo de la regulación de la nueva ley de prensa, constituyó la futura Ley de Policía de Imprenta de 1883.

Debido a la importancia adquirida por el documento, que desde su aprobación no estuvo exento de polémica, la minoría conservadora, por medio del diputado y miembro de la Comisión, Santos de Isasa, emitió un voto particular en el que se pedía la retirada del documento, al entender que no podía discutirse en una Cámara un asunto no resuelto en la otra.<sup>132</sup> El voto se encontraba fundamentado en el artículo 7 de la Ley de Relaciones entre los Cuerpos Colegisladores de 19 de Julio de 1837, por el que se entendía que, mientras estuvieran pendientes de discusión en el Senado tanto el Proyecto de ley sobre autorización para plantear el nuevo Código Penal, como el del establecimiento del jurado en materia criminal, presentados ambos por el gobierno, no era posible realizar propuesta alguna en el Congreso, ya que los dos trataban de la penalidad y los procedimientos que regían en los delitos cometidos por medio de la imprenta. Para el conservador Esteban Collantes, no solo era un texto ilegal por infringir la ley mencionada, sino que además, era prematuro y no podía ser discutido racionalmente.<sup>133</sup> La causa principal de la inoportunidad del dictamen alegada por el político conservador fue que la legislación de prensa quedaba sometida al Código Penal de 1870, considerado por los liberales como un conjunto de normas deficientes, en algunos casos, y exageradas en otros. No faltó de razón, Collantes razonaba que éstos, siguiendo su

---

<sup>131</sup> Dictamen de 21 de febrero de 1883, cif.2.

<sup>132</sup> Congreso, 10 de abril de 1883, voto particular al dictamen, cif. 1882.

<sup>133</sup> Congreso, 10 de abril de 1883, Esteban Collantes, cif. 1885.

línea argumentativa durante los debates previos, debían esperar a la reforma del Código que se estaba discutiendo en el Senado.

En el lado opuesto se encontraban los miembros liberales de la Comisión, para los que no existía incompatibilidad entre el proyecto de prensa y los presentados en la otra Cámara, ya que el dictamen tenía carácter reglamentario y sólo pretendía dar a conocer la persona responsable, y en ningún caso, como sostenían los conservadores, se refería a asuntos que entraran en conflicto con el Código Penal. Además, tal y como declaró Balparada, miembro de la Comisión, ellos preferían el Código Penal de 1870, “con todos sus defectos”, que la Ley de 1879 que se trataba de derogar con la nueva legislación, ya que “si nuestro proyecto es someter a la imprenta a la legislación común, es claro que nos importa poco saber si esa legislación está escrita en el Código de 1870 o en el de 1883”.<sup>134</sup> Como veremos en el siguiente capítulo, no le faltaba razón al partido liberal, ya que, efectivamente, regular los delitos de imprenta bajo el Código Penal era mejor solución que hacerlo bajo una legislación especial, aunque, si nos atenemos a los discursos realizados por los liberales, no era la solución ideal, ya que el Código de 1870 era deficiente en muchos aspectos y contenía numerosos defectos fruto de la precipitación de los legisladores a la hora de redactarlo.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Congreso, 10 de abril de 1883, Balparada, cif. 1895.

<sup>135</sup> ANTÓN ONECA, J., *El Código Penal de 1870*, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1970, pp. 240-241.



### **3. LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO DE LIBERTAD DE PRENSA: LEY DE POLICÍA DE IMPRENTA DE 1883**

#### **1. UNA LEY INNOVADORA: FIN DE LOS DELITOS ESPECIALES DE IMPRENTA**

Como veremos más adelante, a principios de los años ochenta del siglo XIX se promulgaron en varios países de Europa leyes de prensa y medidas de imprenta con carácter liberal, que propiciaron el nacimiento de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883. La nueva legislación, que estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley de Fraga de 1966, consiguió reflejar el ideario liberal en materia de prensa, reconociendo de forma real y efectiva la libertad de prensa hasta entonces negada por el gobierno conservador. Muchos historiadores han calificado la Ley de Imprenta de 1883 como la legislación que más garantías concedía a la libertad de imprenta en toda la historia del constitucionalismo español. En esta línea se manifiesta Gómez Reino, quién considera que la norma ha sido “la más liberal de todas las dictadas en nuestro país hasta la época presente”,<sup>136</sup> y el catedrático Desantes Guanter, quién afirma que esta legislación ha sido la de mayor perfección técnica de todas las promulgadas en la materia, “y la más consecuente con el principio de libertad que enuncia, conforme con el artículo 13 de la Constitución de 1876”.<sup>137</sup>

El carácter innovador de la ley había quedado patente en los discursos previos a su aprobación pronunciados por el presidente de la Comisión y por el ministro de

---

<sup>136</sup> SORIA, C., “La ley española de Policía de Imprenta de 1883”, *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. IV, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1982, p. 21.

<sup>137</sup> SORIA, C., “La ley española de Policía de Imprenta”, p. 21.

Gobernación. Para Becerra todas las disposiciones publicadas hasta entonces en materia de imprenta solo servían para “molestar a los escritores y hacer difícil la vida del periodismo”.<sup>138</sup> El político liberal confirmó que el gran alcance de la nueva norma era terminar con la autorización previa gubernamental y garantizar la manifestación del pensamiento a todos los individuos. Para Pío Gullón, la ley suponía un progreso considerable, ya que eliminaba los delitos especiales de imprenta, llevándolos a la legislación común sin más previsiones ni excepciones, algo que no había sido realizado por ningún gobierno hasta el momento.<sup>139</sup> Sin embargo, tal y como apunta Carlos Soria, era matizable que la Ley de 1883 tuviera la primacía de acabar con los delitos de imprenta, ya que, pese a que durante la mayor parte del siglo XIX se había regulado una legislación especial en materia de delitos de imprenta, antes de que se promulgara la misma existían rectificaciones y derogaciones que ya apuntaban a la línea marcada por la nueva norma. Un buen ejemplo de ello fue la Constitución de 1837, en cuyo artículo segundo se afirmaba que “la calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados”, al igual que el Decreto-Ley de 23 de octubre de 1868, que establecía que “al eliminar los tipos delictivos, la jurisdicción especial y las limitaciones previas, hace que desaparezcan los delitos y faltas de imprenta”.<sup>140</sup>

En virtud de esta idea, podemos afirmar que la importancia y novedad de esta legislación radicaba en que la misma terminaba con la mayoría de preceptos regulados en la Ley de 1879, impulsada por el partido conservador, y que dejaba atrás de manera definitiva los delitos especiales de imprenta. Con este objetivo, la Comisión que redactó la ley introdujo una cláusula derogatoria en la que se reconocía la supresión de “todas

---

<sup>138</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Becerra, cif. 2002.

<sup>139</sup> Senado, 5 de julio de 1883, ministro de Gobernación, cif. 2923; Congreso, 13 de abril, ministro de Gobernación, cif. 1966.

<sup>140</sup> SORIA, C., “La ley española de Policía e Imprenta”, p. 29.

las leyes y disposiciones especiales relativas a la imprenta”.<sup>141</sup> La redacción inicial del Proyecto de Gullón fijaba un marco normativo menor respecto al que finalmente se adoptó, ya que en él solo quedaban derogadas las disposiciones relativas a la imprenta que se opusieran a la legislación liberal. Por este motivo, no se puede afirmar que el cambio realizado fuera fruto de un descuido, sino que, al contrario, su deseo era transformar la regulación de la prensa y “matar cuanto antes la ley de imprenta vigente”.<sup>142</sup> La Comisión dejó claro que con la nueva legislación se rompía definitivamente con la ley de los conservadores para que ésta no “resucitara” jamás,<sup>143</sup> y de esta manera conseguir que la imprenta viviera en lo sucesivo al aire libre, en vez de “en un invernáculo al cuidado de un mal jardinero”.<sup>144</sup>

Conforme a esta idea se alineaba la minoría republicana, que consideraba que la Ley de 1879 empequeñecía y desnaturalizaba el derecho de imprimir y publicar las ideas y que hería la dignidad e independencia de los periodistas. Éstos, a su vez, sobrevivían bajo una existencia precaria a merced de indultos, que a veces les obligaba a “besar la misma mano que les había castigado”.<sup>145</sup> En oposición a la Comisión, el partido conservador presentó una enmienda a la cláusula derogatoria para que se aceptara la propuesta previa de Gullón por la que se derogaban solo las disposiciones relativas a la imprenta que se opusieran a la ley, ya que entendía que, tal y como estaba redactado el artículo por el ministro de Gobernación, la imprenta no estaba regulada por la legislación común, sino que, en materia de penalidad, quedaba sujeta a la ley de los conservadores.<sup>146</sup> El objetivo de la minoría conservadora consistía en demostrar que en la formulación del

---

<sup>141</sup> Artículo 21 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883. *Gaceta de Madrid*, 30 de julio de 1883, número 211, pp. 189-190. *Boletín de la R.G.L.J.*, Tomo LXXI (1883), pp. 154 y ss. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°15.

<sup>142</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Becerra, cif. 2002.

<sup>143</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Becerra, cif. 2002.

<sup>144</sup> Congreso, 10 de abril de 1883, Balparada, cif. 1894.

<sup>145</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi, cif. 2917.

<sup>146</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Enmienda de Esteban Collantes al artículo 21, cif. 2000.

dictamen la Comisión prescindía por completo del pensamiento que el gobierno tenía sobre la materia, plasmado en el Proyecto de ley previo. No obstante, con las actuaciones de los liberales cuando se encontraban en la oposición quedó patente que las mismas estaban orientadas a derogar de manera inmediata la “ley liberticida” de los conservadores, como se exteriorizó en el preámbulo del decreto aprobado por el partido liberal ocho días después de que Sagasta ocupara el cargo, que ya adelantaba: “tan pronto como se abran las Cortes propondremos su derogación”.<sup>147</sup>

Con la supresión de la legislación de 1879 y la adopción de esta novedosa ley se abría una forma de entender la política jurídica en materia de prensa caracterizada por garantizar el libre ejercicio del derecho a expresar ideas y no regular imponiendo límites.<sup>148</sup> En ésta, cobraba especial importancia el nombre de “policía” contenido en el título de la ley, que no había sido utilizado hasta ese momento para definir una norma de imprenta, y que hacía referencia al conjunto de facultades que para el ejercicio de un derecho individual se concedían a todos los ciudadanos, y para el cual la autoridad gubernativa se reservaba una intervención y vigilancia que no perjudicara a las atribuciones más permanentes y completas de los tribunales de justicia. En virtud de esta idea, la nueva ley se presentaba por el gobierno como un conjunto normativo de policía e imprenta cuyo objetivo último consistía en evitar que se burlara la acción de la justicia, para lo cual se establecían las reglas de publicación del periódico, el procedimiento para que llegara a conocimiento de las autoridades y la determinación de las personas que podían intervenir en la publicación del mismo.

---

<sup>147</sup> Senado, 4 de julio de 1883, Conde de Torreánaz, cif. 2898.

<sup>148</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Rute. cif. 1992.



## **2. NEGACIÓN DEL SISTEMA PREVENTIVO Y PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO**

Para entender las críticas que recibía la Ley de 1883 por los partidos de la oposición es necesario clasificar primero las distintas posturas existentes en aquella época respecto a la cuestión de la libertad de imprenta. En primer lugar, la corriente conservadora afirmaba que la base fundamental de una ley de imprenta era la aplicación de un sistema preventivo con el que quedaran establecidas las reglas para definir y fijar los límites del derecho, para lo que era necesario aplicar normas restrictivas con castigos muy rigurosos. En este esquema tenían un papel fundamental las legislaciones especiales, que eran ineludibles para llegar a la libertad absoluta, o por lo menos, para reformar las costumbres de la prensa. Así quedaba plasmado en la norma de 1879, que distinguía entre delitos que no eran cometidos por medios impresos, cuyo conocimiento se encomendaba a los tribunales ordinarios y al Código Penal, y los delitos de imprenta. Los conservadores entendían que algunos actos por sí mismos no eran sancionables, pero cuando los recogían y difundían los periódicos se convertían en delitos específicos que debían ser conocidos por los tribunales especiales, existiendo para ellos una penalidad concreta, que hacía recaer la condena sobre el periódico y no sobre el autor del escrito.<sup>149</sup> El partido liberal calificó a estos delitos especiales de imprenta como “creaciones ficticias de la imaginación absurda con que tratan de precaverse los gobiernos débiles enfrente de la opinión pública”,<sup>150</sup> con el único objetivo de establecer una entidad de delitos ficticios como defensa contra la acción de la opinión pública.

---

<sup>149</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Terrero, cif. 2920.

<sup>150</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balparada, cif. 1942.

Otro de los puntos fundamentales del pensamiento conservador recaía sobre la forma de solucionar el problema de la libertad de imprenta, ya que consideraba que debía hacerse por medio de los mismos escritores y no del gobierno, “adquiriendo aquellos hábitos de moderación, de prudencia y de elevación que deben tener siempre para discutir todo género de cuestiones”.<sup>151</sup> Para esta corriente, la eficacia de la legislación especial había quedado probada durante los últimos años debido a la considerable mejora de la prensa española, y sostenían que, de haber sido malas leyes, “no se hubiese producido ese progreso”.<sup>152</sup> Sin embargo, tomando una visión panorámica del lento y atrasado proceso de transformación de la prensa en España, conviene preguntarse si la misma no hubiese estado más adelantada en esta época de haberse aplicado otro sistema más racional, en vez del sistema preventivo conservador caracterizado por su excesiva dureza y severidad.

La segunda corriente se alineaba en oposición total a la defendida por los conservadores, y la apoyaban los republicanos, que se autodenominaban radicales por defender una gran libertad para los periodistas, al entender que la imprenta ejercía una influencia muy positiva sobre la opinión pública y era cátedra de buenas costumbres. Esta corriente afirmaba que tanto las leyes de imprenta como las normas especiales, eran innecesarias y que, por tanto, no tenía que haber más legislación de prensa que el Código Penal o los reglamentos correspondientes. Si se trataba la imprenta como industria entendían que bastaban las normas administrativas que regularan el ejercicio de todas las demás, mientras que si se consideraba un medio para emitir el pensamiento y propagar ideas bastaba el Código Penal para reprimir todas aquellas infracciones o

---

<sup>151</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Esteban Collantes, cif. 2004.

<sup>152</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Esteban Collantes, cif. 2003.

delitos que pudieran cometerse por medio de ésta.<sup>153</sup> Asimismo, consideraban la libertad de prensa como un derecho natural inherente a la condición del hombre como ser libre y racional, y la definían como el derecho de hablar por medio de los signos tipográficos. Para los republicanos la palabra poseía tres instrumentos para transmitirse y comunicarse: la lengua, la pluma y la imprenta, siendo ésta última la encargada de multiplicar y difundir la noticia “a aquellos que están demasiado lejos para poder oír los sonidos articulados de la voz”.<sup>154</sup> El partido liberal no estaba de acuerdo con la línea de pensamiento radical porque se sustentaba sobre la base errónea de que no podían cometerse delitos por medio de la prensa, ya que según los republicanos se podía abusar tanto de la palabra impresa como de la hablada, pero para los efectos del delito y la sanción penal la imprenta no era más que un instrumento como otro cualquiera.<sup>155</sup>

La última de las posturas era la liberal, mantenida por el partido que lideraba Sagasta, y defendida por los ministros de Gobernación, Venancio González y Pío Gullón, así como por la Comisión que redactó la legislación de 1883. Esta línea de pensamiento afirmaba la existencia de la libertad de prensa sobre dos ejes: el principio de responsabilidad y la negación de todo sistema preventivo. La primera garantizaba los intereses de la sociedad, lo que era contrario a la idea de que el derecho a escribir fuera absoluto e ilegislable, como defendían los republicanos, y que el periodista ejerciera una especie de “sacerdocio” que le hiciera invulnerable e implacable respecto a la libertad de imprenta. En segundo término, se rechazaba el sistema restrictivo establecido por los conservadores y se afirmaba que el derecho a emitir libremente las ideas por medios impresos se basaba en la carencia absoluta de toda clase de medidas preventivas que

---

<sup>153</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi, cif. 2920; Congreso, 14 de abril de 1883, Villalba Hervás. cif. 1978.

<sup>154</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi. cif. 2918.

<sup>155</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi, cif. 2918.

impidieran, dificultaran o retardaran considerablemente el ejercicio del mismo.<sup>156</sup> A pesar de que este era uno de los puntos más importantes del pensamiento liberal, los republicanos acusaron al gobierno de utilizar en la legislación de imprenta procedimientos y prácticas propios de los conservadores, como el sometimiento de la prensa a un régimen especial fundado en unas ordenanzas de policía. Para la postura radical la reglamentación de los periódicos bajo una ley de policía, como defendían los liberales, limitaba la completa libertad de los periodistas, que solo podía hacerse realidad aplicando un criterio amplio, con todas sus consecuencias. Conforme a esta opinión, Tocqueville declaró: “el poder de la imprenta es tanto mayor y peligroso, cuanto menor es el número de los que lo ejercen”.<sup>157</sup>

Otro de los fundamentos del pensamiento liberal era que el delito se consideraba un hecho punible independientemente de si adquiría publicidad por medio de la imprenta o no, ya que no existía más que una infracción que debía ser castigada por el Código Penal, cualquiera que fuera la forma en la que se manifestara.<sup>158</sup> Por tanto, a diferencia de los delitos especiales regulados en la norma conservadora, los que se cometían por medio de la imprenta eran infracciones de una ley que de antemano se consideraba como perjudicial para la sociedad, y no variaba, aunque sí lo hicieran los medios a partir de los cuales se cometía el delito. Sin embargo, el partido conservador aseguraba que la Ley de 1883 seguía siendo una norma especial de la imprenta como la redactada por ellos mismos, con la diferencia de que en ésta última se clasificaban las bases de la delincuencia y se identificaba a los responsables de las publicaciones. A su juicio, esto hacía que los escritores fueran a la cárcel por una causa insignificante, lo que

---

<sup>156</sup> Congreso, 14 de abril de 1883, Balparada, cif. 1980; Congreso, 16 de abril de 1883, Rute. cif. 1992.

<sup>157</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi. cif. 2918.

<sup>158</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi, cif. 2921.

perjudicaba a la prensa.<sup>159</sup> Esta afirmación no era del todo cierta, ya que en la legislación liberal no existía una penalidad especial para los periódicos, sino que se limitaba a regular el derecho a emitir las ideas en lo que se refería a la esfera gubernativa.<sup>160</sup>

En mi opinión, la postura liberal era la más correcta de las tres, porque con ella se evitaban todos los abusos a los que se prestaba el sistema preventivo conservador, caracterizado por practicar una política de censura restrictiva que coartaba la libertad y sancionaba a los diarios en función de los intereses políticos, utilizando los tribunales especiales como órganos del gobierno; y tampoco se aplicaba el criterio republicano que defendía la errónea idea de que la palabra hablada y escrita tenían el mismo efecto en la sociedad, sin tener en cuenta la cantidad de personas a las que podía llegar una y otra, lo que propiciaba que todos los delitos cometidos por medio de la imprenta quedaran en la más completa impunidad. En estos razonamientos, fundamentalmente, se hallaba cimentada la necesidad de la nueva ley liberal, que partía de la definición de la imprenta como un instrumento para la comisión del delito, razón suficiente para que no se castigara a la empresa periodística ni a la publicación, ni tampoco se dejara a la absoluta libertad de los periodistas el derecho a emitir ideas, ya que eso favorecía la difusión de artículos periodísticos anónimos dejando sin garantías a la sociedad. Tal y como afirmó Terrero, miembro de la Comisión y del partido liberal, la imprenta debía gozar de una libertad absoluta, sin que se coartara por medidas preventivas, pero como consecuencia natural de la misma debía estar sometida también a disposiciones que requirieran la responsabilidad por aquellas infracciones que se cometían por medio de la prensa.<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> Senado, 23 de abril de 1883, Marqués de Obovio, cif. 1741.

<sup>160</sup> Senado, 23 de abril de 1883, Pío Gullón, cif. 1746.

<sup>161</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Terrero, cif. 2921.

### **3. REMISIÓN DE TODOS LOS DELITOS DE IMPRENTA AL CÓDIGO PENAL**

Partiendo de estas premisas liberales, la innovación de la Ley de 1883 se basaba en garantizar el libre ejercicio del derecho sin centrarse en el criterio preventivo, estableciendo las condiciones para evitar la impunidad y las reglas necesarias para que fuera posible corregir con el Código Penal las faltas y delitos que por medio de la imprenta se cometieran. En virtud de esta idea, el control de la prensa pasaba de estar en manos del gobierno a dejarse a los tribunales ordinarios, de tal manera que todos los delitos de imprenta quedaban sometidos al Código Penal y se fijaban unos postulados que hacían posible un futuro prometedor para la prensa.

La primera de estas cuestiones, llevar todos los casos de imprenta a la autoridad judicial fue muy criticada por la minoría republicana que, pese a que reconocía que con la ley se facilitaba la libertad y se mejoraba notablemente la norma conservadora de 1879, consideraba que se estrechaba a su vez la esfera de criterio de los jueces y que se les privaba de funciones que debían tener.<sup>162</sup> Para esta corriente, no solo era necesario que los tribunales ordinarios gozaran de más competencias que las reconocidas en la ley liberal, sino que, además, para satisfacer plenamente las exigencias de justicia era necesario la intervención del jurado, al comprender que los delitos de imprenta tenían mucho de circunstanciales y que en ellos solían concurrir condiciones especiales, que aumentaban o disminuían su gravedad. Solo con el jurado se podía graduar la

---

<sup>162</sup> Congreso, 14 de abril de 1883, Villalba Hervás, cif. 1983; Senado, 5 de julio de 1883, Corradi. cif. 2920.

peligrosidad de una infracción cometida por medio de la palabra en cualquiera de sus formas, apreciando las circunstancias en el lugar y en el tiempo.<sup>163</sup>

El segundo de los objetivos de la nueva legislación era remitir todas las cuestiones de prensa al último Código Penal aprobado en 1870,<sup>164</sup> que era la norma de la cual se extraía la definición de los delitos y el establecimiento de las penas en materia de imprenta. Durante los debates parlamentarios anteriores a la aprobación de la Ley de Imprenta, todos los diputados y miembros del partido liberal mantuvieron un mismo criterio en torno a la remisión de ésta a un Código que consideraban excesivamente riguroso en algunas de las sanciones establecidas, y deficiente en otros casos en los que se trataban con “cierta dulzura” a los periodistas, pero encontraban éste como la mejor solución hasta que se aprobara uno nuevo, ya que aseguraban que la Ley de 1883 “puede avenirse con cualquier Código Penal que esté vigente”.<sup>165</sup> Acorde a esta idea, el partido liberal justificaba la aplicación del Código de 1870 por un tiempo determinado y pedía paciencia, porque creía que la reforma del mismo respondía mejor a las necesidades públicas modernas y estaban más en armonía con la Ley de Imprenta.<sup>166</sup> A su vez, el ministro de Gobernación entendía que la misma ley exigía una reforma completa, amplia y definitiva del Código, y hacía referencia a que con ambas disposiciones la situación de la imprenta iba a ser perfecta y próspera como ya lo era en otros países europeos.<sup>167</sup> Respecto a este punto, se oponía el conservador Esteban Collantes, que argumentaba que en ningún país del mundo se llevaban todos los delitos

---

<sup>163</sup> Senado, 4 de julio de 1883, Conde de Torreánaz. cif. 2900.

<sup>164</sup> Código Penal de 17 de junio de 1870. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Diccionario de la Administración Española. Compilación de la Novísima Legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la Administración pública*, IV edición, tomo II, Madrid, Administración, 1886, pp.516-570. Véase apéndice de la Tesis: ANEXO Nº2.

<sup>165</sup> Congreso, 10 de abril de 1883, Ruiz Martínez, cif. 1884.

<sup>166</sup> Senado, 4 de julio de 1883, Marqués de Arlanza, cif. 2903; Senado, 5 de julio de 1883, ministro de Gobernación, cif. 2924.

<sup>167</sup> Senado, 5 de julio de 1883, ministro de Gobernación, cif. 2924.

a la legislación común. Para el diputado conservador se tenía que comprobar primero si lo que se iba a establecer en España estaba dentro de las condiciones del país e iba a producir buenos resultados, y afirmaba que no había que limitarse a implantar una “innovación cualquiera”.<sup>168</sup>

Otro de los opositores a esta práctica era Pacheco, quién se alineaba con la postura radical, entendiendo que la Ley de Imprenta no llevaba a nada práctico ni conveniente y que se debían buscar otros procedimientos para mejorar y contribuir al desenvolvimiento de la prensa. El político planteaba con acierto que someter los delitos de imprenta al procedimiento común era algo más que incluirlos formalmente en el Código, significaba “reducirlos a las condiciones ordinarias del sistema penal” que se hallaba en vigor en el pueblo de que se tratara.<sup>169</sup> En esta línea, Pacheco mantenía que no era aceptable la inclusión de ciertos delitos por el simple hecho de estar tipificados en el Código, como ocurría con la pena de suspensión y supresión del periódico, ya que se oponía a la independencia de la prensa, la cual no podía vivir una existencia libre bajo la presión de medidas capaces de extinguirla. Tampoco aceptaba que los delitos de opinión se encontraran recogidos en la legislación penal, al ser contrarios al principio invocado por el partido liberal de castigar al autor y no al instrumento. En la misma línea, Corradi declaró que los delitos de opinión no se reconocían “en ningún pueblo libre del mundo civilizado”.<sup>170</sup> El senador republicano consideraba necesario trazar una línea divisoria entre los juicios de opinión y los que resultaban ser verdaderos casos de delincuencia, ya que una opinión podía ser más o menos acertada, pero por sí misma no

---

<sup>168</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Esteban Collantes, cif. 1968.

<sup>169</sup> PACHECO, F., “La legislación sobre la prensa. El proyecto de ley de Policía e Imprenta”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXII, 1883, p. 212. Reproducido en SORIA, C., “La ley española de Policía e Imprenta”, p. 23.

<sup>170</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi, cif. 2918.



constituía delito. Por tanto, para que la misma fuera condenable era indispensable no solo el hecho sino el deliberado propósito de hacer daño.

En conclusión, la postura adoptada por el partido liberal respecto a la remisión de los delitos al Código Penal tuvo gran relevancia, ya que consiguió acabar definitivamente con la discrecionalidad característica de los fiscales y tribunales especiales de imprenta. Sin embargo, ésta medida tendría que haber estado más meditada, no solo por las críticas justificadas y fundamentadas de Pacheco, que ponía de manifiesto la incongruencia de los liberales al rechazar ciertas prácticas en la Ley de Imprenta que sin embargo reconocía el Código Penal, sino porque a pesar de los grandes esfuerzos del gobierno liberal por explicar el previsible corto periodo de tiempo en el que estaría vigente el Código de 1870, finalmente, los distintos partidos no llegaron a ningún acuerdo para la reforma del mismo y éste se mantuvo en vigor hasta 1928. El hecho resulta ser muy significativo, especialmente porque, como señalábamos anteriormente, el Código era considerado por los propios redactores de la Ley de 1883 como ineficaz e inaplicable, por lo que se entendía que éste no era la mejor solución para la nueva legislación y, sin embargo, se convirtió en la norma basilar de la regulación de los delitos cometidos mediante la imprenta.

#### **4. FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS PARA CONFIGURAR LA LIBERTAD DE PRENSA**

La Ley de Policía de Imprenta contenía veintiún artículos que desarrollaban el derecho fundamental de emitir libremente ideas y opiniones que se encontraba recogido en el artículo 13 de la Constitución de 1876. Durante los meses previos a la publicación de la

norma, los distintos partidos discutieron acerca de los asuntos que consideraban más relevantes en materia de imprenta, construyendo, de esa manera, el sistema legal en el que consideraban que debía estar apoyada la libertad de prensa.

## **1. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPRESOS Y RESTRICCIÓN DE LA NOCIÓN DE PUBLICAR**

La legislación definía el impreso como la manifestación del pensamiento por medio de la imprenta, la litografía o por otro procedimiento mecánico de los empleados hasta ese momento. Un concepto con la “suficiente generalidad”,<sup>171</sup> como apuntaba Desantes, que refutaba la idea de que se trataba de una norma innovadora con vistas de futuro, en la que tenían cabida aquellos medios que fruto de progresos posteriores se empleaban para la reproducción de las palabras, signos y figuras sobre el papel, tela o cualquier otra materia.<sup>172</sup> Asimismo, la norma detallaba cada una de las formas que podían adoptar los distintos impresos: el libro debía reunir en un solo volumen doscientas o más páginas; un folleto tener más de ocho y menos de doscientas páginas en el mismo volumen; una hoja suelta no exceder de ocho hojas; y el cartel tenía que estar destinado a fijarse en los parajes públicos.<sup>173</sup> Por último, el periódico quedaba delimitado como toda serie de documentos que salían a la luz con título constante una o más veces al día, o por intervalos de tiempos regulares o irregulares que no excediesen de treinta.<sup>174</sup>

---

<sup>171</sup> SORIA, C., “La ley española de Policía de Imprenta de 1883”, p.24.

<sup>172</sup> Artículo 1 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883. *Gaceta de Madrid*, 30 de julio de 1883, número 211, pp. 189-190. *Boletín de la R.G.L.J.*, Tomo LXXI (1883), pp. 154 y ss. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°15

<sup>173</sup> Artículo 2 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

<sup>174</sup> Artículo 3 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

La clasificación y nomenclatura de los impresos contenida en los primeros artículos de la ley fue muy criticada por la minoría republicana, que veía en la misma los tintes del sistema preventivo conservador. Para esta corriente, la Constitución de 1876 no reconocía diferencia alguna entre las distintas formas que adoptaban los mismos, y eso bastaba para que si concurría un delito de imprenta, el modo en el que se cometiera el mismo no variara su penalidad. Corradi afirmó que “la forma, tamaño y proporciones no alteran la esencia y naturaleza del hecho punible, ni tienen la virtud para hacer variar la medida proporcional del castigo”.<sup>175</sup> La afirmación del diputado republicano no era del todo correcta, ya que no se podía justificar que supuestos tan dispares como cometer una infracción en un cartel que se divulgaba únicamente en un pueblo, o realizar la misma en un periódico de tirada nacional que pudiera llegar a muchos más ciudadanos tuviera reconocida la misma pena, por lo que era necesario establecer la condena en función del medio en el que se había cometido la transgresión. Así lo entendía la Comisión, que consideraba que se debía aplicar una penalidad superior cuanto mayor era la tirada de los periódicos, ya que la publicidad aumentaba considerablemente, convirtiendo el delito en más grave.<sup>176</sup>

La propia noción jurídica de la publicación de las distintas variedades de impresos existentes fue uno de los asuntos que más atención concitó en los debates parlamentarios previos a la aprobación de la nueva norma, debido, en gran medida, a la limitación que hacía la ley sobre este concepto, en relación con el Proyecto de Gullón. A los efectos de la legislación de 1883 se entendía publicado un impreso cuando se extraían más de seis ejemplares del mismo establecimiento en el que se había realizado

---

<sup>175</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi. cif. 2918.

<sup>176</sup> Senado, 4 de julio de 1883, Marqués de Arlanza. cif. 2902.

la tirada,<sup>177</sup> mientras que en el proyecto previo se producía cuando se “ordenaba” o se “permitía” que salieran los seis ejemplares. Como hemos señalado, la restricción en la delimitación de la difusión de impresos introducida por la Comisión no estuvo exenta de polémica, ya que no solo se hacía respecto al documento presentado por el ministro de Gobernación, sino que también se modificaba la Ley de 1879, que apelaba a la enumeración y concebía la publicación como cualquier acto que diera luz un impreso, como era la venta o repartición. El partido conservador criticó la limitación de la noción de publicar realizada por el gobierno liberal, ya que consideraba que la acción de extraer ejemplares podía hacerse por otro objeto.<sup>178</sup> Collantes presentó una enmienda en la que se afirmaba que la publicidad efectiva, real y actual era la condición necesaria e indispensable del delito de imprenta, y que, por tanto, existía publicación en los siguientes supuestos: cuando comenzara la repartición o se pusiera a la venta; cuando se fijara en un paraje público o en local o en establecimiento del mismo género o cuando se enviaban los impresos al correo.<sup>179</sup> El político y periodista conservador apoyaba su argumentación en que otros países europeos tenían opiniones semejantes a la suya, como en Italia y Bélgica, donde se consideraba acto de publicación el hecho de distribuir, poner en venta o exponer los escritos en lugares y reuniones públicas.

Para los miembros de la Comisión la definición planteada en la ley era concreta y precisa y no se prestaba a la arbitrariedad, y opinaban que la necesidad del artículo se encontraba en establecer un criterio para que la Administración y el gobierno tuvieran claro el momento en el que se establecía la presunción legal de que el periódico estaba

---

<sup>177</sup> Artículo 4 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

<sup>178</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Isasa. cif. 1945.

<sup>179</sup> Enmienda al artículo 4 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883. Congreso, 14 de abril. Discurso Esteban Collantes. cif. 1973.

publicado, lo que constituía el origen de la falta administrativa o del delito.<sup>180</sup> Frente al problema planteado por Collantes respecto a los supuestos en los que se producía daño pero solo se tiraban cinco ejemplares y no seis como exigía la ley, la Comisión señalaba que el acto debía ser perseguido como difamación o injuria, pero que no se consideraba un delito de imprenta. Autores como Carlos Soria sostienen que de haber sido aceptada la enmienda del partido conservador se habría dado mayor perfección técnica al artículo, consiguiendo solucionar los problemas doctrinales que trajo consigo la noción de publicar.<sup>181</sup> El mismo Collantes afirmaba que no se debía hacer “cuestión de amor propio” un asunto de doctrina, sino que se trataba de evitar los males que la confusión producía y redactar los artículos con más claridad.<sup>182</sup> A las críticas conservadoras se unieron las del bando republicano, que asemejaban la definición realizada en la ley con la del Real Decreto de 1867, de carácter represivo, y que declaraba que existía publicidad cuando el documento se comunicaba “a tantas personas”, o se habían repartido “cierto número de ejemplares”. Esa corriente consideraba que el único objetivo conseguido por la Comisión al redactar el apartado en esos términos era estrechar el razonamiento del juez, quién no podía aplicar su criterio racional.<sup>183</sup>

Respecto a las demás formas de impresos, se entendía efectuada la publicación de carteles cuando se fijaba alguno en cualquier paraje público, el libro cuando llevara pie de imprenta, y los folletos cuando, además de ese último requisito, se depositaran tres de ellos en el gobierno de la provincia o en la delegación especial gubernativa o en la alcaldía de la población en la que viera la luz en el acto de la publicación. Las mismas condiciones se establecían para la publicación de una hoja suelta o cartel, y además se

---

<sup>180</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balaparada. cif. 1937.

<sup>181</sup> SORIA, C., “La ley española de Policía de Imprenta”, p. 25.

<sup>182</sup> Congreso, 14 de abril de 1883, Esteban Collantes. cif. 1977.

<sup>183</sup> Senado, 4 de julio de 1883, Sr. Conde de Torreánaz. cif. 2899.

requería, a excepción de aquellos exclusivamente comerciales, artísticos o técnicos, una declaración escrita y firmada, en la que se especificara el nombre, apellidos y domicilio del declarante y la afirmación de que la persona se hallaba en el pleno uso de los derechos civiles y políticos.<sup>184</sup>

Por medio del diputado Carvajal, la minoría republicana presentó una enmienda a ese apartado en la que suprimía la exigencia del declarante de hallarse en pleno uso de derechos civiles y políticos,<sup>185</sup> interpretando con ello que la Comisión había cometido una contradicción al privar del derecho personal de emitir ideas por medio de la imprenta a hombres que, según las leyes, gozaban de todos los demás derechos individuales garantizados en la Constitución.<sup>186</sup> Villalba Hervás declaró que no había ningún motivo justificado para exigir esta condición para escribir, que en España no se alcanzaba hasta los veinticinco años de edad, cuando existían ejemplos en el Código Penal que se oponían a esta idea, como establecer una responsabilidad criminal para el mayor de nueve años y la responsabilidad plena al llegar el ciudadano a los dieciocho. Igualmente, éste político criticó que la Comisión reconociera una gravedad especial para publicar una hoja suelta cuando la misma no era un “arma terrible” que comprometiera la tranquilidad pública y pusiera en peligro la existencia de las instituciones, ya que si éstas se propagaban en sociedades tranquilas tendrían un efecto de “fósforo arrojado en el agua”.<sup>187</sup> Asimismo, el partido republicano consideró que el apartado redactado era inconstitucional, al ser incompatible con el artículo trece de la Constitución, que reconocía el derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones a todo español sin excepción, entendiéndose, también, comprendidos aquellos que no gozaban de sus

---

<sup>184</sup> Artículo 5, 6 y 7 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

<sup>185</sup> Según el artículo 320 del Código Civil vigente, los derechos civiles se adquirirían plenamente a los 23 años, y los derechos políticos a los 25 años.

<sup>186</sup> Congreso, 14 de abril de 1883, Villalba Hervás. cif. 1979.

<sup>187</sup> Congreso, 14 de abril, Villalba Hervás, cif. 1979.

derechos civiles y políticos, y para esa corriente no se podía dar al gobierno la discrecionalidad de privar arbitrariamente a un mayor o menor número de personas. Aunque iba en contra de su doctrina, consideraban preferible lo contenido en la Ley de 1879, que requería el permiso de la autoridad para publicar una hoja suelta, antes que negar en absoluto y sin recurso ese mismo derecho a ciudadanos que gozaban de otros muy importantes.<sup>188</sup>

En sentido contrario, la Comisión pensaba que estaba justificada la especial condición reconocida en la ley a la hoja suelta y al cartel como medida de protección a la sociedad frente a los posibles abusos, ya que por su naturaleza no tenían la garantía que ofrecía un fundador, un propietario o un editor, y por medio de ellas era posible cometer todos los delitos de imprenta. Para Balparada, miembro del gobierno liberal, el objeto de exigir esa declaración, que se hacía simultáneamente con la publicación y no con anterioridad, era hacer efectiva la responsabilidad de un individuo que disfrutara de la integridad de sus derechos civiles y políticos, y que tuviera una personalidad completa, digna y decorosa, que eran los aspectos que componían la “honorabilidad” de una persona, lo que para el diputado era incompatible cuando se tenía menos edad a la exigida en la ley.<sup>189</sup> Él mismo pensaba que la opinión era consistente, ya que la fórmula adoptada en la legislación liberal se encontraba recogida en muchas disposiciones de Europa, y además sostenía que el precepto constitucional tenía que aplicarse de manera absoluta porque él consideraba que existían casos en los que los españoles, por circunstancias muy especiales, no podían ejercer su derecho en unas condiciones determinadas y en un momento dado, al no tener suficiente responsabilidad para

---

<sup>188</sup> Congreso, 14 de abril de 1883, Villalba Hervás, cif. 1979.

<sup>189</sup> Congreso, 14 de abril de 1883, Balparada. cif. 1983.

publicar hojas sueltas o carteles, si bien esto no suponía una negación de su condición de españoles.<sup>190</sup>

Es preciso reconocer que con el citado precepto se daba un gran paso hacia la libertad de prensa, ya que el antecedente más inmediato era la previa censura reconocida por el partido conservador, por la que se privaba de manera radical a todos los españoles del derecho a expresar el pensamiento por medio de la hoja suelta o el cartel. En este caso concreto no se negaba a todos los españoles sin excepción, sino que solo se exigía una mínima garantía para proteger los derechos de los ciudadanos de los posibles ataques que pudieran sufrir estos medios, ya que, tanto la hoja suelta como el cartel eran formas de impreso en los que resultaba muy difícil que alguien respondiera del delito cometido. En esta línea, Balparada declaró lo siguiente: “nosotros reconocemos cuando más la necesidad de no dar a todo el mundo, cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su estado social, la libertad de perturbar la sociedad, la libertad de atacar, protegido por la impunidad que puede darle el anónimo, la honra y la dignidad de las personas, injuriándolas o calumniándolas”.<sup>191</sup>

## **2. SUPRESIÓN DE LA LICENCIA PREVIA Y DEL DEPÓSITO PREVIO**

Al contrario de lo que ocurría en la Ley de 1879, que exigía una licencia previa para editar periódicos, la redacción definitiva de la nueva legislación liberal suprimía la obligación de exigir una autorización administrativa, y como requisito para la fundación del periódico solo señalaba la necesidad de ponerla en conocimiento de la primera autoridad gubernativa de la localidad en la que se iba a publicar cuatro días antes de

---

<sup>190</sup> Congreso, 14 de abril de 1883, Balparada, cif. 1982.

<sup>191</sup> Congreso, 14 de abril de 1883, Balparada, cif. 1983.



comenzar su difusión.<sup>192</sup> Del mismo modo, se solicitaba una declaración escrita y firmada por el fundador en la que manifestara hallarse en pleno uso de los derechos civiles y políticos y expusiera el título del periódico, el nombre, apellidos y domicilio de su director, los días de aparición del mismo y el establecimiento en el que se fuera a imprimir, a la que debía acompañarse un recibo que acreditara que éste se hallaba al corriente en el pago de la contribución de subsidio, o cualquier otro documento que probara que estaba abierto y habilitado para funcionar.

Pese a que con ese artículo se daba un gran paso hacia la libertad de prensa, debido en gran medida a la supresión de la autorización previa, la minoría republicana, por medio de Carvajal, interpuso una enmienda en la que se exigía que se modificara el precepto, respecto a la obligación de que el particular estuviera en pleno uso de los derechos civiles y políticos, por la exigencia de que éste no se hallase sujeto a interdicción civil, ni a tutela ni a curaduría ejemplar. Añadiendo, además, que no se reclamara que por medio de un recibo debiera acreditarse el pago de la contribución. Partiendo de la línea de argumentación radical por la que se consideraba la imprenta como una industria, Villalba Hervas defendía que no era razonable exigir más condiciones para fundar un periódico que las establecidas en las leyes generales que regulaban el ejercicio de la misma en España. De igual manera, razonaba que resultaba ilógico llevar la Ley de Imprenta a la regulación del recibo que establecía el pago de la contribución, ya que esa competencia correspondía a los reglamentos generales administrativos, y no entendía por qué se imponía la declaración para los periódicos y no se hacía lo propio para cualquier folleto o libro.<sup>193</sup> Otra de las cuestiones que planteaba la enmienda recaía sobre el derecho de los extranjeros para fundar y publicar periódicos en España como

---

<sup>192</sup> Artículo 8 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

<sup>193</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Villalba Hervás. cif. 1991.

cualquier español, en aplicación del artículo 2 de la Constitución, que facultaba a los mismos para establecer en nuestro país cualquier industria o ejercer cualquiera profesión.<sup>194</sup> La Comisión solo consideró esto último, y reconoció en toda su integridad el precepto constitucional por el que los extranjeros tenían derecho a fundar y publicar periódicos.

Distanciándose una vez más de la ley de los conservadores, y tal y como ocurría con la supresión de la licencia previa, la nueva norma tampoco recogía la figura del depósito previo en lo que respecta al acto de publicación de los periódicos. Éste se realizaba mediante una simple comunicación a la autoridad gubernativa por medio de la presentación de ejemplares en el gobierno de la provincia, en la delegación especial gubernativa o en la alcaldía del pueblo en el que se publicaba. Además de la fundación de un periódico, se debía dar conocimiento a la autoridad gubernativa en la transmisión de la propiedad de un periódico,<sup>195</sup> y también cuando variara el establecimiento en el que el diario imprimía se debía manifestar que existían todas las condiciones exigidas. En lo que respecta al cese del periódico, se producía cuando por sentencia ejecutoria se privaba al representante legal del uso de sus derechos civiles y políticos y transcurrían cuatro días desde su notificación sin que un nuevo representante cumpliera los requisitos previstos para la fundación del mismo.

La comunicación a la autoridad gubernativa exigida en la ley no estaba bien vista por todos los partidos, y algunas opiniones en contra del apartado hicieron replantearse a la Comisión si el mismo era compatible con las funciones naturales concedidas a los tribunales, o si, por el contrario, menoscaba sus competencias en beneficio de los

---

<sup>194</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Villalba Hervás, cif. 1991.

<sup>195</sup> Artículo 12 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

gobernadores, como así defendían los republicanos, que criticaban la actitud del gobierno de “echar mano” de los gobernadores cuando su “deseo” era someter todos los asuntos de imprenta a la autoridad judicial.<sup>196</sup> Al igual que los republicanos, Pacheco consideró que el gobierno se contradecía con el apartado, ya que uno de los puntos clave en los que se fundamentaba la nueva Ley de Imprenta era en dotar de más funciones al poder judicial y, sin embargo, con la disposición se reconocía una competencia nueva a los gobernadores. Para el autor resultaba comparable la comunicación exigida en la nueva norma, que hacía que los tribunales solo enjuiciaran ciertas cuestiones si así lo indicaba el gobierno, con la existencia del depósito previo regulado en la Ley de 1879, que requería el envío de tres ejemplares a las autoridades para el control de las mismas.<sup>197</sup> El buen razonamiento de Pacheco se debía poner en relación con la línea de argumentación seguida en todo momento por los liberales, que preferían los órganos de justicia ante la desconfianza que les creaba la actuación de los gobernadores. Por tanto, pese a que con el artículo se suprimía definitivamente el depósito previo, nos topamos, nuevamente, con el recelo del gobierno liberal a desprenderse de forma definitiva de todas las funciones en materia de imprenta que debían corresponder a las autoridades judiciales, manteniendo así ciertas competencias discrecionales que dañaban la independencia y la objetividad con la que el gabinete liberal pretendía regular las cuestiones de imprenta.

---

<sup>196</sup> Senado, 4 de julio de 1883, Conde de Torreánaz, cif. 2899.

<sup>197</sup> SORIA, C., “La ley española de Policía de Imprenta”, p. 27.

### **3. EL DIRECTOR: NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIÓDICO. RESPONSABILIDAD CONTEMPLADA EN EL CÓDIGO PENAL**

La Ley de 1883 daba un salto cualitativo en materia de representación legal del periódico y, olvidando la pauta seguida por el partido conservador, reconocía al director de la publicación, y no a la empresa, como la persona que debía responder ante las autoridades y tribunales de las infracciones que se cometieran por medio de la imprenta, nota recogida más tarde en la Ley de Prensa de 1966. En defecto del director, era el propietario quien ejercía de representante, sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal que tuvieran los redactores o colaboradores del periódico.<sup>198</sup> El fundador se consideraba propietario mientras no transmitiera a otro la propiedad,<sup>199</sup> y en los casos en los que una sociedad legalmente constituida fundara un periódico o adquiriera su propiedad, la representación legal correspondía al gerente que la misma hubiera designado, quien gozaba de los mismos derechos y estaba sujeto a iguales responsabilidades civiles y criminales que si era propietario único del periódico. Para la Comisión, los directores y gerentes eran las personas más importantes de los diarios en el orden intelectual, el primero por la intervención superior que tenía en el propio periódico, y el segundo por la vida activa que hacía al frente de éste, razones suficientes para elegirles como representantes del mismo.<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> Artículo 9 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

<sup>199</sup> La obligación de comunicar a la autoridad correspondiente el nombre del director de toda publicación periódica no se limitaba al tiempo de dar principio la publicación de un periódico, sino que se extendía a todos los cambios que sucesivamente se verificaran en la dirección. STS 16 de mayo de 1884. *Gaceta de Madrid*, 14 de Octubre de 1884, p. 228.

<sup>200</sup> Senado, 5 de julio de 1883, ministro de Gobernación, cif. 2927.

Del mismo modo, la ley precisaba que los directores debían hallarse en el pleno uso de sus derechos civiles y políticos, y que la suspensión de éstos les inhabilitaba para publicar o dirigir el periódico.<sup>201</sup> En un primer momento, los propietarios de las publicaciones tenían reconocidas las mismas condiciones que los directores. Sin embargo, la Comisión suprimió a éstos de este apartado, al aprobar una parte de la enmienda presentada por Carvajal.<sup>202</sup> La función que tenía encomendada el director como representante del periódico era la de entregar, en el acto de su publicación y autorizados con su firma, tres ejemplares de cada número y edición en el gobierno de la provincia, en la delegación especial gubernativa o en la alcaldía del pueblo en el que se publicara el mismo. Tal y como ocurría con los proyectos de ley anteriores, redactados por los ministros de Gobernación, se exigía una condición especial a los directores de los diarios de Madrid, que debían presentar, además, otros tres ejemplares con las mismas formalidades en el Ministerio de la Gobernación.<sup>203</sup>

La representación legal y la responsabilidad en materia de imprenta eran dos de los puntos que más polémica suscitaba entre los distintos partidos de la oposición, que a pesar de tener idearios diferenciados, coincidieron en criticar al gobierno por los mismos aspectos. Por una parte, los conservadores observaron que con este artículo el gobierno realizaba una reforma del Código Penal, ya que en el mismo no se encontraba mencionada la figura de los editores, cuando sí se establecía la responsabilidad de éstos en el Código. Así lo creía Isasa, quien afirmó que debía reconocerse entidad a la empresa como culpable del delito y no hacer responsables a aquellos que “no tienen

---

<sup>201</sup> Tal y como veremos en la segunda parte de la investigación, en virtud de la Circular de 28 de Diciembre de 1888, los militares tenían prohibido ser fundadores o directores de los periódicos, así como redactores de los periódicos políticos. *Diario Oficial del Ministerio de la Guerra*, 28 de Diciembre de 1888, número 285, pp. 883-884.

<sup>202</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balparada, cif. 1933.

<sup>203</sup> Artículo 10 y 11 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

participación, ni conciencia, ni intención en la comisión del delito”,<sup>204</sup> como eran los propietarios o directores, porque “todo lo que no sea hacer recaer sobre ella y no sobre el escritor la penalidad es deficiente, es injusto”.<sup>205</sup>

Los republicanos, por su parte, entendían que la disposición estaba influenciada por las prácticas del sistema preventivo, ya que resucitaba la figura del editor responsable, considerada por esta corriente como una “víctima expiatoria”,<sup>206</sup> destinada a sufrir las consecuencias de culpas ajenas, y que se encontraba desacreditada en los países donde aún se conservaba. En la misma línea mantenida por los conservadores, entendían que se invadía la jurisdicción del Código, al señalar cuáles eran las personas responsables de los asuntos de imprenta. Y, tal y como lo opinaba Isasa, el Conde de Torreánaz consideraba que era mejor castigar a una colectividad representada por la empresa mercantil, en lugar de sancionar al “inocente y desgraciado que mediante un salario sufría todas esas penas”.<sup>207</sup> Así quedó reflejado en la enmienda presentada por Carvajal, en la que se señalaba que en ningún caso el director o el propietario podían ser responsables criminalmente por el contenido de los escritos que se insertaban en sus periódicos.

Si atendemos a la argumentación mantenida por el partido liberal durante el transcurso de los debates, las críticas vertidas por ambas corrientes no se encontraban correctamente fundamentadas, porque el objetivo del gobierno al redactar el precepto no era establecer la responsabilidad criminal ni fijar penalidad alguna. Así lo señalaron en numerosas ocasiones, en las que se afirmaba que esa competencia se reservaba de

---

<sup>204</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Isasa, cif. 1935.

<sup>205</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Isasa, cif. 1936.

<sup>206</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Corradi, cif. 2919.

<sup>207</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Conde de Torreánaz, cif. 2926.

manera íntegra al Código y a los tribunales, que eran los que con criterio propio e independencia absoluta de la administración pública y del gobierno, debían resolver sobre la materia. Al contrario de lo que aseguraban los partidos de la oposición, lo único que perseguía el gabinete liberal con este artículo era delimitar la representación del periódico, tratando de adoptar una medida de precaución y de policía que evitara los inconvenientes que acarrearían los delitos que se cometiesen por medio de la imprenta de forma anónima, ya que con la misma existían personas que por norma estaban obligadas a responder de los mismos. A pesar de no encontrarse recogido expresamente en la Ley de 1883, la doctrina liberal admitía que tanto el autor como el cómplice, el encubridor y los demás partícipes del delito debían ser los responsables de las infracciones cometidas por medio de la imprenta, ya que eran los únicos que tenían conciencia de haberlas realizado, por lo que en ningún caso se podía admitir el castigo de la empresa periodística.<sup>208</sup> Se trataba, por tanto, de perseguir el delito por la persona que lo perpetraba y recurrir a los cómplices cuando no se encontrara a la misma, sin hacer uso de la medida de suspensión para un periódico, que significaba poco o nada, y que, tal y como remarcaba la corriente liberal, era un privilegio a favor de las empresas ricas, a las que la medida no les afectaba, al no ver disminuido su capital.<sup>209</sup>

Los conservadores, sin embargo, no veían con buenos ojos este artículo y creían que, una vez más, el sector liberal reducía las competencias otorgadas a las autoridades gubernativas en la Ley de 1879. En este caso concreto la función de los gobernantes quedaba reducida a una simple declaración previa o simultánea que los autores de la publicación les hacían a fin de asegurar la responsabilidad penal, ya que en esos supuestos la autoridad quedaba sin facultad para “ver, oír ni entender acerca de la

---

<sup>208</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balparada. cif. 1938.

<sup>209</sup> Senado, 5 de julio de 1883, Terrero, cif. 2930.

manera y forma como se haga esa manifestación”.<sup>210</sup> Para el partido conservador esta función de recibir la documentación, junto con la de imponer multas recogida en el artículo 19 de la Ley de 1883, eran las únicas competencias reconocidas a las autoridades, quienes habían visto como con la legislación liberal mermaba su capacidad de actuación en materia de imprenta, y sin embargo, resultaba ser uno de los objetivos perseguidos por el nuevo gobierno para llegar a alcanzar la verdadera libertad.

#### **4. TUTELA JUDICIAL DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y PROHIBICIÓN DE ESCRITOS IMPRESOS EN EL EXTRANJERO**

La Ley de Imprenta reconocía el derecho de rectificación, que obligaba a todo periódico a insertar las aclaraciones que le dirigieran cualquiera autoridad, corporación o particular que se considera agraviado por alguna publicación hecha en el mismo, o a quienes se atribuyeran hechos falsos.<sup>211</sup> Este derecho se originaba tanto por la atribución de hechos inexistentes o desfigurados como por la consideración subjetiva de que las informaciones difundidas por los periódicos fueran ofensivas. Una pequeña variación respecto al artículo 11 de la Ley de 1879 era que, cuando procedía de una autoridad, el escrito de aclaración debía insertarse en el primer número que se publicara, y no en los tres primeros, como se ordenaba en la ley de los conservadores, aunque se adoptaba este plazo cuando procedía de un particular o corporación. La aclaración debía hacerse en plana y columnas iguales y con el mismo tipo de letra que el artículo que motivaba el derecho y era gratuita siempre que la misma no excediera del duplo de líneas de éste, pagando el exceso el comunicante al precio ordinario que tenía consignado el periódico. Asimismo, en caso de ausencia, imposibilidad o autorización, cabía la posibilidad de

---

<sup>210</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Isasa, cif. 1933.

<sup>211</sup> Artículo 14 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.



ejercitar el derecho de rectificación por los cónyuges, padres, hijos o hermanos de la persona agraviada, o por los herederos en caso de que ésta falleciese.<sup>212</sup>

En el supuesto de que el comunicado no se incluyera en el plazo fijado, la autoridad o particular podía demandar al representante del periódico en juicio verbal que versara exclusivamente sobre la obligación de introducir el comunicado. Si la sentencia era condenatoria se exigía pagar las costas al demandado y se mandaba insertar el escrito en uno de los tres primeros números que se difundieran después de la notificación, imponiéndose al representante una multa de trescientas pesetas cuando el comunicado procediera de la autoridad.<sup>213</sup> Si el director, obligado por sentencia condenatoria dictada por el juez, se negaba a incluir la notificación, se sancionaba a éste por delito de desacato a la autoridad judicial.<sup>214</sup>

Por su parte, el impresor de todo periódico tenía derecho a exigir que le fueran entregados firmados los documentos originales, de los que sólo podía hacer uso, o bien para presentarlos ante los tribunales cuando éstos lo requirieran o en defensa de su impreso cuando afectara de alguna manera a la publicación del mismo. Por tanto, en ningún caso éste podía usarse contra la voluntad del autor, sino solo cuando tenía como objetivo eximirse de responsabilidad.<sup>215</sup> La nueva norma liberal mejoraba así lo contenido en la ley de los conservadores y reconocía que toda la tutela del derecho de rectificación tenía carácter judicial, con lo que la Comisión se desmarcaba de la redacción inicial del proyecto de Gullón, que establecía que toda negativa a publicar el escrito enviado por cualquier autoridad, era penado gubernativamente con multa de

---

<sup>212</sup> Artículo 15 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

<sup>213</sup> Artículo 16 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

<sup>214</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balparada, cif. 1939-1940.

<sup>215</sup> Artículo 17 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

cincuenta a doscientas cincuenta pesetas, lo que suponía una fuente de abusos inagotable para el poder público. Resulta paradójica la opinión de los conservadores, que calificaron como “agravio” que el injuriado tuviera que acudir a los tribunales a defender su honor.<sup>216</sup> Balparada, como miembro de la Comisión, incrédulo por la opinión de los conservadores, afirmó que desconocía que fuera “una calamidad” presentarse ante los órganos de justicia, mientras que el conservador Isasa ratificó la postura señalando que “en todos los tiempos” lo había sido.<sup>217</sup>

Otra de las cuestiones reguladas en la legislación eran los supuestos en los que se consideraba un periódico como clandestino: cualquier impreso que no llevara pie de imprenta o lo llevase supuesto; toda hoja suelta, cartel o periódico que se publicara sin cumplir los requisitos exigidos en la ley, o el periódico que lo hiciera antes o después del plazo de cuatro días establecido en la misma; y la hoja suelta, cartel o periódico cuando resultara falsa la declaración hecha respecto a las condiciones exigidas en la ley. Siguiendo con la línea argumentativa mantenida por la minoría conservadora durante los debates parlamentarios, en los que acusaba al gobierno de haber realizado una reforma del Código Penal, la simple alusión a la hoja suelta, cartel o periódico se consideraba ya una transformación del mismo.<sup>218</sup> El presidente de la Comisión recalcó que todas las aclaraciones vertidas en la norma se realizaban a efectos administrativos, y que no existía inconveniente en efectuar las declaraciones que se creyesen oportunas al respecto, ya que eso mismo se plasmaba en la ley de los conservadores, donde se establecía que las publicaciones clandestinas eran aquellas que no llevaban pie de imprenta.<sup>219</sup>

---

<sup>216</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Isasa, cif. 1932.

<sup>217</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balparada, cif. 1939.

<sup>218</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balparada, cif. 1933.

<sup>219</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balparada, cif. 1940.

Uno de los asuntos que resultó objeto de análisis en los debates previos a la aprobación de la ley fue la prohibición por acuerdo del Consejo de Ministros de introducir y circular impresos, libros, folletos, hojas sueltas y periódicos escritos en idioma español o extranjero, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución, que sólo amparaba a los españoles para emitir libremente sus ideas, y no a las publicaciones editadas en el extranjero. La norma hacía referencia a las publicaciones en español, pero no establecía nada acerca de los escritos en otro idioma, motivo suficiente para que Estaban Collantes presentara una enmienda exigiendo la inclusión tanto de las publicaciones españolas como de las extranjeras. El político conservador no entendía los motivos por los que la Ley de Imprenta prohibía la circulación de documentos impresos en el extranjero en idioma español y no hacía lo propio cuando estaban en otra lengua, ya que no existía razón para no considerar criminal aquello “dada la grande ilustración que va adquiriendo nuestro país, algún daño pueden causar las publicaciones en dicho idioma”.<sup>220</sup> Además, se planteaba la cuestión de la responsabilidad acerca del delito en los periódicos extranjeros, ya que el autor del delito desaparecía, y siguiendo el criterio adoptado por la Comisión, se debía buscar en España una persona responsable del documento.<sup>221</sup>

La Comisión defendía una línea totalmente opuesta a la de los conservadores, ya que afirmaban que en España la publicidad de los periódicos escritos en idioma extranjero era muy reducida, “por mucha que sea la imaginación de Esteban Collantes para suponer que aquí se cuentan por millares los que conocen los idiomas extranjeros”.<sup>222</sup> Si tenemos en cuenta el contexto histórico en el que se enmarcaron los hechos, el razonamiento del gobierno no era del todo cierto. Una lectura superficial de la guerra de

---

<sup>220</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Esteban Collantes, cif. 1998.

<sup>221</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Esteban Collantes, cif. 1998.

<sup>222</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Rute, cif. 1999.

Cuba, un conflicto narrado tanto por los diarios peninsulares como por los rotativos estadounidenses y por otras cabeceras europeas, nos lleva a deducir que la prensa que se publicó en un idioma que solo llegaban a comprender “perfectamente” algunas personas resultó nula y no llegó en ningún momento a alarmar a la población española. Sin embargo, el alto índice de analfabetismos existente en este período es una clara muestra de que solo bastaban unos “pocos” que tradujeran y leyeran en voz alta las noticias para transmitir las mismas al resto de los ciudadanos. Además, no hay que dejar de lado que los periodistas sí eran, en su mayoría, personas ilustradas y comprendían otros idiomas, por lo que, en función de su ideología e intereses, divulgaban en español informaciones extranjeras que consideraban importante que conociera la sociedad.

La minoría republicana reprochó también la redacción de este apartado por no delimitarse los supuestos de los países en los que se hablaba el idioma español, como ocurría con las Antillas,<sup>223</sup> clave en la guerra colonial donde los diarios cubanos fueron duramente censurados. Además, se cuestionaban acerca de la facultad del gobierno de prohibir la entrada y circulación de los periódicos que se escribían en estos países por el simple hecho de estar en el mismo idioma. Para la Comisión no era posible hacer una excepción para las naciones donde se hablaba en español, en perjuicio de aquellas con idiomas distintos, porque eso se prestaba a la arbitrariedad.<sup>224</sup> Llama la atención que se defina como “arbitraria” esa decisión, cuando la justificación al rechazar la de los conservadores era que no se entendía el idioma.

---

<sup>223</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Villalba Hervas, cif. 1999.

<sup>224</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Rute, cif. 1999.

## **5. SEPARACIÓN DE PODERES: DESCONFIANZA EN LA AUTORIDAD GUBERNATIVA Y AUMENTO DE COMPETENCIAS PARA LA AUTORIDAD JUDICIAL**

Como hemos visto a lo largo del análisis que estamos realizando de la Ley de Imprenta liberal, uno de los aspectos que más preocupaba a los partidos de la oposición y al propio gobierno era el papel que desempeñaba la autoridad gubernativa en la nueva norma, considerado por los conservadores como uno de las cuestiones capitales en las que diferían el Dictamen de la Comisión y el Proyecto de ley de Pío Gullón. Este punto resultaba especialmente conflictivo con aquellas infracciones que no constituían delito con arreglo al Código Penal, pero que eran corregidas gubernativamente con las mismas penas que éste señalaba para las faltas cometidas por medio de la imprenta.<sup>225</sup> Los debates no se centraron en la facultad que se otorgaba a los gobernadores, sino en que sobre la misma cabía la posibilidad de apelación, previo depósito de su importe, ante el juez de instrucción, quién resolvía sobre la procedencia o improcedencia de la multa siguiendo la tramitación de las alzas en los juicios verbales de faltas, en los que la autoridad se representaba por el fiscal municipal.<sup>226</sup> Esta era la variación más importante introducida por la Comisión respecto al Proyecto de Gullón y a la Ley de 1879, ya que en ambos se realizaba ante la Audiencia provincial y no ante el juez instructor, como ocurría con la nueva norma. El objetivo de los liberales pasaba por conseguir un castigo inmediato, una corrección breve y eficaz, que buscara el interés de la parte, y en segundo lugar, no dejaba las sanciones inapelables, supremas o

---

<sup>225</sup> Artículo 19 de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883.

<sup>226</sup> En virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se podía apelar al juez de instrucción una condena impuesta por las autoridades para que éste resolviera sobre la procedencia o no de la misma, sin que se alterara la naturaleza jurídica de la sanción que tenía carácter gubernativo. STS 6 de junio de 1893. *Gaceta de Madrid*, 12 de enero de 1894, p.13; Refrendado en STS 23 de diciembre de 1896. *Gaceta de Madrid*, 4 de febrero de 1897, p. 93.

indiscutibles. De esta manera, se mantenían las competencias de los gobernadores por la inmediatez de su aplicación, pero se permitía que los afectados tuvieran el derecho de acudir a la autoridad judicial.

Las críticas hacia el apartado 19 se centraban en dos aspectos: la reforma que con el artículo se hacía del Código Penal y la restricción de competencias de la autoridad gubernativa. Sobre el primer punto, el partido conservador recalcó que el precepto incurría en otra invasión grave de las competencias del Código, ya que, no solo eliminaba las faltas de imprenta contenidas en éste, sino que además se establecía un procedimiento nuevo en el que se otorgaba al perjudicado, periódico, o autor de la hoja suelta o cartel al que se le impusiera la corrección gubernativa, el derecho a apelar una disposición de un gobernador de provincia ante el juez municipal.<sup>227</sup> El gobierno matizó que la Ley de Imprenta solo se ocupaba de las infracciones prevenidas en la norma que no estaban señaladas en el Código, ya que para el resto quedaba vigente éste.<sup>228</sup>

Del mismo modo, se criticaba que la autoridad gubernativa se sometiera a lo que un juez municipal determinara con posterioridad, cuando entendían que “por su condición” solo cabía la posibilidad de que se juzgara por el Tribunal Supremo.<sup>229</sup> A juicio de los conservadores, el artículo incurría en dos defectos: el primero de ellos era de redacción, y se refería a la afirmación sobre que “de la imposición gubernativa de multas puede apelarse en ambos efectos ante el juez de instrucción”, que se consideraba contradictorio si la idea del partido liberal era que la declaración de la autoridad se llevara a debido cumplimiento a pesar de existir una apelación ante el juez de instrucción. Para el poder conservador la apelación debía ser o bien “en ambos efectos”,

---

<sup>227</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Isasa, cif. 1933.

<sup>228</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Balparada, cif. 1940-1941.

<sup>229</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Isasa, cif. 1934.

y por tanto no se lograba llevar a cumplimiento mientras el superior resolviera, o en “un solo efecto”, y entonces podía exigirse el pago o el depósito o el cumplimiento del acuerdo de un particular.<sup>230</sup>

El segundo defecto del apartado considerado muy grave por esta corriente correspondía al orden de las jerarquías y de las atribuciones. Para Isasa, tal y como quedaba redactada la ley de imprenta, las autoridades gubernativas tenían dos intervenciones: en la primera adoptaban una actitud pasiva “de recibir manifestaciones, buenas o malas, verdaderas o falsas, sin tener que curarse siquiera ni de abrir un registro”,<sup>231</sup> la segunda era la facultad de imponer penas correccionales por faltas cometidas contra las disposiciones de la norma, función que se arrebatava a la autoridad gubernativa y se entregaba al juez de instrucción. Teniendo en cuenta las competencias encomendadas a las autoridades, el político conservador no consideraba razonable ni la posibilidad de apelar las decisiones gubernativas ante el juez de instrucción ni que la misma se realizara en un juicio de faltas que terminara con la sentencia de éste sin posibilidad de recurso de casación, como ocurría en los juicios de faltas ante el Tribunal Supremo.<sup>232</sup> En estos términos se expresaba Isasa al criticar el artículo analizado: “¿Es materia gubernativa ésta de que se ocupa el artículo diecinueve? Pues defienda el Sr. Ministro de Gobernación las atribuciones de las autoridades gubernativas ¿Es materia jurídica? Pues no introduzcáis vosotros que tanto habláis de legislación común y de igualdad de derecho, un juicio especial, y dad las garantías ordinarias y generales de esta clase de juicios”.<sup>233</sup>

---

<sup>230</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Isasa, cif. 1951-1952.

<sup>231</sup> Congreso, 12 de abril de 1883, Isasa, cif. 1934.

<sup>232</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Isasa, cif. 1952.

<sup>233</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Isasa, cif. 1952.

Por tanto, para los conservadores existía desprestigio de la autoridad gubernativa, no porque se apelaran las resoluciones del gobernador ante la autoridad judicial, ya que eso mismo ocurría en la ley redactada por éstos en materia de concesión de permisos para la publicación, sino porque ellos entendían que se recurría una multa impuesta por el gobernador ante una autoridad inferior en categoría dentro del orden judicial. El razonamiento adoptado por este partido no tenía en cuenta que la base fundamental del régimen en España era la distinción de poderes, en la que un juez de cualquier categoría tenía bastante altura en la sociedad para juzgar los actos de un gobernador civil y de un ministro. Tal y como expuso Balparada, la superioridad o inferioridad debía determinarse dentro de un mismo orden, por lo que carece de sentido considerar inferior un juez de instrucción respecto al gobernador de provincia, ya que entre poderes diferentes no cabía establecer comparación de esa clase.<sup>234</sup>

Al contrario de lo que sostenía el partido conservador, no podía ser criticable que se restringieran las facultades de las que habían gozado hasta entonces las autoridades gubernativas, ya que por eso mismo la ley de prensa redactada por los liberales era diferente al resto de las disposiciones de imprenta publicadas hasta entonces. Con ella se daba un paso hacia delante y se trataba de llegar a una verdadera libertad, dando prioridad a los tribunales de justicia en materia de prensa, en detrimento del poder público. La tendencia liberal giraba en torno a esta idea, ya que su objetivo fundamental al redactar la ley era ensanchar el círculo de atribuciones de los órganos judiciales, cuyas actuaciones eran menos arbitrarias y más objetivas que las administrativo-políticas. Balparada consideraba que cuando un asunto se encontraba sometido a las

---

<sup>234</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Balparada, cif. 1998.



apreciaciones políticas “no nos inspira más confianza el gobernador y las autoridades gubernativas que las del orden judicial”.<sup>235</sup>

Gutiérrez de la Vega, del partido republicano, introdujo otra cuestión a debate acerca de las relaciones que existían entre la autoridad gubernativa y el poder judicial. En la misma línea que los conservadores, señalaba que el artículo no tenía sentido, porque se autorizaba a los gobernadores para castigar las faltas a la vez que se admitía que del fallo de un superior se podía apelar para su revocación o modificación ante el juez de instrucción, que era inferior en el orden jerárquico. Este político razonaba que el recurso de alzada se daba siempre a partir del fallo de un inferior a un superior y dentro del mismo orden jerárquico, pero nunca de un gobernador a un juez de instrucción.<sup>236</sup> Por este motivo, los republicanos requerían de la Comisión un criterio fijo en el asunto, tomando uno u otro camino, pero que no hiciera intervenir en el castigo de una simple falta, en primer término a las autoridades gubernativas y luego en alzada a los tribunales de justicia, porque se trataba de una infracción que podía ser sancionada tanto por unos como por otros. Partiendo de este razonamiento, entendían que era más natural que las infracciones no constitutivas de delito se corrigieran por la autoridad judicial, sin hacer intervenir al gobernador, ya que como defendía el partido liberal, existía una desconfianza generalizada hacia la independencia de los funcionarios gubernamentales.<sup>237</sup>

Con motivo de las peticiones de los republicanos, el gobierno señaló que no existía inconveniente en dar otra forma al artículo para que éste no llevara a confusión, y en vez de indicar “de la imposición gubernativa de multas podrá apelarse en ambos efectos

---

<sup>235</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Balparada, cif. 1996.

<sup>236</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Gutiérrez de la Vega, cif. 1994, 1997.

<sup>237</sup> Senado, 4 de julio de 1883, Conde de Torreánaz, cif. 2899.

ante el juez de instrucción”, que dijese “de la imposición gubernativa de multas podrá recurrirse ante el juez de instrucción”, quedando suprimidas las palabras “apelarse” y “en ambos efectos”.<sup>238</sup> Al respecto de las atribuciones, primero a los gobernadores y en segundo término a los tribunales, el gobierno reconocía que pasar de un poder a otro no se aconsejaba por los “principios estrictos de la ciencia”, pero que teniendo en cuenta el escepticismo existente ante la autoridad gubernativa era preferible someter el asunto al poder judicial, “que siempre ha merecido a la prensa y a todo el mundo más confianza que la autoridad gubernativa”.<sup>239</sup>

En este sentido, no había que perder de vista que las cuestiones a las que se referían estos preceptos tenían carácter eminentemente político y que la alzada de los actos del gobernador ante el ministro de Gobernación no inspiraba bastante garantía a el director, quien iba a sufrir la multa, debido a la gran influencia que, normalmente, tenía sobre éste la circunstancia de que se trataba de un periódico amigo o enemigo. Aun así, el político liberal creía que, pese a que el asunto tratado tenía una índole jurídica, el gobernador debía ser el primero en conocer de la materia, porque se le encomendaba la función de velar por la marcha política de la prensa, ya que ante ella se realizaba la publicación de periódicos. Por este motivo, para el gobierno no era necesario que existiera “rebajamiento” en que fuera la autoridad judicial quien conociera de estas cuestiones. Nuevamente, quedó demostrado como, a pesar de que los propios liberales consideran que el poder público no resultaba transparente ni independiente, mantuvieron “pequeñas” competencias a las que, como veremos en los próximos capítulos, se convirtieron en un recurso constante para tener bajo control la información de la prensa.

---

<sup>238</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Balparada, cif. 1995.

<sup>239</sup> Congreso, 13 de abril de 1883, Balparada, cif. 1996.

## **6. RECHAZO DEL SOBRESEIMIENTO DE CAUSAS PENDIENTES E INEFICACIA DE LA LEY EN LAS COLONIAS ESPAÑOLAS**

Villalba Hervás, miembro del partido republicano, presentó una propuesta de artículo adicional a la Ley de Imprenta en la que solicitaba que todas las causas instruidas de oficio por delitos cometidos por medio de la prensa fueran canceladas en el estado en el que se hallaran a la publicación de la misma. El añadido se fundamentaba en la “opresión y tiranía” de la legislación de 1879,<sup>240</sup> que había dejado asuntos pendientes que debían quedar anulados si realmente se querían eliminar todos los efectos producidos por la misma, como así lo exteriorizó en repetidas ocasiones el gobierno durante los debates parlamentarios.

A pesar de que el mayor deseo de la Comisión era que todos los procesos que se habían constituido por delitos de imprenta con arreglo a la ley de los conservadores se anularan,<sup>241</sup> el gobierno rechazó la enmienda presentada por los republicanos, porque no creía conveniente la suspensión de aquellos que se habían formado por delitos cometidos por medio de los periódicos y que se estaban juzgando en tribunales ordinarios. Para la Comisión no era ni el sitio ni el momento para realizar esta petición y por ello instó a los partidos a que en el Congreso, una vez aprobada la ley, se presentara una proposición en la que se solicitase por medio del indulto, o el procedimiento que se considerara conveniente, el fin de las causas. El ministro de Gracia y Justicia, Romero Girón, confirmó que el gobierno no tenía inconveniente en que los procesos por delitos cometidos conforme a la ley de los conservadores concluyeran, y se comprometieron a

---

<sup>240</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Adición de Villalba Hervás, cif. 2006.

<sup>241</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Becerra, cif. 2006.

satisfacer la petición del partido republicano.<sup>242</sup> Asimismo, afirmó que, una vez aprobada la nueva norma y quedando derogada la ley especial, el poder judicial conocería del asunto y, en el caso de que analizando el delito en la legislación común éste no estuviera penado, dictaría un auto de sobreseimiento libre, quedando el asunto concluido.<sup>243</sup>

Respecto a la eficacia de la nueva legislación en otros territorios, el 14 de abril se presentó una enmienda en el Congreso, y otra con el mismo objeto en el Senado,<sup>244</sup> en la que se proponía un artículo adicional a la norma para que la misma tuviera eficacia en Cuba y Puerto Rico a los treinta días de su publicación en la Gaceta de Madrid. Una de las razones que se invocaban era que el artículo 89 de la Constitución autorizaba al gobierno para aplicar a las provincias ultramarinas las leyes publicadas en la Península, con las modificaciones que estimara oportunas, teoría que era aceptada por el partido liberal de Sagasta. A su favor alegaban, también, que el 23 de mayo de 1879 regía en Cuba y Puerto Rico el propio Código Penal de la Península, con las modificaciones que se habían entendido convenientes, “de suerte que en él están sancionados los derechos y castigados los delitos a que la ley de policía de imprenta se refiere”.<sup>245</sup>

Además, el político y periodista Betancourt declaró que la isla de Cuba había estado largo tiempo privada del derecho a emitir sus ideas y opiniones, condenada al silencio y a presenciar toda clase de abusos y de injusticias, y que la Ley de Imprenta liberal resultaba muy positiva para el país. El gobierno, sin embargo, no tenía claro que la ley

---

<sup>242</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, ministro de Gracia y Justicia, cif. 2008.

<sup>243</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, ministro de Gracia y Justicia, cif. 2009.

<sup>244</sup> Enmienda del Betancourt al dictamen de la Comisión. Congreso, 14 de abril de 1883. Apéndice octavo al nº87, cif.1/ Adición del Sr. Güell y Renté al dictamen de la Comisión. Senado, 20 de junio de 1883. Apéndice duodécimo al nº146, cif.1.

<sup>245</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Betancourt, cif. 2010.

beneficiara a los territorios extranjeros, porque en los mismos no se daban las mismas condiciones sociales y culturales que estaban teniendo lugar en España, y por ello rechazaron la enmienda por medio del ministro de Ultramar, que manifestó la imposibilidad del gobierno de aceptar el artículo, ya que se debía caminar con mucha prudencia “antes de plantear leyes que podrían agravar el mal en vez de corregirlo”.<sup>246</sup>

---

<sup>246</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, ministro de Ultramar, cif. 2012.





## **SEGUNDA PARTE**

### **CONSOLIDACIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y PRIMERAS TRABAS GUBERNAMENTALES A SU EJERCICIO (1883-1898)**





# **1. DESARROLLO DE UN CLIMA PROPICIO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE IMPRENTA**

## **1. AFIANZAMIENTO DEL TURNISMO SUSTENTADO POR EL CACIQUISMO ESTATAL Y TERRITORIAL**

En el difícil matrimonio entre la Ley de Imprenta de 1883, que reconocía la libertad de prensa, y el sistema de poderes de la Restauración, influyeron de manera determinante los acontecimientos políticos y sociales desarrollados durante todo este período. Especialmente relevante para la eficacia y puesta en práctica de la legislación resultó la alternancia de partidos, característica de la época, que condicionó el reconocimiento, más o menos, restrictivo de la libertad. Cánovas fue el primero en asumir la presidencia del gobierno tras la publicación de la ley liberal, llevando a cabo una política que, como veremos más adelante, trajo consigo la instalación de trabas en materia de prensa. Su mandato se prolongó hasta 1885, año en el que se produjo la primera prueba de fuego para la Restauración borbónica con ocasión del vacío constitucional creado por el fallecimiento de Alfonso XII. Durante ese año, crucial para la consolidación del régimen, quedó definitivamente instaurado el sistema político del turno de partidos gracias al acuerdo conocido como “Pacto de El Pardo” celebrado entre Cánovas y Sagasta, líderes del partido conservador y del partido liberal, respectivamente.

Con la muerte del Rey, el 25 de noviembre de 1885, dio comienzo la Regencia de María Cristina, con un segundo gobierno liberal liderado por Sagasta, que permaneció en el poder cinco años, y en el que España vivió una de las pocas etapas de estabilidad política de la Restauración. En el llamado “Parlamento Largo” se consolidó un régimen

liberal-parlamentario caracterizado por el desarrollo de una serie de figuras jurídicas contenidas en las Constitución de 1876, que ampliaron el marco legal de expresión de los ciudadanos. En materia de prensa, la más importante de todas ellas fue la libertad de asociación reconocida en 1887, con la que las fuerzas políticas e ideológicas contrarias al sistema encontraban más posibilidades de reunión y expresión frente a determinadas políticas o situaciones con las que no comulgaban. Esta circunstancia tuvo su consecuencia directa en los periódicos, que eran utilizados por los grupos de la oposición como medios en los que plasmar sus ataques a la Administración pública. Concretamente, durante los cinco años que abarcó el mandato fusionista, la prensa se mantuvo especialmente crítica con la mala gestión administrativa del gobierno central en la isla de Cuba, contra la que lucharon ferozmente algunas cabeceras españolas, convirtiéndose en una fuente inagotable de críticas.<sup>247</sup>

En 1890, poco después de aprobarse la Ley Electoral de 26 de junio de 1890, que reconocía el sufragio universal masculino, y tras una dura campaña periodística liderada por *El Imparcial* contra la gestión gubernativa de Sagasta, se produjo el cambio político.<sup>248</sup> El partido conservador liderado por Cánovas recogió el testigo gubernamental con la voluntad de aceptar las leyes liberalizadoras aprobadas por los liberales, especialmente el reconocimiento del sufragio recientemente implantado. En la

---

<sup>247</sup> Entre los ataques vertidos en la prensa acerca de esta cuestión, en 1887 cobró especial importancia un suceso destapado por *El Resumen*, periódico representativo del partido liberal reformista del que era líder el general López Domínguez, que dio a conocer una conversación privada mantenida entre el recién nombrado capitán general y gobernador de Cuba, Manuel Salamanca, y sus amigos, en la que éste afirmaba que su principal objetivo en la isla era destapar la trama administrativa que por parte de los funcionarios españoles se estaba gestando. Según el diario, la intención del capitán era adquirir pruebas sobre la irregular situación y denunciar ante el Parlamento a las autoridades implicadas, independientemente de la ideología que profesaran las mismas. El escándalo descubierto por *El Resumen* no sólo provocó la destitución del general Salamanca, sino que dejó muy tocado al gabinete liberal. GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo Español*, pp. 505-506.

<sup>248</sup> Rafael Gasset, director de *El Imparcial* por aquel entonces, firmó varias editoriales en las que denunció la indecisión del gobierno liberal para llevar a cabo cualquier iniciativa, y exigió la dimisión del jefe de Gobierno. SÁNCHEZ ILLAN, J.C., *Prensa y política en la España de la Restauración*, p.65.

práctica, sin embargo, continuó la sistemática falsificación de la voluntad de los electores en las elecciones, produciéndose una extensión mayor del caciquismo característico de la Restauración. Este sistema electoral fraudulento se mantuvo inalterable durante todo el régimen, lo que permitió proteger el turno de partidos y conservar el sistema sin fisuras aparentes, dando el aspecto de una fingida sociedad democrática. La alternancia gubernamental entre conservadores y liberales en el gobierno central produjo, a su vez, el relevo en las administraciones locales y provinciales, ya que el entramado caciquil se desarrollaba en todo el territorio español, lo que influyó de forma determinante en la puesta en práctica de la libertad de prensa.

En lo que respecta a la sociedad, el clima de paz con el que se vivía en España desde la publicación de la Ley en 1883, especialmente notorio durante el mandato largo de Sagasta, se vio alterado por una sucesión de manifestaciones desarrolladas por organizaciones obreras con mucha fuerza propagandística, y por una serie de huelgas, como la de los telegrafistas de 1892, que fueron creando en la burguesía y en la opinión pública un estado de alarma y de preocupación por la llamada “cuestión social”.<sup>249</sup> Además, en este período se produjo la consolidación organizativa del socialismo, y la de sus medios específicos de propaganda, entre los que destacaba *El Socialista* fundado en 1886. Por su parte, el republicanismo se encontraba en una situación de debilidad política, ya que el turnismo característico de la época apartaba a todos los grupos de la oposición. Esta marginación en la escena política, especialmente en las elecciones de algunos municipios en los que había tenido un papel predominante en épocas anteriores, perjudicó su crecimiento y desarrollo, lo que, unido a los problemas internos que se

---

<sup>249</sup> Se entiende por “cuestión social” al conjunto de problemas políticos, económicos y sociales que afectaban al bienestar de las clases obreras en la sociedad capitalista de finales del siglo XIX. MONTERO F., *Historia de España. Restauración y Regencia. La España canovista (1875-1902)*, Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 98.

habían gestado desde comienzos de la Restauración, provocó la fragmentación del republicanismo en varias formaciones. En cualquier caso, y a pesar de las distintas tendencias republicanas existentes durante estos años, el movimiento en su conjunto se configuró como una de las principales fuerzas opositoras al sistema, y utilizó la tribuna de la prensa situada en el Congreso y sus propias publicaciones, no solo para propagar sus ideas y fundamentos políticos, sino, especialmente, para expresar su impotencia y luchar contra el régimen monárquico. Como ya hemos apuntado, la vida política y periodística de un partido eran cosas inseparables en la época, especialmente en aquellos grupos que estaban fuera del sistema de turnos ideado por Cánovas, en los que el periódico se convertía en un medio fundamental, que certificaba la vida de la formación política, extendía su influencia y la aupaba al poder.<sup>250</sup>

En 1893, año en el que dio comienzo un nuevo mandato liberal, se sucedieron una serie de acontecimientos que perturbaron de manera notoria a la clase política y a la sociedad. Durante este año se produjo un recrudecimiento del terrorismo anarquista con el atentado al Liceo de Barcelona del 7 de noviembre de 1893, así como el inicio de la contienda internacional en Melilla. Estos conflictos marcaron una nueva etapa de conmoción en la sociedad e influyeron de manera determinante en las medidas adoptadas por el gobierno durante este período, y por ende, en la política de control informativo. En 1895 se formó un nuevo gobierno conservador, que apenas duró dos años debido al asesinato de Cánovas, ideólogo del sistema de la Restauración. Tras la muerte del líder conservador en 1897, y con el agravamiento de la situación en Cuba, se precipitó un cambio en la presidencia del gobierno, que fue asumida por Sagasta, quién

---

<sup>250</sup>ÁLVAREZ JUNCO, J., *La ideología política del anarquismo español (1868-1910)*, Madrid, Siglo Veintiuno, 1976, pp. 60-63.

gestionó los últimos años del siglo XIX, marcados por la guerra acontecida en Cuba contra EEUU.

## **2. EL PROGRESIVO AUMENTO DE LA INFLUENCIA POLÍTICA Y SOCIAL DE LA DE LA PRENSA**

El reconocimiento de la libertad de prensa en la Ley de Imprenta liberal propició el desarrollo de un periodismo brillante en el que los periodistas adquirieron un gran protagonismo social. La prensa se transformó y se desarrolló de forma extraordinaria, asumiendo un papel fundamental como vigilante del poder ejecutivo, judicial y legislativo. Los periódicos, junto con los nuevos medios de comunicación desarrollados en este período (telégrafo, teléfono y libros populares), incidieron en el control político y la integración de los ciudadanos, quienes adoptaron una actitud más activa en los asuntos públicos que la que habían desempeñado años atrás. Para Martínez Cuadrado: “la mejor prensa política y no política, los mejores escritores políticos y literarios, la mejor creación hispánica de nuestro tiempo nace inequívocamente del hontanar abierto por la Ley de 1883”.<sup>251</sup>

A partir de la entrada en vigor de la legislación liberal, la influencia de los periódicos fue incuestionable, tanto por la presión ejercida sobre el poder, resultando decisivos en los cambios del turno de partidos, como por conseguir materializar la verdadera opinión pública que en años anteriores había sido silenciada. La credibilidad de la que gozaba la prensa se plasmaba en dos vertientes: la política, ejerciendo un influjo real sobre las decisiones gubernamentales, y otra social, como medio de información de reconocido

---

<sup>251</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *La burguesía conservadora (1874-1931)*, Madrid, Alianza Universidad, 1973, p. 67.

prestigio para la población española. Además, cumplía con una función de transmisión cultural entre las clases más bajas de la sociedad, ya que, a pesar del analfabetismo de la población española, era muy frecuente la lectura del periódico en voz alta.<sup>252</sup> Por estos motivos, la prensa se erigió como la gran fuerza aliada del gobierno de la Restauración, y a su vez, como la gran enemiga del régimen, lo que se traducía en una vigilancia, a veces exagerada, por parte de los mandatarios y autoridades gubernativas. Los gobernadores focalizaban su control en las publicaciones periódicas, al entender que éstas podían llegar a las clases populares, más “peligrosas” que otros grupos sociales inofensivos que no hacían peligrar la unidad y estabilidad del sistema. Por ello, el poder público ejecutó un control más benévolo sobre los libros, que eran considerados más exclusivos y dirigidos a las élites sociales.

## **1. EL FLORECIMIENTO DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN EEUU Y LOS PAÍSES EUROPEOS INDUSTRIALIZADOS**

La modernización que se empezaba a desarrollar en España se produjo dentro un período histórico en el que la prensa europea vivía una etapa de florecimiento gracias a la Segunda Revolución Industrial, que propició el desarrollo de los medios de información. El progreso de las nuevas técnicas informativas trajo consigo la bajada del precio del papel, la creación de agencias de información y la racionalización de la empresa de prensa basada en la mayor rentabilidad de la publicidad. Las nuevas características de la prensa se vieron beneficiadas, también, por la expansión de las libertades públicas y la fuerte regresión del analfabetismo, lo que posibilitó un gran

---

<sup>252</sup> El profesor J.A.Gallego ha afirmado que la imagen de los obreros descansando en la zanja mientras escuchaban como uno de ellos leía en alto el periódico constituía un episodio muy habitual durante la Restauración. En PASCUAL MARTÍNEZ, P., *Escritores y editores en la Restauración Canovista (1875-1923)*, tomo III, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992, p. 687.

aumento en el mercado de lectores. Por primera vez en la historia, el periódico se convirtió en un medio real de información a gran escala, un instrumento de poder, no para los partidos políticos, sino para movilizar a los ciudadanos.

La nueva concepción de la prensa de masas hizo necesario que los gobiernos europeos se plantearan nuevas políticas de control informativo. Hay que tener en cuenta que, a principios del siglo XIX, la mayoría de los sistemas europeos se basaban en normas represivas para la prensa, que enumeraban un gran número de delitos cometidos por medio de la imprenta, susceptibles de sanción, y perseguidos de forma sistemática por la policía. Recogiendo las palabras de Anthony Smith, en 1815 la libertad de prensa en Europa era casi un sueño, mientras que a partir de 1880 este derecho fundamental se convirtió en una realidad.<sup>253</sup> En la mayoría de los países industrializados, a excepción de EEUU y Gran Bretaña, donde en 1850 la libertad de prensa ya estaba establecida, la década de los 80, conocida como “la edad de oro de la prensa”, significó la germinación de un nuevo sistema de libertad en el que los directores podían desarrollar sus funciones sin miedo a las represalias gubernativas. Esto se tradujo en la publicación de nuevas leyes de imprenta, como fue el caso de Alemania, Francia y España, o en la derogación de medidas que oprimían a la prensa, como sucedió en Inglaterra, donde fue suprimido el depósito previo obligatorio para los directores, que había estado vigente desde 1819.

### **1. La libertad de crítica estatal en EEUU y las restricciones por obscenidad**

En la configuración de los regímenes liberales de prensa europea influyó de manera incuestionable el sistema liberal informativo estadounidense, en el que el periódico se

---

<sup>253</sup> SMITH, A., “La Presse est Libre...” *The History of the Book in the West: 1800-1914* (volume IV), Oxford, ASHGATE, 2010, p.101.

convirtió en una herramienta fundamental para la construcción de la Nación, mucho antes que en otros países europeos. Durante el período en el que se enmarca la Ley de Policía de Imprenta de 1883, la política de libertad de prensa estaba plenamente definida por una serie de principios jurisprudenciales y normas legales. Estas tomaron como base la Primera Enmienda de 1791 a la Constitución de los EEUU de 1787, que garantizaba la libertad de prensa, prohibiendo al gobierno la adopción de medidas que coartaran la misma.<sup>254</sup> Además, durante estos años, se produjo también la incorporación de la Decimocuarta Enmienda, añadida en 1868, quedando equiparadas las autoridades de cada estado al Gobierno federal respecto a la prohibición de negar a sus ciudadanos la libertad, sin “el debido proceso legal”, y protegiendo sus privilegios e inmunidades de la infracción gubernativa.

Cabe destacar que, en contraste con otros países occidentales, en EEUU quedó constancia del valor que se le daba a la libertad de prensa, por las concesiones que, tanto el Tribunal Supremo como los funcionarios públicos, hicieron en favor de la misma.<sup>255</sup> Entre los principios que configuraron el derecho a emitir libremente las ideas se encontraba la protección a la crítica gubernativa, lo que garantizaba la libertad de los rotativos estadounidenses respecto a las opiniones contrarias sobre la gestión política.

Sin embargo, bajo esta protección a la libertad de criticar la actuación estatal, se

---

<sup>254</sup> Concretamente, la Primera Enmienda a la Constitución de los EEUU establecía: “El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al Gobierno la reparación de agravios”. Algunos autores han sostenido que la redacción de la Primera Enmienda no garantizaba de forma directa el derecho a la libertad de imprenta, sino que lo hacía de forma indirecta, prohibiendo la elaboración de leyes que restringiesen la libertad de prensa y de expresión. Por tanto, era una forma indirecta de garantizar estas manifestaciones de libertad. MARTÍNEZ GUERRA, A., “Aeropagítica y su influencia en la Primera Enmienda Norteamericana. Un estudio a través de la jurisprudencia”, *Historia y comunicación social*, vol. 7, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 121-145, p. 128.

<sup>255</sup> La libertad de imprenta estadounidense era muy importante debido a la gran importancia que tenía la prensa en el país, que actuaba como un poder efectivo y contribuía a la crítica y al debate público. Además, los rotativos estadounidenses se beneficiaban de una postura jurisprudencial que defendía un criterio más amplio acerca de la libertad de prensa, que en el resto de países occidentales. MUÑOZ MACHADO, S., *Libertad de prensa y procesos por difamación*, Barcelona, Ariel, 1987, p. 88.



establecieron ciertas categorías de menor valor, que podían ser castigadas, como la obscenidad, las declaraciones falsas y la difamación, así como artículos que propiciaran perjuicios provenientes de chantajes o amenazas.<sup>256</sup> Por su parte, un punto fundamental para entender el reconocimiento de la libertad de prensa estadounidense era que ésta se concebía como un vehículo esencial para el mejor funcionamiento de la democracia, por lo que el gobierno entendía que los asuntos públicos merecían más protección que las preocupaciones privadas.

A finales del siglo XIX creció la intervención informativa sobre los escritos que se consideraban obscenos e inmorales, lo que causó numerosos atropellos y persecuciones policiales, fundamentalmente, a los diarios liberales más radicales, que, en la línea de la postura adoptada por los republicanos en España, consideraban la libertad de imprenta como un aspecto de la autonomía individual, que justificaba la expresión ilimitada de opiniones personales sobre cualquier tema, incluido el sexo. La política de restricción gubernamental se hizo en base a la aplicación de la Ley Comstock, y la legislación de cada estado análoga, que fue aprobada por el Congreso en 1873.<sup>257</sup> La norma establecía penas de hasta cinco años de cárcel para todos aquellos periódicos que insertaran material “obsceno”, pero no definía lo que consideraba por obscenidad, por lo que fueron las interpretaciones expansivas de los propios jueces las que otorgaron a las autoridades la potestad para censurar. Durante este período, las decisiones judiciales que resolvieron sobre la libertad de prensa y la obscenidad utilizaron el “bad tendency test”,

---

<sup>256</sup> STRAUSS, D., “Freedom of speech and the Common-Law constitution”, *Eternally Vigilant: Free Speech in the Modern Area*, Chicago y Londres, The University of Chicago Press, 2002, pp. 33-59.

<sup>257</sup> El artífice de la “Ley para la represión de Comercio y Distribución de literatura obscena y artículos de uso inmoral”, conocida como la Ley Comstock, fue Anthony Comstock, presidente de la Sociedad de Nueva York para las Supresión del Vicio (NYSSV), que se fundó en 1872 con el objetivo de terminar con la pornografía en EEUU. La nueva ley endureció las penas establecidas en la Ley de Obscenidad de 1865, y amplió su definición, que hasta entonces se limitaba a considerar delito “cualquier libro, fotografía, folleto o impresión obsceno”, incluyendo todo “artículo de carácter inmoral, o cualquier droga o medicina o cualquier artículo que sea para prevenir la concepción o utilizados para fines anticonceptivos o para la producción del aborto”.

creado por William Blackstone en la Inglaterra del siglo XVIII. Éste defendía el derecho a emitir libremente ideas por medio de la imprenta, pero reconocía que existían publicaciones que, por su “tendencia perniciosa”, debían ser sancionadas. Para Blackstone, los artículos periodísticos con una deliberada predisposición inmoral o ilegal debían ser considerados como crímenes penales, no por su falsedad, sino por su provocación al quebrantamiento de la paz.<sup>258</sup> Siguiendo este pensamiento, el juez Charles Amidon, en la sentencia *Kowles vs Estados Unidos*, afirmó que la Ley Comstock no había sido diseñada para restringir la libertad de prensa, sino para proteger a la sociedad contra las prácticas que eran claramente inmorales y corruptas.<sup>259</sup>

La legislación de Comstock influyó notablemente en la libertad de imprenta de la época, originando una autocensura entre los propios directores y periodistas estadounidenses, que se sometieron a unos estándares para no sobrepasar el límite de lo que se podía considerar reproable. En la primavera de 1886, el director del diario radical *Lucifer: The light-Bearer*, Moisés Harman, que había utilizado su periódico para expresar sus puntos de vista sobre la libertad de prensa, afirmó su intención de publicar cualquier información que le fuera enviada, independientemente del lenguaje utilizado por el articulista, lo que le llevó a ser objeto de múltiples denuncias y detenciones bajo la Ley Comstock. El diario se convirtió en el principal foco de las disputas entre Comstock y la Asociación Nacional de Defensa (*National Defense Association*), organización fundada en 1878, que se opuso enérgicamente a los fallos judiciales que castigaban a los periódicos en aplicación de la misma. Con el mismo objetivo, los liberales más radicales

---

<sup>258</sup> BLACKSTONE, W., *Commentaries on the Law of England*, IV, Londres, Dawsons of Pall Mall, 1966, p. 151.

<sup>259</sup> RABBAN, D., *Free Speech in its Forgotten Years*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 142.

organizaron en 1902 la agrupación “Free Speech League”,<sup>260</sup> que, a diferencia de la Asociación de Defensa Nacional, se comprometió con la defensa de la libertad de prensa desde todos los puntos de vista, luchando de forma especial contra las persecuciones llevadas a cabo por aquellos diarios que no siguieron las directrices del discurso gubernamental durante la guerra de Cuba que les enfrentó a España; así como los procesamientos llevados a cabo contra los anarquistas tras el asesinato del presidente McKinley en 1901.<sup>261</sup>

A pesar de que la gran mayoría de los atropellos gubernativos producidos en esta época afectaron a publicaciones que eran condenadas por obscenidad, los tribunales estatales extendieron el “bad tendency test”, para resolver otros casos en los que se entendía que los periódicos perjudicaban deliberadamente a la “moral pública”, reconociendo, por tanto, a los oficiales la facultad de castigar a los periodistas con esta base. Muchos críticos de la época declararon la necesidad de definir la línea que determinaba qué enunciados estaban protegidos por la Constitución de la intervención gubernamental, y los que no lo estaban. Para una parte de la doctrina, en la línea de lo mantenido por Blackstone, la libertad de prensa consistía en que no existieran restricciones o censura previas a la publicación,<sup>262</sup> siendo legítima la represión gubernamental que se realizaba con posterioridad a la aparición del periódico. Así pues, para los partidarios de esta

---

<sup>260</sup> La asociación “Free Speech League”, emergida del radicalismo liberal de finales del siglo XIX, se convirtió en la primera organización en la historia de los EEUU que demostró un compromiso real con el principio de la libertad de expresión y de la prensa desde todos los puntos de vista, participando en casi todas las grandes controversias sobre la libertad de imprenta suscitadas durante las dos primeras décadas del siglo XX. Entre las que se involucró el FSL, ninguna generó tanto debate popular como la lucha ejercida por los obreros radicales que formaban la organización IWW (Industrial Workers of the World). Las peleas comenzaron a surgir cuando las autoridades locales trataron de impedir el uso de las calles para expresar la ideología radical de sus miembros, en un lenguaje deliberadamente provocativo. Los miembros de la IWW, con frecuencia llamados “Wobblies”, criticaron la actuación arbitraria de las autoridades, quienes no prohibían la propaganda religiosa en la vía pública, pero sí que los trabajadores difundieran sus quejas sobre el sistema capitalista.

<sup>261</sup> RABBAN, D., *Free Speech in its Forgotten Years*, p. 25.

<sup>262</sup> BLACKSTONE, W., *Commentaries on the Law of England*, p. 150.

postura, el gobierno no podía interferir imponiendo una medida cautelar antes de la difusión de las palabras, pero tenía la facultad de imponer sanciones después de su publicación.

Sin duda, esta postura daba una protección muy inadecuada a la libertad de prensa, ya que permitía la absoluta arbitrariedad del poder público, otorgándole el derecho a sancionar a cualquier diario que no estuviera de acuerdo con la gestión gubernativa, por el simple hecho de suponer una “mala tendencia” en su discurso. Esta corriente era muy criticada porque, si bien quedaba prohibida la censura previa, se otorgaba al gobierno un arma poderosa e incluso más peligrosa que ésta última, que podía acabar con la libertad de prensa.<sup>263</sup> Una segunda interpretación doctrinal sobre la libertad de imprenta estadounidense, que se asentó años más tarde, afirmaba que la libertad no era absoluta, sino que existían ciertos límites. Ésta fue la defendida por el juez Hamersley, quien afirmó que todos los ciudadanos tenían el mismo derecho a utilizar la libertad de prensa sin “perjudicar a sus conciudadanos” o “poner en peligro los intereses vitales de la sociedad”. Asimismo, declaró que la protección a la libertad no otorgaba el derecho a perpetrar actos incompatibles con la paz o la seguridad del Estado, y que, por tanto, la libertad de prensa no incluía el abuso del poder sobre la pluma.<sup>264</sup>

---

<sup>263</sup> State vs. McKee (1900. Connecticut): “Every citizen has an equal right to use his mental endowments, as well as his property, in any harmless occupation or manner; but he has no right to use them so as to injure his fellow-citizens or to endanger the vital interests of society. (...) The liberality protected is not the right to perpetrate acts of licentiousness, or any act inconsistent with the peace or safety of the State. Freedom of speech and press does not include the abuse of the power of tongue or pen, any more than freedom of other action includes an injurious use of one’s occupation, business or property”. CHAFEE, Z., *Free Speech in the United States*, Cambridge- Massachusetts, Harvard University Press, 1967, pp.12-13.

<sup>264</sup> CHAFEE, Z., *Free Speech in the United States*, p. 24.

## 2. El sistema liberal inglés y el nacimiento del “New Journalism”

En lo que respecta a Europa, la industrialización económica se desarrolló antes en Inglaterra que en cualquier otro país, lo que favoreció directamente a los periódicos ingleses que, en 1830, contaban ya con la fábrica de impresión más grande del mundo. Inglaterra fue una de las naciones más vanguardistas en cuanto a las libertades democráticas, lo que hizo que los esquemas de la política de libertad de imprenta inglesa fueran copiados por muchos gobiernos. Sin duda, la época victoriana, que abarcó desde 1831 a 1901, fue la más libre de los tiempos modernos para la mayoría de los diarios ingleses, ya que no existía la censura previa, y los procesamientos de los periodistas por la comisión de delitos sediciosos eran muy poco frecuentes y, por lo general, no prosperaban. La mayoría de las medidas gubernativas se dirigieron contra los diarios carlistas, sin duda, los más restringidos por el control estatal.<sup>265</sup>

La supresión del impuesto del timbre, efectuada en la década de los 50, tuvo un efecto inmediato en el desarrollo de la prensa inglesa, favoreciendo la creación de nuevas publicaciones, y aumentando la influencia social de los periódicos, especialmente de aquellos que no se afiliaban a ningún partido político, hasta casi “hacer temblar los cimientos ministeriales”.<sup>266</sup> La posterior eliminación de otras restricciones legislativas y jurídicas, como las sanciones económicas en forma de “impuestos sobre el conocimiento”, que habían aumentado el precio de impresión de los diarios durante la primera mitad del siglo, o la supresión de los impuestos sobre el papel, que redujeron el importe del periódico, facilitó la expansión comercial y el desarrollo del “New Journalism”, un tipo de prensa que trataba cuestiones diferentes a las ofrecidas por los

---

<sup>265</sup> CHAFEE, Z., *Free Speech in the United States*, pp. 504-505.

<sup>266</sup> HARGREAVES, R., *The First Freedom: A History of Free Speech*, Stroud, Sutton Publishing, 2002, p. 231.

diarios políticos ingleses tradicionales.<sup>267</sup> Este periodismo popular, que identificaba el éxito con el beneficio económico, tenía los rasgos característicos propios de la prensa de masas: se trataba de rotativos baratos de tiradas millonarias y gran difusión, que estaban redactados con un lenguaje directo e iban destinados al gran público. En ellos se empleaban todas las técnicas de comunicación conocidas para así poder acercarse más a las clases populares.<sup>268</sup>

El rápido progreso de la prensa de masas tuvo lugar por la buena relación entre la clase política y la prensa inglesa, ya que se asistían mutuamente y se beneficiaban la una de la otra.<sup>269</sup> Por una parte, la prensa política se consideraba que tenía una función casi constitucional, ya que de un lado proyectaba la política, y de otro las actitudes populares.<sup>270</sup> De otra, el gobierno británico utilizaba los periódicos para la defensa del sistema democrático, lo que le hizo garantizar una buena infraestructura de redes ferroviarias, telegráficas y telefónicas utilizadas por las empresas periodísticas para la distribución y recepción de noticias, que benefició en última instancia a la libertad de imprenta. Es importante señalar que, a diferencia del resto de los países europeos, los ferrocarriles victorianos no estaban gestionados por el poder público, sino que pertenecían a empresas privadas, y por tanto, no estaban alineados con ninguna doctrina

---

<sup>267</sup> Los diarios provinciales, por su parte, tardaron más en desarrollarse que la prensa nacional de masas, pese a que la invención del telégrafo había puesto fin al monopolio de la prensa nacional, especialmente la de partido. En 1868, con la creación de la Asociación de Prensa, las publicaciones provinciales pudieron contar con las mismas informaciones que estaban a disposición de la prensa de Londres, aunque la introducción en 1876 de trenes especiales para transportar los diarios, favoreció la circulación de los periódicos de la capital inglesa, que consiguieron rivalizar, en su propio territorio, con los principales periódicos provinciales.

<sup>268</sup> PIZARROSO QUINTERO, A., *Historia de la prensa*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, pp. 230-235.

<sup>269</sup> Entre mediados 1850 y 1914, la cantidad de periódicos vendidos en Inglaterra aumentó considerablemente. Un crecimiento que no solo afectó a Londres, donde la cifra de diarios aumentó de 151 a 472, sino que, llegó, también, a las provincias más rurales del país, donde el incremento fue aún más dramático, de 15 periódicos en 1856 a 1475 a principios del siglo XX.

<sup>270</sup> KOSS, S., *The Rise and Fall of the Political Press in Britain (vol I: The nineteenth century)*, Londres, Hamish Hamilton, 1981, p. 113.

política, ni pudieron ser utilizados para ejercer censura en beneficio estatal, como ocurría en España, que se encontraban bajo la supervisión directa del Gobierno central.

En la misma línea que sus vecinos europeos, en Inglaterra fue especialmente amplia la libertad de prensa en los años 80, ya que se abolió el depósito obligatorio que debían pagar los directores de los periódicos, y que se mantenía desde 1819. Asimismo, fue aprobada una nueva legislación sobre difamación, que liberó a los periodistas del temor a ser perseguidos y procesados penalmente. Aun así, se dieron casos de intervención gubernativa, propiciados por el establecimiento de nuevas medidas, que fueron aprobadas por el Estado para salvaguardar a la nueva audiencia de lectores de periódicos, surgida por el crecimiento del índice de alfabetización en Inglaterra, de las publicaciones que se consideraban inmorales o espiritualmente perjudiciales. En 1885 se creó la Asociación Nacional de Vigilancia (*National Vigilance Association*), que se encargaba de perseguir y denunciar a los directores o redactores de los periódicos por la difusión de artículos que consideraban inaceptables. Al respecto de estas actuaciones, André Lefevere afirmó que, para el efectivo desarrollo del derecho a informar libremente, era necesario que los periodistas se expresaran dentro de un margen, “the margin”, ya que los intentos por saltar éste podían llevarles a consecuencias muy negativas, tales como la pérdida de puestos de trabajo o la incorporación a listas negras.<sup>271</sup>

---

<sup>271</sup> LEVEFERE, A., “Translation and Other Ways in Which one Literature Refracts Another”, *Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures*(volume nº38 ), Londres, Routledge, 1984, p.128. 127-142.

### 3. La Ley de Prensa liberal francesa de 1881

Por su parte, en Francia, coincidiendo con la llegada del nuevo partido republicano al gobierno en 1875, se abrieron nuevas posibilidades en torno a la libre emisión de ideas, que hasta entonces estaba notablemente restringida por cuarenta y dos leyes que contenían más de 325 preceptos redactados por diferentes políticos y regímenes distintos durante más de 75 años. Tras cinco años de discusión, se configuró un nuevo sistema de libertad de imprenta, en torno a la Ley de Prensa aprobada el 29 de julio de 1881, antecedente más próximo a la Ley de Policía de Imprenta de 1883, que sigue siendo la base jurídica sobre la que opera el sistema informativo francés. La legislación francesa, que iniciaba con las palabras: “La presse est libre...”,<sup>272</sup> garantizó la libertad de imprenta e hizo posible que la prensa de masas arraigara en toda Francia antes que en otros países europeos. Para algunos historiadores, la importancia de la nueva ley no era que proclamara la libertad, sino la debilidad de las sanciones previstas en la misma, lo que, a su vez, propició que se mantuviera en el tiempo.<sup>273</sup>

Como ocurrió más tarde en España con la Ley de Imprenta, la nueva legislación francesa acabó con un gran número de restricciones contenidas en disposiciones anteriores, entre las que desatacaban la autorización previa y la exigencia que pesaba sobre el director de pagar una gran suma de dinero como depósito. Con la eliminación del depósito previo, para la fundación de un periódico solo se requería que su propietario se registrara ante las autoridades con su nombre y el de su impresor, y depositara dos copias. Además, se redujeron de forma considerable los delitos por ofensas políticas, eliminándose de la lista los ataques a la Constitución, las incitaciones

---

<sup>272</sup> SMITH, A., “La Presse est Libre...”, p. 106.

<sup>273</sup> THOGMARTIN, C., *The National Daily Press of France*, Birmingham-Alabama, Summa Publication, 1998, p. 88.



al odio o al desprecio del gobierno, ofender a la moral pública o religiosa, o insultar a la República, así como el alcance del delito por difamación. Aun así, la ley seguía manteniendo algunos delitos políticos, autorizando al gobierno para secuestrar las publicaciones que ofendieran al presidente de la República, a jefes de Estado y diplomáticos extranjeros, o a la memoria de los muertos; aquellas que provocaran la comisión de crímenes o delitos; las que difamaran a los funcionarios públicos, entre los que se encontraban los tribunales, las fuerzas armadas, los miembros del Gobierno o los ministros de la religión; o difundieran noticias falsas, especialmente cuando éstas fueran perjudiciales para el interés nacional o pusieran en peligro la disciplina del Ejército.<sup>274</sup> Por su parte, la Ley de Prensa permitía la censura previa y la suspensión de las libertades durante los estados de emergencia, aunque, al contrario de lo que ocurrió en España durante todo el período de la Restauración, el gobierno francés no hizo uso de los mismos hasta la Primera Guerra Mundial.

Con la aprobación de la Ley en 1881, y hasta 1885, la libertad de imprenta francesa vivió buenos momentos, favorecida por la estabilidad política del país, y la ampliación de las libertades civiles, entre ellas la legalización de los sindicatos. Durante estos años, fueron pocas las intervenciones gubernativas sobre los periódicos, centrándose, la mayoría de ellas, en perseguir las ofensas al Ejército. Uno de los primeros procesos de prensa fue contra la publicación *Le Petit Journal*, que venía siendo muy crítica con la actuación del ejército francés. El ministro de Guerra entendió que se estaban profiriendo injustas críticas al poder militar, y emitió una denuncia contra el director, Alfred Le Petit, y el editor de su diario. Durante la celebración del juicio, el director sostuvo que solo se habían emitido opiniones políticas, y no insultos como mantenía el gobierno, y

---

<sup>274</sup> Smith, A., “La Presse est Libre...”, p. 110.

se quejó de que otras publicaciones que habían empleado los mismos calificativos no habían sido denunciadas. A pesar de ello, tanto el director como el editor fueron declarados culpables y condenados a dos meses de cárcel por un jurado popular que afirmó que las manifestaciones realizadas por el periódico habían sobrepasado los límites del derecho a la libertad de prensa contenido en la legislación.<sup>275</sup>

Tras estos primeros compases, y coincidiendo con la entrada en la escena política del general Boulanger,<sup>276</sup> en 1886, el panorama de la libertad de prensa cambió, aumentando las intervenciones gubernativas contra las publicaciones políticas. Las autoridades francesas se beneficiaron de la vaga delimitación de los delitos de ofensas contenidos en la Ley de 1881, para llevar a cabo una serie de persecuciones policiales centradas en aquellos periódicos partidarios de Boulanger, especialmente en los diarios satíricos que utilizaban las caricaturas como medio de expresión,<sup>277</sup> y sobre los que se efectuaron acciones de dudosa legalidad para tratar de suprimirlos.<sup>278</sup> Estos abusos policiales contra las publicaciones pro-boulangistas se manifestaron, primordialmente,

---

<sup>275</sup> JUSTIN GOLDSTEIN, R., *Censorship of Political Caricature in Nineteenth-Century France*, Kent, Ohio y Londres, The Kent State University Press, 1989, pp. 240-43.

<sup>276</sup> Georges Boulanger fue un militar francés, nombrado ministro de Guerra en 1886, que aprobó una serie de medidas para reformar la organización del Ejército y dotar al mismo de una mejor capacidad defensiva. Como resultado de estas transformaciones, la popularidad del general entre los sectores más descontentos de la sociedad creció en la misma proporción que lo hicieron sus detractores. Así surgió el movimiento político boulangista formado por una coalición de grupos heterogéneos, agrupados bajo la bandera común del nacionalismo, que exigieron una revisión de la Constitución francesa. Finalmente, el gobierno depuso a Boulanger de su cargo político, tras la victoria del general en las elecciones de París en 1889, acusándolo de atentar contra la Tercera República. Boulanger huyó a Bélgica, donde se suicidó en 1891, año en el que se desintegró el movimiento. MOMMSEN, W. J., *La época del Imperialismo. Europa 1885-1918. Historia Universal Siglo XXI*, volumen 28, Madrid, Siglo Veintiuno de Argentina, 1971, pp. 95-97.

<sup>277</sup> JUSTIN GOLDSTEIN, R., *Censorship of Political Caricature in Nineteenth-Century France*, pp. 238-239.

<sup>278</sup> El periódico *Le Charge* criticó las actuaciones gubernamentales a través de una caricatura en la que se afirmaba que, para prevenir la victoria en las elecciones del general Boulanger, era necesario aniquilar a los defensores del movimiento. En la caricatura se aprecia a tres generales franceses matando a los partidarios boulangieristas, mientras el general sujeta la estatua de la libertad. *Le Charge*, 28 de octubre de 1888.

en forma de ataques a sus vendedores, a los que amenazaban con retirar su licencia.<sup>279</sup>

Años más tarde, en enero de 1889, tras la importante victoria electoral en París del general, las autoridades francesas incautaron toda la propaganda realizada por el movimiento boulangista, lo que fue considerado por la Corte de París como una violación de la Ley de Prensa de 1881.

Otras medidas adicionales posteriores completaron el sistema informativo francés, y, entre otras cosas, ampliaron la lista de los delitos por obscenidad, así como las facultades gubernativas respecto a los mismos, entre ellas, la posibilidad de incautar las publicaciones antes de que se emitiera la condena, lo que no se permitía en los delitos por ofensas políticas. Asimismo, durante los años 1893 y 1894, coincidiendo con los bombardeos anarquistas, se aprobaron normas que reconocían sanciones penales para los periodistas por la provocación de delitos tales como el robo, el asesinato o los delitos contra la seguridad del Estado, entre otros.<sup>280</sup> Conjuntamente con estas medidas legales, el Estado francés utilizó otros mecanismos indirectos de intervención para recortar la libertad de prensa, especialmente en lo que se refiere a las publicaciones políticas. Entre ellos, las autoridades provinciales retenían o prohibían la venta en la vía pública de aquellos diarios que consideraban ofensivos; o se prohibía la venta de ciertos periódicos en las estaciones de ferrocarril, que eran de propiedad estatal, lo que, en palabras del periódico *Le Don Quichotte*, “condenaba a los diarios a la muerte”.<sup>281</sup>

---

<sup>279</sup> El diario *L'assault* informó de que la policía de París, comportándose como "bestias feroces", se había apoderado de todos los ejemplares de la última edición de su diario, y había amenazado con expulsar a los vendedores de sus quioscos si no eliminaban esa "suciedad". *L'assault*, 15 de septiembre de 1889.

<sup>280</sup> En la misma línea, el gobierno liberal español aprobó en 1894 una Ley para combatir los atentados anarquistas que afectaba directamente a la libertad de imprenta, dejándose constancia, una vez más, de la repercusión de las iniciativas legislativas francesas en nuestro país.

<sup>281</sup> *Le Don Quichotte*, 4 de junio de 1887.

#### **4. La autocensura de los periódicos alemanes por las restricciones de la Ley Imperial de Prensa de 1874**

Por último, en Alemania, durante la segunda mitad del siglo XIX, y tras la revolución de 1848, surgieron una serie de movimientos de corte liberal que favorecieron una atenuación de las leyes de prensa, muy restrictivas hasta entonces. Así pues, el gobierno monárquico alemán abolió la censura previa estatal, aunque mantuvo una serie de medidas restrictivas para la libertad de imprenta, como la licencia previa o la obligación de depositar una gran suma de dinero para los fundadores de los nuevos periódicos. En este contexto, Otto von Bismarck, que había asumido el mando gubernamental en 1871, aprobó el 7 de mayo de 1874 la Ley Imperial de Prensa, que vino a sustituir a los reglamentos de imprenta singulares de cada estado alemán. A pesar de que la legislación alemana proclamaba la libertad de imprenta, su espíritu distaba mucho de las leyes liberales de Francia y España, pues otorgaba a las autoridades un papel primordial en el control informativo y el funcionamiento de los periódicos políticos alemanes, que, lejos de ser la voz de los ciudadanos, se convirtieron en instrumentos al servicio de la política de Bismarck.

La Ley Imperial de Prensa reconocía una larga lista de delitos de imprenta, que estaban tipificados en el Código Penal alemán, aprobado en mayo de 1871, entre los cuales se encontraban las alusiones ofensivas a los miembros de las fuerzas armadas o la Casa Real, las injurias a los funcionarios públicos, y las agresiones al Estado y al orden público. Del mismo modo, se prohibía publicar noticias sobre los movimientos de las tropas alemanas en tiempos de guerra. La legislación endureció, además, las condiciones para la publicación de los periódicos políticos, exigiendo que, antes de su

difusión, los directores entregarán una copia del ejemplar a la autoridad policial del territorio en el que se distribuyera el mismo. La norma establecía, también, la obligación de corregir las informaciones que la autoridad correspondiente considerase inconvenientes, antes de la puesta en circulación del periódico.

En el caso de que se confirmara el perjuicio, el fiscal de cada distrito procedía a secuestrar la edición en un plazo máximo de seis meses desde que se difundiera el periódico. No obstante, la Ley Imperial concedía a las autoridades policiales la facultad de recoger los periódicos sin la previa autorización judicial, lo que permitía al gobierno suspender, de forma discrecional, todos los periódicos políticos que no siguieran su línea ideológica, como la prensa ultra católica o la socialista.<sup>282</sup> En ese supuesto, las autoridades debían presentar en un plazo de doce horas la denuncia ante los tribunales, que se encargaban de examinar la existencia del delito de imprenta.<sup>283</sup> Por su parte, la responsabilidad penal de los delitos de imprenta recaía en el autor del artículo punible y en el director de la publicación,<sup>284</sup> aunque, también, se contemplaba la posibilidad de castigar a las personas encargadas de imprimir o distribuir los ejemplares del periódico. La condena que se recogía en la ley para todos ellos era el pago de una multa como máximo de 1.000 marcos y, dependiendo de la gravedad del delito cometido, la pena de prisión de hasta un año de cárcel, además de la correspondiente sanción al periódico.

---

<sup>282</sup> PFLANZE, O., *Bismarck and the Development of Germany, volume II. The Period of Consolidation (1871-1880)*, New Jersey y Oxford, Princeton University Press, 1990, p. 297.

<sup>283</sup> Con pequeñas diferencias, el sistema informativo ideado por Bismarck recuerda a las disposiciones represivas aprobadas por Cánovas, especialmente, el Real Decreto de 31 de diciembre de 1875 y la Ley de Imprenta de 1879, que establecía una larga lista de delitos de imprenta, y otorgaban un amplio poder sobre la imprenta a las autoridades. Tanto el canciller alemán como el líder del gobierno conservador entendían que las masas debían ser controladas a través del Estado, y, para ello, era fundamental controlar a todos los periódicos.

<sup>284</sup> La Ley Imperial de Prensa reconocía expresamente que todos los directores podían ser condenados por delito de imprenta, aunque su periódico se publicara en un país extranjero. En cualquier caso, la ley requería al director mantener la residencia habitual en Alemania.

Respecto a la competencia para enjuiciar los delitos de imprenta, ésta correspondía a los tribunales de los estados federales: en Prusia, y en los estados del norte de Alemania, el tribunal estaba compuesto por juristas profesionales; en el sur de Alemania, (Bavaria, Württemberg y Baden), la jurisdicción recaía en un jurado popular.<sup>285</sup> Para determinar qué tribunal era el competente, se recurría al principio de jurisdicción ambulatoria (*fliegender Gerichtsstand*), que permitía a los fiscales decidir la naturaleza del delito cometido, y dónde debía ser juzgado el infractor: en la residencia del acusado, donde hubiera sido editado o impreso el periódico, o en cualquier provincia en la que se hubiera difundido el mismo. Esta práctica, que se redujo a partir de 1902, permitía al gobierno forzar los juicios por delitos de imprenta en las ciudades del norte de Alemania, donde las condenas eran más rigurosas.

Por citar un ejemplo, la revista satírica *Simplicissimus* fue denunciada en 1899 por un artículo sobre la visita a Palestina del rey de Prusia Wilhelm II, que el poder público consideró como un ataque a la Monarquía alemana. En este caso, el juicio se celebró en Leipzig, donde se había impreso la publicación, en lugar de Munich, donde residían todos los acusados y se encontraba la redacción periodística. Esta circunstancia hizo que se impusiera una rigurosa condena contra el director de la publicación, Albert Langen, quién, finalmente, huyó a Suiza donde se exilió durante cinco años, así como contra el redactor del artículo, y contra el autor de la caricatura del monarca, encarcelados durante siete y seis meses, respectivamente. Por esta razón, la revista comenzó a imprimirse en Stuttgart, donde no era tan vulnerable a los ataques de las autoridades, pues los juicios por delitos de imprenta eran competencia del jurado.<sup>286</sup>

---

<sup>285</sup> STARK, G.D., *Banned in Berlin. Literary Censorship in Imperial Germany, 1871-1918. Monographs in German History*, volume 25, Nueva York y Oxford, Berghahn Books, 2009, pp. 1-3.

<sup>286</sup> STARK, G.D., *Banned in Berlin. Literary Censorship in Imperial Germany*, p. 5.

Efectivamente, la Ley Imperial de Prensa de 1874 establecía unas severas condiciones que anulaban completamente la libertad de los periódicos políticos alemanes. Así pues, en ausencia del instrumento de censura previa, el gobierno alemán aplicó de forma muy restrictiva los preceptos de la ley, para condenar a los que se oponían a los postulados gubernamentales que, entre 1874 y 1890, se saldaron con más de mil procesos judiciales injustificados.<sup>287</sup> Fundamentalmente, la Ley Imperial perjudicó enormemente a los diarios socialistas, ya que facilitaba el secuestro de sus ejemplares y los abusos de poder por parte de las autoridades gubernativas. Durante estos años, la persecución sobre los periódicos socialistas fue constante, especialmente en 1878, fecha en la que fueron prohibidos un total de 42 periódicos, y se vieron fuertemente restringidos algunos de los más importantes diarios de izquierdas que habían florecido tras la Ley Imperial, como el diario *Sozialdemokrat* o la publicación *Vorwärts*.<sup>288</sup> Ese mismo año, el gobierno de Bismarck aprobó la Ley Antisocialista, que prohibió todos los periódicos de corte socialista, medida que mantuvo hasta 1890.<sup>289</sup> Algunas de estas publicaciones se vieron obligadas a trasladarse a otras ciudades extranjeras, como Bruselas y Londres, única forma de difundir las ideas socialdemócratas y saltar la estricta política del político alemán. La represión gubernamental también alcanzó a las publicaciones ultracatólicas como *Germania*, que desde la Ley de 1874 hasta el cese de Bismarck fue suprimida más de seiscientas veces.<sup>290</sup>

Desde que se convirtió en canciller de Alemania en 1871, Bismarck utilizó otros mecanismos de control informativo como el fondo de reptiles financiados a través del

---

<sup>287</sup> PIZARROSO QUINTERO, A., *Historia de la prensa*, p.123.

<sup>288</sup> SMITH, A., “La Preese est Libre...”, p.116.

<sup>289</sup> Como veremos más adelante, el gobierno conservador español aprobó en 1896 una Ley antiterrorista que prohibió durante cuatro años todas las publicaciones anarquistas, anulando, tal y como se hizo con la prensa socialista en Alemania, la libertad de los periódicos que profesaran dicha ideología.

<sup>290</sup> SMITH, A., “La Preese est Libre...”, p.114.

gobierno, y con el que compraba el apoyo de los periodistas o colocaba a funcionarios del gobierno entre el personal de la empresa periodística. Este tipo de censura encubierta, que fue copiada, como ya hemos visto, por el gobierno español, se aseguraba que, desde el anonimato, diferentes agentes estatales trabajaran al servicio de los diarios, pero actuando en beneficio del propio Estado, o silenciando las críticas, o bien favoreciendo con su discurso político al poder.<sup>291</sup> Bismarck mantuvo, además, la Oficina Central para Asuntos de Prensa, fundada en 1850, y publicó una gaceta estatal, *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, a través de la que se informaba a la población de la versión oficial del gobierno sobre los asuntos públicos. Por último, el gobierno de Bismarck tenía el monopolio de las redes de comunicación de las empresas periodísticas, lo que le facilitó el control de todas las informaciones enviadas por la Agencia Central de Telégrafos.<sup>292</sup>

La estricta política de prensa impuesta por el gobierno alemán propició que muchos periódicos políticos se editaran de forma clandestina o como diarios culturales, aunque, sin duda, la práctica más desarrollada fue la autocensura aplicada por las propias publicaciones alemanas.<sup>293</sup> La Ley Imperial, junto con las medidas estatales y policiales, fomentó el desarrollo de la misma de forma inconsciente y automática entre los propios periodistas alemanes. El propósito del gobierno de Bismarck no era otro que todos los redactores, impresores, editores o directores hicieran suyas las normas, hasta el punto de

---

<sup>291</sup> BORDIEU, P., "Censorship and the Imposition of Form", *Language and Symbolic Power*, Cambridge y Massachusetts, Harvard University Press, 1991, p. 138.

<sup>292</sup> RUUD, C.A., *Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804-1906*, Toronto, University of Toronto Press, 1982, p. 15.

<sup>293</sup> La autocensura se puede definir como "la internalización de aquellos esquemas o representaciones del mundo prevalentes como verdaderos e incuestionables en una colectividad, conforme a los cuales actúan y piensan por miedo al aislamiento y a disentir de los demás en disímiles contextos sociales que definen marcos de referencia, se sea o no consciente de ello". En BASAIL RODRIGUEZ, A., *El lápiz rojo. Prensa, censura e identidad cubana (1875-195)*, La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana, 2004, p. 235.



que no pensarán cuando estaban suprimiendo parte de la información, no siendo, de esta forma, necesaria después la censura gubernativa.<sup>294</sup>

## **2. IMPLANTACIÓN GRADUAL EN ESPAÑA DEL NUEVO PERIODISMO DE EMPRESA**

En un país menos desarrollado como España la modernización de la prensa se produjo de forma más gradual y lenta que en la de nuestros vecinos europeos, pero tras la formulación de la libertad de imprenta de 1883 comenzaron a apreciarse signos de cambio. El atraso socio-económico del país, el déficit de concentración urbana por el que solo un 10% de la población española vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes, y las altas tasas de analfabetismo imperantes en la sociedad española, especialmente en áreas rurales y en regiones meridionales,<sup>295</sup> obstaculizó el desarrollo de la prensa de masas desarrollada en EEUU, Francia o Inglaterra, donde los diarios llegaron a superar los 500.000 ejemplares de tirada.

A pesar de ello, muchos historiadores han resaltado la importancia del cambio cualitativo en el periodismo español de finales de siglo, que se asemejaba en sus características a la nueva tendencia periodística que se desarrollaba en el resto de los países industrializados. Los grandes rotativos se editaban en Madrid, por la centralización de la actividad política en la capital, lo que hizo que la prensa madrileña tuviera un mercado más amplio que la prensa de provincias. Por aquellos años ya se

---

<sup>294</sup> Para Michaela Wolf la censura institucional o explícita era un tipo de control informativo premeditado, que implicaba necesariamente la intervención del aparato institucional; mientras que la censura preventiva se vinculaba a la autocensura, siendo ésta una actividad que se centraba en la intervención informativa del propio individuo, bien sea el redactor de la noticia, el director o editor del periódico, el traductor o el revisor. WOLF, M., “ÜbersetzerInnen als gatekeepers (Selbst-) Zensur als Voraussetzung für die Aufnahme in das literarische Feld der späten Habsburgermonarchie”, *The Power of the Pen: Translation & Censorship in Nineteenth-century Europe*, Berlin, LIT, 2010, p.46

<sup>295</sup> FRANCISCO FUENTES, J., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., *Historia del periodismo español*, p. 147.

observaba en periódicos como *El Imparcial*, publicación de mayor difusión con 120.000 ejemplares, *La Correspondencia de España*, *El Liberal* o *El Heraldo de Madrid*, los rasgos propios de la prensa de empresa: tiradas elevadas, renovación temática y de contenidos, nuevo lenguaje, y precio asequible. Aun así, existieron importantes diarios con estas características publicados en Barcelona como *La Vanguardia*. Un tipo de periodismo que no dependía de ningún partido, sino que se dirigía a las masas, y que conquistaba los mercados de compradores asumiendo un carácter mercantil por el que se priorizaba el factor económico, y en el que predominaba la publicidad como la principal fuente de financiación.

Los periódicos de la época se hicieron eco de la transformación de la prensa, y en 1895 las publicaciones ya informaban sobre los cambios en la configuración del periodismo español, donde la publicidad resultaba ser el “único ingreso verdaderamente saneado que figura en nuestros presupuestos”,<sup>296</sup> y aseguraban que la única forma de atraer anunciantes era aumentando la circulación de los periódicos. Así lo afirmó *El Imparcial*, para el que la nueva prensa española vivía “del favor del público, y bajo el aspecto material, del anunciante tanto como del suscriptor, pues este último nos presta crédito e influencia moral y política, y aquél los medios para servir a este último”, un rasgo que les hacía ser “como los grandes periódicos de Inglaterra y Alemania, que no podrían servir a sus abonados como les sirven si no tuviera sus correspondientes planas de anuncios”.<sup>297</sup>

El nacimiento de la prensa popular y de empresa se consolidó en 1888 con la implantación del sensacionalismo característico del nuevo periodismo desarrollado en

---

<sup>296</sup> *El Resumen*, 18 de julio de 1885. Reproducido en TOBAJAS, M., *El periodismo español. Notas para su historia*, Madrid, Forja, 1984, p. 478.

<sup>297</sup> TOBAJAS, M., *El periodismo español*, p. 480.

otros países. Éste tuvo su representación en España con el tratamiento informativo del conocido “crimen de la calle Fuencarral”, acontecido el 2 de Julio de 1888, día en el que apareció asesinada una acaudalada señora de origen italiano en su domicilio de Madrid. El suceso se convirtió en noticia de portada durante meses para un cualificado número de periódicos, entre los que se encontraban *El Liberal*, *El País*, *La Iberia*, *El Resumen* o *La República*, todos ellos de izquierdas o afines al partido fusionista, que en ese momento gobernaba. Estos periódicos, ante la carencia de noticias de mayor importancia, no solo fijaron su atención en el crimen, sino que, además, se convirtieron en fiscales del mismo y ejercieron la acción popular mediante la presentación de una querrela en el proceso judicial. Este acontecimiento marcó el desarrollo periodismo español, ya que era la primera vez en la historia que, durante el proceso de una causa criminal, la prensa formaba un juicio paralelo al procedimiento judicial, acusando directamente al hermano de la víctima como autor del asesinato. Se originó así el que hoy conocemos como el “tribunal de la opinión”, que estaba formado por la prensa como representante de la sociedad.<sup>298</sup>

Durante este largo procedimiento judicial se publicaban noticias que contenían los más mínimos detalles del proceso, y que intentaban esclarecer las posibles corrupciones de la administración pública que los periódicos habían puesto al descubierto. La demanda de información por parte de la sociedad española se tradujo en un aumento de las tiradas de los periódicos, que llegaban a superar la barrera de los 70.000 ejemplares como en el caso de *El Liberal*. El nuevo tratamiento informativo adoptado en España tuvo resonancia internacional, y algunos periódicos extranjeros criticaron este nuevo periodismo español. En Francia, *Le Temps* reprochó a ciertos órganos de la prensa

---

<sup>298</sup> DUÑAITURRIA LAGUARDA, A., “Se abrió la veda al morbo judicial: El crimen de la Calle Fuencarral a través del diario *La República*”, *El derecho de los Medios de Comunicación*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2013, p. 49.

española que se adelantaran a la sentencia sin que la hubiera dictado el tribunal correspondiente, en ese “ruidoso proceso” que se estaba llevando a cabo, y que causaba un gran efecto entre la población española. El diario francés definió con mucha exactitud este enjuiciamiento mediático, práctica que ha perdurado con el paso de los años, y entre sus valoraciones puntualizó que, sin esperar el resultado del juicio oral, los medios informativos españoles estaban preparando a las masas populares “para que crean que Varela es el asesino”.<sup>299</sup> Con las características desarrolladas por la prensa durante este largo proceso, que finalizó con la sentencia dictada el 30 de mayo de 1889, condenando a la criada de la señora por delito de asesinato, empezó un nuevo periodismo de empresa que cuajó en España bien entrado el siglo XX.

### **3. HEGEMONÍA DE LA PRENSA POLÍTICA. NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN.**

Sin embargo, durante estos últimos años del siglo XIX continuaba en nuestro país la hegemonía de la prensa política. La incorporación de la Ley de Policía de Imprenta de 1883 facilitó un tipo de periodismo crítico con los acontecimientos sociales, que tenía cabida tanto en la prensa como en el Parlamento, lo que incrementó la oferta global de diarios políticos, favoreciendo que cada una de las fuerzas políticas o fracciones de cada partido tuviera un medio de expresión que transmitía sus propios intereses políticos. La proliferación de este tipo de publicaciones fue un fenómeno muy característico de la España de la época, donde solo en Madrid se publicaban unos 40 periódicos en un país que apenas leía, sin que las tiradas superaran los centenares de ejemplares. Pese a que el índice de tirada de la prensa política no superaba a la empresarial, algunas de estas

---

<sup>299</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo español: De la revolución de Septiembre al desastre colonial*, Madrid, Nacional, 1971, p. 561.

publicaciones tenían muchos seguidores, ya que, como hemos señalado anteriormente, en esta época era muy común la lectura en público de los diarios, que se acrecentaba en los casos de la prensa obrera y popular.

La mayoría de estos diarios se escribían por los propios políticos, o líderes del grupo político al que representaban, quienes, a su vez, eran los que subvencionaban el diario, y se leían por los amigos o aquellos que se encontraban afiliados al partido o grupo ideológico. Entre la multitud de publicaciones personalistas que servían para transmitir las ideas y aspiraciones de sus líderes encontramos representados a todos los grupos políticos existentes en la época. Los diarios conservadores más influyentes fueron: *La Época*, portavoz de Cánovas, *El Tiempo* como medio de expresión de Silvela o *El Español* de Maura; Entre los liberales hay que destacar *El Correo* o *El Día* de Sagasta o el *Heraldo de Madrid* apadrinado por Canalejas; también encontramos representados los órganos carlistas, como *El Siglo Futuro* y *El Correo Español*, *El Socialista* de Pablo Iglesias o los republicanos, como *El Progreso de Lerroux* o *La Justicia* de Salmerón, entre otros.

Paralelamente al importante desarrollo de la prensa política, favorecida por la legislación liberal promovida por Sagasta, que, como ya hemos señalado, instauró un régimen informativo más abierto y libre, el gobierno central empezó a buscar nuevos mecanismos con los que poder controlar las informaciones. En términos generales, como analizaremos en los siguientes capítulos, se puede afirmar que la censura y la intervención de los canales de comunicación como el telégrafo y el teléfono, se reservó para aquellos momentos considerados excepcionales por contravenir al espíritu liberal contenido en la norma. La estrategia de la desinformación, muy utilizada en otros países

de Europa, fue una de las alternativas adoptadas por el poder público para dirigir así la opinión pública hacia la versión oficial.<sup>300</sup> Otro de los medios más utilizados durante el período analizado era la denuncia fiscal a instancias del gobernador civil, o por iniciativa de la jurisdicción militar, que provocaba la inmediata recogida de todos los ejemplares por la autoridad y el encarcelamiento del autor o director de la publicación. Aunque, en multitud de casos estos ejemplares se “perdían” por el camino, bien porque se compraban todos los ejemplares al vendedor de forma ilegal, o porque se mantenían retenidos de forma consciente en los canales de comunicación.

Además, durante esos años se continuó sobornando a los periodistas y periódicos mediante los “fondos de reptiles” del Ministerio de Gobernación, ocultos al presupuesto general, al tiempo que surgieron, unidos a este nuevo tipo de prensa, otros grupos de presión que poseían un gran poder económico, y que actuaron a través de sobornos directos o por influencias e intereses. A estos había que añadir, también, aquellos pagos recibidos de gobiernos o grupos de presión extranjeros, que se acrecentaban en las épocas de conflictos. Tengamos en cuenta, además, que el control informativo se ejercía, no solo por el ministerio público, sino también por los gobernadores de provincia y alcaldes, que se contagiaron de la actitud obsesiva manifestada por el gobierno central. Éstos eran especialmente “molestos” con los periódicos políticos locales que vertieron quejas sobre su gestión municipal o provincial, lo que se traducía en una persecución constante de las mismas durante todo el periodo de la Restauración. Ésta se realizaba a través de los juzgados de primera instancia, que fallaban en función de los deseos del

---

<sup>300</sup> Pizarroso Quintero ha definido la desinformación como el “intento de difundir una falsedad, haciéndola pasar por una información verdadera con el objeto de crear respuestas o actitudes o bien modificarlas para la consecución de un objetivo determinado”. PIZARROSO QUINTERO, A., “Información, desinformación y conflicto”, *Comunicación y guerra en la historia*, Santiago de Compostela, Tórculo, 2004, p.22.

gobernador provincial o del alcalde. Por tanto, y pese a la separación de poderes reconocida explícitamente en la ley, se siguió haciendo uso de los órganos judiciales a merced del poder público como medio para combatir a la prensa incómoda.

Acorde con los acontecimientos que se iban sucediendo en España durante estos primeros años posteriores al triunfo de la Ley de Imprenta, los temas que más preocupaban al gobierno central eran principalmente dos: el conflicto cubano, contra el que se adoptó una política de represión muy dañina para los medios, especialmente represiva cuando se produjo la intervención militar estadounidense en la Isla; y la publicidad de los ideales republicanos, lo que convertía a sus publicaciones en las más vulnerables a la vigilancia gubernativa. No cabe duda de que estos periódicos políticos que se posicionaban en contra de la línea de pensamiento de los gobernadores y cuyo lenguaje, en algunos de sus diarios, era menos reposado que el utilizado por otras publicaciones contrarias al régimen, fueron los más vigilados y perseguidos por las autoridades. Suscribiendo las palabras de Timoteo Álvarez: “la preocupación de los guardianes de la ley de prensa se orienta en la misma dirección: el cien por cien de los periódicos sancionados son periódicos políticos”.<sup>301</sup>

En términos generales, podemos decir que los diarios que gozaron de mayor libertad de expresión fueron principalmente los adictos al régimen, especialmente cuando éstos coincidían con las ideas del líder gubernativo o de las autoridades de provincia. Esto no ocurría siempre por la particular característica de la Restauración, en la que se turnaban los partidos conservador y liberal en la presidencia del gobierno. Sobre estos diarios políticos, conocidos como “periódicos ministeriales”, existía la duda constante de si

---

<sup>301</sup> TIMOTEO ÁLVAREZ, J., *Historia de los medios de comunicación en España, Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Barcelona, Ariel, 1989.

recibían instrucciones del ministro de Gobernación para tratar de una determinada forma los asuntos políticos. Las autoridades gubernativas solían defender a estos medios en las Cortes afirmando que escribían sobre todo lo que consideraban “conveniente al interés colectivo de la política que representan” con absoluta libertad de criterio, y sin que existiera “ninguna especie de conexión secreta” ni hubieran recibido indicaciones directas del ministerio público.<sup>302</sup> Asimismo, desde el gobierno aseguraban que los periódicos ministeriales no seguían “ciegamente” las inspiraciones del ministerio público, ya que esto era lo propio de la política del fiscal de imprenta imperante con el partido conservador los primeros años de la Restauración.<sup>303</sup> No obstante, reconocían abiertamente que este tipo de prensa estaba en relación directa con el partido, ya que “sienten sus palpitaciones, defienden sus intereses, son la expresión de sus doctrinas”.<sup>304</sup>

A pesar de las declaraciones de los liberales, con el paso de los años quedó comprobado que existieron ciertas “presiones” por parte del poder para que los diarios ministeriales escribieran en función de los intereses gubernamentales. Estos periódicos se fueron posicionando como una parte integrante del gobierno de la Restauración, al que representaron, respaldando los intereses de cada jefe del Estado, especialmente cuando éste debía tomar decisiones polémicas para la prensa, como ocurrió con los cortes de información en épocas de crisis.<sup>305</sup> Era muy común, además, que el ministerio público los utilizara como medios para transmitir medidas gubernamentales polémicas cuando aún no se habían implantado en la sociedad, con el objetivo de anticipar la reacción de los ciudadanos. Esta falta de independencia a la hora de hablar de la administración

---

<sup>302</sup> Congreso, 11 de febrero de 1888, ministro de Gobernación, cif. 1178.

<sup>303</sup> Congreso, 11 de febrero de 1888, ministro de Gobernación, cif. 1224.

<sup>304</sup> Congreso, 11 de febrero de 1888, ministro de Gobernación, cif. 1178.

<sup>305</sup> El ejemplo más claro tuvo lugar durante la guerra de Cuba, puesto que, tanto la mala gestión gubernamental del conflicto en el turno del partido conservador como las arbitrariedades cometidas por el gabinete liberal al llevar a cabo su política de censura, fueron justificadas por los órganos ministeriales, frente a las críticas vertidas en el resto de la prensa.





gubernativa les llevó a tener muy poca credibilidad entre la clase política y demás medios de comunicación.



## **2. ACTUACIONES GUBERNAMENTALES RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD DE PRENSA RECONOCIDA EN LA LEY DE IMPRENTA DE 1883**

El clima político y social en el que entró en vigor la Ley de Imprenta de 1883, que rompía con la línea restrictiva sostenida por el gobierno conservador durante los primeros años del régimen, parecía propicio para desarrollar en España una verdadera libertad de prensa. No obstante, para determinar la eficacia de la libertad de prensa en la sociedad española de finales del siglo XIX y principios del XX no basta con una buena legislación que la sustentara, sino que se hace necesario que en la práctica el gobierno de la Restauración, representado por las dos fuerzas monárquicas que se turnaban en el poder durante todo el régimen, mantuviera la línea liberal de la legislación y no pusiera trabas en su libre ejercicio.

Es importante destacar que, para la clase política de la época, la que iba a determinar la verdadera eficacia de la Ley de Imprenta era la propia conducta de la prensa española. Así lo declaró Pío Gullón, quien entendía que los propios periodistas podían con sus excesos destruir todas las reformas ventajosas y liberales introducidas por la Ley de 1883, de tal manera que, si éstos desacreditaban el nuevo sistema instaurado y abusaban de la libertad que se les concedía, la legislación de imprenta moriría.<sup>306</sup> En oposición a esta idea se manifestó el político republicano Manuel Becerra: “en más de una ocasión la prensa no ha tenido la prudencia que era de desear; pero así como no pueden aplicarse las leyes de paz al estado de guerra, del mismo modo no es justo y razonable esperar que la prensa tenga una extrema prudencia cuando hierven las pasiones, cuando arriba

---

<sup>306</sup> Senado, 5 de julio de 1883, ministro de Gobernación, cif. 2925.

existe la tiranía y abajo la conspiración”.<sup>307</sup> Resulta cuanto menos curioso que desde antes de la aprobación de la legislación de imprenta, el gobierno liberal ya culpabilizara de un posible y futuro fracaso de la misma a la actitud de los periodistas. Con el paso de los años quedó claro que el propósito real del discurso del poder público era allanarse el camino para disfrazar su política de intervención de la información como una mala práctica por parte de las publicaciones españolas. Como veremos en los próximos capítulos, tanto el partido liberal como el conservador utilizaron recurrentemente este argumento para justificar las medidas restrictivas impuestas a los diarios que criticaban la actuación gubernamental, o a aquellos periódicos que, “haciendo mal uso de la imprenta”, hacían propaganda de ideas contrarias al régimen instaurado.

## **1. LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS DELITOS DE IMPRENTA**

A raíz de la entrada en vigor de la Ley de 1883, se publicaron una serie de circulares que reconocían que la libertad de imprenta no dependía de la voluntad de los gobiernos, sino del Ministerio fiscal, que debía contribuir a que se respetara la misma. Esta transformación en la conformación del derecho respecto a los años anteriores era fundamental para entender la legislación liberal, ya que, por primera vez en la Restauración, el gobierno “no se mezcla ni conoce de los delitos y faltas que pueden cometerse por medio de la imprenta”,<sup>308</sup> función que correspondía íntegramente a los Tribunales ordinarios,<sup>309</sup> que tenían el deber de perseguir al verdadero culpable del

---

<sup>307</sup> Congreso, 16 de abril de 1883, Becerra, cif. 2002.

<sup>308</sup> Circular de 2 de Octubre 1883. “A los fiscales de las Audiencias, quienes contribuirán a que se respete la libertad de imprenta, pero persiguiendo sus abusos y lo que pueda constituir delito”. *Gaceta de Madrid*, 6 de octubre de 1883, número 279, p. 53. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°17.

<sup>309</sup> En la sentencia de 25 de enero de 1884 el Tribunal Supremo reconoció que los tribunales ordinarios habían reemplazado de forma definitiva a los tribunales de imprenta: “Considerando que... la declinatoria

delito. La única función del ministerio público en materia de delitos de imprenta era velar para que la libertad de los periódicos fuera respetada, “sirviendo de escudo a la legítima manifestación del pensamiento, y persiguiendo, en su caso, los abusos que por medio de la prensa se cometan”.<sup>310</sup> Asimismo, el ejercicio de este derecho no debía ser incompatible con el poder social, con los derechos de los demás, y, especialmente, con las instituciones del país que eran fundamentales para preservar el régimen. Por ello, entre las instrucciones del gobierno al ministerio fiscal estaba la “más activa vigilancia para que los instituciones fundamentales no sean objeto de ataque alguno y la disciplina del ejército y el orden público se conserven inalterables”,<sup>311</sup> siendo objeto de persecución y castigo las injurias o amenazas a la “sagrada e inviolable persona del Rey”, o aquello que significara una provocación expresa a la comisión de dicho delito, o a un cambio en la forma de Gobierno.<sup>312</sup>

Este celo del gobierno respecto a la información sobre las instituciones fundamentales, especialmente la concerniente a la monarquía, se puso de manifiesto con motivo de la repentina muerte de Alfonso XII. En noviembre de 1885, por orden tajante del presidente conservador, los fiscales no dejaban publicar en la prensa ninguna noticia sobre la enfermedad del monarca, lo que produjo que, en los días inmediatamente previos a su muerte se contabilizaran un gran número de denuncias y recogidas de

---

que constituye el objeto del presente recurso no puede ser discutible, porque suponiendo, como toda cuestión de competencia supone, la existencia de dos jurisdicciones sobre cuyo preferente derecho a conocer de un asunto pueda dudarse, esta duda no cabe en el presente caso, toda vez que suprimidos los Tribunales de imprenta y no habiéndoles sustituido ninguna otra jurisdicción especial, la ordinaria ha de ser forzosamente la única que corresponda el conocimiento de un hecho como el de que se trata, que presenta los caracteres de delito común, y que habría de quedar impune si ella no fuese la competente para proceder a su averiguación y castigo”. STS 25 de enero de 1884. *Gaceta de Madrid*, 16 de agosto de 1884, p. 18.

<sup>310</sup> Circular de 2 de Octubre de 1883.

<sup>311</sup> Real Orden. Circular de 30 de Julio de 1883 “por la que se fijan los criterios que ha de mantener el Ministerio Fiscal para perseguir delitos de imprenta. Que la pena caiga sobre el auténtico culpable”. Publicado en la *Gaceta de Madrid*, 31 de Julio de 1883, número 212, p. 206. Véase apéndice de la tesis: ANEXO Nº16.

<sup>312</sup> Circular de 2 de Octubre 1883.

periódicos. El día anterior al fallecimiento del Rey terminaba el silencio informativo impuesto por Cánovas con una reunión entre el gabinete conservador y los directores de los periódicos de Madrid, en la que, por primera vez y de manera oficial, se les informó sobre el estado de salud del soberano. En dicho encuentro, el gobierno de Cánovas recomendó a los directores que, en lo relativo al monarca, se limitaran a dar las noticias oficiales provenientes del ministerio público, “únicas dignas de crédito”, a fin de evitar alarmas y los sobresaltos “que la intranquilidad siempre producen”.<sup>313</sup>

La reacción de la prensa ante el control informativo llevado a cabo por el ministerio gobierno fue dispar en función de la línea ideológica del medio. Como era de esperar, el diario ministerial, *La Época*, alegó que la enfermedad del soberano les había sorprendido, limitándose luego a informar sobre su defunción una vez publicada la noticia en la *Gaceta Oficial*.<sup>314</sup> En contraste al diario conservador, y mucho más crítico con las restricciones informativas impuestas por Cánovas, *El Imparcial* se quejó de la “ceguedad” en la que se habían visto inmersas las cabeceras españolas, y denunció la persecución del ministerio fiscal sobre los aquellos periódicos que, simplemente, “insinuaban alguna noticia bien intencionada mostrando inquietud por el estado del Rey”, así como de aquellos otros a los que se les acusaba de ser “fabricadores de noticias falsas” por preocuparse por el estado del monarca.<sup>315</sup>

Uno de los periódicos abiertamente contrarios al proceder del gobierno conservador fue *La República*, que difundió un artículo en el que acusaba a Cánovas de “mentiroso” por haber “tratado de engañar a la nación”, y por considerar a los españoles, “no ya como

---

<sup>313</sup> *La República*, 25 de Noviembre de 1885.

<sup>314</sup> *La Época*, “La enfermedad de S.M”, 24 de Noviembre de 1885.

<sup>315</sup> *El Imparcial*, “La situación”, 25 de Noviembre de 1885.

esclavos, sino como bestias de carga”.<sup>316</sup> El periódico republicano fue denunciado y secuestrado por el ministerio fiscal, aunque no fue la única publicación sancionada bajo el mandato de Cánovas en los días previos al cambio del turno en la presidencia del gobierno. El semanario republicano *El Motín* fue denunciado por limitarse a informar a sus lectores de que la muerte de Alfonso XII no les producía “ni alegría ni tristeza”, ya que “lo primero sería poco noble; lo segundo hipócrita”.<sup>317</sup> Después del secuestro de este número, el director cargó sus feroces críticas contra el gabinete conservador en estos términos: “conservadores clericales, os escupo a la cara”,<sup>318</sup> y reprochó las “órdenes, fiscales, policía y despreciables instrumentos gubernativos” que Cánovas había utilizado durante los dos años de su mandato tras la publicación de la Ley de 1883. Con Sagasta ya como nuevo líder del ejecutivo, *El Motín* despidió al partido conservador con estas palabras: “Se despidieron los miserables (...) metiendo en la cárcel a nuestro director. Sírvanos de venganza verlos caídos en el fango para siempre, sin haber conseguido su propósito de matar a *El Motín*”.<sup>319</sup>

El panorama con el que Sagasta asumió la presidencia del gobierno no presagiaba nada positivo para la libertad de prensa, que, a pesar de los buenos propósitos del partido liberal tras la publicación de la ley, se encontraba muy perjudicada por las prácticas de los conservadores. Con este contexto, *La República* se hizo eco de una noticia vertida por *La Iberia* sobre la adopción de una posible medida a favor de la prensa por el ejecutivo liberal, y aprovechó la circunstancia para reclamar al gobierno que la misma se hiciera efectiva. El periódico republicano señalaba, también, que durante el mandato conservador se había resucitado el fiscal de imprenta, desaparecido con la legislación de

---

<sup>316</sup> *La República*, 25 de Noviembre de 1885.

<sup>317</sup> *El Motín*, “En nuestro puesto”, 25 de Noviembre de 1885, Suplemento al n.º. 47.

<sup>318</sup> *El Motín*, “Bien por mal”, 27 de Noviembre de 1885.

<sup>319</sup> *El Motín*, “Denuncias 83 y 84”, 30 de Noviembre de 1885.

1883, y mostraba su temor a que el mismo siguiera actuando si Sagasta no lo remediaba. En la misma publicación se denunciaba el estricto control del que habían sido objeto los periódicos, y se afirmaba que el único objetivo del gabinete conservador era acabar con la prensa o que “la ahogase a fuerza de denuncias, causas y autos de prisión”. Al mismo tiempo, recordaba al partido liberal que, durante el tiempo que había estado en oposición, también había sufrido “los rigores de una reacción de fanáticos insensatos, desenfrenadamente conservadora”, llevada a cabo mediante una persecución “arbitraria, sañuda y rencorosa”, y sufrida, entre otros, por los periódicos liberales *El Correo* y *La Iberia*. Con estos motivos, *La República* instaba al gabinete liberal para que cumpliera la ley de 1883, que ellos mismos habían adoptado: “justicia es lo que exigimos; que se cumpla es lo que demandamos; que comiencen los liberales por cumplir hoy lo que ayer tenían por bueno, y por corregir lo que rechazan y condenaban por arbitrario y abominables”. El artículo concluía sosteniendo que la mayor parte de las denuncias y causas existentes contra la prensa en ese momento eran efecto de una lucha entre la arbitrariedad de un gobierno conservador “lleno de soberbia” y la dignidad de los periódicos independientes.<sup>320</sup>

Tras las quejas de la prensa y, como primera medida para inaugurar la presidencia de gobierno, Sagasta concedió el indulto total a los directores y periodistas condenados en sentencia firme por delitos de imprenta hasta el fallecimiento del Rey. Asimismo, dio orden a los fiscales para que desistieran de sus acciones penales en los procesos incoados por los delitos de imprenta, con el objetivo de otorgar libertad y calma a aquellos escritores públicos “que en el calor de las controversias”, habían faltado a las leyes y a las conveniencias sociales, así como a los que persiguiendo “la realización de

---

<sup>320</sup> *La Republica*, 28 de Noviembre de 1885.



sus ideales políticos”, habían rebosado los lindes del Código penal.<sup>321</sup> Al respecto del indulto, numerosas veces concedido por ambos partidos a lo largo de la Restauración, Martínez Alcubilla señaló: “mientras las leyes no estén basadas en más sanos principios de la ciencia penal, mientras haya duda de que puedan ser injustas, mientras sea falible como tiene que serlo el criterio judicial en la apreciación de las pruebas, y más todavía, mientras se conserve la pena de muerte en las leyes penales, siempre será una necesidad atribuir al Monarca o jefe del Estado la prerrogativa de indulto, por más que se haya abusado o pueda abusarse de ella”.<sup>322</sup>

## **1. LA UTILIZACIÓN SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY PROVINCIAL**

A pesar del reconocimiento expreso de la separación de competencias entre la administración de justicia y las autoridades gubernativas a la hora de enjuiciar los delitos de imprenta, durante el primer mandato conservador tras la entrada en vigor de la Ley de Imprenta, se observaron ya las primeras extralimitaciones por parte de los gobernadores de provincia. Éstos utilizaban discrecionalmente la facultad de “reprimir los actos contrarios a la moral o a la decencia pública, las faltas de obediencia o de respeto a su autoridad”,<sup>323</sup> que les reconocía el artículo 22 de la Ley Provincial de 1882, imponiendo multas, que llegaban hasta las 500 pesetas, a aquellos periódicos que manifestaban ideas contrarias o criticaban la política provincial. El semanal republicano *El Motín* sufrió de forma constante los abusos de esta disposición, con catorce multas

---

<sup>321</sup> Real Decreto concediendo el indulto total de las penas impuestas por delitos de imprenta. *Gaceta de Madrid*, 10 de diciembre de 1885, nº 344.

<sup>322</sup> MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Diccionario de la Administración Española*, 4ª edición, Madrid, Administración, 1887, p. 182.

<sup>323</sup> Artículo 22 de la Ley Orgánica Provincial de 29 de Agosto de 1882. *Gaceta de Madrid* de 1 de Septiembre de 1882, Tomo III, p. 657.

contabilizadas desde enero de 1884 a noviembre de 1885, tiempo en el que se vio inmerso también en ochenta y cuatro procesos por delitos de imprenta. Rojo Arias, uno de los senadores más activos a la hora de denunciar las arbitrariedades gubernamentales, afirmó que la sanción impuesta al semanal madrileño en virtud de la Ley Provincial era “arbitraria, injusta, excesiva y exagerada”.<sup>324</sup> El político entendió que, con la aplicación del artículo 22, el gobernador de Madrid usurpaba atribuciones que no le correspondían, constituyendo un verdadero atropello para el director republicano, al que solo se le daba la posibilidad de recurrir ante el ministro de Gobernación, y no ante los tribunales, como garantizaba la ley.

Mientras que para una parte del Parlamento las facultades concedidas a las autoridades gubernativas en la Ley Provincial chocaban frontalmente con las otorgadas a las autoridades judiciales por la Ley de Imprenta, para el gobierno conservador no existía tal incompatibilidad. La opinión de los conservadores se fundaba en la idea de que para gobernar era preciso dejar cierto margen a la arbitrariedad, ya que “ningún poder está verdaderamente completo e integro, si no tiene algo de arbitrariedad donde poder moverse”.<sup>325</sup> Basándose en esta afirmación, que echaba por tierra todos los avances de los liberales en materia de libertad de imprenta, el gobierno de Cánovas reconocía la eficacia total y absoluta de la disposición, autorizando a los gobernadores de provincia a hacer uso de ella con “gran discreción y prudencia”, para así poder defenderse ante la sociedad de los ataques realizados por “periódicos inmundos, que absolutamente nada enseñan ni nada ilustran, que no hacen más que corromper las costumbres y desmoralizar a gentes sencillas”.<sup>326</sup> A esto hay que añadir que para el partido conservador no se debía permitir que la palabra escrita tuviera una mayor inmunidad

---

<sup>324</sup> Senado, 12 de Julio de 1884, Rojo Arias, cif. 528.

<sup>325</sup> Senado, 3 de Julio de 1884, ministro de Gracia y Justicia, cif. 464.

<sup>326</sup> Senado, 3 de Julio de 1884, Sr. Ministro de Gracia y Justicia, cif. 466.

respecto a la palabra hablada, por lo que si la disposición otorgaba facultades a las autoridades para reprimir las faltas de obediencia y respeto de los particulares, debía ser aplicable también para los periodistas. En esta línea, Romero Robledo afirmó: “Yo quiero saber con qué lógica, y fundado en qué principios, se puede sostener que la ofensa a la moral y a la decencia pública hecha por un ciudadano en un círculo reducido debe ser más severamente castigada que la ofensa hecha a esos mismos sagrados intereses por la palabra escrita en un periódico, que tiene millares de lectores, que no está limitado por el espacio y lleva el mal por todas partes”.<sup>327</sup>

A pesar de los intentos de los conservadores por defender las facultades conferidas a los gobernadores en el artículo 22 de la Ley Provincial, no quedaba ninguna duda de que la interpretación que hacían éstos sobre el precepto era un verdadero atentado contra la libertad informativa, tal y como demostraban las múltiples sanciones injustificadas que recibían los periódicos de la oposición durante los dos años del mandato de Cánovas. El peligro de la aplicación de la disposición estaba en que la existencia de un periódico dependía de la arbitrariedad de los gobernadores de provincia contra la que tanto habían luchado los liberales, ya que les otorgaba a éstos la potestad última para decidir sobre los delitos de imprenta según sus intereses políticos, sin tener la obligación siquiera de exponer los fundamentos por los que condenaban a un determinado diario.<sup>328</sup>

Con la vuelta de Sagasta al poder, en octubre de 1885, se publicó una Real Orden por la que se determinaba que los gobernadores civiles no tenían competencia para castigar los

---

<sup>327</sup> Senado, 12 de julio de 1884, ministro de la Gobernación, cif. 532.

<sup>328</sup> En la mayoría de las multas impuestas por los gobernadores no se señalaban las frases o párrafos que se consideraban atentatorios contra la moral o la decencia pública, lo que era denunciado de forma recurrente en el Parlamento. Esta mala práctica permitía que las autoridades no tuvieran ningún impedimento a la hora de imponer sanciones a los periódicos que les “entorpecían”.

delitos de imprenta.<sup>329</sup> La medida estaba motivada por el recurso de alzada interpuesto por el director de *La Voz de Guipúzcoa* contra la providencia del gobernador, quién le imponía una multa de 500 pesetas fundamentada en el artículo 22 de la Ley Provincial. Éste hacía uso de la misma para multar al periódico republicano por considerar que se había atentado contra su dignidad en las declaraciones vertidas en el número correspondiente al 15 de Julio: “Mal El gobernador civil atolondrado en el anochecer de ayer y motivando el tumulto de hoy. Esta mañana provocador y el resto del día huido”.<sup>330</sup>

El gobierno liberal accedió a la petición solicitada por el director del periódico vasco, a quién se le retiró la multa, y puso coto a la función asumida por las autoridades de provincia, prohibiendo a los gobernadores aplicar el artículo 22 de la Ley Provincial en materia de delitos de imprenta.<sup>331</sup> La medida adoptada por Venancio González, recién nombrado ministro de Gobernación, reafirmaba lo expresado por la legislación de prensa liberal, por la que las faltas y los delitos de imprenta se sancionaban según las leyes ordinarias, y cuyo conocimiento correspondía exclusivamente a los tribunales ordinarios. Además, junto con esta orden gubernamental, el gobernador de provincia de Madrid emitió una circular el 8 de enero de 1886 en la que exponía el criterio que debían adoptar todas las autoridades respecto a la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley Provincial. En la disposición se aclaraba que, hasta la modificación del precepto, se debía realizar un “uso extremadamente prudente y sobrio de aquella facultad, que no

---

<sup>329</sup> Real Orden de 29 de diciembre de 1885, por la que se determina que los gobernadores civiles no tienen competencia para castigar, según el art. 22 de la ley provincial, los delitos cometidos por la imprenta. *Gaceta de Madrid*, 30 de Diciembre de 1885, número 364, p. 1015. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°19.

<sup>330</sup> *La Voz de Guipúzcoa*, 15 de Julio de 1885, n° 195.

<sup>331</sup> Siguiendo la misma doctrina, la *Gaceta* de 30 de diciembre contenía otras dos Reales Órdenes en las que el gobierno liberal relevaba del pago de la multa de 500 pesetas al director del periódico satírico *Intrínsecos*, por el artículo “Lo de Rubiales”, y al director de *La Luz*. *Gaceta de Madrid*, 30 de Diciembre de 1885.

tiene otro carácter que el de un medio extraordinario de coerción, de que no debe usarse sino para mantener toda su entereza el principio de autoridad, frente a determinados abusos cuyo correctivo no pueda imponerse mediante otras leyes”.<sup>332</sup> La circular precisaba, también, que, en ningún caso, se debía imponer penas no establecidas en el Código, y, por tanto, las faltas cometidas por la prensa periódica debían tener su correctivo en la legislación común o en la Ley de 1883, que era la que regulaba el ejercicio de este derecho constitucional.

Con ambas medidas se daba un paso adelante hacia el reconocimiento efectivo de la libertad de prensa, terminando, a menos en teoría, con esta práctica abusiva y vejatoria para los periódicos que había sido utilizada sistemáticamente por las autoridades durante los dos primeros años de gobierno conservador. En la práctica, sin embargo, la separación de poderes a la hora de juzgar los delitos de imprenta no era tan efectiva como predicaba el gobierno liberal. En junio de ese mismo año, se denunciaron en el Parlamento prácticas abusivas por parte de las autoridades que, al no poder hacer uso del artículo 22 de la Ley Provincial, utilizaban otros caminos para ejercitar su control sobre los periódicos, que excedían de las competencias conferidas en la Ley de Imprenta, y hacían dudar sobre si, efectivamente, la prensa estaba sometida a los tribunales ordinarios. Una de las protestas más airadas la realizó el periodista Villaba Hervás, quién consideraba que el gobernador de provincia de Madrid se había extralimitado en sus competencias al enviar un volante al director del periódico republicano *El Progreso*, en el que le instaba a declarar quién era el autor del artículo “Lo de la huerta de Osuna”. Para el político no solo era una práctica abusiva que iba

---

<sup>332</sup> Circular del gobernador de provincia de Madrid de 8 de enero de 1886, prohibiendo aplicar las multas a que se refiere el artículo 22 de la Ley provincial. *Gaceta de Madrid*, 9 de enero de 1886.

“contra la dignidad del periodismo”,<sup>333</sup> sino que atentaba directamente contra la legislación de prensa, ya que la exigencia de conocer el autor de una publicación correspondía a la administración de justicia. La noticia tuvo resonancia en los periódicos republicanos de la misma línea que el diario damnificado, que criticaron a los liberales. En estos términos protestó *La República*: “Pero señor, ¿Qué es esto? ¿Es que Sagasta quiere resucitar los tiempos de Narváez?”<sup>334</sup>

Ese mismo año, la prensa de Madrid denunciaba la práctica “desusada” de las autoridades gubernativas, especialmente los de provincia, que realizaban indicaciones a las autoridades judiciales por las que exigían que revisaran diariamente la prensa, y realizaran las denuncias y procedimientos correspondientes contra aquellos periódicos que a su juicio habían caído en alguna infracción legal. La inquietud de la opinión pública por la noticia se trasladó al Senado, dónde el gobierno liberal defendió su respeto absoluto a la independencia del poder judicial, y aseveró que la única medida adoptada con arreglo a la Ley de Imprenta era el envío de todas las publicaciones al juzgado de guardia para que éste pudiera incoar los procedimientos que consideraran necesarios, y “no tuviera la excusa”, en ningún caso, de decir que no conocía los impresos que se publicaban.<sup>335</sup> Para el político Rojo Arias ésta “innecesaria y oficiosa” práctica del gobierno suponía un ataque a la prensa, y envolvía una amenaza indirecta a los tribunales ordinarios, a los que se exigía responsabilidad si no denunciaban las publicaciones que les eran enviadas.<sup>336</sup>

---

<sup>333</sup> Congreso, 17 de junio de 1886, Villalba Hervás, cif. 496.

<sup>334</sup> *La Republica*, 17 de Junio de 1886, nº. 744.

<sup>335</sup> Senado, 27 de julio de 1886, ministro de Gobernación, cif. 924.

<sup>336</sup> Senado, 27 de julio de 1886, ministro de Gobernación, cif. 925.

En muchos casos no bastaban las indicaciones o presiones gubernamentales y aunque un juez pretendiese ser imparcial o independiente en su decisión contra un determinado periódico, las autoridades tomaban otras medidas contra ellos para influenciarles o amonestarles por no haber tomado la decisión acorde a sus intereses políticos. Una de las prácticas más usadas era el traslado a otras provincias o pueblos, sin alegar la causa que había motivado el mismo, de aquellos que desoían las instrucciones directas de los oficiales, lo que empujaba a muchos jueces a la ruina económica, y avisaba a otros de lo que podía ocurrir con ellos si no seguían la línea política marcada. A lo largo de los años se siguieron dando estas indicaciones por parte de los gobernadores a los tribunales, especialmente en provincias y municipios, donde las autoridades trasladaban todas las sospechas a los jueces en cuanto vislumbraban un mínimo de crítica hacia su gestión gubernativa, u observaban críticas a la monarquía. Por este método, el semanario satírico *Café con gotas* fue denunciado en 1887 por injurias a la reina regente, a propósito de un simple comentario que decía: “Que alegres según mi cuenta, los soldados van a estar, cuando empiecen a tocar la gaita a la Regenta”.<sup>337</sup>

## **2. ANOMALÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE IMPRENTA**

No sólo se dio una extralimitación de competencias entre las autoridades gubernativas y los órganos judiciales, sino que dentro de los propios tribunales que tenían que impartir justicia al conocer los delitos de imprenta existía una falta de criterio común respecto a la aplicación de la Ley de Imprenta, dándose situaciones tan inverosímiles como que un artículo por el que se abría un proceso en una audiencia era considerado

---

<sup>337</sup> *Café con gotas*, 3 de Abril de 1887. Reproducido en PALOMARES IBÁÑEZ, JM., “Prensa y política en Galicia: la prensa periódica compostelana (1875-1936)”, *Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1893, p. 412.

lícito por otra. Esta circunstancia se denunció en el Parlamento en numerosas ocasiones, y vino provocada por un fallo del Tribunal Supremo que declaraba que de los delitos de imprenta era responsable, no sólo el autor del escrito, tal y como expresaba el artículo 14 del Código Penal, sino también quién lo reprodujese en otro periódico. Con motivo de la denuncia de un suelto periodístico inserto en el periódico alicantino *Las Germanías*, por contener injurias al Rey y ataques a la forma de Gobierno, el juez de instrucción de Alicante se inhibió del conocimiento de la causa al demostrar que el suelto estaba copiado literalmente de otro publicado con anterioridad en el diario valenciano *La Protesta*. El fallo del Tribunal Supremo determinó que, la publicación de un artículo que podía ser materia de delito en determinado periódico era un hecho “absolutamente independiente” de la reproducción del mismo en otro de la misma o diferente localidad, no siendo “lógico ni legal conceptualizar como un todo o único delito actos de esta clase que se realizan en tiempos sucesivos y medios diferentes, aun cuando sea utilizando el mismo procedimiento criminal”.<sup>338</sup> El Tribunal Supremo aclaró que, en estos casos, la competencia para conocer el delito cometido por medio de la imprenta correspondía al juzgado de la demarcación territorial donde se había publicado la repetición del suelto periodístico.

La cuestión se debatió en el Parlamento en 1887, a raíz de la absolución, por parte de la Audiencia de Sevilla, del autor de un artículo periodístico reproducido por otro periodista, quién, sin embargo, se encontraba procesado por el tribunal de Tortosa. Esta situación, en la que algunos periodistas estaban sometidos a los tribunales por artículos que habían reproducido, sin que sus autores materiales hubieran sido juzgados por los de su territorio, provocó las quejas de algunos políticos, que plantearon como solución

---

<sup>338</sup> STS 5 de mayo de 1884. *Gaceta de Madrid*, 3 de octubre de 1884, p. 198. Ratificado por la STS 19 de mayo de 1884. *Gaceta de Madrid*, 14 de octubre de 1884, p. 231; STS 19 de mayo de 1885. *Gaceta de Madrid*, 12 de diciembre de 1885, p. 293.



el cese de la responsabilidad en aquellos que habían copiado un escrito, una vez apareciera el autor del mismo.<sup>339</sup> El gobierno liberal se inhibió respecto a la polémica suscitada, afirmando que la ley durante su confección pertenecía al legislador, pero en el momento en el que se promulgaba, entraba en el dominio exclusivo de los jueces y tribunales encargados de aplicarla.<sup>340</sup> La cuestión pasó al Tribunal Supremo que declaró que la reproducción en periódicos de artículos criminales publicados en otro constituía delito aun cuando no hubiera sido denunciado ni penado el autor del escrito, ya que “la característica de los delitos de imprenta es que son constitutivos de tantos delitos como veces sean reproducidos”.<sup>341</sup> En otra sentencia, el Tribunal Supremo confirmó que “el que ordena la reproducción de tales documentos, con perfecto conocimiento de su contenido y sin protesta ni modificación alguna en este sentido, hace suyos los conceptos, frases y la misma forma de aquellos, identificándose por modo tal con el pensamiento y fines del autor”.<sup>342</sup>

Otro supuesto en el que se denunció una falta de criterio único en la administración de justicia se destapó años más tarde por el diputado conservador Francisco Silvela, quien criticó ante sus homólogos que en los tribunales inferiores no se venía aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la responsabilidad subsidiaria en los delitos de imprenta, concretamente en el proceso que se estaba llevando a cabo contra el periódico *El Noticiero* de Sevilla. Conforme a la resolución del Tribunal Supremo, en los delitos de imprenta “no se han de estimar otras responsabilidades de carácter pecuniario que las anejas al mismo delito, sin que por tanto deban ser satisfechas

---

<sup>339</sup> Congreso, 13 de Junio de 1887, Álvarez Mariño, cif. 3431. Congreso, 31 de Marzo de 1887, Sr. Alvarado, cif. 1534.

<sup>340</sup> Congreso, 31 de Marzo de 1887, ministro de Gracia y Justicia, cif. 1534.

<sup>341</sup> STS 30 diciembre de 1887. *Gaceta de Madrid*, 4 de abril de 1888, p. 77. Ratificado en la STS 7 de enero d 1888. *Gaceta de Madrid*, 2 de mayo de 1888, p. 151.

<sup>342</sup> STS 21 de noviembre de 1890. *Gaceta de Madrid*, 8 de julio de 1890.

subsidiariamente por tercera persona, y se exijan sólo al acusado como parte integrante de la pena taxativamente determinada por el delito”.<sup>343</sup> En virtud de la misma, el artículo 21 del Código Penal, que establecía la responsabilidad subsidiaria para los dueños de establecimientos mercantiles, no alcanzaba a las empresas periodísticas, ya que éstas tenían independencia respecto de los directores y redactores de los periódicos. Así pues, ante la posible insolvencia de los que eran condenados por delitos cometidos en un periódico, no existía responsabilidad subsidiaria del propietario del mismo.

Silvela cuestionó la actuación de la Audiencia de Sevilla pues, de prevalecer la responsabilidad subsidiaria aplicada por el juzgado, la empresa periodística necesitaba saber no sólo que el autor de un determinado artículo era efectivo y real, como exigía la Ley de 1883, sino, además, que el mismo era solvente. Esto suponía “una ruina” para las empresas periodísticas, porque “hasta de mala fe” se las podía hacer incurrir en responsabilidad.<sup>344</sup> Pese a la petición del político conservador para hacer valer la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que ésta misma se comunicara a la órganos de justicia para que no existieran más anomalías al respecto, el gobierno liberal consideró que el procedimiento era totalmente lícito, ya que el mismo se había iniciado antes de que el Tribunal Supremo se hubiera manifestado al respecto, siendo además un asunto de carácter privado, ya que el delito se había perseguido como un delito de injuria, y sin que pudiera, por tanto, intervenir el ministerio público.<sup>345</sup>

---

<sup>343</sup> STS 4 de enero de 1896. Reproducida en Congreso, 27 de junio de 1896, Silvela, cif. 868.

<sup>344</sup> Congreso, 13 de agosto de 1896, Silvela, cif. 2313.

<sup>345</sup> Congreso, 13 de agosto de 1896, ministro de Gracia y Justicia, cif.2314-2315.

## **2. EL USO ABUSIVO DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA COARTAR LA LIBERTAD: LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES**

Pasados los primeros años desde la publicación de la Ley de Imprenta, en los que primaba el talante liberal, los dos partidos que se turnaron en el gobierno adoptaron una serie de medidas que coartaban la libertad de información de los periódicos en algunos asuntos políticos y sociales en consonancia a los sucesos que se iban desarrollando en España. Esto era posible gracias al apoyo en el caciquismo del que se nutría el régimen de la Restauración, que facilitaba a los gobiernos instrumentos jurídicos suficientes para que impusieran su voluntad de acuerdo a sus intereses políticos. A pesar de lo que rezaba la Ley de 1883, la utilización constante de estas disposiciones de carácter legal no era más que un disfraz utilizado por el Estado para manejar la información que transmitía a la sociedad, con el fin último de conservar el poder y preservar el sistema instaurado. Para autores como Sánchez Illán, “la falta de libertad de prensa no será más que un aspecto de la ausencia de libertad política bajo el régimen de la Restauración”.<sup>346</sup>

Entre todas las medidas de carácter legal utilizadas por el gobierno para coartar la libertad de prensa a su conveniencia destacaba el uso reiterado de la suspensión de garantías constitucionales “cuando así lo exija la seguridad del Estado, en circunstancias extraordinarias”,<sup>347</sup> reconocido expresamente en el artículo 17 de la Constitución de 1876, que se adoptaba de forma sistemática, independientemente de la ideología que profesara el jefe del Ejecutivo que gobernara en ese momento. Acogiéndose al precepto constitucional, los dos partidos aprobaron de forma discrecional una serie de suspensiones gubernamentales con el objetivo de frenar las corrientes de opinión

---

<sup>346</sup> SÁNCHEZ ILLÁN, J.C., *Prensa y política en la España de la Restauración*, p.53.

<sup>347</sup> Artículo 17 de la Constitución de 30 de junio de 1876.

contrarias al sistema, que perturbaban esa aparente calma característica de la época. Pese a que en la mayoría de las situaciones no existía un peligro real sobre la seguridad nacional o el orden constitucional, la rapidez con la que se adoptaban estas medidas de excepción para solucionar los asuntos de orden público lleva a afirmar a Manuel Ballbé que el régimen liberal de la Restauración no funcionaba “bajo un sistema de normalidad constitucional”.<sup>348</sup>

La suspensión temporal de las garantías constitucionales en circunstancias excepcionales otorgaba la facultad al gobierno de proponer, y, en caso urgente, acordar la suspensión de cualquier clase de publicaciones que excitaran la comisión de delitos contra el Estado, contra la seguridad interior y exterior, y contra el orden público, así como la de secuestrar los ejemplares de dichas publicaciones, remitiendo los mismos al juzgado ordinario competente.<sup>349</sup> Además, dependiendo de la gravedad, las autoridades podían declarar el estado de prevención, alarma o, en caso extremo, el estado de guerra, en el que el poder militar asumía todas las competencias, incluida la jurisdicción en materia de imprenta.<sup>350</sup>

La existencia de estados excepcionales durante todo el período de la Restauración concedía a la administración pública poderes discrecionales, que eran usados para limitar la libertad de prensa consagrada en la Ley de 1883. Fueron realmente llamativas las innumerables ocasiones en las que el gobierno utilizó este recurso, especialmente durante los primeros años del siglo XX, con motivo de la agitación social y política

---

<sup>348</sup> BALLBÉ MALLOL, M., *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Madrid, Alianza, 1984, p. 247.

<sup>349</sup> Artículo 6 de la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870. *Constitución política de la Monarquía española y Leyes complementarias: Orden Público. Ley de 23 de abril de 1870*, X edición, Madrid, Centro editorial de Góngora, 1922, pp. 177-196. Véase apéndice de la tesis: ANEXO Nº1.

<sup>350</sup> Artículos 1, 15 y 32 de la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870.

característica de esta etapa.<sup>351</sup> Durante este período encontramos, también, ejemplos de cómo el poder público recurrió a la suspensión de garantías constitucionales a nivel nacional o provincial, para frenar las corrientes de opinión o noticias publicadas en la prensa que les eran desfavorables, afectando y restringiendo de manera grave la libertad de expresión reconocida en la legislación de imprenta.

Una de las primeras veces en las que la jefatura del Estado adoptó la disposición constitucional fue con motivo del intento fallido de sublevación contra la Restauración borbónica conducido por el general Villacampa, que pretendía instaurar la República, la noche del 19 de Septiembre de 1886. Las cabeceras españolas, en su mayoría, condenaron este suceso con la excepción de los periódicos republicanos *El Progreso* y *La República*, y de *El Liberal* que publicó un artículo con el título “La insurrección y el castigo”, en el que instaba al gobierno de Sagasta a no “exagerar” la rebelión y a no ser cruel ni “más severo de lo necesario” en la sanción que se le iba a imponer a Villacampa. Asimismo, el diario solicitó que la Regente, “que pasa tristemente los días en la aflicción de una viudez prematura”, tuviera clemencia con el republicano y “evitara el dolor de los otros, conservándoles el esposo o hijo extraviado”. *El Liberal* consideraba que era un buen momento para que la monarquía manifestase su lado más humano, ya que “la madre y regente no pueden querer que la cuna del niño-rey comience a flotar sobre arroyos de sangre que podría salpicar su frente”.<sup>352</sup>

---

<sup>351</sup> Se contabilizaron un total de veintitrés suspensiones gubernamentales desde el estallido de la Guerra de Cuba en 1898 hasta la implantación de la Dictadura de Primo de Rivera en 1923. Tal y como se desprende del apéndice del libro: DEL VALLE, J.A., “La censura gubernativa de prensa en España (1914-1931)”, *Revista de Estudios políticos (Nueva Época)*, n°21, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981. Apéndice: Cuadro de suspensiones de garantías constitucionales bajo el Régimen Monárquico: 1875-1931, pp. 119-123.

<sup>352</sup> *El Liberal*, “La insurrección y el castigo”, 22 de Septiembre de 1886.

El artículo produjo indignación en un sector de la prensa,<sup>353</sup> y fue denunciado por atentar contra el sistema monárquico, provocando una reacción inmediata en el gobierno fusionista, que el 22 de septiembre de 1886 suspendió las garantías constitucionales en todo el país. Por primera vez después de la entrada en vigor de la Ley de 1883 se declaraba el estado de guerra en toda la nación, con lo que el régimen de prensa pasó a manos de la autoridad militar durante veintitrés días. Junto a la declaración de guerra, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, mandó una circular a los periódicos, en la que se prohibía dar noticias sobre los sucesos acontecidos el día 19. La disposición contenía una serie de orientaciones dirigidas a todos los directores, por las que debían evitar la publicación de artículos “que se relacionen con la disciplina y orden público, y mucho menos se basen en noticias que no sean oficiales, muchas de aquellas falsas, y que sobre ellas se hagan comentarios de ninguna clase, absteniéndose de copiar artículos y discursos relativos a hechos históricos que tengan conexión con la disciplina y el orden público”.<sup>354</sup> La circular imponía, además, la pena de suspensión a todos los periódicos que incumplieran de forma reincidente las órdenes dictadas por la autoridad militar.

El gobierno liberal justificó las severas medidas contra la prensa, afirmando que la disposición únicamente restringía de forma expresa la libre expresión de ideas con respecto al tratamiento de informaciones que atentaran contra la monarquía, pero dejaba a los periódicos la completa libertad para tratar el resto de problemas que no afectaran a la tranquilidad nacional. Sin embargo, ¿para qué servía la libertad de prensa si no se podía hablar sobre el asunto político que estaba de actualidad y que interesaba a la

---

<sup>353</sup> Entre otros periódicos, *El Globo* criticó las afirmaciones del diario madrileño y afirmó: “*El Liberal* no ha tenido aun tiempo de juzgar los acontecimientos”. Por su parte, *La Correspondencia de España* señaló “por lo que se ve *El Liberal* condenaron el vergonzoso suceso de la noche del domingo, aunque con menos resolución y franqueza que el órgano del posibilismo”. Reproducido en *El Liberal*, “Ecos de la prensa”, 23 de Septiembre de 1886.

<sup>354</sup> Circular del 22 de Septiembre de 1886 del capitán general de Madrid (Pavía), por el que se impone a la prensa fuertes restricciones por la sublevación de Villacampa. *El Liberal*, 23 de Septiembre de 1886. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°20.

opinión pública? Tal y como afirmó *El Liberal*, los periódicos vivían de la actualidad, del suceso del momento, y quitarles esa libertad significaba privarles “del alimento que la nutre vigorosamente”.<sup>355</sup>

La prensa española reaccionó con indiferencia, y periódicos tan importantes como *El Imparcial* o *La Correspondencia de España* reprodujeron en sus páginas la circular sin entrar a valorar la misma. En un primer momento, *El Liberal* optó por mantener silencio hasta que pasaran las excepcionales circunstancias, ya que si realmente manifestaban lo que pensaban “tendríamos que saltar por la comunicación del general Pavía, y este es un salto muy peligroso”.<sup>356</sup> Sin embargo, las informaciones sobre los procedimientos judiciales emprendidos contra los directores de los periódicos republicanos *El Motín* y *El Federalista*, y la suspensión voluntaria de *El Progreso*, encendieron la mecha del diario madrileño, que criticó duramente la falta de respuesta de la prensa política, que no había hecho absolutamente nada ante las medidas impuestas por la autoridad militar, solo “callar y obedecer”, y se cuestionaba la importancia de la prensa periódica cuando en estas circunstancias extraordinarias no había existido ninguna reacción por su parte. El periódico madrileño aseveró tajante: “el periodismo político ha muerto temporalmente y nadie se ha conmovido”.<sup>357</sup>

Durante este período, las autoridades gubernativas adoptaron otros instrumentos legales para limitar de distintas formas la prensa. En 1885, durante el estado de alarma en el que se encontraba la ciudad de Madrid, su gobernador prohibió mediante un bando gubernativo anunciar de viva voz la venta de los periódicos. La legitimidad de la medida se fundaba, nuevamente, en la Ley Provincial, cuyo artículo 11 señalaba: “al

---

<sup>355</sup> *El Liberal*, “Una prueba decisiva”, 25 de Septiembre de 1886.

<sup>356</sup> *El Liberal*, “Hasta mejor ocasión”, 23 de Septiembre de 1886.

<sup>357</sup> *El Liberal*, “Una prueba decisiva”, 25 de Septiembre de 1886.

gobernador corresponde muy especialmente cuidar del orden público en el territorio de su provincia (...).<sup>358</sup> Tal y como ocurría durante el mandato conservador con el artículo 22, los gobernadores de provincia continuaban beneficiándose de las facultades reglamentarias que les eran otorgadas por la Ley Provincial, pudiendo dictar los bandos y disposiciones que creyeran más convenientes para mantener el orden público.<sup>359</sup> El gobierno liberal justificó la medida señalando que los “gritos” en la vía pública pueden representar en determinados momentos “excitaciones al desorden” o bien “motivos o circunstancias que mantengan cierta intranquilidad”,<sup>360</sup> y que en otros países europeos, como Francia, las voces en la calle se encontraban subordinadas a reglamentaciones de policía.

Años más tarde se puso de relieve un nuevo atropello de otra autoridad provincial, que había sancionado al director del periódico satírico *La Tempestad* con una multa de 25 pesetas, por haber desatendido una orden gubernamental que le impedía pregonar el periódico por las calles de la ciudad.<sup>361</sup> ¿Era razón suficiente para prohibir la venta de periódicos en voz alta? Con sensatez, muchos políticos de la época afirmaron que se trataba de una medida injusta, ya que no se producía en la práctica ningún menoscabo al orden público, y en cambio, sí suponía un verdadero perjuicio para las empresas periodísticas, las claras damnificadas de esta disposición, que veían disminuidos sus ingresos por la bajada en la venta de sus publicaciones. Éste no era el único perjuicio, ya

---

<sup>358</sup> Artículo 11 de la Ley Provincial. Reproducido en Congreso, 24 de junio de 1885, Becerra Armesto, cif. 5356.

<sup>359</sup> Las leyes municipales también concedían a los alcaldes una serie de atribuciones gubernamentales en materia de imprenta para mantener el orden público de su localidad. Así quedó expresado en el Real Decreto de 19 de febrero de 1897, que ratificó la decisión del alcalde de Torreveja de suspender un suplemento del periódico *El Eco del Distrito* por entender que las noticias contenidas en el mismo podían producir cierta alarma en el orden público de la ciudad, ya que, en palabras del gobierno conservador, se encontraba dentro de las competencias del alcalde establecidas en el título VI de la Ley Municipal de Torreveja.

<sup>360</sup> Congreso, 24 de junio de 1885, ministro de Gracia y Justicia, cif. 5356.

<sup>361</sup> Congreso, 4 de marzo de 1887, Vicenti, cif. 927.



que la prohibición de pregonar la venta de un periódico planteaba además un vacío legal, porque en el supuesto de que fuera considerado delito, no se encontraba delimitado si el que asumía la responsabilidad era el director de la publicación o el vendedor de la misma.

### **3. ORIENTACIONES GUBERNAMENTALES A LA PRENSA. EL MONOPOLIO INFORMATIVO EN LA GUERRA DE MELILLA (1893-1894)**

La creciente intervención gubernativa en la prensa, motivada por la actividad de policía del ministerio público, tenía como resultado la imposición de otras normas gubernativas de censura encubierta que los mandatarios manejaban para silenciar a los periodistas en tiempos de convulsiones políticas. Uno de los instrumentos más utilizados por el gobierno era el envío de circulares a los periódicos que, bajo una amenaza de suspensión, los impedían abordar determinados asuntos políticos. Como hemos visto, este recurso fue utilizado en 1886 por el general Pavía, quién no dudó en prohibir las noticias relacionadas con la sublevación de Villacampa, y con ello frenar las informaciones vertidas a favor de la República.

Las orientaciones gubernativas dirigidas a la prensa se incrementaban en tiempos de beligerancia, como ocurrió en el transcurso de la guerra de Melilla, y como veremos más adelante, durante el conflicto cubano. La campaña de Melilla en otoño de 1893 se acogió con mucho interés, tanto por la prensa como por la opinión pública, y se desarrolló con un gran despliegue informativo favorecido por la existencia de un cable submarino entre Melilla y Almería, que beneficiaba la comunicación de informaciones entre los corresponsales especiales y las empresas periodísticas. Sin embargo, las trabas

interpuestas por las autoridades gubernativas, especialmente por el ministro de Guerra, obstaculizaron la labor informativa que las cabeceras españolas trataban de desarrollar para informar a la población sobre el conflicto. En un primer momento, las medidas de López Domínguez se centraron en desmentir aquellas informaciones difundidas por los diarios que no le eran favorables, realizando manifestaciones en las que expresaba que todas las noticias vertidas en los periódicos eran falsas.<sup>362</sup> Ante los “duros calificativos” del general, *El Imparcial*, periódico que mejor cobertura proporcionó del conflicto, reafirmó la exactitud de las informaciones publicadas por los periódicos a los que el pueblo “daba crédito”.<sup>363</sup> Para el diario madrileño era notorio el “entusiasmo” con el que se vivían los conflictos de Melilla, no por las excitaciones de los periódicos, sino por una “causa viva, real, profunda y poderosa” que sentía la sociedad española ante el mismo.<sup>364</sup>

Debido al aumento del interés de la opinión pública por las informaciones sobre la contienda internacional, que se encontraba por encima de otros asuntos políticos que se acogían con indiferencia, el gobierno liberal no tardó en adoptar una política de intervención informativa con la que poder controlar todas las noticias sobre el conflicto. En un primer momento, el ejecutivo tomó la decisión de secuestrar el cable telegráfico y establecer la previa censura en Melilla y en Madrid. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes para los liberales, y el 23 de octubre de 1893 el Consejo de Ministros liderado por Sagasta aprobó una serie de instrucciones dirigidas a los periódicos que restringían aún más, si cabe, la libertad de información, asestando un duro golpe a la libertad de prensa consagrada en la Ley de Imprenta que el mismo partido había puesto en marcha años antes. Con el objetivo de asegurarse el monopolio

---

<sup>362</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo español*, p. 533.

<sup>363</sup> *El Imparcial*, “El ataque a Melilla: Inexplicable”, 10 de Octubre de 1893.

<sup>364</sup> *El Imparcial*, “El ataque a Melilla: Error peligroso”, 11 de Octubre de 1893.

informativo de las noticias sobre el conflicto, la disposición declaraba que no existía más verdad oficial que la de los despachos de la autoridad superior de Melilla, y cuantas noticias se apartaran de ellos se considerarían falsas y se castigarían con arreglo al Código penal.<sup>365</sup> Al mismo tiempo, quedaba restringido el cable entre Melilla y Almería, que sólo podía ser utilizado para el servicio oficial, no permitiéndose cursar por el telégrafo de la Península las noticias que estaban en desacuerdo con las de origen oficial. No eran estas las únicas normas impuestas por el gabinete liberal, que no contento con rechazar todo tipo de informaciones que se desviaran de las disposiciones oficiales, amenazaba a los periódicos con entablar las demandas que considerasen oportunas si se propagaban noticias que causaran alarma o desprestigiaran al Ejército.<sup>366</sup> La disposición añadía también que los tribunales perseguirían a los autores de artículos que desobedecieran los dictados del gobierno.

El mundo de la prensa, pese a cumplir las medidas aprobadas por el gobierno, mantuvo una actitud crítica, si bien no todos los periódicos en su conjunto, sí una gran mayoría de ellos. El diario conservador *La Época* lamentó tener que reproducir informaciones solo cuando estaban oficialmente comprobadas, aunque cargaron sus quejas a las “inexactitudes” de algunos corresponsales, y no al gobierno de Sagasta, ya que consideraban que éste podía tener motivos para intervenir las informaciones.<sup>367</sup> *El Liberal*, sin embargo, fue más duro con el poder político y denunció el abuso gubernativo sobre la opinión pública, a la que se le impedía conocer las noticias buenas o malas que tanto le interesaban. Del mismo modo, reivindicó que la prudencia que tanto reclamaba el gobierno a los corresponsales y periódicos debía ser exteriorizada, también, por el Estado, pues pese a que los intereses de la patria estaban por encima de

---

<sup>365</sup> Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de Octubre de 1893. *El Imparcial*, 24 de Octubre de 1893.

<sup>366</sup> *El Imparcial*, 24 de Octubre de 1893.

<sup>367</sup> *La Época*, “Enigma inexplicable”, 24 de Octubre de 1893, núm. 14.766.

la independencia de los periódicos, la libertad de prensa valía mucho para someterla “sin enérgica apelación” a los temores del gobierno. Para *El Liberal*, los intereses estatales “siempre lo hemos de respetar”, pero la falta de libertad “no es fácil que los periódicos lo quieran consentir”.<sup>368</sup>

Por su parte, *El Imparcial* firmó una dura editorial dirigida al general López Domínguez, en la que alegaba que la verdad oficial que trataba de aplicar el ministro era “la más desacreditada de las mentiras”.<sup>369</sup> Según el diario madrileño, el verdadero enemigo de la guerra para el gabinete liberal era el corresponsal, al que le eran negados “el agua y el fuego”, y que, no bastando las trabas informativas existentes, en el supuesto de que éstos consiguieran publicar sus informaciones en las columnas de su periódico, los tribunales se encargaban de perseguirles.<sup>370</sup> *El Imparcial* observó que, en un futuro no muy lejano, no solo los telégrafos sino también el correo podía sufrir los efectos de algún “gabinete negro”<sup>371</sup> que censurara aquellas noticias que no se ajustaran a la versión oficial. Siguiendo la línea de actuación de los demás periódicos, y, a pesar de las duras críticas vertidas hacia el poder, *El Imparcial* acató las instrucciones del Estado: “La medida está tomada y a ella habrá que atenerse”.<sup>372</sup>

---

<sup>368</sup> *La Correspondencia de España*, “Ecos de la prensa: El Liberal”, 23 de Octubre de 1893.

<sup>369</sup> *El Imparcial*, “Fuera Corresponsales”, 25 de Octubre de 1893.

<sup>370</sup> *El Imparcial*, “Fuera Corresponsales”, 25 de Octubre de 1893.

<sup>371</sup> El “gabinete negro” surgió como órgano de censura durante el gobierno de Napoleón, y su objetivo era interceptar los correos a través de los que se pasaba información, así como espiar a políticos y periodistas para controlar toda la información emitida por los periódicos franceses, y prohibir o suprimir, en su caso, las publicaciones con las que el gobierno no estaba conforme. En España se utilizaba ésta denominación para referirse a la censura llevada a cabo por el ministerio de la Gobernación.

<sup>372</sup> *El Imparcial*, “Fuera Corresponsales”, 25 de Octubre de 1893.

#### 4. LA CENSURA TELEGRÁFICA EN ÉPOCAS DE CONFLICTO

Ésta no era la primera, ni la última situación, en la que las autoridades gubernativas utilizaban el servicio telegráfico para limitar la libertad de prensa, lo que fue causa de múltiples quejas por parte de los rotativos españoles. El poder público era consciente de la función tan importante que cumplía el servicio telegráfico como medio de transmisión de la información indispensable en aquella época para las empresas periodísticas. Por ello, y a pesar de que fueron numerosas las veces que el gobierno utilizó el servicio telegráfico para manipular y censurar a los periódicos, no podemos pasar por alto que también se promovieron algunas medidas para favorecer el servicio del mismo a las empresas periodísticas con escasos recursos para utilizarlo. Con este objetivo, Sagasta, siguiendo con la línea de apertura liberal y social característica de su mandato largo, aprobó en 1888 una ley por la que se rebajaba la tarifa de aquellos telegramas que desde cualquier punto de España se dirigieran a las redacciones de los periódicos políticos para su incursión en los mismos.<sup>373</sup> Esta disposición favoreció a muchas de las empresas periodísticas, especialmente las de provincia, que tenían más dificultades a la hora de comunicarse mediante el cable telegráfico.

Sin embargo, las autoridades gubernativas dedicaban más esfuerzo a entorpecer la libertad de la prensa que a beneficiarla, y, a pesar de esta medida, que facilitaba la comunicación entre las empresas y los telégrafos, fueron innumerables las veces que el gobierno utilizó el telégrafo para evitar la publicación de noticias que no les interesaba que fueran conocidas en la sociedad. De entre todas las formas en las que se practicaba la censura telegráfica, la más común fue la interrupción de los telegramas que no

---

<sup>373</sup> Ley rebajando la tarifa de los telegramas que se publicaran en la prensa periódica. Congreso, 12 de abril de 1888, apéndice 6º al núm. 91.

llegaban nunca a su destino. Aunque no fue la única. Durante este período, los diarios denunciaron ilegalidades en la administración del telégrafo: recortes en los comunicados de los corresponsales, la preferencia a los periódicos ministeriales frente a la prensa de oposición, que publicaban las noticias con horas de antelación, o, incluso, la retención durante un tiempo determinado en el mismo servicio telegráfico de aquellos telegramas a los que no convenía dar publicidad y con el objetivo de que éstos perdiesen actualidad.

Así pues, se vertían en el Parlamento una gran cantidad de quejas por la interceptación gubernamental de telegramas, a pesar de que el Código Penal condenaba a la multa de 125 a 1.250 pesetas al “funcionario público, que no siendo autoridad judicial, detuviere la correspondencia privada confiada al correo o recibida y cursada a su destino por la primera estación telegráfica en que se hubiere entregado”.<sup>374</sup> Las interrupciones se multiplicaban en épocas de conflictos, siendo la primera medida que adoptaba el ejecutivo para evitar el desorden público que pudieran provocar ciertas noticias.

Poco tiempo después de promulgar la Ley de Imprenta, se planteó en el Parlamento la actuación del “gabinete negro” del ministerio de Gobernación, que no solo inspeccionaba todos los telegramas que se dirigían a las empresas periodísticas de la oposición en las provincias, sino que, además, los detenía de forma deliberada para que no llegaran a tiempo de publicarse en sus respectivos periódicos. La interrupción de telegramas de forma ilimitada ya había sido denunciada por varios diarios antes de la aprobación de la Ley de 1883, por lo que ésta práctica supuso una continuidad en la forma de proceder del gobierno respecto al telégrafo.<sup>375</sup>

---

<sup>374</sup> Artículo 218 del Código Penal de 1870.

<sup>375</sup> En 1880 *El Liberal* acusó al gobierno de Cánovas de retener “el tiempo necesario” los telegramas que no le interesaban. *El Liberal*, 19 de junio de 1880. Meses más tarde se lamentó de que “el telégrafo de Madrid no sirve para nada ni para nadie”, declarando que “para telegrafiar al extranjero hay que remitir

Así lo puso de manifiesto el senador Allende Salazar, quién denunciaba el trato que estaban recibiendo en Bilbao periódicos como *El Norte* o *El Noticiero Bilbaíno*, cuyos telegramas estaban siendo interceptados por las autoridades durante un tiempo indeterminado, para dejarlos cursarse al día siguiente cuando “ya no servían de nada”.<sup>376</sup> El político se quejó de que, pese a que las líneas telegráficas no estaban interrumpidas, los empleados de los telégrafos no daban salida a los telegramas en los que se arremetía contra el gobierno, y sí a aquellos en los que no se decía “toda la verdad”,<sup>377</sup> lo que suponía un claro ataque a la libre información. La defensa del gobierno se basaba en que los telegramas se cursaban con más demora que el resto, por lo que no existía interrupción telegráfica como tal. Sin embargo, esta práctica resultaba claramente abusiva para los periódicos de la oposición, ya que el retraso en las comunicaciones imposibilitaba el trabajo de los periodistas y suponía un claro perjuicio económico para las empresas periodísticas, a las que no se les devolvía el dinero por la tardanza, como sí se hacía cuando se interrumpían las líneas.

Resulta muy gráfico el debate que se generó en el Congreso de los Diputados en mayo de 1898, en plena ebullición de la guerra de Cuba, con motivo de la censura telegráfica que se venía practicando desde hacía meses y que perjudicaba principalmente a los periódicos de provincia. El periodista Rafael de la Viesca cuestionó la eficacia de la censura telegráfica, ya que, en su opinión, si el objeto de ésta era evitar la alarma y la intranquilidad producida por la publicación de noticias falsas, en la práctica ese mal no se impedía, ya que “cuando no corren los telegramas y no se reciben las noticias, se

---

los despachos a la frontera, por correo y el servicio entre la corte y las provincias resulta completamente ineficaz por el retraso y mutilaciones que se permite la censura”. *El Liberal*, 16 de diciembre de 1880.

<sup>376</sup> Senado, 5 de Enero de 1885, Allende Salazar, cif. 1550.

<sup>377</sup> Senado, 5 de Enero de 1885, Allende Salazar, cif. 1550.

ejercita la fantasía y se inventan noticias estupendas”.<sup>378</sup> El político no puso en duda la necesidad de la censura en tiempos de guerra, sino la forma en la que se ejercitaba la misma, que en ningún caso justificaba el rigor telegráfico y el retardo en recibir los telegramas en las redacciones de los periódicos, ya que suponían muchos perjuicios para las empresas periodísticas de provincia que “gastan inútilmente su dinero, su actividad y su tiempo”.<sup>379</sup> El director de *La Publicidad*, Emilio Junoy, fue aun más lejos en sus declaraciones, y afirmó que la censura telegráfica venía a “herir de muerte en pleno corazón” a la prensa moderna.<sup>380</sup> Además, el político republicano reveló la desigualdad del criterio gubernativo con la que se practicaba la misma, pues beneficiaba a la prensa de gran circulación de Madrid, que podía publicar muchos cablegramas que no se dejaban transmitir por las empresas periodísticas de provincias.

Para el gobierno liberal la censura telegráfica era un derecho de la administración pública, que, casualmente, le era conferido por las disposiciones legales que el poder mismo se encargaba de aprobar. Esta práctica se creía totalmente necesaria en tiempos de crisis, en los que era crucial para el gobierno dejar sin curso aquellos telegramas que informaban sobre la guerra extranjera, y para la que el gabinete liberal se comprometió a ejercer “con la mayor prudencia”, y procurando conciliar los intereses públicos, “que en ocasiones aconsejan que no circulen determinadas noticias”.<sup>381</sup> Como analizaremos en el capítulo dedicado al conflicto colonial, en la práctica, las interrupciones se realizaban con telegramas o telefonemas que contenían simples apreciaciones sobre la conducta del gobierno, o comentarios como “el ministro de Estado ha llegado a incomodarse” o “el ministro de Hacienda está enfermo”, que nada tenían que ver con el

---

<sup>378</sup> Congreso, 6 de mayo de 1898, Viesca, cif. 319.

<sup>379</sup> Congreso, 6 de mayo de 1898, Viesca, cif. 319.

<sup>380</sup> Congreso, 6 de mayo de 1898, Junoy, cif. 320.

<sup>381</sup> Congreso, 6 de mayo de 1898, ministro de Gobernación, cif. 320.



orden público, como así lo denunció Junoy.<sup>382</sup> En cualquier caso, y pese al lamento general acerca del abuso gubernamental, para el gobierno liberal de la época no existía ninguna duda acerca de la plena existencia de la libertad de prensa a pesar de la existencia de la censura telegráfica, y se vanagloriaban de que todos los periódicos, bien por medios telegráficos o bien por otros medios de información que tuvieran a su alcance, publicaban las noticias “ciertas o inciertas” que estimaban convenientes.<sup>383</sup>

## **5. LAS ARBITRARIEDADES GUBERNATIVAS CONTRA LOS PERIÓDICOS DE LA OPOSICIÓN. EL ATROPELLO CONSTANTE A LA PRENSA REPUBLICANA**

A lo largo de este capítulo hemos analizado distintos mecanismos de censura utilizados por los dos partidos que se turnaban en el Gobierno: desde las órdenes dirigidas a los periódicos para prohibir determinados asuntos políticos o las directrices dadas a los tribunales para perseguir noticias contrarias a sus intereses, hasta la interrupción de telegramas o la utilización interesada del telégrafo. A estas intervenciones hay que añadir los atropellos contra la prensa que se pusieron de relieve a lo largo de estos años, especialmente abusivos en lo concerniente a los diarios que mantenían una línea opuesta a la del gobierno correspondiente. Como veremos a continuación, el poder público restringió la libertad de imprenta de los periódicos de la oposición, violando la resolución del Tribunal Supremo que expresamente afirmaba: “los ideales políticos de una publicación periódica no pueden influir como elemento para determinar si el artículo o suelto de un periódico es o no justiciable”.<sup>384</sup>

---

<sup>382</sup> Congreso, 6 de mayo de 1898, Junoy, cif. 320.

<sup>383</sup> Congreso, 6 de mayo de 1898, ministro de Gobernación, cif. 319.

<sup>384</sup> STS 11 de diciembre de 1888. *Gaceta de Madrid*, 15 de abril de 1889, p. 105.

Las actuaciones gubernativas se manifestaban de distintas formas. En determinadas ocasiones iban dirigidas a los redactores de estas publicaciones, que eran asaltados en plena calle por las autoridades, o interrumpidos en sus redacciones, donde se les impedía por la fuerza continuar congregados.<sup>385</sup> A su vez, los directores de estos periódicos “molestos” eran encarcelados de forma injustificada,<sup>386</sup> situación aprovechada por el poder público que los retenía durante meses para luego absolverlos libremente o sobreseer la causa por no existir delito. Estos excesos gubernativos eran muy utilizados porque no suponían ningún coste para la administración pública, que no estaba obligada a pagar una indemnización al periodista que resultara impune de un procedimiento judicial,<sup>387</sup> circunstancia que favorecía al gobierno, que perseguía de forma arbitraria a los periódicos sin faltar a las leyes, infundiendo miedo y desprotección a los periodistas, y silenciando las opiniones que no querían que llegaran a la sociedad durante un determinado tiempo.

La preferencia por los diarios “amigos” fue la tónica general de todo el período de la Restauración, que al estar asentado bajo un régimen de turno de partidos con ideologías diferentes producía que cada alternancia en el poder significara un cambio en la prensa de oposición, y por tanto, de las publicaciones susceptibles de ser perseguidas. Ni los propios líderes gubernamentales se libraban del rigor excesivo con el que el gobierno de turno actuaba contra los periódicos, ya que, aquellos que hostigaban a la prensa en un

---

<sup>385</sup> Senado, 29 de Mayo de 1884, Rojo de Arias, cif. 70.

<sup>386</sup> Por medio de las acusaciones del periódico *El Progreso*, el senador Maluquer denunció la triste situación en la que se encontraban los periodistas en la cárcel, a los que se les negaba las necesidades básicas que otros presos tenían, como la de poseer en su celda un brasero con el que combatir el frío. Además, se criticaba que los periodistas estuvieran en las celdas de los presos más peligrosos. Senado, 16 de Abril de 1885, Maluquer, cif.2110.

<sup>387</sup> En España, al contrario que en otros países, no regía el principio de indemnización en los procedimientos judiciales contra los periodistas. Para subsanar esta falta de compensación económica, Maluquer solicitó que se otorgara la gracia del indulto a aquellos periodistas que se encontraban desde hacía meses en prisión provisional y aun no habían sido procesados. Senado, 16 de mayo de 1887, Maluquer, cif. 1978.

determinado momento podían sufrir en el futuro las consecuencias de sus propias actuaciones. Esto fue lo que ocurrió en 1884 con el artículo “El Fiscal de Imprenta” escrito por Sagasta, que se encontraba durante ese período en la oposición, y contra quien el ministerio fiscal, advertido por Cánovas, abrió un procedimiento judicial por delito de imprenta. En el artículo publicado en *La Iberia* el líder del partido liberal denunciaba la actuación del gobernador de Madrid, el conservador Fernández Villaverde, quién, “a la chita callando” se había convertido en fiscal de imprenta “por afición o por encargo”. Sagasta acusaba al gabinete conservador de haber “obsequiado” a la prensa con esta figura que estaba desterrada con la actual Ley de 1883, y atestiguaba que las “cincuenta y tantas” denuncias que pesan sobre las publicaciones de Madrid eran obra del gobernador, y que otras muchas que se intentaban no estaban prosperado porque las desestimaba el fiscal de la Audiencia, quién “ha llegado a hartarse de recibir tantos periódicos marcados con lápiz de colores, y señalados la mayor parte de las veces sin razón ni motivo”.<sup>388</sup> El procedimiento judicial contra el líder del partido liberal se resolvió el 24 de febrero de 1885 con la absolución de Sagasta por no existir “apreciaciones, frases ni conceptos constitutivos de ningún delito”.<sup>389</sup>

El sistema bipartidista sobre el que se asentaba el régimen hizo que los periódicos conservadores también soportaran abusos por parte del ejecutivo liberal cuando estos ocupaban la presidencia del Gobierno. En noviembre de 1888, con motivo de una multitudinaria manifestación en Madrid contra la gestión llevada a cabo por Cánovas y Villaverde, se denunciaron los atropellos sufridos por la redacción de *La Época*, propiedad del partido conservador, que, junto con otras de igual línea ideológica, como

---

<sup>388</sup> *La Iberia*, “El Fiscal de Imprenta”, 17 de diciembre de 1884.

<sup>389</sup> *La Iberia*, “Del Congreso”, 24 de Febrero de 1885.

*Las Ocurrencias* y *El Estandarte*, habían sido atacadas con piedras por la muchedumbre.<sup>390</sup> *La Época* declaró que sus redactores habían sido apedreados por los manifestantes congregados y que, a pesar de las llamadas de auxilio al gobernador, las fuerzas del orden público no llegaron al lugar de los hechos hasta que se dieron por concluidos los altercados.<sup>391</sup> La pasividad del gobierno liberal no era lo único de lo que se quejaba el diario conservador, que denunció además las directrices de la administración pública a sus periódicos ministeriales, que habían relatado de forma diferente los ataques sufridos por la prensa conservadora.<sup>392</sup>

A nivel territorial, no era la prensa de Madrid la que más sufría este tipo de abusos gubernativos, sino los periódicos de las provincias, que recibían un trato excesivo por parte de los alcaldes o autoridades cuando criticaban su gestión. Así ocurrió con el director del periódico malagueño *El Microbio*, quién había sido detenido de forma ilegal y trasladado al ayuntamiento, donde “cuatro individuos armados le maltrataron brutalmente”,<sup>393</sup> con motivo de la campaña seguida en su periódico contra el alcalde de la localidad. Ante este tipo de altercados la prensa era la primera en solidarizarse y exigir justicia al ministerio público mediante comunicados en los que se reclamaba a los políticos, muchos de ellos periodistas o directores como ellos, que formularan la protesta correspondiente ante el Parlamento. Así, los directores de los distintos periódicos de Málaga, independientemente de la ideología de sus publicaciones,<sup>394</sup> enviaron un telegrama a los diputados de la provincia de Málaga mediante la que

---

<sup>390</sup> *La Época*, “El Motín de Madrid”, 12 noviembre de 1888.

<sup>391</sup> *La Época*, “El reinado de la anarquía”, 12 noviembre de 1888.

<sup>392</sup> La información que se proporcionaba de estos sucesos en otros diarios de distinta ideología distaba mucho de la versión conservadora. El periódico liberal *La Iberia* puso en entredicho que los manifestantes hubieran atacado con piedras la redacción, y señaló que algunos habían visto como los propios redactores de *La Época* había roto sus cristales para hacerse las víctimas. *La Iberia*, 12 de noviembre de 1888.

<sup>393</sup> Congreso, 23 de noviembre de 1894, ministro de Gobernación, cif. 233.

<sup>394</sup> El telegrama estaba firmado por los siguientes periódicos: *Las Noticias*, *La Unión*, *El Mercantil*, *El Diario de Málaga* y *El Expreso*.

protestaban contra el “brutal atropello”, y pedían la intervención de los tribunales para el esclarecimiento de los hechos.

Respecto a la ideología de los periódicos, la prensa de oposición contra la que se cometían más abusos y excesos gubernamentales era la republicana, que soportaba el hostigamiento permanente tanto de los gobernadores conservadores como de los liberales, no solo estatales, sino de todos los municipios y provincias del territorio español, que se encontraban bajo el dominio del sistema monárquico gracias al recurso del caciquismo imperante en la Restauración. Las controversias suscitadas en torno a la redacción de la Ley de Imprenta liberal, con la que no comulgaban los republicanos, ponían en preaviso a los gobernadores sobre la línea que iban a seguir estos periódicos, que se caracterizaban por ser publicaciones muy polemistas contra el poder y la Corona. Para el Gobierno era fundamental el respeto a la monarquía como institución indispensable para mantener la estabilidad del régimen, y por ello aumentan su rigor y control. Para evitar esta estrecha vigilancia gubernativa se creó la figura del “director de paja”, un director ficticio que asumía la representación de la publicación y al que se le adjudicaban las responsabilidades penales ante las posibles denuncias.<sup>395</sup> Aun así, la prensa republicana era muy inestable económicamente, y algunas publicaciones se vieron en la obligación de suspender sus tiradas al no encontrar financiación de las empresas periodísticas, o tropezar con impedimentos para utilizar las imprentas locales de la localidad en la que se situaba la misma.<sup>396</sup>

---

<sup>395</sup> Gracias a la figura del director de paja, Alejandro Lerroux se hizo cargo de la dirección efectiva del periódico *El País*. El diario catalán más influyente del siglo XX, *La Veu de Catalunya*, también tuvo un director de paja.

<sup>396</sup> Como ejemplo podemos citar el periódico *El Republicano*, que tenía su sede en Santiago de Compostela (La Coruña), pero imprimía sus publicaciones en Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

Los últimos años del siglo XIX fueron bastante convulsos para los republicanos, que vieron como sus publicaciones se veían fuertemente intervenidas por el gobierno, independientemente del partido que se encontrara en el poder, siendo incontables los abusos y sanciones a los que se vieron sometidas durante el conflicto colonial, y coincidiendo con la entrada en la escena periodística del republicano Alejandro Lerroux, director de *El Progreso* y más tarde de *El País*. Aun así, algunos ejemplos durante esta etapa ponen de manifiesto la especial inquina del gobierno hacia este tipo de prensa política. Poco tiempo después de la aprobación de la legislación de imprenta, concretamente el 5 de septiembre de 1883, el periódico republicano *El Navarro* insertó un artículo y una carta que habían publicado otros diarios españoles y extranjeros, en los que informaba sobre una sublevación republicana, sin emitir comentario alguno. A pesar de que se trataba de una mera narración de hechos, la Audiencia de Navarra condenó al director del periódico republicano como autor de una falta de imprenta contenida en el artículo 584 del Código Penal.<sup>397</sup> En 1886 se discutieron en el Parlamento las arbitrariedades soportadas por el director de *La Republica*, detenido y procesado por “no tener la cédula personal en su poder”, y la del director de *La Maza de Fraga* publicado en Ciudad Real, quién ingresaba “por equivocación” en el departamento de presos comunes de la cárcel, junto con aquellos condenados a cadena perpetua por haber cometido asesinato.<sup>398</sup>

Con el paso de los años, la persecución soportada por los periodistas republicanos fue en aumento, y con ello las denuncias en el Parlamento. En 1892 se daba a conocer en el Senado que varios directores y redactores se encontraban en prisión preventiva desde

---

<sup>397</sup> La sanción fue anulada por el Tribunal Supremo en estos términos: “es evidente que no son apologeticos ni encomiásticos de hechos que constituyen delitos, y que el juez de Pamplona, al suponer lo contrario en la sentencia que ha dictado y condenar al autor, le ha infringido incurriendo en error de derecho”. STS 19 de enero de 1884.

<sup>398</sup> Congreso, 23 de junio de 1886, Peñalva, cif 610; Congreso, 26 de junio, Sr. Peñalva, cif. 646-648.

hacía meses. Entre ellos el director de *El Quijote*, periódico satírico de Madrid, quién llevaba retenido ocho meses por la publicación de unos cantares que informaban sobre las infracciones de las disposiciones vigentes cometidas por las autoridades de provincia.<sup>399</sup> El senador Muro criticó que la prisión provisional de los periodistas “que hoy pueden ser republicanos, mañana puede ser monárquicos” no se ajustaba a la ley,<sup>400</sup> ya que para éstos no existía la posibilidad de abonar una fianza personal o en metálico para salir de la cárcel. Muro se quejó también de que el director republicano compartía celda con los peores delincuentes, y exigió un traslado inmediato, “ya que tiene la desgracia de verse privado de la libertad, no debe ser humillado hasta el punto de hacerse compañero de los ladrones y asesinos”.<sup>401</sup> Era tal el celo con el que se trataba de silenciar a los republicanos que las denuncias vertidas en ambas Cámaras iban también en sentido contrario, y tanto conservadores como liberales, reprocharon los ataques hacia la monarquía vertidos en la prensa republicana. En 1894 el político conservador Sánchez de Toca acusó al periódico republicano *La Bandera Federal Valenciana* de propagar ideas separatistas y comentarios antimonárquicos, exigiendo su secuestro a las autoridades gubernativas por considerarlo una amenaza para el equilibrio del sistema.<sup>402</sup>

En definitiva, a lo largo de este capítulo ha quedado justificada la importancia de realizar un análisis más allá del puramente teórico, a la hora de comprobar la efectividad real de la legislación de imprenta durante los años posteriores a su promulgación. La relación que tiene un gobierno determinado con la prensa se exterioriza, en un primer momento, en la legislación, siendo ésta el elemento más visible de la estructura informativa. Pero no hay que olvidar la enorme importancia que tiene la aplicación de la

---

<sup>399</sup> Senado, 14 de Julio de 1892, Gonzalez Cherma, cif. 7779.

<sup>400</sup> Senado, 15 de Julio de 1892, Muro, cif. 7800.

<sup>401</sup> Senado, 15 de Julio de 1892, Muro, cif. 7800.

<sup>402</sup> Congreso, 25 de abril de 1894. Sánchez de Toca, cif. 3796.

misma por las autoridades públicas, a la hora de hablar de una realidad como es la efectividad de la libertad de prensa en la España de la Restauración. Ateniéndonos a esto último, durante los últimos años del siglo XIX, y pese a los avances proporcionados por la nueva legislación liberal, encontramos que las posibilidades con las que contó el gobierno a la hora de controlar e intervenir a la prensa fueron múltiples, no solo por la vía legal, con el uso realmente abusivo de la suspensión de garantías constitucionales, o acogiéndose a preceptos de otras leyes para proceder de forma arbitraria contra las publicaciones de distinta línea política, sino recurriendo en la mayoría de las ocasiones a prácticas ilegales (el asalto a los vendedores o la prisión ininterrumpida y sin alegar causa alguna sufrida por los directores de la prensa de la oposición) o presiones indirectas (las orientaciones realizadas a la prensa sobre que asuntos tratar o las indicaciones a los jueces pese a la independencia reconocida en la ley), lo que entorpecía gravemente la labor de los periodistas y dejaba en un segundo plano las buenas críticas obtenidas tras la aprobación de la legislación de prensa.



### **3. LA INJERENCIA DEL PODER MILITAR EN EL SISTEMA INFORMATIVO ESPAÑOL**

El control de la información ejercido por el poder civil no fue el único que influyó en la puesta en práctica de la Ley de Policía de Imprenta de 1883. Durante la Restauración cobró especial importancia la intervención informativa por parte de las autoridades militares, que fue clave en el desarrollo efectivo de la libertad de prensa en el período analizado, al verse este derecho progresivamente limitado por una serie de actuaciones llevadas a cabo por el estamento militar.

#### **1. DEL PROYECTO CIVIL CANOVISTA AL MILITARISMO IMPERANTE A FINALES DEL SIGLO XIX**

Uno de los objetivos perseguidos por Cánovas, al asumir el poder en 1874, era acabar de forma definitiva con los pronunciamientos militares característicos de años anteriores, y así conseguir la estabilidad del régimen recién instaurado. Con este propósito, el líder conservador ideó un sistema en el que la institución militar tenía la capacidad de gestionar sus propios asuntos, coordinándose con el resto de los poderes públicos del Estado a través de la figura del Rey, jefe supremo del Ejército. Esta alianza entre la milicia y la monarquía constituía la base de la Restauración, en la que el poder militar se identificaba con el sistema político, y asumía los intereses nacionales como propios. Sin embargo, esta ficticia separación de parcelas entre el poder civil y el militar no se materializó en la práctica, dándose con frecuencia el remplazo entre ambas administraciones en importantes esferas nacionales. Para Fernández Almagro, Cánovas

no quiso prescindir de la intervención militar,<sup>403</sup> como así lo corrobora también Manuel Ballbé, para el que la nueva ordenación de las instituciones, reconocida en la Constitución de 1876, se moduló sobre la base de una fórmula ficticia, en la que Cánovas utilizó al ejército como “garante del nuevo orden establecido”.<sup>404</sup>

Esta injerencia del Ejército en los asuntos públicos se debió, principalmente, a que el sistema canovista otorgaba significativas competencias a los militares, como la defensa de la Nación, bajo las órdenes del ministro de Guerra, un cargo que ocupaban los generales de prestigio del propio estamento militar; o la indispensable función de salvaguardar el orden social en casos extremos, que convirtió al órgano castrense en vector del régimen político. Para Manuel Ballbé, el sistema de orden público configurado por Cánovas se caracterizaba, entre otros rasgos, por el afianzamiento de una administración policial militarizada; la utilización continuada de la Guardia Civil en reuniones y manifestaciones,<sup>405</sup> especialmente recurrente durante los últimos años del siglo XIX, y el conocimiento por el Consejo de Guerra de los actos militares, y de otras acciones injuriosas o delictivas cometidas por paisanos contra los oficiales.<sup>406</sup>

No fueron pocas las veces que el Ejército intervino en asuntos de Estado, ya que, como veíamos en capítulos anteriores, durante esta época eran frecuentes las declaraciones de estados de guerra ante la menor agitación social. Esta circunstancia fue posible porque la Ley de Orden Público de 1870, junto a otras disposiciones sobre la materia,<sup>407</sup>

---

<sup>403</sup> FERNÁNDEZ ALMAGRO., M., *Historia Política de la España contemporánea*, Madrid, Alianza, 1972. p.239.

<sup>404</sup> BALLBÉ MALLOL, M., *Orden público y militarismo en la España constitucional*, pp. 226-227.

<sup>405</sup> La Guardia Civil estuvo al margen del Ejército hasta la Ley de 29 de noviembre de 1878, que reconocía expresamente en su artículo 22 la inclusión de ésta como un cuerpo más del estamento militar.

<sup>406</sup> BALLBÉ MALLOL, M., *Orden público y militarismo en la España constitucional*, pp. 247-248.

<sup>407</sup> La más importante fue la Circular de 10 de agosto de 1885 “Dando instrucciones para la mejor inteligencia de los artículos de la Ley de Orden Público que se refieren a la declaración y levantamiento

concedía la posibilidad de que fueran los militares los que, de forma unilateral, tomaran la iniciativa de declarar esta excepcional situación al margen de las autoridades civiles.<sup>408</sup> La contradicción existente entre el reconocimiento de libertades a todos los ciudadanos garantizada en la Constitución de 1876, y la restricción gubernativa a su ejercicio a través de la recurrente proclamación del estado de guerra, sin que tuviera conocimiento siquiera el Parlamento, produjo el inevitable trasvase de competencias del poder civil al militar, lo que irremediamente afectó la prensa. Bajo estas circunstancias, los oficiales y altos cargos del Ejército tenían más posibilidades de imponer medidas y trabas a la libertad de información, pasando por encima de la Constitución y de la Ley de Imprenta, en el momento en que leían una mínima crítica en los periódicos.

La presencia militar se fue ampliando con el paso de los años y, a pesar de la facilidad y frecuencia con la que se declaraba el estado de guerra, el gobierno español requería cada vez más la presencia de las autoridades militares en revueltas y exaltaciones sociales, sin ni si quiera utilizar el manido recurso al establecimiento del estado de excepción.<sup>409</sup> Este protagonismo adquirido en la esfera política, que le había otorgado el propio Estado, fue utilizado por la institución castrense para presionar al poder público cuando consideraban que su honor había sido perjudicado con la pluma de los escritores. En la mayoría de ocasiones, el gobierno no tuvo más remedio que satisfacer los intereses y las exigencias de los oficiales para garantizar con ello la supervivencia de la Restauración. Aun así, durante este período, existen ejemplos de quejas ante el Parlamento, que dejaban entrever la alarma existente entre los políticos por el aumento de dominio de los

---

del estado de guerra”, que calificaba las manifestaciones de protesta contra el régimen como “rebeldes y sediciosas” y otorgaba a la jurisdicción militar la competencia para conocer de éstas.

<sup>408</sup> Artículo 15 de la Ley de Orden Público de 1870.

<sup>409</sup> Así ocurrió en los sucesos acontecidos en Santander, en septiembre de 1893, o en Alcoy en agosto de 1895, donde el orden público se mantuvo con la presencia de las fuerzas del ejército y la guardia civil.

militares en la sociedad. Así ocurrió con un suelto publicado en *La Correspondencia Militar* el 10 de julio de 1887, en el que se declaraba la importancia de reformar la ley del ejército, sin que los diputados discutieran sobre ella. La publicación fue denunciada por el diputado Sánchez Bedoya, quién entendió que atacaba gravemente la estabilidad de la Nación, y dejaba entrever el dominio del poder militar por encima de otros estamentos: “está próximo el día en que los pretorianos lleguen a las puertas de este edificio y nos impongan por la fuerza aquello que hay que discutir y votar”.<sup>410</sup> El gobierno liberal, a través de Alonso Martínez, por aquel entonces ministro de Gracia y Justicia, corroboró también que se trataba de un escrito ofensivo, que debía ser perseguido por el juez correspondiente.

Con el paso de los años, el agotamiento del sistema de turno de partidos, consecuencia directa de la creciente debilidad del gobierno que se orquestaba bajo un esquema de falseamiento electoral nada representativo de la opinión pública, facilitó el tránsito del proyecto civil canovista a un militarismo cada vez más notorio dentro de nuestras fronteras.<sup>411</sup> Así pues, a pesar de que el ejército no intervenía en la política como en épocas anteriores, la permanente asunción de funciones civiles por parte de los militares hizo que la institución evolucionara hacia formas autónomas de poder y, en lugar de quedar subordinado a los intereses públicos, se produjera un progresivo intervencionismo, que se manifestó especialmente en el último cuarto de siglo.<sup>412</sup> La trascendental aprobación de la Ley de Jurisdicciones en 1906, de la que nos ocupamos más adelante, fue el paso definitivo para esta conversión, por la que el Ejército se erigió

---

<sup>410</sup> Congreso, 23 de junio de 1887, Sánchez Bedoya, cif. 3878-3879.

<sup>411</sup> Al hablar de militarismo español, los historiadores se refieren a un tipo de militarismo volcado al interior (a los asuntos internos españoles), y no un militarismo exterior, hacia otros países, inexistente por la insuficiente fuerza político-militar de España como potencia en el contexto mundial.

<sup>412</sup> Para ampliar la información sobre el militarismo en la época de la Restauración, se puede consultar: SECO SERRANO, C., *Militarismo y civilismo en la España contemporánea*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984. CARDONA, G., *El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil*, Madrid, Siglo XXI, 1983. LLEIXA, J., *Cien años de militarismo en España*, Barcelona, Anagrama, 1986.

como columna vertebral del régimen y del modelo de sociedad existente, siendo, a su vez, en un factor decisivo en la crisis de la Restauración.

## **2. EL TRATAMIENTO DE LOS ASUNTOS MILITARES EN LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN**

### **1. LA EXISTENCIA DE LOS ÓRGANOS DE PRENSA CASTRENSE**

La creciente injerencia del poder militar en las cuestiones políticas tenía su reflejo en los medios de información, que fueron utilizados por los soldados para debatir todo tipo de materias. Pese a que una gran parte de la opinión pública reconocía la existencia de los diarios militares, existieron, durante este período, voces discrepantes, como la de los máximos responsables políticos y militares, que afirmaban que no existía la prensa militar, y que, simplemente, entre la variedad de asuntos sobre los que informaban los periódicos, se encontraban cuestiones que afectaban al ejército y a la armada española. Este pensamiento se basaba en la idea de que los soldados no tenían la suficiente capacidad para abordar asuntos que fuesen más allá de las funciones que estrictamente se les encomendaba, por lo que no existía un pensamiento militar que constituyese algo más que el simple reflejo de las actividades profesionales o de la asunción de los valores patrióticos. La razón fundamental que esgrimían éstos era que al ejército se le educaba para luchar, no para pensar, ni para tener y difundir las ideas políticas por medio de órganos de prensa. Esta era la razón fundamental en la que se apoyaban las autoridades gubernativas y militares de la Restauración para dictar normas que impedían las manifestaciones políticas realizadas por los sectores militares.

En oposición a esta opinión se encontraban otros sectores sociales para los que sí existía un pensamiento militar propiamente dicho, que capacitaba a los soldados para escribir sobre todo tipo de asuntos en los periódicos. Esta afirmación se apoyaba en la idea de que, a pesar de existir unos valores y funciones comunes a todos los militares, dentro del estamento castrense, dependiendo del ámbito geográfico y las divisiones estructurales existentes en el seno del mismo, coexistía una diversidad de planteamientos y posturas que configuraban ese pensamiento militar. Con base en este razonamiento se entendía la existencia de los diarios militares como canales a través de los cuales se expresaban los distintos sectores del ejército, especialmente los soldados que trabajaban en los cuarteles, que no tenían otros medios para difundir su opinión, al contrario que los oficiales y los tenientes que ocupaban cargos de diputados o senadores en las Cámaras.

Desde una panorámica general, podemos afirmar que los periódicos militares mantenían posiciones enfrentadas dependiendo de las circunstancias políticas o sociales del momento, y se caracterizaban por informar tanto de las noticias de tipo general como de las cuestiones militares. Siguiendo la tónica de las publicaciones civiles, la mayoría de los periódicos militares de finales del siglo eran de Madrid,<sup>413</sup> aunque, se diferenciaban de éstos en que tenían un público minoritario y no se encontraban unidos a ningún partido, ni tampoco a las órdenes de los ministros de Guerra o de Marina. Representaban el pensamiento de un sector del ejército y difundían reivindicaciones sobre la guerra o informaban de los hechos acontecidos en España que les afectaban. En

---

<sup>413</sup> La Ley de Policía de Imprenta de 1883 propició la aparición de un gran número de publicaciones militares, impresas en su mayoría en Madrid: *Almanaque de la Guardia Civil*, *Anuario Militar de España*, *Boletín de Justicia Militar*, *El Correo Militar*, *La Correspondencia Militar*, *La Defensa*, *Los destinos civiles*, *El Eco Militar*, *El Ejército Español*, *Heraldo de la Guardia Civil*, *El Heraldo Militar*, *La Ilustración Militar*, *La Nación Militar*, *El Reservista*, o *La Unión Militar* (entre otras). Las únicas excepciones de la época eran *El Ejército de Filipinas* y *El Heraldo de Manila* (Manila); *Estudios Militares* (Toledo) y la *Revista científico-militar* (Barcelona).

la época existieron algunas publicaciones con una marcada línea política, como fue el caso de *La Correspondencia Militar*, fundada en 1877 y de ideología conservadora, que contribuyó en gran medida a la elaboración de la Ley de Jurisdicciones de 1906; o *El Ejército Español*, creado en 1888 con una clara orientación liberal.

El papel asumido por estos órganos de prensa como vehículo de agitación y presión política provocó que los máximos dirigentes adoptasen medidas restrictivas para evitar que los soldados participasen del debate político a través de la prensa. Sin embargo, en la práctica, los diarios militares ideaban estrategias para seguir informando de asuntos de corte político que les afectaban, no solo por medio del ya conocido recurso del “director de paja”,<sup>414</sup> sino inscribiéndose en las listas de Hacienda como revistas profesionales o científicas, consiguiendo de esta manera burlar la vigilancia del poder público, mucho más exhaustiva con la prensa de tipo político que con la científica y cultural. Así pues, a pesar de que se trataba de un tipo de prensa que informaba sobre asuntos de interés general, para Hacienda no lo era, lo que facilitó a los soldados opinar sobre política, sin caer en la prohibición de fundar y escribir periódicos políticos, puesta en marcha en 1888.

Esta politización de la prensa diaria militar contrastó con el espíritu apolítico que caracterizaba la actividad intelectual de algunos institutos oficiales del poder militar, como el Centro del Ejército y la Armada.<sup>415</sup> En esta misma línea, existieron, además, otras revistas de orden técnico, jurídico o científico, que no preocuparon a los máximos dirigentes, ya que centraron su atención principalmente en los problemas profesionales

---

<sup>414</sup> Entre los ejemplos más claros de suplantación del director, para así evitar la represión informativa llevada a cabo contra la prensa castrense, podemos citar al *El Ejército español*, dirigido por el teniente coronel Eugenio Oliveira, aunque oficialmente lo hacía Rafael Esbry.

<sup>415</sup> COLL Y ASTRELL, J., *Monografía histórica del Centro del Ejército y de la Armada*, Madrid, 1902, pp. 200-212.

internos, los asuntos internacionales y los temas de orden público, sin inmiscuirse en temas políticos.

## **2. LA DIFUSIÓN DE IDEAS ANTIMILITARISTAS EN LA PRENSA**

No sólo la prensa militar escribía sobre política, sino que, también a la inversa, los diarios mayor circulación debatían sobre cuestiones militares, una práctica periodística que creaba un gran malestar en la institución militar, que consideraba una intromisión de la prensa periódica en asuntos que no les competían, y la acusaban de perseguir fines antimilitares. De la misma manera, los diarios militares consideraban que las críticas periodísticas reflejaban el sentido antimilitarista de la clase política que dirigía el país.

Para entender esta cuestión, es necesario analizar primero las dos corrientes antimilitaristas desarrolladas durante la Restauración.<sup>416</sup> La primera de ellas era la postura radical, representada por los movimientos anarquistas y socialistas, que atacaba al estamento militar en sí mismo, considerándolo un “fruto dañino” del Estado capitalista.<sup>417</sup> Esta corriente intentaba debilitar a la institución a través de los motines, huelgas y manifestaciones, y utilizaba la propaganda como medio para incitar la sedición de los soldados o difundir sus ideas en contra de la prestación de servicios por parte de los reclutas en tiempos de guerra. Junto a ésta se encontraba el antimilitarismo político, defendido por los grupos liberales, que apostaba por la existencia de un ejército nacional, adaptado estrictamente a las necesidades de la defensa. Para este grupo era

---

<sup>416</sup> Para Núñez Florencio no eran dos, sino tres las corrientes antimilitaristas existentes en la época. La tercera era el antimilitarismo intelectual que se llevó a cabo por los escritores de la época, que, a través de sus novelas, ensayos o piezas teatrales, criticaban como estaba constituido el ejército en la sociedad capitalista. NÚÑEZ FLORENCIO, R., *Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906)*, Madrid, CESIC, 1990, pp. 58-59.

<sup>417</sup> AZAÑA, M., *Estudios de política francesa y contemporánea. La política militar*, Madrid, Saturnino Calleja, 1918, pp. 231-232.



excesiva la influencia del poder militar en la sociedad, por lo que defendían un recorte en las competencias de éste. El acento de esta postura, por tanto, no se encontraba en la oposición al Ejército como institución, como defendían los radicales, sino en el excesivo predominio de éste en los asuntos públicos, así como en los privilegios que poco a poco fueron adquiriendo.

La primera postura solo inquietaba desde una perspectiva funcional, por la alteración del orden público con las posibles manifestaciones o las huelgas de estos sectores sociales, mientras que la corriente política causaba una mayor preocupación entre las autoridades militares. Para éstos, este tipo de antimilitarismo suponía una agresión al estamento castrense, y su único objetivo era acabar con el ejército a través de los periódicos. Especialmente notoria sería la animadversión de los militares por los diarios liberales, más dados a difundir opiniones contrarias al ejército español, y que rápidamente se convirtieron en el enemigo a batir por éstos. La actitud defensiva del poder militar respecto a estas ofensas periodísticas se sustentaba en la idea de perfección con la que se concebía la sociedad castrense, en oposición al caos reinante en la sociedad civil, lo que hacía que, todos aquellos que pertenecían a ésta, especialmente la prensa y la clase política, no estuvieran en condiciones de juzgar al estamento militar. Para los propios militares no era lo mismo una crítica vertida en la prensa militar sobre determinados comportamientos de los oficiales, calificada por ellos mismos como una “autocrítica”, que aquella que se hacía desde fuera de la institución y se vertía en los periódicos civiles, que se recibía como un verdadero ataque contra el ejército.<sup>418</sup>

---

<sup>418</sup> Es muy significativa la lectura comparativa del periódico *La Justicia* sobre las funciones que debía tener la prensa y el estamento militar, ya que entendía que, mientras la institución castrense se caracterizaba por ser “todo ordenanza, todo regla, todo severidad, todo disciplina”, la prensa era, por el contrario, “toda libertad, toda espontaneidad, toda crítica, toda protesta”, por lo que, para que cada una de estas instituciones cumpliera debidamente con su función, era necesario que la prensa fuera libre y el

Para acabar con las críticas vertidas en la prensa periódica, el poder militar utilizó su influencia en el sistema político de la Restauración y consiguió que el ejecutivo impusiera a los periódicos trabas que restringían el tratamiento de ciertos temas relacionados con el ejército. La primera de las medidas adoptadas por el poder público, tras la publicación de la Ley de Imprenta, se dictó en 1887 por el político liberal Moret, después de recibir las reclamaciones pertinentes de los jefes y altos mandos militares por la frecuencia, en opinión de éstos, con que los diarios de provincias trataban de desprestigiar la institución. En la circular se instaba a los gobernadores a vigilar los insultos y acciones de desprestigio sobre el estamento castrense cometidos por medio de la imprenta, que “alientan el espíritu de rebelión y sedición” de algunos sectores, y les exigía que, en esos casos, se produjera la inmediata intervención de los tribunales. Para el gobierno liberal esta medida de restricción informativa se hallaba plenamente justificada por la indefensión del órgano militar que, al no poder escribir en los periódicos, no contaban con los suficientes medios de defensa para combatir los ataques y los “cargos injustos y aun calumniosos” a los que estaban expuestos.<sup>419</sup> Esta primera disposición contra la prensa impuesta por el gobierno evidenció, una vez más, la injerencia del poder militar en la administración civil, y marcó la línea de pensamiento gubernamental, que daba prioridad a la defensa del honor de los militares por encima del reconocimiento del derecho de libre manifestación de ideas.

---

ejército disciplinado, ya que, “negar a uno o a otro esa condición, es rehusarles la posibilidad de cumplir su misión social”. *La Justicia*, “Problema de Jurisdicción”, 19 de marzo de 1895.

<sup>419</sup> Circular de 8 de Agosto de 1887 en la que se avisa a los gobernadores civiles para que vigilen los insultos y acciones de desprestigio a la autoridad militar por medio de la imprenta. Publicado en la *Gaceta de Madrid*, 10 de Agosto de 1887, número 222, p.419. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°21.

### **3. LOS RECORTES A LA LIBERTAD DE IMPRENTA DE LOS MILITARES**

#### **1. PREVALENCIA DEL HONOR FRENTE A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN**

Paralelamente al poder que poco a poco fue adquiriendo el ejército en la sociedad, se desarrolló una prensa cada vez más libre, consecuencia directa de la Ley de 1883, en la que se reprochaban desde los actos llevados a cabo por la Guardia Civil hasta las actuaciones de determinados generales o altos cargos militares. En algunas ocasiones, estas críticas provenían de los propios soldados, que en numerosas ocasiones trasladaban su malestar a los diarios militares. Una actitud que resultaba incomprensible para los máximos responsables de la institución, quienes consideraban que el ejército debía evitar todo tipo de opiniones sobre los asuntos militares que les perjudicaran. Partiendo de esta idea, surgió en 1888 un conflicto en torno a un artículo publicado en *La Correspondencia Militar*, que creó mucha controversia entre los máximos dirigentes militares. Tras un arduo debate en el Parlamento, en el que la mayoría de diputados y senadores exigió que se preservara el honor de los militares frente a las informaciones difundidas en la prensa, el gobierno liberal aprobó una norma que prohibía la difusión de ideas políticas por parte del estamento castrense.

El debate se inició con una reclamación formal del diputado Ruíz Martínez, realizada el 21 de diciembre de 1888, por la que se exigía al gobierno un cambio de actitud respecto a los ataques vertidos en los periódicos contra la institución militar. Concretamente, el político conservador denunció la campaña iniciada por los diarios militares que, a pesar de no constituir injuria ni ofensa personal, entendía que estaba encaminada a sembrar

antagonismos entre los miembros del ejército, perturbando la disciplina y la buena armonía del organismo. Ruiz Martínez puso como ejemplo el artículo de *La Correspondencia Militar* publicado el 12 de diciembre de 1888, que, a su parecer, tendía a la rebelión y excitaba a la sedición y la indisciplina.<sup>420</sup> El diputado conservador lamentó que, en la legislación liberal de prensa, no existieran los medios adecuados para corregir este tipo de ofensas, ya que, en la mayoría de los casos, la jurisdicción ordinaria dejaba impunes los artículos que se publicaban contra el ejército. Una afirmación no del todo acertada ya que, tal y como certificó Canalejas, el periódico aludido había sido objeto de veinte denuncias en los últimos meses, y su director había sido condenado por injurias dirigidas al estamento militar.

Tras la denuncia de Ruíz Martínez en el Congreso, un grupo de soldados se presentó, esa misma tarde, en la redacción de *La Correspondencia Militar* exigiendo la reparación de la ofensa. La mayoría de los políticos disculparon el atropello cometido contra el periódico, ya que entendían que los oficiales estaban defendiendo su honor, que se había visto perjudicado por las frases contenidas en el diario.<sup>421</sup> Tras estos sucesos se inició en las Cámaras un debate sobre el reconocimiento de la libertad de prensa a los miembros del poder militar. Concretamente, se plantearon dos cuestiones: en primer lugar, se discutió la eficacia de la Ley de Imprenta para garantizar todos los derechos, civiles o militares, y, en caso negativo, si debía el gobierno presentar una legislación especial para los delitos militares o con la aplicación del Código Penal era suficiente; en segundo

---

<sup>420</sup> El artículo aludido por Ruíz Martínez decía lo siguiente sobre las reformas militares “Han sabido esperar esas armas tan mojetadas, tan discutidas, tan despreciadas, tan provocadas; saben esperar dentro del círculo de sus deberes, sin usar de los elementos que su posición les da, porque al final poseen un patriotismo que ponen por encima de tantas miserias y miserables como existen en este mundo egoísta que se llama política”. *La Correspondencia Militar*, 12 de diciembre de 1888.

<sup>421</sup> El diputado Ocheando citó una parte de la publicación de *La Correspondencia Militar* que entendía era perjudicial para los intereses militares: “Hay en el ejército otra casta de pájaros sin alas que, imitando a las golondrinas, sin tener por eso ninguna de sus buenas cualidades, recorren distintos regimientos, sirviendo en todos ellos de estorbo”. Congreso, 22 de Diciembre de 1888, Ocheando, cif. 405.

término, los políticos discutieron sobre la posibilidad de los militares de hablar sobre asuntos políticos en las publicaciones periódicas, o si, por el contrario, estas intervenciones periodísticas debían estar restringidas.

Respecto a la primera cuestión, la mayoría de los políticos liberales creía que la legislación de 1883 era una norma completa que contenía todos los delitos de prensa, por lo que, con la aplicación de la misma bastaba para regular las infracciones efectuadas por los militares por medio de la imprenta. Entre ellos se encontraba el general López Domínguez, que negaba la existencia de la prensa militar, y entendía que todas las publicaciones debían estar sujetas a las mismas leyes, sin que, en ningún caso, existiera un procedimiento especial de policía para los militares. Asimismo, el político liberal defendía que la Ley de Imprenta había sido previamente aceptada por el Parlamento, por lo que no había necesidad de reformar la misma.<sup>422</sup> En esta línea de opinión se posicionaba Emilio Castelar, quién alegaba que la limitación de la libertad de prensa para los soldados iba en contra del espíritu de progreso conseguido en la ley liberal, siendo muy peligrosa para el desarrollo de este derecho la aplicación de una penalidad especial para los militares.

En oposición a éstos se encontraban los conservadores, quienes entendían que la Ley de 1883 no alcanzaba a la disciplina militar, por lo que era necesario subsanar las deficiencias con una reforma de la misma. Al respecto, el marqués de Estella opinaba que, pese a que “por un mal oficial que no sabe ir a la guerra, y tal vez se encuentra perseguido por los tribunales”, no se debía mantener alarma ni división en el ejército, era prioritario que el gobierno reprimiera los males y destruyera “esa perniciosa

---

<sup>422</sup> Congreso, 22 de diciembre de 1888, López Domínguez, cif. 412.

semilla”.<sup>423</sup> El senador Salamanca y Negrete fue más allá y solicitó al ejecutivo la aplicación a los diarios de un “tornillito”, para mantener la disciplina del ejército y evitar el resentimiento entre los soldados.<sup>424</sup> Partiendo de la idea de que, en la política de intervención gubernativa siempre funcionaba el juicio del momento, o dicho de otra manera, el criterio del partido que se encontraba en el poder, el senador solicitó la utilización de medios restrictivos para impedir que “en la familia militar nazcan los antagonismos que traigan consecuencias funestas, y que hagan surgir rivalidades”.<sup>425</sup> A raíz de esta opinión, el gobierno liberal reafirmó su rechazo a imponer cualquier traba restrictiva utilizada por el partido conservador, para hacer callar y reducir al silencio a los periódicos. Así lo declaró en el Senado el ministro de Hacienda: “a la prensa se la puede castigar, se la puede corregir aplicando las leyes, pero conceder eficacia a ciertos tornillos para reducirla al silencio, no es sistema práctico”.<sup>426</sup>

Algunos políticos liberales también defendieron esta corriente de pensamiento que reclamaba una reforma de la legislación de 1883 respecto a estos asuntos. Entre ellos, el general Martínez Campos exigió al ministro de Guerra, único que representaba al ejército, que tomara alguna medida legal que remediara los males que venían sufriendo los militares en sus propios diarios.<sup>427</sup> De la misma forma, Dávila razonaba la necesidad de que se actualizaran los resortes legales sobre la libertad de prensa entre la clase militar, ya que, en su opinión, los militares no debían tomar parte de las polémicas políticas que se producían en la prensa periódica, ya que, con ellas olvidaban completamente sus deberes. Para el político liberal, estos soldados que se ocupaban de asuntos que tendían a crear antagonismos entre los diversos institutos armados, estaban

---

<sup>423</sup> Senado, 22 de diciembre de 1888, Marqués de Estella, cif. 154.

<sup>424</sup> Senado, 22 de diciembre de 1888, Salamanca y Negrete, cif. 152.

<sup>425</sup> Senado, 22 de diciembre de 1888, Salamanca y Negrete, cif. 153.

<sup>426</sup> Senado, 22 de diciembre de 1888, ministro de Hacienda, cif. 153.

<sup>427</sup> Senado, 22 de diciembre de 1888, Martínez Campos, cif. 156.

cometiendo un delito y el ministro de Guerra debía reprimir esta actitud haciendo uso de las medidas que tuviera a su alcance.<sup>428</sup> En esta línea, Burrell reclamó también una modificación de la Ley de 1883, pero rechazó de pleno que la competencia de estos casos se trasladara a los tribunales militares. Para el político era muy positiva la actitud del gobierno liberal, que, a diferencia del conservador, mantenía el espíritu progresivo y tolerante en la cuestión de la libertad de imprenta, y entregaba estas cuestiones a la jurisdicción ordinaria, sin excitar excesivamente el celo de los fiscales, a quienes otras políticas y otros gobiernos quitaban la majestad que debían tener la justicia y el derecho.<sup>429</sup>

Por su parte, la respuesta del gobierno liberal sobre este primer asunto fue confusa. Por un lado, se certificó la eficacia de la legislación de imprenta, afirmando que la misma contenía los recursos y procedimientos necesarios para amparar el honor y la dignidad del ejército, especialmente en aquellas “tentativas de agresión” que podían llegar a ser verdaderas ofensas para la armada. En palabras de Canalejas, ministro de Gracia y Justicia, no hacía falta la reforma de la Ley de Imprenta, ya que con la aplicación de ésta y el Código Penal era suficiente.<sup>430</sup> Sin embargo, analizando los discursos vertidos en el Senado, la postura del poder público cambió, ya que otros ministros, como el de la Gobernación, evidenciaron la inoperancia de la legislación de prensa en asuntos militares, planteando la posibilidad de imponer medidas gubernativas para impedir que los periódicos militares denigraran, atacaran u ofendieran a determinados institutos del ejército; especialmente cuando se hacía a la sombra del anónimo, entendiendo que, usualmente, era como se escribía en estos diarios.<sup>431</sup>

---

<sup>428</sup> Congreso, 22 de diciembre de 1888, Davila, cif. 399-402.

<sup>429</sup> Congreso, 22 de diciembre de 1888, Burrell, cif. 411.

<sup>430</sup> Congreso, 22 de diciembre de 1888, ministro de Gracia y justicia, cif. 413.

<sup>431</sup> Senado, 22 de diciembre de 1888, ministro de Gobernación, cif. 140.

La segunda cuestión planteada por la clase política de la época afectaba directamente al reconocimiento del derecho a la información de los militares. Concretamente, se debatió la participación de los soldados en las discusiones diarias de la prensa periódica. Para una parte de la clase política, la libertad de prensa era un derecho fundamental que debían tener todas las personas, quedando incluidos, necesariamente, los militares. Algunas opiniones, como la del diputado Orozco, consideraban que la prohibición a los soldados de escribir en la prensa iba en contra de las doctrinas liberales, y propuso, como solución, que los propios oficiales del ejército excitaran a éstos para que no leyeran los periódicos que se consideraban perjudiciales para los intereses militares.<sup>432</sup> Cassola, por su parte, declaró que, de salir adelante la prohibición, se despojaría de todos los derechos a los militares, a los que solo les quedarían deberes. Con un buen razonamiento, el liberal fortalecía la idea de que todos los españoles, incluidos los militares, tenían reconocido el derecho fundamental a escribir en la prensa, por lo que era necesario que éstos tuvieran libertad para discutir sobre los asuntos que les competían, siendo esa una de las grandes “válvulas de escape” de las que gozaba el ejército.

La mayoría de los políticos chocaban con estas ideas, porque consideraban que la prohibición de los militares de redactar y fundar periódicos ya estaba reconocida en preceptos pasados, alegando, además, que los soldados podían olvidar sus funciones fundamentales si se les permitía escribir en la prensa. De esta opinión era Cánovas, quién alegó que con la Real Orden de 21 de diciembre de 1869, dictada por el general Prim, ministro de Guerra por aquel entonces, los soldados no podían sostener polémicas sobre asuntos del servicio militar en los periódicos. El líder conservador apostaba,

---

<sup>432</sup> Congreso, 22 de diciembre de 1888, Orozco, cif. 408



además, por realizar una nueva reforma en la que se especificara que los militares no tenían derecho a entrar en polémicas sin permiso de sus superiores, “ocultando la cara, ocultando la cara, cometen el delito a oscuras, se cubren con el pseudónimo”.<sup>433</sup> Para Castelar la libertad de imprenta también estaba por debajo del deber y responsabilidad de los militares respecto a sus funciones, y, a partir de esa reflexión, se debía prohibir a los militares entablar polémicas en público, lo que se conseguía aplicando la ley militar, porque la prohibición a los militares de escribir en periódicos políticos no se hallaba reconocida ni en el Código ni en la legislación de imprenta.<sup>434</sup>

Paralelamente a la polémica suscitada en el Parlamento, *El Imparcial* quiso dar su opinión sobre el asunto. En primer lugar, negó la existencia de la prensa militar al servicio de los soldados, justificando su opinión en que existían algunos periódicos que preferentemente trataban cuestiones relativas al ejército, pero que no se distinguían de los demás en cosa alguna, por lo que debían estar dentro de la legalidad común. El periódico madrileño rechazó nuevas modificaciones de la Ley de Imprenta de 1883, entendiendo que bastaba con aplicar el artículo 176 del Código Militar, que perseguía al soldado que publicara con su firma artículos donde se atacara a un superior jerárquico o se vulnerara la disciplina. Para el diario madrileño, las medidas extraordinarias de restricción de la libertad de prensa demandadas por algunos dirigentes políticos eran totalmente injustificadas, teniendo en cuenta que no existía peligro alguno en que un militar sostuviera con razones su opinión, y sí que lo hiciera “con su espada”.<sup>435</sup> Pese a que el problema y la gravedad de estos casos no se encontraba en que un soldado criticara de forma juiciosa las medidas de los altos cargos, sino que no cumpliera sus funciones de subordinación a la autoridad o rompiera la disciplina del ejército, los

---

<sup>433</sup> Congreso, 22 de diciembre de 1888, Cánovas, cif. 416.

<sup>434</sup> Congreso, 22 de diciembre de 1888, Castelar, cif. 420.

<sup>435</sup> *El Imparcial*, “La cuestión candente”, 23 de diciembre de 1888.

máximos dirigentes entendían que con la palabra se podía hacer mucho más daño que con la propia violencia. El diario madrileño trajo a colación, además, que con las medidas restrictivas que se trataban de imponer, muchos de los periodistas que escribían sobre cuestiones referentes al ejército podían ver restringida también su libertad de prensa.<sup>436</sup>

## **2. LA RESTRICCIÓN INFORMATIVA CONTENIDA EN LA CIRCULAR DE CHINCHILLA**

Tras las deliberaciones realizadas en las Cámaras, en las que, como hemos analizado, predominaba una tendencia hacia la restricción de la libertad de información de los militares, el gobierno liberal aprobó una circular, el 28 de diciembre de 1888, por la que se prohibía a éstos ser fundadores o directores de periódicos, así como redactores de los periódicos políticos.<sup>437</sup> El ministro de Guerra, el general Chinchilla, certificó la necesidad de la norma como medio para combatir los artículos y sueltos que atacaban, en términos injuriosos y denigrantes, a institutos y cuerpos del ejército, creaban divisiones y antagonismos entre las clases militares, e inducían al descontento y la perturbación en el seno del mismo. Entre las razones que esgrimía el gobierno liberal para no reconocer a los miembros del ejército el derecho fundamental a la libertad de prensa estaba que éstos no gozaban del pleno uso de los derechos civiles y políticos, condición indispensable para ser director de un periódico.<sup>438</sup> En la circular, además, se hacía referencia a otras medidas impuestas años antes en las que ya se encontraba

---

<sup>436</sup> *El Imparcial*, “El peor de los consejeros”, 23 de diciembre de 1888.

<sup>437</sup> Circular de 28 de Diciembre 1888 por la que se prohíbe que los militares sean fundadores o directores de periódicos, así como redactores de los periódicos políticos. Publicado en el *Diario Oficial del Ministerio de la Guerra*, 28 de Diciembre de 1888, número 285, pp. 883-884. Véase apéndice de la tesis: ANEXO Nº22.

<sup>438</sup> Artículo 10 de la Ley de Policía de Imprenta de 1883.

expresamente reconocida esta prohibición de entrar en polémicas, por medio de la prensa periódica, sobre asuntos del servicio, o valerse de ella para tratar de los mismos, sin previa autorización del Gobierno.<sup>439</sup>

Las reacciones ante la severa disposición de Chinchilla fueron diversas. Los políticos que reclamaban una norma que acabara con los ataques de la prensa al ejército se declararon satisfechos con la medida, ya que recordaba a normas dictadas anteriormente en la materia por otros gobiernos.<sup>440</sup> La circular era “digna de aplauso”, según Celleruelo, porque con ella se evitaban “castigos, molestias y disgustos a los jefes y oficiales que de buena fe y creyendo ejercitar un derecho legítimo considerasen lícito lo que estaba prohibido por disposiciones un tanto olvidadas”.<sup>441</sup> Además, el diputado liberal consideraba que la misma no atentaba contra la libertad de prensa, sino que, al contrario, defendía los principios de libertad y derecho. De ésta opinión era Ochendo quién declaró que la circular se encontraba dentro del derecho militar, ya que no iba dirigida contra la prensa militar seria, entre la que se encontraban las Revistas Militares, la *Revista científico-militar* de Barcelona y los Memoriales de armas.

En el lado contrario, un grupo de políticos rechazaron la norma porque entendían que existía una extralimitación de funciones por parte del ministro de Guerra, quién había restringido un derecho fundamental reconocido en la Constitución. De esa opinión era Pedregal, que acusaba a Chinchilla de haberse atribuido funciones de magistrado que no le correspondían, invocando ordenanzas que habían caído en desuso. En esta línea, Romero Robledo condenó abiertamente la medida porque se enmarcaba dentro de una

---

<sup>439</sup> En la circular se citaban las siguientes normas: Orden de 6 de Agosto de 1841, 7 y 25 de Septiembre de 1842 y 21 de Diciembre de 1869, la Real Orden de 28 de agosto de 1848 y la del Gobierno de la República de 22 de Septiembre de 1873.

<sup>440</sup> Congreso, 10 de enero de 1889, Ochendo, cif. 517-518.

<sup>441</sup> Congreso, 10 de enero de 1889, Celleruelo, cif. 527.

materia vedada para el ministro de Guerra. Aun así, más allá de la extralimitación de competencias del ministro de guerra, ambos políticos, y otros tantos, como veremos a continuación, se opusieron a la medida porque atentaba contra el derecho fundamental a la libertad de prensa.

En opinión de García Alix la circular entrañaba declaraciones gravísimas y opuestas al derecho constituido de la libertad de información, ya que impedía que los militares expresaran en los periódicos su pensamiento sobre asuntos de servicio, partiendo de la base errónea de que éstos no estaban en la plenitud de los derechos civiles y políticos. Al mismo tiempo, el diputado republicano criticó la decisión del gobierno liberal, que no solo modificaba la ley de 1883 que estaba sometida a la legislación común, sino que, además, dividía la prensa militar y no militar, entregándola unas veces a los tribunales ordinarios y otras al Consejo de Guerra. Para García Alix la medida aprobada por el partido liberal era un reflejo de la influencia que ejercía el poder militar sobre la administración civil, que había accedido a las presiones de los altos mandos, prohibiendo, incluso, fundar y dirigir periódicos científicos o literarios que en nada podían perturbar a la disciplina del ejército.<sup>442</sup>

Para Pedregal no había duda de que la publicación de la circular se debía a presiones de los diversos institutos del ejército al poder público, ya que, en otras ocasiones, los tribunales habían recibido ataques por parte de la prensa y no se había dictado ninguna medida al respecto. El político republicano culpó al gobierno de violar la libertad de prensa de los militares, al coartar el derecho de éstos a emitir libremente su pensamiento por escrito, cuando el mismo no estaba sujeto a condición alguna en la Constitución.

---

<sup>442</sup> Congreso, 7 de enero de 1889, García Alix, cif. 445.

Ciertamente, la norma constitucional reconocía el derecho en términos absolutos para todos los españoles, estando amparados los militares por el precepto constitucional. Con estas palabras se lamentó el político: “¡Triste situación la de un país donde no se puede decir lo que piensa! (...) Los pensamientos ocultos son los que fermentan y pueden ser causa de terribles explosiones; las ideas que se expresan libremente no causan daño”.<sup>443</sup>

Pedregal señaló, también, que la circular estaba restringiendo el acto de escribir en un periódico, cuando éste era lícito en sí mismo, y puso de relieve que la medida recortaba la libertad de información de forma preventiva, negando el derecho de escribir a todos los militares, por la posibilidad de que algunos pudieran incurrir en una infracción a la hora de ejercer el mismo. De forma injusta, y con motivo de la publicación de un artículo en un concreto diario militar, por el que debía estar respondiendo el autor del mismo ante los tribunales, se había privado a todos los militares del derecho a emitir libremente sus ideas por medio de la prensa. Basándose en estos argumentos, Pedregal denunció la circular porque no se ajustaba a lo prescrito en las leyes existentes, y pretendía reforzar la disciplina del ejército por medio de la arbitrariedad, que era “un exceso insoportable en cualesquiera lugar y circunstancias”.<sup>444</sup> Teniendo en cuenta la importancia y trascendencia en las sociedades civilizadas del ejercicio de expresar libremente las ideas y opiniones, el ataque contra ésta ponía en peligro las demás libertades.

En la misma línea que los anteriores, Castelar reprendió al partido liberal por privar a los militares de mantener polémicas a través de la prensa, y puso en entredicho las disposiciones anteriores, en las que se apoyaba Chinchilla para declarar la legitimidad

---

<sup>443</sup> Congreso, 8 de enero de 1889, Pedregal, cif. 456.

<sup>444</sup> Congreso, 11 de enero de 1889, Pedregal, cif. 552.

de la circular, ya que éstas pertenecían a tres épocas distintas respecto al reconocimiento de la libertad de prensa.<sup>445</sup> Romero Robledo también se posicionó en esta postura, afirmando que los oficiales debían gozar de todos los derechos civiles y políticos que establecía la Constitución. Con gran acierto, el político cuestionó al gobierno sobre cuál de todas las actuaciones cometidas por los militares en los periódicos constituía delito: “¿En lo que escriben, en el autor, o según sea quién escribe?”, se preguntaba.<sup>446</sup> Teniendo en cuenta que el derecho constitucional se basaba en la libertad de poder expresar sus pensamientos por medio de la imprenta, entendía que la circular dejaba “herido” ese derecho porque escribir, en sí mismo, era un delito. Si, por el contrario, la infracción estaba en el artículo publicado, porque éste podía romper la disciplina y sembrar el antagonismo entre los distintos institutos armados, en ese caso lo mismo lo podían cometer militares que otros periodistas. Además, para Romero Robledo se trataba de una medida injusta e ilegal, que calificaba al ejército de “máquina”, ya que prohibía a sus miembros tener pensamientos u opiniones,<sup>447</sup> y entraba en contradicción con la línea mantenida por el líder del partido liberal, Sagasta, quién, en intervenciones previas a la publicación de la circular, había afirmado que los militares podían redactar periódicos.

No solo políticos del bando liberal o republicano mantuvieron este razonamiento, ya que algunos militares también rechazaron la circular. Entre ellos, el general Cassola declaró que, pese a que consideraba que los militares debían tener una libertad “prudente” a la hora de discutir todas las cuestiones políticas y militares, esto no justificaba la medida de Chinchilla, que violaba el derecho fundamental a la libertad de información. Como lo habían hecho otros políticos, el militar acusó al partido liberal de

---

<sup>445</sup> Congreso, 12 de enero de 1889, Castelar, cif. 577.

<sup>446</sup> Congreso, 15 de enero de 1889, Romero Robledo, cif. 627.

<sup>447</sup> Congreso, 15 de enero de 1889, Romero Robledo, cif. 627.

establecer un sistema de previsión, en el que el gobierno confundía el delito con los medios para delinquir, pues, era lícito imponer penas a quien contravenía la ley, pero no era justificable que se negara ese derecho a todos los militares cuando el mismo era compatible con el ejercicio de sus funciones.<sup>448</sup> Además de lo apuntado por sus compañeros, el general consideraba que las materias que habían sido vedadas por el poder público, como los asuntos de servicio que estaban pendientes de discusión en el Parlamento, eran las que necesitaban mayor discusión, y por tanto, suponía un verdadero atropello cortar el pensamiento de algunos, cuando era más necesario conocer la opinión de todos para que la resolución que afectara al servicio castrense llevara “el sello de mayor acierto”.<sup>449</sup> Finalmente, Cassola aseveró que los militares estaban en pleno goce de sus derechos civiles, ya que, de no ser así, éstos no podrían ser diputados o senadores, y certificó que, pese a la existencia de disposiciones pasadas en las que se prohibía a los militares fundar periódicos, éstas no se cumplían, ya que él mismo era director y propietario de un diario cubano.

Lo mismo ocurría con el general López Domínguez, fundador de *El Resumen*, para el que no era necesaria la circular, teniendo en cuenta que los derechos civiles y políticos de los españoles estaban todos declarados y consignados en la Constitución. Bastaba con aplicar a los militares “perfecta, correcta y severamente” la Ley de 1883, ya que con eso se penaría los excesos e infracciones sin definir nuevos delitos.<sup>450</sup> En la misma línea al resto de opositores de la disposición, López Domínguez afirmó que era una medida preventiva, ya que trataba de dar un aviso a todos, por el exceso de algunos que estaban alarmando a la opinión pública. Además, la norma era innecesaria e ineficaz, y atentaba

---

<sup>448</sup> Congreso, 10 de enero de 1889, Cassola, cif. 522.

<sup>449</sup> Congreso, 10 de enero de 1889, Cassola, cif. 523.

<sup>450</sup> Congreso, 11 de enero de 1889, López Domínguez, cif. 553.

contra la libertad de expresar las ideas a través de los periódicos que era un derecho constitucional del que debían disfrutar todos los ciudadanos, fueran o no militares.<sup>451</sup>

Chinchilla, en representación del gobierno liberal, respondió a las acusaciones vertidas por los distintos políticos, alegando que la circular no atacaba al derecho constituido de libertad de imprenta, sino que, simplemente, recordaba las disposiciones pasadas aprobadas por los distintos gobiernos acerca de la prohibición de los militares para intervenir en las cuestiones políticas por medio de la prensa. Asimismo, reafirmó que el propósito de la administración pública era combatir aquellos artículos publicados en la prensa militar que excitaban la indisciplina e insubordinación al ejército y menoscababan los derechos de los militares, haciendo un mal uso de las armas que la patria les había dado para la defensa de ella. Para el ministro de Guerra se encontraba justificada la medida, ya que existía una ley especial para los militares que caían bajo la jurisdicción militar, aun cuando los delitos se cometieran por medio de la prensa, y aclaró que éstos podían escribir, ya que había periódicos en los que colaboraban dignísimos jefes y oficiales, pero no se podía “extraviar completamente la opinión”, tratando de producir antagonismos en el ejército.<sup>452</sup> Canalejas defendió también la circular cuya única finalidad era prevenir futuras infracciones, ya que el gobierno debía anticiparse con medidas de prudencia a lo que fuera a acontecer. Para el ministro de Gracia y Justicia era fundamental que no se comprometiera la paz, el interés de la monarquía y el orden, siendo fundamental tener un organismo robusto que defendiera el derecho y la patria.<sup>453</sup> Por este motivo, estaba justificada la restricción de la libertad de

---

<sup>451</sup> Congreso, 11 de enero de 1889, López Domínguez, cif. 554.

<sup>452</sup> Congreso, 8 de enero de 1889, ministro de Guerra, cif. 458-461.

<sup>453</sup> Congreso, 10 de enero de 1889, ministro de Gracia y Justicia, cif. 514-515.



prensa para los militares, que, al contrario que el resto de los ciudadanos, no podían escribir en los periódicos contra sus compañeros.<sup>454</sup>

Analizando todos los argumentos esgrimidos antes y después de la publicación de la circular de Chinchilla contra la libertad de prensa de los militares, podemos concluir que, tal y como apuntaron algunas voces, se producía una extralimitación de funciones por parte del ministro de Guerra, contraviniendo la separación de competencias expresamente contenida en la Ley de Imprenta, por la que había luchado tanto el partido liberal. Así pues, Chinchilla, ejerciendo una función exclusiva de los tribunales, definía un nuevo delito cuando afirmaba en la disposición que infringían la ley aquellos que publicaran sobre cuestiones militares, abarcando con esto a periodistas que no pertenecían al ejército. Asimismo, partiendo de la inexactitud legal de que los soldados, por el hecho de serlo, no estaban en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, en la circular se condenaba el ejercicio de escribir o fundar periódicos por parte de los militares, como si ambas acciones fueran delitos, cuando, en su caso, lo que podía constituir infracción era lo que se escribía, no que se escribiera en la prensa. Hay que tener en cuenta que, el periódico es un instrumento que no hace bien ni mal, y es el escritor el que es responsable de sus publicaciones, por lo que, tal y como señalaron muchos políticos de la época, con la medida impuesta por el partido liberal se estaba cometiendo una ilegalidad contra los derechos de los militares restringiendo de forma preventiva la libertad de prensa que se encontraba reconocida para todos los españoles en la Constitución. Teniendo en cuenta la influencia que estaba adquiriendo el poder militar en este período, no cabe duda de que el gobierno liberal cedió ante las presiones de los máximos dirigentes del ejército, claros beneficiarios de la circular. Éstos se

---

<sup>454</sup> Congreso, 15 de enero de 1889, ministro de Gracia y Justicia, cif. 635.

aferraban a la idea de que los artículos publicados en algunos diarios militares podían producir futuras insubordinaciones, cuando, en realidad, lo que más temían era el poder que tenía la pluma en las manos de los soldados, quienes podían exponer de forma clara sus observaciones, creencias y aspiraciones, así como las ideas y pensamientos que brotaban entre ellos, mucho más perjudiciales teniendo en cuenta las irregularidades y abusos que se cometían dentro de la institución castrense.

Dos años más tarde de la puesta en marcha de la circular de Chinchilla, el diputado Sánchez Bedoya, al respecto de la publicación de una serie de artículos periodísticos criticando la orden impuesta por el capitán general de Madrid sobre asuntos del servicio militar, cuestionó al gobierno si se seguía aplicando la norma dictada por Chinchilla, o ésta había dejado de estar vigente con la entrada del nuevo ministro de Guerra, el general Bermúdez Reina.<sup>455</sup> Éste reiteró el perjuicio que suponía para la prensa que tratara con desconsideración a las autoridades militares y confirmó que la norma seguía en vigor, justificando su inoperancia en que, en muchas ocasiones, se desconocía la identidad de los militares que escribían en los diarios, y por esta razón no podían ser perseguidos.<sup>456</sup> Con la publicación del Código de Justicia Militar el 27 de Septiembre de 1890, defendido por jefes y oficiales del ejército español, se reiteró de nuevo la prohibición expresa a los militares de ser fundadores o directores de periódicos, así como de poder escribir en los periódicos políticos. Los diarios militares, que se encontraban entre la necesidad de defender el ejercicio a su libertad de opinión y la de servir los deseos castrenses, se manifestaron opuestos a esta medida, suscribiendo la línea militarista que se estaba propugnando en los cuarteles. Finalmente, la circular de Chinchilla quedó ratificada en 1897, a través de una Real Orden emitida por el ejecutivo

---

<sup>455</sup> Congreso, 27 de enero de 1890, Sánchez Bedoya, cif. 2204.

<sup>456</sup> Congreso, 27 de enero de 1890, ministro de Guerra, cif. 2205.

liberal por la que se recordaba a los militares la prohibición de acudir a la prensa sobre asuntos relacionados con servicio, y expresar opiniones sobre actos del monarca, gobierno o jefes de la armada española.<sup>457</sup> No obstante, con el transcurso de los años quedó probada la ineficacia de la medida, ya que siguieron existiendo diarios militares y los soldados se sirvieron de éstos para escribir sobre todo tipo de asuntos.

#### **4. EL PROBLEMA DE COMPETENCIA EN LOS DELITOS MILITARES REALIZADOS POR MEDIO DE LA IMPRENTA**

##### **1. ORIGEN DEL CONFLICTO DE JURISDICCIONES**

Uno de los rasgos que mejor definía la tendencia militarista característica de la sociedad española de los últimos años del siglo XIX era la firme determinación del Ejército de lograr que todas las cuestiones militares fueran competencia exclusiva de ellos, y así preservar su amplia autonomía respecto al poder civil. En aquella época, uno de los pocos asuntos que se escapaban de su control era la competencia para juzgar los delitos militares cometidos por medio de la imprenta, que se encontraba en manos de los tribunales ordinarios. Durante los últimos años del siglo, se convirtió en una tónica general que las resoluciones del Tribunal Supremo, respecto al problema de competencias que se suscitaba en estos delitos de imprenta, recayeran en favor de la jurisdicción civil. Así pues, mientras que la justicia militar entendía de todas las cuestiones en las que hubiera interviniendo cualquier persona que tuviera relación, a veces casi efímera, con la institución castrense, no pasaba lo mismo con los delitos cometidos por paisanos que criticaban algún aspecto del ejército a través de los

---

<sup>457</sup> Real Orden circular de 10 de septiembre de 1897. *Gaceta de Madrid*, 12 de septiembre. *Gaceta de Madrid*, 12 de Septiembre de 1897, número 255, p.1084.

periódicos.

Concretamente, el problema de las jurisdicciones surgió en 1891, cuando el director de *La Correspondencia Militar*, Alberto Olmos, fue sometido a Consejo de Guerra, en virtud del artículo 7 del Código de Justicia Militar, por supuestas injurias al capitán general de Granada cometidas en dos artículos, del 13 de febrero y 18 de marzo, publicados en su periódico. El 13 de mayo, el diario militar, al que se sumó García Alix desde el Congreso, denunció la situación en la que se había visto envuelto su director, reclamando la inhibición del Consejo de Guerra en el conocimiento del asunto, ya que, por la condición de paisano de su director, éste no estaba sujeto a las ordenanzas militares. Al día siguiente, algunos periódicos, como *El Imparcial*, se sumaron a la protesta exigiendo una resolución de las Cortes que pusiera coto a esta práctica militar, que se había producido en un período de paz, sin circunstancias extraordinarias que justificaran que la prensa debía estar sometida a la jurisdicción militar.<sup>458</sup> La protesta de los periódicos se centraba en la situación de indefensión en la que quedaban los periodistas civiles que se ocupaban de los asuntos militares, a la hora de juzgar o censurar los actos de una autoridad militar.

El conflicto de competencias, por tanto, surgió de la puesta en práctica de dos artículos del Código de Justicia Militar, ya que, tanto la jurisdicción civil como la militar reclamaban para sí el campo de actuación jurídica en el conocimiento de estos delitos cometidos por medio de la imprenta. La justicia militar lo hacía conforme al artículo 7 del Código de Justicia Militar, que, junto al artículo 258, situaban todas las injurias y ofensas contra las instituciones del ejército bajo la jurisdicción de los tribunales

---

<sup>458</sup> *El Imparcial*, “La prensa bajo los Consejos de Guerra”, 14 de mayo de 1891.

militares. Concretamente, en el apartado 7 del citado artículo se señalaba que la jurisdicción de guerra conocía de las causas que, contra cualquier persona se instruyeran por “injuria y calumnia a éstas (...) cualquiera que sea el medio para cometer el delito”.<sup>459</sup> Por tanto, se castigaban los delitos de injurias y calumnias a las autoridades militares, pero sin citar el medio. Sin embargo, el artículo 13 del propio Código establecía que los militares debían ser juzgados por los tribunales ordinarios por delitos de imprenta que no constituyeran delito militar, lo que se encontraba en relación directa con la aplicación de la Ley de Imprenta de 1883 y del Código Penal.

Antes de que el Tribunal Supremo resolviera la competencia en este proceso, se fueron definiendo dos posturas acerca de la materia. En estos primeros compases del conflicto, algunas publicaciones periódicas, y diarios militares, como *La Correspondencia Militar*, se mantuvieron en un talante “civilista”, entendiendo que todos los asuntos de crítica social, incluidos los del ejército, abordados en la prensa debían ser juzgados por la jurisdicción ordinaria, y no por un fuero privilegiado. Otros expresarían la necesidad de que los delitos que afectaban al ejército cometidos por medio de la imprenta fueran resueltos por los tribunales militares, forjándose así una actitud militarista respecto al asunto. Concretamente, *El Correo Militar* reprochaba la actitud civilista, insinuando que, con ella, lo único que se pretendía era anular por completo la jurisdicción de guerra y el Código Militar. Para el diario castrense, si un periódico o ciudadano cometía un delito militar, en concepto de autor, cómplice, encubridor o instigador, era procedente que la justicia militar lo persiguiera: “La jurisdicción de guerra es competente para conocer en todos los delitos que produzcan desafuero, bien por razón de la persona, bien

---

<sup>459</sup> Artículo 7 del Código de Justicia Militar de 27 de Septiembre de 1890. *Código de justicia militar de 27 de septiembre de 1890 y legislación complementaria del mismo*, Madrid, Talleres del depósito de guerra, 1906. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°23.

por la del delito, bien por la del lugar y si algún periódico o particular incurre en acto que cae por completo dentro de la jurisdicción de guerra, no va a inhibirse porque el delincuente sea o pertenezca a la prensa”.<sup>460</sup>

En contraposición a esta postura se reveló Juan de Madariaga, militar y abogado de *La Correspondencia Militar*, quién dirigió una carta sobre la materia a *El Imparcial*, en la que defendía la aplicación de la jurisdicción ordinaria en estos términos: “No estando suspendidas las garantías constitucionales, los delitos cometidos por medio de la imprenta, por paisanos o por militares que hubieren delinquido o antes de pertenecer a la milicia, o desempeñando un cargo público no militar, son siempre de la competencia de la jurisdicción ordinaria”.<sup>461</sup> En otra carta publicada días más tarde por el periódico madrileño, el militar apoyaba sus alegaciones en una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1890, en la que el máximo órgano judicial había resuelto un conflicto de jurisdicciones a favor de los tribunales ordinarios, razonando que, por las supuestas injurias al capitán general de Cuba publicadas en el periódico *La Discusión* de la Habana, se había cometido un delito de injurias a cargo de un paisano por medio de la imprenta, y no un delito de desacato como afirmaba el fiscal militar, de la que era competente la justicia ordinaria.<sup>462</sup>

Finalmente, en el caso de *La Correspondencia Militar*, el Tribunal Supremo falló a favor de la legislación común, mediante una sentencia publicada el 19 de Septiembre de 1891.<sup>463</sup> A raíz de la resolución, el *Boletín de Justicia Militar*, diario que se posicionó

---

<sup>460</sup> *El Correo Militar*, “Ecos del Día”, 1 de septiembre de 1891.

<sup>461</sup> *El Imparcial*, “La prensa y el Código Militar”, 3 de septiembre de 1891.

<sup>462</sup> *El Imparcial*, “La prensa y los tribunales militares”, 7 de septiembre de 1891.

<sup>463</sup> “La generalidad con la que se haya redactado el n°7, art. 7º (...) no se expresan en esa disposición señaladamente los delitos cometidos por medio de la imprenta; y dada la especialidad e importancia que revisten, correspondería hacerlo así a una ley de excepción y privilegio que por su propia naturaleza no

con una actitud claramente militarista, divulgó un artículo en el que defendía la aplicación del artículo 7 en los casos en los que un paisano cometiera un delito militar por medio de la imprenta, afirmando que el artículo 13 se encontraba en perfecta armonía con éste. Para el periódico, existían dos excepciones, perfectamente definidas en la ley, respecto a la competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria a la hora de conocer los delitos cometidos por medio de la prensa: “Excepción para los militares: salvo el caso que el hecho presente caracteres de delito militar. Excepción para los paisanos: a menos que el hecho constituya injuria o calumnia a una autoridad militar”.<sup>464</sup> Al mismo tiempo, el diario observó que la inhibición de la justicia militar en los delitos de injurias y calumnias al ejército sólo porque se había utilizado la imprenta podía ser un antecedente muy negativo para otros procesos en los que se incoaran nuevos delitos militares, como la rebelión o la sedición, en los que, al ser realizados a través de la prensa, quedaría anulada también la jurisdicción de guerra.

La polémica sobre jurisdicciones se acrecentó, ya que, un mes después de salir a la luz la sentencia que daba la razón a la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo resolvió a favor de la justicia militar por un supuesto delito de injurias cometido por un redactor de *La Voz de Galicia*. En la sentencia de 23 de octubre de 1891, se especificaba que el autor de la publicación, responsable del delito de injurias, era un sujeto perteneciente a la segunda reserva del ejército, no un paisano como había ocurrido con *La Correspondencia Militar*.<sup>465</sup> A pesar de esta sentencia a favor de los tribunales de guerra, los procesos siguientes siguieron dando la razón a la corriente civilista. El 22 de

---

puede ser interpretada con un criterio extensivo, todo lo cual demuestra que en dicho artículo no se propuso el legislador comprender los mencionados delitos”. STS 19 de septiembre de 1891. *Gaceta de Madrid*, 2 de octubre de 1891, p. 41.

<sup>464</sup> *El Correo Militar*, “La imprenta y los Consejos de Guerra”, 8 de octubre de 1891.

<sup>465</sup> EL Tribunal Supremo ratificó la competencia porque según el art. 6º del CJM los individuos pertenecientes a las reservas estaban sujetos a la jurisdicción de Guerra por delitos militares. STS 23 de octubre de 1891. *Gaceta de Madrid*, 3 de noviembre de 1891, p. 90.

febrero de 1892, el máximo órgano judicial declaró que el conocimiento de estos delitos era competencia de los tribunales ordinarios, por una causa instruida al periódico *La Peña de Jaén*, que, en su artículo “El atropello de la Guardia Civil”, había incluido frases ofensivas contra un teniente del cuerpo del ejército.<sup>466</sup> Y en marzo de 1892, a raíz de un nuevo procesamiento de *La Correspondencia Militar* por supuestas injurias al inspector general de carabineros, se produjeron algunos debates dentro y fuera de los muros del Parlamento. En la sesión del Congreso de 8 de marzo de 1892, Gómez Sigura aseveró que la aplicación del Código de Justicia Militar a los delitos de imprenta infringía la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Opinión que compartía García Alix., quién encontraba “inmoderada” la aplicación de los Consejos de Guerra, y entendía que la misma perjudicaba al ejército.<sup>467</sup>

Sin embargo, otros políticos, como el liberal Canalejas, fundador de *El Heraldo de Madrid*, o el propio ministro de Gracia y Justicia, Fernando Cos-Gayón, apostaban por una vertiente militarista, otorgando la competencia a la justicia militar en los procesos por delitos de imprenta, siempre que éstos se refirieran a actos de las entidades militares. Fuera de las Cámaras también se alzaron las voces en uno y otro sentido, especialmente entre los diarios castrenses. Mientras que *La Correspondencia Militar* seguía defendiendo que debía ser la jurisdicción ordinaria la que conociera de los delitos de imprenta;<sup>468</sup> *El Correo Militar*, y el combativo, *El Boletín de Justicia Militar*, se mantenían a favor de los Consejos de Guerra, bajo la opinión de que ciertos delitos, por su propia naturaleza, eran competencia exclusiva de la jurisdicción militar, y no debían dejar de serlo porque se utilizara como medio la imprenta.<sup>469</sup>

---

<sup>466</sup> STS 22 de febrero de 1892. *Gaceta de Madrid*, 17 de marzo de 1892, p. 75.

<sup>467</sup> *El Imparcial*, “Congreso”, 9 de Marzo de 1892.

<sup>468</sup> *La Correspondencia Militar*, “Deslinde de Jurisdicciones”, 11 de marzo de 1892.

<sup>469</sup> *Boletín de Justicia Militar*, “La jurisdicción de Guerra no es invasora”, 15 de marzo de 1892.



Finalmente, el 15 de marzo, el Tribunal Supremo declaró que el conocimiento de la causa incoada contra *La Correspondencia Militar* correspondía a los tribunales ordinarios.<sup>470</sup> A esta nueva sentencia favorable a la justicia ordinaria, en los delitos de injurias cometidos por ciudadanos a través de los periódicos, se unirían nuevas resoluciones que iban en la misma línea civilista: el 6 de julio de 1892 con *El Gladiador de Jaén*,<sup>471</sup> y el 4 de enero de 1894 en el caso instruido a *El Eco de la verdad*.<sup>472</sup> No obstante, no ocurría lo mismo cuando el autor de la publicación objeto de delito tenía vinculación, de alguna forma, con la institución militar. Teniendo como precedente la resolución de *La Voz de Galicia*, el Tribunal Supremo volvió a resolver a favor de la jurisdicción militar en un proceso incoado a un periódico republicano de Villafranca. En este caso, el autor de la publicación que había sido condenado por delito de injurias, Julián Juliá, era un individuo que había pertenecido al cuerpo del ejército en 1890, pasando la mayoría del tiempo de reclutamiento en revisión por enfermedad. Aun así, el Tribunal Supremo entendió que era la jurisdicción de guerra la competente para conocer el delito: “los individuos pertenecientes a la reserva están sujetos a la jurisdicción de guerra por los delitos militares aunque éstos hayan sido cometidos por medio de la imprenta”.<sup>473</sup>

---

<sup>470</sup> STS 15 de marzo 1892. *Gaceta de Madrid*, 6 de abril de 1892, p. 84.

<sup>471</sup> STS 6 de julio de 1892. *Gaceta de Madrid*, 21 de septiembre de 1892, p. 27.

<sup>472</sup> STS 4 de enero de 1894. *Gaceta de Madrid*, 15 enero de 1894, p. 23.

<sup>473</sup> STS 1 de mayo de 1893. *Gaceta de Madrid*, 15 de agosto de 1893, p. 6.

## 2. ATAQUES DEL EJÉRCITO A LAS REDACCIONES DE *EL RESUMEN* Y *EL GLOBO*

Durante estos últimos años, creció la irritación de las autoridades militares ante la nula respuesta por parte de la jurisdicción ordinaria, ya que, en opinión de los máximos dirigentes, dejaba impunes las críticas difundidas en los medios de información. En este contexto, el único propósito del poder militar era conseguir el traspaso definitivo de jurisdicciones a la hora de conocer los delitos de injurias y ofensas contra el ejército cometidos por la prensa. Tras una serie de resoluciones del Tribunal Supremo, que, como hemos analizado, fueron dando la razón a la jurisdicción ordinaria, el cambio de actitud del estamento castrense fue notable, y de la protesta pacífica a través de sus representantes en el Parlamento, se pasó a una actitud más agresiva y violenta, con ataques y amenazas constantes a los periódicos que reprobaban la actitud de los militares. El primer atropello importante a la prensa perpetrado por militares se produjo en marzo de 1895, al comienzo de la guerra de Cuba, al que luego se unieron más ataques, convirtiéndose en la tónica general de actuación del poder militar de estos últimos años de siglo XIX y principios del siglo XX. Con ello quedó nuevamente probada, no solo la debilidad del gobierno de la Restauración, sino la gran influencia del poder militar, que, a través de los abusos y agresiones a la prensa cometidos durante años, consiguió hacerse con el control de las publicaciones españolas.

Como hemos adelantado, el ataque promovido por algunos oficiales subalternos hay que ponerlo en paralelo con el inicio del conflicto colonial en febrero de 1895. En ese contexto, el periódico *El Resumen*, órgano político de López Domínguez, en aquel momento ministro de Guerra del partido liberal, publicó el 13 de marzo de 1895 el

artículo “Los Valientes”, en el que su autor, Ángel Luque, criticaba la conducta adoptada por los oficiales subalternos ante el conflicto de Cuba, acusándoles de tener una actitud poco patriótica al no haber ido voluntarios a la Isla para combatir por la causa española. Concretamente, la publicación censuraba a aquellos militares, recientemente salidos de las academias, que presentaban signos de “decadencia lamentable, de postración de energías y alientos esenciales en la vida militar”, síntomas que ponían de relieve “la carencia absoluta de voluntariedad en el ofrecimiento” para ir a la contienda internacional. El artículo continuaba acusando la postura de estos soldados españoles, porque “rebaja, desvirtúa, prostituye los altos fines de la Milicia”.<sup>474</sup>

Ante los reproches vertidos en *El Resumen*, una treintena de oficiales subalternos de la guarnición de Madrid, invadió la redacción del periódico madrileño y, empleando todo género de ofensas contra el director y los periodistas allí congregados, rompió el material de imprenta y causó destrozos en su sede. Un día más tarde, el diario liberal *El Globo*, dirigido por Alfredo Vicenti, informó de los sucesos con una referencia emitida por la Delegación de Policía, bajo el título: “Los Valientes”, con lo que trataron de ironizar sobre la cobardía exteriorizada por los subalternos. Esta simple reseña no pasó desapercibida, y los oficiales, considerándose profundamente ofendidos, provocaron un nuevo asalto durante la noche del 15 de marzo de mayor gravedad que el anterior. Según la información del propio diario, el ataque fue realizado por 300 subalternos que, repitiendo la acción de *El Resumen*, provocaron desperfectos en las instalaciones de *El Globo* y agredieron a los redactores que allí se encontraban.

---

<sup>474</sup>*El Resumen*, “Mundo militar”, 13 de marzo de 1895.

Tras el segundo incidente, la mayoría de las publicaciones españolas adoptaron una línea de moderación y prudencia, aunque no dudaron en amonestar la reiteración del asalto militar y la nula actuación del gobierno liberal, que había consentido el ataque de los militares a los periódicos. Especialmente grave resultaba ésta última, por la pasiva actitud mostrada por el ministro de Gobernación y el gobernador de Madrid, quienes tenían sospechas fundadas de que se iban a cometer actos violentos sobre las redacciones de algunos periódicos, y no habían tomado las medidas convenientes para ampararlos. Para *La Época* era inadmisibles “la actitud imprudente, pasiva y parcial” de los ministros de Gobernación y de Guerra, teniendo en cuenta que cualquier fiscal municipal hubiese previsto y evitado la repetición de los altercados, y cargaban contra todas las autoridades, tanto civiles como militares, que se habían “cruzado de brazos” respecto a la responsabilidad de los hechos.<sup>475</sup> Por su parte, *El Liberal*, partidario del “noble ejército español orgullo de la patria” y de la prensa “enemiga de toda arbitrariedad y toda tiranía”, lamentó que, tras los graves sucesos de Madrid, había quedado descompuesto el gobierno liberal: “no tenemos gobernador civil, no tenemos capitán general, no tenemos Gobierno”.<sup>476</sup>

La condena de las publicaciones civiles sobre la actitud mostrada por los oficiales subalternos, contrastó con el apoyo conferido por otros soldados, que justificaron la violenta protesta de los amotinados, razonando que, pese a haber cometido una acción ilegal, era la única solución posible a los numerosos insultos que recibían los militares en los periódicos civiles, ya que, si ellos mismos no los castigaban tales ofensas quedarían impunes. La prensa castrense también dio su apoyo a los amotinados, reconociendo que “ciertas intemperancias periodísticas dan lugar a excitaciones

---

<sup>475</sup> *La Época*, “El orden público y el Gobierno”, 16 de marzo de 1895.

<sup>476</sup> *El Liberal*, “Protesta”, 16 de marzo de 1895.

naturales de los ánimos juveniles”.<sup>477</sup> Junto a las alabanzas de los diarios militares, pequeños grupos de soldados visitaron las sedes de algunos diarios de provincias, para coaccionarlos para que a la hora de abordar la noticia de los atropellos, lo hicieran de la manera que más pudiera beneficiarles a ellos, pidiendo moderación en el tratamiento informativo de los sucesos, y solidaridad con los compañeros oficiales de Madrid.<sup>478</sup> Paralelamente a las actuaciones de éstos, se produjo una reunión entre los jefes y oficiales superiores del Ejército, quienes dieron todo su apoyo a los subalternos, y acordaron que, en virtud de las circunstancias, era necesario realizar una solicitud formal al gobierno para que se castigaran con rigor las ofensas contra las Fuerzas Armadas realizadas por medio de la imprenta, y para que se modificara el Código de Justicia Militar, de tal manera que los delitos de prensa relativos al ejército pasaran, definitivamente, a ser juzgados por éste.

La cuestión se planteó en las Cámaras el 16 de marzo. En el Congreso, López Domínguez, a pesar de su vinculación directa con *El Resumen*,<sup>479</sup> justificó la actitud de los miembros de la clase militar que, “lastimados en su honor” por el artículo periodístico, y viendo que por el camino de las demandas legales no se satisfacía, “han podido creer que esa cuestión se ventilaba en otro terreno”.<sup>480</sup> El ministro de Guerra condenó, asimismo, al otro periódico atacado, *El Globo*, que al relatar los hechos

---

<sup>477</sup> *El Correo Militar*, “Mundo militar: un suceso”, 15 de marzo de 1895.

<sup>478</sup> *La Justicia*, “El conflicto militar”, 20 de Marzo de 1895.

<sup>479</sup> *El Resumen* era el fiel portavoz del general López Domínguez, un medio por el que el político liberal trasladaba al público todas sus opiniones. En el momento de los sucesos, se encontraba dirigido por Adolfo Suarez Figueroa, quien escribió un editorial el 26 de marzo de 1895 en el que reprochó al ministro de Guerra de haber maltratado a la prensa por sus declaraciones en el Congreso, en las que éste acusaba al periódico de haber provocado los abusos militares. Las diferencias entre uno y otro quedaron manifestadas el 7 de abril, día en el que Suarez Figueroa cesó con el diario madrileño, para dirigir *El Nacional*, órgano de Romero Robledo. No fue el único periodista que pasó de un periódico liberal a uno conservador, ya que, junto al director, un numeroso grupo de redactores causaron baja en *El Resumen* para irse a publicaciones conservadoras, lo que produjo la decadencia del periódico que dejó de publicarse el 29 de junio de 1897.

<sup>480</sup> Congreso, 16 de marzo de 1895, ministro de Guerra, cif. 2323.

condenables, ha insistido, “molestando” en su dignidad a los militares, que, culpables o no, “hubo de causar en esa colectividad la excitación que hubiera causado a todos los diputados”.<sup>481</sup> La interpelación de López Domínguez, en la que respaldaba y defendía el abuso cometido por una parte del ejército, y culpabilizaba a las publicaciones españolas por haber tratado de manera injusta a la institución armada produjo la ira de los diputados periodistas. El ministro de Guerra fue más allá, y puntualizó que uno de los motivos que habían provocado el atropello militar era la ineficacia de la Ley de Imprenta, entendiendo que “por las deficiencias de esa legislación han sido absueltos aquellos que han atacado la honra y la dignidad de individuos que han tenido que recurrir a otro terreno para reivindicar esa honra y dignidad ultrajadas”.<sup>482</sup> Con este comentario, López Domínguez dio su apoyo a la petición formal del órgano militar de introducir ciertas modificaciones en el Código de Justicia Militar, ya que, para el ministro, si estos actos de la prensa no eran eficazmente punibles, había que ir necesariamente a la reforma de las leyes.<sup>483</sup>

En oposición al sentir del político liberal se encontraba el general Salmerón, director de *La Justicia*, quién culpabilizó al gobierno liberal de la situación que se había provocado. Para el político republicano, pese a que el artículo de *El Resumen* era ofensivo y censurable, porque no era lícito formular juicios de valor en relación a las colectividades, sino en sus actuaciones y funciones, no justificaba la actitud agresiva llevada a cabo por los oficiales subalternos. Salmerón reprochó la pasividad del poder civil, que no había previsto que éstos acusados de mal patriotas iban a cometer una agresión contra la prensa. Además, el republicano rechazó las palabras de López Domínguez sobre la cesión de competencia a la jurisdicción militar en los delitos

---

<sup>481</sup> Congreso, 16 de marzo de 1895, ministro de Guerra, cif. 2323.

<sup>482</sup> Congreso, 16 de marzo de 1895, ministro de Guerra, cif. 2324.

<sup>483</sup> Congreso, 16 de marzo de 1895, Salmerón, cif. 2328.

cometidos por medio de la imprenta, y certificó que la Ley de 1883 recogía esos abusos periodísticos, sin que hubiera en ningún caso impunidad por parte de los tribunales ordinarios al tratar estas cuestiones. En opinión del director, el propósito del ministro de Guerra era imponer una mordaza a la prensa para que, en cuestiones relativas al ejército, no se pudieran juzgar las “torpezas” que cometiera él mismo: “¿Es que aspiran los que son príncipes de la milicia a ser inviolables e infalibles?”<sup>484</sup>

Igualmente, Cánovas responsabilizó al gobierno liberal del atropello militar, por su imprevisión al no adelantarse a la “herida que podían causar” las declaraciones de los diarios madrileños en los jóvenes oficiales, quienes eran “la esperanza del Ejército”.<sup>485</sup> En la línea mantenida por los conservadores sobre la libertad de prensa, Cánovas tildaba la Ley de 1883 de ineficaz, ya que protegía más la honra del particular, y reprendió las ideas “archiliberales” del partido liberal, afirmando que era una falacia declarar la absoluta libertad de imprenta, sobre la base de que las heridas de la imprenta “no manchan ni agravian”. Para el líder conservador, cuando se veía afectado el honor de los militares, la mejor solución era la aplicación de un sistema preventivo sobre la libertad de información, poniendo, a su vez, en práctica el artículo 258 del Código de Justicia Militar,<sup>486</sup> tal y como pedían los militares. Se trataba de un posicionamiento claro y contundente del líder conservador con los requerimientos del poder militar, frente a la postura del poder civil establecido representado por el gobierno liberal.

Como no podía ser de otra manera, las declaraciones de López Domínguez, muy criticadas, como hemos visto, por dos líderes políticos de diferente ideología, resonaron

---

<sup>484</sup> Congreso, 16 de marzo de 1895, Salmerón, cif. 2328.

<sup>485</sup> *La Época*, “Discurso del Sr. Cánovas”, 17 de marzo de 1895.

<sup>486</sup> Artículo 258 del Código de Justicia Militar de 1890: “El que de palabra, por escrito o en otra forma equivalente injuria u ofenda, clara o encubiertamente, al Ejército, armas, clases o Cuerpos determinados del mismo, incurrirá en la pena de prisión correccional”.

también en los periódicos, que clamaron contra las injustas acusaciones del político. Para *La Época* era inconcebible que se culpabilizara a las cabeceras españolas de ir contra el ejército, ya que éstas, incluyendo los dos diarios madrileños atacados, habían elogiado y apoyado al mismo desde el inicio de la contienda.<sup>487</sup> De la igual manera, *El Imparcial* creía “deplorable y peligroso” que, para “cubrir la debilidad política” del gobierno, se acusara a la prensa de tratar mal a la armada española, cuando si “algo hacen las publicaciones periódicas es ensalzarla”. El periódico madrileño culpó al ministro de Guerra de querer ganarse las simpatías de los militares culpabilizando a la prensa, y acusó al mismo de haber propiciado una lucha entre la clase civil y la militar. En palabras de *El Imparcial*, un ministro “no puede jamás dar la razón a los que pasan por encima de las leyes”, y comparaba esa situación de opresión con la de los pueblos primitivos, donde “los más fuertes pueden hacer lo que gusten de los derechos de los otros”.<sup>488</sup> El rotativo consideraba que el origen de toda esa problemática estaba en la “mortal debilidad del poder público” representado por el actual gobierno liberal, y que si éste, finalmente, se hacía solidario de las palabras del ministro, sería tan responsable como él de todo lo que ocurriera.

La protesta de los rotativos españoles contra las manifestaciones realizadas por López Domínguez no se quedaría en las páginas de los periódicos, y los directores de los principales periódicos del país acordaron la suspensión de sus tiradas si el poder público no devolvía a la prensa la libertad a la hora de escribir sin coacciones ni amenazas. Para remitir sus reclamaciones al gobierno, una comisión de cuatro directores se reunió con Sagasta para exigir el cumplimiento de las garantías necesarias, fundamentales para que los diarios pudieran escribir sin miedo a nuevos ataques militares. Pese a no encontrar

---

<sup>487</sup> *La Época*, “De cómo se abusa de la debilidad”, 17 de marzo de 1895.

<sup>488</sup> *El Imparcial*, “Sin gobierno”, 17 de enero de 1895.



en el presidente de Gobierno la respuesta deseada,<sup>489</sup> y debido a las divisiones internas entre los diarios partidarios y los adversarios del partido liberal, no se llegó a un acuerdo común y finalmente, no se produjo la suspensión.

### 3. LA RUPTURA ENTRE EL PODER CIVIL Y EL PODER MILITAR

El cúmulo de críticas por la actuación de las autoridades, a raíz de los atropellos protagonizados por los militares, se cobró su primera víctima el 17 de marzo de 1895 con la dimisión del general Bermúdez Reina como capitán general de Madrid, quién fue sustituido por Martínez Campos. La entrada en escena del general tuvo consecuencias nefastas para la prensa, ya que éste se posicionó como un claro defensor del pensamiento militarista respecto al conflicto de jurisdicciones. Esta circunstancia fue aprovechada por los altos oficiales de Madrid, quienes enviaron al ministro de Guerra una petición formal para reformar el artículo 7º del Código de Justicia Militar, de modo que los delitos de injurias contra el ejército y la patria realizados por medio de la imprenta fueran juzgados por los tribunales de guerra, y con ello evitar conseguir las extralimitaciones que, según ellos, se daba en las publicaciones españolas a la hora de hablar del ejército. Los oficiales subalternos se unieron a las reclamaciones de sus superiores, exigiendo al ejecutivo liberal, además, la supresión de los periódicos *El Resumen* y *El Globo*. Finalmente, el presidente del gobierno, tras una reunión con la Regente, denegó las pretensiones de los militares, con lo que quedó abierta la crisis entre los dos grandes estamentos de la Restauración: el poder civil y el poder militar.

En aquellos momentos, las dos posturas respecto al problema de competencias se

---

<sup>489</sup> Algunos diarios, como el *Heraldo de Madrid*, informaron de que la noche del 17 de marzo estuvieron custodiadas algunas redacciones de prensa, pero que los guardias, más que para defender a los periódicos de un posible ataque, parecían “elementos decorativos” que servían solo para dar aviso al gobierno.

encontraban perfectamente definidas. Por una parte, la posición militarista estaba respaldada por todo el organismo castrense, así como por algunos dirigentes del partido conservador, entre los que destacaban Cánovas, y, como ya hemos señalado, el general Martínez Campos. Esta corriente de opinión exigía una modificación del Código Militar en la que se incluyeran expresamente los delitos de imprenta como uno de los instrumentos para cometer delito de injurias y ofensas a los oficiales. En cualquier caso, defendían la utilización de este precepto legal para castigar los delitos cometidos contra las autoridades militares, afirmando que cuando el artículo 7 expresaba “todos los medios”, incluía a la imprenta en el mismo.

Pese a que, en un principio, no toda la prensa castrense defendió la postura militarista, tras los atropellos cometidos por los subalternos una gran mayoría de las publicaciones militares se manifestó a favor de la misma. Entre todas ellas, destacaba el *Boletín de Justicia Militar*, único órgano de expresión que abogó desde 1891 por la aplicación de la jurisdicción militar a estos delitos. *El Correo Militar* se posicionó, también, como uno de los diarios más reivindicativos a la hora de reclamar la competencia de los tribunales de guerra, y no dudó en criticar a la prensa civil y al gobierno, para así justificar la violencia de los oficiales: “Existe la convicción de que hay plumas indignas que provocan, determinan y hacen necesarios aquellos hechos; como hay gobiernos, por desgracia, únicos causantes de ciertas convulsiones sociales”. Para el periódico, el Consejo de Guerra era el único órgano capaz de arrancar “las caretas de esos ladrones de ajenas honras que viven y medran entre los hombres honrados”.<sup>490</sup> La tendencia militarista del diario quedó perfectamente plasmada en el artículo “Conflicto de jurisdicciones” publicado el 20 de marzo. En el mismo, lamentó la clara contradicción

---

<sup>490</sup> *El Correo Militar*, “Fuera caretas“, 16 de marzo de 1895.

entre el Código civil y el Código militar, y exigió la reforma legislativa, ya que, de otra manera “el ejército se halla completamente desamparado en sus funciones”.<sup>491</sup> Asimismo, declaraban de forma abierta sentirse identificados con la opinión del ejército, pese a que, eran conscientes de que, los efectos de la jurisprudencia miliar podían perjudicarles con más facilidad a ellos que a los periódicos civiles, por tratar asuntos militares. A pesar de ello, confirmaron su postura militarista, expresando su total confianza “en la rectitud y justicia de los tribunales militares”, declarando que, “quizás tal vez por exceso de espíritu corporativo, nos parece que sufriríamos con más gusto; en el caso improbable de pecar, la corrección por ellos impuesta, que no la que viniese de los tribunales civiles”.<sup>492</sup>

Otros diarios militares, como *El Ejército Español*, de tendencia liberal, se mantuvieron prudentes respecto a la cuestión de las jurisdicciones. No fue el caso de *La Correspondencia Militar*, que, pese a ser una fiel defensora de la postura civilista, cambiaría su actitud ante los ataques producidos en las sedes de los periódicos madrileños. En un artículo publicado el 21 de marzo, el diario militar defendió a los oficiales subalternos de Madrid, asegurando que se trataba de un “arrebato” del todo justificado, y expresó que, solo con la modificación de las leyes procesales se podía resolver el conflicto suscitado entre ambos poderes, ya que, de continuar la competencia en manos de los tribunales ordinarios, nunca quedaría garantizada la disciplina del ejército.

En oposición al planteamiento militarista se encontraba una gran parte de la opinión pública que comprendía que si no se expresaban taxativamente los delitos de imprenta

---

<sup>491</sup> *El Correo Militar*, “La fórmula militar”, 21 de marzo de 1895.

<sup>492</sup> *El Correo Militar*, “El conflicto de jurisdicción”, 20 de marzo de 1895.

en el artículo 7 del Código de Justicia Militar, era porque el legislador no quería comprender los mismos, quedando, por tanto, excluidos del precepto legal. Opinión que quedaba refrendada con el artículo 13 del propio Código Militar, el cual prevenía que, aquellos militares que cometieran delitos de imprenta perderían su fuero privativo, por lo que, no tenía sentido que los paisanos fueran juzgados por la justicia militar. La postura civilista se apoyaba, también, en la idea de que el Ejército era un organismo público, cuyas actuaciones podían ser sometidas a la controversia o a la crítica periodística, como lo eran las de otras instituciones, razón por la cual debía ser la justicia general, y no una privativa, excepcional y privilegiada, la que conociera de las apreciaciones y juicios formulados acerca de las actuaciones militares.

El pensamiento civilista era el defendido por el Tribunal Supremo, que había emitido una nutrida jurisprudencia que avalaba la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer los delitos de prensa cualquiera que fuera el asunto tratado. Sagasta mantenía también esta postura, y, por ello, rechazó de plano la propuesta de los militares de modificar el Código Militar. El presidente del Gobierno entendía que el poder público no podía destruir los intereses creados al amparo de las leyes, y que era ilegal la modificación del artículo 7 del Código de Justicia Militar respecto al derecho a la libertad de prensa, cuando el máximo órgano encargado de resolver la competencia había fallado a favor de los tribunales civiles. Sin duda, las resoluciones del Tribunal Supremo se convirtieron en la mejor defensa de la tendencia civilista, también mantenida por la gran mayoría de las publicaciones periódicas, que veían peligrar su derecho a la libre información con las pretensiones de los militares.

*El País* fue una de las publicaciones que mejor exteriorizó el sentir de la prensa de la época, quejándose de que, con el pretexto de lo publicado por algunos periódicos, iba a quedar anulado el derecho constitucional que consagraba la libertad de emitir ideas por medio de la imprenta. El periódico republicano descubrió el verdadero peligro que suponía para la libertad de prensa someter al fuero militar cualquier asunto que se relacionara con la fuerza armada, teniendo en cuenta la dificultad existente a la hora de discernir entre lo que era lícito escribir, y aquello de lo que no se podía discutir, ya que esto lo definía el criterio propio de unos tribunales que eran “sospechosos de parcialidad”, al ser parte interesada del proceso. En la misma línea, *El País* expresó la necesidad de que la nación pudiera examinar libremente cualquier asunto que le afectara, y con ellos las cuestiones militares, quedando más que probado que el triunfo de la postura militar era un retroceso para el derecho a la libre emisión de ideas reconocido en la Constitución: “un deber y un derecho, de donde se deduce la posibilidad de que, extremando la interpretación de leyes privativas que no están hechas para la aplicación que quiere dársele, resulte imposible la vida del periódico, y nulo el precepto constitucional que consagra el derecho de emitir libremente el pensamiento por medio de la prensa”.<sup>493</sup>

No obstante, la escisión entre el poder civil y el poder militar no se manifestó solo a nivel teórico, en forma de discusiones pacíficas entre los portadores de las plumas, ya que, de forma paralela, los ataques militares a la prensa produjeron una serie de denuncias y encarcelamientos de directores y periodistas perpetrados por las autoridades militares. Los procesos contra la prensa se iniciaron en Madrid, donde Martínez Campos ejercía como capitán general. Siguiendo con su posición militarista, y

---

<sup>493</sup> *El País*, “Los delitos de imprenta”, 21 de marzo de 1895.

entendiendo que debía conocer la justicia militar de los delitos contra el ejército cometidos por los periódicos, sometió al Consejo de Guerra a las dos publicaciones atacadas por los subalternos, *El Resumen* y *El Globo*, y denunció al director de *La Justicia*, Nicolás Salmerón, y el de *El Ideal*, a los que se dejó en libertad al poco tiempo. Del mismo modo, se encarceló al director de *La Publicidad*, Eusebio Corominas, y se denunció al director de *El Diluvio*, quién se encontraba huido, ambos de Barcelona.

La decisión de las autoridades públicas de someter a la jurisdicción militar estos delitos se produjo a pesar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A esta indefensión jurídica de la prensa, se sumó, además, la intranquilidad de la opinión pública por la imposibilidad del gobierno liberal para imponer el orden y la disciplina en la sociedad. En estas condiciones, Sagasta presentó su dimisión el 22 de marzo de 1895, cargo que fue asumido por Cánovas, en el que fue su último mandato gubernamental. El cambio de partido en la presidencia del Gobierno favoreció claramente al estamento militar, que siguió denunciando a cuantos periódicos de provincias comentaban de forma “inconveniente” lo sucedido en Madrid. Resultaba muy significativo el contraste existente entre la estricta actuación de los Consejos de Guerra respecto a los periodistas, presos por el simple hecho de informar, y la absoluta benignidad con la que fueron tratados los soldados asaltantes, a los que no sometieron a ningún castigo.<sup>494</sup>

Así pues, con el nuevo gobierno conservador, aumentaron los procesos ante los Consejos de Guerra contra directores de varios diarios de provincias que se habían adherido a las protestas producidas por los periódicos madrileños tras los abusos

---

<sup>494</sup> A principios de abril *El Globo* afirmó: “Es también de observar el contraste que ofrecen los procesos incoados por jueces militares: por lo que respecta a los periodistas se sabe que están procesados y que algunos fueron conducidos a la cárcel; pero tratándose de los atropellos realizados en las redacciones, el general Martínez Campos lo ha dicho ya preveía que nadie iba a declarar contra los culpables”. *El Globo*, “La jurisdicción militar y los delitos comunes”, 2 de abril de 1895.

militares. Durante estos últimos días de marzo, fueron encarcelados por las autoridades militares el director y algunos redactores de *La Autonomía* de Reus, periódico que dejó de publicarse durante algunos días al estar presos miembros de su plantilla; y los directores de *El Baluarte* de Sevilla; *El Industrial* de Jaén y *La Bandera Federal Valenciana*. A estas actuaciones se unieron las denuncias al director de *El Diluvio*, junto a su propietario y un redactor del mismo, así como la prisión del director de *El Grillo*, de Almería, por el artículo “Prensa y Ejército” que terminaba con las siguientes palabras: “¡Viva España! ¡Viva el ejército! ¡Viva la prensa honrada!”.<sup>495</sup>

En el transcurso de los procesos, fueron muchas las muestras de apoyo por parte del sector periodístico: cartas de solidaridad a los procesados, visitas en las cárceles o reclamaciones formales a la administración pública para que llevara a cabo su excarcelación, poniendo de relieve la ilegalidad que se estaba cometiendo por parte de las autoridades militares. El propio Eusebio Corominas, director de *La Publicidad*, puesto en libertad el 22 de marzo, emitió un discurso en un banquete celebrado en su nombre, en el que lamentaba la injusta situación que vivía la prensa española, que era elogiada por las autoridades cuando enaltecía y encumbraba a determinadas personalidades, para después censurarla y encarcelarla cuando reprochaba con justicia lo que estimaba malo.

El alegato del periodista coincidió con la publicación de un escrito emitido por el jurisconsulto Pérez de Soto, y presentado por Ángel Luque, redactor jefe de *El Resumen*, en el que denunciaba la situación de los periodistas encarcelados por la jurisdicción militar, y certificaba, mediante razones legales y jurisprudenciales, que,

---

<sup>495</sup> Diarios como *El Liberal* bajo el epígrafe: “Procesos de la prensa”, o *El Imparcial* con “El conflicto militar: los procesos”, fueron informando casi diariamente de todos los encarcelamientos de directores y redactores de periódicos de provincia.

bajo ningún concepto, podía atribuirse a la jurisdicción militar la competencia para conocer y castigar los hechos acontecidos. El jurista haría mención, de nuevo, a que la misma era una facultad privativa de los tribunales ordinarios, por ministerio expreso y terminante de la ley, y sancionada, además, por la indiscutible autoridad del Tribunal Supremo.<sup>496</sup>

En este contexto, Martínez Campos presentó el 28 de marzo ante el Senado su Proyecto de ley sobre la reforma del artículo 7 del Código de Justicia Militar, ya que, en su opinión, los delitos de desacato y de injuria y calumnia a las autoridades militares se resolvían, principalmente, a favor de los periodistas sin que recayera sentencia condenatoria contra los mismos, lo que producía un antagonismo entre los tribunales de las dos jurisdicciones, que trascendía, a su vez, a los estamentos civil y militar. Siguiendo este razonamiento, el general entendía que el precepto debía quedar redactado de la siguiente manera: “Los de atentado y desacato a las autoridades militares, y los de injuria y calumnia a éstas y las Corporaciones o colectividades del Ejército, cualquiera que sea el medio para cometer el delito, *aunque sea por la imprenta*, siempre que éste se refiera al ejercicio de destino o mando militar, tienda a menoscabar su prestigio o a relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados”.<sup>497</sup>

Sin embargo, dos días más tarde, Martínez Campos fue nombrado capitán general de Cuba, lo que fue aprovechado por el gobierno conservador, que, pese a haberse mantenido fiel a las pretensiones militares, retiró el proyecto de reforma del Código Militar. Así se confirmó en la sesión del Congreso de 1 de abril de 1895, donde Cánovas

---

<sup>496</sup> *El Liberal*, “Procesos de prensa”, 26 de marzo de 1895.

<sup>497</sup> Proposición de ley del Sr. Martínez de Campos sobre reforma del art. 7º del Código Justicia Militar. *Senado*, 28 de marzo de 1895, apéndice 8º, núm. 87. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°26.



aseveró que mantenía las prerrogativas del poder civil, al entender que el ejército no podía pedir mayores garantías ni preeminencias que las concedidas por la ley a la persona del monarca, que, al mismo tiempo que jefe de Estado era jefe del ejército. Así pues, si los tribunales ordinarios eran los que entendían de las causas incoadas por delitos de lesa majestad, a ésta jurisdicción le correspondía entender también sobre los delitos cometidos por medio de la imprenta que afectaran a los militares.

#### **4. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS**

La primera sentencia resuelta por un tribunal de guerra en materia de delitos de imprenta tras los ataques de los oficiales subalternos a las redacciones de Madrid causó un gran revuelo. El fallo recayó sobre el director de un periódico de Alicante, *El Grito del Pueblo*, condenado por la justicia militar a seis meses de prisión, por un artículo en el que se informaba sobre los sucesos acontecidos en Madrid. Pese a que el director exigió la inhibición de la jurisdicción de Guerra, el fuero militar siguió con el curso del proceso, entendiendo que le correspondía el conocimiento del mismo. Circunstancia que se vio propiciada por la pasividad de la propia jurisdicción ordinaria, que no emitió reclamación alguna de competencia.

La sentencia condenatoria contra el director provocó la inmediata reacción de los partidarios de la postura civilista. El 6 de abril de 1895, el diputado, y también periodista, Soler y Casajuana, solicitó un indulto para el director, y aprovechó para ampliarlo al resto de periodistas que se encontraban en análogas condiciones, alegando, nuevamente, que no se podían sostener los fallos de los tribunales de guerra para los

delitos de imprenta, cuando la “reiterada” jurisprudencia del Tribunal Supremo había otorgado la competencia a favor de los tribunales ordinarios.<sup>498</sup> En respuesta a la petición del periodista, el nuevo ministro de Guerra, Azcárraga, declaró que no tenía inconveniente en aprobar un indulto parcial para el director del diario alicantino, y no un indulto general como reclamaba el diputado, pero con la condición indispensable de que el Consejo Supremo de Guerra emitiera primero un informe favorable para el caso concreto,<sup>499</sup> lo que seguía dejando en manos del poder militar la puesta en libertad del director.

Tras la respuesta gubernamental, Soler denunció ante las Cámaras la diferente aplicación de la legislación cuando gobernaba el partido liberal y cuando lo hacía el conservador, lo que provocaba que, pese a las resoluciones del alto organismo, los tribunales ordinarios no reclamaran su competencia, como había ocurrido en la causa incoada a *El Grito del Pueblo*. El periodista dejó entrever que la jurisdicción civil quería mantener su competencia cuando mandaba el partido liberal, pero no sentían el mismo interés cuando dejaba de gobernar “el partido favorable a la jurisdicción ordinaria”.<sup>500</sup> Este razonamiento se basaba en la idea de que, a pesar del rechazo del Proyecto de ley de Martínez Campos para modificar el Código Militar, la mayoría de los integrantes del gabinete conservador defendían la postura militarista.

El 16 de mayo de 1895 se reforzó la tesis civilista, con motivo de la causa incoada al director de *El Baluarte* de Sevilla, por el artículo: “¿Castelar ha dormido?”. El Tribunal Supremo otorgó la “competencia privativa en los delitos de imprenta a la jurisdicción ordinaria”, con arreglo a la Ley del Poder Judicial y del Jurado, declarando que, ningún

---

<sup>498</sup> Congreso, 6 de abril de 1895, Soler y Casajuana, cif. 2620.

<sup>499</sup> Congreso, 6 de abril de 1895, ministro de Guerra, cif. 2705-2706.

<sup>500</sup> Congreso, 6 de abril de 1895, Soler y Casajuana, cif. 2705.

ciudadano sometido a la competencia civil podía serlo por otra privilegiada, “sino en virtud de mandato claro y expreso de la ley”. En la resolución se criticaba la actitud de los tribunales de guerra por no tener en consideración la jurisprudencia “reiteradamente” declarada en varias sentencias, y que se estaban promoviendo “contiendas injustificadas e improcedentes” que lo único que causaban era el “entorpecimiento a la buena y pronta administración de justicia”.<sup>501</sup>

Era tal la sensibilidad de los militares respecto a lo que consideraban una ofensa, que en septiembre salió a la luz una orden promovida por Azcárraga acerca del lenguaje empleado en esta sentencia. El ministro de Guerra, en nombre del ejército, reclamó una actuación por parte del gobierno para impedir que, en lo sucesivo, el Tribunal Supremo calificara la conducta de las autoridades militares en los términos que lo hacía el auto del 16 de mayo. El ejecutivo conservador remitió la orden al máximo organismo judicial, recomendándole que, no afectando a la independencia de sus fallos, se abstuviera de “calificaciones por las cuales puedan creerse lastimados los tribunales y las autoridades de otras jurisdicciones”. La posición frente a la resolución del alto Tribunal adoptada por el partido conservador, cada vez más unido a la postura militarista, fue muy comentada por algunas publicaciones civiles, que reprocharon la actitud del ministro de Guerra, afirmando que la misma ponía en riesgo la independencia del Tribunal Supremo, y suponía un atentado al derecho y legitimidad del mismo. La prensa militar, por su parte, apoyó al ministro, y recalcó que esa independencia de la que hablaban los periódicos, no justificaba un lenguaje “que mortifique a otras instituciones”.<sup>502</sup>

---

<sup>501</sup> STS 16 de mayo de 1895. *Gaceta de Madrid*, 13 de junio de 1895, p. 233.

<sup>502</sup> *El Correo Militar*, “Ganas de hablar”, 16 de septiembre de 1895.

A pesar de este revés jurisprudencial, los militares siguieron incoando causas contra delitos cometidos por medio de la imprenta, manteniéndose viva la cuestión de jurisdicciones, que volvió a ser discutida en el Congreso por el escritor Azcarate. El diputado recriminó a Cánovas la situación de indefensión en la que se encontraban las publicaciones periódicas bajo el mandato conservador, ya que, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo había dictaminado en varias ocasiones a favor de la competencia civil, los tribunales militares seguían inmiscuyéndose en los delitos cometidos por periodistas.<sup>503</sup> Azcarate exigió al gabinete conservador que se dieran las órdenes oportunas para que no se volvieran a incoar causas contra la prensa, pero Romero Robledo, ministro de Gracia y Justicia, lo rechazó porque consideraba que el hecho de “excitar el celo” del ministerio fiscal ya suponía censura: “El ministerio fiscal no necesita estímulo para cumplir sus deberes”.<sup>504</sup> Tras el cruce de opiniones en el Congreso, el Tribunal Supremo, mediante la sentencia de 21 de junio de 1895, declaró de forma tajante que los delitos de injurias al ejército o a las autoridades militares, siempre que su medio de ejecución fuera la prensa, debían ser juzgados exclusivamente por la jurisdicción ordinaria, siendo ilegal la actitud adoptada por los tribunales de guerra que promovían competencias sobre una materia, de la que ya existía jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo.

En este contexto, el 5 de julio de 1895 se concedió un indulto total a la prensa periódica, incluyendo a los presos militares que, por delito de imprenta, se encontraban sometidos a los tribunales de guerra porque la jurisdicción civil no había entablado la oportuna competencia.<sup>505</sup> El gobierno conservador quiso frenar así las críticas vertidas en los diarios, por la situación de desprotección en la que se encontraban aquellos periodistas

---

<sup>503</sup> Congreso, 11 de junio de 1895, Azcarate, cif. 4449.

<sup>504</sup> Congreso, 11 de junio de 1895, cif. 4450.

<sup>505</sup> *El Correo Militar*, “Indultos”, 3 de Julio de 1895.

que eran procesados por las autoridades militares, en contra de lo que establecía la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, no eran todo facilidades para los directores y redactores que se encontraban encarcelados, ya que, expresamente quedaron exceptuados del derecho de indulto “los autores de los delitos de injuria y calumnia contra los particulares, si no obtuviesen el perdón del particular ofendido”; así como “los que perteneciendo al ejército o Armada se hubieran valido de la imprenta para quebrantar o rebajar el prestigio de las autoridades militares”.<sup>506</sup>

Durante 1895, con motivo del procesamiento del director y algunos redactores del diario republicano *La Autonomía* de Reus, el Tribunal Supremo resolvió acorde con las pretensiones militares. Siguiendo la línea mantenida en otros fallos anteriores de análoga situación, el Tribunal Supremo entendió que la competencia correspondía a la justicia de guerra por “el carácter militar de los procesados, por ser dos de ellos reclutas en depósito y otro perteneciente a la segunda reserva”.<sup>507</sup> La misma decisión se tomó en el auto de 6 de noviembre de 1896, por el artículo “Los próximos embarques” publicado en *El Ampurdanés*, ya que el redactor era un sargento de la segunda reserva. Fuera de estas resoluciones, en las que, como hemos visto, el autor del artículo encausado tenía una mínima relación con el ejército, y durante los años siguientes, se sucedieron los pronunciamientos a favor de los tribunales ordinarios en los procedimientos llevados a cabo por los Consejos de Guerra, que crecieron considerablemente con el recrudecimiento de los acontecimientos en la guerra de Cuba.<sup>508</sup>

---

<sup>506</sup> Real Decreto concediendo un indulto a la Prensa, Gaceta de Madrid, 6 de julio de 1895.

<sup>507</sup> STS 8 de junio de 1895. *Gaceta de Madrid*, 11 de julio de 1895, p.1.

<sup>508</sup> En estos primeros meses de 1896, el Tribunal Supremo tuvo que resolver la competencia jurisdiccional en los procesos incoados a *La Voz del Obrero* por el artículo “Chinitas”, en donde se afirmaba que existían injurias a las autoridades de la Marina (BJM, 30 de Enero de 1896, pp. 23-24); a *La Republica* por injurias a las autoridades del ejército en el artículo “El general Martínez Campos” (BJM, 15 de abril de 1896) Causa incoada contra Sabino Arana por injurias al ejército en *Bizkaitarra* ( 15 de julio de 1896).

A pesar de ello, la cuestión siguió estando en boca de todos, y, mientras los periodistas protestaban por la multitud de causas incoadas por el fuero militar sin que éste tuviera la legitimidad para hacerlo, los oficiales se quejaban de los insultos proferidos en las publicaciones periódicas, rechazando la efectividad de la Ley de Imprenta y las decisiones del jurado. Así lo expuso el diputado Hoces en el Congreso, declarando que la legislación de prensa era deficiente respecto a los folletos y hojas sueltas clandestinas, siendo “vergonzoso”, que, con la misma, pudieran repetirse todos los días, injurias y ofensas a las autoridades militares que hacían mucho daño a la imagen del ejército. Concretamente, el político denunció la difusión de una “asquerosa” hoja sin firma, que insultaba de forma soez y cobarde a una personalidad militar española, a la que no se había detenido, a diferencia de cómo se había procedido en supuestos análogos, en los que el ministerio fiscal había comunicado al juez la gravedad de la publicación, y éste había secuestrado de la tirada en el acto.<sup>509</sup> El Conde de Tejada de Valdosera estuvo de acuerdo con Hoces en que se debía prevenir al fiscal para que procediera a su denuncia, y lamentó que, a causa de la Ley liberal de 1883 con la que no estaba de acuerdo el gobierno conservador, en España no hubiera tribunales de policía a disposición del poder público, ya que eso ayudaría a proceder “con toda la energía y rapidez necesarias al secuestro de los papeles u hojas denunciados”.<sup>510</sup>

Los meses transcurrieron y los tribunales de guerra, más preocupados en perseguir a los periodistas, que en esclarecer los posibles delitos cometidos por las autoridades militares en la guerra de Cuba, siguieron denunciando a los periódicos. Así ocurrió en el sumario contra el director de *La Justicia*, León Vega, por el artículo “El gran escándalo”, del que nos ocupamos más extensamente en el capítulo dedicado al

---

<sup>509</sup> Congreso, 24 de junio de 1896, Hoces, cif. 793-794

<sup>510</sup> Congreso, 25 de junio de 1896, ministro de Gracia y Justicia, cif. 816.

conflicto colonial. En la sentencia de 3 de octubre de 1896, el Tribunal Supremo volvió a otorgar el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria, y aprovechó la misma para quejarse de nuevo de la actitud de la justicia militar que seguía promoviendo procesos improcedentes, que dañaban la buena administración de justicia.

Tras producirse estos reproches, el ministro de Guerra volvió a emitir una orden en la que defendía las causas incoadas por los tribunales de guerra, afirmando que la decisión que adoptara el Tribunal Supremo en cada caso no impedía a la justicia militar emprender su acción en otros que pudieran presentarse, asegurando que éstos tenían derecho a defender sus atribuciones, particularmente en este tipo de materias que daban lugar a duda. Además, calificaba de “poco procedente” el auto del Tribunal, tanto por “la falta de consideración a la autoridad militar”, como por “el mal efecto que semejantes decisiones han de producir en el Ejército”.<sup>511</sup> Azcárraga reconocía, también, el sometimiento del Código Militar a la recta interpretación del Tribunal Supremo en las decisiones tomadas acerca de las contiendas jurisdiccionales, pero se posicionó claramente con la institución armada, alegando que era necesaria la reforma del Código Militar, para evitar así las dificultades que estaban sobreviniendo, especialmente en ese momento en que el ejército estaba luchando en Cuba.

Uno de los fallos más importantes del Tribunal Supremo se produjo a comienzos de 1897, a raíz del proceso incoado contra Reparaz, por un artículo publicado en *El Heraldo de Madrid*, que se solventó a favor de la jurisdicción ordinaria, tras una larga lucha entre los defensores de la postura militarista y los que propugnaban la tendencia civil en materia de imprenta. Durante los días en que permaneció encarcelado el

---

<sup>511</sup> Real Orden de 2 de noviembre de 1896. Publicado en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 6 de noviembre de 1896.

escritor, fueron muchas las plumas que se alzaron para opinar sobre el contencioso jurisdiccional. Sin ir más lejos, el conocido escritor y filósofo Unamuno firmó un artículo en el que se oponía a la justicia militar: “La extensión que va tomando la jurisdicción militar en el juicio de diversos delitos (supuestos los más de ellos) es uno de los signos más tristes que presenta hoy España; es lo que la pone sobre todo al nivel de los países más bárbaros. Espíritu militar y sentido de la justicia son dos cosa que riñen de verse juntas”.<sup>512</sup> Aunque cada vez más publicaciones militares apoyaban los requerimientos del ejército, existía todavía algún diario castrense que rechazaba abiertamente la vertiente militarista. Con estas palabras lo declaró *El Ejército Español*: “Comprenderíamos que si una publicación periódica, con frecuencia, insertase escritos que pudieran barrenar la disciplina o la interior satisfacción, fuera vedada su lectura a las clases militares; pero suponer que el periódico cuya misión es inquirir, discutir, juzgar y aun denunciar (...) cae dentro de las prescripciones del artículo en cuestión (artículo 7 del Código de Justicia Militar), sería la verdad realizar una maravilla de torsión al concepto legal”.<sup>513</sup> Otras personalidades y organismos se volcaron con la causa, proclamando que era competencia de la jurisdicción ordinaria, con excepción del fiscal del Tribunal Supremo, quién, guiado por Cánovas, publicó un dictamen por el que alegaba que en este concreto caso era competencia de la justicia militar, ya que no se trataba de una simple injuria, sino que el director había incurrido en un delito de sedición militar.

El auto, publicado el 22 de enero de 1897, declaró que la causa instruida contra el periodista Reparaz era competencia de la jurisdicción civil, y no el fuero de la guerra, como pretendían el fiscal del Tribunal Supremo y el presidente del Gobierno. El

---

<sup>512</sup> *La Lucha de Clases*, “Los tribunales militares”, 9 de enero de 1897.

<sup>513</sup> *El Ejército Español*, “Crónica”, 19 de enero de 1897.



Tribunal Supremo otorgó, por tanto, el conocimiento de la causa al juez ordinario, ya que el supuesto delito se había cometido por medio de la prensa periódica, y el imputado era una persona no aforada. Por ende, no podía tener competencia la justicia militar, ya que el Código Militar no sometía a la jurisdicción de guerra a personas extrañas al estamento castrense, sino las que taxativamente reconocían el artículo 7 del Código. La línea de argumentación del alto Tribunal quedó más que probada, ya que, en el fallo se rechazaba, también, la competencia del Consejo de Guerra, si éste, en primera instancia, hubiera fundado el posible acto como delito de sedición, tal y como afirmaba el fiscal. Para el Tribunal tampoco estaba justificada la jurisdicción por el mismo motivo: el sujeto imputado no pertenecía al fuero militar, y por tanto, como se trataba de un delito cometido por medio de la imprenta, debían conocer los tribunales ordinarios.<sup>514</sup>

De forma unánime, la prensa periódica dio su apoyo a la importante decisión del Tribunal Supremo, y dejó constancia de que la misma no significaba el desprecio al ejército, como querían ver las autoridades militares. Lo expresó con estas palabras *El Liberal*: “nos felicitamos de la resolución del Supremo, y la consideramos digna de fervientes aplausos, no tan solo porque ha decidido, según era de presumir, una competencia, sino porque ha venido a apaciguar las pasiones”, constatando de nuevo “lo que hemos dicho muchas veces. Acreedor a los mayores respetos es en todo tiempo el ejército; pero, más si cabe, debe serlo ahora, pues lo mismo en Cuba que en Filipinas constituye la primera, y acaso, la única representación de España”.<sup>515</sup> Sin duda, desde que se había conocido el encarcelamiento de Reparaz, *El Imparcial* fue el más combativo a la hora de defender la postura civilista. Así que no dudó en aplaudir “el

---

<sup>514</sup> STS 22 de enero de 1897. *Gaceta de Madrid*, 27 de enero de 1897, p. 77.

<sup>515</sup> *El Liberal*, “Cuestión concluida”, 23 de enero de 1897.

acto de justicia y singular entereza que han realizado los magistrados del Supremo (...) declarando lo que imponía la ley, lo que obligaba la jurisprudencia y lo que con evidente injusticia repugnaba el ejército”. Para el diario madrileño la pretensión militarista del gobierno conservador, y del fiscal del Supremo, era un “temido absurdo jurídico”, después de veinte sentencias a favor de los tribunales ordinarios.<sup>516</sup>

No todo fueron elogios para el Tribunal Supremo, y, como era de esperar, los partidarios de la corriente militarista siguieron amonestando la doctrina del alto organismo. *El Correo Militar* fue de los más críticos, y, contundente declaró que la sentencia del tribunal se podía resumir en estas palabras: “De cómo la publicidad por medio de la imprenta, que es circunstancia agravante cuando se trata de injurias contra un particular, viene a resultar ATENUANTE, cuando el delito se comete contra la fuerza armada o contra una autoridad o corporación militar”.<sup>517</sup> Opinión compartida por el estamento castrense, que seguía sin entender como la Ley del Jurado publicada en 1888, estaba por encima del Código de Justicia Militar aprobado en 1890.

El Tribunal Supremo siguió otorgando la competencia de cuantas cuestiones se suscitaron en estos meses a los tribunales ordinarios,<sup>518</sup> hasta que se suspendieron las garantías constitucionales y se promulgó el estado de guerra en abril de 1898, momento en el que, por fin, los tribunales de guerra pudieron resolver cuantas causas se encontraban en sus manos. Tras el desastre colonial, y pese a la sólida línea doctrinal

---

<sup>516</sup> *El Imparcial*, “JUSTICIA”, 23 de enero de 1897.

<sup>517</sup> *El Correo Militar*, “Casos y cosas”, 23 de enero de 1897.

<sup>518</sup> Fallos del Tribunal Supremo a favor de la jurisdicción ordinaria: proceso contra un folleto clandestino que hablaba del embarque de soldados distribuidos en Gijón (*Boletín de Justicia Militar*, 30 de enero de 1897 pp. 17-26); carta publicada por *El Faro de Vigo* (28 de febrero de 1897); dos causas incoadas contra *El País*: “El revelo el revelo!” y “Ya está aquí” (*Boletín de Justicia Militar*, 15 de marzo 1897 pp.71-73; 15 de abril 97- pp. 101-103). Otras causas: *La verdad de Algeciras*, *La Voz del Pueblo* y *La Voz del Obrero de Ferrol*.

asentada sobre la materia por el Tribunal Supremo desde que diera comienzo el conflicto de jurisdicciones, el poder militar siguió luchando para conseguir la ansiada ampliación de la competencia jurisdiccional en materia de prensa.

Como veremos en próximos capítulos, los atropellos cometidos contra *El Resumen* y *El Globo* fueron el solo el comienzo de una práctica que fue adoptada de forma habitual por el ejército durante los años siguientes. Estos ataques a las redacciones periodísticas tuvieron su episodio final en el asalto a la revista catalana *¡Cu-Cut!* y al diario *La Veu de Catalunya* en 1905, antecedentes, a su vez, de la aprobación definitiva en 1906 de la conocida Ley de Jurisdicciones. Con esta legislación, los militares pudieron, al fin, juzgar los delitos cometidos por periodistas, aunque estos no tuvieran ninguna vinculación con el cuerpo castrense, y sin encontrarse el territorio en circunstancias extraordinarias. De tal manera que, tanto las ofensas contra el ejército y el honor militar, como los delitos contra la Patria, quedaron a merced de la jurisdicción de los Consejos de Guerra. Una victoria para el poder militar, y una gran pérdida para el reconocimiento efectivo de la libertad de prensa, que se vio con las manos atadas por el ojo implacable de los tribunales militares durante el siglo XX.



## **4. LA POLÍTICA DE REPRESIÓN CONTRA LOS ÓRGANOS DE PRENSA ANARQUISTA**

### **1. LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES ANARQUISTAS EN LA RESTAURACIÓN**

El movimiento anarquista, que había sido condenado a la clandestinidad por Real Decreto de 10 de enero de 1874, fue, sin duda, uno de los problemas que más inquietaron a las autoridades de la Restauración. Desde que Cánovas asumió la presidencia, impuso un riguroso control, especialmente intenso entre los años 1875-1876, en los cuales decretó el cierre de las asociaciones anarquistas y prohibió sus órganos de difusión. La corriente se sumergió en un largo período de decadencia organizativa y sindical, del que salió en 1881 con la llegada de Sagasta al poder. La legalización de las asociaciones y organizaciones de la clase obrera favoreció el desarrollo de una tendencia sindicalista anarquista, respaldada por la propaganda que de ella se hacía en los diversos periódicos, que consiguió sacar de la clandestinidad a la organización, resurgiendo de la mano de la Federación Regional Española de la Internacional. Sin embargo, esta situación no se reflejó en normas que autorizaran de forma expresa su existencia legal, por lo que, hasta el momento, era la Constitución vigente, en sus artículos 13 y 14, la que regulaba genéricamente a las asociaciones anarquistas.<sup>519</sup>

Durante estos años, el anarquismo vivió una etapa caracterizada por las revueltas y

---

<sup>519</sup> El artículo 13 de la Constitución de 1876 establecía el derecho de todo español de “asociarse para los fines de la vida humana”. El artículo 14, añadía que el mismo podía ser realizado “sin menoscabo de los derechos de la Nación, ni de los atributos esenciales del poder público”.

motines de los trabajadores, especialmente en Andalucía. Teniendo en cuenta que España era un país primordialmente agrario, la insatisfacción de las clases populares no tardó en manifestarse en el sector agrícola, donde muchos campesinos comenzaron a defender ideas anarquistas como un método eficaz para conseguir salir de la grave crisis en la que se encontraban. El fundamento revolucionario del movimiento se encontraba en la idea de la supresión del Estado a través de la eliminación de la propiedad privada, con la que pretendían transformar la sociedad. De entre todos los crímenes anarquistas, destacaron los cometidos por la organización andaluza “La Mano Negra”,<sup>520</sup> que fueron reprimidos de manera efectiva por la Guardia Civil, utilizada de forma recurrente durante estos años para combatir las revueltas anarquistas y mantener el orden social.<sup>521</sup> Las detenciones de los trabajadores pertenecientes a esta asociación desembocaron en los conocidos procesos contra “La Mano Negra”, que se saldaron con una multitud de obreros encarcelados, así como con las ejecuciones de ocho miembros y la cadena perpetua de quince militantes de dicha organización, que fue considerada “ilícita”.<sup>522</sup>

La actuación gubernativa y judicial llevada a cabo en este procedimiento generó mucha polémica. Durante la instrucción de los sumarios para aclarar los delitos y asesinatos atribuidos a la asociación, se apreció una manipulación de las pruebas por parte de la policía, que castigó con dureza a algunos obreros, basándose en indicios o sospechas, o por su afiliación a la Internacional. Para el historiador Antonio Miguel Bernal no cabe

---

<sup>520</sup> “La Mano Negra” fue una organización obrera secreta, de carácter anarquista, que, desde 1874, realizó una serie de acciones violentas, tales como el saqueo, robo, extorsión e incluso asesinato de propietarios agrarios, infundiendo el pánico entre los terratenientes andaluces, y como forma de venganza a los que consideraban sus explotadores.

<sup>521</sup> LÓPEZ DEL CORRAL, M., *La guardia civil en la Restauración (1875-1905). Militarismo contra la subversión y terrorismo anarquista*, Madrid, Actas, 2004, pp. 542-554

<sup>522</sup> El fallo del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1884 ratificó la sentencia interpuesta por la Audiencia de Ronda que declaraba la ilicitud de la “Mano Negra”, en base al artículo 198.1 del Código Penal que reputaba como asociaciones ilícitas a las que por su objeto y circunstancias fuesen contrarias a la moral pública o tuviesen por objeto cometer algunos de los delitos penados en el Código. Refrendada, a su vez, por la STS de 8 de octubre de 1888.

duda de que los crímenes de la Mano Negra fueron el pretexto perfecto del gobierno para desarticular las incipientes organizaciones obreras en plena crisis agraria.<sup>523</sup> Otros autores sostienen que esta asociación no existió, y que se trató de un montaje urdido por las altas instancias gubernamentales para justificar la represión del movimiento obrero.<sup>524</sup>

En cualquier caso, lo ocurrido en torno a la Mano Negra sumergió en una grave crisis al movimiento anarquista, que durante aquellos años tuvo que lidiar también con la estricta política de restricción ejercida sobre sus órganos de expresión. Las autoridades conocían el gran valor que tenían los periódicos como medio de conexión entre los distintos grupos anarquistas alrededor de la Península, siendo, también, el único vehículo con el que contaban sus militantes para difundir a gran escala sus ideas y doctrinas revolucionarias. En esta primera etapa, el gobierno se dedicó a registrar las casas y lugares de trabajo para confiscar los ejemplares de los diarios más combativos, como la *Revista Social* de Madrid o *La Tribuna Libre* de Sevilla, así como folletos o almanaques anarquistas, encarcelándose a todo aquel que poseía los mismos.

Si bien, a lo largo de estos años, se publicaron varios periódicos anarquistas,<sup>525</sup> las acciones policiales y gubernativas hicieron que, en su mayoría, se editaran de forma clandestina. En el momento en que se rebajaba la represión policial, los militantes de la organización se agrupaban para redactar un diario; sin embargo, cuando ésta era más fuerte, los periódicos se convertían en hojas sueltas o cambiaban su formato por

---

<sup>523</sup> BERNAL, A.M., “Los procesos de la Mano Negra”, *Los grandes procesos de la Historia de España*, Madrid, Crítica, 2002, pp. 410-432.

<sup>524</sup> GUTIÉRREZ MOLINA, J.L., *El Estado frente a la anarquía: Los grandes procesos contra el anarquismo español (1883-1982)*, Madrid, Síntesis, 2008, p. 26.

<sup>525</sup> Existen a día de hoy ejemplares de *La Bandera Social*, *La Bandera Roja*, *La Anarquía*, *La Idea Libre*, *La Protesta*, *La Revista Blanca* y la *Revista Social*.

publicaciones más literarias, para continuar en el mercado. La mayoría desaparecía, de ahí la brevedad de muchas publicaciones anarquistas que no llegaron a pasar de los cuatro números, aunque, usualmente, los mismos participantes creaban otra idéntica con un nombre parecido para que la sustituyera. Esta dinámica fue diferente en las grandes urbes como Madrid o Barcelona, donde existían agrupaciones con un mayor número de militantes que ofrecían el soporte necesario para lanzar las publicaciones.

## **2. EL NACIMIENTO DE LA “PROPAGANDA POR EL HECHO”**

La desintegración de la FTRE en 1888 abrió una nueva y distinta etapa en el anarquismo español, caracterizada por la fragmentación y desorganización del movimiento. Gerald Brenan definió estos años hasta 1909 como “los más oscuros y peor definidos de la historia del anarquismo español”, ya que, “no existía ni una sola federación anarquista que cubriera toda España”.<sup>526</sup> Dentro del movimiento coexistieron dos pensamientos: uno de ellos, muy minoritario, defendía la transformación de la sociedad a través de mecanismos colectivos legítimos y morales, como las manifestaciones, las huelgas, el sabotaje o la desobediencia civil; la postura mayoritaria apostaba por las acciones violentas, como los robos, las agresiones armadas o la colocación de explosivos o los atentados, como medios para combatir el capitalismo existente y difundir el espíritu anarquista. Ésta tendencia individualista se conoció como “propaganda por el hecho”, ya que sus defensores consideraban que no existía un instrumento más eficaz de persuadir a los ciudadanos sobre las injusticias sociales, y defender la igualdad social, que aterrorizar a la burguesía con la insurrección violenta

---

<sup>526</sup> BRENNAN, G., *El laberinto español: Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil*, Madrid, Planeta, 2008.



de los propios trabajadores.<sup>527</sup>

Con el paso de los años, estas acciones revolucionarias individuales se fueron manifestando de forma más virulenta, como respuesta a la fuerte represión que el Estado ejercía sobre el movimiento obrero. No hay duda de que el gobierno español reprimió con dureza a los miembros del anarquismo, considerando a todos los que eran afines a sus ideas, estuvieran o no a favor de la tendencia, como disidentes ideológicos y adversarios políticos a los que había que anular a través de un sistema de medidas y sanciones muy estricto. Esta política represiva provocó que muchos anarquistas se volvieran más combativos y justificaran la propaganda por el hecho como la respuesta más adecuada a las agresiones gubernamentales. A pesar de los esfuerzos, esta tendencia no consiguió tener un efecto práctico en la sociedad española, más allá del ensalzamiento individual del autor que cometía los ataques, que convertía su acción en un acto de venganza o sacrificio. Tal y como señala Núñez Florencio, la propaganda por el hecho resultaba ser “un acto en buena parte ciego y desesperado, en el que el protagonista busca su propia muerte, convirtiéndose más en mártir de una revolución imposible que en agente de la revolución futura”.<sup>528</sup> De la misma opinión es González Calleja, que lo define como una “táctica de lucha generalmente defensiva, aunque practicada de forma inconveniente, inoportuna e irreflexiva, antes que una acción revolucionaria clara y destinada a la insurrección inmediata, pero acaba por identificarse con las acciones violentas de tipo individual”.<sup>529</sup>

---

<sup>527</sup> “Bulletin de la Federation Jurasienne de l' Association internationale des travailleurs”, Sonvillier (Berna), 3 de diciembre de 1876. AVILÉS, J., “Milenarismo y propaganda por el hecho: la marcha anarquista sobre Jerez de 1892”, *Historia, política y cultura. Homenaje a Javier Tusell* (vol I), Madrid, UNED, 2009, pp. 183- 211, p. 205.

<sup>528</sup> NÚÑEZ FLORENCIO, R., *El terrorismo anarquista (1888-1909)*, 1983, Siglo XXI, Madrid, p. 182.

<sup>529</sup> GONZÁLEZ CALLEJA, E., *La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917)*, Madrid, CESIC, 1998, p. 254.

Desde 1888 hasta 1893, la propaganda por el hecho se tradujo en la colocación de bombas y otros explosivos en fábricas, empresas o edificios religiosos en diversos puntos de España, aunque con especial virulencia en Barcelona.<sup>530</sup> La segunda etapa, que comenzó en septiembre de 1893 con el fallido atentado contra el general Martínez Campos, fue la más trascendental del terrorismo español, no solo por las sangrientas actuaciones anarquistas, que conmocionaron a los ciudadanos españoles, sino, también, por la repuesta de las autoridades para combatir las mismas. El desarrollo de estas manifestaciones violentas estaba muy vinculado a la radicalidad de forma y de fondo de los órganos de prensa anarquista, que, en su gran mayoría, propiciaron un aumento del fanatismo entre los integrantes del movimiento. Esta fuerte ideologización de los medios de expresión hizo que el Estado impulsara acciones cada vez más severas para combatir la difusión de ideas anarquistas, lo que dejó sin efecto la libertad de expresión y pensamiento.

## **1. APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA REPRIMIR LOS MOTINES ANDALUCES**

Como hemos adelantado, en la década de los noventa, el movimiento anarquista español se hizo cada vez más intransigente en relación a las autoridades, con el predominio de la propaganda por el hecho como medio más efectivo para hacerse escuchar. Tras la colocación de unos explosivos en Cádiz, en 1891, y el descubrimiento de un complot para poner una bomba en el Congreso de los Diputados, los órganos anarquistas comenzaron una campaña de desprestigio contra el gobierno y la policía, a los que acusaban de haber realizado tales acciones como artimañas para frenar el desarrollo de

---

<sup>530</sup> La relación de los atentados terroristas cometidos durante estos años se encuentra recogida en: AHN, Ministerio de la Gobernación, Serie A, legajo 2, expediente 15.

las ideas revolucionarias. Paralelamente, se fue dando una implantación progresiva del capitalismo en la agricultura, lo que acentuó el radicalismo entre los campesinos, especialmente en algunas comarcas de Andalucía. En Jerez, concretamente, la noche del 8 al 9 de enero de 1892, una multitud de trabajadores entró en la ciudad con gritos a favor de la anarquía, cometiendo dos asesinatos a su paso. La revuelta, que puso de manifiesto la vulnerabilidad policial a la hora de garantizar la seguridad pública, así como la pasividad y falta de previsión de las autoridades al mando, fue un ejemplo claro de la propaganda por el hecho, ya que no importaron los resultados prácticos conseguidos por los alborotadores, sino el impacto propagandístico de su actuación.

La resonancia del ataque anarquista fue significativa en la prensa periódica, realizándose un diferente tratamiento de la información en función de la ideología política. Los órganos de la prensa del gobierno conservador exigieron una represión de los sucesos vigorosa y rapidísima, sin la posibilidad de atenuación, ya que, tal y como declaró *La Época*, los trabajadores “viven en época de libertad y de igualdad, nadie les oprime, la ley les reconoce todos los derechos de ciudadanos”. Asimismo, la publicación conservadora subrayó el peligro que suponía la propaganda de los “enemigos de los partidos políticos” y “enemigos de las clases acomodadas”.<sup>531</sup> A pesar de que los diarios de corte liberal también condenaron el crimen perpetrado, éstos requirieron un castigo que no fuera excesivo para los trabajadores, y aprovecharon para denunciar las desigualdades existentes en la propiedad territorial andaluza. Por un lado, *El Liberal* condenó el suceso de Jerez porque respondía a una protesta violenta que quebrantaba “toda noción de derecho”, pero exigió al gobierno conservador que la represión no aumentase el descontento “de las masas desvalidas... Nada hay más terrible

---

<sup>531</sup> *La Época*, “Intentona anarquista”, 10 de enero de 1892.

que una sociedad desesperada”,<sup>532</sup> Del mismo modo, *El Imparcial* declaró que “la ejemplaridad es muy conveniente para atajar osadías que no ponen en peligro a la sociedad, pero que pueden causar gravísimo daño a mayor o menor número de personas”.<sup>533</sup> En cuanto a los diarios republicanos, éstos pusieron su foco en las penosas condiciones de vida de los trabajadores jerezanos, que propiciaban un problema en la sociedad que iba en aumento. Para *El País*, la culpa la tenía el sistema político impuesto por las autoridades, ya que fomentaba estas violentas actitudes que respondían a “la desesperación del pueblo hambriento”.<sup>534</sup> Por último, los diarios obreros, entre los que destacó *El Socialista*, condenaron la revuelta anarquista, insistiendo en la necesidad de organizar una verdadera revolución social entre todos los países; mientras que los órganos anarquistas, en su gran mayoría, apoyaron a los campesinos, y disculparon los dos asesinatos, porque se habían cometido mediante acciones individuales.

La ineficaz labor gubernativa a la hora de luchar contra el anarquismo quedó, de nuevo, al descubierto durante el procedimiento judicial llevado a cabo tras el levantamiento de Jerez. La precipitación e improvisación de las autoridades hizo que, durante la causa instruida por la justicia militar, y como había pasado en los procesos contra la Mano Negra, se fabricaran pruebas para incriminar a trabajadores inocentes con el propósito de conseguir unos culpables que calmaran el desasosiego de los ciudadanos. La severa represión policial afectó, también, a aquellos periodistas anarquistas que se encontraban en libertad intentando mejorar la situación de los prisioneros. Entre otros atropellos, se produjo la detención de un redactor de *El Productor*, publicación que fue incautada por las autoridades por haber recolectado dinero para los detenidos; Asimismo, fue encarcelado un vendedor ciego de un diario obrero de Jerez por haberse negado a

---

<sup>532</sup> *El Liberal*, “Los sucesos de Jerez”, 10 de enero de 1892.

<sup>533</sup> *El Imparcial*, “Los sucesos de Jerez”, 10 de enero de 1892.

<sup>534</sup> *El País*, “Los anarquistas de Jerez”, 10 de enero de 1892.

revelar a los oficiales los nombres de los suscriptores del mismo.<sup>535</sup> Finalmente, el Consejo de Guerra procesó a un centenar de personas, imponiéndose la pena de muerte a cinco anarquistas, entre ellos dos conocidos periodistas que habían sido acusados de complicidad.

A raíz del ataque perpetrado en Jerez, al que se le unieron otros de menor importancia, la fiscalía del Tribunal Supremo dirigió una circular a todos los jueces y fiscales para controlar la actividad ácrata por medio de la aplicación de algunos preceptos contenidos en el Código Penal vigente. En la norma se advertía del riesgo del anarquismo, calificándolo como una violación del orden jurídico “monstruosa” y peligrosa para los ciudadanos, porque destruía “lo que la razón y la historia han considerado absolutamente necesario para la vida de los pueblos”. El fiscal expresó con claridad que, pese a que la legislación penal no preveía expresamente “este nuevo género de enemigos”, los grupos anarquistas estaban comprendidos en el artículo 198 del precepto, que declaraba la ilicitud de las sociedades. De conformidad con la opinión del fiscal del Tribunal Supremo, el gobierno conservador envió una circular a los gobernadores de provincia por la que, en virtud del artículo 198 del Código Penal, quedaba prohibida cualquier sociedad anarquista.<sup>536</sup>

La legislación penal fue utilizada, también, para reprimir la propagación de las doctrinas anarquistas a través de sus órganos de expresión. De esta manera, se aplicó el artículo 203 del Código Penal para atacar a la prensa anarquista, sancionando la autoría de las publicaciones y la propaganda de carácter clandestino, independientemente de si los

---

<sup>535</sup> GUTIÉRREZ MOLINA, J.L., *El Estado frente a la anarquía: Los grandes procesos contra el anarquismo español (1883-1982)*, Madrid, Síntesis, 2008, p. 54.

<sup>536</sup> Circular del Ministerio de Gobernación, 8 de abril de 1892. AHN, secc. Gobernación, serie A, leg 2 A, exp. Nº 17.

diarios anarquistas se encontraban a favor o no de la propaganda por el hecho.<sup>537</sup> La represión gubernamental contra el anarquismo provocó la reacción inmediata de los republicanos, que denunciaron ante el Congreso el desconocimiento de la doctrina anarquista por parte del poder público, ya que en España existían asociaciones que perseguían un ideal por medios pacíficos, y que, por tanto, no tenía sentido declararlas fuera de la ley.<sup>538</sup>

## **2. LA RESPUESTA LEGISLATIVA Y POLICIAL ANTE LOS ATENTADOS TERRORISTAS DE 1893**

Durante varios años, antes incluso de que se produjera el ataque anarquista en Jerez, se habían registrado varias explosiones sin importancia en fábricas y domicilios de empresarios en diversos puntos de la geografía española. La colocación de estas bombas no tenía como finalidad producir víctimas, sino vengar la represión del poder, asustando a las personas y grupos que, según los anarquistas, oprimían al proletariado.<sup>539</sup> A partir de 1893, el anarquismo se volvió mucho más violento con ataques contra representantes políticos y militares del Estado. El primer atentado de gran trascendencia tuvo lugar en Barcelona el 24 de septiembre de 1893 contra el general Martínez Campos, cuando el joven anarquista, Paulino Pallás, quiso vengar las torturas policiales y las sentencias injustas con motivo de la represión del levantamiento de Jerez. El ataque, que produjo dos víctimas mortales, causó gran alarma en el gobierno liberal, que rápidamente ordenó la presencia de la Guardia Civil en las calles de la provincia.

---

<sup>537</sup> Artículo 203 del Código Penal de 1870: “Incurrirán en la pena de arresto mayor: “Los autores, directores, editores ó impresores, en sus respectivos casos, de publicaciones clandestinas. Se entienden por tales las que no lleven pié de imprenta le lleven supuesto”.

<sup>538</sup> Congreso, 6 de mayo de 1892, Vallés y Ribot, cif. 5515.

<sup>539</sup> La primera de las bombas lanzadas en España fue en Barcelona en 1891 contra la sede de la Asociación de los patronos catalanes.

El Consejo de Guerra condenó a muerte a Pallás como autor en solitario del crimen anarquista, quién pronunció su célebre frase: “la venganza será terrible”, al filo de su muerte. Ésta se convirtió en el preámbulo del atentado al teatro Liceo de Barcelona, la noche del 7 de noviembre de 1893, el peor ataque cometido por anarquistas hasta entonces. Éste nuevo crimen, que había sido perpetrado, por primera vez, contra la burguesía, provocó 22 muertos y 35 heridos. La enorme confusión y temor en la sociedad catalana propició una respuesta rápida del gobierno, que se apresuró a suspender las garantías constitucionales en Barcelona, manteniendo esta situación extraordinaria hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Sin embargo, ésta medida no fue suficiente para la opinión pública que, consternada por este nuevo ataque terrorista, requirió al gobierno acciones represivas rápidas y severas para combatir el anarquismo. Entre los sectores que más presionaron al poder público se encontraban los grupos de mayor influencia de la época, como el Ejército, la Iglesia y la burguesía catalana, especialmente conmocionada con el atentado.

A estas protestas se unieron las publicaciones españolas, que, independientemente de su ideología, exigieron medidas más rigurosas y castigos ejemplares para los criminales. En estas palabras lo expresó *El Imparcial*: “la prensa cree que ha llegado ya el momento de afrontar con energía la lucha que provocan los dinamiteros, y exige represión implacable contra los anarquistas, comenzando por declararlos fuera del derecho común, de que ellos reniegan”.<sup>540</sup> El periódico madrileño exageró la información del acontecimiento, y, haciéndose eco de los atentados que, paralelamente, se estaban sucediendo en París, presentó los crímenes de Barcelona como una conspiración del anarquismo internacional contra la sociedad capitalista española, fomentando con ello el

---

<sup>540</sup> *El Imparcial*, “Campaña contra los anarquistas”, 12 de noviembre de 1893.

miedo y la inseguridad ciudadana. También censuraron el “repugnante y monstruoso crimen” los diarios republicanos,<sup>541</sup> e incluso algunos diarios anarquistas,<sup>542</sup> pero ambos se mostraron en contra de cualquier represión gubernamental que suprimiera las libertades.

Por su parte, *La Época* acusó directamente a los diarios anarquistas de ser culpables de la agresión, por “repetir las frases arrogantes y atrevidas, la actitud y hasta los gestos de los anarquistas, presentando así inconscientemente como mártires de una idea a los que sólo son reos de horrendos crímenes”.<sup>543</sup> El órgano del partido conservador fue más lejos aún, y planteó la posibilidad al gobierno de acudir a la jurisdicción militar para poder “exterminar la plaga que nos deshonra”, ya que la justicia ordinaria se mostraba apática y deficiente a la hora de resolver este tipo de crímenes. Más concretamente, *La Época* mencionó la posibilidad de redactar una nueva ley que otorgara la competencia de estos delitos a los Consejos de Guerra, e impusiera la cadena perpetua para sus autores: “Duros son sus preceptos; pero si las leyes ordinarias no bastasen; si la suspensión de garantías no fuese suficiente, acúdase a lo más excepcional, que todo nos parece poco para salvar a la sociedad de sus más terribles enemigos”.<sup>544</sup> Otras personalidades políticas, como el general Martínez Campos, se posicionaron también a favor de redactar una ley antiterrorista donde se sometiera a los tribunales militares los delitos relacionados con el anarquismo.

Como había ocurrido en anteriores ataques anarquistas, y teniendo en cuenta la laguna

---

<sup>541</sup> *El País*, “La Dinamita”, 10 de noviembre de 1893.

<sup>542</sup> El diario anarquista *Le Revolté*, publicado en Francia, escribió un artículo en el que, sin dejar de criticar a la burguesía, condenó el crimen del Liceo porque habían muerto mujeres y niños. *Le Revolté* (París), 18 de noviembre de 1893.

<sup>543</sup> *La Época*, “El anarquismo en acción”, 11 de noviembre de 1893.

<sup>544</sup> *La Época*, “El anarquismo en acción”, 11 de noviembre de 1893.



legal existente en materia de atentados, la fiscalía del Tribunal Supremo emitió una circular el 17 de noviembre de 1893, por la que se ordenaba castigar y perseguir los delitos que, por medio de la imprenta, provocaran la perpetración de ataques o hicieran apología de acciones calificadas como delito. En la norma se recordaba a todos los jueces y fiscales municipales que debían castigar con toda severidad, “sin vacilación y con energía”, a los periodistas que difundieran o hicieran apología de las doctrinas anarquistas. Concretamente, se les incitaba a aplicar el artículo 582 del Código Penal contra los delincuentes que, por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación, provocaran directamente la perpetración de algún delito; así como el núm. 4º del artículo 581, que sancionaba a los que emplearan iguales medios para hacer la apología de acciones calificadas como delito.<sup>545</sup> Para el fiscal era primordial que se sancionara penalmente a esos “fanáticos secuaces de doctrinas servidas en nuestra Nación” que, o bien hacían gala en la prensa periódica de sus “reprobables designios y de propósitos exterminadores”, o se atrevían a elogiar los crímenes perpetrados y ensalzaban a sus autores.

Para completar su política represiva, el gobierno liberal promulgó, el 10 de julio de 1894, la primera Ley antiterrorista de España, que cubrió el vacío legal existente en el Código Penal respecto a los atentados realizados mediante explosivos.<sup>546</sup> La norma no mencionaba expresamente el anarquismo, pero quedaba claro que el objetivo principal del ejecutivo era clarificar el problema de la falta de normas específicas para combatir el movimiento anarquista. Entre las disposiciones más importantes del precepto, se establecía la imposición de pena de muerte o cadena perpetua para aquellos que

---

<sup>545</sup> Circular de la Fiscalía del TS de 17 de Noviembre de 1893, en la que se castiga los delitos que por medio de la imprenta provoquen delitos anarquistas. *Gaceta de Madrid*, 18 de Noviembre de 1893, número 322, p. 507. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°24.

<sup>546</sup> Ley de “Represión de delitos cometidos por medio de explosivos” de 10 de Julio de 1894. *Gaceta de Madrid*, n°192 de 11 de julio de 1894, tomo III, p.155. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°25.

atentaran con bombas causando víctimas, o cuando las acciones se produjeran en lugares públicos; reconociendo, además, al jurado como competente para juzgar estos delitos, y no a la justicia militar como solicitaba el partido conservador.

La legislación era especialmente severa con los órganos de expresión anarquistas, restringiendo de manera drástica la libertad de prensa de los mismos. En su artículo 6º declaraba que aquellos que “de palabra, por escrito, por la imprenta, el grabado u otro medio de publicación, indujeran directamente a otros a cometer explosiones o a utilizar explosivos para alarmar a la población “se les impondrían las mismas penas que a los autores materiales”; y en caso de no realizarse el delito, las penas inferiores en un grado. También se castigaba con la pena de presidio correccional la apología de los delitos o a favor de los delincuentes penados por la legislación. Entre las reacciones de la clase política, la ley contó con el apoyo de los conservadores, a pesar de que éstos solicitaban una norma más severa, ya que entendían que, si el anarquismo era un movimiento que tenía como objetivo la violencia y la muerte, la propaganda anarquista debía ser punible por sí misma;<sup>547</sup> Los republicanos, sin embargo, se opusieron al entender que se estaba privando la libertad de expresión de los anarquistas, cuando éstos tenían “perfectísimo derecho a manifestar cuáles son aquellas ideas que respecto a organización social estiman como mejores”.<sup>548</sup>

Al mismo tiempo que se endurecían los medios legales de represión del anarquismo, se recurrió a otro tipo de estrategias arbitrarias y abusivas, que destaparon un sistema policial corrupto y manipulado políticamente. Con el fin de callar las voces críticas de la sociedad, que culpaban al poder público de incapacidad para dar con los verdaderos

---

<sup>547</sup> Congreso, 14 de mayo de 1894, Burgos, cif. 4183.

<sup>548</sup> Congreso, 14 de mayo de 1894, Carvajal y Huesca, cif. 4188.

culpables, el partido conservador solicitó a los gobernadores de cada provincia la confección de listas con los nombres de aquellos que pertenecían al movimiento anarquista o que difundían y propagaban las ideas anarquistas mediante sus publicaciones.<sup>549</sup> Paralelamente a estas acciones gubernativas, se recrudeció la actuación de la Guardia Civil,<sup>550</sup> que realizó registros por toda España, y detuvo a centenares de obreros por ser sospechosos de comulgar con las ideas anarquistas, aunque no apoyaran el terrorismo. Esta tiránica actuación policial, guiada en todo momento por el gobierno, produjo una ola de detenciones que masificó las cárceles de Barcelona, teniendo que habilitarse prisiones provisionales en otras provincias adyacentes.<sup>551</sup>

Como había ocurrido en anteriores procesos, se pusieron nuevamente en entredicho los medios policiales para conseguir las confesiones de los posibles culpables, y los periódicos no tardaron en acusar a las autoridades de malos tratos a los detenidos, entre los que se encontraban numerosos periodistas.<sup>552</sup> Para la doctrina especializada no hay duda de que los oficiales utilizaron métodos ilegales como la tortura, con el objetivo de conseguir declaraciones falsas, en las que se inculpaban unos a otros. Solo así se entiende que, al conocerse la identidad del autor material del atentado del Liceo, el anarquista Santiago Salvador, y después de que varios de los detenidos se hubieran declarado convictos y confesos del mismo, el tribunal extrajera una supuesta relación

---

<sup>549</sup> Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo, 14 de diciembre de 1893. AHN, secc. Gobernación, serie A, leg. 2 A: exp. N° 17.

<sup>550</sup> El proyecto inicial de la Ley de 1894 contemplaba la creación de una unidad específica de la Policía Judicial para combatir al anarquismo, que no se llevó a cabo por la oposición de los sectores de izquierdas que se negaron a otorgar ese poder al estamento militar. Finalmente, se creó una unidad especial dependiente del gobernador civil Larroca, confiándose por primera vez a la Guardia Civil la lucha contra la propaganda del hecho.

<sup>551</sup> Algunos diarios anarquistas franceses apuntaron en enero de 1894 que el número de presos por el atentado del Liceo ascendía a 500. *Le Revolté* (París), 6 de enero de 1894.

<sup>552</sup> En 1899, el capitán general de Cataluña, Emilio Despujol, admitió las denuncias de torturas contra los detenidos. Providencia del capitán general de Cataluña, Emilio Despujol, en el caso de Cambios Nuevos 30 de noviembre de 1899. AIHCM, 2ª, 4ª, leg. 157.

entre el atentado de Martínez Campos y el del Liceo. Esto es importante porque, a pesar de que era la jurisdicción ordinaria la encargada de llevar la instrucción del atentado del Liceo, por no haber víctimas militares, se abrió una nueva causa ante la jurisdicción de guerra por complicidad en el asesinato del general Martínez Campos, por el que ya había sido ejecutado Pallás como autor único del mismo. Durante este segundo Consejo de Guerra, celebrado el 29 de abril de 1894, fueron condenados a muerte seis anarquistas, acusados de cooperación en el ataque contra el general, imponiéndose la pena de cadena perpetua a otros cuatro por complicidad.<sup>553</sup> La injusta sentencia del tribunal militar, cuando ya se había cerrado el proceso con anterioridad, es un ejemplo más de la fuerte represión a la que sometió el gobierno al movimiento anarquista.

En definitiva, el poder público aprovechó la conmoción social causada por los graves atentados de 1893 para imponer una política represiva de grandes dimensiones que consiguiera predisponer a la opinión pública en contra del movimiento obrero. No hay duda de que el ejecutivo utilizó como pretexto los ataques terroristas para eliminar a todos los grupos molestos que pudieran estar en oposición al régimen vigente: desde los anarquistas, hasta los comunistas, colectivistas, republicanos o socialistas. De ahí que se produjera una exagerada actuación policial,<sup>554</sup> que llevó a detener y encarcelar a centenares de obreros que nada tenían que ver con los sucesos terroristas, ni, incluso, con el anarquismo. La terrible respuesta del Estado lesionó gravemente las libertades necesarias para la supervivencia de las fuerzas que se oponían al régimen, especialmente el derecho fundamental de informar y expresar las opiniones. Éste se

---

<sup>553</sup> Dos de ellos, que habían sido acusados de encubridores del delito por haber hospedado en su casa a Santiago Salvador, autor del atentado del Liceo, se les sobreseyó posteriormente la causa durante el juicio celebrado por vía civil el 11 de julio de 1894.

<sup>554</sup> El número desproporcionado de anarquistas acusados de cometer el atentado del Liceo hay que ponerlo en relación con la propaganda por el hecho, manifestación que predominaba en el anarquismo en ese momento, y se caracterizada por las acciones violentas individuales.

encontraba severamente restringido con la Ley de 1894, lo que permitió al gobierno perseguir de forma indiscriminada a todos los diarios sospechosos de ser afines a la ideología anarquista. Así pues, aprovechando la ola de detenciones policiales, se encarceló a un gran número de periodistas, redactores o incluso vendedores de publicaciones susceptibles de ser afines a las ideas revolucionarias, utilizando el recurso habitual de alargar indefinidamente su estancia en la cárcel. El abuso y la arbitrariedad con la que actuaba el poder público consiguieron intimidar a los órganos de prensa, independientemente de su relación con el movimiento anarquista, imponiendo un silencio informativo que se extendió en los años posteriores.

### **3. AUMENTO DE LA REPRESIÓN INFORMATIVA TRAS EL ATENTADO DE LA CALLE CAMBIOS NUEVOS**

#### **1. LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN LA NUEVA LEY ANTITERRORISTA DE 1896**

Después de los atentados de 1893, España vivió una calma tensa, solo perturbada por el intento de asesinato contra el gobernador civil de Barcelona, Ramón Larroca, el 25 de enero de 1894. La ausencia de ataques durante meses hizo pensar que la brutal represión llevada a cabo por el gobierno español había sido efectiva para acabar con el problema del anarquismo. No obstante, en junio de 1896, se produjo un nuevo crimen anarquista en la calle Cambios Nuevos, esta vez contra una procesión religiosa, que acabó con la vida de doce personas, y más de 60 ciudadanos heridos. El ataque conmocionó aún más a la opinión pública, ya que era la primera vez que los anarquistas atentaban contra la población civil, que de por sí se sentía desamparada e indefensa

ante las agresiones terroristas. El pánico volvió a apoderarse de la población, y, como ya había ocurrido en crímenes anteriores, se alzaron muchos sectores para protestar contra la insuficiencia de las actuaciones gubernamentales, reclamando nuevas y más severas medidas contra los anarquistas. En la sesión del Congreso inmediatamente posterior al ataque, políticos de diferente ideología expusieron su repulsa ante lo sucedido, exigiendo una respuesta inmediata por parte del gobierno, que acabara definitivamente con el problema. La minoría liberal rechazó la necesidad de promulgar nuevas leyes represivas, mientras que los conservadores creían conveniente aumentar la persecución de las ideas anarquistas.

Con argumentos semejantes a los vertidos en las Cámaras, la prensa española, independientemente de su ideología, condenó el nuevo crimen terrorista, y reclamó medidas represivas al gobierno, no solo contra los autores materiales del atentado, sino contra todos aquellos órganos que promulgaran ideas anarquistas. Además de las actuaciones gubernamentales, los diarios más conservadores solicitaron una nueva legislación en la que se especificara que, el simple hecho de ser anarquista ya constituyera delito.<sup>555</sup> Las publicaciones religiosas, por su parte, muy afectadas por lo acontecido, culparon al gobierno de Sagasta por haber concedido derechos, como la libertad de prensa y de reunión, que habían favorecido el rápido desarrollo del movimiento anarquista.

En oposición a la línea tradicional, los diarios republicanos pidieron tranquilidad a la administración pública temiendo que, tras los terribles sucesos, y con los grupos sociales más influyentes a favor de un aumento de la represión, se pudieran aniquilar

---

<sup>555</sup> “A las fieras no se les pregunta si han causado algún daño, se les exterminaba por el solo hecho de ser fieras”. *El Diario de Barcelona*, 11 de junio de 1896.

“en una hora de miedo, todas las conquistas de un siglo”.<sup>556</sup> Respecto a los diarios anarquistas, la gran mayoría se identificó con los terroristas, y defendió el atentado como el mejor medio de propaganda del movimiento; aunque, también, existieron órganos que reprobaron estos ataques violentos como *La Idea Libre* de Madrid o *La Tramontana* de Barcelona. Estas publicaciones expresaron su malestar por la fuerte represión gubernamental que caía sobre sus diarios, ya que, pese a no estar de acuerdo con los actos violentos, no podían defender y propugnar en libertad su doctrina, debido a la ignorancia de las autoridades, que no sabían distinguir entre el terrorismo y el anarquismo.

La mayoría de las voces, por tanto, exigían un endurecimiento de las actuaciones, lo que fue aprovechado por el gobierno conservador para efectuar una respuesta rápida y desproporcionada, más severa y arbitraria que la desarrollada por el gabinete liberal en los atentados de 1893. En primer lugar, se suspendieron las garantías constitucionales en Barcelona el día después de los sucesos, prolongándose la situación de forma injustificada hasta el 17 de diciembre de 1897. En esta ocasión, la medida afectó especialmente a los diarios catalanes, que vieron anulado su derecho a la libertad de prensa tras el importante atentado acontecido en la ciudad. Este mecanismo de control informativo no fue el único utilizado por el poder conservador para controlar la información, ya que, a pesar de tener a su alcance la Ley de 1894, presentó en las Cortes, el 16 de junio de 1896, un nuevo proyecto de ley en el que equiparaba el movimiento anarquista con el terrorismo, y endurecía sus penas, siendo especialmente severo con el derecho a emitir libremente las ideas.

---

<sup>556</sup> *El Nuevo Régimen*, “La explosión de Barcelona”, 13 de junio de 1896.

La nueva Ley antiterrorista, promulgada el 2 de Septiembre de 1896,<sup>557</sup> incorporó una serie de novedades respecto a la legislación de 1894, dejando en vigor los preceptos que no modificaba de la misma. En primer lugar, trasladaba la competencia para conocer de los delitos contra el terrorismo a la jurisdicción militar, y aumentaba considerablemente algunas penas, no solo para los autores de los atentados, sino para aquellos que, de palabra o por escrito, coadyuvaran a la ejecución de los crímenes como el encubrimiento o la conspiración, castigados con la cadena perpetua.<sup>558</sup> Además, la norma autorizaba al gobierno para expulsar de España a todos aquellos que fueran sospechosos de profesar ideas anarquistas. Respecto a la libertad de la prensa, la nueva ley ampliaba la competencia de las autoridades, concediéndoles la facultad para suprimir todos aquellos periódicos que hicieran alarde del título de anarquista, así como a los diarios que, “artificiosamente disimulen sus fines”, cuando lo disponga la Junta de Autoridades de la respectiva capital de provincia.<sup>559</sup> Dos semanas después de la entrada en vigor de la nueva legislación, se publicó el Real Decreto de 16 de septiembre de 1896, que limitaba las facultades gubernativas para la supresión de periódicos y centros anarquistas, así como el extrañamiento de los propagadores de ideas anarquistas, a las provincias de Madrid y Barcelona; sin embargo, estas competencias se ampliaron al resto de ciudades tras el asesinato de Cánovas.<sup>560</sup>

No cabe duda de que el gobierno, con el objetivo de prevenir más ataques terroristas, y alentado por gran parte de la opinión pública, que reclamaba una compensación por lo ocurrido en Barcelona, impuso una legislación especial contra el terrorismo que

---

<sup>557</sup> Ley de “Represión del anarquismo” de 2 de septiembre de 1896. *Gaceta de Madrid*, número 248 de 4 de septiembre de 1896, tomo III, p.825. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°27.

<sup>558</sup> Artículo 3 de la Ley de “Represión del anarquismo” de 2 de septiembre de 1896.

<sup>559</sup> Artículo 4 de la Ley de “Represión del anarquismo” de 2 de septiembre de 1896.

<sup>560</sup> Circular de 13 de Agosto de 1897 de la Fiscalía del Tribunal Supremo relativa á la represión del anarquismo. *Gaceta de Madrid*, número 226 de 14 de agosto de 1897, tomo III, p.591. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°28.



atentaba directamente contra la libertad de pensamiento de los grupos anarquistas, y por extensión, de los que se encontraban en oposición al régimen. Con la nueva norma se prohibieron todas las publicaciones anarquistas y se clausuraron los lugares de reunión de los grupos afines al movimiento, igualando la libertad de imprenta y de asociación a la comisión de atentados terroristas. Como ya había ocurrido con la anterior legislación, los órganos de prensa conservadores felicitaron al gobierno por la severa y completa represión llevada a cabo para combatir los atentados. *La Época* resaltó la gran labor de las autoridades para “arrancar de cuajo la planta anarquista en Cataluña”, que se había provisto “con tal número de datos, informaciones y antecedentes que no habrá en el Principado, al menos en mucho tiempo, atmósfera respirable para el anarquismo”.<sup>561</sup> Asimismo, las publicaciones religiosas se manifestaron a favor de la intensificación en la política de represión a la libertad de la prensa de los medios anarquistas. Así lo expresó *El Siglo Futuro*, que veía inútil cualquier gestión gubernamental si no llevaba aparejada “arrancar, destruir y reducir a cenizas la raíz del árbol”. Para el diario la repetición de los atentados revelaba que “el mal no se remedia cortando las manos de los que arrojan las bombas si se dejan libres las manos de los que las cargan”.<sup>562</sup>

A pesar de constituir un peligroso precedente como medida legal de restricción de la libertad informativa, estas publicaciones no fueron las únicas en defender la nueva ley antiterrorista. Los liberales sobrepasados, tal vez, por las circunstancias, dieron como buena la justificación del partido conservador sobre las peligrosas condiciones en las que se veía envuelto el país.<sup>563</sup> *El Liberal* declaró sentirse satisfecho con la “justicia de la represión” contenida en la ley, sin la que hubiera prevalecido la ansiedad y la

---

<sup>561</sup> *La Época*, “Anarquistas y separatistas”, 9 de septiembre de 1896

<sup>562</sup> *El Siglo Futuro*, “La nueva ley contra el anarquismo”, 25 de agosto de 1896.

<sup>563</sup> No hay que olvidar, que, junto con el problema del terrorismo desarrollado estos años, España se encontraba sumergida en la guerra de Cuba, conflicto que se llevó todo el protagonismo, tanto en los debates en las Cámaras como en el de las publicaciones españolas.

inquietud social, y felicitó a las autoridades por haber hecho recobrar a los ciudadanos la confianza.<sup>564</sup> Una actitud semejante manifestó *El Imparcial*, para el que la “peligrosa” ley reduciría la frecuencia de los atentados, ya que, en su opinión, “solamente una vigilancia especial encomendada a personas de grandes aptitudes” podía disminuir las inquietudes”.<sup>565</sup> El republicano Alfredo Calderón fue muy crítico con esta actitud de los sectores liberales, acusando al partido liberal de no haber frenado una ley que ponía la libertad de prensa “a merced de las suspicacias del poder”, no solo por los abusos, los excesos y los atropellos que pudiera dar lugar su ejecución, sino porque se justificaba la defensa del orden público en la represión de las ideas.

Concretamente, Calderón reprochó al líder del partido, Castelar, que encontrara “perfectamente” democrática una legislación que perseguía las ideas opuestas al gobierno, cuando, en otros tiempos, se hubiera opuesto frontalmente a la misma. Haciéndose pasar por el dirigente político, declaró: “No persigáis las ideas, no decretéis nada que pueda servir a los poderes para cohibir o menoscabar la libertad del pensamiento. (...) Persigamos los delitos, dejemos en paz los principios. Allá luchan las ideas unas con otras en el campo especulativo. Hay en todas las doctrinas verdades y errores, pero ¿quiénes somos nosotros, legisladores, para meternos a clasificarlas? ¿Es nuestra misión discernir lo verdadero de lo falso? (...) No compete al poder erigirse en el árbitro de la verdad y el error. Si el liberalismo ha defendido siempre la absoluta libertad de pensar no es porque entienda que todas las ideas son sanas y acertadas, es porque sabe que solo errando se vence el error. (...) La represión de ideas obedece a

---

<sup>564</sup> *El Liberal*, “La Defensa Social”, 9 de septiembre de 1896.

<sup>565</sup> *El Imparcial*, “Una necesidad nacional”, 10 de septiembre de 1896

prejuicios”.<sup>566</sup> En la misma línea a Calderón se posicionaban todas las publicaciones republicanas y obreras, que manifestaron su rechazo absoluto a la nueva norma, acusando al gobierno de cubrir con forma legal los atentados cometidos por las autoridades a la prensa de la oposición.<sup>567</sup> Con estas palabras lo exteriorizó *El País*: “El Gobierno, desatentado, no contento con los males que sufrimos, va a colocarnos la mordaza con esta ley infame de represión del anarquismo y no habrá medio de protestar de nada, ni manera de denunciar sus abusos ni sus torpezas”.<sup>568</sup>

## 2. EL FORZOSO SILENCIO DE LA PRENSA ESPAÑOLA DURANTE EL PROCESO DE MONTJUICH

A pesar de las críticas provenientes de estos grupos minoritarios, el gobierno conservador aprobó nuevas medidas para completar la política de represión contra el anarquismo. Mediante la Real Orden de 19 de septiembre de 1896 se organizó un cuerpo especial de Policía Judicial para el descubrimiento y persecución de los delitos contemplados en la nueva ley antiterrorista, en la línea de lo propuesto por los conservadores cuando se aprobó la Ley de 1894.<sup>569</sup> Este nuevo organismo dependía directamente del Ejército, aumentando las funciones de la policía para combatir los delitos anarquistas, cuya competencia, como hemos visto, se había encomendado al estamento castrense. La actuación de la sección especial de policía se limitó a Madrid, donde se destinaron 11 oficiales, y a Barcelona, donde se enviaron 23 agentes al ser el principal foco de los ataques. Además de los agentes, nombrados por el presidente de la

---

<sup>566</sup> MADRID, F., y VENZA, C., *Antología documental del anarquismo español. Organización y revolución: De la Primera Internacional al Proceso de Montjuich (1868-1896)*, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 2001, pp. 476-478.

<sup>567</sup> “Hay cosas que, realmente, producen asco el tratarlas”. *El Corsario*, 27 de agosto de 1896.

<sup>568</sup> *El País*, “...Grandes remedios”, 3 de septiembre de 1896.

<sup>569</sup> Real Orden de 19 de septiembre de 1896. *Gaceta de Madrid*, número 264 de 20 de septiembre de 1896, p. 1.056.

Audiencia, previo informe del comandante del ejército y el gobernador civil, se puso al frente de las operaciones a dos jefes designados directamente por el comandante del ejército. Esto tuvo su consecuencia inmediata en la represión de los movimientos revolucionarios, ya que, mientras que en la mayoría de provincias de la geografía española la nueva norma no tuvo especiales consecuencias de orden punitivo, sobreseyéndose las causas en la mayoría de los casos, en la ciudad condal, la nueva sección especial de la Policía Judicial, dirigida por Narciso Portas, llevó a cabo una acción indiscriminada contra el movimiento obrero.

La desmedida actuación policial siguió en la misma línea que en los atentados de 1893, produciéndose, según los datos que maneja la doctrina especializada, más de 400 detenciones, lo que obligó a las autoridades policiales a trasladar a los presos más peligrosos al castillo de Montjuich. Este número elevado de prisioneros respondía a los requerimientos de los sectores conservadores de la sociedad, entre los que se encontraba la burguesía y la Iglesia, que exigían acciones contra todos aquellos que difundieran ideas anarquistas, independientemente de que tuvieran relación con el ataque. Así pues, el partido conservador aprovechó la indignación y la alarma social para ordenar la detención, no solo de los anarquistas, sino de un gran número de obreros, que habían participado en huelgas los años anteriores, republicanos, socialistas, comunistas, llegando incluso a afectar a personas cuyo único “delito” era tener como pariente a algún militante del movimiento. La casi totalidad de los presos, nada tenían que ver, por tanto, con los atentados, y en su mayoría se encontraban desvinculados de las tácticas violentas y se oponían a la propaganda por el hecho, por lo que parece lógica la

denuncia realizada por *El Nuevo Régimen*, que acusó al poder público de encarcelar “a cuantas personas considera terribles por sus ideas avanzadas”.<sup>570</sup>

Además de las detenciones injustificadas, las autoridades llevaron a cabo otras acciones ilegales y abusivas, que empezaron a ver la luz en octubre de 1896, mediante cartas o informes que los mismos detenidos hacían llegar a la prensa. En estas se describían torturas y malos tratos con los que el Estado obtenía las declaraciones falsas de autoculpabilidad. Todo valía para el gobierno y la policía con tal de tener unos culpables a los que acusar de los atroces crímenes y mantener bajo llave a todos aquellos que criticaban sus actuaciones. “El Proceso de Montjuich”, sin duda, uno de los procedimientos judiciales más polémicos de la historia de España, se vio rodeado de una gran cortina de humo provocada intencionadamente por el gobierno.

Los órganos de prensa, por su parte, tuvieron que lidiar con la censura militar impuesta a los diarios de Barcelona, con motivo de la suspensión de garantías constitucionales, y con las masivas detenciones que afectaron a un gran número de periodistas catalanes de ideas republicanas o socialistas, así como la huída de muchos de ellos de la provincia, tras la clausura de las imprentas y la prohibición de publicaciones y revistas sospechosas de ser anarquistas.<sup>571</sup> Esta circunstancia produjo el enmudecimiento de la prensa española, afectando, en gran medida, al tratamiento que desde los periódicos se daba a las informaciones de abusos y arbitrariedades policiales. Tras la devastadora represión gubernamental, los periódicos más conservadores se declararon en contra de

---

<sup>570</sup> *El Nuevo Régimen*, 18 de julio de 1896.

<sup>571</sup> Algunos diarios anarquistas, que habían sido prohibidos en España, se siguieron publicando en otros países, como la revista *Ciencia Social*, que se continuó editando en Buenos Aires. Esta circunstancia fue aprovechada por algunos escritores españoles de la generación del 98, como Unamuno o Pío Baroja, que difundieron artículos en estos periódicos extranjeros, en los que apoyaban la cuestión anarquista. Entre ellos destacó Azorín, quién se sintió muy atraído por el pensamiento político anarquista, y redactó numerosos artículos. En una de estas publicaciones defendió el uso de la violencia para conseguir los fines anarquistas: *Ciencia Social*, “Apuntes”, 19 de abril de 1897.

los presos, y el resto permaneció en silencio ante lo que estaba sucediendo. Especialmente llamativo fue el caso de los diarios republicanos de Barcelona, que se hallaban bajo el régimen de la previa censura, y que, dominados por el miedo a posibles represalias, o quizá en connivencia con las autoridades locales,<sup>572</sup> aplaudieron, o bien silenciaron las actuaciones policiales.<sup>573</sup>

Los pocos que defendieron a los acusados y se movilizaron para ayudar a los presos de Montjuich fueron los de tendencia republicana, como *El Nuevo Régimen* y *El País*, donde se difundieron cartas de los presos que contaban las atrocidades que se cometían, rompiendo así la barrera del silencio gubernamental. En concreto, *El País* publicó el testimonio de uno de los carceleros de Montjuich que aseguraba que dos de los detenidos desaparecidos habían sido asesinados por las autoridades. Más influencia tuvo la carta dirigida al ministro de Guerra, que iba firmada por algunos procesados, y difundida por *El Nuevo Régimen* el 24 de noviembre de 1896. En el documento se describían prácticas ilegales, como la incomunicación prolongada en prisión o la falta de pruebas y de testigos, así como las torturas practicadas en la cárcel. A estas denuncias en los rotativos republicanos se sumaron las de *El Socialista*, y con mayor cautela la de publicaciones como *La Justicia* y *El Globo*, portavoces de Salmerón y Castelar respectivamente. Junto a estos periódicos, se efectuaron manifestaciones de varios grupos obreros de distintas ciudades españolas a favor de los presos, así como de los intelectuales de tendencias izquierdistas de la época, especialmente involucrados en la protesta de las actuaciones gubernamentales tras la detención del escritor Coromines.

---

<sup>572</sup> ÁLVAREZ JUNCO, J., *El Emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista*, Madrid, Alianza, 1990, p.155

<sup>573</sup> Llamó la atención la postura de *El Diluvio*, uno de los órganos republicanos con más influencia en Barcelona, que durante el transcurso de los meses solo insertó noticias oficiales, y algunas quejas sobre el servicio de comida a los presos. Esta misma actitud la adoptó *La Publicidad*, que justificó su silencio en la suspensión de garantías impuesta por el gobierno.

A pesar de que las medidas represivas del gobierno conservador iban dirigidas a silenciar los abusos policiales, no pudo evitar la campaña de prensa internacional iniciada a favor de los presos de Montjuich. De poco le iba a servir el despliegue policial y las severas medidas gubernamentales para silenciar a la prensa española, teniendo en cuenta la gran repercusión que tuvieron las denuncias publicadas en los diarios europeos fuera de las fronteras de nuestro país.<sup>574</sup> La campaña se inició en Francia, donde se encontraba exiliado uno de los periodistas detenidos en Montjuich, Fernando Tarrida del Mármol, quién consiguió que su documento: “Un mes en las prisiones de España”, fuese difundido por el periódico *L’Intransigent*, dirigido por Henry Rochefort. Ese mismo diario publicó también el artículo “Torquemada”, en el que comparaba las prácticas de la Inquisición española con lo que estaba sucediendo en el castillo de Montjuich.

En este contexto, y sin ninguna garantía judicial, se celebró en diciembre de 1896 el Consejo de Guerra para resolver el atentado de la calle Cambios Nuevos. El juicio se hizo a puerta cerrada, ya que, tal y como había sucedido con la instrucción del proceso, las autoridades buscaban que todo transcurriera en “silencio y entre tinieblas”.<sup>575</sup> Durante el juicio, al que no estaba permitida la asistencia, ni si quiera a los periódicos más afines al régimen, el capitán general de Barcelona facilitó las informaciones que debían publicar los órganos de prensa, sin que en ellas existiera rastro alguno de las supuestas torturas que habían recibido los presos. Tras varios días, se emitió una primera sentencia en la que se condenaba a muerte a ocho anarquistas, que quedó sin

---

<sup>574</sup> Una de las figuras más importantes en la lucha contra las tropelías cometidas en Montjuich fue Juan Montseny, detenido por las autoridades en 1896 por la publicación de un folleto tras el atentado de Martínez Campos por el que fue acusado de “apología del crimen”. El anarquista redactó varios artículos en la cárcel que denunciaban los malos tratos recibidos, que, pese a que no tuvieron difusión en la prensa española, si fueron recogidos por los diarios europeos.

<sup>575</sup> *El Nuevo Régimen*, 12 de diciembre de 1896.

efecto por la discrepancia del capitán general de Barcelona, que consideraba que la pena de muerte debía ser aplicada a veinte anarquistas, elevándose la cuestión al Consejo Supremo de Guerra y Marina.

La dureza de la sentencia aumentó la indignación de los anarquistas de medio mundo, que prosiguieron con la campaña iniciada meses antes. Tanto en Francia, como en Inglaterra o Alemania se llevaron a cabo manifestaciones y mítines para protestar contra el fallo del juez militar, especialmente cuando se conoció que el verdadero culpable del atentado, Santiago Salvador, no se había sentado en el banquillo de los acusados.<sup>576</sup> Diferentes grupos de anarquistas, a los que se unieron republicanos, socialistas y otros sectores independientes, pidieron una revisión del fallo basándose en la inocencia de los condenados y las irregularidades detectadas durante todo el proceso. La campaña llevada a cabo por los diarios extranjeros estuvo cada vez más respaldada por algunas publicaciones españolas, que, pese a la neutralidad mostrada durante los primeros meses, fueron alineándose a favor de los diarios que reclamaban la revisión de las sentencia. Este fue el caso de *El Heraldo de Madrid*, *El Correo* y *La Correspondencia de España*, que se unieron a los periódicos que, desde hacía meses, protestaban ya contra las irregulares practicadas por el Estado y la Guardia Civil, en especial, *El País* y *El Nuevo Régimen*.

La presión nacional e internacional consiguió rebajar la sentencia definitiva dictada en abril de 1897 por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, que finalmente condenó a muerte a cinco anarquistas, ejecutados el 3 de mayo de 1897, y a otros nueve les impuso

---

<sup>576</sup> Las sospechas se fundaron en una carta de Tomas Ascheri, considerado el autor material del atentado, publicada en *L'Intransigent*, el 25 de diciembre de 1896, en la que denunciaba haber sido engañado y torturado para acusar a una red de cómplices y confesarse culpable de los hechos.



penas de hasta 20 años de prisión.<sup>577</sup> Al resto de los 63 procesados, de un total de 87, se les absolvió, siendo desterrados de España de acuerdo con la Ley antiterrorista de 1896, que se aplicó de forma ilegal y retroactiva, y por la cual fueron expulsados muchos periodistas del país.<sup>578</sup> Después de las ejecuciones, aumentó la campaña de la prensa, especialmente en el extranjero donde se encontraban los periodistas expatriados, quienes siguieron denunciando en los diarios europeos las calamidades vividas durante todo el proceso, así como las irregularidades y crueldad con la que el Estado español había actuado durante aquellos meses.

A modo de conclusión, podemos señalar que la desproporcionada política represiva llevada a cabo tras el atentado de la calle Cambios Nuevos, no solo a través de una legislación que vinculaba directamente terrorismo con anarquismo, y que violaba el derecho fundamental a la libertad de imprenta, sino con otra serie de acciones arbitrarias e ilegales, buscó en todo momento el silencio de todos aquellos grupos que se oponían al régimen. Una actuación desmesurada, que se volvió en contra del propio gobierno, ya que contribuyó a que se intercambiaran los papeles, y la sociedad pusiera el foco de atención en la tiranía con la que había actuado el poder, y no en la violencia de los terroristas. Tal y como certifica Núñez Florencio, “la onda expansiva” tomó tales proporciones que, “ya nadie recordaba el atentado de Cambios Nuevos: solo se hablaba del proceso de Montjuich”.<sup>579</sup> Todo eso ayudó a que el Proceso de Montjuich se

---

<sup>577</sup> Relatorios del Consejo Supremo de Guerra y Marina, 29 de abril de 1897. AIHCM, legajo 157.

<sup>578</sup> Muchos de los absueltos tuvieron que permanecer en la cárcel indefinidamente, ya que en la aplicación de la pena de extrañamiento, los presos tenían que pagarse los gastos de viaje hasta el país de acogida, y no contaban con el dinero suficiente para salir de España.

<sup>579</sup> NÚÑEZ FLORENCIO, R., *El terrorismo anarquista (1888-1909)*, p. 94

convirtiera en un símbolo de la memoria colectiva del anarquismo español y del proletariado.<sup>580</sup>

#### **4. AMPLIACIÓN DEL DELITO A LA “APOLOGÍA DEL ANARQUISMO” TRAS EL ASESINATO DE CÁNOVAS EN 1897**

Como ya hemos señalado, tras la sentencia que puso fin al atentado de los Cambios Nuevos se acrecentó la protesta internacional contra la represión practicada por el gobierno español. Esencial fue la labor desempeñada por los periodistas que habían estado presos en el castillo de Montjuich, y que en esos momentos se encontraban fuera de España, como Fernando Tarrida del Mármol o Pedro Corominas. Durante los meses posteriores a las ejecuciones y condenas de los presos de Montjuich, se utilizaron los diarios extranjeros para denunciar todo lo acontecido en el procedimiento, señalando a Cánovas como el principal verdugo y responsable de las torturas sufridas. Especialmente relevante fue la campaña emprendida por algunos medios de difusión franceses, como *La Revue Blanche* y la revista *Temps Nouveaux*, que pusieron de manifiesto el poder de la Iglesia y del Ejército en España, y la obligada contención de las cabeceras españolas durante todo el proceso. Conjuntamente con estas protestas, fueron surgiendo en las diferentes ciudades europeas asociaciones para defender la libertad de prensa de los anarquistas.<sup>581</sup>

---

<sup>580</sup> En los círculos anarquistas existe todavía hoy la duda sobre la verdadera autoría del atentado de la calle Cambios Nuevos, ya que llama la atención que el mismo se produjera en la parte de atrás de la procesión, donde se encontraba la gente del pueblo, y no en la parte principal donde estaban los representantes del clero y del ejército, que hubiesen sido los principales objetivos del movimiento anarquista. Son muchos los que, todavía hoy, acusan a la propia policía de ser la responsable del ataque organizado para reprimir las ideas progresistas de los opositores al régimen. NÚÑEZ FLORENCIO, R., *El terrorismo anarquista (1888-1909)*, p. 51

<sup>581</sup> En Inglaterra se creó la *Spanish Atrocities Committee*, que organizó mítines y publicó un gran número de panfletos a favor de los presos de Montjuich. También creó un grupo de solidaridad internacional, que tenía como objetivo la defensa de la libertad de opinión y expresión de los detenidos que habían sido

La campaña internacional fue calando en la opinión pública de los países europeos y consiguió que la reputación del régimen de la Restauración cayera en picado, y con ella la de su presidente del Gobierno. Con la intención de vengar la muerte y torturas sufridas por los presos, un anarquista italiano, Michele Angiolillo, asesinó el 8 de agosto de 1897 a Cánovas curiosamente cuando éste se encontraba leyendo un periódico en el balneario de Santa Águeda.<sup>582</sup> El dirigente político pagó con su vida la excesiva represión desplegada contra los anarquistas, y demás grupos que se vieron perjudicados por la desmesurada actuación policial. En cualquier caso, este nuevo ataque terrorista, que respondió a la necesidad del movimiento anarquista de castigar al que consideraban verdadero culpable de las calamidades sufridas, reveló la ineficacia de las acciones represivas utilizadas para combatir el terrorismo, así como la incapacidad de la policía y la debilidad del poder público para enfrentarse a este problema.<sup>583</sup>

El atentado contra Cánovas acrecentó las medidas impuestas a la prensa periódica para silenciar lo sucedido. Como primera medida, se impuso la censura previa para todos aquellos telegramas o conexiones telefónicas que contenían informaciones sobre el ataque, endureciéndose, además, las condiciones de las dos leyes antiterroristas, entonces en vigor. A través de una circular de la fiscalía del Tribunal Supremo de 13 de agosto de 1897, se exigió a los jueces y fiscales la vigilancia, no solo de la prensa anarquista, sino de todas las publicaciones periódicas, para que, en el momento que advirtieran que “manifiesta o veladamente” los diarios hicieran apología del

---

forzados a exiliarse, lo que fue inmediatamente imitado en otras ciudades como Barcelona, Bilbao, Bruselas, Ginebra y Buenos Aires.

<sup>582</sup> La asociación obrera inglesa *Social Democratic Federation* manifestó que la muerte del presidente de España era una “justa represalia contra las crueles persecuciones de que son víctimas cuantos españoles tienen ideas avanzadas”. *El Imparcial*, “Lo que dicen los anarquistas”, 12 de agosto de 1897.

<sup>583</sup> No fue el único atentado anarquista de 1897, ya que, el 4 de septiembre de 1897, cuando no había pasado ni un mes desde el asesinato del presidente del Gobierno, hubo otro ataque contra jefe de la policía judicial en Barcelona, Portas, que no acabó con su vida.

anarquismo, de sus adeptos o de sus atentados, procedieran a promover la formación de causa, inspeccionado personalmente el sumario y cuidando de que las diligencias se siguieran con la mayor celeridad. La circular aclaró que, por “apología de los delitos y de los delincuentes penados”, recogida en el artículo 7º de la ley de 10 de julio de 1894, se entendía, no sólo presentar el atentado como una acción buena o meritoria, sino, también, “disminuir la enormidad de los delitos presentando a sus autores con caracteres que tiendan a hacerles simpáticos y a disuadir el horror que sus inhumanos atentados deben inspirar”.<sup>584</sup> El fiscal expresó en la circular que, para restaurar el orden y la tranquilidad de la sociedad española, era necesario combatir directamente el “daño que las publicaciones periódicas pueden causar por el afán de mantener el interés y ofrecer a sus lectores incentivos para la curiosidad. (...) En las presentes circunstancias indiscreto o imprudente”. Un ataque directo a la libertad de prensa, que tenía como objetivo detener la campaña de prensa nacional e internacional que reclamaba la inocencia de centenares de detenidos por el atentado de Cambios Nuevos. En el mismo precepto, el gobierno acusó a los periódicos de crear leyendas, presentando a los anarquistas “como mártires de unas ideas y como héroes que arrastran toda suerte de penalidades y hacen impávidos el sacrificio de su vida en aras del amor a los que llaman sus hermanos; ¡como si pudiera haber heroicidad en la tradición, ni amalgamarse el instinto, furor y sanguinario con los sentimientos de humanidad!”.<sup>585</sup>

No cabe duda, por tanto, de que el gobierno utilizó la disposición como pretexto para imponer un castigo inmediato a los periódicos que venían protestando por las irregularidades y abusos estatales cometidos durante el proceso de Montjuich,

---

<sup>584</sup> Circular de 13 de Agosto de 1897 de la Fiscalía del Tribunal Supremo relativa á la represión del anarquismo. *Gaceta de Madrid*, 14 de Agosto de 1897, número 226, pp. 502-503. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°28.

<sup>585</sup> Circular de 13 de Agosto de 1897 de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

restringiendo, una vez más, la libertad de imprenta a todos aquellos medios que no seguían la línea pautada por el poder. Era una medida que, acorde con las leyes antiterroristas, equiparaba la comisión de los atentados con la propagación de ideas anarquistas, justificando que, con ésta última, se cooperaba directamente con los fines del anarquismo. Con respecto a las medidas anteriores, la circular ampliaba el marco de vigilancia de los jueces, posibilitando que todas las publicaciones, independientemente de su ideología, pudieran ser condenadas por apología del anarquismo, sin que con eso se estuviera llevando a cabo una conducta irregular por parte de las autoridades. La ambigüedad con la que se había redactado la norma, que no delimitaba las materias prohibidas por el Estado, contribuía a aumentar la arbitrariedad y los abusos de las autoridades, que, gracias a la circular, quedaban inmunes de toda crítica, pudiendo perseguir a todos los diarios cuyas publicaciones no fueran de su agrado o difundieran noticias que, a su parecer, pudieran contribuir a enaltecer el anarquismo.

El temor a posibles represalias gubernativas hizo que, la mayoría de las publicaciones españolas, con la excepción de los diarios republicanos y obreros, informaran a sus lectores sobre la nueva medida gubernativa, silenciando su verdadera opinión ante una norma que, expresamente, contravenía el derecho a la libertad de prensa. *La Correspondencia de España* se limitó a advertir a todas las publicaciones de información general que tuvieran cuidado con las noticias que difundían sobre el asesinato de Cánovas, ya que la disposición contemplaba severas penas para los periódicos que hicieran apología del anarquismo;<sup>586</sup> mientras, *El Imparcial* confirmó que aplicaría la misma de la manera más restrictiva que le fuera posible, ya que, pese a no estar conformes con lo que ésta decía, seguirían “complaciendo al gobierno”.<sup>587</sup>

---

<sup>586</sup> *La Correspondencia de España*, 13 de agosto de 1897.

<sup>587</sup> *El Imparcial*, “El asesino de Cánovas”, 17 de agosto de 1897.

El único, entre todos los periódicos calificados como independientes, que se posicionó claramente contra la política restrictiva llevada a cabo por el gobierno fue *El Liberal*, que firmó un artículo, el 18 de agosto de 1897, en el que declaró que la nueva medida legal era innecesaria, ya que, “por propio impulso”, los diarios españoles habían suprimido informaciones transmitidas por telégrafo, con el objetivo de evitar la responsabilidad moral “que pudiera caberle por la publicación de noticias referentes a un proceso y a un crimen que de tal modo hiere los sentimiento universales de la sociedad”. En el mismo artículo, el periódico se mostraba implacable con el gabinete conservador, al que acusaba de instaurar un “sistema preventivo, arbitrario e injustificado” de control informativo, imponiendo la previa censura para toda información que comentara algún detalle del proceso por el asesinato de Cánovas. Su opinión se encontraba refutada en que la misma circular no prohibía las noticias relativas al crimen, sino aquellas que se considerasen “inconvenientes”. Así lo expresó el diario liberal: “si (la circular) hubiera querido prohibirlo todo, lo hubiera prohibido. La formación de causas no se puede hacer sin que se publiquen los datos estimados penables”. Para el diario era fundamental que se aclarara que materias eran punibles, ya que la prensa “podrá no tener interés ninguno en publicar noticias del reo de Vergara; pero lo tiene y muy grande de defender sus derechos, sobre todo cuando, como en esto ocurre, es la primera en cumplir lealmente la ley moral, que le impide dar resonancia al anarquismo”.<sup>588</sup>

*El País* fue el periódico que más destacó por su defensa del derecho a expresar libremente las opiniones sobre todo lo que concernía al anarquismo. Esta lucha, que mantenía con el gobierno por la difusión de artículos en los que expresaba libremente su

---

<sup>588</sup> *El Liberal*, “La censura y la prensa”, 18 de agosto de 1897.

opinión sobre lo ocurrido, le costó tres denuncias en tan solo cinco días desde el asesinato de Cánovas, pese a que, el periódico defendía que no existía una sola frase de mal gusto, ni una apreciación ofensiva, ni un juicio humillante: “Mañana podremos llevar a su tumba como ofrenda funeral, tres legajos judiciales, donde se ha procesado a la verdad, a la generosidad y a la justicia”. Días después, el diario republicano reprochó la actitud del gabinete conservador, al denunciar repetidas veces su publicación por “supuesta” propaganda anarquista: “¿Ha leído alguien una sola palabra nuestra a favor de los dinamiteros? (...) No; nosotros hemos prestado oídos a quejas desgarradoras y hemos protestado de ciertos procedimiento inhumanos cuando han recaído en hombros a quienes luego han declarado inocentes los tribunales”.<sup>589</sup>

Para *El País* no había ninguna duda de que el verdadero motivo de la persecución gubernamental era su oposición manifiesta al poder público: “Nosotros no hemos llevado flores a la sepultura de la víctima, no hemos cantado alabanzas del político, pero hemos procurado dar ejemplo de sinceridad”.<sup>590</sup> Efectivamente, tras las numerosas denuncias efectuadas contra el periódico, que no era partidario del anarquismo, ni del terrorismo, e incluso, había censurado todos los atentados, parece lógico afirmar que el asunto del terrorismo anarquista servía de fundamento para reprimir la libertad de la prensa de las publicaciones más revolucionarias. Así lo insinuó el diario republicano: “Los partidos y los periódicos de la oposición radical habrán de enmudecer, los unos bajo la pena de la vida; los unos y los otros bajo la amenaza de ser tachados con el estigma infamante de anarquistas asesinos”. En el mismo artículo, *El País* acusó a los gobernantes de haber aprobado una circular que vulneraba expresamente los derechos constitucionales, por miedo a que “los anarquistas no atacaran a la preciosa existencia

---

<sup>589</sup> *El País*, “Información extraña”, 17 de agosto de 1896.

<sup>590</sup> *El País*, “Otra denuncia”, 14 de agosto de 1897.

de las autoridades públicas”. Asimismo, el diario republicano ironizó con que la norma extendiera la represión a todas las publicaciones periódicas: “Si solo atendiéramos a los intereses materiales del periódico, estaríamos de enhorabuena porque no siendo nuestro fuerte la información telegráfica, las dos disposiciones citadas nos colocan en iguales condiciones que a los demás colegas”.<sup>591</sup> *El País* aseguró que la represión gubernamental se extendería no solo a los periódicos revolucionarios, sino también a aquellos diarios independientes, que no “adulen” al poder o “enaltezcan a los que desempeñan algún cargo público”, ya que la misma circular les daba pie para hacerlo. La severa actitud del poder público contra las publicaciones españolas, a las que se estaban imponiendo cuantas medidas restrictivas estaban a su alcance, partía del “odio a la libertad del pensamiento”, así como a la venganza, hacia los que “no se han prestado a desempeñar el papel de corifeos de los gobernantes en su desatentada política”.<sup>592</sup> El periódico lamentaba, muy especialmente, que, la “manía persecutoria que se ha desarrollado en el cerebro enfermo de los políticos de la Restauración”, provocaría la protesta enérgica en la opinión pública de otros países extranjeros, y que, sin embargo, en España, existiría alguna queja aislada, “y después, a callar todo el mundo, cuando no a convertir el periódico en apologista de los mismos que le condenan”.<sup>593</sup>

Estas estrictas condiciones impuestas a la prensa española, junto con la guerra colonial que se estaba desarrollando en ese momento, ocultó las protestas nacionales a favor de los prisioneros de Montjuich, que no tuvieron la misma intensidad que las provenientes de la prensa extranjera hasta pasado un año. El apogeo de la campaña nacional para pedir la revisión del proceso y el reconocimiento del gobierno de las injusticias cometidas se produjo en 1898, cuando diarios de tirada nacional acompañaron a las

---

<sup>591</sup> *El País*, “LA CABEZA DE TURCO”, 15 de agosto de 1897.

<sup>592</sup> *El País*, “LA CABEZA DE TURCO”, 15 de agosto de 1897.

<sup>593</sup> *El País*, “LA CABEZA DE TURCO”, 15 de agosto de 1897.



denuncias que se venían haciendo desde hacía meses por los periódicos republicanos *El País* y *El Nuevo Régimen*.<sup>594</sup> A estos se unió más tarde *El Progreso*, que sustituyó a *El País* y estaba dirigido por Lerroux, quien promovió una tremenda propaganda contra los procesos de Montjuich, iniciada el 15 de diciembre de 1897 por el célebre artículo de Montseny: “Las infamias de Montjuich”,<sup>595</sup> en el que se dieron a conocer cartas de los presos y documentos sobre los escalofriantes métodos utilizados por la policía, y que logró un gran eco en la opinión pública. En febrero y marzo de 1898 otras publicaciones periódicas de gran tirada, como *El Liberal*, *El Imparcial* o *El Heraldo de Madrid*, entre otras, se sumaron a las protestas exigiendo la apertura de una investigación para aclarar lo ocurrido.

Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto cubano, que acaparó toda la atención de los ciudadanos, trajo consigo nuevas medidas represivas para la prensa, entre ellas la instauración de la censura militar con motivo de la intervención armada norteamericana en el conflicto de Cuba, lo que dificultó enormemente la tarea de los periódicos españoles. A esto contribuyó, también, la vigencia de las estrictas medidas contra el terrorismo aprobadas por el Estado, que seguían dañando gravemente el derecho a emitir libremente las ideas en los diarios opuestos al régimen. A pesar de los esfuerzos de *La Revista Blanca*, que surgió en julio de 1898 como relevo de *El Progreso*, suspendido tras la detención de varios miembros de su plantilla, entre ellos Lerroux,<sup>596</sup> la campaña de Montjuich quedó diluida con todo lo que estaba ocurriendo al otro lado

---

<sup>594</sup> La prensa republicana española tuvo una importancia notoria en las denuncias al gobierno, ya que los órganos anarquistas estaban prohibidos por orden del gobierno central, y los diarios socialistas no tenían la misma difusión e influencia entre los ciudadanos.

<sup>595</sup> Montseny, que había regresado ilegalmente a España en noviembre de 1897, se convirtió en una figura clave en la campaña nacional contra el Proceso de Montjuich. Con el objetivo de crear un medio que difundiera sus ideas libertarias, que no podían ser difundidas en los periódicos por estar vigente la ley antiterrorista de 1896, creó *La Revista Blanca*, que se convirtió en el diario que más activo se mantuvo en la campaña de protesta contra los abusos gubernamentales.

<sup>596</sup> *El Progreso* vio la luz, de nuevo, el 12 de marzo de 1899, coincidiendo con la excarcelación de Lerroux, quién permaneció en la cárcel durante ocho meses.

del continente.

En julio de 1899, y con motivo del cumplimiento del plazo de vigencia de la Ley de 1896, que estaba marcado en tres años, Pi y Margall expresó en el Congreso su rechazo total a una legislación que era “abiertamente contraria” a los principios de derecho y al régimen democrático.<sup>597</sup> Silvela, el nuevo presidente del Gobierno conservador, defendió la justicia de la norma, afirmando que la mayoría de leyes extranjeras sobre anarquismo sancionaban la apología de los hechos terroristas y la propagación de la doctrina. Con el apoyo de Canalejas, líder del partido liberal, aprobó el Decreto de 7 de septiembre de 1899, por el que se prorrogaba la vigencia de la legislación de 1896 por un año, relegando a la clandestinidad durante doce meses más a los periódicos anarquistas.<sup>598</sup> Finalmente, el 25 de enero de 1900 el gobierno ordenó la amnistía de los condenados de Montjuich, quienes fueron expulsados a Inglaterra. Por su parte, la legislación antiterrorista, desarrollada a partir de los grandes atentados de finales del siglo XIX, quedó completada con la reforma del artículo 248 del Código Penal, que entró en vigor el 1 de enero de 1900, y por la que se ampliaba el concepto de atentado terrorista a “ataques contra la nación y su independencia”. Para algunos juristas, esta modificación del precepto penal fue considerada como “el primer peldaño de la política de represión del catalanismo”, y antesala de la futura Ley de Jurisdicciones.<sup>599</sup>

Como hemos visto a lo largo del capítulo, las diversas medidas políticas adoptadas por el gobierno durante este primer período de la Restauración marcaron las tácticas desarrolladas por el movimiento anarquista a lo largo de estos años, pues pasó de estar en la clandestinidad a manifestarse de muy diversas formas, utilizando la propaganda

---

<sup>597</sup> Congreso, 26 de julio de 1899, Pi y Margall, cif. 1334.

<sup>598</sup> Real Decreto de 6 de septiembre de 1899. *Gaceta de Madrid*, 7 de septiembre de 1899, p.894.

<sup>599</sup> FIESTAS LOZA, A., *Los delitos políticos (1808-1936)*, Salamanca, Cervantes, 1994, p.268.

ideológica como un instrumento esencial para la supervivencia de la organización. En la década de los noventa el anarquismo se volvió más violento, llevando a cabo una “propaganda por el hecho”, caracterizada por la ejecución de atentados terroristas, a través de acciones revolucionarias individuales. La represión policial manifestada en diversas medidas restrictivas, así como en la aprobación de dos leyes antiterroristas, provocó la acentuación del terrorismo anarquista, que dejó al descubierto la incapacidad del gobierno para garantizar el orden público, y generó gran alarma en la sociedad española de la época. Estas actuaciones gubernativas repercutieron enormemente en la libertad de los diarios españoles, especialmente en aquellos que no comulgaban con las ideas del régimen. Estos se vieron constreñidos y silenciados por normas represivas impuestas por el poder público, que utilizaban como pretexto los atentados anarquistas para restringir la libre emisión de ideas. Esta circunstancia tuvo su reflejo directo en las campañas iniciadas por los diarios extranjeros contra la actuación gubernativa y policial llevada a cabo durante los procesos de Montjuich, que no pudo efectuarse con la misma intensidad en España por la amenaza a fuertes y estrictas represalias que recaían sobre sus publicaciones.



## **5. EL CONTROL INFORMATIVO DURANTE LA GUERRA DE CUBA (1895-1898)**

### **1. LA DIFERENTE APLICACIÓN DE LA LEY DE PRENSA EN CUBA**

Antes de adentrarnos en el análisis del control informativo ejercido por el gobierno español durante los tres años que abarcó la guerra colonial, es necesario conocer la situación de la libertad de prensa de los periódicos publicados en la isla de Cuba, que durante este período seguía estando bajo la jurisdicción española. La Ley de Policía de Imprenta quedó aprobada en la Isla en 1886 y fue firmada por el entonces ministro de Ultramar, Víctor Balaguer.<sup>600</sup> Esta ley amplió el marco de la libertad de imprenta de los periódicos isleños, aunque no de la forma en la que lo había hecho tres años antes con la prensa española. Durante todo el período colonial, el gobierno cubano dependiente de la administración española utilizó diferentes mecanismos con los que pudo controlar e intervenir la información de forma casi total, y que tuvieron más o menos preponderancia en función de las circunstancias políticas y sociales sobrevenidas en la Isla.

En este sistema informativo configurado en La Habana tenía especial importancia la concesión de permisos de impresión, que, junto con la censura previa impuesta en la Isla, anulaban casi por completo la libertad de los diarios cubanos. Los permisos de impresión eran otorgados directamente por el gobernador insular, tras un proceso largo

---

<sup>600</sup> Hasta la entrada en vigor de la legislación de imprenta liberal, siguió vigente la Ley conservadora de 7 de enero de 1879, que, por Real Decreto de 7 de abril de 188, se hizo extensiva en Cuba con algunas modificaciones. Pese a ser derogada en la Península, continuó vigente en la Isla según lo declarado en la sentencia de 6 de junio de 1885. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Anuario de legislación y jurisprudencia*, Madrid, Administración Augusto Figueroa, 1886, p. 167.

y de grandes costes, y, en muchas ocasiones, se denegaban por causas morales, ideas políticas o, incluso, porque el título del periódico en cuestión no resultaba acorde a la idea de la autoridad. Era un recurso muy utilizado en la Isla, porque permitía al gobernador seleccionar el tipo de prensa que quería, sin tener que recurrir para ello a la previa censura. Aun así, estas autorizaciones gubernamentales iban acompañadas de una cláusula que recalca la obligación de someter a la censura todo aquello que se fuera a publicar, lo que provocó la proliferación de hojas clandestinas en todo el territorio. Por otra parte, en Cuba era especialmente notoria la arbitrariedad de las autoridades que desempeñaban el cargo de censor, quienes amenazaban a los directores con suspender sus publicaciones, cuando recibían cualquier queja de autoridades que se sentían injuriadas o insultadas.<sup>601</sup> Tras la censura previa, que estuvo formalmente reconocida hasta 1881, el gobierno abusó de la vía judicial para imponer multas o penas de suspensión a los periódicos. Entre 1881 a 1886 la prensa sufrió 228 procesos judiciales en tribunales especiales de imprenta, siendo secuestrados 25 periódicos y suprimiéndose seis periódicos entre 1885 y 1886.<sup>602</sup>

El 8 de diciembre de 1886, coincidiendo con la puesta en marcha de la legislación liberal en Cuba, el gobernador Callejas acordó el cese de los fiscales de imprenta de La Habana y Puerto Príncipe, así como los funcionarios de las demás poblaciones. A partir de este momento, los delitos de imprenta fueron objeto de enjuiciamiento criminal

---

<sup>601</sup> LLOVERÍAS, J., *Contribución a la historia de la prensa periódica*, La Habana, Archivo Nacional de Cuba, 1957, 322.

<sup>602</sup> Son varios los ejemplos que nos encontramos durante este período: el periódico *El Incondicional*, dirigido por Nicolás Rivero, fue suspendido por atacar a los autonomistas llamándoles “filibusteros, enemigos falsos y encubiertos, rastreros en sus mezquinas aspiraciones y cobardes en sus manejos y el heroísmo apenas si de nombre conoce”. ANC, FAP, leg. 197, nº12, “Denuncia del periódico semanal *El Incondicional*”, 16 abril de 1882; *El Rayo* fue suspendido por el gobierno liberal por afirmar: “los liberales de pega son separatistas que odian a España”. ANC, FGG, leg. 183, nº10190, 20 de abril de 1882; *La Voz de Cuba* fue denunciada a finales de 1884 por un artículo en el que exigía que se les despojase a los autonomistas de toda participación en los destinos y cargos públicos. AHN, Ultramar, leg. 4827, Revista de la prensa de 5 de diciembre de 1884, comunicación del general Fajardo.

instruido por los promotores fiscales de cada jurisdicción o localidad, quienes en muchas ocasiones llegaron a ser más inquisitivos que los propios censores. La Ley de 1886 otorgó atribuciones especiales a los promotores de imprenta, que eran sometidos a procesos secretos para comprobar su idoneidad en el cargo teniendo en cuenta su línea política, que debían instruir los casos de imprenta y dirigir la estructura de la vigilancia policial, encargada, a su vez, de secuestrar los ejemplares una vez se iniciase el sumario.<sup>603</sup> En numerosas ocasiones se produjeron conflictos entre los fiscales de imprenta, que adoptaban una decisión en función de su ideología política, y los tribunales ordinarios, que eran los encargados de juzgar los delitos de prensa según la recién implantada legislación liberal. Éstos absolvieron a un gran número de acusados por los promotores de imprenta, e impusieron sanciones menos severas que los aprobados años anteriores. A esto hay que añadir, además, que se concedieron una serie de indultos a los periodistas (en 1887, 1889 y 1894), lo que reflejó una mejora en la libertad de imprenta que la que habían gozado los periódicos en años anteriores.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Imprenta, *El Pueblo*, periódico de mayor circulación en la Isla, fue a su vez el más perseguido por las autoridades insulares. En 1887 se abrieron cinco causas en su contra, siendo absuelto sólo en una de ellas; uno de sus redactores habituales, Victorino Reinieri, fue arrestado y permaneció en prisión provisional durante seis meses, período máximo contemplado en la ley, por desacato a la autoridad con motivo de dos sueltos publicados en mayo: “Sentencia injusta” y “La Audiencia de la Habana”.<sup>604</sup> Otros periódicos autonomistas como *La Lucha* o *La Tribuna*, también sufrieron las persecuciones constantes de las autoridades de La Habana, que tenían órdenes expresas del gobierno peninsular de ser rigurosos a la hora

---

<sup>603</sup> Artículo 20 de la Ley de Imprenta para la Isla de Cuba y Puerto Rico de 8 de diciembre de 1886. *Gaceta de la Habana*, 9 de diciembre de 1886.

<sup>604</sup> ANC, FAP, leg. 177, nº 3, 5, 6 y 7.

de reprimir los abusos periodísticos.<sup>605</sup> En 1891 se denunció en España el procesamiento abierto al director de *La Tribuna*, quién había acudido a pedir amparo al gobernador de Cuba ante sus sospechas de que alguien pudiera atentarse contra su vida, sin atribuir responsabilidad a nadie. Se trataba de un diario autonomista que había realizado una dura campaña de oposición contra el gobernador de la Isla, y a consecuencia de la misma se habían puesto “tirantes” las relaciones entre el diario y las oficinas de la administración general.<sup>606</sup> Con el único objetivo de silenciar a *La Tribuna*, y con ello acabar con las manifestaciones contrarias a la política gubernamental, se nombró a un juez especial para que llevara el caso, quién ordenó la prisión preventiva para el director por un inexistente delito de denuncia falsa.

En ocasiones, la represión gubernamental provenía de la arbitrariedad e ineficacia de los propios mecanismos policiales, como se puso de manifiesto en noviembre de 1887 con el secuestro del periódico *El Cubano*, y no de *El Criollo*, que en su artículo “Extremos” había cometido un delito de provocación a la rebelión.<sup>607</sup> Otra forma de intervención de la prensa, mucho más explícita, se llevó a cabo en 1893 mediante una comunicación del negociado de imprenta por la que exigía que se le hicieran llegar los ejemplares de todos los periódicos que se publicaban en los distintos distritos judiciales y municipales de Cuba, pidiendo, además, a cada una de las autoridades de dichos distritos la elaboración de una lista con el nombre de todas las imprentas, sus dueños, sus direcciones y los

---

<sup>605</sup> El ministro de Ultramar, Manuel Becerra, envió una Circular, el 18 de enero 1889, a los gobernadores generales de Cuba y Puerto Rico, en la que se declaraba: “La prensa ha de ser libre y ha de reflejar el juicio de la opinión, que es la base de los gobiernos parlamentarios; pero el respeto a esta libertad no excluye ni si quiera debilita el rigor con que los Tribunales de justicia y las autoridades gubernativas deben reprimir los delitos y las faltas que se cometan por medio de la imprenta, y con mayor celo los que afecten a la integridad de la patria, al prestigio de las instituciones y al decoro público”. *Gaceta de Madrid*, 18 de enero de 1899.

<sup>606</sup> Senado, 15 de Julio de 1891, Ballesteros, cif. 3141.

<sup>607</sup> ANC, FAP, leg. 81, n°20, “Causa criminal por haberse secuestrado indebidamente varios ejemplares de *El Cubano*”, 25 de noviembre de 1887.



periódicos publicados en ellas.<sup>608</sup> Estas inspecciones administrativas añadieron un escollo más a los que ya se enfrentaba diariamente la prensa cubana.

## **2. LA INTERVENCIÓN DEL TELÉGRAFO COMO PRIMERA MEDIDA GUBERNAMENTAL**

La insurrección cubana iniciada en Baire en febrero de 1895 y llevada a cabo por el movimiento independentista cubano, cuyo objetivo fue conseguir la emancipación definitiva de la Isla, recrudeció un problema que España llevaba arrastrando desde la revolución de 1868, y marcó el comienzo de una importante etapa de la historia de nuestro país. En 1898 el conflicto pasó a convertirse en internacional por la entrada en escena de EEUU, que, con el pretexto de defender los intereses de sus ciudadanos, declaró la guerra a España en abril de ese mismo año. La derrota bélica supuso el fin de España como potencia internacional, y provocó una profunda crisis moral en la sociedad española afectando en gran medida a la prensa. Esto fue así porque, más allá de la trascendencia política y económica, la contienda hispano-cubana se reveló como un drama humano con miles de víctimas inocentes, entre las que se encontraba la población civil insular y, también, jóvenes soldados españoles que, obligados por las autoridades gubernativas y excitados por las cabeceras españolas más serias, embarcaron rumbo a la Isla para luchar en un conflicto mal gestionado desde el principio.

Durante los tres años de contienda estuvo formalmente vigente la libertad de expresión reconocida en la Ley de Policía de Imprenta de 1883, lo que favoreció el desarrollo de la prensa española, que utilizaba todos sus recursos para ofrecer la mejor cobertura

---

<sup>608</sup> ANC, FAP, leg.84, nº1, “Cuaderno que comienza con una comunicación del negociado de imprenta del gobierno de la región occidental y de la provincia de la Habana, 23 de agosto de 1893, solicitando ejemplares de los periódicos que se publican en los diferentes distritos judiciales”.

posible del conflicto. A medida que éste se desarrolló, fue en aumento el interés de la opinión pública por conocer el transcurso de los acontecimientos, ya que eran muchas las familias españolas con miembros luchando en las Antillas. Esa circunstancia disparó la venta de los periódicos, único medio que tenía la población española, en esta época, para estar informada de la problemática colonial. A pesar de que la Ley de Imprenta posibilitó una gran cobertura informativa, la trascendencia internacional de la contienda, en la que España tenía importantes intereses en juego, resultó aciaga para el desenvolvimiento efectivo de la libertad de prensa.

Todos los esfuerzos del gobierno español estuvieron encaminados a controlar la información transmitida por los medios, con el único objetivo de crear una realidad en función de sus intereses, que contara con el apoyo y aprobación de la opinión pública. Por ello, a lo largo del conflicto, el gobierno recurrió a todos los instrumentos que estaban a su alcance para silenciar las actuaciones de guerra que no convenía que conociera la sociedad. Esta desinformación impuesta por el poder facilitó enormemente que el Estado construyera la realidad a su medida, aunque no contó con que la prensa, cada vez con más influencia en la sociedad, se revelara en numerosas ocasiones para ver reconocido su derecho a la libre expresión de ideas.

En términos generales, existió una línea común en la política de control informativo llevada a cabo por ambos partidos, ya que durante los tres años de la contienda se produjo una desigual intervención de los periódicos en función del territorio. En Cuba, escenario del conflicto, se estableció una férrea censura militar, que vino acompañada por la guardia permanente ejercida por los jueces de los distintos distritos que tenían la orden directa del gobierno central de secuestrar de forma inmediata todos aquellos

periódicos que publicaran informaciones indebidas para los intereses españoles. En la Península, por su parte, las publicaciones más perseguidas eran las de provincias contra las que ambos gobiernos impusieron un estricto control. La prensa de Madrid tenía relativa libertad de movimientos, motivada por su consabida línea patriótica, que complacía al Estado, y que propició, en algunos momentos, la autocensura por parte de las propias publicaciones. Aun así, a lo largo de la contienda la prensa de mayor circulación se desligó del gobierno, criticando duramente las gestiones de las autoridades en Cuba, especialmente la del general Weyler, lo que acarreó un incremento en la represión de la prensa, que se verá fuertemente agarrotada en 1898.

En los dos gobiernos estas restricciones del poder se exteriorizaron, especialmente, en la censura telegráfica y telefónica. Desde el inicio de la contienda hasta el fin del estado de guerra, tanto conservadores como liberales intervendrían de forma recurrente todos los telegramas sospechosos de aportar informaciones contrarias a sus intereses. Además, se estableció una oficina dependiente del ministerio de gobernación, conocida como “Gabinete Negro”, que mantenía permanentemente vigiladas las líneas telefónicas. El organismo, situado estratégicamente en la central telefónica de Madrid, desde donde salían todos los avisos a las empresas de provincias, cortaba toda comunicación en el momento en el que un corresponsal informaba sobre asuntos vedados por el poder público. Al respecto de la cuestión, el 16 de marzo de 1895, *El Imparcial* expresó su imposibilidad de publicar un telegrama porque el ministro de Gobernación había considerado que contenía información de “extraordinaria gravedad”.<sup>609</sup> El periódico madrileño, lejos de sentirse alarmado, consideró que la injerencia estatal estaba

---

<sup>609</sup> *El Imparcial*, 16 de marzo de 1895.

plenamente avalada por las razones de carácter internacional que imponían esta determinación.

Es interesante pararnos en este punto ya que, a lo largo de la guerra hispano-cubana, fueron varios los periódicos, entre los que se encontraban los de mayor circulación, que justificaron la intervención gubernativa de las vías telegráficas y telefónicas, ya que consideraban que en tiempos de guerra ésta cumplía una función conveniente a los intereses de la Nación. Para entender la cuestión debemos señalar que el telégrafo y el teléfono eran los únicos instrumentos con los que contaban los periódicos españoles de aquella época para comunicarse con sus corresponsales y recibir noticias de la contienda, pero, a su vez, eran medios que proporcionaban una información tremendamente valiosa para el adversario, ya que, en ocasiones, aportaban datos sobre las operaciones llevadas a cabo por la escuadra española que eran de gran utilidad para el ejército norteamericano. Atendiendo a este último enfoque, puede parecer lógico que durante un conflicto armado se justifique la intervención de la administración pública sobre los medios escritos para no facilitar a los enemigos de guerra datos técnicos muy concretos sobre las operaciones militares que se van a realizar, teniendo así la censura en tiempos de guerra “su macabro sentido”.<sup>610</sup>

## **1. LA IRRESPONSABILIDAD DE LA PRENSA ESPAÑOLA Y SU EXALTACIÓN DEL PATRIOTISMO.**

Durante los tres años de la contienda internacional, la mayoría de periódicos españoles confundieron su función como verdaderos representantes de la opinión pública y

---

<sup>610</sup> MERRILL, J., LEE, J., FRIEDLANDER, E., *Medios de comunicación social. Teoría y práctica en Estados Unidos y en el mundo*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Rupérez, 1992, p. 462.

abusaron de su libertad de prensa para manipular a la sociedad con una visión ilusoria de la realidad cubana. Las informaciones fueron transmitidas con gran optimismo y un exagerado patriotismo, cuyo último objetivo era presionar al gobierno español para su intervención armada. Con el argumento supremo del honor a la Patria, se falseaba sistemáticamente el potencial bélico de la escuadra española, maquillando la realidad y ensalzando la imaginaria superioridad del ejército español frente al norteamericano, que era reiteradamente menospreciado en las cabeceras españolas. Esta actitud se reflejó, especialmente, en los grandes periódicos de empresa de Madrid, diarios serios como *El Imparcial*, *El Liberal* y el *Heraldo de Madrid*, que, a pesar de vanagloriarse de su independencia, generaron un gran impacto en la opinión pública y consiguieron que ésta se posicionara a favor del conflicto armado. Entre la prensa de mayor circulación, *La Correspondencia de España* fue la más acorde con la realidad que se estaba viviendo en las colonias, aunque publicó también artículos en los que se recogían manifestaciones claramente favorables a la guerra.

Menos belicosos, aunque en la misma línea de la prensa de masas, se posicionaron los periódicos republicanos más importantes, entre los que encontramos *El País* y *El Progreso*, si bien en sus páginas daban cabida también a discursos contrarios al ideario seguido por los diarios. Otras publicaciones de partidos más extremos, como *El Siglo Futuro* y *El Correo Español*, se declararon a favor de la intervención militar y criticaron la pasividad de las autoridades gubernativas a la hora de posicionarse a favor del conflicto armado. Frente a estas posturas radicales se encontraba la prensa ministerial, liderada por *La Época* durante el mandato conservador, y *El Correo* en el gobierno liberal, cuya actuación estaba regida por las pautas del partido correspondiente, y fue más cauta y prudente que los periódicos de mayor circulación a

la hora de decantarse por la confrontación armada. Aún así, llegado el momento, estos diarios también contribuyeron a extraviar la opinión pública, y cegados, como el resto de la prensa, por la exaltación patriótica, postularon la posibilidad de que España pudiera ganar la guerra a EEUU.

En el lado opuesto al de la gran mayoría de la prensa, encontramos algunos diarios de provincia, especialmente los catalanistas y los nacionalistas vascos, así como los anarquistas, periódicos que, por sus doctrinas, no defendían la devoción a la patria manifestada por el resto. Asimismo, el Partido Socialista, representado por el semanario *El Socialista*, mostró durante toda la contienda la necesidad de alcanzar la paz, ya que con ello se lograba beneficiar al proletariado y al campesino cubano y peninsular, los más perjudicados por el conflicto. La publicación inició una campaña contra el injusto sistema de reclutamiento forzoso de personal militar ideado por las autoridades gubernativas, que afectó a numerosas familias de las clases sociales más bajas, librándose los más ricos que compraban su redención al Estado. Junto con estas publicaciones, destacó el periódico republicano federal de Pi Margall, *El Nuevo Régimen*, que fue el más coherente con su ideario, y desde el principio se opuso, no solo a la guerra, sino también al entusiasmo exagerado con el que la mayoría de los diarios vivían el conflicto. Las publicaciones republicanas federales de provincias tuvieron como referente los discursos del líder político, y también cuestionaron el excesivo gasto militar que representaba la contienda internacional, así como las consecuencias tan nefastas que podía generar una posible guerra contra EEUU, poniendo de manifiesto este falso patriotismo con el que muchos diarios engañaban a la sociedad española. La crítica constante a las autoridades militares y su desvinculación de la línea patriótica del

resto de la prensa les hizo ganarse la enemistad manifiesta del poder, lo que en la práctica se traducía en numerosos atropellos y persecuciones.

Las primeras derrotas contra EEUU trajeron consigo un cambio de actitud en la prensa española, que pasó de las iniciales perspectivas optimistas al pesimismo y la impaciencia por poner fin a la guerra. El ataque a la clase política fue cada vez más persistente, independientemente de la ideología, ya que para los diarios, tanto conservadores como liberales habían llevado a España a esas desastrosas consecuencias. Cuando las tropas españolas estaban ya totalmente derrotadas, y con el único objetivo de contener estas voces críticas cada vez más numerosas, el gobierno implantó el 14 de julio de 1898 la censura militar en toda España. Esta fue la primera medida excepcional adoptada en la Península desde el comienzo del conflicto, a pesar de la situación de guerra en la que se encontraba el país desde 1895. La orden afectó en gran medida a la prensa madrileña de mayor circulación, que, durante toda la contienda, como señalábamos, actuó con mayor libertad que la prensa de provincias. El rechazo a la previa censura impuesta por la administración pública fue unánime, y todas las publicaciones de Madrid, acostumbradas a tímidas medidas gubernamentales que en la práctica no se materializaron, vertieron sus protestas al poder público, excitando la vuelta de una libertad de prensa que durante aquellos últimos meses había sido totalmente anulada.

## **2. LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA EN EEUU**

El tratamiento informativo que dieron algunos medios estadounidenses del conflicto fue fundamental para que la opinión pública norteamericana se posicionara a favor del

enfrentamiento armado. Como ya adelantábamos en capítulos anteriores, la prensa norteamericana era muy respetada y ocupaba una posición privilegiada en la sociedad. Al contrario de lo que ocurría en España durante ese período, donde la opinión pública todavía se reducía a pequeños grupos burgueses centralizados en las grandes ciudades, los rotativos estadounidenses ya contaban con un gran público lector atento a la actualidad, que abarcaba la mayoría de los ciudadanos. Este punto es esencial para entender la influencia y poder ejercidos por los periódicos estadounidenses durante toda la contienda cubana, tanto para manipular a la población como para presionar al gobierno, poniendo de manifiesto el abismo existente entre ambos países respecto a la prensa. Con el transcurso de los años, podemos afirmar que los periódicos tuvieron muchas facilidades para condicionar a la población estadounidense con sus informaciones sensacionalistas y prejuiciosas, especialmente, si tenemos en cuenta que al ser un conflicto internacional estaba desarrollado en un espacio geográfico completamente distinto al de los ciudadanos, quienes dieron como válida la versión que de la contienda hacía la prensa. No sólo eso, sino que además no dudaron en apoyar al gobierno para que participara en el conflicto armado, una decisión que, pese a que normalmente hubiera generado rechazo social, se pudo obtener gracias a las habilidades periodísticas utilizadas por los rotativos que dieron cobertura a la guerra: *The New York World*, *New York Journal*, *Sun* y *Herald*, todos ellos pertenecientes a una línea de periodismo sensacionalista.

Una de las estrategias más utilizadas por estos periódicos apelaba directamente a los sentimientos de los ciudadanos, mostrando en las noticias a los cubanos como gente trabajadora, de buen carácter y oprimidos, y a los españoles como arrogantes, corruptos y opresores. Este recurso propagandístico fue especialmente notorio en las noticias



referidas al general Weyler, que se presentó ante la sociedad norteamericana como un villano capaz de destruir la estabilidad del país, lo que hizo que la mayoría de la población se volcara y apoyara incondicionalmente a los rebeldes. No fue el único recurso utilizado por estos rotativos sensacionalistas, que distorsionaron la realidad que acontecía en Cuba sobre la base de especulaciones e invenciones, destacando lo que interesaba que la población conociera, agrandando las supuestas atrocidades españolas y ocultando todos aquellos datos que no interesaban para el fin último perseguido: sensibilizar a la sociedad en torno a la necesidad de intervenir en la Isla. Era tal el interés que tenían los rotativos estadounidenses que, con el único objetivo de aumentar las ventas de sus publicaciones y alcanzar el máximo beneficio económico, en muchas ocasiones, las noticias eran suministradas en diferentes días, con lo que se lograba mantener en vilo a la población y captar su interés para que compraran las ediciones siguientes.

Entre todos los rotativos norteamericanos destacó la actuación de W.R. Hearst, máximo exponente de la prensa amarilla,<sup>611</sup> que, con su diario *New York Journal*, protagonizó una de las campañas periodísticas más feroces que se han conocido. El magnate norteamericano tergiversó la información de la guerra cubana y divulgó en sus páginas noticias de hechos inventados o distorsionados, creando así escándalos que no existieron, ya que, durante una gran parte del conflicto, la situación de la Isla no generaba informaciones. Los ya conocidos telegramas entre Hearst y su corresponsal gráfico en Cuba, Remintgton, nos descubren la destreza con la que se podía falsear la

---

<sup>611</sup> El concepto “prensa amarilla” se creó por el periódico *The New York Times* para denominar el tipo de periodismo desarrollado por Pulitzer y Hearst, caracterizado por el tratamiento sensacionalista de las noticias y la agresividad dialéctica con la que trataban a sus enemigos. El término se acuñó por la tira cómica llamada “The Yellow Kid” que se insertaba todos los domingos en el *World*, y, tras la compra del dibujo, pasó a formar parte del *Journal*.

realidad, no solo por escrito, sino de forma gráfica.<sup>612</sup> A pesar de la aparente calma en las Antillas, como así se lo hizo saber el ilustrador al afirmar su deseo de regresar a EEUU por no tener nada que contar del conflicto, Hearst le obligó a permanecer en la isla con su célebre frase: “Usted facilite las ilustraciones y yo le proporcionaré la guerra”.<sup>613</sup> Esta orden del director norteamericano nos da una muestra de por qué en el mundo periodístico se ha calificado el conflicto cubano como “la guerra de Hearst”, una novela inventada por el norteamericano para excitar las emociones de un público maleable, y conseguir con ello aumentar las tiradas de su rotativo.

No nos podemos olvidar que esta manipulación informativa se produjo gracias a la nula intervención del gobierno americano sobre las informaciones de guerra, lo que facilitó la manipulación y distorsión de todas las noticias vertidas en sus publicaciones. No cabe duda de que, salvando las diferencias de desarrollo entre ambos países, la gran diferencia existente entre las cabeceras españolas y las estadounidenses durante el desarrollo de la guerra de Cuba fue el control ejercido por sus respectivos gobiernos respecto a las noticias que se transmitían a la sociedad. A diferencia de la estricta vigilancia que impusieron los mandos españoles a la prensa peninsular e insular, en EEUU no existía ningún tipo de traba para la libertad de prensa, lo que facilitó que los corresponsales norteamericanos pudieran transmitir sus informaciones desde la Isla sin que ninguna autoridad examinara la veracidad y exactitud de las mismas. A esta situación contribuyó también el débil gobierno de la Restauración que, entretenido en perseguir las publicaciones españolas más molestas y críticas con su gestión, dejaba

---

<sup>612</sup> En aquella época no existía la impresión a distancia de fotografías transmitidas por telégrafo, por lo que era relativamente fácil para los periódicos distorsionar las ilustraciones y dibujos enviados desde Cuba, que se presentaban como fotos bajo comentarios como “la cámara no miente”, lo que daba una imagen de mayor veracidad.

<sup>613</sup> VIDAL COY, J.L., “Poder político y censura: la relación del establishment estadounidense con la información en los conflictos militares ultramarinos del siglo XX”, *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. 33, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, p. 215.

total libertad de movimientos a los corresponsales norteamericanos, legalmente acreditados en nuestro país, quienes publicaban informaciones en sus rotativos que eran censuradas en la prensa española.

El tratamiento del conflicto llevado a cabo por la prensa amarilla estadounidense fue muy criticado por los periódicos españoles, que pese a tener sus diferencias ideológicas respecto a la política gubernamental adoptada en las Antillas, se mantuvieron unánimes a la hora de rechazar este tipo de rotativos engañosos creados por los norteamericanos. Las cabeceras españolas lamentaron especialmente que, durante toda la guerra, los corresponsales estadounidenses tuvieran más facilidades que ellos mismos a la hora de publicar noticias que resultaban ser perjudiciales para los intereses de la nación española. La prensa seria estadounidense, a diferencia de lo que ocurrió en España dónde hasta los diarios más sensatos se posicionaron a favor de la intervención dejando a un lado la verdadera realidad cubana, reprochó la actitud de estos diarios sensacionalistas y dijo sentirse avergonzada por la actitud adoptada por EEUU durante todo el conflicto cubano. Así lo manifestó Edwin Lawrence Gogki, propietario del *Evening Post*, quién, días después de la explosión de Maine, en febrero de 1895, afirmó: “Es una vergüenza pública que los hombres puedan hacer tanto daño con el objeto de vender más ejemplares”.<sup>614</sup> El director americano criticó el irresponsable comportamiento de los dos diarios sensacionalistas, acusándolos de haber reproducido indebidamente hechos acontecidos en la isla, mediante la invención deliberada de “cuentos calculados” y la temeridad desenfrenada en la composición de titulares.

---

<sup>614</sup> LEAL CRUZ, M., “Cuba 98: Guerra y prensa. Controversias y disfunciones en torno al Maine. Especial referencia a los rotativos norteamericanos”, *XIII Coloquio de Historia Canario-Americana*, 1998, Las Palmas de Gran Canaria, Casa Colón, 2000, pp. 296-322, p. 311.

### **3. POLÍTICA RESTRICTIVA DEL GOBIERNO CONSERVADOR**

#### **1. LA PERSECUCIÓN SISTEMÁTICA DE LA PRENSA SEPARATISTA**

El 24 de febrero de 1895 se produjo en Baire una nueva insurrección cubana más amplia que los movimientos anteriores, que se vio favorecida por las revueltas que paralelamente se produjeron en Filipinas, y que marcaba el inicio de la guerra hispano-cubana, la cuestión más grave a la que se enfrentaba la clase política durante todo el régimen de la Restauración.<sup>615</sup> La prensa española se hizo eco del comunicado del capitán general Emilio Calleja, en el que se informaba de los alzamientos en Baire y Guantánamo, y transmitió la idea de que la rebelión sería sofocada muy pronto gracias a la superioridad numérica de los militares españoles. La insurrección coincidió con los últimos preparativos en las Cortes Españolas para poner en práctica la Ley Abarzuza, disposición que concedía a Cuba y Puerto Rico un considerable grado de autonomía, pero que, finalmente, tras los acontecimientos en las colonias, no se aprobó. Esta situación fue aprovechada por Sagasta para presentar su dimisión el 22 de marzo de 1895, recayendo nuevamente el mando gubernamental en Cánovas. Paralelamente, las cabeceras españolas que se mostraban muy optimistas y seguras del aplacamiento de la rebelión de Baire, centraron todas sus esperanzas en el militar con mayor prestigio de España, el general Martínez Campos, precursor de la Paz de Zanjón, quién, coincidiendo con la subida del poder del partido conservador, ocupó el cargo de capitán de Cuba en marzo de 1895 con el objetivo de restablecer la paz.

---

<sup>615</sup> Congreso, 13 de marzo de 1895, Romero Robledo, cif. 2247.

Con el inicio de las hostilidades comenzó, además, el control gubernamental de la libertad de información sobre la situación de la Isla. Respecto a la postura que tomó cada partido en función de su ideología, podemos confirmar que, en un principio, y pese a que la situación no tenía la gravedad que irá adquiriendo con el paso de los años, el gobierno conservador adoptó una actitud represiva de mayor dureza que los liberales, concretamente contra aquellos periódicos cubanos o españoles que propagaban y defendían la causa separatista. Esta persecución era especialmente notoria en la prensa separatista de las Antillas, donde quedaron suspendidas las garantías constitucionales desde el 27 de febrero de 1895, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución de 1876, y se decretó la inmediata supresión de todas las publicaciones que apoyaran la autonomía de Cuba. La política de represión informativa llevada a cabo por los conservadores sobre estos diarios no se limitó a los territorios de Ultramar, sino que se amplió a la Península, donde fue duramente perseguida. Esta decisión se tomó tras la presentación en el Congreso de una Proposición de ley para que la propaganda separatista se castigara en Cuba y Puerto Rico con la pena de destierro temporal.<sup>616</sup> La comisión que examinó la propuesta emitió un dictamen en el que se modificaba la misma, entendiendo que los actos contra la integridad a la Patria, como era la predicación del separatismo, no debían ser punibles sólo cuando se cometían en la Isla, sino que la sanción debía extenderse también a las demás provincias y posesiones españolas. De esta manera, quedaba establecida la prohibición de la propaganda separatista por palabra o por medio de la imprenta en la Península, Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas.<sup>617</sup>

---

<sup>616</sup> Proposición de Ley del Dolz, castigando en Cuba y Puerto Rico la propaganda separatista. Congreso, 11 de marzo de 1895, Apéndice 12 al n.º. 81.

<sup>617</sup> Dictamen de la Comisión acerca de la Proposición de ley castigando el separatismo. Congreso, 24 de abril de 1895, apéndice 5º al n.º. 105.

Las principales actuaciones del ejecutivo conservador estuvieron encaminadas a erradicar la prensa separatista, lo que se materializó en ataques constantes a sus cabeceras. Así lo confirmó en mayo el ministro de Ultramar, quién declaró que, durante esos meses, “donde quiera que ha habido un artículo separatista, donde quiera que se ha cometido ese delito, allí se ha presentado la querrela del fiscal; y donde quiera que una Audiencia ha sobreseído, inmediatamente se ha interpuesto el recurso de casación ante el Tribunal Supremo”.<sup>618</sup> Las posturas de la clase política, al respecto de la persecución de estos periódicos, quedaron plasmadas en un debate suscitado en el Congreso con motivo del indulto solicitado por Sol y Ortega. El republicano consideró que debían estar comprendidos en el mismo todos los delitos de imprenta cometidos tanto en la Península como en Ultramar. El también republicano José Carvajal solicitó que su concesión se hiciera con la excepción de todos aquellos periodistas que habían realizado propaganda separatista en los territorios de Ultramar, afirmando que no era el momento de que la administración pública “alentara con la clemencia” esa criminal propaganda que “cuesta la vida a nuestros hermanos y que hace se consuma en guerra cruenta nuestra hacienda”.<sup>619</sup> Sin embargo, se alzaron otras voces discordantes, como la del republicano Rafael Labra, quién defendió la necesidad de otorgar un indulto lo más amplio posible,<sup>620</sup> o incluso, tal y como solicitó el fundador del periódico *La Justicia*, Nicolás Salmerón, la amnistía total para los delitos de imprenta. El periodista consideraba que la prensa era víctima de obstáculos legales, por los que se imponía la gracia del indulto, que funcionaban como trámites ineficaces para los “nobles sentimientos en que el Gobierno y la Cámara promulgan”,<sup>621</sup> y afirmó que solo la amnistía podía en esos momentos sobreponerse a esos límites.

---

<sup>618</sup> Congreso, 13 de mayo de 1895, Ministro de Ultramar (Abarzuza), cif. 2249.

<sup>619</sup> Congreso, 26 de junio de 1895, Carvajal, cif. 4960.

<sup>620</sup> Congreso, 26 de junio de 1895, Labra, cif. 4960.

<sup>621</sup> Congreso, 26 de junio de 1895, Salmerón, cif. 4960.

Finalmente, el 5 de julio de 1895, los conservadores concedieron un indulto total a los autores de los delitos cometidos en la prensa periódica, aplicable tanto en España como en Cuba y Puerto Rico, en el que quedaban excluidos los que “directa o indirectamente” se refirieran a la propagación o defensa de la causa separatista.<sup>622</sup> Con ésta medida no solo se dejaban fuera del indulto los delitos cometidos por este tipo de prensa, sino que se cedía al criterio discrecional de las autoridades definir en qué artículos se había hecho también propaganda del separatismo de forma indirecta. Esta disposición no fue la única tomada por las autoridades respecto a estas publicaciones, ya que, desde julio de 1895, por un bando emitido por el general Salcedo, se otorgó a cada gobernador de provincia la facultad de imponer a los periódicos las multas gubernativas que estimara oportunas por los delitos de prensa cometidos en Cuba. Con esta medida, las autoridades podían intervenir en asuntos de imprenta contra todo aquello que consideraran perjudicial para los intereses gubernamentales, extralimitándose, por tanto, de las funciones reconocidas en la Ley de 1883. Esta potestad daba vía libre a los gobernadores para atropellar de forma recurrente, y amparados en la ley, a la prensa separatista, siguiendo la orden directa del gobierno central peninsular, que quería limpiar las poblaciones de este tipo de publicaciones.

Durante estos primeros compases de la guerra se produjo, también, un cambio en la línea de opinión de las cabeceras españolas respecto a la figura de Martínez Campos, quien había asumido el cargo de capitán general de Cuba desde el inicio de la insurrección. Las iniciales alabanzas periodísticas hacia el general se convirtieron en puñaladas dialécticas vertidas en las páginas de los periódicos, que acabaron con su destitución. La campaña de prensa, que se inició en agosto de 1895, fue encabezada por

---

<sup>622</sup> Real Decreto de 5 de julio de 1895 concediendo el indulto por delitos de prensa. *Gaceta de Madrid*, 6 de Julio de 1895. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo de 1895*, p. 461.

*El Resumen*, que dudaba de la política de benevolencia practicada por el militar en la Isla. Para Martínez Campos era importante buscar la conciliación con los alzados, y sin embargo éstos, cuya eficacia y fuerza aumentaba a medida que pasaban los meses, rehusaban todo tipo de negociación. A estos problemas se unió el desgaste que sufrió el ejército español, por la carencia de instrucción militar y el mal funcionamiento de la administración y sanidad de la armada.

A finales de 1895 el número de publicaciones que solicitaron la destitución del general había aumentado de forma considerable, posicionándose entre ellas las de mayor circulación y más influencia en la opinión pública como *La Correspondencia de España*, *Heraldo de Madrid*, *El Liberal* o *El Imparcial*,<sup>623</sup> en contrapunto con *El Nacional*, diario del general Martínez Campos, que apoyó en todo momento la gestión del militar, cegado por la pasión partidista de la que revestía todas sus informaciones sobre el conflicto cubano. Paralelamente a la campaña de prensa española, los rotativos sensacionalistas estadounidenses empezaron la suya propia con la que trataban de desprestigiar a los españoles, describiendo todo tipo de brutalidades y crueldades cometidas aparentemente por el ejército y los gobernadores españoles, no solo en la Isla, sino incluso en las prisiones de la Península donde se encontraban varios independentistas cubanos.<sup>624</sup>

El descrédito al que estuvo sometido el general por las críticas periodísticas, que fueron destapando la mala gestión gubernativa de la guerra, intensificó las restricciones del poder público hacia las publicaciones periódicas. *El Liberal* firmó un editorial, pocos días antes de la destitución del general, en el que reprochaba la intervención constante

---

<sup>623</sup> *El Resumen*, “La guerra de Cuba”, 18 de Diciembre de 1895.

<sup>624</sup> *New York Journal*, 12 de Enero de 1896.



por parte de los conservadores de los telegramas que informaban sobre Cuba, y puso de manifiesto las trabas gubernativas con las que los corresponsales españoles se encontraban a la hora de hablar sobre la situación cubana. Lo llamativo del artículo fue que el diario madrileño justificó la censura interpuesta por el poder público, ya que consideró que en tiempos de guerra ésta cumplía una función conveniente a los intereses de la Nación cuando se ejercía con un propósito útil, y, en esas circunstancias, “ningún periódico puede negarse a someter sus noticias a la inspección oficial, seria e inteligentemente ejercida”<sup>625</sup> Sin embargo, reprochó al gabinete conservador la forma en la que se estaba ejerciendo la intervención, ya que éste impedía la publicidad de los telegramas de corresponsales españoles “bien informados y bien intencionados”, dejando vía libre a las invenciones e hipótesis provenientes de la prensa americana. El control informativo mal practicado por la administración pública, lejos de obtener la unidad nacional, como pretendía el gobierno, produjo efectos muy nocivos para la libertad de prensa, y contraproducentes para los fines perseguidos por el Estado.

## **2. REPRESIÓN GUBERNATIVA POR LA CAMPAÑA DE PRENSA CONTRA WEYLER**

La necesidad del gobierno conservador de adoptar un sistema de mayor dureza después del fracaso de Martínez Campos, produjo un cambio en la capitanía general de Cuba, que fue ocupada por Valeriano Weyler el 12 de febrero de 1896. Como veremos, el militar llevó a la Isla una política de crueldad extrema muy reprobada por la opinión pública española y norteamericana. Una de las medidas más controvertidas adoptadas por el general durante su mandato fue la orden de reconcentración de civiles cubanos,

---

<sup>625</sup> *El Liberal*, “La verdad”, 4 de enero de 1896.

dictada el 17 de febrero de 1896, por la que se dio traslado a todos los habitantes de las zonas rurales de la isla a centros urbanos protegidos por las tropas españolas. Además, se destruyeron todas las casas, materiales, productos y animales que habían quedado en el exterior, para que no sirvieran de refugio a los sublevados, lo que posibilitó que el ejército español identificara con más facilidad a los rebeldes que se escondían en estas zonas despobladas.

Sin embargo, las erróneas previsiones de las autoridades españolas hicieron que los miles de habitantes, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, vivieran mal alimentados y hacinados en barracones en condiciones antihigiénicas, lo que provocó que durante esos meses se disparasen las enfermedades y muertes, no solo de los campesinos, sino de los soldados españoles. Esta penosa situación fue utilizada por la prensa norteamericana que magnificó los hechos, multiplicando las cifras de muertes y enfermos, lo que causó un gran efecto y conmoción en la población norteamericana, y abriendo una brecha casi insalvable en las relaciones estadounidenses y españolas.<sup>626</sup> Con estos sucesos creció de una manera considerable la antipatía que sentían los americanos hacia el general Weyler, al que atacaban desde los rotativos norteamericanos con calificativos como “asesino”, “carnicero” o “el monstruo del siglo”, convirtiéndole en una de las figuras más odiadas por la nación americana.

La inflexible política llevada a cabo por el general fue reprochada también por un amplio sector de la prensa española que denunció la ingrata situación del ejército en las Antillas. A medida que transcurrieron los meses se puso de manifiesto la existencia de falsificaciones, falsedades organizadas e inmoralidades, así como otro tipo de abusos

---

<sup>626</sup> COMPANYYS MONCLUS J., *La prensa amarilla norteamericana en 1898*, Madrid, Silex, 1998, p. 38.

gubernamentales practicados a la hora de reclutar a la armada española, que, unidos a las pésimas condiciones de vida y de hospitalización de los soldados que se encontraban en las colonias, hicieron que aumentasen las voces denunciando la corrupción administrativa. Pese a los intentos del poder público de silenciar estas informaciones, salieron a la luz datos que dejaban ver las numerosas bajas del ejército español, causadas por hambre y enfermedades, y no por acciones militares como se pretendía hacer creer a la sociedad de la época. La noticia acerca de cómo se practicaba la recluta voluntaria de soldados de Madrid, en julio de 1896, puso de relieve estas deficiencias y ocasionó un gran estupor entre la opinión pública. Algunos periódicos señalaron que las autoridades habían aceptado como “manos útiles” para la armada española a 87 individuos entre los que se encontraban niños entre 6 y 10 años, ancianos y lisiados, que no cumplían con los requisitos legales para formar parte de un ejército. A esta penosa situación se unió la perplejidad causada por un comunicado de Weyler en el que afirmaba que los individuos que llegaban a la Isla eran todos inútiles y solo servían para “consumir raciones u ocupar camas en los hospitales”.<sup>627</sup>

Para esclarecer estos hechos, el periódico *La Justicia* publicó el 31 de julio de 1896 un artículo en el que se formularon una serie de preguntas al ministro de Guerra, que fueron consideradas injuriosas por el tribunal militar. Éste ordenó el encarcelamiento de su director, León Vega, lo que provocó una airada reacción por parte de la prensa española, que consideró un verdadero atropello el procedimiento “severísimo” que se estaba siguiendo contra el periodista. Para los periódicos de Madrid, era totalmente inadmisibles que se condenara a León Vega por haber denunciado los abusos, y no a las autoridades militares denunciadas, que habían realizado las irregularidades. *El País*

---

<sup>627</sup> *El Imparcial*, “La recluta voluntaria y la conciencia popular”, 14 de Agosto de 1896.

afirmó que la primera víctima de las injusticias que estaban aconteciendo en Cuba era “el periodista que los ha denunciado”. Por su parte, *El Imparcial* declaró: “El esclarecimiento de la verdad no podrá jamás perjudicar a los buenos; por el contrario todos ganarán con él, y se evitarán cuantos males se incuban en las atmósferas densas y en la peligrosa oscuridad”.<sup>628</sup>

El caso generó también un extenso debate en el Senado, en el que políticos de diferente signo ideológico reprocharon la arbitrariedad cometida contra el director, y criticaron el excesivo rigor con el que la jurisdicción de guerra estaba llevando la causa. Tanto el político republicano Zubizarreta como el liberal Moret se quejaron del abuso cometido por el tribunal militar, ya que éste no había procurado a León Venga los medios de defensa legítimos, no solo por la prolongación indefinida del tiempo de prisión provisional sin que hubiera indicios de delito, sino porque, además, había sido negada su excarcelación.<sup>629</sup> Según la autoridad competente, no se podía poner en libertad al director porque éste “persiste en injuriar a las autoridades del ejército con nuevos escritos ofensivos para éstas”,<sup>630</sup> lo que suponía una verdadera ilegalidad judicial al hacer perdurar un castigo por un delito que no había sido denunciado, y que nada tenía que ver con el motivo inicial de la detención.

En paralelo con estas actuaciones, continuaba la rigurosa política gubernamental llevada a cabo contra la prensa separatista. Fue tal la amenaza que sintieron los militares y la clase política hacia este periodismo, que, pese al reconocimiento legal de la separación

---

<sup>628</sup> *El Imparcial*, “La recluta voluntaria y la conciencia popular”, 14 de Agosto de 1896.

<sup>629</sup> Durante la guerra de Cuba se intensificó este mecanismo indirecto de censura que consistía en mantener en prisión de forma prolongada al director de un periódico sin llegar a esclarecer la culpabilidad o no del mismo, con el único motivo de silenciar las voces críticas que se oponían a las autoridades gubernativas.

<sup>630</sup> Senado, 28 de Agosto de 1896, Zubizarreta, cif. 2749.

de poderes en los procedimientos de imprenta, muchos políticos exigían al gobierno que actuara contra los periodistas que incitaban a la independencia cubana. Un ejemplo lo encontramos en la intervención en el Senado del militar Martínez Gutiérrez, que “recordando los sufrimientos que hoy se imponen a todos mis compañeros por estas insurrecciones separatistas”,<sup>631</sup> reclamó al partido conservador que hiciera recaer todo el peso de la ley sobre el director de *La Paz*, procesado por haber convivido, presuntamente, con los enemigos de la Patria. Para el senador, este tipo de delitos eran tan graves que los criminales debían sufrir cuanto antes el merecido castigo, y para ello era necesario la influencia del poder público sobre el juez que instruía la causa, quién guiado por éste procedía favoreciendo los intereses nacionales. La incesante persecución a la prensa separatista por parte del gobierno conservador continuó durante meses, en los que no cesaron las instrucciones al poder judicial para acabar con este tipo de periódicos.<sup>632</sup>

Además de la prensa separatista, durante estos primeros años de conflicto los periódicos autonomistas también eran considerados enemigos de los intereses patrióticos, y fueron muy criticados, no solo por el poder público, sino también por los rotativos españoles, en los que, como ya hemos señalado, primó el patriotismo exaltado por encima de todos los juicios y ataques contra las autoridades. Esto explica que *El Imparcial*, uno de los diarios más críticos con la gestión militar de Cuba, suscribiera la arbitraria decisión adoptada por Weyler de suprimir el periódico cubano y autonomista *La Discusión*, tras la difusión de un artículo que abogó por la intervención de EEUU para pacificar la Isla.

---

<sup>631</sup> Senado, 3 de Septiembre de 1896, Martínez Gutiérrez, cif. 2808.

<sup>632</sup> Las órdenes no solo iban dirigidas a jueces, ya que existen muestras inequívocas de que entre las propias autoridades se transmitió la necesidad de perseguir incansablemente a los periódicos separatistas. Como ejemplo, la instrucción secreta de 17 de marzo de 1897 del Ministerio de la Gobernación al gobernador civil de Barcelona: “El gobierno aprueba lo hecho por V.I. suspendiendo periódicos declaradamente separatistas y tomando las debidas precauciones para la conservación del orden público”. A.H.N, Ministerio de la Gobernación, Legajo 5.

La medida gubernamental, que fue acompañada del encarcelamiento y deportación de su director, violó la legislación de imprenta, ya que se tomó a instancias del tribunal competente, con el objetivo de evitar que por la lentitud del procedimiento judicial el director pudiera ser sustituido por otra persona y burlara, así, la acción de la ley.<sup>633</sup> Esta fue la tónica general de la mayoría de las publicaciones que, pese a sus firmes convicciones respecto a la libertad de imprenta, justificaron, apelando al honor de la patria, las ilegalidades cometidas por las autoridades contra los periódicos autonomistas y separatistas.

Por este motivo, no son de extrañar las quejas de la prensa madrileña de masas a principios de 1897 por la repartición en la Isla de hojas suscritas por *La Voz de Cuba*, en las que, siguiendo instrucciones de la autoridad superior, se declaró que todos los ciudadanos que se considerasen patriotas debían abstenerse de comprar los periódicos de Madrid que atacaran directa o indirectamente al general Weyler, como ya lo hacían con *La Patria* y *El Porvenir*, diarios separatistas. El suelto añadió, además, que para la causa de España la prensa de masas era la más perjudicial. Al respecto, el director de *El Imparcial*, Domingo Blanco, exteriorizó su repulsa frente al contenido del impreso, y afirmó que el escrito atentaba contra la libertad de información de la prensa de mayor circulación. Asimismo, alegó que la hoja era desleal con la causa nacional al considerar más lícitos los “papeluchos” que divulgaban la propaganda separatista y llamaban “cobardes a los españoles, imbéciles a los jefes y oficiales del ejército y cruel a la reina”.<sup>634</sup> En este contexto es lógico que, para estos periódicos que durante toda la contienda actuaban en función de un exagerado patriotismo, fuera cuanto menos

---

<sup>633</sup> *El Imparcial*, “El periódico La Discusión suprimido. Detención de su director, Coronado”, 24 de octubre de 1896.

<sup>634</sup> *El Imparcial*, “España en Cuba: Los periódicos filibusteros preferidos a los españoles”, 11 de Enero de 1897.

llamativo que, por poner de manifiesto los excesos cometidos por las autoridades militares de Cuba, el gobierno les acusara de traidores y les compase con los diarios separatistas que, para la prensa de masas, eran los verdaderos enemigos de la nación al atacar el honor de España.

El divorcio definitivo entre la prensa de mayor circulación y el gobierno conservador se originó a principios de 1897, coincidiendo con el secuestro del *Heraldo de Madrid* y la detención de uno de sus redactores, Gonzalo Reparaz, por un artículo publicado el 30 de diciembre de 1896 en el que se evidenciaban las deplorables condiciones en las que vivían los soldados en Cuba. La denuncia de la publicación se produjo simultáneamente con otras recogidas de ejemplares llevadas a cabo por los tribunales militares en las redacciones de *El Imparcial*, *El Siglo Futuro*, *El Correo*, *El Ejército Español* y *El Correo Español*. A estas medidas se unieron los numerosos ataques gubernativos que sufrieron los periodistas en el ejercicio de su derecho desde que se pusieran de relieve las irregularidades del ejército en Cuba. Durante los primeros días de 1897, la política de censura encubierta practicada por el gobierno conservador se hizo cada vez más patente a través del secuestro de ejemplares, el ataque bajo coacción y fuerza a los vendedores de periódicos, las amenazas a los periodistas provenientes de las autoridades gubernativas y militares, y la imposición de más y peores sanciones a estos a través de los tribunales militares, que pese a no tener competencias en materia de prensa, contaban con el apoyo del gobierno conservador para imponer penas de prisión incomunicada para todo aquel que denunciara o criticara la actitud del ejército español en la guerra. La intimidación mediante trabas al ejercicio eficaz de la libertad de imprenta era la única forma que tenía el débil poder de la Restauración de cortar la dura

campaña de prensa practicada contra su gestión, y con ello conseguir el silencio de los medios para que los abusos cometidos en Cuba no llegaran a la población española.

Sin embargo, la ineficaz intervención gubernativa no era capaz de callar a la prensa que, liderada por los directores de *El Heraldo de Madrid* y *El Imparcial*, reflejó su propósito de no rendirse ante las iras ministeriales, y defendió la libertad de pensamiento que estaba siendo arrebatada por el gobierno conservador. Con estas palabras lo declaró *El Imparcial*: “Será preciso que el gobierno ponga mordazas en todos los labios, que aplique la Ordenanza a todos los militares y el Código penal a todos los paisanos, que secuestre el correo de Cuba, que cierre los cafés y mantenga estrecho cerco sobre los sitios de reunión, que penetre por fin en el fondo de los hogares para sofocar allí mismo las explosiones íntimas de una amargura”.<sup>635</sup> Los diarios se mostraron muy críticos con la política de control practicada por Cánovas, a quién no le bastaba con cortar violentamente la comunicación de la prensa desde el inicio del conflicto, lo que obligaba a los periódicos a “mutilar” las correspondencias con las informaciones que llegaban de la Isla, y a ejercer, en numerosas ocasiones, la autocensura, al tener que “guardar no escasa parte de ellas bajo el secreto de la fe judicial”,<sup>636</sup> sino que ahora, también, les privaba de las libertades necesarias para investigar la verdad de lo que acontecía en Cuba. La protesta de las publicaciones de mayor circulación de la época, *El Imparcial*, *el Heraldo de Madrid* y *La Correspondencia de España*, se materializó con la orden de retirar a sus corresponsales de Cuba, al entender que nada tenían que hacer éstos en las Antillas ante esta política de represión gubernativa, que limitaba sus funciones a copiar las noticias oficiales de los altos funcionarios de la Habana, no

---

<sup>635</sup> *El Imparcial*, “Ante la opinión”, 4 de Enero de 1897.

<sup>636</sup> *El Imparcial*, “Ante la opinión”, 4 de Enero de 1897.



siempre confirmados por los hechos, o bien a burlar las sistemáticas restricciones de la censura.

Las protestas de la opinión pública española contra la gestión realizada por Weyler fueron en aumento, especialmente cuando Cánovas reafirmó su apoyo absoluto a la gestión realizada por el capitán general, declarando que éste no solo seguiría al frente del ejército de Cuba, sino que, además, en la Isla se le consideraba un ídolo de España. Estas manifestaciones encendieron aun más a *El Imparcial* que publicó un artículo titulado: ¡PERDÓN!, en el que dejó en evidencia la ceguera de Cánovas por sus desafortunadas declaraciones, y puso de manifiesto las diferentes formas en las que la prensa conseguía sortear la censura. Al tratarse de un escrito que no atacaba directamente al gobierno, sino que criticaba de forma indirecta al poder público, comparándolo con un perro grande que “muerde y ladra”, las autoridades pasaron por alto la publicación, aun teniendo una carga de crítica mayor que la de otras que no habían evitado el lápiz rojo.<sup>637</sup> En el artículo, el diario madrileño se disculpó con la administración pública por haberse “permitido” proponer al jefe de gobierno soluciones para los problemas del momento: “¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a tanto?”, y pidió clemencia a ese “perro” del que ya había recibido suficientes “mordeduras” como castigo: “Venga ya la piedad. Sea de nuevo atado a su cadena de oro ese mastín corpulento y glorioso y caiga sobre nosotros la absolución”. De forma irónica *El Imparcial* declaró que la culpa de todo la tenía la “maldita prensa de gran circulación”, pero que, “afortunadamente para los españoles”, Cánovas había comprendido que, escuchar a este tipo de periódicos “es labrar la desventura de España”.<sup>638</sup>

---

<sup>637</sup> La propia prohibición gubernamental sobre el tratamiento de determinados asuntos propiciaba que los periódicos buscaran estrategias lingüísticas para burlar al poder, y así expresar a los ciudadanos sus críticas hacia el sistema represivo adoptado por el gobierno.

<sup>638</sup> *El Imparcial*, “¡PERDÓN!”, 8 de Enero de 1897.

Paralelamente a estas declaraciones a favor de la libertad de prensa, siguieron los clamores contra la arbitrariedad cometida por el tribunal militar por el encarcelamiento del escritor Reparaz, quién, durante su estancia en prisión, recibió innumerables demostraciones de afecto por parte de la prensa de todas las ideologías. Un gran número de periódicos, unidos por la indignación causada por los atropellos hacia la razón y la moral realizados por las autoridades gubernamentales, se cuestionaron la verdadera efectividad de la Ley de Imprenta de 1883, que proclamaba la separación de poderes en los procedimientos de imprenta, debiendo abstenerse la jurisdicción de guerra de incoar procedimientos. Esta disposición legal, reafirmada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resultaba ser “letra muerta” para el gobierno de la Restauración, que, en este contexto de confrontación armada en la que España no lograba salir, solo le preocupaba amordazar a la prensa por encima de toda jurisprudencia y leyes. La cuestión sobre la usurpación de poderes por parte de la jurisdicción militar fue tratada por el tribunal de Sevilla, que publicó un artículo en el que se defendían las denuncias hechas por Reparaz, y por extensión, las del resto de periódicos de Madrid, cuyo único “delito” había sido poner en conocimiento de la autoridad un hecho que podía ser susceptible de sanción. Este tribunal aclaró, también, que, de proceder con respecto al sistema de enjuiciar vigente, la administración pública tenía la obligación de atender la denuncia de Reparaz e incoar una instrucción para esclarecer la verdad, y, solo en el caso de que la misma no se probara por ser falsa y calumniosa, abrir una causa criminal contra el periódico.<sup>639</sup>

Para acallar las voces cada vez más numerosas sobre la posible ilegalidad cometida por el tribunal militar, el fiscal del Tribunal Supremo publicó un dictamen en el que se

---

<sup>639</sup> *El Imparcial*, “El Señor Reparaz”, 13 de Enero de 1897.

afirmó que, en el procedimiento instruido contra Reparaz, estaba plenamente justificada la jurisdicción militar, ya que el periodista incurría en el delito de sedición definido y penado por el art. 249 del Código de Justicia Militar, referido a individuos sujetos al fuero militar.<sup>640</sup> El fiscal declaró que, en este contexto en el que los intereses de la nación se fiaban por entero a la armada española, los ataques de la prensa madrileña a determinadas clases del ejército, incitando los ánimos de los soldados, al afirmar que eran víctimas “de negligencias y de explotaciones incalificables”, no podían considerarse una simple injuria: “Es dar armas a los enemigos de España, es mermar la fuerza y el prestigio de un ejército en campaña”.<sup>641</sup> Esta doctrina del fiscal del Tribunal Supremo, con la que Cánovas se mostró plenamente de acuerdo, supuso un abuso directo contra la legislación de imprenta, ya que hizo imposible que, en circunstancias de guerra, la prensa pudiera escribir sobre asuntos relacionados con la vida militar. Tal y como afirmó *El Imparcial*, de prevalecer la opinión del fiscal, no solo quedaba sustituido el Código Penal por el Código de Justicia Militar, y el jurado por tribunales de guerra, sino “todas las garantías del derecho por excesos de una arbitrariedad desenfrenada”.<sup>642</sup>

Esta nueva traba al ejercicio efectivo de la libertad de prensa provocó la reacción inmediata de *El Imparcial*, que con su artículo “Se suprime la luz”, denunció la falta de libertad existente a la hora de emitir juicios sobre la guerra y sobre Weyler, declarando: “Entre las tinieblas y el silencio es donde los grandes peligros se desarrollan libremente”.<sup>643</sup> El periódico madrileño se lamentó de las persecuciones y atropellos

---

<sup>640</sup> Artículo 249 del Código de Justicia Militar: “Será castigado por pena de prisión correccional el que de palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio vierta entre las tropas especies que puedan infundir disgusto o tibieza en el servicio, o que murmuren de él”.

<sup>641</sup> *El Imparcial*, “El proceso contra Reparaz. Dictamen del Fiscal del Supremo”, 21 de enero de 1897.

<sup>642</sup> *El Imparcial*, “Contra la justicia”, 21 de enero de 1897.

<sup>643</sup> *El Imparcial*, “Se suprime la luz”, 22 de Enero de 1897.

constantes por parte del poder público, especialmente cuando en épocas anteriores los diarios conservadores dirigieron peores acusaciones al general Calleja, y señaló a Cánovas como el verdadero responsable de este recorte de libertades, al que se le acusó de buscar con el pretexto de la guerra la vuelta a aquellos días en las que la prensa estaba sujeta al férreo dictamen de un fiscal o la arbitraria censura gubernamental o militar. *El Imparcial* se hizo eco también de las críticas de *El Nacional* ante el dictamen del fiscal del Tribunal Supremo, que con estas palabras se lamentaba: “Si un día los militares indefensos llegan a solicitar del gobierno la represión enérgica de campañas que lastiman su prestigio y quebrantan la eficacia de nuestras armas, no necesitará el gobierno inventar argucias para suspender las garantías constitucionales y gobernar con el único periódico que reúne la opinión de las crisis nacionales: con la Gaceta”.<sup>644</sup>

Finalmente, el 22 de enero de 1897 el Tribunal Supremo declaró que el procedimiento seguido contra el periodista Reparaz debía sustanciarlo la jurisdicción ordinaria, y no el fuero militar, rechazando así la doctrina del fiscal y de Cánovas. Con el dictamen reconociendo la competencia común, que entró en vigor el 26 de enero, se procedió a poner en libertad al escritor.<sup>645</sup> Sin embargo, esta medida favorable a la prensa no frenó la campaña periodística iniciada contra el sistema cada vez más corrupto y autoritario del presidente, y con creciente intensidad los periódicos clamaron contra los abusos militares cometidos en Cuba y las pésimas condiciones en las que se encontraban los soldados españoles.<sup>646</sup> Esta actitud chocó con la prensa conservadora, liderada por *La*

---

<sup>644</sup> *El Imparcial*, “Se suprime la luz “, 22 de Enero de 1897.

<sup>645</sup> El fallo del Tribunal Supremo estaba en consonancia a las sentencias que el Alto Tribunal venía resolviendo sobre el conflicto de jurisdicciones en los delitos de injurias contra militares, tal y como veíamos en el capítulo 3 dedicado al poder militar.

<sup>646</sup> El 13 de Enero de 1897, *El Imparcial* publicó un listado con los periódicos de provincias que se habían unido en la campaña de *El Heraldo* y *El Imparcial* contra los abusos cometidos en Cuba. Entre otros: *La Vanguardia* de Barcelona, *El Mercantil Valenciano*, *La Unión Republicana* de Cádiz, *El Heraldo* de Aragón y Badajoz, *El Pueblo* de Valencia, *El Porvenir* de León, *El Diario* de Pontevedra y Tarragona, *La Unión* de Córdoba o *El Alcance* de Huelva (que fue, además, denunciado).

*Época*, que, mediante informaciones que hacían poner en duda las noticias vertidas en las cabeceras madrileñas, exigiría a los diarios de mayor circulación que pusieran fin a los ataques al ejército y el gobierno.

Paralelamente, en EEUU la entrada en la escena política de William McKinley en marzo de 1897 hizo que las relaciones hispano-norteamericanas, que hasta entonces se habían mantenido cordiales, cambiaran de forma radical. El nuevo presidente de los EEUU rompió las relaciones con España con una política de hostigamiento claramente enfocada hacia la intervención armada, concediendo a Cuba el derecho a la beligerancia y legitimando la ayuda económica a los insurrectos. A esta postura combativa del gobierno ayudaron los rotativos sensacionalistas estadounidenses, que seguían con su campaña de difamación e invenciones para desprestigiar a las autoridades españolas.<sup>647</sup>

El cambio presidencial ayudó a aumentar las mentiras vertidas en estos diarios sensacionalistas, ya que McKinley dio absoluta libertad y puso todo tipo de facilidades para que desde las columnas periodísticas se manipulara a la opinión pública norteamericana, ya que le convenía que ésta se posicionara a favor de la intervención.<sup>648</sup>

---

<sup>647</sup> Uno de los múltiples ejemplos existentes en la prensa de la época lo encontramos en el extenso reportaje publicado por el *New York Journal* el 12 de Febrero de 1897, que afirmó que los funcionarios españoles habían registrado a tres mujeres cubanas de importante posición social completamente desnudas. La noticia fue desmentida por las mujeres, entrevistadas por el *World* de Pulitzer después del impacto causado en la opinión pública norteamericana, y el propio rotativo se vio obligado a rectificar la información. *New York Journal*, 12 de Febrero de 1897. Citado en COMPANYYS MONCLUS J., *La prensa amarilla norteamericana en 1898*, Madrid, Sílex, 1998, pp. 54-59.

<sup>648</sup> Sin más vía informativa que la prensa, la manipulación resultó más fácil, por lo que al *Journal* no le costó hacer creer a la sociedad norteamericana la noticia publicada el 16 de Agosto de 1897 sobre Evangelina Cisneros, condenada a veinte años de cárcel por, según el rotativo, haberse resistido a mantener relaciones sexuales con el jefe de la armada española de la isla de Pino, cuando, en realidad, se le había sancionado por intento de asesinato. BRONSON REA, G., *Facts and fakes about Cuba*, New York, University of Michigan, 1897.

#### **4. TURNO DEL GOBIERNO LIBERAL: LA CENSURA MILITAR.**

##### **1. LA CONCESIÓN DE LA AUTONOMÍA COLONIAL: EL MOTÍN DE LA HABANA (12 DE ENERO DE 1898)**

La ausencia de éxitos en las Antillas incrementó el descontento de la población española, cada vez más cansada por las grandes aportaciones económicas y humanas que soportaba en el conflicto cubano, a lo que se unieron las críticas de un amplio sector de la prensa a la gestión llevada a cabo por los conservadores. Coincidiendo con el asesinato de Cánovas, el 4 de octubre de 1897, se formó un nuevo gobierno liberal liderado por Sagasta, con el que se consumó el cese de Weyler como capitán general de Cuba, remplazado por el general Ramón Blanco. Durante este período se redujeron las operaciones militares y se tomaron una serie de medidas encaminadas a terminar definitivamente con el conflicto internacional, como la concesión de la autonomía mediante el Real Decreto de 25 de noviembre de 1897, que entró en vigor el 1 de enero de 1898, y dejó todo el poder a cargo de los cubanos, salvo los asuntos de política exterior y defensa.

En torno al nuevo régimen autonómico no existió unanimidad de criterio en las cabeceras españolas, y cada periódico adoptó una postura u otra en función de su ideología política, aunque con más mesura que la exaltación demostrada en la defensa de otros asuntos. A pesar de tener puntos de vista distintos, los diarios monárquicos se declararon a favor de la medida, posiblemente por el interés de la clase política en que el nuevo régimen frenase las ansias intervencionistas de los norteamericanos. Los periódicos liberales, como *El Globo* y *La Correspondencia de España*, se pronunciaron

rotundamente a favor, y señalaron que, teniendo en cuenta las condiciones funestas en las que concurrían tanto los soldados españoles como los campesinos reconcentrados, era la mejor solución posible para España en estos momentos. Por su parte, los diarios conservadores mantuvieron sus reticencias acerca de las medidas liberalizadoras, aunque eran transigentes con el autogobierno, siempre y cuando pusiera fin al conflicto en condiciones ventajosas para el país. En la misma línea se pronunciaron los socialistas que, a través del semanario *El Socialista*, se posicionaron a favor de la concesión de la autonomía de las Antillas, considerando que con la misma se iba a pacificar Cuba y se pondría fin al conflicto. En el lado opuesto encontramos a los carlistas y los sectores más reaccionarios de la sociedad, que eran abiertamente críticos con el régimen autonómico y partidarios de la acción armada.<sup>649</sup>

Para la administración estadounidense el nuevo sistema adoptado en Cuba siguió sin cubrir sus pretensiones y, pese a la aparente reacción favorable de la que se hizo eco la prensa española, las verdaderas intenciones norteamericanas pasaron por ver consumada la separación de las colonias de España, sobre las que tenían gran interés por su gran valor geopolítico y comercial. En diciembre de 1897, la prensa amarilla difundió un telegrama de McKinley enviado a las autoridades españolas, mediante el cual dejaba clara sus pretensión de intervenir en la Isla “para proteger los intereses de su comercio”,<sup>650</sup> si en el plazo de un año no se había alcanzado la paz en Cuba. Junto con la Casa Blanca, los sectores más influyentes de la sociedad norteamericana mantuvieron esta actitud a favor de la beligerancia y presionaron al gobierno para que efectuara la declaración formal de la guerra. Entre estos grupos sociales encontramos a los

---

<sup>649</sup> ALONSO DE LA CALLE, R., “La concesión de la autonomía colonial a Cuba en 1897: una visión desde la prensa madrileña”, *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie V, *Historia Contemporánea*, tomo 21, Madrid, UNED, 2009, pp. 289-314.

<sup>650</sup> *La Iberia*, “Telegrama enviado desde Washington”, 4 de Diciembre de 1897.

empresarios norteamericanos, que se inclinaron del lado de la intervención armada con el convencimiento de que España había perdido su capacidad de imponer su autoridad y el orden social, sin estar, por tanto, en condiciones de proteger sus inversiones en la isla.

A la mayor injerencia de EEUU se unió la calamitosa situación en Cuba, donde seguían muriendo miles de personas de hambre y miseria. Al respecto, el *World* divulgó nuevos datos que no dejaban en buen lugar la administración española: más de 500.000 personas inocentes muertas de hambre, a lo que se unió la falta de provisiones en la Isla. La prensa española de diferente signo político restó crédito a las cifras exageradas de estas publicaciones e incluso llegó a decirse que el corresponsal que divulgó la noticia era el “más embustero y calumniador de la prensa sensacionalista de EEUU”.<sup>651</sup> El descontento de algunos sectores se extendió a los independentistas, que vieron insuficientes las concesiones del gobierno español, y que no cesaron de luchar tras la aprobación del nuevo régimen autonómico. Tampoco parecía convencer a los ciudadanos cubanos, quienes rechazaron cualquier cambio en la isla y mostraron su desacuerdo con protestas y manifestaciones previas a la entrada en vigor de la autonomía, siendo especialmente notorias las de finales de diciembre de 1897, organizadas por la Unión Constitucional frente al edificio del periódico conservador *Diario de la Marina*, con gritos de ¡Muera la autonomía! y ¡Viva Weyler!<sup>652</sup> Estos tumultos coincidieron con la concesión de una mayor libertad a la prensa periódica de las Antillas. El gobierno de Sagasta, de acuerdo con su línea liberal, adoptó una actitud menos restrictiva que su antecesor, especialmente notoria respecto a la prensa periódica cubana, a la que se le concedió una mayor libertad a la hora de informar sobre la situación de la Isla. Esta medida fue especialmente criticada por los diarios peninsulares

---

<sup>651</sup> *La Iberia*, “Las últimas atrocidades”, 30 de Noviembre de 1897.

<sup>652</sup> *Heraldo de Madrid*, 26 de Diciembre de 1897.



más conservadores, que consideraban que la concesión de mayor libertad de información era incompatible con el estado de guerra que atravesaba en esos momentos la región. Esta nueva situación fue aprovechada por algunas publicaciones habaneras autonomistas, hasta entonces silenciadas por el gobierno español, para emprender una dura campaña contra las autoridades gubernamentales anteriores a la implantación del autogobierno, especialmente contra el general Weyler, responsable de imponer una estricta censura en Cuba.

La situación llegó a su máxima virulencia el 12 de enero de 1898 con el motín llevado a cabo en La Habana por un centenar de oficiales del ejército español, a los que se les unieron un millar de civiles, quienes asaltaron los locales del recién aparecido periódico autonomista *El Reconcentrado*. El ataque, que ocasionó destrozos en el mobiliario y material de imprenta de la redacción, se produjo con motivo del suelto “Fuga de granujas” publicado en el diario cubano, que declaraba: “En el vapor de *Montserrat* marcha para la madre patria el capitán Sr. Sánchez, ejecutor de aquellas órdenes terribles del Sr. Maruri que todos recordamos. El capitán Sr. Sánchez ha tenido la desgracia de perder a su esposa, pero en cambio ha hecho verter mucha sangre y muchas lágrimas a infinidad de madres cubanas”.<sup>653</sup> La protesta se extendió también a las sedes de otros dos periódicos, *La Discusión* y el *Diario de la Marina*, donde se rompieron muebles y enseres de las imprentas, continuando al día siguiente con ataques a los vendedores del *Diario de la Marina*.<sup>654</sup>

---

<sup>653</sup> *La Época*, “Motín de la Habana: Origen de la cuestión”, 14 de Enero de 1898.

<sup>654</sup> Las más importantes cabeceras españolas se hicieron eco de los sucesos: *La Época*, “Motín de la Habana”, 14 de Enero de 1898. *El Imparcial*, “El motín de la Habana”, 14 de Enero de 1898. *El Liberal*, “Los sucesos de la Habana: la censura”, 15 de Enero de 1898

Tras los asaltos, el gobierno liberal estableció nuevamente la previa censura para los artículos y telegramas políticos escritos en Cuba. En palabras del ministro de Ultramar, los periódicos de La Habana habían censurado con “excesiva violencia” la conducta de algunas autoridades civiles y militares, por lo que el poder público se veía obligado a “mantener vigentes todas las disposiciones a la prensa dictadas por el general Weyler”.<sup>655</sup> En el telegrama oficial, como ocurrió con el atropello militar a *El Resumen* y *El Globo* de 1895, se exculpó a los oficiales españoles, ya que, a pesar del correctivo a la redacción, no habían atacado a los periodistas. En esta misma línea, las autoridades coloniales también publicaron una circular mediante la que establecieron una serie de medidas para reprimir a la prensa, y así impedir que “al amparo de ciertas tolerancias”, propiciadas por el gabinete liberal al otorgar más libertad de información a la prensa habanera, “se hagan propagandas perjudiciales a la causa de España”.<sup>656</sup>

La mayoría de los periódicos habaneros defendieron a los periódicos agredidos, y consideraron la rebelión como un ataque a la libertad de prensa, con excepción de *La Lucha*, que acusó de excesiva flexibilidad a las autoridades cubanas sobre ciertas campañas de la prensa contra Weyler. Las publicaciones españolas, por su parte, adoptaron posturas diversas respecto a los altercados cubanos. Entre los periódicos que justificaron el motín se encontraban, como no podía ser de otra manera, publicaciones castrenses como *El Correo Militar*, que afirmó con contundencia que había que aplaudir la contundente acción militar. Asimismo, otros diarios que se habían mostrado claramente belicistas durante estos meses, como *El Nacional* y *La Correspondencia Militar*, justificaron la rebelión de los militares, afirmando que éstos, en el cumplimiento de sus deberes, “viéronse en la triste precisión de ahogar con su autoridad

---

<sup>655</sup> *El País*, “Sedición militar en la Habana: versión oficial”, 14 de Enero de 1898.

<sup>656</sup> *La Época*, “Motín de la Habana: El gobierno insular”, 14 de Enero de 1898.

moral la justa protesta, patrióticamente iniciada por representantes de un ejército ofendido”. Para ambos periódicos, el acto realizado por los oficiales solo podía ser censurado por los separatistas, los norteamericanos y el gobierno fusionista, considerados por estas publicaciones como enemigos de la patria, ya que “es indudable que jamás podrán ir unidos el patriotismo y la vergüenza”. Estos diarios aprovecharán, también, para solicitar un cambio de gobierno, afirmando que “en mal hora vino al poder el partido liberal e implantó el régimen autonómico, pretendiendo de este modo lanzar sobre el ejército un puñado de oprobio y de vergüenza”.<sup>657</sup>

En esta línea se pronunciaba la prensa conservadora, que acusó a Sagasta por su mala gestión de la libertad de información en la Isla, y consideraba que, de haberse atajado los ataques repetidos e injuriosos a jefes del ejército, no se hubieran producido estas manifestaciones violentas. Para estas publicaciones, la única solución posible para evitar los abusos de la prensa sobre el ejército pasaba por mantener la estricta censura en Cuba, tal como había impuesto el gobierno conservador durante su mandato. Referente a esta idea, *La Época* expresó que la previa censura era un sistema completo, sencillo y eficaz, que de continuar en la Isla, conseguiría evitar las ofensas y las agresiones de índole separatista a los militares. El diario conservador dejaba claro, no obstante, que la cuestión sobre la libertad de prensa en la metrópoli era muy distinta, ya que no había estado de guerra, y por tanto, de imponerse la previa censura sería inconstitucional.<sup>658</sup>

En el lado opuesto se posicionaron las cabeceras liberales que, apostando por la gestión de Sagasta, criticaron el atropello cometido por el ejército, declarando sentirse entristecidas por que se hubiera dirigido un motín contra periódicos partidarios de la

---

<sup>657</sup> *La Correspondencia Militar*, “Rechazando vergüenzas”, 14 de Enero de 1898.

<sup>658</sup> *La Época*, “Omisiones de la nota oficiosa”, 15 de Enero de 1898.

autonomía, algunos de ellos sin dirigir siquiera ataque alguno a los oficiales. Así lo confirmó el *Heraldo de Madrid*, que recriminó que la agresión se había realizado a diarios que no habían publicado nada que afectase al honor de los militares.<sup>659</sup> Con la declaración del diario madrileño queda claro que, a pesar de los argumentos de los adversarios del nuevo régimen que giraban en torno a esta teoría, el ataque militar no se produjo por el aumento de la libertad de información otorgada a la prensa por el partido liberal. Por su parte, *El País*, órgano oficial del partido autonomista, calificó los hechos de extrema gravedad, no por lo que de ellos se conocía, sino por lo que “el telégrafo calla”. Para el diario republicano era un retroceso que el gobierno liberal hubiese impuesto de nuevo la censura: “Desconocemos la verdadera situación de Cuba en estos momentos, porque el gobierno, como sucede frecuentemente, se habrá callado aquello que no convenga decir, o que no considera prudente publicar”.<sup>660</sup>

Tras estas afirmaciones, y con motivo de la reunión mantenida por el Consejo de Ministros, en el que se exponía la necesidad de restringir aun más la libertad de prensa para evitar altercados como el de La Habana, *El Imparcial* confesó su preocupación con las reformas planteadas por el ministerio público sobre la legalidad vigente, ya que, aunque consideraba necesario adoptar medidas que restringieran de alguna manera el exceso de libertad, para el periódico madrileño existían otros caminos más beneficiosos para salvaguardar el derecho a la libre información. Así pues, el diario consideró justo que la administración pública interpusiera disposiciones para defender el prestigio y la disciplina del ejército contra los ataques de “periódicos contadísimos” que, “por su falta de respeto, lenguaje procaz y hasta soez, irritan y ofenden los sentimientos de la

---

<sup>659</sup> *El Heraldo de Madrid*, “Se reproduce el tumulto”, 13 de Enero de 1898.

<sup>660</sup> *El País*, “Sedición militar en la Habana”, 14 de Enero de 1898.

clase”,<sup>661</sup> ya que las cabeceras que trataban a la armada española con “los miramientos debidos” nada tenían que temer a una posible reforma gubernamental. Pero el periódico madrileño aseveró que no era conveniente reformar la legislación de prensa vigente a favor del ejército, a pesar de las circunstancias extraordinarias en las que se encontraba inmersa la nación, y declaró que, de llevarse a cabo, podía producir que otras instituciones, como la Iglesia, demandasen al legislador un amparo análogo.

En definitiva, *El Imparcial* defendió la libertad de imprenta, y alegó que la prensa democrática no podía justificar nunca que un gobierno liberal iniciara una tarea de restricción de este derecho fundamental: “¿Es que la prensa toda ha de ver imposible que se ultraje lo que es tan digno de respeto o que se vulnere uno de los cimientos del orden social por quienes presuman de pertenecer a la prensa misma?”. Para la publicación era más beneficioso que fueran los propios periódicos peninsulares los que pusieran correctivo a esos diarios cubanos, que abusaban de su libertad y hacían un uso “tan poco digno de la imprenta”, haciéndoles el vacío en sus páginas, empezando por suprimir sus nombres en las páginas de sus diarios. Esta solución era la mejor ya que, no solo evitaba que “gentes sin conciencia y sin dignidad se aprovechen de los sufridos que son el papel y la letra de imprenta y desacrediten y aun deshonren el periodismo”,<sup>662</sup> sino que resultaba más provechosa para el interés social y más digna para la prensa que los proyectos de restricción legal que proponían las autoridades gubernativas.

En lo que respecta a EEUU, el motín del 12 de enero, como el resto de los acontecimientos, se divulgó en los rotativos norteamericanos con una gran dosis de sensacionalismo, con el que trataban de poner de relieve los perjuicios derivados para

---

<sup>661</sup> *El Imparcial*, “Lo que puede hacer la prensa”, 16 de Enero de 1898.

<sup>662</sup> *El Imparcial*, “Lo que puede hacer la prensa”, 16 de enero de 1898.

los residentes estadounidenses en Cuba, para crear con ello una mayor inquietud entre la población, cada vez más convencida de la necesidad de provocar una revolución armada. A esto se unió la influencia de los grupos empresariales, quienes, días antes de los altercados en La Habana, y representados por un grupo de destacados hombres de negocios, entregaron a McKinley una instancia en la que le recordaban los enormes intereses económicos existentes en la Isla, y repasaban las grandes pérdidas que habían sufrido desde el comienzo de la insurrección cubana.<sup>663</sup> El mismo día de los altercados, y presionado por la prensa, los sectores económicos y la sociedad norteamericana, el presidente estadounidense declaró que el régimen autonómico impuesto por el gobierno español había fracasado, y solicitó la presencia de buques de guerra norteamericanos para evitar los posibles riesgos a los que se podían exponer sus ciudadanos. Todos los diarios españoles, partidarios o detractores del sistema autonómico, expresaron su indignación por la actitud de EEUU, y declararon su desconfianza por la llegada de embarcaciones bélicas, ya que suponía la intervención directa de otro país en los asuntos coloniales españoles. A pesar de ello, y con el beneplácito de las autoridades españolas, el 25 de enero de 1898 llegó al puerto de La Habana el buque Maine, cuya explosión marcó el punto de partida del comienzo del enfrentamiento bélico contra EEUU.

## **2. INICIO DE LA INTERVENCIÓN ARMADA DE EEUU: LA “FICTICIA” LIBERTAD**

Tras el motín de los militares, se produjo un acontecimiento que cambiaría el rumbo del conflicto. No hay duda de que la histórica explosión del acorazado Maine la noche del 15 de febrero de 1898, que causó gran conmoción entre la población norteamericana,

---

<sup>663</sup> FONER, P.S., *La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano 1895-1902*, Madrid, Akal, 1975, p. 295.

especialmente consternada por las informaciones de dudosa credibilidad que les proporcionaba la prensa sensacionalista, fue el pretexto perfecto para EEUU, que declaró la guerra a España el 25 de abril de 1898. En la península los diarios se hicieron eco del suceso a través de un escueto telegrama enviado, el 17 de febrero, por el capitán general de Cuba, por el que se comunicaba que un “accidente discutiblemente casual” había acabado con la vida de 258 militares americanos.

Mientras, en EEUU, a pesar de no haber ninguna declaración oficial al respecto, empezó una ofensiva periodística sin precedentes cuyo único objetivo era culpar a las autoridades españolas de la catástrofe. De esta manera, la campaña de difamación contra los españoles, iniciada por los rotativos más sensacionalistas al comienzo del conflicto colonial, se acrecentó con el suceso del Maine con informaciones y fotografías encaminadas a responsabilizarles del desastre.<sup>664</sup> La situación empeoró cuando los norteamericanos se negaron a formar un comité de investigación mixto hispano-americano que aclarara la responsabilidad del hundimiento de la embarcación. Tras poner el asunto en manos de las Cámaras, McKinley concluyó que el suceso se debía a un sabotaje, y no a un accidente como defendía el gobierno español, con lo que se consiguió exaltar aun más los ánimos de la sociedad estadounidense. A partir de este momento comenzaron a surgir informaciones de dudosa credibilidad que se iban difundiendo con grandes dosis de sensacionalismo, y que eran una muestra del poder devastador que ejercía la prensa amarilla sobre la opinión pública norteamericana, a la que consiguieron convencer de que la intervención armada en Cuba era buena para los

---

<sup>664</sup> En portada del *New York Journal* el 17 de febrero de 1898 junto a la pregunta “Who destroyed the Maine?” (¿Quién destruyó el “Maine?”), se ofrecía una recompensa de 50.000 dólares para la persona que tuviera la convicción acerca de la identidad de los criminales que habían ocasionado la muerte de 258 marinos americanos. El mismo día *The World* publicó: “La explosión del Maine causada por una bomba o torpedo”.

intereses del país y respondía a causas humanitarias respecto a la población cubana, y no a intereses económicos y estratégicos como finalmente quedaba al descubierto.

El 11 de abril de 1898, con toda la opinión pública norteamericana y los sectores sociales a favor, las Cámaras estadounidenses acordaron que Cuba debía ser libre e independiente, situación incompatible con el régimen autonómico implantado por los españoles. Por este motivo, el presidente de la Casa Blanca presentó un requerimiento a España para que renunciara a su soberanía y abandonara la Isla, y amenazó con utilizar las fuerzas militares y navales para llevar a cabo su propósito, si ésta no cumplía con sus exigencias. Las reclamaciones norteamericanas encendieron el patriotismo fanático característico de la mayoría de las cabeceras españolas que, ante la posibilidad cada vez más irremediable de la guerra, excitaron los ánimos populares para no sufrir más atentados contra la nación. La mayoría de los periódicos se posicionaron de forma unánime en favor del conflicto bélico, exaltando el orgullo nacional y menospreciando a las fuerzas estadounidenses. El espíritu patriótico de la mayoría de las publicaciones contagió a una población que tardó bastante tiempo en percatarse de la dimensión real del problema. Solo los republicanos, liderados por Pi Margall, criticaron la actitud de euforia de los diarios y defendieron la necesidad de dar a Cuba la independencia.

Tras el rechazo del ultimátum se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, y el 25 de abril de 1898 EEUU declaró formalmente la guerra a España. Pese a la línea seguida por ambos gobiernos, que utilizaban cualquier excusa para suspender las garantías constitucionales en la Península, y con ello restringir la libertad de imprenta, en esta ocasión, de forma sorprendente tratándose de un conflicto bélico, el poder público no adoptó ninguna medida legal de restricción informativa. Después de



los ataques asestados por las cabeceras españolas más importantes a las autoridades conservadoras, de los que había sido testigo Sagasta, el presidente del Gobierno procuró adoptar una política menos represiva que su antecesor, al menos en apariencia, para intentar conseguir cierto apoyo de los diarios madrileños, cada vez más influyentes en la opinión de los ciudadanos. Gracias a esta circunstancia, una vez comenzada la ofensiva americana, los periódicos peninsulares gozaron de más libertad que en los meses anteriores bajo el mandato de los conservadores, como así lo manifestaron algunos liberales de la época, quienes trasladaron al Congreso su satisfacción porque, pese a la situación de “suma gravedad” que vivía en ese momento España, el gobierno no ponía límites a las noticias.

A pesar de esta aparente libertad informativa, en la práctica se mantuvieron ciertas trabas gubernamentales, especialmente en lo que concernía a la interrupción de telegramas dirigidos a la prensa peninsular. A esto hay que añadir que, como ya adelantamos, desde el inicio de las hostilidades el control informativo impuesto por cada uno de los gobiernos era desigual, especialmente en lo que respecta a las cabeceras estadounidenses. Así lo denunció *El Imparcial* el 27 de mayo, afirmando que el gobierno español detenía telegramas “completamente inocentes”, y, en muchos casos, “perjudiciales a la causa de nuestros enemigos”, mientras que esas mismas autoridades dejaban telegrafiar libremente al *New York Herald* con los “pormenores sobre movimiento de barcos y tropas y cuantas noticias de operaciones de guerra puedan aprovechar los norteamericanos”.<sup>665</sup> El *Heraldo de Madrid* y *La Época* se unieron a las quejas, lamentando que no se impusieran restricciones a los rotativos estadounidenses y que ésta continuara telegrafinando noticias sobre datos bélicos, e irónicamente felicitaban

---

<sup>665</sup> *El Imparcial*, “Censura y no para los yanquis”, 27 de mayo de 1898.

a todos los corresponsales extranjeros que “pueden ejercer su misión en España sin el menor tropiezo”.<sup>666</sup> Lo cierto es que el nulo control existente para la prensa norteamericana, tanto de su administración como de la española, hizo que los diarios sensacionalistas relataran la guerra a su antojo, sirviéndose cómodamente de las informaciones transmitidas por sus corresponsales situados en puntos estratégicos del conflicto, que tenían absoluta libertad de transmisión de todo tipo de información tanto en las Antillas como en la Península.

En lo que respecta a la guerra, la primera derrota del ejército hispano se produjo en la bahía filipina de Cavite el 1 de mayo de 1898, y marcó un punto culminante en el desarrollo del conflicto. Pese a que las autoridades españolas retuvieron el cablegrama dirigido a *El Imparcial* en el que se daba cuenta del descalabro español, la noticia se filtró, y finalmente se difundió a través de las agencias de noticias, siendo la información de dominio público. Este suceso produjo un sentimiento de frustración general en esos mismos periódicos que un mes antes pronosticaban una victoria segura para España, y la unanimidad existente entre la prensa y la clase política, y que caracterizó el comienzo de las hostilidades contra EEUU, se resquebrajó con el desastre de Cavite, aumentando el número de las publicaciones que echaban la culpa a las autoridades gubernativas de esta situación. Por primera vez, los diarios se hicieron eco de la dificultad de ganar la guerra, y se multiplicaron las cabeceras españolas que exigieron que se llegara a un acuerdo de paz. Sólo los periódicos ministeriales mantuvieron la fidelidad al gobierno, y defendieron la actuación liberal durante toda la ofensiva americana, publicando informaciones sesgadas y victoriosas apoyadas en cualquier indicio que tuvieran de noticias favorables a los españoles.

---

<sup>666</sup> *La Época*, “Siguen las indiscreciones”, 29 de mayo de 1898.

A raíz de la derrota de Cavite, la jefatura liberal puso en práctica medidas restrictivas en materia de prensa, entre las que se rescató la obligación de insertar las informaciones oficiales que procedieran del ministerio de la Marina. Sin embargo, el débil poder público no consiguió hacer cumplir las mismas, lo que propició un sensacionalismo irresponsable por parte de las publicaciones españolas, que difundieron en sus páginas datos muy valiosos para el enemigo. Con motivo de la noticia publicada por *El Imparcial* el 28 de mayo, que confirmó la falta de adiestramiento de las tripulaciones españolas,<sup>667</sup> un dato desconocido y ventajoso para la armada estadounidense, un grupo de periódicos, liderados por el *Heraldo de Madrid*, reclamó al partido liberal que mejorara su política de reserva en asuntos de guerra. Para el diario madrileño era una verdadera imprudencia dejar que se filtraran estas averiguaciones, y afirmó que estas indiscreciones eran posibles porque las autoridades no estaban interceptando los telegramas que contenían estas reveladoras informaciones en los centros oficiales creados al efecto. No fue el único rotativo que declaró su preocupación por la mala gestión liberal sobre algunos datos bélicos, y en la misma línea, *La Época* reprochó que “en los centros oficiales se guarda el más absoluto secreto, tan absoluto, que no impide que circulen todas las noticias que convendría callar”.<sup>668</sup>

Tras el revuelo originado por la información publicada, *El Imparcial* confirmó que había difundido los datos porque previamente los mismos habían sido aportados en otros diarios, pero, en consonancia con la opinión del *Heraldo*, creyó necesario poner coto a la publicación de informes concernientes a investigaciones sobre el conflicto armado, especialmente en lo relativo a las disposiciones navales. Algunos políticos de

---

<sup>667</sup> “(...) Los buques de la Escuadra se dedicarán a hacer maniobras con objeto de que se adiestre bien al personal de máquinas y los artilleros en el manejo de los cañones”. *El Imparcial*, “La escuadra de reserva”, 28 de mayo de 1898.

<sup>668</sup> *La Época*, “Siguen las indiscreciones”, 29 de mayo de 1898.

diferente signo ideológico se posicionaron a favor de las observaciones realizadas por la prensa sobre el control de la información de guerra, y en la sesión del Congreso del 6 de junio se alzaron voces que acusaron al gobierno liberal de ser el único responsable de las suposiciones periodísticas que venían haciéndose desde que diera comienzo la intervención militar estadounidense. Ante estas observaciones, el ministro de la Marina envió una circular a las cabeceras más importantes en la que pidió que se extremara la reserva sobre la “conveniencia de no dar publicidad a ningún preparativo ni órdenes relacionadas con la guerra”.<sup>669</sup>

Las orientaciones gubernamentales fueron nuevamente desatendidas, y la prensa siguió publicando informaciones indiscretas que aportaban elementos de orientación naval y armamentística de gran valor para los estadounidenses. Así lo certificó *El Imparcial*, que lamentó no poder publicar multitud de noticias “imprudentes y peligrosas”, de las que, en cambio, otras cabeceras se hacían eco sin que el poder público hiciera nada al respecto: “Nos encontramos hoy con que en las altas esferas del gobierno nadie ha hecho caso de estas iniciativas, y los corresponsales extranjeros siguen telegrafando a París y Londres noticias sobre estos asuntos que son publicadas en los periódicos amarillos contribuyendo así a una infame y traidora obra de espionaje”.<sup>670</sup> Para suplir estos inconvenientes, la prensa madrileña aconsejó a la administración gubernamental que convocara a todos los directores para recordar que no se podía publicar nada sobre los preparativos navales y terrestres que hacía la armada española.

Este descontrol informativo propiciado por la mala gestión del gobierno liberal, cada vez más criticado en las páginas de los periódicos, coincidió con la encarcelación el 7 de

---

<sup>669</sup> *El Imparcial*, “La marina de guerra”, 6 de Junio de 1898.

<sup>670</sup> *El Imparcial*, “Reserva necesaria”, 17 de junio de 1898.

junio de 1898 de Alejandro Lerroux, el periodista republicano más influyente de la época. Las circunstancias en las que se produjo la detención por parte de la autoridad militar, con motivo de unos hechos ocurridos dos años antes derivados de la campaña de prensa contra Martínez Campos, y después de que se hubieran declarado varios indultos a favor de la prensa,<sup>671</sup> hacen suponer que el motivo real era silenciar de forma definitiva la molesta voz del republicano en las páginas de su diario *El Progreso*.<sup>672</sup> Sin embargo, no se consiguió su silencio, pues desde la cárcel continuó con la guerra dialéctica mantenida contra el gobierno y la monarquía de la Restauración con una serie de artículos provocadores que fueron inmediatamente denunciados por las autoridades. Uno de ellos lo escribió tras la derrota de Cervera, y fue dirigido a la Reina regente a quién animaba a llorar con estas palabras: “se derrumban aquellos sueños de ambición que levantaste sobre la frente cándida de tu hijo. No lloras porque la cuna de ese niño flota sobre oleadas de sangre, ni porque has cimentado tu porvenir sobre las ruinas de un pueblo. Lloras porque la cuna zozobra (...) Pues bien mujer, llora eternamente (...) llora por todas las madres, sufre por todos los dolores (...) llora siempre: riega con lágrimas de tus ojos el camino de tu vida triste y desesperada”.<sup>673</sup> Tres días después de haber sido denunciado por ese artículo, escribió otro manteniendo el mismo tono severo y cruel, lo que provocó una nueva denuncia.<sup>674</sup> No fue hasta febrero de 1899, con el levantamiento del estado de guerra, cuando se puso en libertad la pluma de Lerroux.

---

<sup>671</sup> Además del indulto general decretado por el gobierno conservador al principio del estallido del conflicto cubano, el 5 de julio de 1895, se concedió a la prensa periódica dos indultos más con las mismas características que el primero: Real Decreto de 6 de diciembre de 1896. *Gaceta de Madrid*, 7 de diciembre de 1896; Real Decreto de 11 de noviembre de 1897. *Gaceta de Madrid*, 12 de noviembre de 1897.

<sup>672</sup> Lerroux no fue el único miembro del periódico en ir a la cárcel. Otros redactores de *El Progreso* le acompañarían en prisión desde el 1 de julio, como Adolfo Luna, quién permaneció encarcelado durante tres meses, y cuya situación fue denunciada en el Congreso por Romero Robledo.

<sup>673</sup> *El Progreso*, “Dicen que llora”, 6 de julio de 1898.

<sup>674</sup> El artículo iba dirigido de nuevo a la Reina en estos términos: “Ah! ¿Con que ríes, mujer? ¿Con que no es verdad que no lloras? (...) ¿Por qué te ríes? ¿Acaso por aquellos miserables que, abandonando su hogar y olvidando que en la vida todo es amor, van a morir en una lucha terrible contra sus hermanos? (...) Yo sé por qué te ríes mujer. Te ríes porque, aunque todo se hunda en la miseria, piensas que con tu oro puedes realizar algún día aquellos sueños de ambición que levantaste sobre la frente cándida de tu

### 3. SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DECLARACIÓN DEL ESTADO DE GUERRA EN LA PENÍNSULA (14 DE JULIO DE 1898)

Sin tener en cuenta el desastre de Cavite, a principios de julio se mandó a La Habana la escuadra española del almirante Cervera, que, pese a las primeras informaciones de las cabeceras peninsulares, asegurando la entrada triunfal de la armada en la región antillana, fue destruida en su totalidad por los estadounidenses el 4 de julio de 1898. Un día después, Sagasta emitió una nota en la que confirmó la catástrofe naval española, anunciada previamente en el comunicado oficial del gobierno norteamericano, y que se insertó en los periódicos españoles sin ser desarrollada o comentada, ya que todos habían editado en su totalidad las ediciones de ese día.

Algunos diarios que no quisieron esperar al día siguiente para ampliar la información de lo acontecido, como *El Liberal* y *El Siglo Futuro*, lanzaron ejemplares extraordinarios que fueron interceptados por las fuerzas del orden público, pues no querían que llegara a oídos de la población la derrota española. Los oficiales atacaron violentamente a los vendedores que se encontraban repartiendo las hojas extraordinarias, como relató el *Siglo Futuro*: “Lo mismo fue salir de la imprenta los primeros repartidores que echarse encima de ellos los guindillas y arrebatárles cuanto papel llevan. ¿Pero imagina el gobierno que con eso las noticias no se van a saber?”.<sup>675</sup> La opresión gubernamental desarrollada contra estas publicaciones da una muestra del giro del poder liberal respecto a la política de censura adoptada meses atrás, y así lo advirtió el periódico

---

hijo”. *El Progreso*, “Dicen que ríe”, 10 de julio de 1898.

<sup>675</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del periodismo español*, p. 56.

católico, que se lamentó del fin de la libertad en estos términos: “Pues perezca la libertad de imprenta hasta para dar noticias y toda la libertad liberal”.<sup>676</sup>

En cualquier caso, la desaparición de la escuadra de Cervera representó el fin de cualquier esperanza, y resultó definitiva para el cambio de actitud que experimentó la prensa al tratar el conflicto cubano. Por primera vez desde el comienzo de las hostilidades se tomó verdadera conciencia de la dimensión real del poder militar norteamericano, y esto se trasladó a las cabeceras españolas, donde cada vez eran menos los que consideraban preciso continuar la guerra, aumentando las publicaciones que, pese a haber sido abiertamente partidarias de la guerra, como *El Imparcial*, el *Heraldo de Madrid*, *El País* o *El Liberal*, exigían ahora a Sagasta que negociara una paz rápida entendiéndose cuanto antes con el presidente norteamericano. A partir de aquí se empezó a dar en la prensa un debate generalizado sobre las responsabilidades de lo sucedido, agudizándose las críticas dirigidas a la clase política, a la que acusaban de haberles engañado, disfrazando un conflicto que estaba perdido desde el principio. En este punto es preciso señalar que el desasosiego que vivía en estos momentos la sociedad española por la ceguera informativa impuesta en torno al conflicto colonial se debía no solo a la mala gestión del mismo, sino también a la importante influencia de los diarios en la población. Estos divulgaron desde el principio noticias en las que se ensalzaba el gran potencial del ejército español y se menospreciaba el del enemigo, todo ello aderezado de grandes dosis de patriotismo y triunfalismo infundado que hicieron creer a los ciudadanos que la victoria española estaba asegurada.

---

<sup>676</sup> *El Siglo Futuro*, “¡La Libertad de imprenta!”, 5 de Julio de 1898.

En medio de estas polémicas, el gobierno liberal, que se había mostrado precavido a la hora de restringir la libertad de prensa por la que tanto había luchado años atrás, puso en marcha la maquinaria legal de restricción informativa, por primera vez desde que diera comienzo el conflicto colonial y cuando prácticamente se podía afirmar que la guerra contra EEUU estaba perdida. Así pues, mediante el Real Decreto de 14 de julio de 1898 se suspendieron las garantías constitucionales en toda la Península y se declaró el estado de guerra en la Nación, lo que agravó la situación que sufría la prensa en torno a su derecho constitucional. Sagasta justificó la adopción de esta medida excepcional como medio para proteger el honor nacional frente a una nación “poderosa” en las extraordinarias circunstancias en las que se encontraba el país.<sup>677</sup> Pese a que la intención del gobierno era dar a entender a la opinión pública que esta norma pretendía acabar con las informaciones bélicas que pudieran favorecer al enemigo, único supuesto en el que se podría defender la introducción de restricciones en tiempos de guerra, la medida llegó tarde ya que la intervención militar americana se había iniciado meses antes sin que se hubiera adoptado ninguna disposición excepcional, y se mantuvo vigente hasta febrero de 1899, meses después de darse por finalizada la contienda. Por tanto, se puede afirmar que la adopción de la medida por parte del gobierno liberal respondió a cuestiones políticas, como medio para detener los ataques dialécticos lanzados en la prensa, que responsabilizaba a las autoridades de la calamitosa situación de España.

En consonancia con el decreto, se publicó ese mismo día un bando dictado por Chinchilla, capitán general de Cuba, por el que se prohibía publicar artículos, grabados o dibujos sin la autorización oportuna de la autoridad correspondiente. Para la publicación de periódicos, la norma exigía la presentación de tres ejemplares ante la

---

<sup>677</sup> Exposición de motivos del Real Decreto de 14 de Julio de 1898 por la que se impone la censura militar para la prensa con motivo de la guerra de Cuba. *La Vanguardia*, 16 de Julio de 1895. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°30.



capitanía general de Madrid o los comandantes militares correspondientes en las provincias, y solo podían ser difundidos aquellos que eran devueltos con el correspondiente sello oficial. Si los censores entendían que las informaciones no eran susceptibles de ser divulgadas, el interesado debía suprimir la parte tachada con lápiz rojo y, de no hacerlo, podía ser sancionado con la suspensión de la publicación.<sup>678</sup> Las durísimas condiciones del bando militar, unidas al reconocimiento de prácticas arbitrarias y anticuadas como el depósito previo, que con la configuración del nuevo sistema informativo liberal se habían dejado atrás, hicieron que la libertad de información reconocida en la Ley de Imprenta de 1883 quedara prácticamente anulada por sus propios creadores.

La situación era tan precaria para la libertad de prensa que, a la censura ejercida por los militares, había que sumar además la intervención telegráfica que el ministerio de la gobernación venía realizando desde el comienzo del conflicto colonial, y que se vio endurecida con las nuevas disposiciones de represión informativa. En un principio, se dio orden a las oficinas telegráficas de interceptar cualquier telegrama que no fuera noticia oficial confirmada por el gobierno, para días más tarde suavizar la medida, aclarándose que siempre que se tratase de un periódico con información telegráfica “respetable y acreditada” se le permitía publicar sobre la guerra.<sup>679</sup> En cualquier caso, los corresponsales no estaban autorizados para insertar ningún comentario que tratase de explicar la noticia, ni tampoco extraer las consecuencias de la misma, y se confirmó que se suprimirían aquellas informaciones que fueran notoriamente falsas o exageradas.

---

<sup>678</sup> Bando dictado por el Capitán general José Chinchilla en consonancia al Real Decreto de 14 de julio de 1898. *La Vanguardia*, 16 de Julio de 1898, p.5. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°31.

<sup>679</sup> *La Época*, “Como se ejerce la censura: el servicio telegráfico”, 16 de Julio de 1898.

La escisión entre el poder liberal y la prensa quedó patente no solo por el contenido de la nueva medida represiva, sino por la forma de aplicar la misma, empezando porque ésta se difundió después del mediodía, con lo que se perjudicaba de forma consciente a los diarios de provincias que hacían sus impresiones en las primeras horas de la mañana. Por esta razón, no existen ejemplares de ese día de las ediciones provinciales del *Siglo Futuro*, *El Correo Militar* y *El Correo Español*, entre otros. No fue el único inconveniente del lápiz rojo, manejado por militares y dirigido por el ejecutivo liberal, ya que a éste hay que añadir la reaparición de las columnas en blanco, que causó el efecto contrario al pretendido por el gobierno. Así pues, lejos de calmar a los ciudadanos por la desinformación forzosa impuesta por las autoridades, se creó una innecesaria alarma social, al aumentar las sospechas de la población sobre el contenido de lo tachado, ya que se sobrentendía que si las autoridades habían creído conveniente no publicar una determinada noticia era porque en la misma se contenían averiguaciones muy graves.

Además, en los primeros días de aplicación de la censura militar quedó al descubierto el apresuramiento con el que la administración liberal había puesto en marcha la maquinaria de medidas restrictivas. Se trataba de un servicio de censura improvisado que no tenía criterio fijo, e hizo que las autoridades militares tacharan con lápiz rojo lo que discrecionalmente consideraban oportuno, provocando que en algunos periódicos se suprimieran informaciones que en otros salían publicadas.<sup>680</sup> Los diferentes criterios utilizados por los censores, unidos al desconocimiento sobre las materias punibles, crearon un desconcierto informativo entre los diarios, que se veían también muy perjudicados por la mala gestión de la censura. Así lo denunciaron dos de los

---

<sup>680</sup> Así lo denunció *El Siglo futuro* en su artículo: “Irregularidades de la previa censura”, 23 de Julio de 1898.

agraviados, el *Heraldo de Madrid* y *La Época*,<sup>681</sup> que en los primeros días desde la puesta en marcha de la censura militar se vieron obligados a retirar sus ejemplares originales ya impresos por haber sido eliminados artículos enteros, lo que supuso retrasos y dilaciones en el reparto de las ediciones nuevas y una duplicación del gasto de papel soportado por las empresas periodísticas, que se vieron en la obligación de producir otras tiradas con los blancos señalados por el lápiz rojo.

La reacción de las cabeceras españolas ante la imposición de la previa censura fue inmediata, y la mayoría de las publicaciones criticaron enérgicamente las severas medidas impuestas por el partido liberal, que años atrás había luchado para que la libertad de prensa se reconociera de forma efectiva y eficaz en España con la aprobación de la Ley de 1883, y que en ese momento era el encargado de mutilarla. De esta opinión era *El Imparcial* que alegó que daba “aun mayor impresión” que la previa censura fuera aplicada por un gobierno liberal, y criticó la falta de criterio común respecto a las materias prohibidas, ya que los diarios no sabían “lo que es lícito decir y lo que es preciso callar”. De la misma manera, reprochó la aparición de los blancos, característicos de “épocas calamitosas” en las que la libertad de información había sufrido terribles trastornos, y que eran producidos ahora por la estricta corrección informativa a la que se veían sometidos los periódicos. Aun así, *El Imparcial* declaró que esas “cicatrices” impuestas a las publicaciones no obstaculizaban la libre opinión, que existía “aun cuando la prensa se quede muda”.<sup>682</sup> De la misma opinión era *El Liberal*, que aseveró que desde 1874 no aparecían las columnas en blanco, y lamentó el sistema de silencio forzoso que “no lastima tan solo la dignidad de los ciudadanos

---

<sup>681</sup> *La Época*, “Como se ejerce la censura”, 16 de Julio de 1898.

<sup>682</sup> *El Imparcial*, “La suspensión de garantías”, 16 de Julio de 1898.

libres, sino que violenta además la naturaleza de las sociedades modernas”.<sup>683</sup> Entre los diarios de mayor circulación, *La Correspondencia de España* fue la más moderada, y confió en la administración pública, ya que “lejos del propósito del gobierno de extremar los grandes medios que le concede el nuevo, pero transitorio, estado jurídico, piensa seguir un criterio de templanza, moderación y respeto”.<sup>684</sup>

Las quejas se mantuvieron entre los diarios conservadores, que arremetieron contra la mala gestión y la precipitación de la política de censura llevada a cabo por Sagasta: “De la completa libertad, en ocasiones licencia hemos pasado al régimen digno de tiempos de Narváez, de la censura ejercida en manos de militares en la capitanía general de Madrid”.<sup>685</sup> En la misma línea que la prensa de mayor circulación, los conservadores entendieron que las autoridades correspondientes tenían la obligación de dirigir a los directores una nota oficiosa en la que se puntualizaran las materias vedadas a la prensa, para que así éstos se abstuvieran de realizar comentarios y noticias que el gobierno no quería que circularan, facilitando, además, el trabajo a los censores. El periódico conservador *La Correspondencia Militar* también consideró que la medida de Sagasta hacía que “su historia de liberal quede de cuerpo presente envuelta a manera de fúnebre sudario en un número de la Gaceta de ayer”.<sup>686</sup> Algunas publicaciones liberales, como *El Día*, revelaron también su malestar ante las restricciones gubernamentales, y reprocharon la mutilación de periódicos llevada a cabo por el líder del ejecutivo, quién había luchado años antes en *La Iberia* por la “lenta pero continua desaparición del terrible lápiz rojo de la censura”.<sup>687</sup>

---

<sup>683</sup> *El Liberal*, “Suspensión de garantías”, 16 de Julio de 1898.

<sup>684</sup> *La Correspondencia de España*, “A callar tocan”, 16 de Julio de 1898.

<sup>685</sup> *La Época*, “La previa censura”, 16 de Julio de 1898.

<sup>686</sup> *El País*, “Prensa militar: La Correspondencia Militar”, 17 de Julio de 1898.

<sup>687</sup> *La Época*, “Hojeando periódicos”, 17 de Julio de 1898.

Los diarios republicanos criticaron con más dureza aún al ministerio público y se preguntaron qué sentido tenía escribir en esas circunstancias. Así lo lamentó *El País*: “El lenguaje de la verdad no tiene hoy más lectores que los oficiales encargados de la censura”.<sup>688</sup> Para este periódico era el peor régimen informativo impuesto por un gobierno desde la publicación de la Ley de Imprenta de 1883, ya que años antes, aun teniendo que sufrir reveses gubernamentales, la prensa había podido escribir, pero con la imposición de la previa censura, los periódicos eran “esclavos del poder”, y o bien escribían al criterio del gobierno, o bien publicaban en blanco. Así lo certificó *El Correo Militar*, para el que la prensa “enmudece forzosamente” con estas restricciones, ya que era “inútil reflejar los juicios porque el lápiz rojo se encargara de tacharlos”.<sup>689</sup>

Tras los inconvenientes causados los primeros días de aplicación de la censura militar, los directores solicitaron al gobierno la definición de los conceptos y las noticias que se consideraban afectados en el decreto de suspensión de garantías constitucionales. En la reunión mantenida con Chinchilla se acordó que los periódicos sólo debían enviar a la capitanía general los artículos, telegramas y noticias políticas que pudieran tener alguna conexión con la paz o la guerra, o con los aprestos militares, o que encerraran juicios acerca de las instituciones o el gobierno. Una vez revisados, la sección de prensa de la capitanía devolvería dichas pruebas con el sello correspondiente con el que se autorizaba la publicación de lo suprimido, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera ocasionar los escritos no enviados a la capitanía o la publicación de lo eliminado. Además, y teniendo en cuenta los perjuicios generados, para evitar los espacios en blanco, se obligaba a los diarios a sustituir por otro texto los párrafos o

---

<sup>688</sup> *El País*, “Suspensión de periódicos: a nuestros lectores”, 17 de Julio de 1898.

<sup>689</sup> *El País*, “Prensa militar: *El Correo Militar*”, 17 de Julio de 1898, nº 4.020.

sueltos eliminados.<sup>690</sup> Con esta “inocente” medida, el poder público pretendía conseguir que, transcurridos algunos meses, la opinión pública se olvidara de la existencia de la censura, ya que, aun rigiendo la prohibición de hablar sobre determinados asuntos, la prensa se seguía publicando con regularidad, sin quejas ni blancos, con lo que daba la impresión de que todo seguía su curso con normalidad.

Como acto de protesta contra estas nuevas orientaciones gubernamentales, *El Nacional* propuso suspender voluntariamente las publicaciones, entendiendo que la única forma apropiada de responder a la provocación del ejecutivo liberal era que los periódicos renunciaran temporalmente a la comunicación con el público, porque “si hemos de decir a éste lo que el gobierno quiera, vale más enmudecer que poner nuestros juicios bajo los lápices de la capitanía general”. Efectivamente, siguiendo las palabras del diario, “si la prensa ha de decir cuánto el gobierno plazca, y ha de callar cuanto al país interese saber, resultará una prensa para el gobierno, pero no una prensa para el país”.<sup>691</sup> Pues realmente solo con la libertad de información podía existir una opinión pública plural y libre, condición indispensable para la existencia de un sistema democrático.

Los directores de las principales cabeceras de Madrid se reunieron el 22 de julio para valorar la propuesta de *El Nacional*. Tras el encuentro, la gran mayoría de las publicaciones, entre las que se encontraban *El Imparcial* y *Heraldo de Madrid*, se sumaron a la idea de suspender las tiradas, absteniéndose *La Correspondencia de España*, y rechazando la misma *El Liberal*. Por su parte, los periódicos conservadores *La Época* y *El Tiempo* afirmaron que, a pesar de reprobar la censura previa, consideraban que esta medida constituía un “resorte de gobierno en circunstancias

---

<sup>690</sup> *El Imparcial*, “La previa censura”, 17 de Julio de 1898.

<sup>691</sup> Artículo de *El Nacional* reproducido en *El País*, “Votamos en pro”, 17 de Julio de 1898.

difíciles”,<sup>692</sup> por lo que pedirían a sus compañeros que no les hiciesen posicionarse. Tras el encuentro, los directores de *El Imparcial*, *El Tiempo* y *El Nacional* mantuvieron una reunión con Sagasta para expresarle el descontento de la prensa española por los graves inconvenientes observados en el ejercicio de la censura, especialmente en las desigualdades manifestadas entre los diarios, y reclamaron el restablecimiento de la legalidad constitucional.<sup>693</sup>

El presidente llevó el asunto al Consejo de Ministros donde se tomó la decisión de mantener las restricciones sobre la prensa periódica para “evitar a los periódicos el daño cierto que sufrirían de tener libertad completa en el examen de determinados asuntos”.<sup>694</sup> La administración liberal consideró que con la represión informativa se conseguía contener el lenguaje periodístico y evitar procedimientos innecesarios contra periodistas que habrían delinquido de no haberse impuesto la misma. En esta línea, el ejecutivo mantuvo que mientras subsistiera la suspensión de garantías constitucionales no podía hacerse una excepción a favor de la prensa, y por ello, se debía mantener el régimen en la forma establecida.<sup>695</sup> En lo relativo a las reclamaciones de la prensa periódica en torno a las deficiencias advertidas en el ejercicio de la censura, el gobierno prometió unificar el procedimiento y el criterio para juzgar los trabajos periodísticos que se iban a publicar.<sup>696</sup>

A pesar del estricto control informativo impuesto por el gobierno, la mayoría de los periódicos siguió manifestando su disconformidad con las medidas gubernamentales a

---

<sup>692</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del periodismo español*, p. 59.

<sup>693</sup> *La Época*, “La prensa y la previa censura”, 24 de Julio de 1898.

<sup>694</sup> *El Liberal*, “La prensa y la previa censura”, 24 de Julio de 1898.

<sup>695</sup> *El Siglo futuro*, “Consejo de Ministros del 23 de julio de 1898”, 24 de Julio de 1898.

<sup>696</sup> *El Liberal*, “Consejo de Ministros del 23 de Julio de 1898: las garantías constitucionales- La prensa”, 24 de Julio de 1898.

través de estrategias periodísticas con las que conseguían superar la barrera del lápiz rojo. Así pues, pese a que el objetivo de la censura era obstaculizar la labor periodística, ésta posibilitó un nuevo lenguaje periodístico que acrecentó la imaginación de los redactores a la hora de escribir sus críticas, y que evidenció la separación entre la prensa y el gobierno. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en *El Liberal*, que el 23 de julio insertó un manifiesto realizado por Sagasta en 1868, en que el presidente del gobierno defendía la libertad de prensa en estos términos: “La imprenta es la voz perdurable de la inteligencia. (...) Intentar esclavizarla es querer la mutilación del pensamiento, es arrancar la lengua a la razón humana. Empequeñecido y encerrado en los mezquinos límites de una tolerancia menguada, irrisión de un derecho escrito en nuestras Constituciones, y jamás ejercido había ido perdiendo, lentamente y por grados, brío, originalidad y vida. Esperemos que, rotas sus ligaduras, salga del seno de la libertad resucitado y radiante, como Lázaro de su sepulcro”.<sup>697</sup> Con esta simple, pero certera, alusión a las palabras del líder del ejecutivo, haciendo referencia a la importancia de la libertad de prensa en las sociedades democráticas, quedaba patente el diferente rasero con el que valoraba la clase política este derecho fundamental, dependiendo de si estaba en el gobierno o no.

#### **4. EL PROTOCOLO DE WASHINGTON: TRABAS SOBRE LA INFORMACIÓN PARLAMENTARIA.**

Pocos días después de la derrota naval de Cervera, Sagasta envió un mensaje a McKinley con el pretexto de no agravar más la situación, en la que declaró que España había sido vencida en la guerra, y solicitó el fin de las hostilidades entre ambos países.

---

<sup>697</sup> Manifiesto de Sagasta, ministro de Gobernación. 26 de octubre de 1868. *El Liberal*, “La prensa y Sagasta”, 23 de Julio de 1898, nº 6868.



En ella el jefe del gobierno liberal pidió a EEUU que diera a conocer los requisitos para llegar a la paz, que por unanimidad querían ya todos los sectores españoles. A finales del mes de julio, el gobierno americano presentó el Protocolo de Washington por el que se fijó, como una condición indispensable para llegar a la paz, la ocupación previa americana de las islas de Filipinas y Puerto Rico.

Con las nuevas circunstancias internacionales y los términos de la negociación de paz puestos sobre la mesa, algunas publicaciones se volvieron más combativas e insertaron informaciones acusando a la clase política del descalabro colonial español, a las que no sometieron a la previa censura. El partido liberal utilizó esta circunstancia para continuar con su política de represión informativa y publicó, el 10 de agosto de 1898, un nuevo bando militar, en el que se obligaba a los periódicos a remitir a la capitanía general todo tipo de noticias para ser examinadas.<sup>698</sup> La mayoría de las cabeceras españolas se posicionaron en contra de la medida, que, restringiendo más aún la libertad de prensa, dejó sin efecto la autorización concedida a los periódicos para publicar noticias de última hora, asumiendo los directores la responsabilidad sobre ellas. *El Imparcial* alegó que la injustificada disposición venía a añadir nuevas dificultades a la hora de elaborar un periódico, y lamentó haber enviado todas sus noticias para que las examinara la capitanía general, cumpliendo así con las órdenes de la autoridad militar, ya que, nuevamente, no le había servido de nada: “¿Por qué hemos de sufrir los demás las consecuencias de lo que no hemos hecho?”.<sup>699</sup>

Un día después de la entrada en vigor del bando, el periódico madrileño, mucho más crítico con el control impuesto por el poder público, incluyó un sarcástico artículo en el

---

<sup>698</sup> Bando del General José Chinchilla, Madrid, 10 de Agosto de 1898. *La Correspondencia de España*, “La Censura”, 11 de Agosto de 1898.

<sup>699</sup> *El Imparcial*, “La previa censura”, 11 de Agosto de 1898.

que comparó el “cofferdam”, un blindaje obstructor que utilizaba el ejército para cubrir sus grandes embarcaciones durante la contienda, con la severa represión practicada sobre la prensa por el gobierno de la Restauración. Con estas duras palabras afirmó: “Desde los eternamente imperforables estadistas del turno pacífico, hasta los perpetuamente insumergibles concejales de oficio y diputados provinciales, todo es *cofferdam* en la política y la administración. Todos se alivian con la consabida celulosa y no hay quien se hunda”.<sup>700</sup> Para el diario madrileño ese caparazón utilizado por la clase política le resguardaba de todos aquellos periódicos con opiniones contrarias, a los que se les imponía la estricta censura, y hacía que “la más leve calabaza periodística, el menor tapón de corcho tras el cual saltan nuestras mejor o peor embotelladas ocurrencias, corren tan inminente riesgo de irse a fondo como si fueran balas de cañón...o números de *El Motín*”.<sup>701</sup> Asimismo, *El Imparcial* declaró que la libertad de prensa estaba acabada en un sistema político como el de la Restauración, ya que “no hay medio que zozobre y definitivamente sumerja el barco defendido por el *cofferdam*, en el que se encuentran la administración y la política”.<sup>702</sup>

Entre los diarios de mayor circulación, *La Correspondencia de España* fue el único que defendió la medida liberal si con ella desaparecían las desigualdades entre los periódicos, ya que, muy especialmente en los últimos días, “las noticias suprimidas en nuestras columnas por la censura, vieron la luz en otros colegas, acaso porque estos no considerándolas censurables se abstenían de enviarlas a la capitánía general”,<sup>703</sup> y se manifestó a favor del régimen informativo impuesto por la administración liberal,

---

<sup>700</sup> *El Imparcial*, “El Cofferdam”, 13 de Agosto de 1898.

<sup>701</sup> Se aludió al semanario republicano *El Motín* tras la noticia de suspensión impuesta por su director por la censura soportada esos meses.

<sup>702</sup> *El Imparcial*, “El Cofferdam”, 13 de Agosto de 1898.

<sup>703</sup> Bando del General José Chinchilla, Madrid, 10 de Agosto de 1898. *La Correspondencia de España*, “La Censura”, 11 de Agosto de 1898, nº 14.800.

considerando que era una consecuencia natural de las extraordinarias circunstancias. En oposición a esta argumentación encontramos a *El Liberal*, que criticó duramente la norma de Chinchilla, principalmente, porque eso significaba que la represión informativa impuesta a la prensa iba para largo. El periódico aseguró que, mientras sus informaciones se tachaban “sin piedad”, los periódicos de la noche las publicaban “sin el menor inconveniente”,<sup>704</sup> poniéndose nuevamente de relieve las desigualdades producidas por el ejercicio de la censura. El rotativo fue especialmente crítico con Sagasta, al que consideró un gran humorista que quería probar “la paciencia de España”, después de que sus promesas iniciales al imponer las medidas excepciones no se hubieran cumplido. Era un recurso habitual entre los diarios madrileños centrar sus críticas en el presidente del Gobierno, ya que, en consonancia con su línea liberal a la hora de entender la libertad de imprenta y de diseñar la Ley de 1883, todo hacía suponer que se traduciría en una intervención informativa más leve y sin perjuicio para los órganos de opinión. Nada más lejos de la realidad. Con el paso de los meses, la represión impuesta a la prensa fue cada vez mayor con medidas restrictivas que se alejaban del fin con el que se había publicado el Real Decreto de 14 de julio. Un silencio informativo que contrastó con el momento que vivía la nación española, en el que era más necesario que nunca un régimen de publicidad y transparencia.

En oposición a las publicaciones de mayor circulación, *La Correspondencia Militar* salió en defensa de las autoridades militares y criticó a los periódicos que se quejaban de la censura, declarando que aquellos que “esgrimen el lápiz rojo no hacen más que cumplir su deber”.<sup>705</sup> Para el diario castrense fueron especialmente reprobables las protestas vertidas en *El Liberal*, por ser éste el único periódico de gran circulación que

---

<sup>704</sup> *El Liberal*, “Las promesas de Sagasta”, 11 de Agosto de 1898.

<sup>705</sup> *La Correspondencia Militar*, “La prensa y la censura”, 11 de Agosto de 1898.

se había negado a suspender su publicación tras la propuesta de *El Nacional*, disintiendo así de la opinión de la mayoría de la prensa, que consideraba la medida acertada y conveniente. En lo que sí mantuvo la misma línea que el resto fue en criticar las promesas de Sagasta al suspender las libertades constitucionales, y declaró que éstas habían sido una “tomadura de pelo” y la censura “un caprichoso juguete en manos del gobierno”.<sup>706</sup> Siguiendo esta argumentación, *La Época* señaló los perjuicios que causaba la censura llevada a cabo por el partido liberal, como el descenso de las tiradas de los periódicos de mayor circulación y sus consiguientes pérdidas económicas,<sup>707</sup> y trajo a colación unas palabras de *El Nacional*, que consideraba que la censura no era solo “molesta para la dignidad” de la prensa, sino también “ruinosa para sus intereses”.<sup>708</sup> Aun así, los conservadores no entraron a valorar la nueva medida, pero sí pidieron a los directores que no se reunieran más con Sagasta, porque esos encuentros solo servían para dar vueltas al mismo “tornillo” de la censura.

La situación llegó a ser especialmente precaria para aquellos periódicos que tenían una línea política contraria al sistema monárquico predicado por los dos partidos alternativos. El caso más llamativo los encontramos en el semanario republicano *El Motín*, que se autoimpuso la suspensión voluntaria de su publicación durante todo el periodo de censura militar, tras los continuos ataques sufridos en sus informaciones, sistemáticamente tachadas y suprimidas por la autoridad militar. En la carta dirigida a sus lectores, e insertada en *El Liberal* y el *Heraldo de Madrid*, el director declaró: “Tales cosas, ajenas a las instituciones, al ejército, a la guerra y al orden público me han tachado en el número llevado hoy a la fiscalía militar, que no quedaría contento de mí si

---

<sup>706</sup> *La Correspondencia Militar*, “La prensa y la censura”, 11 de Agosto de 1898.

<sup>707</sup> El diario conservador asevera que *El Imparcial* ha perdido más de 30.000 ejemplares diarios por la aplicación de la política de represión de Sagasta,

<sup>708</sup> *La Época*, “La previa censura”, 11 de Agosto de 1898.

no suprimiera la publicación de *El Motín* mientras rija la suspensión de garantías”.<sup>709</sup> Con el fin del estado de guerra, en febrero de 1899, el director confirmó que la razón principal que le había llevado a decidir la suspensión había sido la persecución sistemática del poder público, ya que, pese a ser de los diarios que menos habían hablado sobre la guerra, habían sido suprimidos artículos que nada tenían que ver con el conflicto, como uno que había sido copiado a *El Nacional*, o incluso otro sobre el reinado de Fernando VII.<sup>710</sup> Una vez más, se puso de manifiesto que los liberales imponían la censura militar para controlar todas las opiniones de los medios informativos que les resultaban incómodas, y no como un verdadero vehículo de defensa de los intereses del país.

Muchos diarios de Madrid y provincias se hicieron eco de la suspensión del semanario y dieron su apoyo al director, lamentando que “un defensor de la libertad tan vigoroso y consecuente como él, haya tenido que abrir un paréntesis en la publicación de su semanario”.<sup>711</sup> Especialmente crítico fue el, también, republicano *El País*, que a partir de la imposición de la censura pasó a llamarse *El Nuevo País*, simbolizando con este pseudónimo los efectos que tenía la política represiva gubernamental sobre su diario, ya que tras los innumerables escritos tachados que debían soportar a diario, muchas veces sin que éstos se refirieran al conflicto cubano, le hacían parecer un nuevo periódico.<sup>712</sup> Estas medidas autoimpuestas por las dos publicaciones republicanas como forma de protestar contra los efectos del lápiz rojo sobre sus páginas, se entendían por la intervención constante del gobierno, que conseguía desnaturalizar los periódicos al no poder ver éstos reflejada su verdadera y libre opinión sobre los asuntos que ocupaban el

---

<sup>709</sup> *El Liberal*, “La prensa y la censura”, 12 de Agosto de 1898.

<sup>710</sup> *El Motín*, “Suspensión de *El Motín*”, Febrero de 1899.

<sup>711</sup> *El Liberal*, “La prensa y la censura”, 12 de Agosto de 1898.

<sup>712</sup> *El País*, “¡Saquemos la cabeza!”, 10 de Febrero de 1899.

panorama político y social, hasta el punto de dificultar y hacer imposible su vida como medios de información.

El 12 de agosto de 1898, dos días después de la publicación del bando militar, Sagasta firmó el Protocolo de Washington por el que se suspendieron las hostilidades con EEUU, además de adquirirse el compromiso de la renuncia de todos los derechos españoles en la isla de Cuba, así como a la cesión de Puerto Rico y otras islas del Caribe. Los reproches por la precipitada decisión tomada por el líder del ejecutivo no se hicieron esperar, y una gran parte de la opinión pública, representada por los políticos y la prensa de oposición, especialmente la republicana, acusaron del fracaso de la guerra a la incapacidad de los gobernadores al no haber podido evitar el conflicto, así como a la ineptitud y poca preparación de los mandos militares. Además, acusaron al gabinete liberal de violar la Constitución, ya que habían firmado el protocolo de paz sin la autorización previa de las Cortes. Una de las cabeceras más críticas con la arbitraria decisión de la administración pública fue *El Liberal*, que insertó una columna en la que, copiando el esquema del artículo 55 de la Constitución, declaró: “incurren en la pena de cadena perpetua a muerte aquellos ministros de la Corona que autoricen decretos: enajenando, cediendo o permutando cualquier parte del territorio español”.<sup>713</sup>

Otros periódicos como *La Correspondencia de España* se quejaron de lo cara que había salido la guerra, y ahora la paz, para España, pero no responsabilizaron solo al partido liberal, sino que consideraron que la desastrosa situación era culpa de todos: “raro será el que no haya incurrido en alguno de los pecados capitales. (...) Acusadores y acusados

---

<sup>713</sup> El artículo 55 de la Constitución de 1876 hacía necesario que el Rey estuviera autorizado por una ley especial para “enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio español”. Sin embargo, en este caso no se violaba el precepto constitucional, ya que, en el artículo 54, el monarca quedaba autorizado para ratificar libremente la paz, “dando después cuenta documentada a las Cortes”.

pueden serlo todos”.<sup>714</sup> En esa misma línea, el general Polavieja escribió una carta en el *Heraldo de Madrid*, que fue censurada y posteriormente leída en el Congreso por Rafael Gasset, en el que el general acusó a los gobernantes “de ayer y de hoy” del desastre colonial por la ocultación sistemática de la verdad, e instó a purificar la administración pública con un cambio en el sistema, porque “persistir en no rectificar nuestro sistema político, sería condenarnos a una postración vergonzosa, y tras de ella a una muerte segura”.<sup>715</sup> Así pues, Polavieja era partidario de terminar con el corrupto sistema turnista ideado por Cánovas y Sagasta, fraguándose así, entre algunas personalidades del panorama político, un movimiento regeneracionista que influyó de manera decisiva en el siglo XX.

En este contexto sale publicado en *El Tiempo*, e insertado en los demás periódicos conservadores, el célebre artículo del conservador Francisco Silvela, quién exigió un cambio de rumbo en el mando gubernativo para combatir los males que afligían a la nación. El político conservador criticó duramente la indiferencia y la nula reacción del pueblo español por su falta de interés en la agonizante situación del país tras la derrota en Cuba. En esta línea, Silvela ironizó con la idea de que la despreocupada sociedad española veía con buenos ojos la censura previa, ya que atenuaba la cruda realidad con la que no querían involucrarse. El líder conservador lo declaró en estos términos: “En vano la prensa de gran circulación, alentada por los éxitos logrados en sucesos de menor monta, se ha esforzado en mover la opinión, llamando a la puerta de las pasiones populares, sin reparar en medios y con sobradas razones muchas veces en cuanto se refiere a errores, deficiencias e imprevisiones de gobernantes: todo ha sido inútil y con visible simpatía mira gran parte del país la censura previa, no porque entienda defiende

---

<sup>714</sup> *La Correspondencia de España*, “La enmienda necesaria”, 1 de Agosto de 1898.

<sup>715</sup> Congreso, 10 de Septiembre, Ortega y Gasset, cif. 1745-1749.

el orden y la paz, sino porque le atenúa y suaviza el pasto espiritual que a diario le sirven los periódicos y los pone más en armonía con su indiferencia y flojedad de nervios. No hay exageración en esta pintura, ni pesimismo en deducir de ella, como en el clásico epigrama, que una cosa tan bellaca no puede parar en bien”.<sup>716</sup> Son llamativas las críticas manifestadas por Silvela hacia la indiferencia que mostraban los ciudadanos, cuando en realidad la población española no era consciente de la dimensión real del problema colonial por la política restrictiva sobre la información impuesta por los dos partidos que se turnaron en el gobierno, verdaderos responsables de la ceguera de la sociedad española, que desconocía la realidad del conflicto cubano. En estas circunstancias, no se podía exigir al pueblo que se implicara y se revelara contra el descalabro del país, cuando la información que le había llegado durante los tres años de contienda había sido orquestada por el poder, y la prensa muda no había podido hacer nada más que callar.

En septiembre de 1898 se complicó más aún la situación de la prensa. Con motivo de la inminente reunión de las Cortes para aprobar el acuerdo de paz, el partido liberal, siguiendo con su política de restricción de noticias que pudieran dificultar su gestión política del conflicto, dictó una nueva disposición por la que exigía a todos los periódicos que los extractos de las sesiones hechos por la prensa debían pasar por la previa censura. Esta orden gubernamental respondía a la necesidad de Sagasta de llegar a un acuerdo en el Parlamento, que le diera la posibilidad de empezar cuanto antes los trámites para la negociación definitiva de la paz con EEUU, y entendía que el mismo se conseguiría con más agilidad si las sesiones parlamentarias estaban exentas de juicios y opiniones contrarias a la causa defendida. En la circular enviada por Chinchilla se

---

<sup>716</sup> *El Tiempo*, “Sin pulso”, 18 de agosto de 1898.



dispuso también que las notas taquigráficas que las publicaciones pudieran procurarse quedarían reducidas a lo que el criterio del gobierno considerara, ya que solo alcanzaría valor de documento parlamentario lo que publicara el Diario de Sesiones, que debía ser reproducido íntegramente.

Esta norma empeoró considerablemente las condiciones de la prensa, que, en lo que respecta a los debates parlamentarios, tenía que limitarse a la versión oficial del gobierno, lo que suponía un nuevo atentado contra la libertad de información. Diarios de distintas ideologías afirmaron que la nueva disposición, más que una traba para la prensa, era un ataque a la prerrogativa parlamentaria,<sup>717</sup> y que, tal y como declaró *La Época* con el acertado título: “¡No tocar al presidente!”, se pretendía tener unas Cortes “sin asomo de personalidad y mudas”.<sup>718</sup> A esta prohibición de opinar libremente sobre los debates formados en el Parlamento, única forma de comunicación entre los representantes de la nación y el pueblo español, indispensable en una sociedad democrática, se unía, además, que los diarios se encontraban constreñidos por el control preventivo y represivo que venía practicado el gobierno por medio de la censura militar y el gabinete negro. Así pues, en septiembre de 1898, la libertad de imprenta reconocida en la Ley de 1883 era casi inexistente para los diarios

Los periódicos no fueron los únicos que se quejaban de la situación creada por el gabinete liberal. En la primera sesión del Congreso, celebrada el 5 de Septiembre, se alzaron las voces de los partidos de la oposición, que denunciaron la falta de libertad para los medios de información. Entre ellos, Morote mantuvo que, de seguir la rígida intervención de la administración liberal, las publicaciones no podrían escribir sobre

---

<sup>717</sup> *El Imparcial*, “La censura y el Parlamento”, 2 de Septiembre de 1898.

<sup>718</sup> *La Época*, “No tocar al presidente”, 2 de Septiembre de 1898.

nadie. De la misma opinión era el director de *El Imparcial*, y también diputado, Rafael Gasset, quién lamentó la penosa situación de la prensa, y recriminó al gobierno que, con la nueva orden gubernamental, el periodista podía publicar lo que había oído, pero, a su vez, cabía la posibilidad de que el mismo fuera castigado por no ser los mismos conceptos que aparecían en el Diario de Sesiones, quedando los periódicos sometidos al arbitrio del gobierno, como ya ocurría con el sistema preventivo conservador anterior a la legislación de imprenta de 1883. Otros políticos se quejaron de los numerosos telegramas oficiales que no se habían dejado publicar a la prensa, y se unieron a las protestas de la prensa periódica en lo que respecta al desigual trato de los corresponsales, ya que, mientras que los españoles no podían transmitir noticias, los norteamericanos gozaban de libertad completa.

En contrapartida a estas opiniones, el gobierno liberal reconoció que se habían cometido errores a la hora de ejercer la censura a lo largo del conflicto, pero defendió la última orden impuesta a los periódicos en relación con los extractos de las sesiones parlamentarias. En palabras del ministro de Guerra, quedaba plenamente justificada la misma y, a pesar de las críticas, no había supuesto un atentado contra la libertad de información, ya que no prohibía a los diarios repetir lo que dijera el diputado en las Cámaras, sino que, únicamente, perseguía evitar el falseamiento de la verdad. Las declaraciones del ministro no mencionaron, sin embargo, la falta de independencia de los medios a la hora de emitir sus opiniones y comentarios acerca de lo que acontecía en las Cámaras, lo que claramente constituía un recorte del derecho constitucional de la libre manifestación de ideas.

Tras una nueva reunión celebrada el 6 de septiembre entre Sagasta y los directores de el *Heraldo de Madrid*, *El Nacional* y *El Liberal*, en la que éstos le hicieron llegar las quejas de la prensa sobre la imposición de esta nueva medida restrictiva, el general Chinchilla envió una carta en la que se suavizó el criterio que había de regir cuando los periódicos publicaran los extractos de las sesiones de las Cortes. Las nuevas orientaciones eliminaron la condición de que los diarios difundieran la versión oficial del gobierno, como se ordenaba en la circular, y permitieron que se pudieran anticipar a la misma, siempre que los conceptos que emitiesen fueran verídicos y respondieran fielmente a las manifestaciones que hicieran los oradores en el Parlamento.<sup>719</sup> Esta aclaración fue engañosa, ya que habilitaba a los periódicos para hacer los comentarios que considerasen oportunos, siempre que éstos se ajustaran a lo establecido por la censura, por lo que, en la práctica, todo lo que se dijera sobre las Cortes seguía estando sujeto al juicio discrecional del gobierno. Junto con la carta, además, las principales cabeceras españolas difundieron una advertencia del capitán general de Madrid, por la que se les obligó a guardar silencio y no hacer públicas las sesiones secretas hasta que el gobierno lo considerase oportuno, y se prohibió nuevamente publicar las opiniones que en ellas se emitieran,<sup>720</sup> por lo que la prensa continuaría sometida a un estricto control respecto a las cuestiones parlamentarias hasta su cierre temporal el 14 de septiembre de 1898.

El primer día de octubre el gobierno español comenzó en París las negociaciones de paz, un asunto del que no se pudieron ocupar las publicaciones por el mantenimiento de la censura militar. En estos momentos, los únicos medios que defendían la continuidad de la previa censura eran los diarios ministeriales, que consideraban que la misma no

---

<sup>719</sup> *El Imparcial*, “La censura”, 6 de Septiembre de 1898.

<sup>720</sup> Volante del capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. Sección de censura. *El Imparcial*, “La censura”, 7 de Septiembre de 1898.

estaba atacando a la libertad de la prensa. Frente a estas opiniones, cada vez eran más los periódicos que, a través de los pocos escritos que no eran tachados por el lápiz rojo, mostraban su enfado por la prolongación de la suspensión de garantías constitucionales. Uno de los más combativos con la administración liberal fue *El Nacional*, que acusó directamente a Sagasta de preferir una “política de misterio”, en la que los medios callaban “sin poder advertir de muchas cosas saludables y sin aliento para infundir en la opinión el vigor necesario para prevenir las desdichas futuras”.<sup>721</sup>

Días más tarde, el periódico se vio envuelto en una polémica por un suelto, “El reino de sarasa”, a través del cual *El Nacional* acusaba a Pascual Ribot, gobernador de Cádiz, de realizar actos denigrantes e infames, y éste, viéndose perjudicado en su honor, dirigió una carta al director del periódico, el diputado Adolfo Suárez Figueroa, solicitando el nombre del autor que le había dirigido esas palabras en su diario. Figueroa le respondió con una violenta réplica que no pasó el lápiz rojo manejado por el general Chinchilla, lo que le llevó a difundir una “Hoja Nacional Extraordinaria”, que firmó como diputado del Congreso para sortear así la rigurosa censura que existía en esos momentos. En ese número especial, Figueroa reprodujo la carta censurada dirigida a Ribot y dejó claro que el autor del suelto era él mismo.<sup>722</sup> Asimismo, añadió un artículo en el que criticaba duramente la censura llevada a cabo por Chinchilla, quién, a su vez, ordenó la inmediata suspensión de *El Nacional*, entregando el asunto al tribunal militar, que detuvo a Figueroa. Con el procesamiento del diputado, se produjo un debate en la opinión pública sobre la justificación de la medida adoptada por la autoridad militar, que muchos consideraban injustificada y extrema, y que suponía un nuevo atentado contra la prensa. No solo la prensa criticó la decisión tomada por el Consejo de Guerra, ya que

---

<sup>721</sup> *El Imparcial*, “La libertad necesaria”, 18 de Octubre de 1898.

<sup>722</sup> *El País*, “El suceso del día”, 22 de Octubre de 1898.

una gran mayoría de los políticos entendieron que en éste caso debía ser aplicada la inmunidad parlamentaria reconocida en el artículo 47 de la Constitución, que declaraba que los diputados y senadores no podían ser procesados ni arrestados sin previa resolución de la Cámara correspondiente. Finalmente, Sagasta entendió que existía una violación del precepto constitucional, y, de acuerdo con el mismo, levantó la suspensión de *El Nacional* y puso en libertad a su director.<sup>723</sup> Esta circunstancia produjo un conflicto muy grave entre el poder militar que ejercía la censura y el poder civil representado por el ejecutivo liberal, que había desacreditado públicamente al capitán general.

La polémica se agudizó días más tarde cuando el director del diario republicano *El Pueblo*, dirigido por el también diputado Blasco Ibáñez, difundió varios artículos criticando la gestión del gobernador de Valencia, uno de los cuales fue tachado por el capitán general de la región. El director, siguiendo los pasos de Figuerola, publicó una hoja extraordinaria sin someterla al previo examen de la autoridad militar, en la que reprodujo el artículo suprimido y arremetió contra el general Moltó, autor de la censura, quién, a pesar de la decisión tomada días antes por Sagasta sobre la medida del general Chinchilla, secuestró los ejemplares y detuvo al diputado. En este caso quedó de manifiesto, nuevamente, la falta de unidad de criterio entre los censores, ya que por un mismo hecho, dos diputados estaban sujetos a distintas medidas. Mientras que uno gozaba de exención de la pena, el otro se encontraba encarcelado por los mismos actos. Como se observa, los continuos cambios en la forma de practicar la censura llevaban a este tipo de arbitrariedades que dañaban cada vez más la libertad de información. Para *El Imparcial* el gobierno liberal era “víctima de sí mismo”, y no sólo había cometido un

---

<sup>723</sup> *El Nacional*, “Fueros parlamentarios”, 15 de diciembre de 1898.

error gravísimo cuando privó a la prensa de su libertad constitucional, sino que ese “tropezón gubernamental” había sido aun peor al cambiar el criterio respecto a la inmunidad parlamentaria. El periódico madrileño realizó una buena apreciación sobre el ejercicio de la política restrictiva de la administración liberal cuando observó que la misma no había evitado ningún daño a los intereses públicos, y que, sin embargo, había afectado seriamente a la prensa, que no era peligrosa “a no ser cuando está encadenada”, ya que con “el desdén de los lectores halla el más duro y más eficaz de los castigos”.<sup>724</sup> Finalmente, la cuestión de la inmunidad parlamentaria quedó definitivamente resuelta mediante una Real Orden aprobada el 14 de diciembre, por la que el ejecutivo liberal declaró que los senadores y diputados podían ser procesados y arrestados por actos ajenos al desempeño de su cargo si eran hallados “*in fraganti*”, o cuando, por virtud de la regia prerrogativa, no estuvieran reunidas las Cortes.

## **5. FIRMA DEL TRATADO DE PARÍS (10 DE DICIEMBRE DE 1898). PROLONGACIÓN DE LA PREVIA CENSURA.**

La firma del Tratado de paz entre España y EEUU, en París, el 10 de diciembre de 1898 puso fin al conflicto colonial con la renuncia a la soberanía y la propiedad de las islas de Cuba, Puerto Rico, las pequeñas Antillas, Filipinas y Wang. El fracaso del acuerdo quedó patente en las páginas de los periódicos españoles, que culpabilizaron a la clase política como única responsable de la pérdida del imperio colonial. Un convenio de paz desastroso y humillante, como definió *El Liberal*,<sup>725</sup> en el que influyó la dudosa preparación de los miembros de la comisión española en París,<sup>726</sup> y, muy especialmente,

---

<sup>724</sup> *El Imparcial*, “Ejemplo categórico”, 27 de octubre de 1898.

<sup>725</sup> *El Liberal*, “Manos a la obra”, 10 de Diciembre de 1898.

<sup>726</sup> La Comisión de políticos que representó a España en la Convención de París estaba formada por cuatro miembros del partido liberal, y quedó presidida por Montero Ríos, presidente del Senado. Sagasta

la premura con la que Sagasta aprobó las duras condiciones impuestas por EEUU en el Protocolo de Washington, con el objetivo de liquidar cuanto antes la nefasta actuación política desarrollada en el conflicto. Para los norteamericanos no pasó desapercibida la debilidad evidenciada por el gobierno español tras el fracaso de la escuadra de Cervera, lo que fue aprovechado por el presidente estadounidense para redactar un exigente acuerdo, que fue el preludio del fracaso del Tratado de paz. En lo que atañe a la libertad de prensa, el fin del conflicto colonial no trajo consigo el restablecimiento de las garantías constitucionales, por lo que, aunque las circunstancias políticas y sociales parecían permitir ya la vuelta a la normalidad, la prensa continuó sometida a la censura militar. Todo ello a pesar de las promesas del gobierno liberal, que había asegurado que con el fin de la guerra se daría fin a esa situación excepcional, teniendo después que prorrogarla hasta la firma de la paz.

Lejos de restablecerse las garantías constitucionales, durante el mes de diciembre se acentuaron los perjuicios causados por la confusa intervención gubernativa y militar en los medios informativos. Las molestias a los censores y censurados, el entorpecimiento en las tareas de los periódicos, las dificultades para abordar determinados asuntos, o el recelo de los periodistas al considerar que sería inútil su trabajo, eran algunos de los inconvenientes causados en las cabeceras españolas. A estos se añadía el pésimo efecto que creaba el mantenimiento sistemático de la suspensión de las libertades por un gobierno que se hacía llamar liberal, lo que fue muy reprochado por los diarios de mayor circulación. Así lo lamentaba *El Imparcial*, que se preguntaba: “si las circunstancias no son hoy favorables, ¿Cuándo lo serán?”, reprochando la actitud de

---

se mostró partidario de que otros políticos de diferentes ideologías representaran a España en la misma, pero el Duque de Tetuán y Silvela, rechazaron su propuesta.

Sagasta, quién en su historia de progresista y de liberal, “ha abierto un largo paréntesis”.<sup>727</sup>

Sin embargo, la máxima preocupación del periódico fue que la sociedad española no olvidara que se vivía en un estado de anormalidad, y que si no se trataban importantes cuestiones, no era por indiferencia o abandono de la prensa, sino porque todavía estaban vedadas a la pluma del escritor determinadas materias. *La Correspondencia de España*, que había mantenido una línea más moderada, también se quejó de que la libertad de prensa estuviera limitada por “los mayores padres que la engendraron”, y acusó a los liberales de utilizar el instrumento de la censura, no de forma extraordinaria, como ellos querían hacer creer a la opinión pública, sino como un instrumento al que acudían siempre que querían acallar las voces disidentes: “la indiscutible abominación de la previa censura, ni parece ya tanta abominación, ni tan indiscutible. El más avanzado partido la incluye por costumbre y habita, entre las instituciones del día. Alguna autoridad muy alta la deja viva para cuestiones y momentos determinados”.<sup>728</sup>

En enero de 1899 no solo los periódicos luchaban por recuperar sus libertades constitucionales, sino que, además, dentro del propio gobierno se alzaban voces que expresaban la necesidad de salir del estado excepcional en el que se encontraba España, al entender que su título de partido liberal y demócrata era incompatible con la suspensión de las garantías constitucionales.<sup>729</sup> Entre los ministros que no querían prolongar el estado excepcional se encontraban los dos a los que más incumbía el mantenimiento del orden público. Por una parte, el ministro de Gobernación, Ruiz Capdepón, quién se mostró convencido de que era el momento de reconocer todas las

---

<sup>727</sup> *El Imparcial*, “Una indicación y un recuerdo”, 18 de Enero de 1899.

<sup>728</sup> *La Correspondencia de España*, “La Libertad”, 25 de Enero de 1899.

<sup>729</sup> *La Época*, “Notas de última hora”, 24 de Enero de 1899.



libertades constitucionales, si bien consideró que la previa censura se ejercía con tanta suavidad y tolerancia que, en la práctica, la prensa decía todo lo que pensaba.<sup>730</sup> *El Imparcial* negó la veracidad de las afirmaciones del ministro, y puso como ejemplo la censura practicada en un artículo que se limitaba a informar sobre las defensas en Manila publicado en *La Época*, insistiendo en la idea de que la misma actuaba con todo rigor.<sup>731</sup> De la misma opinión fue *El País* cuando aseveró que, a pesar de las continuas quejas de la prensa española, la censura se practicaba casi con la misma dureza que en la época en la que había sido decretada, sin que hubiera ninguna razón justificativa de su persistencia.<sup>732</sup>

Por otra parte, Correa y García, ministro de Guerra, mantuvo la misma idea que Capdepón, y consideró que no había peligro para la nación si se restablecían las libertades, ya que él contaba con “medios sobrados” para sostener el orden público. Asimismo, planteó ante el Consejo Ministros la posibilidad de suprimir la previa censura, pero prolongar la suspensión de los derechos de reunión y asociación. Para *El Imparcial* esta hipotética situación resultaba aún peor que la actual, ya que, a pesar de eliminar la censura, se despojaba a la prensa de la garantía que representaba la ley civil, quedando sujeta a la autoridad militar.<sup>733</sup> Frente a las voces de estos dos ministros, la mayoría de los miembros del partido liberal pensaba que era necesario mantener en suspenso las libertades hasta que la situación de España se normalizara. El diario conservador *La Época* acusó directamente a Sagasta como el principal defensor del

---

<sup>730</sup> *La Correspondencia Militar*, “Maza de Fraga”, 1 de Febrero de 1899.

<sup>731</sup> *El Imparcial*, “La previa censura”, 4 de Febrero de 1899.

<sup>732</sup> *El País*, “Curarse en salud”, 4 de Febrero de 1899.

<sup>733</sup> *El Imparcial*, “Información política”, 30 de Enero de 1899.

aplazamiento constante del fin del estado de guerra y del recurso del lápiz rojo,<sup>734</sup> atribuyéndole los calificativos de “decadente, versátil y desconceptuado”.<sup>735</sup> Además, reprocharon la pasividad de los periódicos ministeriales, que seguían considerando al gobierno como demócrata y liberal, a pesar de que las garantías continuaban sin aparecer.

No fue hasta el 8 de febrero de 1899 cuando el gobierno español anunció su intención de levantar la suspensión de garantías constitucionales de forma definitiva. La noticia llegó acompañada de las polémicas declaraciones de Montero Ríos, presidente de los comisionados españoles en la convención de París, realizadas en la comunicación final que dirigió a Sagasta con las conclusiones de las negociaciones diplomáticas. Para Montero Ríos las publicaciones españolas habían tenido la culpa del fracaso colonial, ya que, durante todo el período de negociación con EEUU, se habían mostrado indiferentes ante el espíritu público. El representante español afirmó con rotundidad que sólo había encontrado el apoyo de los órganos más respetables de la prensa extranjera, y no de los periódicos peninsulares, a los que acusó de transmitir a la población española informaciones pesimistas, animando en todo momento al gobierno a que abandonara el archipiélago filipino. No resulta llamativo que Montero Ríos responsabilizara a los periódicos sobre el pésimo resultado obtenido en el acuerdo de paz, ya que, durante el conflicto cubano era una tónica constante que la administración pública culpabilizara a la prensa de sus errores gubernamentales. Sin embargo, estas declaraciones no tenían fundamento porque todas las cuestiones sometidas en la Conferencia de París habían estado permanentemente controladas por los censores, por lo que, esas publicaciones a

---

<sup>734</sup> En las cabeceras españolas se afirmó que la decisión de Sagasta era mantener esta situación excepcional con el pretexto de salvaguardar los intereses públicos por el surgimiento de movimientos carlistas.

<sup>735</sup> *La Época*, “El crack de la democracia”, 1 de Febrero de 1899; *La Época*, “El hombre de la libertad”; 30 de Enero de 1899.

las que echaba toda la culpa, habían sido amordazadas y no habían podido opinar libremente sobre lo acontecido.

Los ataques a los rotativos españoles por estas inmerecidas acusaciones no se hicieron esperar. En palabras de *El Imparcial*, todos aquellos que, como Montero Ríos, acusaban a la prensa del desastre colonial son “hombres públicos llenos de culpa”, que se han convertido en “fiscales de la prensa”.<sup>736</sup> Más crítico fue el *Heraldo de Madrid*, que reprochó la “torpeza” de los comisionados, quienes, para desahogarse del fracaso diplomático de París, culpaban a los periódicos, y afirmó que éstos “no merecen el tiempo para protestar por injusta imputación”. Para el diario madrileño lo esencial era que, afortunadamente para la libertad de prensa, “la impunidad en que una docena de hombres políticos han llevado a España el deshonor y a la ruina” acababa con la censura, y esperaban que, a partir del restablecimiento de la libertad, “cada culpa pregone su delito y cada picota reciba su correspondiente castigo”.<sup>737</sup>

Por su parte, *El Nacional* acusó a los comisionados españoles de ser “marionetas” movidas por los hilos del gobierno norteamericano, y desacreditó las palabras de Montero Ríos, alegando que debía agradecer a las publicaciones españolas por todo lo que habían callado. De la misma opinión fue el diario ultraconservador *El Ejército Español*, que reprochó la “teoría del silencio” que había sido impuesta por Cánovas y Sagasta durante los tres años de guerra, por haber propiciado que de la mudez guardada en las esferas oficiales partiera el ambiente engañoso con el que se había vivido el conflicto bélico. Por último, *El Correo Español* declaró que Montero Ríos no tenía a quien colgar la “vergonzosa” derrota de las negociaciones del Tratado, y por eso se la

---

<sup>736</sup> *El Imparcial*, “Para el Sr. Montero Ríos”, 8 de febrero de 1899.

<sup>737</sup> Artículo de *El Heraldo de Madrid* reproducido en *El Imparcial*, “La prensa y Montero Ríos”, 9 de febrero de 1899.

echaba a la prensa, pero se encontraba tranquilo porque, una vez que la prensa gozase de libertad, serían los periódicos los que enjuiciarían las calumnias gubernamentales, ahorcándolas “en un buen árbol y con una buena cuerda”.<sup>738</sup>

El 9 de febrero de 1899 después de siete meses de censura militar, se publicó el Real Decreto por el que quedaban restablecidas las garantías constitucionales en toda la Nación, dándose por finalizado el estado de guerra y la competencia de los tribunales militares para conocer delitos de imprenta.<sup>739</sup> En declaraciones realizadas por Sagasta, la imposición de la previa censura durante todo este tiempo había sido necesaria, ya que, gracias al lápiz rojo, el gobierno había logrado evitar las conspiraciones de todos los periódicos que eran enemigos del orden y las instituciones. El líder del ejecutivo liberal, que se consideraba un fiel defensor del derecho a manifestar libremente las opiniones, alegó que, en idénticas circunstancias, volvería a practicar la misma política de represión informativa llevada a cabo por su partido durante el último año, y sostuvo que, otros países en los que los medios gozaban de libertad de imprenta, como Francia, Inglaterra, Bélgica o Suiza, habían hecho lo mismo que España.<sup>740</sup> Con estas afirmaciones Sagasta pasó por alto, sin embargo, que la mayoría de las publicaciones españolas, especialmente las de mayor circulación, y los diarios conservadores, que, como los liberales, apoyaban el sistema monárquico de la Restauración, no criticaban la imposición de la censura en época de conflicto, sino las arbitrariedades que se habían cometido a la hora de ejercer la misma.

---

<sup>738</sup> Artículo de *El Correo Militar* reproducido en *El Imparcial*, “La prensa y Montero Ríos”, 9 de febrero de 1899.

<sup>739</sup> Real Decreto que restablece las garantías constitucionales. *Gaceta de Madrid*, 9 de Febrero de 1899, nº40, p. 505.

<sup>740</sup> *La Época*, “Florilegio de Sagasta”, 12 de Febrero de 1899.

A pesar de las continuas críticas a la clase política, por la censura practicada en los últimos meses, con el restablecimiento de la libertad muchos periódicos olvidaron la situación de silencio forzoso vivida, y se limitaron a informar del levantamiento de la suspensión de garantías. Un ejemplo lo encontramos en *La Correspondencia de España*, que afirmó recibir “muy contenta” el Real Decreto, y escuetamente declaró: “haga el presidente del Consejo de Ministros lo que mejor le parezca, y de por acabada la discusión del asunto”.<sup>741</sup> Otras publicaciones más críticas animaron a la población y a la prensa a alzar su voz contra la situación impuesta por el gobierno desde el 14 de Julio de 1898, que había tenido a todos los sectores españoles privados de las garantías constitucionales. *El Liberal* consideró que solo así se haría justicia, ya que, sin la protesta de la población española, quedaría justificada la arbitrariedad del poder público: “Este es el momento de precisar en voz alta con lo que se murmura y se comenta de oído a oído”.<sup>742</sup>

De la misma opinión fue *El Imparcial*, para el que estos meses había significado un “paréntesis de arbitrariedad ministerial” muy largo, llevado a cabo por unos “liberales empapados en el espíritu democrático”.<sup>743</sup> El diario madrileño preguntó a Sagasta si con ese “estado de afonía” impuesto a la opinión pública, y que tanto defendía el presidente, se había obtenido alguna ventaja para la Nación teniendo en cuenta el desenlace de la guerra. Del mismo modo, reprochó la forma de practicar la censura, y contundente declaró que, aunque en el pasado se había ejercido con “mayor rigidez y violencia”, jamás se había practicado con la “torpeza” de ahora. Entre las innumerables arbitrariedades cometidas por el gobierno liberal, que el periódico madrileño dejó entrever, se encontraba la falta de criterio a la hora de hablar de los ministros y sus

---

<sup>741</sup> *La Correspondencia de España*, “Una cuestión muy grave”, 10 de febrero de 1899.

<sup>742</sup> *El Liberal*, “ESTA ES LA HORA”, 9 de Febrero de 1899.

<sup>743</sup> *El Imparcial*, “La suspensión de la censura”, 10 de febrero de 1899.

actos, asegurando que Sagasta permitía decir de su persona cuanto se quisiera, mientras otros consejeros responsables, como el de Marina, se habían declarado inviolables e indiscutibles. Además, *El Imparcial* señaló que entre los censores no había existido una pauta general, y que las ordenes del gobierno a las autoridades militares habían sido distintas según el distrito y el día, por lo que, en muchas ocasiones, las informaciones difundidas en la edición de provincias no se habían dejado reproducir en los diarios madrileños. El diario también hizo hincapié en la importancia de que la población española fuera consciente de la situación, y se quejó de que, al no haber podido dejar blancos en el lugar de lo tachado, ni hacer alusión alguna a la censura, el público se había olvidado de la misma.

En opinión de *La Época*, la gran equivocación del gobierno liberal había sido dejar la censura en manos de los militares, ya que los oficiales carecían de la formación necesaria para desempeñar el cargo de censores, como tampoco daba buenos resultados “un periodista puesto al frente del escuadrón o de una campaña, que tampoco daría buenos resultados.”<sup>744</sup> Para el diario conservador ésta fue la causa principal del mal funcionamiento de la política de represión informativa de los liberales, ya que los militares no estaban capacitados para discernir en cuestiones diplomáticas y políticas lo que era peligroso de lo que podía publicarse, dejando pasar manifestaciones graves, o suprimiendo con frecuencia noticias y comentarios insignificantes, e incluso favorables al interés público.

El punto que aborda este diario conservador es interesante, ya que, aunque en un principio parece complicado determinar dónde acababa el lápiz rojo y dónde comenzaba

---

<sup>744</sup> *La Época*, “Epitafios de la censura”, 10 de Febrero de 1899.

la mano que lo movía, resulta evidente que, durante estos meses, el gobierno utilizaba a los oficiales para acatar sus órdenes. A esto hay que añadir que la censura era una medida política ajena a las funciones del ejército, por lo que la responsabilidad última del mal ejercicio de la misma la tuvo el gobierno liberal, que es quién debía dirigir constantemente el buen funcionamiento y el ejercicio de los censores. En este caso, las instrucciones contradictorias, poco claras e inconstantes del poder público a las autoridades militares hicieron que la represión gubernamental de la guerra fuera arbitraria y desigual para los medios informativos. No cabe duda, como ya hemos ido diciendo a lo largo del capítulo, que la administración liberal decretó la previa censura para ocultar las vergüenzas y miserias políticas, y le sirvió de pantalla para tapar los desaciertos gubernamentales durante toda la contienda internacional. En este esquema, los oficiales del ejército sirvieron dóciles al gobierno, como simples instrumentos de los que hacía uso el poder para manejar la información que quería que conociera la sociedad.

Por otro lado, *El Siglo Futuro*, de acuerdo con su línea católica, lanzó sus críticas a la “previa censura laica” por permitir blasfemias contra la Iglesia, y autorizar “los mayores errores y despropósitos”. El diario católico lamentó que todas las cuestiones que consideraba Cánovas como inviolables, hubieran estado defendidas por el lápiz rojo de los liberales, y lo estuvieran en esos momentos “por el ministerio fiscal”.<sup>745</sup> En este punto, aprovechó para reprochar al gobierno liberal que la situación de la prensa fuera aun peor cuando no se practicaba la censura, ya que todo lo que se escribiera, y no le gustara al gobierno liberal, éste lo secuestraría, “haciéndonos perder toda la tirada que la censura nos ahorra, y la composición de todo lo que haya en el número recogido,

---

<sup>745</sup> *El Siglo Futuro*, “Esbozos y rasguños”, 10 de Febrero de 1899.

además de lo denunciado, que la censura nos ahorra también, y el fiscal del gobierno puede llevarnos al tribunal y el tribunal condenarnos a los que le parezca justo con arreglo al Código Penal. (...) ¿Ya somos libres? Pues viva la libertad!”<sup>746</sup>

Sin duda, los más críticos con las medidas represivas impuestas a la prensa fueron los diarios que más las habían sufrido durante estos meses, que tampoco vieron con buenos ojos la situación de libertad de prensa existente en la Restauración, donde, a falta de censores, quedaban fiscales, “y a falta de tachones previos nos aguardan las denuncias consiguientes”.<sup>747</sup> Para *El País* la censura era incompatible con la vida de un periódico, pero, como no había elección, se habían resignado a “morir”. A pesar de la misma, el diario republicano declaró que “el mucho callar nos aumentó el deseo de decirlo todo, y todo lo diremos sin ambages, sin rodeos, sin atenuaciones, como lo dijimos siempre”.<sup>748</sup> Para el periódico uno de los momentos clave durante esos meses en los que la prensa había perdido “los pocos prestigios que le quedaban” fue cuando los diarios rechazaron la propuesta de *El Nacional* de suspender todas las publicaciones, y declaró que la imposibilidad de hablar no podía hacer enmudecer a la opinión pública. En la misma línea que otras cabeceras españolas, criticó la arbitrariedad con la que se había llevado a cabo la censura, especialmente rigurosa con su diario, donde se habían tachado párrafos de los Códigos militares que habían sido reproducidos por un periódico militar sin el menor inconveniente. También denunció la suspensión de la que había sido objeto su diario por publicar con orla de luto el Protocolo de paz. Como medida de protesta, tal y como sugería *El Liberal*, el periódico republicano reprodujo algunos textos que habían sido marcados por el lápiz rojo durante esos meses, como columnas sobre la historia, la higiene pública, la iglesia, los soldados y la moral, o incluso, nimiedades como la

---

<sup>746</sup> *El Siglo Futuro*, “¿Ya somos libres?”, 11 de Febrero de 1899.

<sup>747</sup> *El País*, “¡Saquemos la cabeza!”, 10 de Febrero de 1899.

<sup>748</sup> *El País*, “Nunca es tarde...”, 10 de Febrero de 1899.



obligación de cambiar “escándalo” por “suceso”, y declaró que en ellos, mejor que en todo lo que se podía escribir, “está todo el proceso del régimen al que hemos sido sometidos”.<sup>749</sup>

Con el levantamiento de la suspensión de garantías constitucionales también reapareció el semanario republicano *El Motín*, otro diario muy perjudicado por la censura impuesta por el gobierno liberal, para el que la pasividad de la prensa “ha rayado en heroísmo”.<sup>750</sup> Esa actitud de indiferencia y inactividad de los medios se manifestó tras el restablecimiento de las garantías constitucionales. A pesar de las continuas críticas a la gestión del gobierno y a la censura impuesta a la prensa a través de diferentes abusos y arbitrariedades hacia los periódicos, parecía que con el levantamiento de la suspensión de garantías había llegado la calma y la normalidad, y muy pocos diarios se acordaban del ataque a su libertad de información sufrido días atrás. Esta situación es sorprendente, ya que, durante los tres años de contienda, habían sido numerosas las quejas manifestadas en las columnas periodísticas que reclamaban, tanto al gobierno conservador como al liberal, el restablecimiento de su libertad, o que lamentaban no poder hablar con claridad de todo lo que acontecía en Cuba. En esta línea de pensamiento se mantuvo *El País*, para el que el hecho de que la opinión pública no tuviera conciencia de su infortunio ni “nervio para sentir el dolor de heridas que aun sangran”,<sup>751</sup> resultaba aun mucho más triste que haber perdido el imperio colonial sin lucha y sin gloria. El periódico expresó su asombro por esta situación, al igual que los “inocentes lectores que esperaban con impaciencia que se descorriese el velo de tanto misterio propiciado por el gobierno”, y no se explicaba porque los periódicos españoles no volvían a tomar los sucesos desde el momento en el que se había dado comienzo a la

---

<sup>749</sup> *El País*, “Nunca es tarde...”, 10 de Febrero de 1899.

<sup>750</sup> *El Motín*, “¡Aquí estoy, compañeros!”, Febrero de 1899.

<sup>751</sup> *El País*, “Lo que hace falta”, 12 de Febrero de 1899.

censura. Así de contundente declaró: “Hace falta que volvamos hacia atrás, no es posible que siete meses de esclavitud nos hayan hecho perder la memoria y queden impunes delitos de alta traición y lesa patria. Si queremos regenerarnos y salvarnos, hace falta que comencemos a hacer justicia”.<sup>752</sup>

## 5. CONSIDERACIONES FINALES

Se puede afirmar que la intervención de la información en determinados conflictos internacionales es, en algunas ocasiones puntuales, necesaria para no facilitar a los enemigos de guerra datos técnicos muy concretos sobre las operaciones militares que se van a realizar. Sin embargo, muchos son los ejemplos que tenemos en los que, en la práctica, el poder público abusa indiscriminadamente de esta facultad de restringir cierta información bélica, llegando a imponer un silencio forzoso en todo aquello que no les conviene que sea conocido por la sociedad.

Esto fue exactamente lo que ocurrió en la Guerra de Cuba, donde los dos partidos, conservador y liberal, que asumieron la cartera presidencial, se desligaron de las líneas marcadas por la Ley de Policía de Imprenta de 1883, e impusieron una política de represión informativa que dejaba patente la importancia de la supervivencia del propio sistema de la Restauración, por encima del reconocimiento efectivo del derecho fundamental a escribir e informar libremente. La peculiaridad del sistema de la Restauración con los constantes cambios de ideología en el partido gobernante, evidenció que, pese a la diferente visión que tenían los conservadores y los liberales sobre la libertad de imprenta, en la práctica, ambos utilizaron todos los instrumentos que

---

<sup>752</sup> *El País*, “Lo que hace falta”, 12 de Febrero de 1899.

se encontraban a su alcance para poner un bozal a todos los periódicos que difundían informaciones contrarias a sus intereses. Los mecanismos fueron muy diversos. Algunos eran de conocimiento público, como las orientaciones a los periódicos para que no informaran sobre determinadas materias, la obligación de publicar las noticias de origen oficial o la imposición de la censura militar; otros eran más sibilinos, como los cortes en la comunicación o la interrupción de telegramas, la eventual suspensión o incluso supresión de los periódicos, las amenazas a los vendedores o las subvenciones del gobierno mediante fondos públicos con las que se compraba el silencio de algunos periódicos. Estos instrumentos de control pasaban desapercibidos a los ojos de los ciudadanos, pero no a los de la prensa, que veía cómo cada vez se reducía más su derecho a escribir libremente.

Como hemos analizado a lo largo del capítulo, la actitud de las cabeceras españolas, que durante el conflicto se mostraron sensacionalistas, imprudentes y, en muchos casos, exageradas en sus informaciones, ante la política de censura llevada a cabo por ambos gobiernos, fue diversa. Como es lógico, los diarios ministeriales, siguiendo con la línea política de su partido, defendieron la censura practicada por el gobierno al que servían de portavoz. El resto de las publicaciones españolas, especialmente las de mayor circulación, que, como los ministeriales, apoyaban el sistema monárquico de la Restauración, no criticaron la imposición de la censura en época de conflicto, sino las desigualdades, principalmente entre los corresponsales españoles y los extranjeros, y arbitrariedades que se habían cometido a la hora de ejercer la misma. Este punto es esencial para comprender la actitud de estos periódicos ante la intervención informativa practicada por el poder público, ya que los diarios de mayor circulación de la época consideraban positiva la imposición de ciertas trabas en las informaciones bélicas,

porque era beneficiosa para salvaguardar los intereses nacionales. Por tanto, de lo que se quejaban era de la mala gestión de la censura militar impuesta por la administración pública, y de los múltiples atropellos que habían cometido ambos gobiernos a la hora de ejercer el control informativo.<sup>753</sup>

Los reproches se centraron en las caras visibles de la imposición de la censura, especialmente en la figura de Sagasta ya que, en consonancia con su postura liberal a la hora de entender la libertad de imprenta y de engendrar la Ley de 1883, se entendía aún menos la política de represión informativa adoptada en el conflicto colonial. Especialmente, la prolongación injustificada de la misma cinco meses después de finalizar las hostilidades, cuando la razón fundamental apuntada por el gobierno liberal era preservar los intereses nacionales de informaciones que pudieran favorecer al enemigo. En virtud de las críticas vertidas por la prensa de la época, la previa censura aprobada por la administración liberal en los últimos compases de la guerra se consideró el peor atentado contra la libertad de prensa desde que se aprobara la Ley de Imprenta en 1883. Ésta medida simbolizó la desconfianza del gobierno de la Restauración en su propia gestión política, ya que, desbordado por las circunstancias internacionales, la única vía de escape que encontró fue tener bajo llave la opinión de los periódicos. Con el transcurso de los acontecimientos, no cabe duda de que la imposición de la censura militar, una vez que España ya se había rendido a la superioridad de la armada estadounidense, se utilizó como trinchera, para que las autoridades encontraran cobijo, y así poder ocultar los desaciertos de su gestión gubernamental.

---

<sup>753</sup> Al respecto de este asunto, decía *El Liberal*: “Desde que comenzó la guerra hemos suprimido aquí los términos medios y multitud de críticos y censores pasan de un salto de la temperatura de ebullición a la del hielo fundente”. *EL Liberal*, “Convencionalismos”, 28 de marzo de 1897.

La postura adoptada por los periódicos republicanos fue quizá la más acorde a las circunstancias. Éstos fueron los más críticos con el control ejercido por ambos gobiernos durante los tres años de conflicto, y no dudaron en denunciar la arbitrariedad con la que se había llevado a cabo la censura, especialmente rigurosa con sus diarios, donde se habían tachado párrafos de noticias que habían sido reproducidas por otros diarios sin el menor inconveniente. Desvinculándose de la opinión general de la prensa, consideraban que, en tiempos de guerra, no debía existir represión informativa gubernamental, ya que era justo entonces cuando la nación española estaba viviendo uno de sus peores momentos y, por tanto, era fundamental que el Estado fuera transparente con la sociedad. Esto solo se conseguía con la plena libertad, en la que cada ciudadano, independientemente de su condición, fuese representante o no de la nación, tuviera la posibilidad de emitir por escrito sus ideas.<sup>754</sup>

En definitiva, con el fin de la guerra y la pérdida de las colonias españolas, se puso de manifiesto que la política restrictiva de ambos partidos no evitó ningún daño a los intereses públicos, y, sin embargo, perjudicó seriamente la libertad de la prensa. El silencio que impuso el gobierno a los periódicos modificó la función natural de los medios informativos como reflejo de la realidad que estaba aconteciendo en Cuba, transformándolos en simples instrumentos subordinados a los intereses políticos que transmitían una mera ficción de la situación real, lo que contribuyó a aumentar el desasosiego con el que se vivieron los años siguientes en España.

---

<sup>754</sup> *El País*, “La censura”, 23 de Octubre de 1898.





## **TERCERA PARTE**

# **IMPEDIMENTOS EN EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX**





# **1. EL REGENERACIONISMO ESPAÑOL Y SUS EFECTOS EN LA PRENSA**

## **1. DEBATE EN TORNO A LA DECADENCIA POLÍTICA Y SOCIAL**

Tras la pérdida de colonias sufrida en 1898, la nación española se encontraba desorientada y sumida en una total confusión social y política, provocada, en gran medida, por las campañas de prensa orquestadas por los dos partidos gubernamentales, que llevó a alimentar la esperanza de los ciudadanos de una victoria que nunca llegó. La frustración de la opinión pública se tradujo en una profunda crisis de confianza sobre las posibilidades del país para encarar el nuevo siglo, generándose un debate sobre el verdadero origen de la decadencia española,<sup>755</sup> que a su vez impulsó un espíritu regeneracionista entre todos los sectores de la población. La necesidad de regeneración no fue enteramente provocada por el desastre de 1898, si bien éste reactivó el ánimo reformista que se venía fraguando años antes entre algunos sectores sociales, buscaba sanear el sistema político y la economía para conseguir que, por fin, España se equiparara al resto de países europeos.

Este espíritu de transformación lo tenían la mayoría de fuerzas políticas y sociales, aunque los medios para conseguirla y el resultado final pretendido diferían entre unos y otros. La principal causa de esta diferencia se encontraba en que no existía acuerdo sobre el origen de la responsabilidad de la crisis de identidad que azotaba a la nación española. Mientras que para la clase política ésta recaía en la sociedad y en sus órganos

---

<sup>755</sup> La decadencia como corriente literaria tuvo una presencia destacada en la vida cultural europea del momento histórico en el que nos encontramos, pero el espectacular desarrollo industrial y tecnológico de los países occidentales hizo más patente el atraso español respecto a Europa. FRANCISCO FUENTES, J., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., *Historia del periodismo español*, p. 167.

de opinión, que habían contribuido a dejar a España “sin pulso”, como la definió Silvela en un célebre artículo periodístico,<sup>756</sup> para una parte de la opinión pública el problema residía en el régimen político y social vigente. Esta corriente estuvo representada por influyentes intelectuales, liberales y de izquierdas, que hallaron en las masas populares y obreras sus máximos aliados, creando un espíritu de inconformismo e inquietud entre la sociedad, que marcó toda la trayectoria política del primer tercio de nuestro siglo.

En lo que respecta al contexto político de los primeros años posteriores al desastre, tras el levantamiento de la suspensión de garantías la desorientada Nación continuó gobernada por Sagasta hasta el 4 de marzo de 1899. En esa fecha se constituyó una nueva cartera ministerial, colocada a manos de Francisco Silvela, uno de los máximos exponentes del regeneracionismo característico de estos primeros años del siglo, aunque no el único. A éste le siguió el nombramiento de Azcárraga, que el 28 de octubre de 1900, apenas constituido su gobierno, tuvo que enfrentarse a un levantamiento de armas protagonizado por un grupo de carlistas en Barcelona, motivo por el cual se decretó la suspensión de garantías en todo el país el 1 de noviembre de 1900. El gobierno conservador tuvo numerosos problemas, y, tras una campaña periodística de corte liberal, que se había iniciado con tintes anticlericales, pero que poco a poco se extendió al partido conservador, el presidente de Gobierno tuvo que dimitir el 25 de febrero de 1901, sustituyéndole Sagasta, en el que fue su último mandato gubernamental.

---

<sup>756</sup> Con estas palabras se refirió Silvela a la situación de España tras la guerra: “Quisiéramos oír esas o parecidas palabras brotando de los labios del pueblo; pero no se oye nada: no se percibe agitación en los espíritus, ni movimiento en las gentes. Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal: discurrirán sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste alguna atención a asuntos públicos observa este singular estado de España: dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso”. Este artículo, publicado en *El Tiempo* el 16 de agosto de 1898 constituyó una de las primeras expresiones escritas del “regeneracionismo”.

La economía y sociedad española también sufrieron algunos cambios tras el conflicto internacional. Pese a que la estructura económica del país no varió, ya que, durante estos años, España seguía siendo fundamentalmente agraria, las dificultades económicas en algunos sectores industriales, donde los niveles de vida eran muy bajos y los costes de producción elevados, marcaron la aparición de un verdadero capitalismo que endureció las relaciones sociales entre los trabajadores y los patronos. Esta conciencia social de las clases obreras sirvió de plataforma para presionar a las instituciones estatales, y se caracterizó por un creciente protagonismo social y político que tuvo su culminación en 1910, año en el que se creó la organización anarco-sindicalista CNT, Confederación Nacional de Trabajadores, lo que coincidió con la obtención por el partido socialista de representación parlamentaria por primera vez en la historia. No obstante, la gran evolución del movimiento obrero no se puede separar del importante papel que jugaron durante esta etapa los nacionalismos y regionalismos, especialmente el catalán.<sup>757</sup> El movimiento catalanista fue una de tantas fórmulas regeneracionistas que existieron en la época como crítica al régimen político, pero adquirió una gran importancia al convertirse en la primera fuerza que consiguió actuar con autonomía, en las elecciones de 1907, respecto al fenómeno del encasillado característico de estos años.

---

<sup>757</sup> Como veremos en los próximos capítulos, la Ley de Jurisdicciones tuvo su origen en la intolerancia mostrada por algunos miembros de la clase política y altos mandos militares ante el desarrollo de los nacionalismos periféricos.

## 2. EL INICIO DEL REINADO DE ALFONSO XIII

### 1. INESTABILIDAD POLÍTICA EN LOS PARTIDOS MONÁRQUICOS

La derrota en la guerra de Cuba no produjo la reacción antimonárquica por la que tanto habían luchado los republicanos, y tres años más tarde, el 17 de mayo de 1902, comenzó una nueva andadura en la historia de España con el reinado de Alfonso XIII, quién fue declarado mayor de edad al cumplir los dieciséis años.<sup>758</sup> La proclamación del nuevo monarca coincidió con la última etapa del gobierno de Sagasta, que dejó el cargo en diciembre de ese mismo año, un mes antes de morir, cediendo el turno a los conservadores que permanecieron en el poder hasta 1905. Durante estos primeros años, de 1902 a 1914, que marcaron el inicio de la monarquía, nos encontramos con una serie de factores que condicionaron el transcurso de la sociedad y la política del período, y que fueron, a su vez, determinantes para entender la evolución de la libertad de prensa. En primer lugar, la población española creció exponencialmente, de los 18 millones de habitantes en 1900 a los 23 millones en 1910. Esta circunstancia hay que ponerla en paralelo con el grave problema del analfabetismo que seguía afectando a más de la mitad de los ciudadanos españoles, lo que nos situaba en la cola de los países europeos. El alto índice de analfabetismo, junto con el bajo nivel de vida de gran parte de la sociedad, fueron dos variables fundamentales que pusieron freno al desarrollo de la prensa en nuestro país. Otro factor determinante fue el crecimiento económico del

---

<sup>758</sup> Uno de los historiadores españoles que más han investigado sobre Alfonso XIII, Carlos Seco Serrano, ha apuntado que Alfonso XIII tenía un espíritu regeneracionista previo a convertirse en el rey de España, como lo demuestran sus anotaciones previas a su proclamación. Tanto es así que los intelectuales más conocidos de su tiempo vieron en él esta posibilidad regeneracionista. Algunas de sus obras que han servido de guía en este capítulo: SECO SERRANO, C., *Alfonso XIII y la crisis de la Restauración*, Barcelona, Horas de España, 1969; SECO SERRANO, C., *La España de Alfonso XII: el Estado, la política y los movimientos sociales*, Madrid, Espasa Calpe, 2002; TUSELL GÓMEZ, X., *La España del Siglo XX: Desde Alfonso XIII a la muerte de Carrero Blanco*, Barcelona, Dopesa, 1975.

sector agrícola, que contrastó con la crisis industrial ocasionada por la guerra colonial, esencialmente en el mercado textil catalán. Este problema fue origen de abundantes conflictos sociales protagonizados por la clase trabajadora, originándose un clima de inestabilidad durante toda esta etapa.

Desde el punto de vista político hay que destacar que en el transcurso de los primeros años de reinado de Alfonso XIII, tanto en el partido conservador como en el liberal se dieron dos características comunes: la división interna en ambas fuerzas políticas por la falta de un líder claro, originada en las filas conservadoras por el asesinato de Cánovas en 1897 y en el partido liberal por la muerte de Sagasta en 1903, así como la consecución de breves gobiernos. En la etapa conservadora, de 1902 a 1905, cuatro fueron los dirigentes que ocuparon la jefatura ministerial: Silvela, Fernández Villaverde, Maura y Azcárraga, haciéndose patente la separación entre los miembros del partido con los dos primeros. Por un lado se encontraban los seguidores de la política de Silvela, que pretendía regenerar el país apelando a la unidad patriótica del pueblo español con el objetivo de crear nuevos enclaves coloniales. Entre los puntos clave de su programa político, muchos de ellos llevados a cabo por Maura, que ocupaba el cargo de ministro de Gobernación, se encontraba su apoyo absoluto a la Iglesia católica, la reforma profunda del Ejército, así como su propósito de reconocer de forma real y efectiva el sufragio como medio para que todos los ciudadanos pudieran participar de las decisiones gubernamentales. Silvela permaneció en el poder hasta el 18 de julio de 1903, cuando fue sustituido por Villaverde, quién era más práctico que su antecesor, y sus medidas giraron en torno a la recuperación española tras el déficit económico creado por la guerra.

Tras la crisis de Villaverde a finales de 1903, la presidencia de Gobierno fue ocupada por Antonio Maura, quién, incorporado a las filas conservadoras desde 1902, consolidó su autoridad interna dentro del partido, del mismo modo que fortaleció la imagen de la monarquía española. Maura promovió una política modernizadora y más liberal que sus compañeros, con la que intentó suprimir viejas costumbres que dañaban la libertad de prensa como los “fondos reptiles”. Durante su primer mandato fue objeto de muchas críticas periodísticas: desde los periódicos liberales que no le perdonaban su abandono del partido liberal; las publicaciones de tendencia anticlerical y republicana; incluso, los periódicos de Madrid criticaron al político por permitir el uso del catalán en los correos y telégrafos nacionales, medida con la que tampoco logró que las publicaciones catalanas estuvieran de su parte.

Después de un fugaz gobierno de Azcárraga les tocó el turno a los liberales que, desde la muerte de Sagasta, no contaba con un líder claro. La crisis interna del partido se vio reflejada durante todo su mandato, que abarcó desde finales de 1905 a principios de 1907, y en el que se fueron turnando hasta cuatro dirigentes políticos, Montero Rios, Moret, López Domínguez y el Marqués de Vega de Armijo. Este período de inestabilidad política coincidió con la ampliación del poder militar en los asuntos de imprenta, gracias a la firma de la Ley de Jurisdicciones de 1906, y un aumento de los atentados anarquistas, que crearon una gran alarma entre la población española, especialmente en Barcelona. Entre todos ellos hay que destacar el ataque perpetrado el 31 de mayo de 1906 contra Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia, cuando regresaban de contraer matrimonio, que causó varias víctimas civiles y dejó de manifiesto la ineficacia policial característica de aquellos años.

## 2. LOS GOBIERNOS LARGOS DE MAURA Y CANALEJAS

Maura ocupó de nuevo la jefatura del Gobierno el 25 de enero de 1907, afianzándose como líder del partido conservador. En su “gobierno largo” el político intentó realizar una “revolución desde arriba”, consiguiendo mejorar la imagen de España en el exterior, así como la de la monarquía, que gozó de más popularidad que en años anteriores tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Uno de sus grandes propósitos fue revitalizar el régimen político combatiendo el caciquismo que impregnaba el sistema de la Restauración, consiguiendo así que los ciudadanos formaran parte de la vida política del país. Un planteamiento que se vio ensombrecido por una serie de decisiones muy polémicas que terminaron por desembocar en la crisis de su obra política. Como analizaremos en los capítulos siguientes, el dirigente político tuvo que enfrentarse a una encarnizada campaña de prensa motivada por su Proyecto de ley antiterrorista en 1908, aunque fueron los sucesos de la semana trágica los que finalmente acabaron con su mandato. El grave error del líder conservador, mal aconsejado por su ministro de Guerra Linares, que movilizó a los reservistas en julio de 1909 para acudir a la guerra de Marruecos, desembocó en una insurrección popular en Barcelona con tintes antibelicistas y anticatólicos. La cruel represión impuesta por Maura, unida a la polémica ejecución de Ferrer, a la que se oponían algunos dirigentes de su propio partido como Eduardo Dato o Sánchez Guerra, propició una gran tormenta política que alcanzó gran repercusión internacional.

La caída del político se produjo cuando Maura se presentó a las Cortes el 18 de octubre de 1909, pocos días después del fusilamiento de Ferrer. Apoyándose en la alianza liberal-republicana formada tras los graves sucesos de Barcelona, Moret encabezó una protesta contra Maura y su ministro de gobernación, Juan de la Cierva, negándose a

participar en las comisiones parlamentarias, y rompiendo, así, con la alianza pacífica de turnos que existía entre los dos partidos monárquicos. Las fuertes críticas nacionales e internacionales al líder conservador provocaron un distanciamiento entre Alfonso XIII y Maura, quién finalmente dimitió el 21 de octubre de 1909, siendo sustituido por Moret que no duró más de tres meses en la jefatura liberal, debido a la gran inquietud que generaba entre varios dirigentes del partido, que le reprochaban su cercanía a los republicanos.

El 10 de febrero de 1910, Canalejas asumió el liderazgo del partido liberal con un programa político moderno, especialmente en su visión del problema social, que le llevó a realizar una regeneración interna del modelo político de la Restauración con varias propuestas democráticas que no llegaron a culminarse por el atentado anarquista que acabó con su vida. Como había hecho Maura, aunque con un enfoque distinto, el político liberal también predicó una renovación de España “desde arriba”, y procuró acabar con el fraude electoral, entablado diálogo con el socialismo encabezado por Pablo Iglesias, lo que se materializó en las elecciones del 8 de mayo de 1910, cuando el político socialista ocupó por primera vez el puesto de diputado. No obstante, como le ocurrió a Maura, Canalejas encontró fuertes opositores dentro de la clase política de su tiempo. Los sectores más conservadores, por ejemplo, le acusaron de promover el anticlericalismo con la aprobación el 23 de diciembre de 1910 de la conocida “Ley del Candado”. Esta legislación contemplaba la prohibición del establecimiento de nuevas órdenes religiosas durante un período de dos años, en un momento en el que la cuestión clerical en relación a la enseñanza era uno de los temas más polémicos en España, que en ese momento se caracterizaba por el auge de los movimientos anticlericales. También se ganó la enemistad de los grupos republicanos y socialistas, cuyo único



objetivo era la destrucción del régimen monárquico, quienes promovieron una “desaforada” campaña periodística teñida de tintes revolucionarios, “hasta el punto de que es lícito preguntarse si esa campaña no fue parte en el posterior asesinato del ilustre hombre público”.<sup>759</sup>

Tras el asesinato de Canalejas, el 12 noviembre de 1912, el partido liberal se mantuvo en el poder con un gobierno puente encabezado por Manuel García Prieto, que sirvió para llevar a cabo la firma definitiva, el 27 de noviembre de 1912, del Tratado hispano-francés sobre el Protectorado de Marruecos, que fijó la línea fronteriza de las zonas de influencia de Marruecos. Esta circunstancia pospuso el nombramiento del Conde Romanones, que accedió a la presidencia del ejecutivo liberal el 31 de diciembre de 1912, día en el que Maura presentó su renuncia al acta como diputado, negándose a colaborar con los liberales, lo que abrió paso a la fragmentación de los partidos monárquicos. En medio de esta crisis del régimen constitucional se produjo un último cambio en la cartera ministerial, y el 27 de octubre de 1913 el testigo pasó a los conservadores representados por Eduardo Dato. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 se inició un nuevo período en la historia de España, con profundos cambios en la vida social y política, que influyeron de manera directa en la libertad de la prensa española.

---

<sup>759</sup> Para el historiador Gómez Aparicio, a excepción de la desencadenada en 1909 contra Maura, no se recuerda en la historia de la prensa una campaña periodística de tal magnitud, y, en estos términos declara: “Contra Canalejas se centraron toda clase de ataques, de injurias y de infamias probablemente encuadrables en un proceso revolucionario que tenía como fuerza de aglutinación a la Conjunción republicano-socialista y como finalidad la destrucción del régimen monárquico”. GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo español*, p. 360.

### 3. EL CRECIMIENTO DESIGUAL DE LA PRENSA DE MASAS

La falta de rigor en las informaciones transmitidas sobre el conflicto de Cuba causó una crisis de credibilidad en la prensa,<sup>760</sup> que seguía teniendo un impacto minoritario en España comparado con otros países europeos, en gran parte por el alto índice de analfabetismo existente,<sup>761</sup> habiendo perdido, además, cierto prestigio adquirido tras la aprobación de la Ley de Imprenta. No obstante, esta circunstancia no fue obstáculo para que a lo largo de los primeros años del siglo XX aumentara la influencia del periódico, afianzándose dentro de la estructura política y social. Uno de los factores esenciales fue la acentuación del nivel de conciencia política de los ciudadanos, principalmente en la clase obrera. Esto, unido a la concentración urbana propia de este período y a la instauración del sufragio universal masculino en 1890, hizo que cada vez más obreros que emigraban del campo a la ciudad consideraran primordial estar bien informado, haciéndose necesaria esta comunicación indirecta. El pueblo comenzó a interesarse y a hacerse responsable de la vida política, en la misma medida que aumentó el número de dirigentes políticos que participaba en la prensa, bien como redactores en determinados periódicos o como fundadores o directores de las publicaciones. Este fenómeno, que ya se daba a finales del siglo XIX, acrecentó considerablemente el número de diarios que tomaban la precaución de nombrar director a un diputado protegido por la inmunidad parlamentaria, y con ello eludir las posibles sanciones por cometer delitos de imprenta.<sup>762</sup> Esta situación era realmente llamativa, ya que los mismos políticos,

---

<sup>760</sup> La desconfianza de los lectores quedó reflejada en los órganos de opinión política. Algunos de los periódicos que habían logrado asentarse finalmente desaparecieron, como *El Correo*, *Los Debates*, *El Resumen* y *El Tiempo*.

<sup>761</sup> En una aproximación a la noción de la opinión pública que existía durante estos años, podemos afirmar que el periódico de aquella época, si bien no era el espejo del pueblo entero, reflejaba “al menos” la opinión “de los que escriben y leen”. CRUZ SEOANE, M., DOLORES SAIZ, M., *Historia del periodismo en España*, pp. 32-33.

<sup>762</sup> El partido liberal cuidaba más esta circunstancia, y en 1901, con Sagasta en el poder, fueron elegidos en las elecciones generales hasta 33 diputados periodistas. El partido conservador, por su parte, en el mandato de Maura en 1903, contaba con 18 diputados periodistas en sus filas.

ministros, o incluso, presidentes del Gobierno, que en algunos momentos de su vida publicaban artículos haciendo uso del derecho a la libertad de expresión, eran los mismos que cuando se encontraban en el poder practicaban la censura o eran partícipes de las persecuciones y abusos estatales hacia los periodistas.<sup>763</sup>

En lo que respecta a las vías de comunicación con las que contaba la prensa española, no se produjo ninguna novedad técnica de relevancia, aunque sí se practicaron mejoras y avances respecto al período anterior, que permitieron su extensión por todo el territorio español. Por un lado, el sistema de correos se vio beneficiado a partir de 1904 con la supresión del pago obligatorio para las empresas de los sellos que llevaban los paquetes destinados a los suscriptores. De otra parte, según los datos analizados por Devois, la red telegráfica creció de forma espectacular, y de las 1400 estaciones telegráficas existentes en 1900 se pasó a 7.600 en 1914, como también lo hizo el uso del teléfono, existiendo en 1914 más de 33.500 teléfonos en servicio. Asimismo, la prensa gozaba del derecho a tarifa reducida en ambos servicios, aunque en el caso de la comunicación por teléfono, ésta solo se aplicaba durante la noche, lo que perjudicaba claramente a las publicaciones de la tarde. Las reformas que se introdujeron en ambos medios permitieron agilizar el intercambio de información, principalmente, entre el centro y la periferia. Esto se hizo notorio con respecto a los grandes diarios de Madrid y Barcelona, que poseían rotativas de gran capacidad de impresión, lo que facilitó la distribución de sus ediciones a las provincias. Concretamente en 1913 de las 36

---

<sup>763</sup> Pedro Pascual da una extensa lista de ministros que publicaban obras durante la Restauración canovista, entre ellas, las dos grandes figuras políticas de este período: Maura, uno de los líderes conservadores más influyentes de la época, y Canalejas, quién fundó *La Democracia* y fue promotor de *El Heraldo de Madrid*, donde publicó un gran número de escritos. Sin olvidar a Silvela, colaborador de *La Época*; Montero Ríos que colaboró en *La Iberia* y Moret que escribió un gran número de artículos en *La América*. PASCUAL, P., *El compromiso intelectual del político. Ministros y escritores en la Restauración Canovista*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1999.

imprentas que eran propiedad de las propias empresas periodísticas, 12 eran de publicaciones madrileñas y 8 correspondían a periódicos de Barcelona.<sup>764</sup>

Los progresos técnicos, unidos a la urbanización y a la creciente participación de los ciudadanos en la vida política, favoreció la expansión de la prensa, que gozaba del privilegio de no tener aún la competencia de otros medios de comunicación. El número de publicaciones y su tirada se incrementó en un 32% desde 1900, cuando España contaba con 1.300 publicaciones, hasta 1913. Tal y como ocurría en la etapa anterior, que se caracterizaba por la concentración geográfica de la prensa española, Madrid seguía siendo la región con mayor número de publicaciones, con el 24,35% del total de los periódicos que se editaban en España en 1900,<sup>765</sup> seguida de Barcelona, que en el transcurso de esos años alcanzó el 16,3% de las publicaciones totales.<sup>766</sup> A pesar de ello, se produjo un aumento considerable en el número de periódicos de provincia, que informaban sobre los problemas de la ciudad y se convirtieron en “correa de transmisión” entre los ciudadanos y sus autoridades.<sup>767</sup>

No obstante, aunque el número de títulos aumentó, todo el peso de la prensa española de principios del siglo XX recayó en el periódico de empresa en detrimento de la vieja prensa de opinión dependiente de los partidos, que, tras el desastre colonial, fue

---

<sup>764</sup> DESVOIS, J.M., “El progreso técnico y la vida económica de la prensa en España de 1898-1936”, *España, 1898-1936: Estructuras y cambio*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1984, p. 96-111.

<sup>765</sup> Durante esta etapa, los periódicos madrileños aumentaron, de 328 en 1900 a 459 en 1913, aunque en menor porcentaje que años atrás a causa de un proceso de racionalización, que reforzó su hegemonía respecto al resto de ciudades. FUENTES, J.F., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., *Historia del periodismo español*, pp. 182-191.

<sup>766</sup> Según los datos analizados por Sánchez Aranda y Barrera del Barrio, tras la aprobación de la Ley de imprenta, Madrid se situaba en primer lugar con el 25% del total de publicaciones editadas en España, mientras que, a Barcelona solo le correspondía el 11%. En 1913, sin embargo, esa diferencia se había reducido a tan solo ocho puntos, debido al espectacular crecimiento de la prensa catalana durante esta etapa. SÁNCHEZ ARANDA, J., BARRERA DEL BARRIO, C., *Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta 1975* Pamplona, EUNSA, 1992, pp. 221-222.

<sup>767</sup> PELAZ LÓPEZ, J.V., “La importancia de la prensa de provincias en la España Liberal”, *Berceo. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades*, nº59, Logroño, IER, 2010, p.93

disminuyendo su importancia paulatinamente.<sup>768</sup> Efectivamente, a partir de 1898, se produjo una creciente mercantilización de la prensa, consolidándose el predominio de las grandes cabeceras de información general que contaban con la mayoría de los lectores y los anunciantes. El perfil centralista del régimen político propició que los periódicos de empresa de mayor circulación se encontraran todos en Madrid, lo que aumentó la brecha existente con respecto al resto de publicaciones españolas. Los principales diarios madrileños seguían siendo: *La correspondencia de España*, *El Imparcial*, *El liberal* y *El Heraldo de Madrid*,<sup>769</sup> que rondaban los cien mil ejemplares, duplicando la tirada del periódico de Barcelona con mayor número de ejemplares, *La Vanguardia*, y muy por encima de otras publicaciones españolas, aunque lejos de las tiradas millonarias de los diarios europeos.<sup>770</sup> Durante estos años también se fundaron en la capital nuevos periódicos que tenían un gran respaldo financiero, como *ABC* y *El Debate*.

Con respecto a la prensa de opinión, esencial en la etapa anterior, perdió crédito en la sociedad, y solo los órganos de partidos o fuerzas políticas, respaldados económicamente por éstos, consiguieron mantenerse en el mercado. Entre ellos los diarios de los partidos turnantes, *La Época*, diario de referencia en la prensa conservadora que respaldó a Maura, y los liberales *El Globo*, *Diario Universal* y *La Prensa*. Las publicaciones de las organizaciones obreras, una de las fuerzas emergentes durante este periodo, no llegaron a consolidarse como periódicos de empresa, principalmente por su oposición al capitalismo, que dificultaba su financiación convencional. Esto hizo que las publicaciones fueran de escasa tirada y vida muy corta,

---

<sup>768</sup> ALONSO, C., “El auge de la prensa periódica”, pp. 565-567.

<sup>769</sup> *El Imparcial*, *El liberal* y *El Heraldo de Madrid* constituyeron en 1906 un trust al que llamaron *La Sociedad Editorial*. Esta fusión tuvo una duración de diez años, respetando la ideología política de los tres: liberal monárquico (*El Imparcial*), demócrata (*El Heraldo*) y republicano (*El Liberal*).

<sup>770</sup> FUENTES, J.F., FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., *Historia del periodismo español*, p. 169.

aunque de gran importancia en la formación de una conciencia de clase. Tampoco la hegemonía política del movimiento catalanista se reflejó en un auge de sus órganos de prensa, y periódicos como *La Veu de Catalunya* y *El Poble Catalá*, esenciales a comienzos del siglo XX, no alcanzaron la aceptación popular de otros de mayor tirada. En lo que respecta a las publicaciones republicanas, que fueron de las más castigadas por las medidas represivas tomadas por el poder, destacó en Madrid *El País* y *El Radical* creado por Lerroux, a los que se opuso el republicanismo más tradicional de *La España Nueva* de Rodrigo Soriano. Barcelona contó con dos órganos del republicanismo, *El Diluvio* y *La Publicidad*, que atenuaron sus posiciones partidistas hasta convertirse en órganos de información general. Por su parte, en Valencia destacó el periódico radical *El Pueblo*, fundado por Blasco Ibáñez.

## **2. PROLIFERACIÓN DE MECANISMOS DE PRESIÓN GUBERNAMENTAL PARA LIMITAR LA LIBERTAD DE IMPRENTA**

### **1. EL AUMENTO DE TRABAS LEGALES PARA EMITIR LIBREMENTE LAS IDEAS**

Tras siete meses de forzoso silencio impuesto por la censura militar establecida con motivo de la guerra colonial, el gobierno de la Restauración volvió a garantizar en febrero de 1899 la libertad de prensa. Una nueva etapa para este derecho en la que, en palabras de Blasco Ibáñez: “La única ventaja que recobra el periodista batallador que sostiene con valentía sus ideas, es la de poder hablar, arrastrando la responsabilidad de sus palabras, sin que su pensamiento tenga que pasar por el tamiz de la previa censura; la de poder decir la verdad sin que ésta tenga que filtrarse por el tornavoz de la fiscalización militar, más o menos tolerante, según las exigencias del gobierno”.<sup>771</sup> Un período que abarcó hasta 1914, año en el que daba comienzo la Primera Guerra Mundial, y en el que abundaron, de nuevo, las estrategias gubernamentales para presionar a los periódicos y restringir el derecho a emitir libremente las ideas por medio de la imprenta, fundamentalmente a los diarios regionalistas y republicanos, que fueron los más perseguidos por el Estado durante estos primeros años del siglo XX.

---

<sup>771</sup> *El Pueblo*, “La única responsable”, 11 de febrero de 1899.

## **1. LAS ARBITRARIEDADES MINISTERIALES BAJO LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES**

Tal y como analizábamos en anteriores capítulos, las formas de control gubernativo de la libertad de prensa se manifestaban, o bien de forma directa, con la utilización explícita de la leyes, o mediante una serie de instrumentos encubiertos que trataban de controlar la información, principalmente aquella que se dirigía a amonestar la gestión de las autoridades. En lo que respecta a la censura directa del Estado, durante estos años los gobernadores utilizaron con mayor frecuencia la suspensión de garantías constitucionales como recurso para imponer, amparados por la Constitución, la previa censura a las publicaciones periódicas en determinados territorios en los que se producían huelgas o revueltas sociales. En este contexto, fueron constantes las denuncias en las Cámaras sobre el tratamiento que se dispensaba a la prensa cuando se proclamaban los estados excepcionales. Azcarate expresó la falta de lógica en la actuación del gobernador de León, quién había suspendido las garantías para combatir el carlismo, y, sin embargo, perseguía a los periódicos que lo denunciaban. Este era el caso del periódico *La Democracia*, que había sido secuestrado el 6 de noviembre de 1900 por la publicación de un suelto en el que se informaba sobre la existencia de centros carlistas en la provincia. Para el político, esas actuaciones dejaban al descubierto el verdadero sentido de los estados excepcionales, que eran aprovechados para limitar las publicaciones que no les convenían.

En ocasiones, los gobernadores levantaban la previa censura en los estados excepcionales, pero mantenían una serie de restricciones que coartaban la libertad de prensa. En Barcelona, por ejemplo, en una de las numerosas ocasiones en las que se



encontraban suspendidas las garantías, el capitán general emitió un comunicado en el que se prohibía a los periódicos dirigir ataques a las instituciones y a las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, así como a la religión católica. Una manera indirecta de restringir el derecho a emitir libremente las ideas y opiniones de la prensa catalanista y separatista que abundaba en la región.<sup>772</sup> Algunas publicaciones suspendieron voluntariamente su tirada en signo de protesta contra esta decisión, como la *Revista Fabril* que se despidió de sus lectores en estos términos: “Imposibilitados de llenar nuestra misión de defender a los trabajadores en sus legítimos derechos atropellados por la clase patronal, valiéndose del excepcional estado en que se encuentra Cataluña, suspendemos la publicación de la *Revista Fabril* hasta mejores tiempos”. El diputado, y también director de *El Noticiero Universal* de Barcelona, Peris Mencheta, defendió la previa censura frente a las persecuciones gubernamentales posteriores, porque “así sabríamos a qué atenernos y nos libraríamos de un peligro mil veces peor que el de antes, pues bastará que un suelto o artículo parezca mal a las autoridades, para que el periódico que lo publique sea denunciado con razón o sin ella”.<sup>773</sup> El gobierno, por su parte, consideraba que estas actuaciones entraban dentro de la legalidad, y tenían su justificación en la necesidad de limitar “prudentemente” la libertad de ciertos impresos de provincias en las que existían disturbios sociales.<sup>774</sup>

La costumbre con la que el poder utilizaba este recurso constitucional, provocaba que las autoridades fueran cada vez más injustas con la prensa. Sin ir más lejos, en la circular en la que se insertaba la orden de suspensión de garantías en Madrid, decretada por el gobierno conservador el 1 de noviembre de 1900, se afirmaba: “Las facultades de los gobernadores son absolutas (...) para impedir y secuestrar en su caso o suspender las

---

<sup>772</sup> Congreso, 3 de diciembre de 1900, Azcarate, cif. 241.

<sup>773</sup> Congreso, 3 de diciembre de 1900, Peris Mencheta., cif. 243.

<sup>774</sup> Congreso, 3 de diciembre de 1900, Ugarte, cif. 242.

publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión de esos delitos, extraviando la opinión con falsas noticias o produciendo alarma”.<sup>775</sup> En virtud de esta declaración, y amparándose en el artículo 6 de la Ley de Orden Público, el gobernador de Madrid ordenó la suspensión del semanario liberal *El Porvenir Navarro* y el diario carlista *El Correo Español*, así como el secuestro de la edición del *Heraldo de Madrid* del 12 de diciembre de 1900, por la publicación del artículo “Petición de mano”, que giraba en torno a la heredera al trono.<sup>776</sup> La acción policial fue llevada a cabo por quince agentes, que, de forma violenta, recogieron los ejemplares del diario madrileño, apaleando a los vendedores y quemando las copias que éstos llevaban. Un ejemplo más de cómo las autoridades, cuando se encontraban en el poder, aplicaban los preceptos legales a su conveniencia, provocando que, lejos de mantener la seguridad ciudadana en estas situaciones de anormalidad, se perturbara aún más el orden público.

El 13 de diciembre, con motivo de la detención de Pedro Barrantes, editor responsable de *El País*, por la publicación del artículo “La nación de Don Simón”, en el que se atacaba gravemente al sistema monárquico, se alzaron algunas voces en el Congreso contra la política de prensa utilizada por el gobierno. En la misma línea que el argumento esgrimido por Peris Mencheta, el diputado liberal Juan Montilla observó que la previa censura en tiempos de guerra era “más noble” que “dejar a los periódicos que publiquen lo que quieran, para perseguirlos luego y recogerlos arbitrariamente”.<sup>777</sup> El periodista cargó contra el gobierno conservador, acusándolo de suspender las garantías constitucionales “por todo y a propósito de todo”,<sup>778</sup> y recalcó que la situación de

---

<sup>775</sup> Congreso, 13 de diciembre de 1900, Montilla, cif. 462.

<sup>776</sup> En el artículo denunciado Gutiérrez Abascal exponía los inconvenientes sobre la próxima boda entre la Princesa de Asturias y Don Carlos de Borbón, que años atrás había pertenecido al ejército carlista. El suelto fue reproducido por Blasco Ibáñez en el Congreso, 13 de diciembre de 1900, cif. 469-470.

<sup>777</sup> Congreso, 13 de diciembre de 1900, Montilla, cif. 468.

<sup>778</sup> Congreso, 13 de diciembre de 1900, Montilla, cif. 460.

anormalidad forzosa de una determinada provincia no autorizaba a los funcionarios públicos a hacer alardes de benevolencia al permitir la publicación de los periódicos, ya que, en la propia declaración de suspensión de garantías, se debía determinar cuáles eran los casos en que estaba permitido impedir la libre emisión del pensamiento. Con el mismo fundamento, Romero Robledo se lamentó de la frecuencia injustificada con la que se establecían los estados excepcionales con “todo motivo o pretexto”, y declaró que la misma no debía traer consigo de forma inherente el atropello ministerial a la libertad de prensa: “Para recoger un periódico, para suspender un periódico, es necesario que el artículo que motive esa medida coincida o recaiga sobre el asunto o cuestión que ha motivado la ley excepcional”.<sup>779</sup>

El presidente del Gobierno por aquel entonces, Azcárraga, aclaró que la adopción de estas medidas extraordinarias en determinados momentos no era un “pretexto para perseguir ni molestar a nadie, así como tampoco para impedir o coartar en lo más mínimo la libertad de prensa”, sino que, al contrario, todos los periódicos podían difundir sus opiniones dentro del límite trazado por las leyes.<sup>780</sup> Una opinión que distaba mucho de la realidad que acontecía en España, ya que, en la práctica, se comprobó que la suspensión de garantías se utilizaba de forma indiscriminada para coaccionar a los periódicos de la oposición. Dos meses después de las declaraciones del líder conservador, el 14 de febrero de 1901, se decretó el estado de guerra en Madrid, perjudicándose, de nuevo, la libertad de prensa de los órganos periodísticos.<sup>781</sup> La orden del gobierno vino acompañada de un bando emitido por el general Weyler que establecía la previa censura: “Todo periódico que inserte noticia, suelto o artículo que

---

<sup>779</sup> Congreso, 13 de diciembre de 1900, Romero Robledo, cif. 554.

<sup>780</sup> Congreso, 13 de diciembre de 1900, presidente del Consejo de Ministros, cif. 521.

<sup>781</sup> La medida se tomó tras una serie de manifestaciones de estudiantes que se venían produciendo en Madrid contra el clero y el gobierno conservador. *El Heraldo de Madrid*, “Agitación Nacional”, 11 de febrero de 1901; *El Liberal*, “La Patria en crisis”, 12 de febrero de 1901.

no esté autorizado por esta Capitanía general, será recogida y suspendida desde luego su publicación, quedando sujetos a las responsabilidades que correspondan y al fuero de Guerra en juicio sumarísimo el autor de la especie vertida o de la noticia dada y el director del periódico. Las mismas reglas se aplicarán a las hojas sueltas, folletos, etc., dirigiéndose el procedimiento cuando no se averigüe el principal culpable, contra el dueño de la imprenta en que se hubiere tirado la publicación”.<sup>782</sup>

La nueva situación excepcional impuesta en la provincia de Madrid trajo consigo denuncias, secuestros y suspensiones de todos los periódicos que informaban sobre lo que estaba aconteciendo en la capital. El 24 de febrero, *El País* publicó un artículo dedicado a la libertad de prensa, en el que lamentó las restricciones gubernativas impuestas a la prensa con la excusa de salvaguardar el orden público: “El día 12 fue suspendido *El País*. ¿Con qué derecho? Con la patente de corso que da al gobierno la suspensión de garantías constitucionales. ¿Por qué razón? Por ninguna, por la venganza de un moralizador sin moralidad, por cualquier cosa. Aunque halague a nuestro amor propio, no podemos admitir como bueno el pretexto de que se nos suspendió para garantizar el orden. ¿Cómo? Sin la suspensión de *El País*, la Guardia civil, la fuerza de Orden público (...) la previa censura, todo hubiera sido inútil para restablecer la tranquilidad de las calles”.<sup>783</sup> Así pues, la suspensión de garantías constitucionales, lejos de ser una medida excepcional justificada por las inmediatas amenazas para el orden público de un determinado territorio, se utilizó como un medio para limitar la libertad de las publicaciones, independientemente de si la información vertida en ellas tenía vinculación con lo que había motivado la imposición del régimen extraordinario.

---

<sup>782</sup> Bando del capitán general de Castilla la Nueva, D. Valeriano Weyler, declarando el estrado de guerra en la provincia de Madrid. *El Liberal*, “Estado de Guerra. Bando”, 15 de febrero de 1901.

<sup>783</sup> *El País*, “La libertad de prensa y la dignidad de los periodistas”, 24 de febrero de 1901

## 2. LA INFLEXIBLE APLICACIÓN DE LA LEY DE IMPRENTA POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES

Junto con la declaración de estados excepcionales, el poder público coartó de forma directa la libertad de prensa aplicando restrictivamente los preceptos del Código Penal, en virtud de lo establecido en la Ley de Imprenta de 1883. Gracias a la extensa jurisprudencia en la materia, podemos afirmar que existieron tres delitos que fueron utilizados de forma sistemática por las autoridades para limitar este derecho. En primer lugar, el delito de injurias contenido en el artículo 471 del Código Penal, por el que se castigaban todas las apreciaciones vertidas en la prensa, dirigidas a ridiculizar, injuriar y desacreditar a un particular o a un organismo público.<sup>784</sup> Según el Tribunal Supremo, la libertad de imprenta se encontraba subordinada al honor de todos los ciudadanos, por lo cual era lícito el examen y la crítica de la gestión oficial de los funcionarios públicos realizada por medio de la imprenta, pero no se permitía abusar de la publicidad que proporcionaba la misma para dirigir imputaciones que cayeran en la deshonra o menosprecio de las personas.<sup>785</sup>

Por consiguiente, todos aquellos sueltos periodísticos que atribuían acciones ilegales o abusivas a las autoridades en el desempeño de su cargo público se encontraban dentro del delito de injurias. En virtud de esta postura, no existía libertad a la hora de criticar o denunciar la gestión de los gobernadores, ni aunque los hechos imputados al poder público fueran ciertos, ya que, la veracidad de las informaciones no privaba a la prensa

---

<sup>784</sup> El Tribunal Supremo declaró que las publicaciones injuriosas dirigidas a menospreciar un periódico, se entendían que iban en contra de su director, en cuanto que éste asumía y representaba la personalidad jurídica de la publicación. STS 22 de marzo de 1902. *Gaceta de Madrid*, 9 de Octubre, p. 124.

<sup>785</sup> STS 12 de mayo de 1905. *Gaceta de Madrid*, 20 de abril de 1906, p. 91. Ratificado en las sentencias: STS 20 de mayo de 1905. *Gaceta de Madrid*, 22 de abril de 1906, p. 99; STS 6 de junio de 1905. *Gaceta de Madrid*, 29 de abril de 1906, p. 124; STS 25 de febrero de 1907. *Gaceta de Madrid*, 24 de septiembre de 1908, p. 59.

de cometer un delito de injurias.<sup>786</sup> A esto hay que añadir, también, que, en la mayoría de casos resueltos por los tribunales de justicia, se acusaba a los periódicos de proferir expresiones “gravemente injuriosas”, contrarias a lo regulado en el artículo 472 Código Penal. Para determinar la existencia del delito de injurias graves, el Alto Tribunal aseveró que, no solo era necesario analizar el sentido gramatical de las palabras utilizadas en cada caso, sino, también, la condición de las personas, los antecedentes del suceso, el momento en el que habían sido escritas, y “todo cuanto por razón del tiempo y lugar sirva para adquirir el convencimiento de la intención que impulsó al culpable, cuya intención, por ser elemento integral del delito de orden puramente subjetivo, ha de resultar acreditada por esos actos que la exteriorizan”.<sup>787</sup>

Conforme a esta jurisprudencia, se condenó a Pablo Iglesias por un artículo publicado en *El Socialista*, que denunciaba las torturas cometidas por miembros de la Guardia Civil en la persona de dos obreros acusados de haber participado en el robo de una parroquia. En el suelto, el político, y también periodista, calificaba de “intangible” al organismo policial, y le acusaba de cometer estas crueldades de forma repetida, atestiguando que, los que protagonizaban estos actos, deseaban borrar el calificativo de “benemérita” de la Guardia Civil. Pese a la certeza de las informaciones vertidas en el periódico, el Tribunal Supremo ratificó la condena a Pablo Iglesias, declarando que las frases y conceptos periodísticos revelaban el “propósito deliberado”, elemento esencial en el delito de injurias, de desacreditar a la Guardia Civil en el concepto público, porque “pocas cosas pueden desprestigiar tanto a un Instituto militar como los abusos de la

---

<sup>786</sup> STS 12 de octubre de 1912. *Gaceta de Madrid*, 22 y 23 de marzo de 1913, p. 81.

<sup>787</sup> Doctrina del Tribunal Supremo ratificada en distintos fallos contra publicaciones periódicas: STS 27 de abril de 1904. *Gaceta de Madrid*, 13 de septiembre de 1904, p. 30; STS 18 de mayo de 1907. *Gaceta de Madrid*, 9 de Noviembre de 1908, p. 136; STS 22 de junio de 1908, *Gaceta de Madrid*, 25 de agosto de 1909, p. 186; STS 26 de junio de 1907, *Gaceta de Madrid*, 5 de Enero de 1909, p. 31

fuerza realizados con crueldad a individuos indefensos”.<sup>788</sup> De la misma manera, el fallo aclaraba que no se podía calificar como simple falta de imprenta, regulada en el artículo 584.2, porque el artículo periodístico rebasaba los límites de la crítica, al poner en cuestión a todo el organismo público, y no solo a los policías que prestaban su servicio en la localidad donde había tenido lugar el suceso.

Teniendo en cuenta la regla de interpretación en materia de injurias delimitada por el Tribunal Supremo, durante todos estos años los órganos judiciales sancionaron de forma arbitraria multitud de artículos redactados por periodistas republicanos u obreros, afirmando que traspasaban los límites de la crítica periodística al emplear calificativos que denigraban a las autoridades públicas. La mayoría de los fallos condenatorios recurridos por los directores o periodistas fueron confirmados por el Tribunal Supremo, que, a pesar de reconocer el derecho a la libre expresión del pensamiento, entendía que el mismo se encontraba delimitado por “el respeto debido a la personalidad ajena”, y que, por tanto, no debían utilizarse palabras que lastimaran la honra o el crédito de la persona aludida. Pocas fueron las ocasiones en las que el máximo organismo judicial absolvió a los periodistas por entender que no existía la intención de menospreciar a la figura pública, sino hacer una verdadera crítica de carácter político.<sup>789</sup> Así pues, se consideraron términos injuriosos, entre otros: alegar que la gestión de un político era “una farsa de las muchas que hacía; que su pedantería llegaba al colmo; que sus caciques, bajo la protección que los dispensaba, habían cometido todo género de

---

<sup>788</sup> STS 30 septiembre de 1904. *Gaceta de Madrid*, 22 de diciembre de 1904, p. 157.

<sup>789</sup> Concretamente, el Tribunal Supremo resolvió a favor de un periodista, que había criticado el “matonismo parlamentario” de un diputado, al entender que éste solo exteriorizaba una protesta contra la actitud del mismo, cierta violencia del lenguaje, que no trascendía a la esfera de la delincuencia: “Considerando que, según reiteradamente tiene declarado el Tribunal como regla de interpretación en materia de injurias, éstas se caracterizan y determinan, no sólo por la significación gramatical de sus palabras, sino que también debe tenerse en cuenta, para calificarla, la tendencia con que fueron proferidas y si la intención del agente era o no lastimar la honra de la persona contra la cual iban dirigidas”. STS 30 septiembre de 1907. *Gaceta de Madrid*, 10 enero de 1909, p. 66; Refrendada por la STS 9 de abril de 1908. *Gaceta de Madrid*, 15 de agosto de 1909, p. 109.

vejaciones y tropelías; que era un hombre inútil y nulo, de inteligencia limitada y rústico en su figura y sus modales, vengativo como un mamífero (...).<sup>790</sup> También fue delito afirmar que un político era “calumniador”, “embustero”, o que “falta a la verdad a sabiendas”.<sup>791</sup>

A medida que se dictaron más sentencias al respecto se fueron extendiendo los límites del delito de injurias. Por citar un ejemplo, no era indispensable para cometer este delito designar al ofendido por su nombre, siempre y cuando existieran datos precisos que distinguieran al aludido. En la práctica, las pruebas para determinar la persona a la que se dirigía un escrito eran muy arbitrarias, como así lo demostró un fallo emitido por el Tribunal Supremo, en el que se reafirmaba la condena de un periodista republicano basándose en las declaraciones de varios testigos. Éstos confirmaron quién era la autoridad a la que se dirigía la publicación con frases tan vagas como estas que señaló el Tribunal: “ellos lo creían así”, “era la creencia general, “lo habían oído al propio procesado”.<sup>792</sup>

Del mismo modo fueron sancionadas muchas publicaciones periódicas por el delito de desacato a funcionarios públicos contenido en el artículo 269 del Código Penal. Los fallos del Tribunal Supremo confirmaron que las imputaciones gravemente ofensivas emitidas por medio de la imprenta, dirigidas a cualquier autoridad pública no se encontraban dentro de los límites de la crítica periodística, aun cuando el proceder de los aludidos hubiera sido incorrecto. Del mismo modo, se consideraba que los efectos

---

<sup>790</sup> STS 13 de diciembre de 1907. *Gaceta de Madrid*, 25 de enero de 1909, p. 154.

<sup>791</sup> STS 8 de junio de 1910. *Gaceta de Madrid*, 27 de agosto de 1910, p. 157. En la misma línea: STS 24 de junio de 1910. *Gaceta de Madrid*, 30 agosto de 1910, p. 175.

<sup>792</sup> STS 24 de marzo de 1908. *Gaceta de Madrid*, 10 de agosto de 1909, p. 96. En el mismo sentido, el Tribunal Supremo condenó a un diario por considerar que insultaba al director de *El Noticiero de Cáceres*, aunque no lo mencionara. STS 23 de abril de 1912. *Gaceta de Madrid*, 15 de Octubre de 1912, p. 150.



de la publicidad propia de un periódico implicaban mayor y más grave trascendencia en el daño de la persona ofendida, por lo que entendían que, lejos de ser una condición inherente a la infracción, era una circunstancia agravante conforme al artículo 10.5 del Código Penal.<sup>793</sup>

En este período, un gran número de diarios provinciales, que realizaban campañas periodísticas contra las actuaciones del gobernador civil o el alcalde del territorio en el que se encontraban, fueron sancionados por haber cometido un delito de desacato. Por citar un ejemplo, se condenó al periódico *La Policía Española* por un suelto en el que preguntaba al gobernador de Barcelona si era cierto que estaba recaudando dinero por tolerar el juego en aquella ciudad. En el fallo se explicaba que los conceptos del artículo eran “notoriamente injuriosos” para la autoridad, pues le atribuían faltas de moralidad administrativa “que ceden en desprestigio de su dignidad personal y del cargo que desempeña”.<sup>794</sup> El Tribunal Supremo también estimó injuriosa esta frase contenida en un impreso: “el asfaltado de las calles se hizo en condiciones censurables, ingresando algunos miles de duros en sus bolsillos”, por atribuir “una falta de moralidad” que desacreditaba al alcalde;<sup>795</sup> o dirigir a un gobernador palabras como “estúpido, gentuza, defraudador, que pasa por tonto y es un listo, que estrangula a los menesterosos en provecho personal”.<sup>796</sup>

---

<sup>793</sup> STS 21 de diciembre de 1903. *Gaceta de Madrid*, 4 de abril de 1904, p. 50. Ratificado en STS 7 de diciembre de 1907. *Gaceta de Madrid*, 24 de enero de 1909, p. 141.

<sup>794</sup> STS 17 de noviembre de 1904. *Gaceta de Madrid*, 24 de abril de 1905, p. 15.

<sup>795</sup> STS 17 de abril de 1912. *Gaceta de Madrid*, 14 de octubre de 1912, p. 145. Del mismo modo, el Tribunal Supremo juzgó que excedía de la crítica permitida las siguientes afirmaciones sobre la gestión del alcalde de Sarriá: “se han creado gastos que no huelen a moralidad para empleos y servicios innecesarios monopolizando todos los de la Corporación con mil abusos el odio monterilla”. STS 30 de abril de 1912. *Gaceta de Madrid*, 5 de noviembre de 1912, p. 162; Otros fallos del Tribunal Supremo en los que se sancionó por delito de desacato contra alcaldes: STS 30 de marzo de 1904. *Gaceta de Madrid*, 25 de junio de 1904, p. 167.

<sup>796</sup> STS 10 de diciembre de 1912. *Gaceta de Madrid*, 2 de abril de 1913, p. 114. Otros fallo del Tribunal Supremo siguieron esta misma línea. Se decretó delito de desacato contra los ministros al calificarlos como “manada de sinvergüenzas”, “farsantes”, “embusteros” en STS 26 de noviembre de 1912. *Gaceta*

La mayoría de las sentencias recaía a favor de las autoridades, constriñendo cada vez más la libertad de todas las publicaciones que no seguían la línea política marcada por el gobierno. Uno de los pocos periodistas absueltos por el Tribunal Supremo fue Fernando Cadiñanos, procesado por haber cometido un delito de desacato al gobernador de Madrid. En la primera sentencia, se declaraba al redactor culpable por la publicación de un comunicado difundido en *El Liberal*, y en *El País*, en el cual acusaba a la autoridad madrileña de haber cometido un atropello contra la libertad de prensa, por las críticas que había vertido anteriormente en el semanario *El Ideal* acerca de su gestión política. La sanción fue revocada por el Tribunal Supremo en estos términos: “considerando que en el comunicado se propuso el recurrente rectificar noticias publicadas con anterioridad...sobre los motivos de la detención que sufría (...) la afirmación que consigna referente al gobernador y su delegado que habían querido vengar cierta campaña periodística, acerba que el propio recurrente venía haciendo en su semanario, tiene más el fin de sincerarse, mediante una explicación que dejase a salvo su crédito que el de ofender y menospreciar a la autoridad”.<sup>797</sup>

Por último, otro delito muy recurrente a la hora de silenciar los ataques dialécticos de los periodistas fue el de excitación a la rebelión o a la sedición, sancionado en los artículos 582 y 181.1 del Código Penal. En virtud de ambos preceptos, se condenó a todas aquellas publicaciones que incitaban de un modo directo a la rebelión para sustituir la Monarquía por la República.<sup>798</sup> Siguiendo esta jurisprudencia, se sancionó un suelto que excitaba a los obreros a ejercer actos de odio y de venganza contra los

---

de Madrid, 29 de marzo de 1913, p. 94; Contra el presidente del Consejo de Ministros: en la STS 7 de Diciembre de 1912. *Gaceta de Madrid*, 2 de abril de 1913, p. 110.

<sup>797</sup> STS 19 de abril de 1904. *Gaceta de Madrid*, 12 de septiembre de 1904, p. 22. Misma doctrina en un caso análogo donde se declaraba que una crítica periodística en tono humorístico no podía calificarse como delito de desacato. STS 31 de mayo de 1904. *Gaceta de Madrid*, 24 de septiembre de 1904, p. 75.

<sup>798</sup> STS 22 de febrero 1908. *Gaceta de Madrid*, 4 de agosto de 1909, p. 65.

burgueses, a quienes se les atribuía “todo tipo de maldades, crímenes e infamias”, con el objetivo de poner término a los padecimientos del proletariado social.<sup>799</sup> Los periódicos que más sufrieron de este tipo de sanciones fueron los republicanos y las publicaciones obreras, especialmente tras la oleada de atentados de finales del siglo XIX.

### **3. APROBACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS LEGALES PARA CONSTREÑIR LA LIBERTAD DE PRENSA**

La acción directa del Estado a la hora de censurar a la prensa se completó con la aprobación de otras medidas legales que afectaron a la libertad de imprenta. Durante el transcurso de estos primeros compases del siglo XX, bien el gobierno, o bien el ministerio fiscal, aprobaron normas para incitar a todas las autoridades a perseguir los delitos de imprenta. La primera de ellas se emitió el 9 de mayo de 1903, a través de una Real Orden, que instaba a los gobernadores a reprimir los abusos o transgresiones que se cometieran por medio de la imprenta: “Respete con escrupulosidad el derecho en cada caso; pero no le disuada de aplicar o promover la corrección o represión que viere ser motivada, ni aun al recelo de ulteriores lenidades”.<sup>800</sup> Tras la investidura de Alfonso XIII como nuevo rey de España, el fiscal del Tribunal Supremo publicó una circular en la que, en sintonía con la anterior, se exhortaba a los fiscales de las Audiencias para que, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, hicieran efectivas las responsabilidades que correspondieran en virtud de los delitos de imprenta.<sup>801</sup> Tal y como analizaremos más adelante, el 7 de septiembre de 1906 se decretó una nueva

---

<sup>799</sup> STS 7 de diciembre de 1908. *Gaceta de Madrid*, 12 de septiembre de 1909, p. 98.

<sup>800</sup> Real Orden circular de 9 de mayo de 1903. Publicado en la *Gaceta de Madrid*, 10 de mayo de 1903. Martínez Alcubilla, M., *Boletín jurídico administrativo. Anuario de legislación y jurisprudencia. Anuario de 1903*, p. 279.

<sup>801</sup> Circular del fiscal del Tribunal Supremo de 27 de agosto de 1903. *Gaceta de Madrid*, 28 de agosto de 1903. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°33.

orden, por la que se establecían las normas a tener en cuenta cuando los funcionarios públicos secuestraban una publicación que había sido denunciada; y la circular de 5 de mayo de 1908, en la que se fijaban los criterios a los que debía ajustarse el Ministerio Fiscal para denunciar los delitos y faltas contra la moral, las buenas costumbres y la decencia pública, cometidos por medio de la imprenta, en virtud de los artículos 456, 584 y 586 del Código Penal.

Además de estas medidas, a lo largo de estos años se intentaron aprobar, algunas con éxito, otras leyes sobre distintas materias, que influyeron de manera determinante en el reconocimiento efectivo de la libertad de imprenta. La primera legislación que el gobierno liberal trató de imponer fue la Ley contra la difamación, presentada en el Senado el 23 de octubre de 1902 por Juan Montilla, ministro de Gracia y Justicia.<sup>802</sup> La norma castigaba con la multa de 25 a 125 pesetas al director del periódico en el cual se hubieran anunciado hechos falsos, “si se negara a insertar gratis, dentro del término de tres días, la contestación que le dirija la persona ofendida o cualquiera otra autorizada para ello, rectificándolos o explicándolos”.<sup>803</sup> Se sancionaba con la misma pena a los que por medio de la imprenta divulgaran maliciosamente hechos relativos a la vida privada que, sin ser injuriosos, “puedan producir perjuicios o graves disgustos en la familia a que se refiera”, y los que, por los mismos medios, publicaran maliciosamente una noticia falsa de la que pueda resultar algún peligro “para el orden público o daño a los interesados o descrédito al Estado”.<sup>804</sup>

---

<sup>802</sup> El documento se presentó con motivo de las campañas anticlericales que se venían dando en la prensa republicana. La última de mayor gravedad había sido liderada por *EL Pueblo* en febrero de 1902.

<sup>803</sup> Proyecto de ley presentado por el ministro de Gracia y Justicia reformando varios artículos del Código penal. Proyecto de ley contra la difamación. Senado, 23 de octubre de 1902, apéndice 2º al núm.40. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°32.

<sup>804</sup> Proyecto de ley contra la difamación. Senado, 23 de octubre de 1902.

El político conservador Romero Robledo denunció ante el Congreso que el gabinete liberal se estaba inventando un nuevo delito de insulto, y que el proyecto era una amenaza grave contra las libertades públicas, fundamentalmente para la libertad de imprenta: “Si las Cortes aprobaran este proyecto de ley, habrán matado el régimen constitucional, y parlamentariamente habrán cambiado su fundamento y en su manera de ser el régimen en que vivimos”.<sup>805</sup> Para el gobierno, sin embargo, el propósito de la medida era acabar con las injurias y calumnias vertidas en la prensa, que, como hemos analizado, eran los delitos de imprenta más comunes. Sagasta afirmó que, no podían quedar impunes estas acciones periodísticas, y que solo acabando con ellas podían “fructificar” y “florecer” las demás libertades.<sup>806</sup> Finalmente, gracias a la oposición de toda la prensa, que, pese a reconocer que no era una norma tan represiva como otras que habían salido adelante en años anteriores, entendían que se restringía su libertad, el proyecto liberal no prosperó.

Sí lo hizo la Ley de Jurisdicciones de 1906, de la que nos ocuparemos extensamente en el capítulo dedicado al ejército, y que puso fin a la contienda que habían mantenido durante más de diez años la jurisdicción civil y de guerra respecto a las injurias contra los militares contenidas en la prensa. Esta legislación constituyó el más claro ataque a su libertad que sufrieron las publicaciones periódicas desde que se aprobara la Ley de 1883, constriñendo hasta casi hacer desaparecer el derecho a emitir libremente las ideas respecto a los asuntos militares. En la misma línea de restricción de la libre información, Maura presentó el 24 de enero de 1908 un nuevo Proyecto de ley contra el terrorismo. El texto se adicionaba a la Ley de 10 de julio de 1894 sobre atentados por medio de explosivos, y concedía la competencia al gobierno para suprimir libremente los

---

<sup>805</sup> Congreso, 24 de octubre de 1902, Romero Robledo, cif. 923.

<sup>806</sup> Congreso, 24 de octubre de 1902, Sagasta, cif. 923.

periódicos o centros anarquistas, otorgándole la facultad de expulsar de España a todos aquellos que propagasen de cualquier modo las ideas anarquistas. Como analizaremos más adelante, la oposición total de los periódicos españoles, junto con la del partido liberal y republicano, fue clave para que el reglamento no saliera adelante, pese a haber sido aprobado por el Senado.

Durante estos años, se decretaron, además, otras disposiciones legales que limitaban la publicidad de los procesos judiciales.<sup>807</sup> Mediante una circular de 21 de enero de 1899, la fiscalía del Tribunal Supremo excitaba el celo de los jueces para que los periódicos no penetraran en el secreto del sumario o publicaran otro simultáneo al que formaban las autoridades judiciales. El objetivo del poder público era evitar que “en las causas criminales que conmueven el sentimiento general y despierten curiosidad, los periódicos formen sumarios paralelamente al que la justicia instruye”.<sup>808</sup> Años más tarde, en 1911, se dictó una nueva disposición que restringía aun más la libertad de los periodistas en los procesos judiciales. Esta nueva orden de la fiscalía del Tribunal Supremo quiso acabar con la excesiva tolerancia de la que disfrutaban las publicaciones periódicas al dar publicidad a los debates que, por razones de moralidad, se celebraban a puerta cerrada. En ella se advertía a los jueces de que debían sancionar a todos los periódicos que difundieran detalles y circunstancias de los procesos, pues solo el mencionarlos, ya podía constituir “una ofensa a los sentimientos de pudor y decencia”. En virtud del documento, si los debates se realizaban a puerta cerrada no se podía consentir que “lo

---

<sup>807</sup> Pese a que no se habían aprobado normas especiales respecto a la publicidad de las sesiones parlamentarias, la libertad para informar sobre ciertos asuntos que se trataban en las Cámaras también quedó limitada. El gobierno declaró ante el Parlamento que los periódicos podían incurrir en responsabilidad, y ser condenados por delito de injurias y calumnias, al reproducir determinados incidentes ocurridos durante las sesiones del Congreso o el Senado que se consideraran delictivos. En estos términos lo justificó Romero: “si fuese lícito a los periódicos publicar todo, absolutamente todo lo que aquí se dijese, sin incurrir en responsabilidad, resultaría que los periódicos tendrían la inmunidad e inviolabilidad del Diputado”. Congreso, 11 de junio de 1912, Romeo, cif. 3701.

<sup>808</sup> Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1899. *Gaceta de Madrid*, 22 de enero de 1899. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Apéndice de 1899*, pp. 9-10.

que el Tribunal no hace público adquiriera una mayor publicidad por medio de la prensa, que tiene libre entrada en nuestros hogares”.<sup>809</sup> Como se puede observar, ambas medidas imponían una desinformación forzosa a la prensa periódica respecto a los juicios que más interés causaban, que no eran otros que los que se hacían a puerta cerrada e iban en contra de las leyes vigentes españolas que consagraban la publicidad de los juicios. No cabe duda de que las disposiciones aprobadas por la administración pública iban dirigidas, fundamentalmente, a evitar las opiniones y comentarios vertidos en los diarios sobre las irregularidades que habían tenido lugar en varios procedimientos judiciales, como el famoso Proceso de Montjuich.

## **2. LA PERMANENCIA DE INSTRUMENTOS DE CONTROL ENCUBIERTOS**

### **1. LA PRÁCTICA HABITUAL DE LA CENSURA TELEGRÁFICA Y EL USO FRECUENTE DE LOS FONDOS RESERVADOS**

Los instrumentos de control directo sobre la prensa se intercalaban con otros mecanismos encubiertos de control informativo, que ya habían sido utilizados por las autoridades años atrás. Uno de los medios más eficaces para la jefatura del Estado era la intervención de las redes nacionales de información, tanto del servicio telegráfico como del telefónico. En una nota confidencial del gobierno emitida a principios del siglo XX, las autoridades reconocían la práctica habitual de la censura telegráfica, aunque aseguraban que ésta se realizaba con benevolencia, y, en cualquier caso, sin intención de lastimar los intereses de los corresponsales. Más concretamente, para la administración pública la facultad de intervenir los telegramas era un derecho reconocido por el

---

<sup>809</sup> Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1911. *Gaceta de Madrid*, 11 noviembre de 1911. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo, Apéndice de 1911*, pp. 792-793.

Tratado de San Petersburgo, cuyo artículo séptimo establecía: “Las altas potestades se reservan la facultad de detener la transmisión de cualquier telegrama privado que pareciese ofrecer peligro de seguridad del Estado o que fuese contrario a las leyes del país, del orden público o las buenas costumbres”.<sup>810</sup>

Como examinábamos en capítulos anteriores, la censura ejercida en los telégrafos quedaba fundamentalmente expuesta durante los conflictos bélicos, utilizados por las autoridades para aumentar las restricciones informativas, interrumpiendo las comunicaciones telegráficas con el objetivo de evitar noticias que criticaran las actuaciones gubernamentales. Esto no fue una excepción durante la Guerra de Marruecos, ya que, a pesar de que las ciudades del norte del país estaban comunicadas con la Península por medio del cable submarino instalado en 1891, en la práctica, éste no podía ser utilizado como canal informativo por los medios de comunicación. A falta de este servicio, los periódicos madrileños se vieron en la obligación de transmitir sus crónicas utilizando otros procedimientos de difusión de noticias, como el correo o viajando en barco hasta Málaga, desde donde se enviaba toda la información, no pudiendo evitar, sin embargo, que ésta llegara con más retraso que por vía telegráfica.

En cualquier caso, la intervención de los telegramas no solo se dio respecto a la contienda en Marruecos, como prueban las numerosas manifestaciones realizadas en el Parlamento sobre la materia. En algunas ocasiones, eran los mismos políticos

---

<sup>810</sup> En la nota encontrada por Timoteo Álvarez en el A.G.A, se afirmaba también: “Anoche se tachó en los telegramas expedidos a provincias todo lo referente a las palabras ofensivas que se dirigieron al Sr. Cierva (palabras que no aparecen en el diario de sesiones), quedando sin curso alguno las que solo se ocupaban de este incidente. El relativo a las amenazas del diputado Pablo Iglesias contra el Sr. Maura se tachó en dos o tres conferencias a primera hora, antes de recibir los periódicos (...) pero después se cursaron todos los telegramas que se ocupaban del asunto, aunque suprimiendo en algunos la parte que aludía al propósito de derrocar el Régimen o las Instituciones si apoyaban al Sr. Maura...” “(...) bastaría asegurar que no se había extremado la censura puesto que se dejó circular lo más sustancial e importante de la sesión”. TIMOTEO ÁLVAREZ, J., *Restauración y prensa de masas*, pp. 98-99.



conservadores quienes solicitaban una mayor intervención de las informaciones anónimas transmitidas por el telégrafo. Así lo requirió Valero de Palma en 1904, exigiendo al gabinete liberal que ordenara al director de Comunicaciones que prohibiera el curso de telegramas que hicieran alusión a determinados delitos o emitieran conceptos injuriosos contra ciertas personas, siempre y cuando no estuvieran firmados por personas que pudieran asumir la responsabilidad.<sup>811</sup> En contraste con estas peticiones que exigían un mayor control, en las Cámaras abundaron las reclamaciones para que se delimitara el criterio utilizado en la censura telegráfica,<sup>812</sup> para poder terminar con los secuestros y detenciones arbitrarias de los telegramas.

El abuso del poder en la central de telégrafos provocaba muchos perjuicios a las empresas periodísticas, o bien porque las noticias no transmitían nunca a los periódicos, o bien porque se retrasaban y llegaban tarde a las provincias. En 1906, el diputado liberal, y también periodista, Leopoldo Romeo y Sanz acusó al gobernador de Canarias de interrumpir el servicio telegráfico por una información que no afectaba al orden público ni a la seguridad nacional, empleando “estas armas que la arbitrariedad ha puesto en sus manos, convirtiendo en una cosa delictiva”.<sup>813</sup> El gobierno liberal defendió la actuación del funcionario, y aclaró que en este tipo de casos no era necesaria la publicidad para sancionar a un periodista, porque la entrega de un telegrama a la Central de Telégrafos podía constituir delito, aunque el mismo no hubiera sido publicado, sancionándose la acción con una pena menor a la impuesta en el caso de haberse difundido por un periódico.<sup>814</sup>

---

<sup>811</sup> Congreso, 9 de noviembre de 1904, Valero de Palma, cif. 930.

<sup>812</sup> Martínez Ruiz solicitó una explicación del Estado por las frecuentes interrupciones de telegramas en el servicio de telégrafos de Madrid. Congreso, 16 de diciembre de 1908, Martínez Ruiz, cif. 1726.

<sup>813</sup> Congreso, 30 de octubre de 1906, Romeo, cif. 3498.

<sup>814</sup> Congreso, 30 de octubre de 1906, ministro de Gracia y Justicia, cif. 3498.

Además de la intervención telegráfica, la administración pública aprovechaba también su control sobre el teléfono para escuchar las conferencias entre los corresponsales y las empresas periodísticas, cortando las líneas cuando entendían que se estaba difundiendo una información contraria a los intereses políticos. De la misma manera que lo hacía del servicio de telégrafos, el Estado abusaba de la intervención telefónica sin mediar ningún conflicto peligroso a nivel nacional o territorial. El poder público justificaba la práctica recurrente de la censura en la necesidad de evitar que ciertas noticias llegaran a los territorios que se encontraban inmersos en “gravísimos estados nacionales”. Sin embargo, fueron muchos los casos denunciados en el Parlamento que dejaron al descubierto que la misma se utilizaba para limitar la libertad de los periódicos. En 1908, el ejecutivo conservador interrumpió en dos ocasiones la conferencia telefónica de *La Voz de Guipúzcoa*, periódico separatista, porque consideraba “peligroso” que se divulgara libremente por todos los ámbitos de las provincias vascongadas el discurso pronunciado por el republicano Melquíades Álvarez. El periodista Soriano lamentó los “excesos incalificables” del gobierno, que había utilizado “los mágicos recursos de que dispone la censura, colgada del teléfono”, para impedir que las palabras del político llegaran a todo el país.<sup>815</sup> Esta intervención parcial de las líneas telefónicas era perjudicial, especialmente, para las empresas periodísticas, como así lo hizo constar Joaquín Salvatella en 1911, quién calificó este tipo de censura como “absurda y ridícula”, ya que el ciudadano “se enteraba absolutamente de todo lo que el Gobierno no quiere que se entere”, y, sin embargo, provocaba pérdidas económicas a las redacciones de los periódicos.<sup>816</sup>

---

<sup>815</sup> Congreso, 24 de febrero de 1908, Soriano, cif. 4870.

<sup>816</sup> Congreso, 14 de marzo de 1911, Salvatella, cif. 131.

Junto con el control telegráfico y telefónico, otro de los mecanismos usados por las autoridades para controlar a los periódicos eran los “fondos de reptiles” a cargo del ministerio de la Gobernación, que siguieron presentes durante estos años del siglo XX, a causa de la corrupción política en la que se sustentaba la Restauración, y de la precariedad material en la que aún vivían muchas publicaciones de la época.<sup>817</sup> La existencia de estas subvenciones secretas quedó expuesta a través de un documento de Eduardo Dato, ministro de Gobernación durante el mandato conservador de Silvela. En el impreso, encontrado por el profesor Carlos Seco Serrano, se pueden ver detalles concretos sobre las ayudas estatales concedidas a algunas publicaciones periódicas durante los años 1899 y 1900, tales como *La Lealtad*, *La Correspondencia de España*, *Diario Español*, *La Ilustración Católica*, *El Siglo*, *El Día*, *El Resumen* o *La Revista Europea*, o los diarios militares *El Ejército Español*, *Diario Universal* o *Diario de la Marina*.<sup>818</sup> El historiador Álvarez Junco confirmó, más tarde, que el periodista republicano más influyente de aquellos años, Alejandro Lerroux, figuraba también entre los que recibieron financiación secreta de la Administración pública.<sup>819</sup>

Los fondos de reptiles continuaron manifestándose de diferentes formas, desde sobres de dinero a cambio de noticias favorables hasta pagos a los propios periodistas, a los que se les mantenía en nómina de algún ministerio, práctica que ya se daba a finales de siglo XIX. También se costearon anuncios por encima del precio real y se dieron ayudas a los periódicos por medio de paquetes de suscriptores que eran moralmente forzados.

---

<sup>817</sup> En la jerga periodística de comienzos de siglo se daba el denigrante calificativo de “sapos” a unos periódicos que se publicaban cuando podían y que vivían de los “fondos de reptiles”. Solo imprimían unos cuantos ejemplares, se tiraban en la misma imprenta, y en lo único que variaban unos de otros era en la cabecera, algún anuncio y el artículo de fondo con el que servían a sus fines. GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo español*, p. 73.

<sup>818</sup> SECO SERRANO, C., “Gastos reservados = Fondos de reptiles”, NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M., MARTÍNEZ DE LAS HERAS, A., CAL MARTÍNEZ, R., (coordinadores), *Libro homenaje al profesor José Altabella*, Madrid, Universidad Complutense, 1997, pp. 285-294.

<sup>819</sup> ÁLVAREZ JUNCO, T., *Estructura subterránea de la prensa de la Restauración. Madrid en la sociedad del siglo XIX*, Madrid, Revista Alfoz, 1986.

Con el paso de los años, según advirtió el político e historiador Gabriel Maura Gamazo, el empleo de las subvenciones estatales perdió importancia frente a la práctica, cada vez más común, de conceder a los diarios una serie de remuneraciones, tales como el reparto de credenciales o expedientes, o el trato de favor en el encasillado electoral.<sup>820</sup>

En cualquier caso, entre los periodistas de la época se conocía la existencia de estos ingresos, como revelan algunos comentarios vertidos en la prensa de la época: “¿Había en Gobernación *sapos y culebras*? ¿Existen *reptiles* en nuestra fauna política? Si el Sr. Maura ha hecho, con razón, título de gloria el haberlos limpiado el comedero, es porque existían. ¿Comían? Luego eran. Mas ¿es que el Sr. Maura (...) ha extinguido los reptiles criados, alimentados y cebados en la charca del Estado? *La Época* dirá seguramente que inventamos; pero nosotros y con nosotros muchos, sabemos que el Sr. Maura y su periodista particular (gratificado con fondos, según *El Globo*, de esos que curan los secretos males), dicen que no ha habido extinción del vil reptil, sino traslado. (...) Que en la Presidencia hay un nido de reptiles lo afirmó hace días *El Nacional*. Que el Sr. Dato distrae sus ocios cebando culebrones antimauristas, es cosa que se dice, susurra y murmura en Gobernación”.<sup>821</sup> Otros, como el redactor de *El Liberal*, Martínez Viérgol, con seudónimo “El sastre del Campillo”, defendieron estas subvenciones estatales: “Maura no sabe nada de la prensa, ni si quiera lo de mis subvenciones, que seguiré cobrando con la misma serenidad (...) ¿Hacernos sufrir tanto a unos doce mil periodistas españoles que, sobre poco más o menos, venimos a cobrar lo mismo del

---

<sup>820</sup> DUQUE DE MAURA, *Historia crítica del reinado de Alfonso XIII durante su minoridad, bajo la Regencia de su madre doña María Cristina de Austria*, Barcelona, Montaner y Simón, 1919-1925, vol. II, pp. 220-221.

<sup>821</sup> *El País*, “La rotativa de Maura”, 7 de mayo de 1903.

llamado *fondo de reptiles*, para luego salir con que lo único que tiene que echarnos en cara es que no sabemos sostener la afirmación lanzada por nuestras plumas”.<sup>822</sup>

## 2. LOS ABUSOS COMETIDOS POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Como hemos analizado al inicio de este capítulo, los jueces y tribunales competentes para conocer los delitos de imprenta realizaron una rigurosa aplicación de los preceptos penales alentados por el gobierno y los fiscales mediante sucesivas circulares que les exigían el máximo rigor a la hora de ejecutar la Ley de Imprenta. Estos mecanismos directos de limitación de la libertad se confundieron con otros métodos arbitrarios utilizados por la propia administración de justicia que, inducida y sugestionada por la presión directa y constante del poder público, persiguió y censuró a aquellos periódicos contrarios al régimen. Los atropellos judiciales adoptaron distintas formas a lo largo de los años, desde procedimientos notoriamente irregulares hasta resoluciones restrictivas y en contra ostensiblemente de la libre emisión de ideas.

Entre los primeros, cabe destacar como uno de los casos más claros de abuso judicial la condena por el Tribunal Supremo del periódico *El Mercantil de Aragón*, cuando en primera instancia no había sido objeto siquiera de acusación. El diario republicano había publicado tres sueltos en los que elogiaban la actitud de aquellos contribuyentes catalanes que se resistían a pagar los tributos gubernamentales, y anunciaba que los ciudadanos acabarían por imponerse al poder público si éste no aceptaba sus pretensiones y se sometía a ellas. A pesar de que el fallo del juez municipal había sido absolutorio por no haberse formulado acusación contra el periodista, el fiscal interpuso recurso de casación sin que quedara constancia alguna de quién había apelado la

---

<sup>822</sup> *El Liberal*, “El esclavo de su palabra, 5 de febrero de 1904.

primera sentencia. En la resolución final, el Tribunal Supremo declaró que el juez ordinario había cometido un error de derecho, y que los conceptos expresados en el diario excitaban a la desobediencia de las leyes y los mandatos de las autoridades, y que, por tanto, el periodista había cometido la falta establecida en el párrafo cuarto del artículo 584 del Código Penal.<sup>823</sup>

Durante el procedimiento contra el diario de Logroño *El Progreso Riojano*, en mayo de 1911, por la reproducción de un folleto que se consideró injurioso contra la religión católica, también se revelaron ciertas irregularidades. Pese a que el impreso había sido difundido en periódicos de Madrid, y Valencia e, incluso, en el extranjero, sin merecer acción de la justicia, el jurado de Logroño condenó al periodista que lo había divulgado a más de tres años de prisión correccional. Tras emitir la sentencia, los miembros del Tribunal suscribieron un documento en el cual manifestaban claramente que no habían tenido intención de castigar al periodista, y echaron la culpa a la redacción “confusa” de una de las preguntas del veredicto, con lo que, independientemente de lo que el reportero respondiese, el fallo solo podía ser de culpabilidad. El político y escritor republicano Álvaro de Albornoz calificó de “monstruoso” que, en un país libre, se condenase por supuestos delitos de opinión a un honrado periodista con “penas aflictivas de esta naturaleza”, y acusó al poder judicial de ser el “brazo secular al servicio del espíritu de venganza de la Iglesia”.<sup>824</sup>

Sin embargo, no solo los procesos irregulares dañaban la libertad de imprenta, ya que la propia jurisprudencia instaurada por los tribunales era perjudicial para hacer realidad la misma. Durante estos años existió una gran polémica en torno a las sentencias que

---

<sup>823</sup> STS 5 de abril de 1900. *Gaceta de Madrid*, 18 de febrero de 1901, p. 30.

<sup>824</sup> Congreso, 27 de mayo de 1911, Albornoz, cif. 1102.

afectaban a la reproducción de artículos injuriosos. Siguiendo la línea de los fallos del Tribunal Supremo de finales del siglo XIX, se reafirmó la idea de que la transcripción de informaciones injuriosas anteriormente publicadas era sancionable, independientemente del delito producido en la primera publicación. Fueron muchos los casos resueltos en la materia, ya que era común que los diarios más radicales, como forma de protesta contra los abusos del poder público, difundieran artículos inofensivos que habían sido censurados previamente por el Estado, para que la sociedad española fuera consciente del control informativo al que eran sometidos éstos. Estas decisiones judiciales dejaban en absoluta indefensión a los periodistas, porque, a pesar de no haber sido denunciado un determinado artículo, el mero hecho de reproducirlo podía conllevar una sanción, si así lo consideraba el juez de su territorio.

A propósito de un nuevo caso en el que se condenaba a un periódico de Cádiz por insertar un artículo en contra del Conde de Romanones, Azcarate denunció ante las Cámaras la injusticia en la que incurrían los órganos judiciales a la hora de aplicar de distinta manera el Código Penal en función del territorio en el que se encontraba el periódico. En el caso concreto, se trataba de un periodista que había difundido un suelto insertado en la prensa catalana, con la intención de condenar las críticas que éste dirigía al entonces ministro de Gobernación. Para ello, el articulista había emitido una nota que decía: “Para que se vea como las gastan allí, allá va ese artículo en que se maltrata a un Ministro de la Corona”, y continuaba: “Por causas mucho más leves han sido perseguidos los periodistas, y éste no lo ha sido, aunque el autor del artículo merece un bozal”.<sup>825</sup> A pesar de la clara oposición del diario hacia el artículo difundido, el gobierno justificó la condena emitida por el juez andaluz, afirmando que existía un

---

<sup>825</sup> Congreso, 20 de marzo de 1908, Azcarate, cif. 5300-5301.

elemento subjetivo a la apreciación del juzgador, y que los fallos podían ser distintos según las circunstancias de cada localidad. La arbitraria postura jurisprudencial no solo afectaba a los que transcribían informaciones contenidas en otros diarios, sino que los propios autores del escrito difundido podían ser objeto de denuncia, aun cuando éste no hubiera autorizado su difusión, porque, para el Tribunal Supremo, la existencia del delito no dependía del periódico utilizado para dar publicidad a la injuria, sino del hecho mismo de habérsela dado.<sup>826</sup>

En la misma línea restrictiva, el máximo órgano judicial afirmó que la injuria se cometía tantas veces se publicaba el concepto ofensivo, por lo que, si se reproducían y sostenían las mismas ofensas después de publicarlas en un escrito anterior, el autor de ambos era reo de dos delitos y no de uno sólo, por “la publicidad y la insistencia con que en dos números distintos del periódico se mantuvieron”.<sup>827</sup> De la misma forma, la publicación de dos artículos injuriosos distintos contra una misma autoridad en un solo periódico, pero en días diferentes, constituía dos delitos por la “reiteración determinante de la publicidad en la delincuencia”.<sup>828</sup> En ocasiones, el Tribunal Supremo consideró delito la mera reproducción en un periódico de conceptos ofensivos publicados en otro, a pesar de que el periodista había alegado haberlo insertado para protestar y desmentir la información, y de que el juez de primera instancia no había apreciado intención de agraviar por parte del reo.<sup>829</sup> Un caso parecido se resolvió años más tarde respecto a un artículo que se hacía eco de ciertos rumores que afectaban a la falta de moralidad de un

---

<sup>826</sup> STS 20 de febrero de 1904. *Gaceta de Madrid*, 27 de mayo de 1904, p. 124.

<sup>827</sup> STS 12 de julio de 1902. *Gaceta de Madrid*, 8 de enero de 1903, p. 18. La misma línea jurisprudencial aparece en: STS 13 de mayo de 1903. *Gaceta de Madrid*, 2 de agosto, p. 11.

<sup>828</sup> STS 10 de enero de 1905. *Gaceta de Madrid*, 24 de agosto de 1905, p. 40.

<sup>829</sup> STS 7 de mayo de 1902. *Gaceta de Madrid*, 24 de noviembre, p. 167.



funcionario público, y que fue considerado como emisor de expresiones injuriosas aunque el autor afirmó no dar crédito a las mismas.<sup>830</sup>

### **3. LAS DENUNCIAS EN EL PARLAMENTO POR LAS ILEGALIDADES COMETIDAS CONTRA LOS PERIÓDICOS DE LA OPOSICIÓN**

Durante estos convulsos primeros años del siglo XX aumentaron también los abusos e ilegalidades de los gobernadores de provincias y demás autoridades contra los periódicos que se oponían al régimen de la Restauración, especialmente, contra la prensa republicana y la regional. Los mecanismos utilizados por los mandos gubernamentales para limitar la libertad de estas publicaciones quedaron plasmados, no solo en la extensa jurisprudencia analizada en capítulos anteriores, sino en las múltiples quejas que los periodistas, diputados y senadores realizaron en el Parlamento.

Una de las prácticas más utilizadas para censurar de forma indirecta a estas publicaciones eran las denuncias sistemáticas realizadas por los fiscales por meras suposiciones o presunciones, que acababan en secuestros ilegales ejecutados por la policía. Mientras que la Ley de Imprenta consideraba publicado un periódico solo cuando salían a la calle tres o más ejemplares, y exigía que, una vez presentados ante la autoridad competente, el fiscal hiciera la denuncia correspondiente, en la práctica, las publicaciones republicanas y regionalistas eran recogidas sin ni siquiera haberse publicado.<sup>831</sup> Las denuncias a estos periódicos se realizaban a últimas horas de la tarde, provocando que las empresas periodísticas, desconocedoras de los mismos, enviaran sus

---

<sup>830</sup> STS 28 de diciembre de 1904. *Gaceta de Madrid*, 23 de agosto de 1905, p. 29.

<sup>831</sup> El secuestro se hacía conforme al artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que facultaba a las autoridades gubernativas y a la administración de Correos para secuestrar los ejemplares cuando el juez de instrucción correspondiente abriera un sumario por delito de imprenta.

ejemplares a la central de Correos, donde se detenían todos los números y se anulaban los sellos que autorizaban su difusión. Los constantes atropellos contra la prensa radical no solo provocaban pérdidas económicas en las redacciones, sino que, lo que era más importante, dejaban sin efecto la legislación de imprenta.

Los abusos policiales eran especialmente frecuentes en el caso del periódico republicano *El País*, constantemente denunciado por las autoridades y contra el que se practicaban secuestros injustificados, sin dar ninguna posibilidad al diario de rectificar los artículos denunciados. La censura previa encubierta practicada contra este periódico fue muy criticada por periodistas influyentes de la época, como Lerroux, quién no dudó en afirmar que la libre emisión de ideas estaba limitada a lo que le interesaba al gobierno. Muy coherentemente, el republicano alegó que algunos diarios no gozaban de las mismas garantías y derechos que otros, y estaban sujetos al “capricho” del poder público a la hora de regular todo lo que se refiere a la exposición de las opiniones y la libertad de pensamiento y de la crítica.<sup>832</sup> En los mismos términos, Emilio Junoy se quejó de la vejación que venía sufriendo *El País*, alegando que la reiteración de las imputaciones que se le atribuían, que en su mayoría terminaban en sobreseimiento o en absoluciones, era una forma indirecta de persecución gubernativa, y no respondía a ningún criterio de carácter legal y jurídico. Asimismo, el político republicano reveló que los agentes de la autoridad recogían los ejemplares con el “sable en la mano”, antes, incluso, de que el ministerio público hubiera podido leer y enterarse de si algún artículo contenía, o no, algo que fuera punible.<sup>833</sup>

---

<sup>832</sup> Congreso, 17 de diciembre de 1901, Lerroux, cif. 2546.

<sup>833</sup> Congreso, 25 de febrero de 1904, ministro de Gracia y Justicia, cif. 3982.

El sistema preventivo al que eran sometidos los periódicos de la oposición oprimía la libertad de estos y creaba una gran diferencia respecto a la forma de aplicar la Ley de Imprenta. Mientras que en los procesos incoados contra los periódicos monárquicos el fiscal señalaba el texto denunciado con tiempo, permitiendo que éstos circularan con toda facilidad una vez suprimido el suelto punible; el proceder contra la prensa radical perjudicaba deliberadamente sus intereses materiales, al no poder ser difundido el periódico en su totalidad ni divulgado a las provincias. Esto se producía porque las denuncias no solo se hacían tarde, sino que, además, en ellas no constaba el artículo o suelto considerado pernicioso.<sup>834</sup> A pesar de la desigualdad notoria con la que se trataba a este tipo de publicaciones, el gobierno, independientemente del partido que se encontrara en el poder, justificaba las actuaciones de las autoridades, porque entendían que, de transcurrir más tiempo entre la denuncia y la recogida, los periódicos podrían difundir los artículos denunciados en contra de los intereses estatales.

El aumento de las quejas respecto a los secuestros de los periódicos de ideas más revolucionarias llevó al gobierno liberal, por medio del Conde de Romanones, a emitir una circular en 1906 dirigida a todos los juzgados de instrucción, en la que se daban instrucciones sobre cómo proceder contra las publicaciones periódicas que eran denunciadas por artículos periodísticos susceptibles de haber cometido algún delito de imprenta. La disposición pretendía acabar con las diferencias entre los periódicos a la hora de ejecutar los secuestros de las publicaciones, y dejaba constancia, por primera vez, de que la incautación de un periódico producía efectos más perjudiciales que si se hacía de una simple hoja o estampa, ya que, en el primer caso, la recogida de la tirada alcanzaba tanto al artículo objeto de la sanción penal como a aquello que, lejos de

---

<sup>834</sup> *El País* de 6 de octubre de 1904 fue denunciado con una nota del fiscal de imprenta en la que se decía: “Participo a usted que ha sido denunciado el número 6.273, correspondiente al día de hoy”. Congreso, 6 de octubre de 1904, Morayta, cif. 52-53.

constituir materia delictiva, podía ser motivo de “general cultura y honesto pasatiempo”.<sup>835</sup> En el documento se ordenaba a los jueces de todas las provincias que, una vez incoado un sumario por delito de imprenta, informaran inmediatamente al periódico de forma “clara y categórica” acerca de qué noticia había motivado el proceso, para dar así la oportunidad de poder retirar la misma, derecho que se había negado hasta entonces a toda la prensa de la oposición. El secuestro de las publicaciones, por tanto, debía limitarse a aquellos ejemplares que contuvieran el artículo estimado punible, sin que, en ningún caso se prohibiera la circulación del periódico que se presentara en las oficinas de Correos o la venta del mismo una vez suprimida la parte denunciada.<sup>836</sup> El gobierno liberal entendió que, con esta mejora, no se faltaba al fundamento del precepto legal, cuya finalidad debía ser que el artículo punible no produjera efectos negativos en la sociedad, y que, asimismo, se respetara la propiedad de las empresas periodísticas.

A pesar del avance que suponía la circular emitida por el gabinete liberal, ésta no acabó con las ilegalidades, y, tres años después, *El País* seguía sufriendo múltiples denuncias que no se hacían con arreglo a las leyes. La práctica más común seguían siendo los avisos al periódico con poco tiempo de antelación, de tal manera que éste no tenía margen para retirar el artículo denunciado y poner en su lugar uno nuevo.<sup>837</sup> El abuso legal provocaba que las tiradas del diario republicano fueran prohibidas en su totalidad, dejando sin efecto la Real Orden del Conde de Romanones que amparaba la libre circulación de un periódico, si éste retiraba el artículo objeto de la denuncia.

---

<sup>835</sup> Real Orden circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 7 de Septiembre de 1906 sobre el secuestro de los periódicos denunciados por delitos de imprenta. *Gaceta de Madrid*, 9 de Septiembre de 1906, p. 997. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°34.

<sup>836</sup> Real Orden circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 7 de Septiembre de 1906.

<sup>837</sup> El número del 23 de mayo de 1909 fue interceptado en la central de correos en su totalidad, tras haber notificado a *El País* que se había iniciado un sumario contra un artículo de su publicación a las siete de la noche.

Nuevamente nos encontramos ante una vulneración de la Ley de 1883 que, lejos de castigar los excesos y delitos que se cometían por medio de la imprenta, transgredía la propiedad de los periódicos que legítimamente se habían constituido. En 1909 Romero requirió al gobierno conservador que ordenara a los funcionarios de correos una minuciosa inspección de los paquetes enviados por las empresas, que garantizara el correcto cumplimiento de la ley.<sup>838</sup> Sin embargo, Juan de la Cierva, ministro de Gobernación, declaró que nada se podía hacer si las denuncias se realizaban por la tarde, “pocas horas antes de aquella en la cual los correos se despachan en Madrid”, debido a la “gran dificultad material” que suponía para los empleados de Correos examinar todos los ejemplares.<sup>839</sup>

Años más tarde se obtuvo la misma respuesta del gabinete liberal, cuando, de nuevo, Romero reprochó la persecución sistemática del poder público hacia la prensa de la oposición. Concretamente, en la edición de Madrid de *España Nueva y España Libre*, que fueron denunciadas por difundir el artículo “Agitación obrera. Desórdenes en las calles”, en el que se informaba de una serie de revueltas sociales. La arbitrariedad con la que actuaban los gobernadores les llevó a detener todos los paquetes de ambos periódicos dirigidos a otros territorios peninsulares, sin que en la edición provincial de ambos estuviera incluido el artículo denunciado. Esta actuación ponía de relieve, una vez más, que existían periódicos que para el Estado eran denunciables por su ideología, y que, independientemente de la información contenida en ellos, debían ser silenciados. Con estas palabras se lamentaba Romero: “¿Por qué un fiscal ha de poder por un capricho denunciar, y, desenvainando el lápiz rojo, dejar una estela de sangre como la

---

<sup>838</sup> Congreso, 24 de mayo de 1909, Romero, cif. 4375-4376.

<sup>839</sup> Congreso, 24 de mayo de 1909, ministro de Gobernación, 4379.

que estamos sufriendo a diario?”.<sup>840</sup> El ejecutivo liberal, como ya lo había hecho el partido conservador, volvió a excusar la labor de los funcionarios de correos en la dificultad de comprobar todos los números denunciados: “Siempre tiene la Administración que fiar a la buena fe de los periódicos, porque (...) con la premura con que se llevan los paquetes de los periódicos a la Central de Correos, (...), no hay posibilidad humana de ir repasando número por número”.<sup>841</sup> La respuesta de los republicanos fue clara y contundente: para evitar este tipo de actuaciones que perjudicaban a la libertad de prensa, se debía suprimir el secuestro: “El ideal sería que no hubiera secuestros de periódicos, cosa que en ningún país civilizado existe”.<sup>842</sup>

Las irregularidades cada vez más comunes entre los periódicos según fuera su ideología quedaron expuestas, de nuevo, en 1912, a raíz de la denegación de un suplicatorio interpuesto por Bugall contra el director de *España Nueva*, y también diputado, Soriano, por la difusión de un artículo que había sido copiado casi literalmente del diario conservador *La Época*. Tras la intervención del Congreso, que había dado la razón a Soriano, el fiscal abrió un sumario al periódico republicano por delito de injurias, dejando libre, sin embargo, al diario conservador. Para Soriano esta actuación de la autoridad judicial era un exceso de “tiranía y barbarie”, ya que, al contrario de lo que ocurría en otros sistemas de imprenta europeos, las cabeceras españolas tenían que lidiar contra “un fiscal que quiere colocar su toga sobre el Parlamento”.<sup>843</sup> A pesar de la iniquidad con la que actuaba otra vez la autoridad judicial, el gobierno liberal consideró que no debía inmiscuirse en las funciones de los tribunales de justicia, siendo las decisiones de las Cámaras independientes de la actuación de éstos.

---

<sup>840</sup> Congreso, 6 de junio de 1911, Soriano, cif. 1305.

<sup>841</sup> Congreso, 6 de junio de 1911, ministro de la Gobernación, cif. 1309.

<sup>842</sup> Congreso, 6 de junio de 1911, Soriano, cif. 1310.

<sup>843</sup> Congreso, 4 de junio de 1912, Soriano, cif. 3545-3546.

No obstante, junto a estas irregularidades en los secuestros de los ejemplares de los periódicos opuestos al régimen, existieron multitud de protestas por la excesiva violencia con la que eran tratados muchos de los redactores y directores de las publicaciones más revolucionarias. Rodríguez de la Borbolla informó ante el Congreso acerca de que un redactor del diario republicano *El Noticiero Sevillano* había sido “amarrado” y conducido a prisión de forma muy violenta;<sup>844</sup> mientras que, tres años más tarde, fue el político, y también periodista, Blasco Ibáñez, quién denunció que el alcalde de Gandia había mandado golpear al director de *Gandia Moderna*.<sup>845</sup> En 1910, Emiliano Iglesias notificó que un concejal del ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda había allanado la casa del director de *La Vanguardia*, Sánchez Reina, periódico republicano que se publicaba en esa localidad y venía denunciando los abusos administrativos que allí se cometían.<sup>846</sup>

La censura indirecta practicada por la administración pública se reveló también a la hora de conceder los indultos a los periodistas. El procedimiento llevado a cabo por el ejecutivo dejaba patentes ciertas desigualdades entre los diputados o senadores que cometían delitos de imprenta, y los periodistas obreros,<sup>847</sup> así como entre los propios periodistas en función de la línea ideológica de su periódico.<sup>848</sup> Además, se darían otros mecanismos indirectos característicos de finales del siglo XIX, como la interposición de multas por parte de los gobernadores de provincia por la comisión de delitos de imprenta. Las autoridades siguieron abusando de esta facultad, concedida en el artículo 22 de la Ley Provincial, pese a la orden del gobierno liberal que había negado esta

---

<sup>844</sup> Congreso, 29 de marzo de 1900, Rodríguez de la Borbolla, cif. 5606.

<sup>845</sup> Congreso, 2 de diciembre de 1903, Blasco Ibáñez, 2644.

<sup>846</sup> Congreso, 15 de octubre de 1910, Emiliano Iglesias, cif. 1092.

<sup>847</sup> Lerroux denunció la situación de varios periodistas como Soler, Ignacio Clariá, y Joaquín Julio Fernández, que, pese al indulto concedido por el gobierno, llevaban varios meses en prisión preventiva.

<sup>848</sup> Romero reveló ante el Congreso que el gobierno había concedido un indulto al periodista Serrano Bustos, del periódico *El Combate*, y, sin embargo, mantenía en la cárcel a Lerroux, quien tenía idéntica condena a la del primero. Congreso, 12 de febrero de 1909, Romero, cif. 2503-2504.

competencia a las autoridades provinciales. Tras las quejas en las Cámaras por la sanción impuesta por el gobernador de provincia de Irun a *La Frontera* en virtud de este precepto, Sánchez Guerra, en calidad de ministro de Gobernación, confirmó que este tipo de sanciones eran ilegales, y que, por tanto, no debían ser aplicadas por las autoridades.<sup>849</sup> Sin embargo, no fue la única competencia asumida por los alcaldes y gobernadores de los territorios para restringir la libre emisión de ideas de la prensa que criticaba su gestión política, ya que, muchos de ellos continuaron emitiendo órdenes o comunicados en los que se prohibía pregonar algunos periódicos, porque “así lo aconsejaban las circunstancias”.<sup>850</sup>

### **3. LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA**

Además del gobierno de la Restauración, ya veíamos en anteriores capítulos como otras fuerzas del régimen influyeron en la represión de la libertad de prensa. La Iglesia era un pilar básico en la Restauración y tenía un importante papel dentro del Estado, lo que le sirvió para ver satisfechas muchas de sus demandas sobre la restricción del derecho de emisión de ideas, especialmente bajo el gobierno conservador de Maura, que se erigió como un partido estable y eficaz para defender los derechos de la institución católica.<sup>851</sup> En aquellos años, una de las críticas más insistentes del clero era la libertad desmedida que había propiciado la promulgación de la Ley de Imprenta de 1883, beneficiando el aumento de la llamada “mala prensa”, que opinaba libremente sobre asuntos religiosos.

---

<sup>849</sup> Congreso, 23 de diciembre de 1903, ministro de la Gobernación, cif. 3422.

<sup>850</sup> En marzo de 1904, el gobernador de Valladolid prohibió pregonar los periódicos más radicales de esa localidad, como *El Norte*, porque podían perturbar el orden social. Congreso, 10 de marzo de 1904, ministro de la Gobernación, cif. 4321.

<sup>851</sup> REVUELTA GONZÁLEZ, M., “Las creencias: contrastes ambientales en torno a las creencias religiosas”, *La época de la Restauración (1875-1902). Civilización y cultura*, Madrid, Espasa Calpe, 2002, pp. 51-67.



En palabras de León XIII, la absoluta libertad de imprimir cualquier cosa, “sin freno ni consideración alguna”, no era por sí misma un bien del que gozara la sociedad, sino “fuente y origen de muchos males”.<sup>852</sup> Con apoyo en esta doctrina se redactó en España el catecismo de la “buena prensa”,<sup>853</sup> que calificaba de malos periódicos los de ideología socialista, republicana, radical y liberal, así como la que claramente se posicionaban como anticlericales o eran inmorales y pornográficos. La preocupación de la Iglesia respecto a estas publicaciones se hizo patente en las acusaciones del clero por la desigual aplicación de la legislación de imprenta por parte de los gobernadores y los tribunales de justicia, a los que se les acusaba de despreciar las denuncias de los impresos que atacaban a la religión, y, sin embargo, aplicar con mayor rigor cualquier enjuiciamiento negativo a otras instituciones.

Analizando la jurisprudencia en la materia, podemos afirmar que, aunque muchas de las condenas impuestas a los periodistas eran sobre injurias al Gobierno, el Ejército o el sistema monárquico, existía una sensibilidad especial cuando se trataba de abordar las cuestiones religiosas, principalmente, porque la Iglesia era una institución básica en la que se apoyaba el régimen de la Restauración. Prueba de ello fue la fuerte represión gubernamental ejercida contra los periódicos republicanos, especialmente contra aquellos diarios manifiestamente anticlericales como *El Motín* o *La Palabra Libre*, que constituían el principal instrumento de movilización social contra la religión.<sup>854</sup> La persecución constante a los periodistas socialistas, republicanos y demócratas por supuestos delitos de escarnio a la religión coaccionó en muchos casos la libertad de

---

<sup>852</sup> BARRERA, C., *El periodismo español en su historia*, Barcelona, Ariel Practicum, 2000, p. 159.

<sup>853</sup> El término “Buena Prensa” surgió en París en 1873, al establecer los agustinos la “Maison de la Bonne Presse”. En España, los primeros periódicos católicos surgieron durante la Guerra de la Independencia.

<sup>854</sup> SUÁREZ CORTINA, M., “Élites republicanas y periodismo en la España de fines del siglo XIX”, *Les élites et la presse en Espagne et en Amérique latine: des Lumières à la seconde guerre mondiale*, Madrid-Bordeaux-Aix en Provence, Casa de Velázquez, 1997, pp. 86-87.

opinar y discutir sobre los asuntos religiosos.<sup>855</sup> Así pues, la actuación jurisprudencial nos dejó claras muestras de la influencia de la institución religiosa a la hora de condenar a los periodistas por delitos de imprenta.

Entre las decisiones más importantes, el Tribunal Supremo condenó a un periodista por proferir ofensas a un cura, que no había declarado en contra de la publicación, aclarando que, en caso de cometerse injurias contra cualquier miembro de la institución eclesiástica, se podía perseguir al periódico sin ser denunciado por el propio agraviado.<sup>856</sup> El delito de desacato no solo se sancionaba respecto a las ofensas a las autoridades eclesiásticas, sino, también, a las expresiones “incorrectas” que se hicieran sobre la religión oficial de la Nación, que no era otra que la católica. Prueba de ello fue el fallo del Tribunal Supremo por un suelto publicado en un periódico, que, bajo el epígrafe “Consumatum est”, describía la religión como una “institución capitalista”, que estaba formada por “sacerdotes imbéciles”. La Audiencia condenó al periodista por delito de desacato con el agravante de la publicidad, por haberse realizado por medio de la imprenta, al entender que se trataba de manifestaciones altamente ofensivas para “una clase respetable del Estado.”, castigado en el párrafo 2º del artículo 482 del Código Penal.<sup>857</sup> En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo en 1914, por un escrito que comenzaba con frases ofensivas a los cristianos, y acusaba a la Iglesia de practicar un “doble juego”, y de no ser auténtica. La Sala entendió que el artículo ocasionaba descrédito y deshonor a la institución católica ya que, tal y como se encontraba establecida en España, los miembros de la misma “constituyen consiguientemente una

---

<sup>855</sup> El periodista socialista Vigil fue condenado por la Audiencia de Oviedo a más de tres años de prisión por afirmar: “no me parece ortodoxa, dogmática, santa, respetable la infalibilidad del Papa o cualquiera otra de las cosas que consagra la religión católica”. Congreso, 20 de junio de 1904, Lerroux, cif. 5254.

<sup>856</sup> STS 2 de diciembre de 1904, *Gaceta de Madrid*, 23 de junio de 1905, p. 41.

<sup>857</sup> STS 29 de abril de 1908. *Gaceta de Madrid*, 17 de agosto de 1909, p. 127. En la misma línea, se condenó a un periodista por delito de injurias graves contra una pastoral religiosa: STS 17 de enero de 1913. *Gaceta de Madrid*, 15 de agosto de 1913, p. 18.

clase oficial dentro del Estado, siendo este el fundamento de la autoridad reconocida a su jerarquía para los efectos del Código Penal”.<sup>858</sup>

Curiosamente, uno de los pocos fallos emitidos por el Tribunal Supremo donde consideró que el derecho a la crítica periodística estaba por encima del delito de injurias, se produjo a favor de un articulista católico. Con motivo de las elecciones provinciales de Burgo de Osma, el periodista había publicado dos sueltos, acusando al candidato republicano, Manuel Ayuso, de alardear de irreligión y ser autor de “un inmundo y nauseabundo folleto que ningún cristiano podía leer”. Asimismo, insinuaba que los buenos católicos no podían elegirle, ya que, hasta su padre “huiría de él como un apestado”.<sup>859</sup> A pesar de la extensa jurisprudencia en la materia, en la que expresiones menos ofensivas habían sido castigadas como injurias graves, el Tribunal entendió que existía crítica periodística y no delito de injurias: “considerando que en toda contienda política, y más si tiene carácter electoral como éste, es no solo lícito, sino hasta el ejercicio de un derecho, la exposición y defensa de las propias ideas para discutir, criticar y censurar las del contrario, siempre que no lleguen a la difamación o al insulto, y por consiguiente, que no toda frase proferida en sentido de crítica o censura, aunque moleste o mortifique el ánimo de alguna persona, constituye injuria punible”.<sup>860</sup> Un ejemplo más de la arbitrariedad con la que se resolvían los delitos cometidos por medio de la imprenta, ya que, en este caso concreto, pese a cumplir la condición reiteradamente declarada por el Supremo de que existiera una intención manifiesta de desacreditar a las personas a las que se dirigían, la administración pública prefería dejar libre al periodista católico que estaba defendiendo los intereses estatales, antes que defender el honor del político republicano que tenía ideas opuestas al régimen.

---

<sup>858</sup> STS 14 de febrero de 1914. *Gaceta de Madrid*, 3 de septiembre de 1914, p. 39.

<sup>859</sup> STS de 9 de mayo de 1911. *Gaceta de Madrid*, 15 y 17 de Septiembre de 1911, p. 116.

<sup>860</sup> STS de 9 de mayo de 1911. *Gaceta de Madrid*, 15 y 17 de Septiembre de 1911, p. 116.

Junto con las actuaciones de las autoridades judiciales, las acciones gubernamentales se destinaron también a satisfacer los intereses de la Iglesia. Con este propósito fueron aprobadas una serie de medidas legales contra los escritos obscenos, que causaban especial inquietud en la institución religiosa, y sirvieron de pretexto para limitar aun más la libertad de prensa. En 1908, el ministerio fiscal emitió una circular en la que exponía el criterio al que se debían ajustar las publicaciones periódicas en relación con los anuncios o avisos que se difundían en los periódicos. Específicamente, se acusaba a algunas hojas impresas de producir el menoscabo de la moral, las buenas costumbres y la decencia pública, al presentar imágenes repugnantes, hacer referencias groseras o revelar intimidades ilegítimas, que lograban la impunidad “bajo el escudo de un periódico, órgano de comunicación de desafueros y extravíos catalogados en la ley penal”.<sup>861</sup> En la medida se alentaba a las autoridades a perseguir a todos los diarios que publicaran “graves y trascendentales desenfrenos, cuyo conocimiento hiere o alarma los sentimientos de recato y morigeración propios de las personas cultas”, en virtud del artículo 456 del Código Penal, que castigaba a los que, “de cualquier modo”, es decir, también por la imprenta, ofendieran al pudor o las buenas costumbres. Posteriormente, siguiendo los pasos de otros sistemas legales europeos de imprenta, que habían incorporado entre sus medidas la represión de la circulación de las publicaciones pornográficas, se aprobó una última norma el 20 de septiembre de 1912, en la que se prohibía la circulación de impresos considerados obscenos.

Pero, lejos de lo que se pudiera pensar, la restricción de la libertad de las publicaciones que atacaban a la religión no solo se llevó a cabo por las autoridades judiciales y gubernativas. A pesar de que la Ley de 1883 había puesto coto a la intervención directa

---

<sup>861</sup> Circular de la Fiscalía de 5 de mayo de 1908. *Gaceta de Madrid*, 6 de mayo de 1908. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Anuario de legislación y jurisprudencia. Apéndice de 1908*, pp. 195-196.

de las autoridades eclesiásticas sobre gran parte de la producción impresa española, característica del siglo XIX, durante estos años fue fundamental el control ideológico de la Iglesia Católica sobre la prensa que leían los fieles, lo que, indirectamente provocó la limitación de la libertad de la prensa. En primer lugar, es necesario observar que el control informativo llevado a cabo por las autoridades eclesiásticas cambió conforme aumentó la virulencia de los escritos periodísticos contra la religión católica. La intervención de la Iglesia se realizaba a través de los centros de propaganda de la “buena prensa”, situados alrededor de toda España, aunque con especial importancia en el norte, que publicaban mensualmente revistas que se repartían gratis en las cárceles, los patronatos de los obreros, las fábricas o los hospitales. La misión de estos órganos no era otra que contrarrestar las críticas de los adversarios manejando los mismos canales de difusión que ellos.

Con este propósito se organizó el primer Congreso de la “Buena Prensa”,<sup>862</sup> celebrado en Sevilla en junio de 1904, en el que se fijaron las dos tareas fundamentales que debía realizar la Iglesia para promover los intereses de la fe católica en España a través de la prensa. Por un lado, la institución religiosa debía fomentar y perfeccionar la prensa católica, para que ésta infundiera respeto a los adversarios y destruyera el efecto “perniciosísimo” de sus terribles ataques.<sup>863</sup> Periódicos que hasta entonces habían funcionado como instrumento de defensa de los postulados católicos, como *La Unión Católica*, *El Siglo Futuro*, *La Ilustración Católica* o *El Movimiento Católico*, pasaron a

---

<sup>862</sup> El origen de la Asamblea de la “Buena Prensa” hay que situarlo en una propuesta del cardenal Martín de Herrera, que celebró, en julio de 1902, un encuentro regional en el que se acordó realizar una protesta formal al Rey por el aumento del anticlericalismo en los gobiernos liberales.

<sup>863</sup> En el Congreso se crearon tres instituciones en torno a la prensa católica: “Ora et labora”, encargada de estimular las oraciones y colectas para el sostenimiento de los periódicos católicos; “Legionarios de la Buena Prensa”, cuya función principal era la propaganda y difusión de los impresos católicos; y “Tesoro de la Buena Prensa”, dedicado a recolectar dinero de los fieles. “Crónica de la Asamblea Nacional de la Buena Prensa celebrada en Sevilla los días 15, 16, 17 y 18 de junio de 1904”. FUENTES, J.F., FERNÁNDEZ SEBASTIAN, J., *Historia del Periodismo español*, Anexo 6, pp. 187-188.

funcionar como un arma de lucha política.<sup>864</sup> Entre las publicaciones que surgieron durante estos primeros años del siglo XX destacaron *El Correo* de Andalucía, *El Universo* de Madrid y *La Gaceta del Norte*, aunque, sin duda, el más importante e influyente de la época fue *El Debate*, fundado en octubre de 1910. El diario católico se creó para defender los derechos de la Iglesia y hacer frente a la conocida “Ley del Candado”, que fue promulgada por Canalejas con el objetivo de disminuir la creación de congregaciones católicas.<sup>865</sup>

Como segunda tarea fundamental, el clero debía extirpar o debilitar la prensa liberal de cualquier matiz, ya que se entendía que el liberalismo era esencialmente anticristiano. Para ello, la Iglesia contaba con un sistema de represión directa, mediante la censura eclesiástica, que se llevaba a cabo por una junta formada por sacerdotes designados a tal efecto, que examinaban cuantos impresos les fueran remitidos, y concedían la licencia de publicación si éste era compatible con el dogma católico. La autorización de la autoridad religiosa quedaba plasmada en las cabeceras de los periódicos, que llevaban el sello de la ortodoxia y una mención en la que constaba la censura practicada: “con aprobación de la autoridad eclesiástica”, “con censura eclesiástica” o “revisado por la autoridad”. En este esquema era fundamental la actuación de los editores e impresores católicos, laicos de confianza que sometían voluntariamente sus obras a la censura eclesiástica como un acto de fe, y que se encontraban estrechamente vinculados con la jerarquía católica. A lo largo de toda la península existían centros de edición e imprentas provinciales que actuaban como sucursales de la Iglesia, y que aseguraban el control ideológico sobre el conjunto del material producido. Sin embargo, la intervención de la Iglesia se extendió, también, a otros periódicos no católicos, que eran

---

<sup>864</sup> PAZOS, A.M., “La Buena Prensa”, *Hispania Sacra*, vol. XLIV, nº 89, Madrid, CSIC, 1992, pp. 139-160.

<sup>865</sup> FUENTES, J.F., FERNÁNDEZ SEBASTIAN, J., *Historia del Periodismo español*, p. 181.

sometidos al control eclesiástico, porque, o bien sus directores buscaban un aval ideológico religioso por simple interés comercial, o porque la conexión con las altas esferas eclesiales les hacía gozar de ciertos privilegios, como el de no estar sujetos a la censura habitual llevada a cabo por las autoridades.<sup>866</sup>

La censura eclesiástica se completaba con la actuación directa de las autoridades sobre los católicos a través de las pastorales o los sermones desde los púlpitos, o mediante comunicados en los que se restringían la libertad de prensa condenando y prohibiendo la lectura de aquellos escritos que estuvieran en contra de la verdad religiosa.<sup>867</sup> Era también habitual la difusión de listas en las que se detallaban qué periódicos estaban prohibidos leer, y los comunicados en los que inducían a sus fieles para denunciar ante la justicia a todos los periodistas que hicieran escarnio de las prácticas cristianas, delito condenado en el artículo 240 del Código Penal. Estas condenas públicas de ciertas publicaciones periódicas influían en el proceder de las autoridades gubernamentales a la hora de restringir la libertad de la prensa. Éste fue el caso del periódico republicano *El Porvenir Navarro*, cuya publicación fue suspendida por el gobernador civil, tras haber sido excomulgado públicamente por el Obispo de Pamplona. El funcionario público justificó la inflexible medida en la existencia de una “unanimidad manifiesta” entre los ciudadanos en contra del diario, con protestas, no solo de “un pueblo entero”, sino de “los mismos anunciantes que le abandonaron”.<sup>868</sup> Asimismo, reconocía que el derecho a emitir libremente el pensamiento se hallaba subordinado a la apreciación de un

---

<sup>866</sup> BOTREL, J.F., “La libertad de imprenta, entre la ley y las prácticas”, INFANTES DE MIGUEL, V., LÓPEZ, F., BOTREL, J.F., (coordinadores), *Historia de la Edición y de la Lectura en España (1472-1914)*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 523-530.

<sup>867</sup> A modo de ejemplo, en 1909 el ordinario de Huesca emitió una nota a sus diocesanos en la que condenaba y prohibía la lectura de la novela “Las tardes del sanatorio”, de Silvio Kossti, ya que la misma afirmaba la “necia pretensión de prescindir de Dios y de toda religión positiva, la burla de cuanto se refiere a la Iglesia y asuntos religiosos”. Además, se exigía a los fieles que entregaran a su párroco todos los ejemplares para que fueran destruidos. *Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca*, 15 de junio de 1909. Reproducido en: BOTREL, J.F., “La libertad de imprenta, entre la ley y las prácticas”, p. 530.

<sup>868</sup> Congreso, 13 de diciembre de 1900, ministro de Gobernación, cif. 465.



gobernador, cuando éste entendía que en su territorio se debía impedir la emisión de las ideas expuestas en un determinado periódico. Sin duda se trataba de un nuevo atropello a la prensa republicana, que dejaba entrever, una vez más, la arbitrariedad con la que se actuaba en función de la corriente de pensamiento del periódico. Dos varas de medir de un gobierno que, pese a estar presidido por dos partidos de diferente ideología, procedían de la misma manera cuando se trataba de defender las instituciones estatales, en este caso la Iglesia Católica.



### **3. LA SUMISIÓN DE LA PRENSA AL PODER MILITAR**

#### **1. EL ACOSO DEL EJÉRCITO A LOS PERIÓDICOS COMO RESPUESTA A LA LÍNEA CONTINUISTA JURISPRUDENCIAL**

Tras la guerra colonial de 1898, la imagen del ejército sufrió un gran desgaste en la opinión pública española, principalmente, por las quejas vertidas en los periódicos civiles. Estos acusaron a los altos mandos militares de no haberse sacrificado en la contienda internacional, atribuyéndoles, también, la muerte de un gran número de soldados españoles por su pésima administración militar, fundamentalmente en la sanidad y la alimentación. La campaña de prensa antimilitarista fue iniciada una vez se levantó la suspensión de garantías constitucionales en febrero de 1899, y se hizo especialmente patente en el diario *El Nacional*, dirigido por Adolfo Suárez de Figueroa. Bajo el seudónimo de “El Capitán Verdades”, Juan de Urquía, ex capitán de los voluntarios en Cuba y más tarde en Filipinas, escribió, a finales de marzo de 1899, una serie de artículos con el título “Historia negra. Escándalos filipinos”, en los que imputó directamente a altos cargos del ejército la responsabilidad por la derrota española. Los escritos tuvieron gran repercusión entre los ciudadanos, hasta el punto de que, el 3 de abril, el general Polavieja, en aquel momento ministro de Guerra, emitió una circular en la que rogaba a todas las autoridades militares que colaboraran con los Tribunales de Honor formados para esclarecer los hechos de los que se les acusaba en la prensa. A pesar de que, finalmente, se expulsó sólo solamente a tres miembros de la armada, el daño moral ya se había consumado, y las reiteradas denuncias periodísticas de los meses siguientes no hicieron más que aumentar la antipatía del estamento castrense hacia los periódicos.

Por otra parte, estas campañas de desprestigio fueron avivando en la institución armada un sentimiento de repulsa hacia el gobierno por permitir los insultos y ofensas por medio de la imprenta. A esto se sumaba la negativa del poder público a promover una ampliación de competencias de la justicia militar para conocer de los delitos de injuria cometidos en la prensa por civiles. A pesar de la doctrina reiterada mantenida por el Tribunal Supremo, continuaron los atropellos cometidos por los tribunales militares que, sin tener la competencia, incoaban procedimientos contra cualquier publicación que criticara las actuaciones del ejército. Este fue el caso del periódico canario *España*, que publicó una carta el 27 de abril de 1899, en la que se criticaba la reciente orden militar del capitán general de la provincia, por la que se imponían unas condiciones más exigentes a los reservistas de las islas que a los de la Península. Aunque había transcurrido un mes desde su difusión, el juez militar de la demarcación abrió un sumario de averiguación del autor, contra el que, más tarde, dictó auto de prisión preventiva.<sup>869</sup> Lo mismo ocurrió con unos artículos aparecidos a principios de agosto en *El Nacional*, que, por orden del capitán general, fue secuestrado y su autor, Jiménez Castellanos, conducido por unos oficiales a la cárcel donde ya se encontraba Urquía. Ambos solicitaron un cambio de jurisdicción en sus procedimientos, pero finalmente fueron condenados a seis meses de prisión mediante un juicio celebrado ante el Consejo de Guerra el 14 de agosto de 1899.

Pese a la actitud del poder militar, el Tribunal Supremo continuó resolviendo conflictos de jurisdicciones que se suscitaban al margen de la ley, reafirmandose acerca de que la competencia para conocer de los delitos de imprenta seguía siendo de la justicia ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Jurado y el artículo 10

---

<sup>869</sup> Congreso, 8 de julio de 1899, García Guerra, cif. 748.

de Código de Enjuiciamiento criminal.<sup>870</sup> Curiosamente, en una de las resoluciones, el Tribunal Supremo dictaminó que debía conocer la jurisdicción común de la totalidad de la causa incoada contra el periódico el *Noticiero Turulense*, por unos artículos escritos por un ciudadano y un soldado de la reserva. El fallo se fundamentaba en que, por tratarse de un delito que se encontraba castigado en dos Códigos,<sup>871</sup> con penas distintas, las responsabilidades surgidas del mismo para cada una de las personas podían ser excluyentes, por lo que era necesario que conociera exclusivamente el juez civil.<sup>872</sup>

En estas circunstancias, la solución más eficaz que encontraban los oficiales para castigar de modo inmediato las ofensas vertidas en los periódicos, era atacar directamente a las redacciones periodísticas, descargando en ellas toda la agresividad acumulada. Siguiendo la línea de actuación llevada a cabo contra *EL Resumen* y *EL Globo* en 1895, se producían, cada vez con más frecuencia, asaltos violentos a todos aquellos que publicaban comentarios antimilitaristas. El propósito último del ejército era forzar al gobierno para que accediera a la petición del instituto castrense y que le concediera la competencia para conocer de los delitos de imprenta. Esta presión hizo mella en Silvela, quién, para calmar la tensión que se estaba fraguando entre las dos altas esferas del Estado, presentó un Proyecto de ley el 30 de octubre de 1899, que entró en vigor como Ley el 1 de enero de 1900, por el que se cedía una parcela de las competencias en delitos de imprenta a la justicia militar. Haciéndose eco de las quejas del estamento sobre la ineficacia del tribunal del jurado a la hora de resolver los juicios, la norma promulgada por el partido conservador excluía a éste del conocimiento de los

---

<sup>870</sup> En 1899 se dictaron las siguientes sentencias a favor de la competencia de los tribunales ordinarios: STS 8 de julio. *Gaceta de Madrid*, 6 de agosto de 1899, p. 2; STS 11 de octubre, *Gaceta de Madrid*, 13 de octubre; STS 16 de octubre. *Gaceta de Madrid* 25 de octubre; STS 18 de noviembre. *Gaceta de Madrid*, 30 de diciembre de 1899; y STS 11 de diciembre de 1899. *Gaceta de Madrid*, 25 abril 1900.

<sup>871</sup> El delito se encontraba reconocido en el artículo 482 del Código Penal, así como en el artículo 258 del Código de Justicia Militar

<sup>872</sup> STS 2 de septiembre de 1899. *Gaceta de Madrid*, 19 de septiembre, p. 59.

delitos de injuria y calumnia contra las autoridades civiles, militares y eclesiásticas y contra colectividades del Ejército, Armada e Iglesia.<sup>873</sup> Sin embargo, la principal pretensión del poder militar, pasar esos delitos al conocimiento de los tribunales de guerra, no se vio cumplida, y la nueva redacción del artículo 7º del Código de Justicia Militar propuesta en la ley quedó redactada al hilo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así pues, se reconocía la competencia de la jurisdicción de Guerra en los delitos cometidos por medio de la imprenta sólo cuando los encausados pertenecieran al ejército o incurrieran por lo hecho en delito militar.<sup>874</sup>

Sin restringir el alcance propio de la jurisdicción ordinaria, la solución del gabinete conservador era ofrecer al ejército la seguridad de que los excesos cometidos por la prensa contra los organismos militares no iban a quedar impunes. Para el estamento castrense siguió siendo una solución insuficiente, por lo que continuó acosando a las empresas periodísticas que no eran de su agrado, en algunos casos destruyendo sus maquinarias y en otros, amenazando a sus redactores. El primero de estos atropellos con el inicio del siglo XX se produjo a principios de mayo contra el semanario *El Progreso* de Játiva por la difusión de un escrito redactado por un ex combatiente de Cuba en la que se injuriaba al ejército. El número donde se insertaba el suelto injurioso había sido secuestrado, pero, a pesar de ello, 50 oficiales asaltaron la redacción del periódico, arrasando el material de imprenta y agrediendo a sus redactores. A finales de ese mismo

---

<sup>873</sup> Artículo 1 de la Ley de 1 de enero de 1900. Publicada en: *Código de Justicia Militar de 27 de septiembre de 1890 y legislación complementaria al mismo*. Madrid, Talleres del depósito de guerra, 1906. Apéndice Primero, Número 1. pp. 249-250.

<sup>874</sup> El artículo 7º del Código de Justicia Militar quedaba redactado de la siguiente manera:

“Art. 7º Por razón del delito, la jurisdicción de Guerra conoce de las causas contra cualquier persona se instruyan por:

Séptimo.- Los de atentado y desacato a las autoridades militares y los de injuria y calumnia a éstas o a las Corporaciones o colectividades del Ejército, siempre que se refieran al ejercicio de destino o mando militar, tiendan a menoscabar su prestigio o a rebajar los vínculos de disciplina o subordinación en los organismos armados. Cuando fueren cometidos por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de comunicación, solo conocerá de ellos la jurisdicción de Guerra, si los encausados pertenecieran al Ejército e incurrieran por el hecho en delito militar”.

año, *El Telégrafo* de las Palmas recibió la visita de un grupo de soldados, que exigieron explicaciones sobre unos artículos que consideraban ofensivos. Aunque el incidente que más resonancia tuvo ocurrió un año más tarde, el 31 de agosto de 1901, cuando fue atacado *El Correo de Guipúzcoa* por un grupo de marinos recién desembarcados, quienes, ofendidos con el periódico por afirmar que su escuadra había permanecido en Bilbao “embotellada” como en Cuba, penetraron violentamente en su redacción reclamando el nombre del autor de la publicación y lesionando a uno de sus redactores, lo que propició una pelea que se trasladó hasta la calle. Todas estas manifestaciones violentas fueron cada vez más habituales, ya que, a pesar de estar fuera de la legalidad, no eran reprimidas ni por los mandos superiores del ejército ni por el poder público, acobardado por la presión que ejercía sobre él el poder militar.

Junto a estas protestas de los oficiales, continuó la práctica ilegal, que ya se había convertido en costumbre, de someter los delitos de imprenta a la jurisdicción de guerra. Todo ello producía una gran indefensión en los órganos periodísticos, que, en ocasiones, no contaban ni con el apoyo de los tribunales ordinarios, que, por “torpeza”, se olvidaban de entablar competencia de jurisdicción contra los tribunales militares, motivo por el cual se encontraban en prisión provisional algunos periodistas.<sup>875</sup> En cualquier caso, los procesos en los que tenía que resolver el Tribunal Supremo sobre las injurias a los militares efectuadas por la prensa siguieron recayendo a favor de la jurisdicción ordinaria. De nada servía que los tribunales de guerra siguiera persiguiendo los delitos cometidos por civiles, ya que, con arreglo a los artículos 1º y 2º de la nueva Ley de 1 de enero de 1900, el Tribunal Supremo fallaba a favor de la justicia ordinaria, “sin más excepción taxativamente establecida en dicho art. 2º, o sea la de que el

---

<sup>875</sup> Congreso, 30 de enero de 1904, Lerroux, cif. 3564.

culpable pertenezca al ejército e incurra en delito militar”.<sup>876</sup> En virtud de esta jurisprudencia se resolvió el conflicto de jurisdicciones por un artículo insertado en *La Publicidad* de Barcelona, que había dirigido ofensas al Rey y al Ejército.<sup>877</sup>

## **2. EL ANTIMILITARISMO DE LOS PERIÓDICOS CATALANES. ATAQUES AL *CU-CUT* Y *LA VEU DE CATALUNYA*.**

Paralelamente a estos acontecimientos se produjo en Cataluña la consolidación del movimiento regeneracionista y el desarrollo de una fuerza nueva representada en el catalanismo político, que luchaba contra la estructura centralizada de las instituciones estatales, y se caracterizaba por sus ideas antimilitaristas. Este nuevo poder se hizo cada vez más visible a través de las publicaciones catalanas surgidas en torno a sus dos principales vertientes, la Lliga Regionalista por un lado, y los republicanos liderados por Lerroux en oposición a éstos, intensificando ambos sus ataques contra el ejército a partir de 1904. Entre los periódicos catalanes más destacados se encontraban *La Veu de Catalunya*, órgano de la Lliga, que mantenía una fuerte disputa dialéctica con el diario republicano *La Publicidad*. Para combatir la demagogia lerrouxista, quién contaba con el apoyo de las masas populares catalanas que vivían en barriadas, surgió en 1902 la revista satírica *¡Cu-Cut!*, sostenida también por La Lliga. Además de las críticas vertidas contra el republicanismo de Lerroux, la publicación fue sistemáticamente denunciada por el gobernador de Barcelona por sus continuas provocaciones a los militares mediante caricaturas que se burlaban de ellos.<sup>878</sup> Ante las ofensas periodísticas,

---

<sup>876</sup> STS 23 de marzo de 1904. *Gaceta de Madrid*, 25 de junio de 1904, p. 157.

<sup>877</sup> STS 28 de noviembre de 1903. *Gaceta de Madrid*, 22 de marzo de 1904, p. 26.

<sup>878</sup> El 16 de febrero de 1905 la revista *¡Cu-Cut!* sacó en portada a Guillermo II, nombrado general honorario del ejército español, que, probándose un uniforme del mismo, le preguntaba a su ayudante: “¿Quieres decir que este uniforme de general español no perderá?”. Y le respondía éste: “No, señor, esté tranquilo; ya ha perdido todo lo que podía perder”. En otro número publicado el 2 de marzo de 1905 se

el ejército fue muy crítico, no solo respecto al catalanismo por arremeter contra la nación española, sino, como adelantábamos, con la pasividad mostrada por las autoridades civiles, que permitían todo tipo de ataques dialécticos que dañaban la imagen de la armada española y su actuación en Cuba.

La indignación de los oficiales, especialmente contra los diarios catalanes, explotó en noviembre de 1905, con motivo de las elecciones municipales de Barcelona, celebradas el 12 de noviembre, que enfrentaban a la Lliga Regionalista y al populismo de Lerroux. Los resultados electorales fueron considerados por la primera como un gran triunfo para el catalanismo, y, para festejarlo, se reunieron en un banquete multitudinario el 18 de noviembre de 1905. A la salida del mismo se produjo una batalla entre manifestantes catalanistas y un grupo del bando leurrísta, que, según algunos diarios catalanistas, había “aparecido” con garrotes para herir a los otros, lo que dejó numerosos heridos del bando catalanista. La mayoría de las publicaciones catalanas culparon a los republicanos, a excepción de aquellos diarios afines a Lerroux, como *La Publicidad*. Por su parte, la prensa de Madrid se limitó a recoger los hechos, mientras que los periódicos militares, con unanimidad, condenaron con extrema dureza a todos los partidos políticos, con frases de desprecio a los catalanes: “cuya aspiración esencial es el separatismo, no pueden ni deben ser tratados como los demás ciudadanos españoles”,<sup>879</sup> e instaban a los oficiales a tomar represalias por su cuenta.

Con este caldeado panorama, la revista *¡Cu-Cut!* publicó el 25 de noviembre una caricatura de Juan García Junceda que ironizaba sobre la ausencia de triunfos que

---

podía ver la imagen de un profesor que, al ver que su alumno había roto su “escuadra”, le decía: “Tu servirás para marino español”. En clara alusión a la derrota de la escuadra de Cervera de la Guerra de Cuba.

<sup>879</sup> *La Correspondencia Militar*, 21 de noviembre de 1905.

celebrar por el estamento castrense.<sup>880</sup> La pequeña viñeta no era tan hiriente como otras que habían sido difundidas en la revista satírica, pero lejos de pasar inadvertida, agotó la paciencia de los militares y desencadenó una gravísima crisis. Los hechos ocurrieron esa misma noche, cuando varios oficiales de la guarnición de Barcelona, lanzando gritos a favor de España y del ejército, forzaron la puerta de la redacción del *¡Cu-Cut!*, y prendieron fuego a todos sus muebles. Más tarde, destrozaron el local del semanario *La Veu de Catalunya*, muy afín a la Lliga regionalista, que defendía ideas no monárquicas. Los atropellos a los dos diarios catalanes respondían a la convicción de los militares de que el desarraigo a la patria manifestado por estas publicaciones regionalistas era una ofensa a la nación española, y a las fuerzas armadas que la representaban.

Como había ocurrido con los asaltos de 1895, estos ataques militares dejaron al descubierto, una vez más, la desprotección de los medios de información que no podían ejercer su derecho a expresar libremente sus opiniones sin que fueran respondidos de forma violenta e ilegal por los oficiales. A la vulneración de las garantías constitucionales se sumaba que, ni las autoridades civiles de Barcelona, que tenían conocimiento de que las redacciones iban a ser atacadas por los militares, ni el gobierno central tomaron medidas contra los responsables. Muy al contrario, el ejecutivo liberal, entonces en el poder, se mostró desde el principio dispuesto a reparar el honor de los militares y a frenar la libertad de expresión de los diarios catalanistas, a los que acusaban de ser los verdaderos culpables de estos asaltos.

Tras los sucesos de Barcelona, una comisión de oficiales y jefes de la guarnición de

---

<sup>880</sup> La viñeta publicada el 23 de noviembre de 1905 representaba a un paisano y un militar ante el Frontón Condal, en el que los catalanistas habían celebrado las elecciones municipales. El general preguntaba al catalanista: “¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente?”, a lo que éste respondía: “El banquete de la victoria”. Finalmente, el general decía: “De la victoria? Ah, vaya, serán paisanos”.



Madrid se reunió con el general Weyler, en su calidad de ministro de Guerra, para reclamar al gobierno, entre otras peticiones, la inmediata declaración de la suspensión de garantías constitucionales en Barcelona; así como una legislación más dura contra las ofensas a los militares contenidas en la prensa, que reconociera el traspaso de competencias a la jurisdicción militar de todos los delitos de injurias a la Patria y el Ejército; y la expulsión de los diputados catalanistas del Parlamento. De todas las exigencias militares, el presidente del Gobierno, Montero Ríos, creyó que la declaración de un estado excepcional en Barcelona era un mal menor, y por ello, el 29 de noviembre de 1905 acordó utilizar este manido recurso que, pese a la oposición de los republicanos y los catalanistas, se acabó imponiendo en el territorio como primera medida para hacer frente al trastorno social, que según el ejecutivo liberal, estaba provocando el movimiento separatista catalán.

La nueva situación en la ciudad condal influyó inmediatamente en la prensa catalana, duramente reprimida durante esos días. Al corte de las comunicaciones telegráficas y telefónicas, se sumaban multitud de órdenes de búsqueda y captura de redactores, dibujantes y directores de varios periódicos, siendo algunos detenidos días más tarde. Las redacciones atacadas por los militares fueron las primeras en ser silenciadas por las autoridades, que prohibieron la circulación de la revista *¡Cu-Cut!*, y secuestraron el número de *La Veu de Catalunya* en el que se contaban los sucesos acontecidos bajo el título “En plena anarquía”, artículo que fue inmediatamente denunciado, y su autor encarcelado. Lo mismo ocurrió con el periodista que reprodujo en este periódico el discurso que había realizado en el Congreso el diputado catalanista Camps. También se recogieron algunos números de *El Diluvio*, y se encarceló al director del semanario satírico de *La Tralla*, cuya redacción se había mantenido cerrada durante varios días por

estar destruidas las máquinas de imprenta. Varios fueron los sectores que protestaron contra el acoso policial llevado a cabo en estos primeros días, desde los estudiantes que hicieron huelga en varias universidades, hasta las propias publicaciones catalanistas como *El Correo Catalán*, *El Diario Mercantil* o *El Poble Catalá*.

Las cabeceras madrileñas, que disponían de mayor libertad, se limitaron a narrar lo que estaba sucediendo en Barcelona. Al contrario de lo que había sucedido con los ataques de 1895, ante los que los periódicos habían condenado casi sin excepciones la acción de los oficiales, en esta ocasión mantuvieron una actitud pasiva respecto a los múltiples atropellos contra la libertad de prensa de los diarios catalanes, bien por sentimiento patriótico, al entender que el problema del catalanismo era suficiente para disculpar a los militares, o bien por miedo a que ellos fueran víctimas de las mismas agresiones. En un suelto titulado “Nuestro tiempo”, difundido el 1 de diciembre de 1905, Salvador Canals se lamentó por el comportamiento adoptado por la prensa madrileña, que, lejos de criticar los excesos del ejército, había justificado su violenta actuación: “La prensa de Madrid, en sus ediciones del día 26, se apoderó del suceso y lo presentó en términos de gran consideración y aun de aplauso para los militares. No ya los periódicos militares y que de la clientela militar viven; los mismos periódicos civiles, por así decirlo, los más liberales, los francamente republicanos, los más obligados a la defensa de la ciudadanía y de la disciplina social, tan agraviadas por aquel acto de la oficialidad de Barcelona, o lo aplaudieron, o lo disculparon o excusaron el comentario, para no hablar más que de los ataques que a la Patria dirigían los separatistas”. A lo que añadía: “Mucho más grave que eso (el separatismo) había que considerar lo hecho por aquellos militares, el atropello de domicilios, el desacato a la garantía de todos en la vida social”.<sup>881</sup>

---

<sup>881</sup> LEZCANO, R., *La ley de jurisdicciones 1905-1906: Una batalla perdida por la libertad de expresión*, Madrid, Akal Editor, 1978, Apéndice nº 2, pp. 155-161.

En oposición a la indiferencia de las publicaciones civiles, la prensa castrense alabó la sublevación de los militares, reclamando más acciones violentas contra los catalanistas. En estos agresivos términos lo exteriorizó *La Correspondencia Militar*: “Si Cataluña no extermina a esos miserables, los exterminaremos nosotros. El actual Gobierno y los que le sucedan tienen la palabra. Si callan los gobernantes otros hombres hablarán”.<sup>882</sup> Dos días después, el diario siguió en la misma línea de provocación: “Ya lo sabéis españoles: al grito de muera España! Responded matando al que lo pronuncie”; y alentaba a los oficiales a volver a repetir los sucesos: “¿Qué clase de españoles son algunos corresponsales de periódicos de Madrid que telegrafían censurando al Ejército? ¿Son catalanistas también? (...) Ya lo sabe la guarnición de Barcelona. En estas redacciones hay plumas que censuran su patriotismo; hagan con ellos el ejemplo del *Cu-cut* y la *Veü*”.<sup>883</sup> La agresividad dialéctica de las publicaciones militares, junto a la pasividad de los rotativos españoles más importantes a la hora de condenar los violentos ataques de los oficiales contra la libertad de prensa, allanó el terreno al gobierno para “cocer en las ollas parlamentarias el nauseabundo guiso” de la ley represiva de jurisdicciones.<sup>884</sup>

### **3. EL RECORTE DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS CON LA APROBACIÓN DE LA LEY DE JURISDICCIONES DE 1906**

#### **1. CAMBIOS EN EL PARTIDO LIBERAL Y AUMENTO DE LA REPRESIÓN CONTRA LOS DIARIOS CATALANES**

Los acontecimientos militares propiciaron una grave crisis dentro del gobierno liberal, que tuvo sus consecuencias el 1 de diciembre de 1905, cuando fue nombrado

---

<sup>882</sup> *La Correspondencia Militar*, 27 de noviembre de 1905.

<sup>883</sup> *La Correspondencia Militar*, 29 de noviembre de 1905.

<sup>884</sup> LEZCANO, R., *La ley de jurisdicciones 1905-1906*, p. 125.

Segismundo Moret como nuevo jefe de Estado. Su equipo lo formaban, entre otros, el Conde de Romanones como ministro de Gobernación, y el general Luque en el Ministerio de Guerra, siendo ambos grandes defensores de la utilización de los tribunales militares a la hora de juzgar los delitos cometidos en la prensa. Mientras que el anterior líder del ejecutivo liberal, Montero Ríos, era partícipe de dar una respuesta a las exigencias militares dentro de los fueros civiles, Moret respaldó desde el primer momento las reivindicaciones militares, contando con el importante apoyo del rey Alfonso XIII, jefe supremo de la milicia, que estuvo de acuerdo también con las peticiones militares.

Durante todo ese mes de diciembre fueron cada vez más insistentes los rumores sobre la imposición de una nueva legislación que reconociera la competencia de la jurisdicción de guerra sobre los delitos contra la Patria y el Ejército cometidos por la prensa. Ante la amenaza real de la inminente aprobación de una ley militar, los diarios madrileños cambiaron de actitud y empezaron a publicar artículos sobre la importancia de mantener los delitos de imprenta bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios. El *Heraldo de Madrid* expuso que, pese a que era ineludible modificar el Código Penal de 1870, todo ello debía hacerse dentro del poder civil y sometido a los tribunales ordinarios: “La disciplina militar pide y mantiene Tribunales especiales para los militares, pero de ahí no puede pasar; de ahí no ha pasado ninguna legislación en los pueblos modernos y de ahí no ha de pretenderse que se pase en España”.<sup>885</sup> En la misma línea, *El Imparcial* afirmó que era completamente innecesario aprobar otra legislación especial, ya que los delitos contra la Patria y el Ejército se encontraban perfectamente regulados en el artículo 248 del Código Penal, en el artículo 258 del Código de Justicia Militar, y en la

---

<sup>885</sup> *El Heraldo de Madrid*, 22 de diciembre de 1905.

Ley de 1 de enero de 1900.<sup>886</sup>

Entre todas las cabeceras españolas destacó *El Liberal* como gran defensor del derecho a emitir libremente las ideas, que inició una verdadera campaña de prensa en contra de la nueva legislación que se pretendía aprobar. El diario madrileño acusó al gabinete liberal de querer imponer el silencio informativo ante los tiempos tan conflictivos que se estaban viviendo en España: “Viva las cadenas! A este grito parece responder el gobierno liberal”.<sup>887</sup> En su opinión, el poder público se “inventaba” la necesidad de atajar un problema, atentando contra la pluma de los periodistas, cuando en realidad lo que deseaban era la impunidad de los gobiernos “ineptos” y sus administradores fieles.<sup>888</sup> Otro de los periódicos que se pronunció al respecto fue *La Correspondencia de España* que criticó el hecho de que, precisamente el ejecutivo liberal demandara el traspaso al fuero de guerra de los delitos de imprenta: “Nadie, ni aun los exagerados militaristas, hubiese demandado la vuelta al fuero de guerra si la justicia civil fuese aplicada como debía serlo, y por tanto, habremos de convenir en que será justo censurar la causa, que es la conducta seguida por las autoridades civiles, y en que es injusto censurar el efecto, que son las demandas del estamento militar”.<sup>889</sup>

Pese a las críticas de los sectores más liberales, el 7 de enero de 1906 se aprobó una circular dirigida a todos los fiscales y jueces provinciales, que daba instrucciones sobre cómo perseguir y castigar eficazmente los delitos por medio de la imprenta contra el Ejército, la Armada, la Iglesia y la integridad de la Patria.<sup>890</sup> Sin duda, el talante del documento emitido por el fiscal del Tribunal Supremo estaba acorde a las pretensiones

---

<sup>886</sup> *El Imparcial*, “Contra la patria y el ejército. No hay problema”, 29 de diciembre de 2015.

<sup>887</sup> *El Liberal*, “La espada y la pared”, 3 de enero de 1906.

<sup>888</sup> *El Liberal*, “Un trozo de mal camino”, 4 de enero de 1906.

<sup>889</sup> *La Correspondencia de España*, “Los delitos contra el ejército y la patria”, 4 de enero de 1906.

<sup>890</sup> MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Apéndice de 1906*, pp. 15-16.

militares, pues, desde el inicio, se justificaba la censura de la libre emisión del pensamiento con la base de que, al tratarse de un derecho fundamental, el abuso cometido era aún “más censurable y punible”. En este sentido, se exhortaba a todos los fiscales, con el auxilio de las autoridades gubernativas, a perseguir de forma “rápida e inexorable, sin interrupciones ni desmayos” los delitos que atacaran a la integridad, entendiéndose por “ataque” toda clase de manifestaciones externas ofensivas o atentatorias, ya fuese por medio de la palabra escrita o hablada, o ya por los hechos. Asimismo, se amenazaba a las autoridades judiciales con incurrir en responsabilidades si se “descuidaban” a la hora de censurar estas acciones, ya que, aunque no lo exigiese la trascendencia y la gravedad del delito, lo impondría “imperiosamente” el patriotismo.

Conforme a la circular, los fiscales debían solicitar a la autoridad gubernativa de su provincia la remisión de todos los periódicos publicados en el territorio, para examinarlos y, de advertir en alguno de ellos conceptos ofensivos o ataques para alguna colectividad del Ejército, de la Armada o de la Iglesia, formular una querrela criminal contra su autor. En la orden se obligaba también a interponer recurso de casación en todas aquellas sentencias que recayesen a favor de los periodistas o directores, como un medio para conseguir, si no en primera instancia, si ante el Tribunal Supremo, la condena de la libertad de prensa. Seguramente, el ministerio fiscal pretendió dar una solución temporal al problema de las jurisdicciones hasta la inminente aprobación de la nueva legislación, ya que, sin otorgar la competencia al poder militar, abogaba por una persecución y control más exhaustivo y riguroso de las publicaciones periódicas, que consiguiera ocultar los ataques a la nación española y las fuerzas armadas. Una peligrosa arma en manos del poder, que trataba de imponer una censura encubierta a todas las cabeceras españolas que informaran u opinaran sobre los militares, la religión

católica o el régimen político, restringiendo de forma drástica la libertad de los órganos de prensa en estas cuestiones.

Para el jurista Martínez Alcubilla era necesaria una reforma “con prudencia”, teniendo en cuenta todos los intereses, tanto los del ejército, quedando los delitos “bajo el amparo de quien pueda defenderlos rigurosamente”,<sup>891</sup> como los de la libertad de prensa, “una de las grandes conquistas del derecho moderno, indispensable en la vida contemporánea y en la organización de la sociedad actual”, ya que, solo así los órganos podían expresar en libertad sus aspiraciones y contrarrestar “la fuerza inmensa que da a los partidos políticos la atomización, el espíritu exageradamente individualista, la falta del sentimiento de agrupación, la imposibilidad de tomar acuerdos colectivos, circunstancias que caracterizan hoy y debilitan a los pueblos”. En este sentido, mencionaba un escrito de Villamartin en el que se oponía a extender la jurisdicción al estamento militar, con el fundamento de que, en ningún caso, el ejército podía ser al mismo tiempo juez y parte.: “Tan peligroso es un Tribunal civil juzgando a un soldado, como un Consejo de Guerra ante cuya barra se presenta un paisano; porque el delito del soldado, cualquiera que sea, ha de interferir más en la vida de la sociedad militar y en la moral del Ejército, que el delito del paisano, por mucho que haya penetrado dentro de la constitución militar”.<sup>892</sup>

Durante ese primer mes de 1906, y tras emitirse la circular del fiscal del Tribunal Supremo, el gobierno liberal presentó ante un Senado muy nutrido de miembros de las

---

<sup>891</sup> El autor abogaba por prescindir del tribunal del jurado en esta clase de delitos, siendo los jueces ordinarios los competentes para conocer de los mismos. Aun así, se declaraba partidario de someter a los civiles al fuero de guerra en otra clase de delitos, como los crímenes anarquistas, ya que, de lo contrario, se tendía a recurrir frecuentemente a la suspensión de garantías constitucionales. Diccionario V edición, MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Diccionario de la Administración Española. Compilación de la Novísima Legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la Administración pública*, tomo VIII, Madrid, Administración, 1886-1887. p. 706.

<sup>892</sup> MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Apéndice de 1906*, p. 19.

fuerzas armadas el nuevo Proyecto de ley de represión de los delitos contra la Patria y el Ejército. Durante el transcurso del debate de la norma se fueron produciendo nuevos atropellos militares y judiciales contra la prensa. Los oficiales siguieron asaltando las redacciones de periódicos como respuesta a las ofensas proferidas en los mismos, como ocurrió el 27 de enero de 1906 tras la publicación del artículo “Fuera vagos” calificativo utilizado para nombrar al ejército y que fue publicado en el semanario socialista *La Humanidad*. Pese a ser denunciado por la autoridad correspondiente, que ordenó el secuestro de todos sus ejemplares, un grupo de oficiales de Vizcaya entró en la redacción del periódico, quemó todos sus ejemplares y detuvo a la fuerza al director de la publicación. Por su parte, en Barcelona se siguieron ensanchando las diferencias respecto al control gubernativo aplicado a los diarios catalanistas, que eran fuertemente reprimidos por las autoridades, avalados por la suspensión de garantías constitucionales, y los periódicos militares que frecuentemente insultaban a éstos, y ni si quiera eran denunciados. En las Cámaras estos excesos no pasaron por alto, especialmente los concernientes a la actuación de las autoridades judiciales, que, instruidas e influenciadas por el poder público, condenaban indiscriminadamente a las publicaciones de Barcelona afines al catalanismo. Según los datos aportados por los propios periodistas catalanistas representados en el Parlamento, estaban abiertos más de cuarenta procesos contra doce publicaciones catalanas, entre las que se encontraba *La Vanguardia*, *El Diluvio*, *La Publicidad* y *La Veu de Catalunya*.

Una vez aprobado el Proyecto de ley de jurisdicciones en el Senado, se abrió el debate en el Congreso. En la sesión del 17 de febrero de 1906, Melquiades Álvarez defendió el mantenimiento de la libre emisión de ideas dentro del poder civil, declarando que la prensa era “una tribuna en la que se vierten ideales sobre la libertad y en la que se firma



la verdadera opinión”, y que, llevarla a una jurisdicción exenta a ella no garantizaría su libertad, sino, muy al contrario, se estaría corrompiendo su verdadera eficacia. Asimismo, el republicano denunció que la legislación que se trataba de aprobar era “un engendro legal, mediatizado y retrógrado, que cercena gran parte de la difícilmente conquistada libertad de prensa”, que resucitaba los delitos de opinión, ya que pretendía castigar la simple enunciación de “conceptos que ataquen la integridad de la nación española”.<sup>893</sup> No solo en el Congreso se escucharon voces disconformes con la medida que pretendía aprobar el gobierno liberal. Miguel de Unamuno expresó su oposición a que los tribunales de guerra tuvieran competencia sobre los delitos de imprenta con estas palabras: “tan absurdo me parece que los militares constituyan Tribunales y se metan a juzgar como que los magistrados, jueces y fiscales civiles se organicen en milicia para ir a la guerra”.<sup>894</sup> El escritor dudaba de la verdadera intención del ejército al querer imponer los tribunales militares, que, lejos de guiarse por el amor a la justicia y a la verdad, estaban animados por el “espíritu de clase”, lo que resultaba ser abusivo para la prensa.

Sin embargo, pocas fueron las manifestaciones que se produjeron a favor de la libertad de prensa durante los meses en los que se estuvo discutiendo el Proyecto de ley militar. Tanto los periodistas representados en el Congreso como las cabeceras de Madrid mantuvieron un papel indefinido acerca de la cuestión, y, a diferencia de otras propuestas legislativas pasadas contra las que habían luchado por coartar su derecho de escribir libremente, en esta ocasión no se llevó a cabo una campaña de prensa contra una ley opresiva que restringía de manera drástica su propia libertad. La mayoría de los

---

<sup>893</sup> LEZCANO, R., *La ley de jurisdicciones 1905-1906*, p. 123.

<sup>894</sup> Conferencia de Miguel de Unamuno celebrada en la Zarzuela 26 de febrero: “La Patria y el Ejército”. Publicado en LEZCANO, R., *La ley de jurisdicciones 1905-1906*, apéndice nº 3, pp. 162-176.

periódicos se limitaron a cuestionar detalles procedimentales sobre la futura norma,<sup>895</sup> y evitaron posicionarse sobre el problema catalán, a excepción de los diarios castrenses o los más conservadores, que se mantuvieron en todo momento contrarios al nacionalismo. Tampoco los diputados regionalistas y las publicaciones catalanas adoptaron una actitud reaccionaria respecto a la libertad de imprenta que se pretendía restringir de forma drástica en la nueva norma.<sup>896</sup> Todos sus esfuerzos se invirtieron en luchar por la bandera regional, y no en un derecho fundamental que llevaba meses arrebatado por el poder central en un estado excepcional que se prolongaba en el tiempo, y que no fue levantado hasta mayo de ese mismo año.

En este contexto, continuaron en Barcelona las numerosas detenciones y procesos contra los periodistas, y las suspensiones de los periódicos, propiciadas por las autoridades judiciales, que habían adoptado una política de control más riguroso tras la circular emitida en enero de 1906. La orden emitida por el ministerio fiscal había tenido un gran impacto entre los jueces civiles, que, amenazados con incurrir en responsabilidades penales si no realizaban con celo sus deberes judiciales, actuaban con mayor rigor e intransigencia que años atrás. La nueva situación en la que se encontraba la libertad de prensa quedó perfectamente representada el 16 de marzo de 1906 en el diario *La esquella de la Torratxa*, que, a través de un grabado titulado “Signos de los tiempos”, satirizaba sobre el nuevo estado de la prensa catalana, con una imagen en la

---

<sup>895</sup> El *ABC* en su número de 22 de febrero de 1906 criticaba la redacción del artículo 3 de la Ley de Jurisdicciones en estas palabras: “¿Cómo de qué manera vamos a saber lo que es un símbolo de la representación de España? ¿Cómo de qué manera llegaremos a establecer y fijar que en tal o cual caso se ofende a este símbolo de un modo indirecto?”. El periódico madrileño ironizaba con que, en el precepto, debían ser castigados también los que vejen, injurien o menosprecien “el cocido, la capa, los toros o la navaja (...) cuatro cosas inseparables de nuestra vida”.

<sup>896</sup> *El Diluvio* fue de los escasos diarios catalanistas que hicieron mención a la libre emisión de ideas que iba a quedar limitado con la aprobación de la nueva norma: “Lo que se busca (con la Ley de Jurisdicciones) es que el poder ejecutivo tenga un arma terrible para hacer enmudecer a la prensa, a los oradores y a los pensadores. Aprobada dicha ley no se podrán expresar las ideas no digamos separatistas, ni si quiera ideas autonomistas o federales...”. *El Diluvio*, 23 de febrero de 1906.

que aparecían unas manos esposadas, y un diálogo en el que se podía leer estas líneas:

“¿De qué son? ¿De un malhechor?”. “De un periodista”.<sup>897</sup>

## 2. LA ADOPCIÓN DE UNA LEY OPRESIVA BAJO EL MANDATO LIBERAL

A pesar de las múltiples críticas que recibió el proyecto, especialmente por parte de los políticos republicanos, quienes acusaron al ejército de querer dominar España con una ley que atacaba directamente las libertades públicas y establecía la censura previa, Moret aprovechó la retirada de éstos, así como de los catalanistas, los integristas, y los diputados periodistas en la sesión de Congreso del 13 de marzo, para aprobar los artículos más conflictivos del proyecto.<sup>898</sup> Finalmente, tras cuatro meses de intensa lucha parlamentaria, la nueva legislación para la represión de los delitos contra la Patria y el Ejército salió a la luz el 23 de marzo de 1906. La Ley de Jurisdicciones restringía de forma drástica la libertad de imprenta e inclinaba de forma definitiva la balanza a favor de la competencia de los militares en unos delitos de “muy dudosa calificación e identificación”.<sup>899</sup> Para Ballbé la ley promulgada por el ejecutivo liberal fue “el principio del fin de un Estado constitucional liberal construido sobre las bases de una militarización de la administración pública y de las técnicas jurídicas para mantener el orden público”.<sup>900</sup> Efectivamente, el gobierno liberal, apoyado en todo momento por el monarca, había sacado adelante una medida arbitraria y represiva, que cedía el control absoluto de la libertad de prensa a la jurisdicción militar y que, lejos de resolver los problemas sociales, enmascaraba las contrariedades del gobierno español.

---

<sup>897</sup> LEZCANO, R., *La ley de jurisdicciones 1905-1906*, pp. 140-141.

<sup>898</sup> Antes de que la ley fuese aprobada, los diputados periodistas en activo redactaron una enérgica protesta contra la misma que fue leída en el Congreso, en la que rechazaban la nueva norma por ir en contra de la Constitución.

<sup>899</sup> MARTÍNEZ CUADRADO, M., *La burguesía conservadora (1874-1931)*, p. 249.

<sup>900</sup> BALLBÉ, M., *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, p. 279.

La norma castigaba con la pena de prisión correccional a todos aquellos que, de palabra, por escrito o por medio de la imprenta, grabado, estampas, alegorías o caricaturas, ultrajaran a la nación o a cualquier territorio español, así como a su bandera, himno nacional u otro emblema de su representación.<sup>901</sup> Se sancionaba con la misma pena a aquellos que por medio de la imprenta injuriaran u ofendieran “clara o encubiertamente” al ejército o a las instituciones armadas, o que instigaran directamente a la insubordinación de los institutos armados, o a apartarse del cumplimiento de sus deberes militares a personas que sirvieran o estuvieran llamadas a servir en las fuerzas nacionales de tierra o de mar.<sup>902</sup> La Ley de Jurisdicciones cedió la competencia exclusiva de las causas sobre injurias y ofensas a los militares, cuyo conocimiento había sido hasta entonces de los jueces ordinarios, a los tribunales de guerra, independientemente de que los encausados pertenecieran al estamento castrense o no. Con la ampliación de funciones de los tribunales militares se puso fin al conflicto de jurisdicciones suscitado diez años atrás en torno al artículo 7 del Código de Justicia Militar, que fue reformulado en la nueva norma, incluyéndose de forma expresa en el precepto la imprenta, como habían solicitado durante todos estos años la institución armada y los consejos de guerra.<sup>903</sup> En la misma línea, se reconocía a los tribunales de la Marina la competencia para conocer de los delitos que se cometieran contra los organismos y fuerzas navales, quedando modificado, también, el artículo 10 de la Ley

---

<sup>901</sup> Artículo 2 de la Ley para la represión de los delitos contra la Patria y el Ejército. Publicado en la *Gaceta de Madrid*, Martes 24 de abril de 1906, número 114, tomo II (1906), pp. 317-318. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°35.

<sup>902</sup> Artículo 3 de la Ley de Jurisdicciones de 1906.

<sup>903</sup> Art. 5º de la Ley de Jurisdicciones de 1906: El párrafo 1º del caso 7º del art. 7º del Código de Justicia Militar quedó modificado en la siguiente forma: “Por razón del delito la jurisdicción de guerra conoce de las causas que contra cualquier persona se instruyan por los de atentado o desacato a las autoridades militares, los de injuria y calumnia a éstas y a las corporaciones o colectividades del Ejército, cualquiera que sea el medio empleado para cometer el delito, con inclusión de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación, siempre que dicho delito se refiera al ejercicio de destino o mando militar, tienda a menoscabar su prestigio o a relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados, y los de instigación a apartarse de sus deberes militares a quienes sirvan o están llamados a servir en aquella institución”.

de organización y atribución de los tribunales de Marina. El resto de los delitos contenidos en la legislación eran competencia de los tribunales ordinarios, siempre que los encausados no pertenecieran al ejército de mar o de tierra, y que no incurrieran por el acto ejecutado en delito militar.<sup>904</sup>

En la norma se aclaraba que, de cometerse al mismo tiempo dos o más delitos, si los acusados estaban sujetos a distintas jurisdicciones, cada una de éstas debía conocer del que le correspondiera. Además, quedaba reconocido expresamente que la incoación del delito cometido por medio de la imprenta se realizaría contra la persona responsable del mismo, exceptuados los diputados y senadores que se encontraban exentos de responsabilidad criminal.<sup>905</sup> Los estrictos plazos regulados en la legislación dejaban poca defensa a los acusados, que, en pocos días, debían realizar todos los trámites oportunos. Por último, la Ley de Jurisdicciones preveía la pena de suspensión de aquellos periódicos en los que hubiesen recaído tres condenas por delitos de imprenta, lo que suponía un verdadero atropello contra toda la prensa de la oposición, para la que, no solo se restablecían penas y castigos más rigurosos, sino la amenaza directa de suprimir la publicación.

Transcurrido el primer mes desde la promulgación de la ley, el gobierno liberal emitió una orden con la que trató de mitigar el impacto de la misma en la opinión pública. En el documento se afirmaba que la nueva norma estaba redactada de forma precisa y

---

<sup>904</sup> Artículo 5 de la Ley de Jurisdicciones de 1906.

<sup>905</sup> Esta regla, contenida en el artículo 11 de la Ley de Jurisdicciones, aumentó la discrecionalidad a la hora de aplicar la norma, y existieron casos en los que directores de publicaciones catalanas fueron condenados por reproducir artículos escritos por diputados o senadores, a los que se dejaba libres por su condición de parlamentario. Este fue el caso del director de *La Campana* de Gracia, condenado a dos años por insertar un artículo del diputado Emilio Junoy.

determinante, sin “la menor ambigüedad”,<sup>906</sup> y que, al contrario de lo que apuntaban los catalanistas, no tenía como objetivo la persecución y castigo de una tendencia política o de pensamiento. El propósito era combatir los ataques contra la Patria, el ultraje contra la Nación, la injuria u ofensa contra el Ejército y la apología de esos delitos, por lo que se recordaba a las autoridades que debían perseguir y aplicar las sanciones contenidas en la misma. Lo más trascendental de la orden gubernativa fue la inclinación del gabinete liberal a que se aplicaran estrictamente los preceptos contenidos en la ley, haciendo especial hincapié en la libertad de imprenta y el respeto a los derechos de la conciencia. En virtud de esta idea, el ejecutivo afirmó que los tribunales no debían aplicar las sanciones “a actos o a ofensas que no estén taxativa y concretamente marcados en su texto”, ya que, “nada sería más detestable y digno de censura que confundir la salvación de la Patria y la defensa de la disciplina militar, ideas fundamentales y estrechamente enlazadas entre sí, con las habituales licencias de estilo y de pensamiento que, por desgracia, aparecen en la prensa periódica sin propósito deliberado de ofender o de destruir aquellos principios fundamentales”. Con estas palabras se apreciaba en el gobierno liberal una especial preocupación respecto a la forma en la que los tribunales, especialmente los de guerra, iban a aplicar la nueva norma, y por ello, puntualizó la necesidad de aplicar correctamente la misma, de modo que, en los momentos de mayor agitación social, los jueces no confundieran “el delito con la violencia de la expresión”, o la ofensa a la patria con “las reglas de la educación o de la convivencia social”, ya que eso desnaturalizaría la esencia misma de la ley, que se encontraba en sintonía perfecta con el Código Penal y la Ley de Imprenta.<sup>907</sup>

---

<sup>906</sup> Al respecto, el gobierno liberal mencionaba que durante la discusión del Proyecto de ley se había eliminado el calificativo de ataque “indirecto”, a pesar de ser un concepto reiteradamente utilizado en varios artículos del Código Penal.

<sup>907</sup> Real Orden de 23 de abril de 1906 tratando de matizar y mitigar el impacto de la Ley de Jurisdicciones en la opinión pública. Publicado en la *Gaceta de Madrid*, 24 de Abril de 1906, número 114, tomo II (1906), p. 318. Véase apéndice de la tesis: ANEXO N°36.

La nula reacción mostrada por las cabeceras españolas a la hora de defender su libertad de pensamiento y expresión durante los meses en los que había sido debatida la Ley de Jurisdicciones no cambió con la adopción de la misma. En un análisis realizado a las principales publicaciones de la época se aprecia cómo, lejos de reaccionar ante una medida que atentaba contra su propia libertad, el foco de atención giraba en torno a la restauración de las garantías constitucionales en Barcelona. Las publicaciones fueron especialmente críticas con Moret, quién había prometido que tras la promulgación de la nueva norma se instaurarían de nuevo las garantías constitucionales en el territorio. *El País* lo expresó en estos términos: “Ya es ley; Ya está restablecido el párrafo 7º del artículo 7º del Código de Justicia Militar, ya se puede suspender y suprimir periódicos y asociaciones; ya la autoridad no está, como se decía que estaba antes, desamparada, desprovista de medios para evitar y reprimir los insultos a la Patria y al Ejército; pues, como si nada, se falta descaradamente a la promesa: las garantías constitucionales seguirán suspendidas en la provincia de Barcelona”.<sup>908</sup> En contraste con el silencio de las publicaciones periódicas, los diarios militares se mostraron parcialmente satisfechos con la nueva legislación. Por un lado, agradecieron que, por primera vez, el gobierno reconociera legalmente el derecho del ejército a conocer de los delitos de injurias contra los militares, del que entendían que habían sido despojados años atrás. Por otro, criticaron que la nueva norma siguiera dejando en manos civiles los insultos a la nación cometidos con motivo de la crítica periodística, confirmando que la única forma de garantizar la “defensa y la intangibilidad de los prestigios de la Patria” era traspasar la competencia al fuero de guerra.<sup>909</sup>

---

<sup>908</sup> *El País*, “Felonias moretistas”, 26 de marzo de 1906.

<sup>909</sup> *La Correspondencia Militar*, “La verdad ante la ley”, 21 de marzo de 1906.

#### 4. LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS DE IMPRENTA EN MANOS DE LOS MILITARES

Como hemos adelantado, la primera e inmediata consecuencia de la Ley de Jurisdicciones de 1906 fue terminar con el contencioso entre el poder civil y militar a la hora de conocer las causas sobre injurias al ejército contenidas en la prensa. Tras más de diez años de lucha en los tribunales y ataques violentos a las redacciones periodísticas, el estamento castrense consiguió su objetivo, y el gobierno reconoció la supremacía militar a la hora de perseguir y juzgar los ataques a su honor. El conflicto de competencias, que hasta entonces había recaído a favor de los tribunales ordinarios,<sup>910</sup> se resolvió a partir de entonces del lado de los consejos de guerra, en virtud del artículo 5 de la Ley de Jurisdicciones.<sup>911</sup> Esta circunstancia hizo que se multiplicaran los procesos incoados contra los periódicos por delito de injurias. Principalmente, contra las publicaciones catalanistas, que observaban atónitas como los tribunales militares les aplicaban los preceptos legales de forma más rigurosa que al resto. Al conocer éstos de las injurias y ofensas a la institución armada, no dudaron en abusar de su poder para condenar a multitud de periodistas de ideología catalanista como José Baro, del *Empordà Federal*, o Pous y Pagés, del *Poblé Català*. En algunos casos, estas repetidas penas impuestas por los tribunales militares llevaron a los periódicos a desaparecer, o ser suprimidos gubernamentalmente cuando acumulaban tres sanciones, en virtud del artículo 12 de la Ley de Jurisdicciones, como le ocurrió al diario nacionalista *Aberri*, suprimido por el partido conservador por “persistir en sus propósitos”.<sup>912</sup>

---

<sup>910</sup> Las últimas sentencias a favor de la jurisdicción ordinaria para conocer de los delitos de injurias por artículos publicados con anterioridad a la ley de 1906: STS 7 de marzo de 1906. *Gaceta de Madrid*, 29 de mayo de 1906, p. 145. STS 10 de octubre de 1906. *Gaceta de Madrid*, 2 de septiembre de 1907, p. 34.

<sup>911</sup> STS de 9 de octubre de 1909. *Gaceta de Madrid*, 25 de marzo de 1910, p. 45.

<sup>912</sup> STS 16 de enero de 1909. *Gaceta de Madrid*, 15 de octubre de 1909, p. 13.



Por el delito de injurias, la justicia de guerra sancionó dos veces a un redactor de la revista *¡Cu-Cut!*, que, en un mismo número de la revista, había publicado dos caricaturas consideradas ofensivas para la institución militar. La primera de ellas representaba un oficial español que venía del ejército ruso y decía que allí había aprendido “lo que ya sabíamos, perder batallas”; en la segunda, un general arriaba la bandera catalana, diciendo “es lo que nos enseñaron en Cuba”, señalando a otro que en la Habana figuraba descender la bandera española. El Tribunal Supremo confirmó que ambos hechos constituían injurias graves, ya que estaban encaminadas al “exclusivo objeto” de atacar el prestigio y la honorabilidad del ejército, poniéndose de manifiesto el menosprecio a los institutos armados por “lo despectivo de los lemas o motes con que pretende explicarse y la insistencia del pensamiento por medio de formas de ejecución distintas”. En cualquier caso, el Tribunal entendió que solo existía un delito de injurias graves, a pesar de haberse publicado dos caricaturas, ya que ambas se habían cometido por la misma mano y estaban publicadas en un solo número del periódico, lo que hacía que tuvieran en su esencia “notoria semejanza y están regidos por unidad de pensamiento, de medio y de fin”, esa “persistencia en dar variedad de formas a la expresión de la idea es uno de los elementos determinantes de la gravedad de la injuria e impide establecer separación de hechos que se complementan y recíprocamente se caracterizan los efectos penales”.<sup>913</sup>

A la estricta aplicación de la ley por parte de los tribunales militares había que sumar la de los jueces ordinarios y los fiscales, especialmente en los períodos en los que gobernaba el partido conservador, y en los territorios donde estaba más arraigado el problema del separatismo, como Cataluña y el País Vasco. Los tribunales ordinarios

---

<sup>913</sup> STS 2 de Enero de 1907. *Gaceta de Madrid*, 22 de julio de 1908, p. 3.

sancionaron con mucho rigor las publicaciones que cometían ultrajes a la nación, delito regulado en el artículo 2 de la ley. La rigidez con la que se sancionaba a la prensa quedó patente en la condena impuesta al semanario político-humorista de ideología catalanista *La Tralla*, por el artículo “¡Era castellana!”, publicado en un número extraordinario el 15 de enero de 1907. El suelto relataba la historia imaginaria de un hombre que se declaraba separatista y lamentaba haberse casado con una mujer castellana, contra la oposición de su propia familia. Al volver de un viaje, el hombre había descubierto que la mujer estaba ya con otro hombre, a lo que se le daba la explicación de que la mujer “era castellana”.

La reacción popular fue inmediata, tanto de los partidarios de Lerroux en Cataluña, que se sintieron completamente ofendidos con el escrito, como numerosos periódicos de Madrid y provincias. Como ya venía siendo habitual, un grupo de asaltantes atacó la noche del 17 de enero la redacción del semanario, arrojando los muebles a la calle con gritos de “¡Viva España!”. Más tarde, se dirigieron al edificio de *La Veu de Catalunya*, pero la Guardia Civil evitó cualquier ataque a este periódico. Al día siguiente, el gobernador civil de Barcelona comunicó que la publicación radical catalanista había sido suprimida gubernativamente. En la sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo, el órgano fue contundente respecto al delito cometido por el articulista: “Es manifiesto que los ultrajes en él estampados contra la mujer castellana, por ser castellana, se encaminan, sin duda de ningún género, a ultrajar una región de España personificada al efecto de la mujer, persiguiéndose así sobre la base de la difamación una verdadera campaña separatista atentatoria a lo que es y constituye la Patria española, delito perfectamente definido en el artículo 2 de la ley”.<sup>914</sup>

---

<sup>914</sup> STS 29 de julio de 1907. *Gaceta de Madrid*, 10 de enero de 1909, p. 53

En virtud de otra sentencia publicada en 1909, el Tribunal Supremo consideró que en los delitos por ultraje a la nación no cabía la atenuante reconocida en el artículo 9.3 del Código Penal, “no haber tenido intención de causar un mal de tanta gravedad”, porque lo que se apreciaba en éstos no era el daño material, sino el mal moral que se había producido. Por tanto, una vez que se admitía que la acción punible se había perpetrado por el periodista con voluntad e intención, estaban contenidos en este tipo de delito “cuantos elementos constituyen la responsabilidad exigible al agente”.<sup>915</sup> Además, otra sentencia certificó que la palabra “patria”, jurídicamente considerada, era sinónima de “nación”, y que, por lo tanto, los agravios hechos a la primera se consideraban inferidos a la segunda. Así lo reconoció con motivo de la condena interpuesta a un periodista valenciano, que había escrito dos artículos en los que se acusaba a la religión y la patria de ser “los dos elementos causantes de las miserias e injusticias que regulan la absurda dinámica de la actual sociedad”.<sup>916</sup>

En ocasiones, el Tribunal Supremo se vio en la obligación de rechazar algunas sanciones severamente impuestas por los jueces provinciales, al entender que la injuria o desprecio a la nación no estaba perfectamente definida, o por no apreciarse con claridad que el insulto se dirigiera intencionadamente contra la patria española. Este fue el caso de un periodista catalán que había insertado en un diario satírico catalanista con el epígrafe “El conflicto marroquí”, una caricatura en la que se representaba a un general francés y a un torero español en traje de calle. La conversación inventada por el articulista decía lo siguiente: “¡Uf, que cansado estoy de esta espeluznante batalla con los moros...! Tú, español, ¡quítame el polvo de los zapatos!” “Con mucho gusto. Precisamente para matar...toros y limpiar zapatos me pinto solo”. En el fallo del

---

<sup>915</sup> STS 13 de julio de 1908. *Gaceta de Madrid*, 2 de septiembre de 1909, p. 24.

<sup>916</sup> STS 20 de Noviembre de 1908. *Gaceta de Madrid*, 8 de septiembre de 1909, p. 74.

Supremo se confirmaba que, ni el diálogo ni la caricatura traspasaban los límites racionales de la crítica periodística, ya que ni revelaba odio contra la Nación ni lastimaba su honor.<sup>917</sup> También se absolvió a un redactor del periódico *Bizcaitarra* de Bilbao por su artículo: “El triunfo de la raza”, al entender que en el mismo no se desprendía “con la necesaria claridad” una deliberada intención de ultrajar a los españoles que no pertenecieran a la raza vasca, sino la de ensalzar a ésta. De nuevo, el Tribunal aseveró que para afirmar la existencia de un delito de ultraje a la nación se requería “que la injuria o el desprecio resulte perfectamente definido, no tan solo por su significación, alcance y tendencia que puedan tener las frases (...) Sino que aparezca con notaria claridad que el ultraje se dirija intencionadamente contra la nación, su bandera...”<sup>918</sup>

También se sancionó a varios diarios por hacer apología de los delitos contenidos en la Ley de Jurisdicciones. En virtud del artículo 4 de la misma, el Tribunal Supremo declaró punible un artículo periodístico que afirmaba “todos los Felkides que gemían entre rejas tenéis el afecto de nuestros corazones, porque vemos que vuestro sacrificio produce frutos abundantes para el amor de los amores”. En el fallo se acusó al periodista de hacer apología tanto de los culpables de un delito de ultraje a la Nación, como del delito mismo, ya que éste sentenciaba que el sacrificio de los penados al entrar en prisión era el “prenuncio de los días de gloria que ansían para la Patria”.<sup>919</sup> En la misma línea, el Tribunal Supremo entendió que se había cometido un delito de apología en el suelto “El grito trágico”, publicado en el periódico *La Prensa*, de Santa Cruz de Tenerife, que, en pleno conflicto de Marruecos, informó de que un marinero había sido fusilado por “lanzar un grito revolucionario”, y que “otros desgraciados” habían sido

---

<sup>917</sup> STS 7 julio de 1908. *Gaceta de Madrid*, 1 de septiembre 1909, p. 12.

<sup>918</sup> STS 22 de diciembre de 1909. *Gaceta de Madrid*, 25 de abril de 1910, p. 134.

<sup>919</sup> STS 8 de enero de 1909. *Gaceta de Madrid*, 12 de octubre de 1909, p. 5

envidos al presidio, mientras que algunos “habrán desaparecido en el misterio de ese viaje por el mar, que tiene silencios de tragedia y pavores de catástrofe ignorada...”<sup>920</sup>

El Tribunal declaró que el periodista había cometido un doble delito: por un lado, la apología a favor de los delincuentes, por el que debía conocer la jurisdicción ordinaria; por otro, existían en el artículo injurias al ejército, de los que eran competentes los tribunales de la Marina, que, como era lógico, condenaban a todos los periodistas que osaban ofenderles.

La actuación de los fiscales fue también importante en la puesta en práctica de la Ley de Jurisdicciones, ya que, guiados por las órdenes del gobierno central, que les exigían un continuo y exhaustivo control, acosaban y perseguían a todas las publicaciones sospechosas de propagar ideas contrarias a los intereses estatales. Su labor no solo se limitaba a las denuncias de los periódicos, sino, tal y como establecía la legislación, a perseguir hasta el final el delito, intentando, por todos los medios, la condena de los periodistas. Así pues, debían recurrir todas y cada una de las sentencias que absolvían a los periodistas, según lo resuelto, principalmente, en los tribunales ordinarios, ya que, la totalidad de las sentencias impuestas por los Consejos de Guerra condenaba a los periodistas. Entre la extensa producción jurisprudencial sobre la materia, existen dos interesantes fallos por recursos interpuestos por el ministerio fiscal, ambos rechazados por el Tribunal Supremo. El primero, fue uno motivado por el fiscal de Barcelona, a raíz de un artículo que criticaba a los políticos de todos los partidos.<sup>921</sup> El segundo, se impuso contra un redactor de un diario de Gerona, que combatía la utilización del castellano en los diarios catalanes, y que fue acusado por el fiscal de odiar la lengua nacional, y, por tanto, de cometer delito contra la nación española. En el fallo que

---

<sup>920</sup> STS 20 de abril de 1912. *Gaceta de Madrid*, 14 y 15 de octubre, p.148.

<sup>921</sup> STS 16 de mayo de 1908. *Gaceta de Madrid*, 20 de agosto de 1909, p. 146.

absolvió al periodista se afirmó que en el artículo se desprendía que la lengua catalana era más fácil para los lectores y para el desenvolvimiento de su idioma particular, no existiendo ningún agravio a la nación española; además, la utilización en este caso de “patria” no podía entenderse como ultrajes a la nación, ya que el autor se refería a la “comarca o región”, no como entidad independiente, sino como parte del territorio español.<sup>922</sup>

En el Parlamento también se fomentó esta ola de persecuciones a la prensa, y políticos de diferente signo exigieron a los fiscales un mayor control de las publicaciones más radicales, republicanas o separatistas. Concretamente, en julio de 1910, Sánchez Marco denunció a *El Radical*, fundado por Lerroux ese mismo año, por dos publicaciones difundidas el 9 y 10 de julio. La primera de ellas representaba una viñeta en la que se podían ver a tres altos cargos públicos en actitud de ser llevados al patíbulo y una nota que decía: “Si no hay quien haga justicia, la hará el pueblo”. En la segunda aparecía la caricatura de un ex ministro conservador con las manos ensangrentadas y el título: “El asesino de Ferrer”. El diputado consideraba que este tipo de publicaciones eran “abominables”, y excitaban “claramente” al crimen, por lo que debía ser perseguido conforme a la Ley de Jurisdicciones. En opinión de Sánchez Marco, España vivía en una atmósfera de “libertad desenfadada de imprenta”, que se hacía patente en ciertos territorios donde se toleraban este tipo de artículos periodísticos, “pero los que venimos de otras provincias donde estas cosas no se ven (...) creemos que tenemos obligación en conciencia de hacer cuanto sea necesario para evitar esa inducción al crimen”.<sup>923</sup>

En la misma línea de estas afirmaciones que exigían un mayor control de la libertad de

---

<sup>922</sup> STS 6 de julio de 1908. *Gaceta de Madrid*, 31 de agosto de 1909. p. 7

<sup>923</sup> Congreso, 11 de julio de 1910, Sánchez Marco, cif. 498.

imprensa, y coincidiendo con la puesta en marcha de las operaciones militares en suelo africano, el 7 de agosto de 1911 se aprobó una nueva circular suscrita por el ministerio fiscal, que supuso un nuevo triunfo para el estamento castrense. La disposición incitaba a los funcionarios públicos a desplegar “el mayor celo” y a proceder con el necesario rigor al promover la persecución y castigo de la excitación a la indisciplina militar y combatir la apología de los delitos que se cometieran en los periódicos. El objetivo fundamental del gobierno era evitar cualquier campaña de prensa o propaganda contraria a los intereses estatales, que estaban puestos en reclutar a hombres para la guerra de África. Al efecto, se ordenaba a todos los fiscales de provincia, con la ayuda de las autoridades correspondientes, que realizasen una investigación para comprobar si algún periódico producía alguna de estas transgresiones, interponiendo, en su caso, la denuncia correspondiente al autor de dichas infracciones.<sup>924</sup>

Como acabamos de analizar, todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo para poner en práctica la Ley de Jurisdicciones de 1906 restringieron la libertad de imprenta de aquellos periódicos que tenían ideas distintas al régimen establecido, ensanchando cada vez más las competencias del ejército en los delitos de imprenta. Desde la derrota de Cuba en 1898, el poder militar se fue haciendo cada vez más fuerte, apoyándose en el uso continuado de los asaltos violentos a las redacciones de los periódicos como medio de protesta eficaz, ya que en ningún caso fueron reprimidos por el partido conservador ni por el liberal, y en las arbitrarias acciones de los Consejos de Guerra que, al margen de la ley, siguieron incoando procedimientos contra los periódicos que injuriaban a los militares. Así fue como, tras varios años de lucha jurídica en los que se había negado repetidamente la ampliación de competencias de los tribunales militares a la hora de

---

<sup>924</sup> Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 7 de agosto de 1911. Publicado en *Constitución política de la Monarquía española y Leyes complementarias*, pp. 207-208.



conocer los delitos de imprenta, los oficiales consiguieron la aprobación de una ley opresiva para la libertad de imprenta que les otorgaba el control absoluto de este derecho fundamental en lo que respecta a las cuestiones que les concernían a ellos. Pese a los intentos de algunos dirigentes y fuerzas políticas, especialmente, de la agrupación Solidaridad Catalana que mantuvo una lucha constante durante años para derogar la legislación, la norma continuó vigente durante todo el período de la Restauración vejando a los periódicos y limitando su libertad.



## **4. LA CENSURA EN BARCELONA: EL PROBLEMA DE LOS CATALANISMOS Y LA GUERRA DE MARRUECOS**

### **1. LA HUELGA COMO NUEVO MEDIO DE LUCHA ANARQUISTA**

Tras la oleada de bombas vivida a finales de siglo y la represión policial posterior a los atentados que se desencadenó contra el movimiento obrero, muy debilitado en estos años en su conjunto, se produjo un cambio sustancial en lo que respecta al anarquismo característico del siglo XIX. Frente al individualismo de la propaganda de hecho, la corriente anarquista empezó a desarrollar otros mecanismos de actuación colectiva para derribar el capitalismo, que tuvieron su principal manifestación en la huelga revolucionaria. Esta arma sediciosa fue sin duda el motor básico de una nueva modalidad de lucha, a la que se unió, también, la acción directa común a través de manifestaciones y revueltas en su mayoría violentas. Existieron partidarios del atentado personal, pero fueron los menos, ya que la tónica general durante estos años era que cualquier protesta violenta que tuviera como objetivo terminar con la burguesía española era válida. Con la base de este razonamiento, el movimiento anarquista de principios del siglo XX estuvo formado por todo tipo de personas, desde sindicalistas hasta intelectuales, y en sus propósitos se unieron otros grupos políticos como los republicanos, los socialistas y los catalanistas, que apoyaron a los anarquistas con el objetivo común de reformar el régimen, o de sustituir el mismo por la vía de la insurrección.<sup>925</sup>

La radicalización del proletariado motivada por la crisis de la industria textil catalana a

---

<sup>925</sup> Esta circunstancia coincidió con el ascenso a la escena política de distintos sectores republicanos que en marzo de 1903 se reorganizaron en la Unión Republicana bajo el liderazgo de Salmerón, así como el populismo del Partido Radical de Alejandro Lerroux, creado en 1903.

causa de la pérdida de las colonias, y las medidas represivas de las autoridades en el territorio catalán, fomentaron una serie de protestas en Barcelona, lugar que destacó como centro de operaciones de toda la actividad sediciosa de este primer lustro. Durante estos años, cada incidente o protesta ciudadana que se diera en la ciudad condal se resolvía a través de los estados excepcionales, lo que dañaba gravemente las libertades constitucionales.<sup>926</sup> El primero de ellos, después del levantamiento de la suspensión de garantías, en febrero de 1899, se produjo con motivo de la campaña de la prensa catalana contra el Proyecto de nuevos presupuestos gubernamentales. Éste fue presentado el 17 de junio por Fernández Villaverde, ministro de Hacienda, con el objetivo de sanear la economía española tras la guerra colonial, pero en su borrador no se establecía ningún concierto económico favorable a la región. Con motivo de las múltiples protestas vertidas en los periódicos, así como las manifestaciones de los contribuyentes catalanes que se negaban a cumplir con lo decretado desde el gobierno, el 27 de octubre de 1899 se proclamó el estado de guerra en toda la región. Junto a esta medida se impidió a la prensa catalana reproducir los discursos de los diputados de la oposición, aun cuando éstos fueran difundidos por el diario de sesiones. A esta censura directa se unió la prohibición puntual dirigida a los corresponsales catalanes de comunicar a sus respectivas redacciones el alegato pronunciado el 1 de diciembre de 1899 por el ministro Villaverde contra los conciertos económicos regionales, decretándose, también, la censura telegráfica para todos los telegramas que procuraran dar noticia del mismo.

Sin embargo, las desigualdades sufridas por los diarios catalanes respecto al control

---

<sup>926</sup> Concretamente, en 1899 Barcelona estuvo 39 días en estado de guerra, suspendiéndose, además, las garantías constitucionales durante 70 días. La situación empeoró en 1900, ya que el territorio estuvo más tiempo bajo el régimen excepcional que en normalidad, pues se decretaron 234 días de estado de guerra. Datos extraídos del cuadro resumen incluido por GONZÁLEZ CALLEJA, E., *La razón de la fuerza*, p. 411.

gubernamental que se ejercía sobre ellos no se quedaron aquí. El director del *Noticiero Universal*, Peris Mencheta, probó ante el Parlamento que la censura gubernamental era mucho más rigurosa en Barcelona que en otras localidades, ya que se suprimían frases tan inofensivas como “Un colega local cree que a principios del mes próximo se levantará la suspensión de las garantías”, que sí se dejaban insertar en otros periódicos.<sup>927</sup> A pesar de la negativa del gobierno conservador acerca de la existencia de estas irregularidades territoriales, se siguieron evidenciando en las Cámaras los excesos gubernamentales cometidos contra los diarios catalanes. José Muro acusó al gobernador civil de Barcelona de cometer atropellos constantes contra las publicaciones catalanas más radicales. Concretamente, señalaba un telegrama fechado el 20 de marzo de 1900, en el que la autoridad denunciaba al diario republicano *La Publicidad*, dirigido por Lerroux, por haber proferido ataques a las instituciones, violando el artículo 181 del Código Penal. El periodista republicano reprochó la actitud del gobernador contra el periódico, “cuya significación nadie ignora en Cataluña”, y que, abusando de su poder, practicaba un control indirecto sobre la libertad de la prensa revolucionaria, cometiendo, además, una ilegalidad, al indicar en el telegrama el precepto legal que debían aplicar los tribunales de justicia.<sup>928</sup>

El ministro de gobernación conservador, Eduardo Dato, se posicionó a favor del gobernador, razonando que éste, lejos de recurrir a la censura previa que estaba permitida en la provincia, realizó “meras indicaciones”, que podían ser aceptadas o rechazadas por el fiscal, quién, en última instancia, debía decidir si procedía a secuestrar el periódico.<sup>929</sup> En este razonamiento Dato se olvidaba de que estas orientaciones gubernamentales ejercían gran influencia en las autoridades judiciales, que en la

---

<sup>927</sup> Congreso, 29 de noviembre de 1899, Peris Mencheta, cif. 2325.

<sup>928</sup> Congreso, 24 de marzo de 1900, Muro, cif. 5504.

<sup>929</sup> Congreso, 24 de marzo de 1900, ministro de Gobernación, cif. 5503-5504.

mayoría de ocasiones seguían las pautas estatales. Una forma ésta muy eficaz de intervenir la libertad de imprenta, ya que no eran necesarias medidas de control visibles como la censura militar para silenciar a los periódicos más molestos. De hecho, a finales de 1900 siguieron las denuncias en el Parlamento por las continuas “cortapisas” que imposibilitaban a los diarios catalanes expresarse libremente, a pesar de estar levantada la censura previa.<sup>930</sup>

Las protestas contra el gobierno fueron en aumento en la ciudad condal y culminaron en la huelga de los metalúrgicos de diciembre de 1901. Pese al fracaso de la misma, se abrió una etapa en España caracterizada por el entusiasmo puesto en este sindicalismo revolucionario, que trajo consigo manifestaciones sociales y motines de extrema violencia, que desembocaron en una huelga general desarrollada en Barcelona en febrero de 1902, que tuvo paralizada la ciudad durante una semana.<sup>931</sup> En la misma participaron más de mil trabajadores, produciéndose un centenar de muertes provocadas por los choques entre los revoltosos y las fuerzas del ejército. Como era habitual en este tipo de conflictos sociales, el gobierno cedió el control del orden público a los militares, abusando de nuevo de la suspensión de las garantías constitucionales, la cual no se levantó hasta casi un año después de los acontecimientos, el 29 de enero de 1903. La policía, por su parte, detuvo a más de 500 trabajadores, lo que debilitó en gran medida al movimiento obrero catalán, en el mismo momento en el que se afianzaba el radicalismo de Lerroux, quién había sido apodado por *La Veu de Catalunya* como el “Emperador del Paralelo”.<sup>932</sup>

---

<sup>930</sup> Congreso, 3 de diciembre de 1900, Cañellas, cif. 235.

<sup>931</sup> VIQUEIRA HINOJOSA, A., *Historia y Anecdotario de la Policía española (1833-1931)*, Madrid, San Martín, 1989, pp. 85-86.

<sup>932</sup> Durante 1903, Leroux, que tenía un acta de diputado en el Congreso desde 1901, aumentó sus ataques contra la Guardia Civil y el gobierno por su intervención en las últimas manifestaciones sociales, agudizándose así la campaña de desprestigio que él mismo había iniciado años antes por las represiones

Con motivo de las agitaciones estudiantiles iniciadas en abril de 1903 en Salamanca, que se saldaron con varios muertos y denuncias de maltratos por parte de la policía, se produjeron una serie de manifestaciones en otras ciudades como Madrid, Córdoba, Asturias o Almería, en contra de los abusos de la Guardia Civil, que tuvieron gran repercusión en la prensa. Canalejas se hizo eco de las protestas periodísticas, y reprochó al gobierno conservador la utilización excesiva de los militares ante cualquier “mínima” agitación social, dañando así la imagen del instituto armado ante la opinión pública.<sup>933</sup>

La huelga de obreros agrícolas en Alcalá del Valle en agosto de 1903 aumentó la represión policial, causando multitud de detenciones en el bando anarquista, que acusaba al gobierno de volver a la Inquisición española. Los fondos de reptiles característicos de esta época propiciaron cambios radicales en las informaciones que aportaban algunas cabeceras españolas, como *El Imparcial*, que pasaron de condenar la actuación de los obreros a criticar duramente las acciones militares, recrudeciéndose la campaña contra los abusos practicados por las fuerzas armadas. Según el historiador Aguado Sánchez, miembro a su vez de la Guardia Civil, el control informativo impuesto por las autoridades, tanto gubernamentales como judiciales, fue insuficiente para evitar la multitud de ofensas e insultos proferidos en algunos diarios provinciales como *El Gráfico*, *El Diluvio* o *El Diario Universal*. Para Aguado, la “tolerancia” con la que el gobierno recibía los insultos, limitándose a presentar querellas criminales contra los periódicos, junto con la lentitud de los tribunales de justicia, propició una campaña de prensa en donde “la denostación y la injuria fueron habituales y mendaces argumentos de la mayoría de los medios de comunicación”.<sup>934</sup>

---

policiales fruto de los ataques anarquistas. En ese momento se encontraba dirigiendo *La Publicidad*, órgano del recién fundado Partido de la Unión Republicana, aunque contaba con el apoyo de otros diarios influyentes como *El País*, *El Mercantil Valenciano* y *España Nueva*.

<sup>933</sup> Congreso, 11 de julio de 1903, Canalejas, cif. 999.

<sup>934</sup> AGUADO SÁNCHEZ, F., *Historia de la Guardia Civil. La guardia Civil en la Restauración y la Regencia (1874-1907)*, Madrid, Planeta, 1984, pp. 283-284.

## **2. LA ENÉRGICA CAMPAÑA DE LA PRENSA ANTE UN NUEVO INTENTO DE LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA**

En 1904 se abrió una nueva etapa en el movimiento anarquista del siglo XX, caracterizada por un aumento de los atentados, principalmente, localizados en Barcelona, que era, sin duda, donde se concentraban todas las acciones de los movimientos libertarios. En este período, que resucitó la práctica de los atentados individuales, los anarquistas buscaron cada vez con más insistencia el apoyo del proletariado de las fábricas, lo que desembocó en la creación de la primera Federación Obrera, que en 1907 dio lugar a la organización catalana Solidaridad Obrera.<sup>935</sup> Todo esto coincidió con el gran desarrollo del republicanismo sedicioso de Lerroux, cada vez con más partidarios entre las masas trabajadoras, lo que hizo que el límite entre el anarquismo y el republicanismo fuera confuso. De hecho, nunca se aclaró la autoría de los diversos atentados con bombas que estallaron en las calles, plazas o mercados de la ciudad condal, que causaron gran alarma entre los ciudadanos catalanes, ya que las mismas se lanzaban sin importar las víctimas. La prensa anarquista nunca reivindicó estos ataques, al contrario de lo que había sucedido con los grandes atentados de finales del siglo XIX, e incriminaron desde el principio a las autoridades.

El gobierno conservador, por su parte, no tuvo ninguna duda de que el movimiento anarquista se encontraba detrás de los altercados que estaban desestabilizando el orden y la tranquilidad de Barcelona. Para contrarrestar las numerosas explosiones, aumentaron el número de policías en la ciudad, y, además, presentaron el 23 de noviembre de 1904

---

<sup>935</sup> A raíz de la formación de Solidaridad Obrera, controlada por sectores anarcosindicalistas a partir de los sucesos de la Semana Santa, se fundó, a finales de octubre de 1910, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), momento en el que el sector anarquista consiguió hacerse definitivamente con el sindicalismo barcelonés. La fundación llevó a cabo una huelga general revolucionaria contra Canalejas en 1911 que la llevó a la clandestinidad hasta octubre de 1914.

un proyecto de ley complementaria a la legislación contra los ataques perpetrados con explosivos de 1894, que se encontraba todavía en vigor. En el documento se ampliaba el ámbito delictivo del delito de propaganda anarquista, así como del delito de apología por medio de la imprenta, sancionando los mismos con penas de prisión correccional. Finalmente, esta medida no salió adelante debido a la oposición de la mayoría de sectores, desde los liberales, pasando por los demócratas y los republicanos. En los años siguientes continuó la colocación de bombas en lugares de gran concurrencia de personas, que fue acompañada de la ineficaz respuesta policial y gubernativa frente a estos hechos, ya que, lejos de acabar con las sistemáticas explosiones, los utilizaban de pretexto para, ante un mínimo altercado, practicar numerosas detenciones que salpicaban a todos los grupos revolucionarios.<sup>936</sup>

En paralelo a estos ataques que, fundamentalmente, se registraban en Barcelona, se consolidó en 1906 un nuevo partido, Solidaridad Catalana, surgido tras la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, que había supuesto un auténtico revés para el catalanismo, y que tuvo su afianzamiento definitivo en las elecciones parlamentarias del 21 de abril de 1907, en las que los catalanes consiguieron cuarenta y un diputados de las cuarenta y cuatro actas que se presentaban. La agrupación política congregó a todas las fuerzas de la región, desde los partidarios de la Lliga y los integristas y carlistas, hasta los republicanos unionistas liderados por Salmerón, quedando fuera los radicales de Lerroux. Éste lideraba el Partido Radical, con el que, fruto de su propia ambición política, se encargaba de alimentar el odio hacia las autoridades gubernamentales y

---

<sup>936</sup> Entre todos los ataques que se dieron en estos años, cabe destacar el ejecutado por el anarquista Mateo Morral contra Alfonso XIII el 31 de mayo de 1906, día de la boda entre el Rey y Victoria Eugenia. El ataque produjo 23 víctimas, la mayoría de ellas civiles. El autor del crimen se suicidó. La Escuela Moderna, donde se encontraba dando clases, fue clausurada, y su fundador, Francisco Ferrer de Guardia, acusado de ser su principal cómplice, fue absuelto un año después por falta de pruebas, aunque acabaría siendo juzgado y ejecutado tras los sucesos de la Semana Trágica en 1909.

militares mediante artículos demagógicos que incitaban a las masas populares a derribar el régimen constitucional a través de la violencia.<sup>937</sup> Con motivo de los enfrentamientos dialécticos entre Lerroux y los partidarios de Solidaridad Catalana, se produjo el 17 de enero de 1907 un asalto ejecutado por jóvenes lerrouxistas a los periódicos *La Tralla* y la *Veu de Catalunya*. La enemistad manifiesta de ambos grupos provocó otros incidentes en las redacciones de los periódicos que defendían una u otra ideología, como lo prueba la bomba colocada el 17 de febrero de 1908 frente a las oficinas del periódico radical *El Progreso*.

La cotidianidad con la que se lanzaban las bombas en Barcelona y la agresividad presente en los periódicos más radicales, especialmente en las publicaciones afines a Lerroux, aumentó el grado de preocupación de los ciudadanos, que se encontraban muy inseguros ante la incapacidad manifiesta de las autoridades para mantener el orden en la ciudad. Los sectores más conservadores empezaron a reclamar con fuerza una política represiva de mayor dureza para combatir el terrorismo, bien restableciendo la Ley represiva de 1896, o bien imponiendo medidas más rigurosas para los medios informativos que propagaban las ideas anarquistas y fomentaban los atentados. En enero de 1908, tras la decisión de suspender nuevamente las garantías constitucionales en Barcelona, Maura aprovechó para presentar un Proyecto de ley especial contra el terrorismo, que contenía una serie de modificaciones respecto a la Ley de 1894 todavía en vigor, intentando así satisfacer a los sectores que respaldaban el régimen, especialmente a la opinión de la Iglesia católica en la que se apoyaba el gobierno

---

<sup>937</sup> El artículo publicado el 1 de septiembre de 1906 por *La Rebeldía*, órgano de prensa del Partido Radical, fue un preludio de lo que ocurrió tres años más tarde en la conocida Semana Trágica. En el texto, Lerroux alentaba a los “jóvenes bárbaros” a destruir “la civilización decadente y miserable de este país sin ventura”, y finalizaba excitando a esas masas: “luchad, matad, morid...”. Lerroux fue condenado a dos años de cárcel por la publicación de este artículo, siendo la condena ratificada por el Tribunal Supremo el 28 de febrero de 1908.



conservador cada vez con mayor notoriedad.

El texto final presentado para su discusión en las Cámaras pasó por importantes alteraciones respecto al documento inicial, especialmente en lo que respecta al término anarquista, suprimido tras unos comentarios realizados por el líder del partido liberal, Montero Ríos, en los que declaraba que no estaba probado que los atentados sufridos en Barcelona estuvieran cometidos por anarquistas.<sup>938</sup> Maura reconsideró la redacción de la norma, para que, después de votada, se pudiera aplicar de forma amplia a todos aquellos individuos de ideas revolucionarias que ejecutaran este tipo de ataques violentos. En el documento final se fijó como objetivo combatir “la amenaza contra colectividades y clases sociales o corporaciones de causar ilegalmente algún mal en sus personas, sus propiedades o sus derechos”, que sería castigada con la pena de prisión correccional.<sup>939</sup> Por ende, prácticamente todos aquellos sectores que se opusieran al régimen constitucional o cuyo propósito final fuera llevar a cabo una revolución en términos pacíficos, estaban expuestos ante la ley.

En lo que respecta a la libre emisión de ideas, el precepto atentaba directamente al derecho fundamental en varios puntos. En primer lugar, sancionaba con la pena de prisión correccional “la publicación de noticias que no sean oficiales relativas a los delitos comprendidos en esta ley que se cometan en el territorio y durante el tiempo que señalare el Gobierno, así como las relativas a personas inculpadas o procesos incoados por tales delitos”. En virtud de este precepto, se otorgaba al poder público la facultad de

---

<sup>938</sup> El texto primitivo presentado por el gobierno conservador decía lo siguiente: “Artículo único. Se adiciona a la Ley de 10 de julio de 1894 sobre atentado por medio de explosivos, el artículo siguiente: Artículo 15. En el territorio o territorios que por real decreto señale, podrá el Gobierno suprimir los periódicos y centros anarquistas y cerrar los establecimientos y lugares de recreo en donde los anarquistas se reúnan habitualmente para concertar sus planes o verificar su propaganda. También podrá hacer salir del reino a las personas que de palabra o por escrito, por la imprenta, grabado u otro medio de publicidad, propaguen ideas anarquistas o formen parte de las Asociaciones comprendidas en el art. 8º de esta ley”.

<sup>939</sup> Proyecto de ley contra el terrorismo de 1908. *La Correspondencia de España*, 29 de marzo de 1908.

prohibir temporalmente la publicación de noticias no oficiales sobre los atentados, medida que limitaba claramente la libre emisión de opiniones de todas las cabeceras españolas, que solo podían informar a los ciudadanos a través de los informes policiales que les hiciera llegar el gobierno.

Asimismo, el proyecto evidenció, una vez más, y como ya había ocurrido con la Ley de 1896, una falta de armonía entre delitos, ya que igualaba el derecho a exponer o propagar las ideas con la excitación a la violencia y la perpetración de atentados violentos. Así pues, la norma redactada por Maura, “en consideración a la frecuencia o la inminencia de delitos comprendidos en esta ley”, autorizaba a la administración pública para que, por real decreto acordado en Consejo de ministros, estableciera “durante el tiempo y en el territorio que señale” una junta formada en la respectiva provincia por el gobernador civil, la autoridad militar que en ella ejerza el mando superior, el presidente y el fiscal de la Audiencia territorial o faltando ésta, de la provincial, y por el alcalde de la capital. Dicha junta de autoridades estaba autorizada para, entre otras acciones, suprimir los periódicos “en los cuales se verifique la propaganda o se concierten los planes terroristas”, así como para fijar residencia obligatoria en España o, en caso necesario, expulsar a todos aquellos ciudadanos que, “sin haber méritos bastantes para someterlos a la acción de los tribunales”, hicieran propaganda o tuvieran participación en los planes terroristas. Por tanto, de forma circunstancial, en determinadas localidades y cuando se estimara oportuno, el Estado, por medio de una junta de autoridades, que no estaba sujeta a procedimiento alguno, tenía la posibilidad de cerrar empresas periodísticas sospechosas de hacer propaganda terrorista, así como de desterrar a todos los periodistas que considerase oportuno sin mediar autorización judicial.

El controvertido proyecto se presentó en el Senado el 28 de marzo de 1908 generando gran repulsa entre todos los sectores de izquierdas. El partido liberal se opuso frontalmente al documento, aclarando que la ley común era más eficaz y menos sujeta a la arbitrariedad y los abusos del poder, cualquiera que fuese su ideología. Montero Ríos criticó especialmente la excesiva y arbitraria penalidad establecida para todos los periódicos, que no podrían dar ningún tipo de información sobre este tipo de altercados sin estar expuestos a fuertes penalidades. En esto estuvieron también de acuerdo los republicanos, que consideraban que el documento era “de una gravedad inmensa”, porque afectaba directamente a la Constitución. El senador Sol y Ortega, en un discurso realizado el 28 de abril, explicó que la competencia gubernamental para suprimir periódicos era ilegal, ya que la Ley de Imprenta de 1883 había terminado con ese tipo de penalidades que afectaban directamente a los periódicos. Conforme a la legislación de imprenta se sancionaba al autor del delito, e, incluso cuando el Estado se encontraba en régimen de suspensión de garantías o estado de guerra, el poder público podía suspender la publicación de forma temporal, pero en ningún caso prohibirla definitivamente como se solicitaba ahora: “¿Cómo es posible que nosotros ahora en período normal, en período de salud, autoricemos al gobierno para que haga aquello que no puede hacer ni aún en período de enfermedad y anormal?”.<sup>940</sup> Para el senador republicano la supresión de un diario no solo era prohibir la emisión del pensamiento por medio de la imprenta, anulando así el artículo 13 de la Constitución, sino que, además, infringía directamente el artículo 10 del texto constitucional, por privar al ciudadano español de su propiedad.

No solo los cargos políticos más liberales hicieron una dura oposición al Proyecto de

---

<sup>940</sup> *El País*, “Discurso del Sr. Sol y Ortega. Infracción constitucional”, 30 de abril de 1908.

Maura, ya que la gran mayoría de las publicaciones periódicas españolas, entre las que se encontraban las cabeceras más importantes, emprendieron una campaña sin precedentes. Los mismos periódicos que habían dejado dos años antes que la Ley de Jurisdicciones arrebatara una parte de su libertad, lucharon esta vez de forma activa, enérgica e intensa contra el “monstruoso engendro” presentado por el líder conservador. Para el *Heraldo de Madrid* la aprobación del Proyecto de ley de terrorismo era el fin del derecho a escribir, a hablar o incluso a pensar, ya que entregaba la dignidad de los individuos, y todas sus libertades y derechos fundamentales al arbitrio de las autoridades.<sup>941</sup> En opinión del periódico madrileño el desprecio del gobierno conservador a la libertad de prensa constituía un ataque directo a los ciudadanos, porque “la prensa es el vehículo de toda publicidad, el instrumento de toda conciencia colectiva, el alma de la civilización”, y sin los periódicos, “sin su obra de crítica, de denuncia, de fiscalización, no se concibe el régimen constitucional”, y al pueblo español le faltaría el “escudo que le amparase de los ataques y golpes del poder”.<sup>942</sup>

También *El liberal* acusó al ejecutivo conservador de atentar directamente contra la libertad de imprenta, ya que dejaba en manos del poder “la facultad de exterminar a quien le molesta, sin pruebas, en secreto, injustamente”.<sup>943</sup> Maura utilizaba el término “terrorismo” como coartada para amordazar a los periódicos: “Con los explosivos equipara no solo a las ideas, sino a su expresión, y en la misma ringlera penal que a las bombas pone a las noticias, aun las exactas, si ellas no son de su conveniencia o su gusto”.<sup>944</sup> El periódico madrileño se lamentó de que, independientemente de su

---

<sup>941</sup> *Heraldo de Madrid*, “Atropello máximo”, 30 de abril de 1908.

<sup>942</sup> *Heraldo de Madrid*, “Por la ciudadanía”, 1 de mayo de 1908.

<sup>943</sup> *El liberal*, “La represión del anarquismo”, 29 de marzo de 1908.

<sup>944</sup> *El Liberal*, “Todos terroristas”, 26 de abril de 1908.

ideología, “nadie, nadie, nadie” podía considerarse seguro.<sup>945</sup> En la misma línea, los diarios socialistas y republicanos acusaron a Maura de querer matar a la prensa por medio de una ley que, con el pretexto de la represión del terrorismo, iba dirigida contra todas las ideologías y negaba todo derecho de defensa a los ciudadanos.

Contrastando con la protesta unánime de la mayoría de los diarios españoles, los de tendencia conservadora trataron de maquillar a la norma presentada por el ejecutivo, asegurando que la futura legislación se aplicaría de forma excepcional y limitada a casos extraordinarios, y que, en cualquier caso, “poca inquietud” podían inspirar las sanciones propuestas por Maura a todos aquellos periódicos que no secundaban a los terroristas, ya que para ellos no iba dirigida la misma. *La Época* consideró injustificada cualquier protesta referente a un proyecto que era un perfecto recurso para no tener que suspender las garantías constitucionales continuamente. Entre los argumentos esgrimidos, el diario conservador razonó que la obligación de publicar noticias oficiales no podía compararse con la propaganda de ideas terroristas: “¿Tan grande sacrificio y tanta merma de la libertad parece esta selección de noticias, que pueda compararse siquiera con los males, que puede originar una publicidad indiscreta, aunque no sea mal intencionada?”,<sup>946</sup> y que, en cualquier caso, no suponía ninguna merma para la libertad de prensa: “¿Puede nadie sostener que sea más sagrado derecho del pensamiento libre la publicación de noticias sobre la explosión de una bomba o el hallazgo de un petardo y de la defensa de aquellos ideales de los ácratas de todo el mundo, fundamento de ese revolucionarismo contemporáneo?”.<sup>947</sup> El diario conservador apuntó, además, que, al contrario de lo ocurrido con la Ley de Jurisdicciones, que sustraía del conocimiento de los tribunales ordinarios el conocimiento de los delitos de imprenta, conquista

---

<sup>945</sup> *El liberal*, “Contra todos”, 29 de abril de 1908.

<sup>946</sup> *La Época*, “El Proyecto contra el terrorismo”, 27 de abril de 1908.

<sup>947</sup> *La Época*, “Semilla Estéril”, 28 de abril de 1908.

fundamental de la revolución liberal y por la que no habían luchado los periódicos dos años atrás, éste no alteraba la jurisdicción.

A principios de mayo, coincidiendo con la inminente aprobación de la norma en el Senado, que se caracterizaba por su gran conservadurismo, la prensa intensificó su campaña de protesta con el objetivo de impedir la aprobación de una ley que atentaba contra los derechos individuales y la libertad de imprenta. El 4 de mayo se reunieron en la sede de *El Liberal* un gran número de directores y representantes de los periódicos madrileños, tanto monárquicos como republicanos, entre los que se encontraban el *Diario Universal*, *El Globo*, *ABC*, *La Correspondencia de España*, *La Prensa*, *El Diario Español*, *El Imparcial*, *El Herald*o, *El Mundo*, *España Nueva*. En la misma se acordó formar un comité de defensa formado por algunos periodistas de esos diarios, que organizaría manifestaciones y congresos alrededor de España, así como la solicitud de adhesión de la prensa de provincias a la campaña. En el manifiesto redactado por los directores madrileños se requirió a los jefes de las minorías políticas del Senado que se abstuvieran de formar parte de la votación definitiva del proyecto que se iba a realizar en la Cámara Alta, y se propuso la constitución de un grupo parlamentario de diputados periodistas para impedir su aprobación con los medios lícitos que se encontraran a su alcance.

Tras el encuentro de los directores madrileños se produjeron multitud de reuniones y concentraciones en varios puntos de España, en las que participaban líderes políticos que defendían activamente la libertad de prensa. El mitin celebrado en Madrid el 26 de mayo de 1908 tuvo una gran resonancia nacional, ya que, por primera vez, dirigentes del partido liberal monárquico, como Moret o Canalejas, se juntaron con personalidades

republicanas, como Azcarate, Melquiades Álvarez, y Sol y Ortega, para conseguir un fin común: impedir la aprobación de una ley que atentaba contra la libertad de información. La prensa conservadora aprovechó la circunstancia para acusar de “dementes” a todos los que seguían la protesta nacional,<sup>948</sup> e, incluso, algunos diarios liberales como *El Globo* declararon sentirse extrañados con la alianza de ambos partidos, y de que, “hombres que han gobernado y aspiran a volver a gobernar, vayan a esos meetings del brazo no sólo de caracterizados revolucionarios, sino de impenitentes anarquistas, contribuyendo así a la propaganda y a la difusión de ideas contrarias a la Monarquía y al orden social”.<sup>949</sup> En cualquier caso, la conjunción de ambas fuerzas políticas de izquierdas fue determinante para Maura, que, coincidiendo con el levantamiento de la suspensión de garantías en Barcelona, decretado el 1 de junio, paralizó por tiempo indefinido el dictamen que debía emitir una Comisión nombrada al efecto.

*La Correspondencia de España* se hizo eco de la noticia, y publicó un artículo firmado por Juan Aragón, en el que se certificaba que Maura se “había convencido” al fin de que la opinión pública estaba en contra de la ley y que por ello renunciaba al proyecto.<sup>950</sup> En los mismos términos, el *Heraldo de Madrid*, informó de que el presidente del Gobierno había “reconocido su error”, y alabó la labor de la prensa española, así como el apoyo de todos los sectores sociales a los que les repugnaba “esa malograda tentativa de castración del espíritu progresivo de nuestro tiempo”, ya que, por fin, se había demostrado que las campañas de los periódicos eran útiles.<sup>951</sup> También *El País* declaró que el Proyecto de ley del terrorismo “lo consideraremos muerto gracias al esfuerzo de

---

<sup>948</sup> *La Época*, “Demencia”, 3 de junio de 1908.

<sup>949</sup> *El Globo*, 3 de junio de 1908.

<sup>950</sup> *La Correspondencia de España*, “Si no hay dictamen que no haya lucha”, 4 de junio de 1908.

<sup>951</sup> *Heraldo de Madrid*, “Arma que se arrinconó”, 4 de junio de 1908.

la prensa”.<sup>952</sup> Efectivamente, como auguraron los diarios de la época, la ley especial contra el terrorismo nunca llegó a promulgarse. Esto supuso un triunfo absoluto para la libertad de imprenta así como para la imagen de la prensa, que orquestó una campaña en la que, no solo se combatió el documento presentado por Maura, sino, en general, todos aquellos procedimientos arbitrarios que utilizaba el poder para castigar injustamente a los periodistas bajo los delitos de opinión. Esclavizar la conciencia de algunos grupos era suprimir su libertad de prensa, y, nuevamente, el Proyecto de ley dejó en evidencia que en España se seguía sancionando el pensamiento de aquellos que querían reformar la sociedad o criticaban los vicios del poder a través de las palabras.

### **3. LA PROTESTA SOCIAL CONTRA LA GUERRA DE MARRUECOS**

En paralelo al problema del terrorismo, focalizado principalmente en Barcelona, el poder público se enfrentó a otra dificultad internacional. Después de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898, la zona norte de Marruecos, que había sido concedida en el Acta de Algeciras firmada por las grandes potencias europeas el 7 de abril de 1906, se convirtió en el único residuo colonial que tenía España en ese momento. A partir de 1909, la viabilidad del proyecto colonial empezó a estar comprometida por la resistencia del pueblo marroquí, que no aceptaba el dominio español, así como por las sucesivas rebeliones populares y las manifestaciones anticolonialistas que se sucedieron en diversas ciudades españolas con motivo del aumento de la intervención armada en el territorio africano. La influencia del movimiento obrero en el problema africano se hizo especialmente patente en Barcelona, en donde existían importantes agrupaciones y sindicatos obreros organizados con ideas manifiestamente antimilitaristas.<sup>953</sup> Entre

---

<sup>952</sup> *El País*, 4 de junio de 1908.

<sup>953</sup> Los sectores más revolucionarios del momento se caracterizaban también por un fuerte pensamiento anticatólico, que ponía en cuestión la oposición que ocupaba la Iglesia dentro del Estado, y especialmente



todos ellos destacaba la confederación revolucionaria Solidaridad Obrera, formada por socialistas, anarquistas y republicanos bajo las órdenes de Salvador Seguí, que fue determinante en la explosión de violencia popular desencadenada en Barcelona en julio de 1909.

## **1. LA REACCIÓN DE LA PRENSA Y EL PUEBLO CATALÁN: LA SEMANA TRÁGICA DE 1909**

El recrudecimiento del problema en el norte de África hizo que el gobierno de Maura agudizara la política de intervención sobre todas las informaciones referidas al conflicto, especialmente de aquellas publicaciones españolas que se dirigían al territorio para desestabilizar los planes coloniales del gobierno central. A la prohibición del ejecutivo de la venta y circulación por territorio africano de los diarios catalanes impresos en París, impuesta en abril de 1907,<sup>954</sup> se sumó un incremento del control de todos los telegramas que se enviaban al centro de telégrafos de Melilla, lo que propició que las empresas periodísticas buscaran otras vías telegráficas menos controladas hasta entonces como Chafarinas, Alhucema o Peñón. Por su parte, el control informativo de la prensa española siguió siendo especialmente riguroso con las publicaciones catalanas más radicales, como *El Progreso* y *La Publicidad*, que sufrían duras condenas por motivos que rozaban la ilegalidad.

Una de las causas por las que eran sistemáticamente sancionados era por la

---

el monopolio ejercido en el mundo educativo. De entre todos los anarquistas destacó Francisco Ferrer i Guardia, fundador de la Escuela Moderna en Barcelona, donde se educaba a los jóvenes en la doctrina libertaria, y que se convirtió en una fuente inagotable de enfrentamientos con la institución religiosa, que, finalmente, acabaron costándole la vida cuando fue acusado como uno de los principales culpables de los sucesos de la Semana Trágica.

<sup>954</sup> Carta del 25 de abril de 1907. Archivo Central del Servicio Histórico Militar de Madrid, Tercera sección, Fondos relativos a África, Censura de prensa (periódicos, publicaciones y censura).

reproducción de los discursos que sus líderes más influyentes daban en el Parlamento. Por esta razón, el 2 de abril de 1909 ingresó en prisión un redactor del diario *Poblé Catalá*, a consecuencia de un fallo interpuesto por el Consejo Supremo de Guerra, que calificó como delito de injurias la reproducción exacta y literal de las palabras pronunciadas por el diputado republicano Juliá Nogués. Éste denunció la sentencia ante el Congreso, calificando de “monstruosa” la imputación de un delito por copiar líneas del Diario de las Sesiones.<sup>955</sup> Las múltiples protestas hacia los abusos cometidos contra la libertad estimularon una pequeña reacción en el partido conservador, que sacó adelante una Ley el 23 de abril de 1909 por la que se otorgaba la amnistía a los sentenciados o procesados por los delitos cometidos por medio de la imprenta, a excepción de los delitos de injuria y calumnia contra particulares. En virtud del mandato legal, se concedía la puesta en libertad a todas las personas que estuvieran detenidas, presas o extinguiendo condena, al tiempo que se hallaran fuera de España podrían volver, debiendo sobreseerse libremente los procesos, “cualquiera que fuera la situación en que se encuentren los sujetos por responsabilidad criminal”.<sup>956</sup>

Durante estos meses aumentaron los incidentes que dejaban en evidencia la desastrosa situación en la que se encontraba el ejército. A pesar de las malas noticias que llegaban de Marruecos, con derrotas importantes para las tropas españolas como la sufrida a finales de julio en el Barranco del Lobo, el gobierno conservador autorizó la reanudación de las obras del ferrocarril minero que uniría Melilla con el norte de África, a sabiendas de que la medida podría motivar un ataque de los grupos no controlados por el Sultán, como así ocurrió. El 9 de julio de 1909 revolucionarios africanos, que se

---

<sup>955</sup> Congreso, 3 de abril de 1909, Nougues, cif. 3539.

<sup>956</sup> Artículo 3 de la Ley de 23 de abril de 1909 concediendo la amnistía a los delitos cometidos por medio de la imprenta. Gaceta de Madrid, 24 de abril de 1909. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo de 1909*, pp.181-182.

oponían a la ocupación extranjera atacaron a los obreros españoles que se encontraban construyendo el puente de ferrocarril, perdiendo la vida seis de ellos.<sup>957</sup> El ataque, que provocó el inicio de la guerra de Marruecos, fue utilizado como pretexto por Maura para movilizar a la población española en defensa de la causa nacional. Con este objetivo publicó el 10 de julio un decreto para reclutar a las brigadas mixtas de Cataluña y Madrid, además de otras unidades militares, con el propósito de ser enviadas a Marruecos. Para reforzar los efectivos militares, el presidente del gobierno llamó a filas a los reservistas, la mayoría de ellos obreros casados y con hijos, cuya única fuente de ingresos familiares era el trabajo de éstos. La medida provocó un rechazo inmediato entre las clases populares, que iniciaron una protesta masiva, fomentada por algunas cabeceras españolas que publicaron artículos en contra del conflicto armado y de las instituciones en las que se fundamentaba el régimen, con claros tintes antibelicistas y anticlericales.

En contraste a lo que ocurrió en 1898 con el inicio del conflicto cubano, fueron muchos los periódicos que se mostraron totalmente opuestos a la guerra de Marruecos, especialmente los diarios catalanes de izquierda, como *El Progreso*, *Solidaridad Obrera*, *El Diluvio* o *La Tribuna*, que acusaban al poder público de ordenar la intervención armada para defender los intereses privados. Más cautas se mostraron otras publicaciones como *La Veu de Catalunya* o *La Vanguardia*, aunque también se posicionaron contra la decisión gubernamental. A estas se unieron los periódicos madrileños de mayor circulación como *El Liberal*, *El Imparcial*, *La Correspondencia de España* y *El Heraldo de Madrid*, así como *El Socialista* y *El País*, emprendiendo todos ellos una de las campañas más duras contra un jefe de Gobierno, especialmente tras los

---

<sup>957</sup> GUTIÉRREZ MOLINA, J.L., *El Estado frente a la anarquía*, p.112.

sucesos de la Semana Trágica, que no cesó hasta la caída de Maura en octubre de 1909. Por su parte, las únicas que se posicionaron a favor de la aventura colonialista fueron publicaciones de corte conservador y católico, así como los diarios militares que abogaban por la intervención armada, al considerar que se encontraba en peligro la unidad de la Patria.

La tensión fue en aumento con el paso de los días, en los que se daban multitudinarias manifestaciones y mítines contra la guerra encabezados por mujeres y niños. La tarde del 18 de julio, cuando se iba a producir el embarco de un batallón perteneciente a la brigada mixta de Cataluña en el puerto de Barcelona, se originó una insubordinación total de los soldados, sin que las autoridades pudiesen imponer su autoridad. Las noticias sobre numerosas víctimas mortales en el ejército español a causa de nuevas derrotas en Melilla acrecentaron la ira popular, ocasionándose incidentes en otras ciudades como Madrid y Zaragoza. El 22 de julio el partido de Solidaridad Catalana, haciéndose eco de la masiva protesta popular, exigió a Maura un replanteamiento respecto al conflicto armado y a la forma de reclutamiento de soldados españoles, idea apoyada por las Juventudes Socialistas de Madrid, que exteriorizaron su intención de realizar una multitudinaria manifestación en contra de la guerra.

En estas circunstancias, el gobernador civil de Barcelona, en consonancia directa con el ministro de Gobernación, Juan de la Cierva, publicó un bando en el que amenazaba con suspender todo tipo de reuniones convocadas para protestar contra la guerra, medida que incrementó aún más la rabia de las clases trabajadoras, que habían sido citadas por Pablo Iglesias a realizar una gran huelga general en toda España. Ante la incapacidad de cualquier asociación de reunirse de forma legal, el sábado 24 de julio, Solidaridad

Obrera constituyó de forma clandestina un comité de huelga formado, entre otros, por el anarquista Rodríguez Romero y el socialista Antoni Fabra Ribas, así como representantes de otras entidades obreras, que ese mismo fin de semana convocó un paro de 24 horas para el lunes 26 de julio. Es interesante señalar que el siempre provocador periódico *El Progreso* publicó el domingo previo a los sucesos un artículo titulado “Remember”, firmado por Emiliano Iglesias, máximo responsable en ese momento del Partido Radical, en el que se glorificaba la matanza perpetrada el 25 de julio de 1835 contra los conventos de los frailes en Barcelona. El escrito, unido a otros aparecidos en distintos periódicos catalanes, que en esos días habían difundido listas con todas las iglesias y conventos de la ciudad, fue una consigna para los miles de revolucionarios que tomaron las calles de la ciudad el día siguiente.

La Semana Trágica se inició en Barcelona el lunes 26 de julio de 1909 con el apoyo de todos los sectores obreros de la ciudad, desde los más radicales y anarquistas, que pretendían derrocar al gobierno de forma violenta, a los socialistas, que preferían otras formas pacíficas de protesta. Los numerosos disturbios acontecidos el primer día, en el que se produjeron una docena de muertos por disparos de la Guardia Civil, llevaron al capitán general de la ciudad condal, Luis Santiago, bajo la autorización de Juan de la Cierva, a declarar el estado de guerra. La ciudad quedó totalmente paralizada e incomunicada, sin que ningún grupo se responsabilizara y asumiera el liderazgo de una huelga que se había convertido ya en una insurrección popular antibélica y anticlerical. El martes continuaron los incidentes con asaltos y quemas de edificios religiosos en los que murieron varios miembros del clero, extendiéndose las revueltas de los obreros a otras provincias catalanas, sin que la débil y desorientada actuación policial pudiera hacer frente a los acontecimientos. No fue hasta el jueves, día en el que llegaron

refuerzos militares procedentes de Valencia y Zaragoza, cuando poco a poco el poder militar comenzó a hacerse con el control de la ciudad. El domingo se volvieron a publicar los periódicos, y el lunes 2 de agosto Barcelona recobró la normalidad.

## **2. EL AUMENTO DE LA REPRESIÓN INFORMATIVA TRAS LA INSURRECCIÓN POPULAR**

La semana trágica evidenció la descoordinación y debilitamiento del gobierno conservador, que, incapaz de gestionar por sí solo la insurrección popular, otorgó grandes prerrogativas al ejército para que se hiciera con el control de la ciudad.<sup>958</sup> La mala gestión militar dejó un balance de 113 muertos y medio millar de heridos, como confirmó el ministro de Gobernación,<sup>959</sup> cifras a las que hay que sumar el medio centenar de edificios destruidos. La durísima y arbitraria política de represión contra el movimiento obrero adoptada por el gobierno conservador, bajo las órdenes directas de Maura y Juan de la Cierva, y fomentada por los sectores ultraconservadores, hizo recordar a la que se había llevado a cabo durante el procedimiento de Montjuich.

El abuso de la justicia militar, bajo el estado de guerra en el que se encontraba Barcelona, y la arbitraria aplicación de la Ley de Jurisdicciones, así como el apoyo del fiscal del Tribunal Supremo, Javier Ugarte, ferviente católico, hizo que durante los primeros días se impusieran unas severas medidas contra el proletariado catalán, que pretendían calmar las voces de los sectores más conservadores de la ciudad. Los centros obreros y sindicatos fueron clausurados, se cerraron las escuelas laicas y centenares de personas fueron expulsadas de España. La obsesión de Maura por encontrar a los

---

<sup>958</sup> GONZÁLEZ CALLEJA, E., *La razón de la fuerza*, p.452.

<sup>959</sup> Congreso, 19 de octubre de 1909, ministro de Gobernación, cif. 61.

culpables e imponerles un castigo ejemplar que sirviera de escarmiento a todos los ciudadanos, se vio reflejada en la multitud de detenciones ilegales practicadas durante aquellos días que desembocaron en un proceso militar amañado y carente de pruebas en el que se vieron enjuiciadas más de 1.700 personas.<sup>960</sup> La sentencia final dejó 59 condenas a cadena perpetua y cinco ejecuciones a muerte, entre los que se encontraba Francisco Ferrer i Guardia, quién nada había tenido que ver con los sucesos. El fundador de la Escuela Moderna fue señalado como instigador y organizador de la insurrección obrera a principios de agosto por los diarios más conservadores, siendo detenido el 12 de agosto y procesado ante el Consejo de Guerra en un juicio carente de garantías. Aunque se le acusó de un delito de rebelión militar por la insurrección de Barcelona, en realidad, fue castigado por las grandes sospechas que recaían sobre su implicación en el atentado frustrado contra Alfonso XIII.

La rápida instrucción llevada a cabo por la justicia militar que desembocó en la condena a muerte a Ferrer, y en la que se observaron algunas irregularidades como la falta de testimonios a favor del acusado, propició una gran campaña de protesta en los diarios europeos más importantes, que ensalzaron al pedagogo catalán como un mártir del mundo obrero, acusando a Maura de hacer volver a renacer la Inquisición española. Las multitudinarias manifestaciones por toda Europa en oposición al líder conservador provocaron la reacción de numerosos diarios conservadores que efectuaron una campaña liderada por el *ABC* en defensa del honor nacional atacado a través de Maura. Su director, Luca de Tena, ayudándose de las filtraciones que había realizado el ejecutivo a algunos periódicos conservadores sobre las partes del sumario más desfavorables a Ferrer, envió un telegrama el 16 de octubre de 1909 a los directores de

---

<sup>960</sup> GUTIÉRREZ MOLINA, J.L., *El Estado frente a la anarquía*, p.103.

los principales periódicos europeos, en el que intentaba esclarecer la decisión del tribunal sobre la condena de Ferrer, y con ello paralizar las multitudinarias manifestaciones en contra del líder conservador. Junto con los numerosos artículos difundidos por el *ABC* resguardando el buen nombre del gobierno español, se publicó otro periódico que reproducía en diferentes idiomas los mismos textos escritos por Luca de Tena, enviándose ejemplares a los diferentes organismos e instituciones extranjeras que habían criticado al Estado español.<sup>961</sup> Esta propaganda orquestada por el poder público no consiguió frenar los escritos que, incluso tras la ejecución del anarquista, el 13 de octubre de 1909, se dedicaron a su figura en la prensa de izquierdas, que le recordó siempre como un símbolo de la “gloriosa” insurrección ciudadana.<sup>962</sup>

En paralelo a estas protestas de los periódicos europeos, la prensa española, que no siguió con tanto ímpetu la protesta contra el procesamiento de Ferrer, intensificó su campaña contra el conflicto africano y el gobierno de Maura, que fue neutralizada por el partido conservador a través de un organizado aparato de represión de los medios periodísticos, creado de forma exclusiva para la guerra de Marruecos.<sup>963</sup> Así pues, bajo la suspensión de garantías en toda España, promulgada con motivo de los sucesos de la semana trágica, y que se mantuvo hasta el 27 de septiembre, se abusó del poder militar para perseguir y censurar a la prensa, prohibiéndose la circulación en tierras africanas de

---

<sup>961</sup> GARCÍA VENERO, M., *Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio. Una vida al servicio de España*, Madrid, Prensa Española, 1961, p. 179.

<sup>962</sup> Analizando la doctrina del Tribunal Supremo existe un fallo dictado en 1912 en el que se condena a una publicación periódica por contar hechos de la semana trágica, por el delito de apología regulado en el artículo 4 de la Ley de Jurisdicciones. Decía el fallo: “Considerando que en la publicación se hace apología de los sucesos de la semana trágica y de la persona de Ferrer, condenado como responsable de los mismos, y estando dichos sucesos, por las circunstancias que concurrieron en su preparación y desenvolvimiento, notoriamente comprendidos en la sanción de la ley de jurisdicciones de 23 de marzo de 1906, es indudable que la expresada publicación cae también en la misma sanción”. STS 9 de octubre de 1912. *Gaceta de Madrid*, 22 de marzo de 1913, p. 38.

<sup>963</sup> La guerra de Marruecos supuso un despliegue de medios periodísticos sin precedentes, contando todos los periódicos de Madrid y provincias con destacados corresponsales que informaron de forma puntual de todo lo que acontecía en el territorio.



periódicos peninsulares que se oponían a la guerra. Asimismo, Maura decretó que se retuvieran los paquetes de todos los diarios catalanes enviados a Marruecos, impidió a los corresponsales de los periódicos visitar a las tropas españolas, y dirigió una orden gubernamental a los periódicos madrileños, en la que se amenazaba a éstos con expulsar a sus corresponsales si difundían noticias perniciosas del conflicto. Este tipo de órdenes gubernamentales fueron muy utilizadas por el poder público para silenciar a la prensa, tal y como quedó reflejado en el escrito de protesta de la prensa española liberal y de izquierdas presentado al Rey el 16 de septiembre. Ésta se hizo con motivo de la detención por los tribunales militares del director de *La Correspondencia de España*, Leopoldo Romeo, uno de los numerosos corresponsales desplazados al lugar de conflicto, quién había difundido el 8 de septiembre un artículo en el que rechazaba cualquier acción política para solucionar el problema de Marruecos. La acción de censura militar sirvió de pretexto a los directores de los más importantes periódicos madrileños para aumentar la ofensiva contra Maura, los cuales formaron una comisión, el 13 de septiembre para, entre otras asuntos, exigir la libertad de Romeo y solicitar la adhesión de las publicaciones de provincias de corte liberal y republicano. En el comunicado dirigido a Alfonso XIII se denunciaba la imposición de medidas represivas por parte del gabinete conservador, que impedían a la prensa española ejercer su labor periodística con libertad. Las quejas se centraron especialmente en las órdenes gubernamentales que prohibían la publicación de noticias o comentarios no tipificados legalmente, y que adoptaban formas encubiertas de control informativo.

No obstante, se utilizaron otras vías para anular la información de los periódicos, como la censura telegráfica. El ejecutivo autorizó al jefe militar de las operaciones, Salvador de Arizón, la imposición de medidas de control sobre los telegramas enviados desde las

redacciones españolas.<sup>964</sup> Como venía siendo habitual, el poder manejó otros mecanismos indirectos de censura típicos de la época, como los sobornos a los periodistas, y los pagos mediante fondos de reptiles a medios progubernamentales que podían transmitir con facilidad la idea de la unidad nacional y el interés patriótico del conflicto. La política de subvenciones del Estado también alcanzó a otros periódicos de Madrid y Barcelona con el objetivo de limitar los efectos de sus críticas, así como a publicaciones del norte de África que informaban de la guerra en beneficio del gobierno español.<sup>965</sup> La estrategia del gobierno de intervenir la información vertida en los medios más próximos al conflicto, para así convencer a la opinión pública sobre la conveniencia de la intervención armada, era muy efectiva, ya que, sin levantar sospechas respecto a la censura practicada, se transmitían noticias favorables para el ejército español, que se difundían literalmente en aquellos periódicos provinciales de pocos recursos que no contaban con corresponsales en tierras africanas.

## **5. LOS RECORTES AL DERECHO A INFORMAR SOBRE LA GUERRA BAJO EL RÉGIMEN LIBERAL**

La gran campaña de protesta internacional a favor de la absolución de Ferrer fue utilizada por Moret, líder del partido liberal, para que, una vez reanudadas las sesiones de Cámaras, se negara a seguir colaborando con Maura. A la protesta del partido liberal

---

<sup>964</sup> Archivo central del Servicio Histórico Militar de Madrid. Tercera sección. Fondos relativos a África. Censura de Prensa. Toda la documentación vertida en los archivos ha sido analizada por MARTÍNEZ GALLEGU, F., y RIUS SANCHIS, I., “Los lápices rojos del africanismo: control informativo en la guerra de Marruecos”, *Comunicación y guerra en la historia*, Santiago de Compostela, Tórculo, 2004, pp. 825-850.

<sup>965</sup> Entre los periódicos africanos que recibían subvenciones del Estado español se encontraban: *El Telegrama del Rif*, que se convirtió en el diario más influyente en África, *El Eco Mauritano*, *El Porvenir de Tánger*, *El Defensor de Ceuta* o *El Popular*, creado con las aportaciones del propio gobierno español. Publicado en el Archivo General de la Administración, Sección África, caja M 120, “Relación de periódicos y revistas subvencionadas desde 1906 hasta la mencionada disposición del Señor presidente del Directorio Militar”. Analizado en el artículo de LAGUNA PLATERO, A. y BORDERIA ORTIZ, E., “Al servicio del Imperio. Estrategias de desinformación en la guerra del norte de África”, *Comunicación y guerra en la historia*, Santiago de Compostela, Tórculo, 2004, pp. 663- 682.

se unieron los republicanos y los socialistas, y todos ellos celebraron una manifestación en Madrid el 21 de octubre al grito de “¡Maura, no!”. Ese mismo día escribió Rafael Gasset en *El Imparcial* el artículo “¿Pueden ser monárquicos los liberales?” en el que instaba a Alfonso XIII a realizar “un acto que acredite que la Monarquía no ha prescindido del Partido Liberal”. Y continuaba: “el ministro de la Gobernación ha dicho ayer tarde que sólo los conservadores defienden la ley y que los liberales son auxiliares de la demagogia, partícipes de los anarquistas y colaboradores, por descuido, de los atentados de la dinamita”, señalando que era un día “crítico, esencial y definitivo en la orientación de la política española”.<sup>966</sup> Un solo artículo bastó para que se consumara la caída de Maura, y con él la de su ministro de Gobernación. Esa misma tarde el líder conservador compareció ante Alfonso XIII y presentó su dimisión, ocupando la cartera presidencial los liberales, que debían parte de su triunfo a la campaña ardua y enérgica contra Maura realizada por el bloque de izquierdas. El 23 de octubre *El Imparcial* amanecía con un artículo en el que anunciaba el fracaso de Maura, aconsejando al gabinete conservador un cambio de rumbo para mantener el sistema monárquico que se estaba resquebrajando: “La Monarquía necesita de dos ruedas para que marche el carro. La rueda de la derecha se ha roto, o mejor dicho, la ha roto el Sr. Maura. Urge recomponer la avería y es precioso que se prescinda para la compostura del peligroso carretero”.<sup>967</sup>

Con el partido liberal al frente del nuevo gobierno, se rebajaron las protestas contra la guerra de Marruecos, y se produjo una mayor apertura respecto a la libertad de imprenta, que se vio favorecida por el Real Decreto aprobado por Canalejas el 21 de febrero de 1910 que concedía un indulto total a todos los condenados por delitos de

---

<sup>966</sup> *El Imparcial*, “¿Pueden ser monárquicos los liberales?”, 21 de octubre de 1909.

<sup>967</sup> *El Imparcial*, “No han fracasado los conservadores. Ha fracasado Maura”, 23 de octubre de 1909.

imprensa en reuniones o manifestaciones públicas con fin político.<sup>968</sup> Aun así, en el transcurso de ese año se evidenciaron ciertas arbitrariedades gubernamentales que restringían la libertad de información. En julio, Emiliano Iglesias acusó al gabinete liberal de castigar a la prensa “como en los tiempos conservadores” y de practicar la censura telegráfica mediante la retención de telegramas que eran enviados por los corresponsales extranjeros de algunos periódicos: “Es un abuso de las facultades gubernamentales, atropello al derecho a la prensa”.<sup>969</sup> Meses más tarde, el líder del PSOE, Pablo Iglesias, culpó al gobernador civil de Barcelona de atropellar la libertad del periódico valenciano *La Escuela Moderna*, prohibiendo la circulación en la ciudad condal de un número extraordinario impreso el 13 de Octubre de 1910, en el que se hacía referencia al aniversario del asesinato de Francisco Ferrer. Pese a no haber sido denunciado en Valencia, donde circuló con absoluta tranquilidad, en Barcelona los oficiales detuvieron a los vendedores del diario sin ni si quiera existir una denuncia previa por parte de la autoridad judicial.<sup>970</sup>

En 1911, coincidiendo con la reactivación de las campañas en contra de las operaciones militares en Marruecos, liderada por la coalición de socialistas y republicanos, que solicitaban la retirada de las tropas y la derogación del sistema de reclutamiento, el gobierno liberal incrementó su política de represión contra la prensa. A los controles que ya se venían practicando como la censura telegráfica o la restricción en el acceso a los campos de batalla a los corresponsales, se unieron otras como la limitación de las informaciones de la guerra a la versión gubernamental o la dificultad de los periódicos para acceder a los medios de difusión de noticias, limitando el suministro y el precio de papel. Canalejas, como lo había hecho Maura en su momento, prohibió la circulación en

---

<sup>968</sup> Real Decreto de 21 de febrero de 1910. *Gaceta de Madrid*, 23 de febrero de 1910.

<sup>969</sup> Congreso, 9 de julio de 1910, Emiliano Iglesias, cif. 450.

<sup>970</sup> Congreso, 20 de octubre de 1910, Pablo Iglesias, cif. 1256.

Tetuán de dos de las publicaciones más radicales, *España Nueva* y *España Libre*, por el temor a que las informaciones vertidas en estos periódicos llegaran a los soldados españoles. En la Península estos dos periódicos sufrieron también la persecución continua y arbitraria de las autoridades, que, en ocasiones, denunciaban números que no informaban sobre el conflicto de Marruecos, como probó Nougues en el Congreso respecto al ejemplar publicado el 22 de marzo de 1911 de *España Nueva*.<sup>971</sup>

Estas publicaciones radicales no fueron las únicas, ya que los atropellos a los diarios republicanos y lerrouxistas fueron constantes durante 1911 y 1912, siendo denunciados periódicamente por las autoridades militares con motivo de las supuestas ofensas vertidas contra la Iglesia y al ejército español a causa del conflicto marroquí. Este recurso fue muy utilizado para reprimir la libertad de prensa, ya que permitía secuestrar la edición del diario sin que llegara a la opinión pública la información que se quería evitar. Emiliano Iglesias, director de *El Progreso*, y Felix Azzati, de *El Pueblo*, no se libraron de la permanente represión ejercida por las autoridades militares, pese a su cargo de diputados, y se abrieron varios procesos militares por artículos en los que se hablaba del conflicto armado,<sup>972</sup> aunque, en, ocasiones, las sistemáticas denuncias incluían otros sueltos que nada tenían que ver con la contienda, como “Un cacique rural. Al alcalde de Barcelona, ¡Que baje!, ¡Que baje!”, escrito por Iglesias el 7 de mayo de 1912, o la condena a Felix Azzati por delito de injurias contra Bartolomé Montañés, a raíz de la publicación de 24 artículos entre julio y agosto de 1911.<sup>973</sup>

---

<sup>971</sup> Congreso, 23 de marzo de 1911, Nougues, cif. 370.

<sup>972</sup> Entre los artículos denunciados se encontraban: “La provocación de ayer. Embarque de tropas” o “La guerra maldita. Por el imperio de la ley”, ambos escritos por Emiliano Iglesias; Firmados por Felix Azzati: “Episodios. Para la historia de una compañía” y “Por la justicia. El sacrificio es un deber”, publicados por (17 de julio de 1912).

<sup>973</sup> Curiosamente, en el proceso ante el Tribunal Supremo, el director de *El Pueblo* declaró que la campaña realizada en su diario era meramente política, pese a que se nombrara al querellante, que, además, había tardado bastante tiempo en denunciar al diputado, por no sentirse ofendido. *ABC*, Tribunales, 15 de mayo de 1914.

En paralelo a estos procesamientos militares, continuaron las protestas contra el gobierno de Canalejas, especialmente por parte del sector republicano. La noche del 1 de agosto de 1911 estalló una rebelión militar en la embarcación “Numancia” llevada a cabo por un grupo de marineros armados que pretendían proclamar la República. Los periódicos más radicales exigieron al presidente el indulto de los marineros. Sin embargo, Canalejas decidió no pronunciarse ante el juicio militar que se iba a llevar a cabo. Tras este incidente, que acabó con la ejecución del cabecilla de la sedición, se acrecentó la campaña de protesta de las publicaciones revolucionarias, hasta el punto de proclamarse una huelga general en España el 18 de septiembre. Un día después, el partido liberal suspendió las garantías constitucionales en toda la nación, y con ella llegó, nuevamente, la censura para todas las informaciones referentes a las huelgas y al conflicto de Marruecos. Tras la medida, se sucedieron los altercados revolucionarios a la vez que se mantuvo la huelga general que afectó a los diarios republicanos *El País*, *España Nueva*, *España libre* y *El Radical*, así como el conservador *La Época*.

La censura de la prensa a la hora de informar sobre la guerra hizo que volvieran los espacios en blanco a las publicaciones españolas, como ya ocurrió en la contienda de Cuba en 1898. El 30 de septiembre *El Mundo*, periódico monárquico, publicó un artículo escrito por el senador Tomás Maestre, en el que declaró que la actitud “pasiva” del ejército español resultaba “deprimente y era interpretada “por los moros como miedo”. El lápiz rojo tachó varios de los párrafos del suelto, lo que incitó a su director, Santiago Matáix, a difundir un violento artículo el 2 de octubre de 1911 con el título “Torpezas de la censura. *El Mundo* en rebeldía. La Asociación de la Prensa”, en el que rechazó el uso de la censura en estos términos: “No pensamos enviar una sola línea de las que publiquemos a la censura, porque en circunstancias normales la creemos un

abuso del poder y porque nos molesta la forma malísima en que está organizada”. El director, contundente, atestiguó que, si tenía que elegir, prefería la suspensión gubernamental de su publicación a tener que “pasar la vergüenza de que cuatro oficiales del Gobierno se ensañen con las pruebas de hombres como Maestre, que tiene, como senador, la facultad de poder decirlo todo en la representación nacional”. Además de los duros calificativos que dedicaba a Canalejas por unas “funciones policíacas, impropias de un jefe de Gobierno”, arremetía también contra Miguel Moya, presidente de la Asociación de la Prensa, por no denunciar a los atropellos de los periódicos cometidos por el poder público. Finalizaba así la declaración del director: “Nos basta y sobra con nuestra fuerza; no nos importa nada que nos suspendan; nos reímos de las denuncias de los juzgados; queremos dar a la prensa independiente española un ejemplo de dignidad y de entereza”.<sup>974</sup>

Como había pronosticado Mataix, *El Mundo* fue suspendido por Juan Fernández Latorre, gobernador de Madrid, que curiosamente era un conocido periodista, fundador de *La Voz de Galicia*, quién justificó la decisión apelando a la “notoria rebeldía en que se ha declarado ese periódico contra los preceptos legales y los mandatos de las autoridades”. El mismo día que se tomó la decisión, y a petición de *El País* y *España Libre*, se reunieron los directores de varios periódicos, la mayoría de corte republicano, para suspender sus publicaciones hasta que se levantara la censura.<sup>975</sup> Ese mismo día Mataix intentó sacar un nuevo periódico, *El Planeta*, con la intención de que éste ocupara la posición de *El Mundo*. Sin embargo, se impidió su venta por no haberse comunicado a la autoridad correspondiente con un plazo de los cuatro días, tal y como

---

<sup>974</sup> GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo español*, pp. 363-364.

<sup>975</sup> A partir del 4 de septiembre de 1911 se suspendieron voluntariamente las siguientes publicaciones: *El País*, *España Libre*, *España Nueva*, *El Radical*, *El Motín*, *El Socialista*, *Vida Socialista*, *La Idea*, *La Palabra Libre*, *El Nuevo Régimen* y *Los Dominicales del Libre Pensamiento*.

establecía el artículo 8 de la Ley de Imprenta. Así pues, para sustituir a *El Mundo*, inscribió dos nuevas publicaciones a las que no sometió a la censura gubernamental, y con las que realizó una campaña muy agresiva en contra de Canalejas. La primera de ellas, *La Tierra*, dirigió multitud de ataques contra el presidente del Gobierno sin someter ninguno de sus nueve números al lápiz rojo. Finalmente fue suspendida, y rápidamente remplazada por la segunda publicación que ya se había inscrito, *El Orbe*, que estuvo circulando hasta que fue restablecida la situación anterior, el 21 de octubre de 1911.<sup>976</sup> Con el levantamiento de la suspensión de las garantías, España volvió a recobrar la normalidad, y con ella se acabó la previa censura, reapareciendo todos los periódicos que habían sido suspendidos, entre ellos *El Mundo*, que en ese primer número declaraba haber “triunfado completamente” en la campaña contra Canalejas, un presidente “completamente desahuciado de su vida política”.<sup>977</sup>

La agresividad que mostraron las publicaciones a partir de ese momento contra el jefe del ejecutivo fue insólita, uniéndose, no solo el bloque más radical y revolucionario de izquierdas, sino diarios como *El Socialista* o incluso importantes periódicos extranjeros. Aunque de todas, la publicación que más destacó por su violencia dialéctica fue *España Nueva*, que, dirigida por el diputado Soriano, no dudó en insultar y amenazar a Canalejas, difundiendo artículos encabezados por titulares como: “Duelo a muerte”, “Canalejas contra la libertad de la prensa” o “Canalejas quiere deshacerse de la prensa republicana, única que censura sus procedimientos de inquisidor”, o en los que mostraba una esquila con el texto: “EL Sr. D. José de Canalejas y Méndez. Ha muerto

---

<sup>976</sup> *El Imparcial*, “Vuelta a la normalidad”, 22 de octubre de 1911.

<sup>977</sup> Terminaba esa primera editorial Aláix, afirmando que, tanto *La Tierra* como *El Orbe*, dos publicaciones “que hoy mueren (...) para no volver a nacer más” habían cuádruplicado la circulación de *El Mundo*, porque a la opinión pública les gustan las “campañas vivas, los pinitos de independencia”. *El Mundo*, 21 de octubre de 1911.



políticamente”.<sup>978</sup>

Es posible que en cualquier otro momento la prensa más revolucionaria considerara, con razón, que su libertad de imprenta se encontraba completamente oprimida por el poder público. Sin embargo, todos y cada uno de los insultos y humillaciones dialécticas a las que fue sometido Canalejas no hubieran tenido tanta repercusión de no ser porque los periódicos radicales gozaban de mayor libertad de expresión que con otros gobiernos. No obstante, fue en este momento de fanatismo lingüístico cuando la unión de periódicos de tendencia republicana-socialista publicó un manifiesto en el cual protestaban por las continuas denuncias de sus periódicos y la sistemática persecución en la que se veían envueltos, exigiendo al gobierno el reconocimiento de su libertad para opinar sobre los sucesos que acontecían en la vida pública española. *El Imparcial* contestó al exagerado discurso afirmando que no estaban conformes con echar toda la culpa de la relación entre el poder público y la prensa radical al ejecutivo liberal. Para el periódico madrileño, la violencia dialéctica utilizada por éstos era totalmente inadmisibles, como también lo era “ver empeñado a un gobierno demócrata en una lucha en que, a la virulencia del ataque, se responde con un régimen de persecución y de denuncia en que la serenidad de la ley experimenta también sensible quebranto.”<sup>979</sup>

La radical campaña contra el presidente del Gobierno siguió con el paso de los meses, en los fueron convocadas multitud de huelgas contra la guerra de Marruecos. El clima de fanatismo y de violencia que se fue impregnando entre algunos anarquistas se tradujo en el asesinato de Canalejas el 12 de noviembre de 1912 a manos de un anarquista, militante de las juventudes del Partido Radical. Tras su muerte se avivó la protesta de

---

<sup>978</sup> *España Nueva*, 7 de noviembre de 1911.

<sup>979</sup> *El Imparcial*, “La prensa radical: un manifiesto”, 12 de noviembre de 1911.

grupos de derechas y de izquierdas, que se manifestaron el 16 de noviembre en Madrid, exigiendo el procesamiento de líderes radicales como Lerroux, Rodrigo Soriano o el propio Pablo Iglesias, todos ellos periodistas en activo, a los que acusaban de ser sospechosos de complicidad en el atentado contra el dirigente liberal. El fiscal del Tribunal Supremo no perdió la oportunidad, y aprovechó el ataque para emitir una circular, el 28 de noviembre de 1912, por la que instaba a todas las autoridades judiciales a “extremar” el control informativo y a reprimir, independientemente de “la orientación que parta”, las expresiones violentas, “la que quiere traducir la idea en fuerza; la que nace, no en luchas de ideal, sino para atacar por actos institucionales que la ley consagra; la que se dirige, no a la razón, sino a las pasiones brutales e inconscientes; la que supone el atentado y el crimen como arma...”.<sup>980</sup> En el documento se afirmaba que la propaganda de las ideas y la defensa de los programas eran derechos políticos fundamentalmente amparados por la Constitución, porque, efectivamente, y al contrario de lo que ocurría en la práctica, la simple exposición del pensamiento contrario al régimen no podía considerarse delito.

Pese a que el fiscal trató de aclarar que la agresión no estaba en la creencia o doctrina que se profesara, sino en la forma en la que se practicaba, éste obviaba que existían propagandas políticas lícitas tanto por su forma como por su fondo. Por tanto, no puede afirmarse que las expresiones que tendían a impulsar emociones y voluntades en las personas eran delictivas por su naturaleza, ya que con ello se impedía la libertad de prensa de todas aquellas ideologías que buscaban reacciones populares mediante formas pacíficas. Teniendo en cuenta que todas aquellas propagandas que iban encaminadas a la violación de la ley, caían ya bajo el delito penal y eran castigadas de forma rigurosa por

---

<sup>980</sup> *El País*, “El celo de los fiscales”, 29 de noviembre de 1912.

las autoridades, la circular era un documento innecesario en su contenido, que solo servía para alentar a las autoridades a cometer más atropellos, y que limitaba la libertad de los periódicos con ideas socialistas o republicanas que, sin acudir a la violencia, buscaban cambiar la situación de España.

En la línea con el sentimiento represivo de la circular, el gobierno liberal impuso la censura militar en el territorio africano a partir del 1 de enero de 1913. El máximo dirigente militar y responsable del control informativo en Marruecos, el general Francisco Gómez Jordana, justificó la decisión en la necesidad de salvaguardar al ejército español de informaciones que no era conveniente que conocieran en las circunstancias bélicas en las que se encontraban. Para el militar, el respeto de la libertad de prensa hacía necesaria la imposición de la previa censura en el territorio de conflicto para así evitar filtraciones a los soldados que pudieran perjudicar a España. Ésta orden militar coincidió con la proclamación de un nuevo indulto general para los condenados por delitos de imprenta, concedido por el nuevo presidente del Gobierno, Conde de Romanones, exceptuando, esta vez, a todos aquellos periodistas que estuvieran procesados por haber insultado al ejército.<sup>981</sup> Ambas medidas se encontraban en perfecta sintonía, y evidenciaron que el ejecutivo liberal estaba dispuesto a sacrificar el derecho a informar libremente acerca del conflicto, para así evitar cualquier tipo de comentario que pudiera dañar a los intereses estatales coloniales.

Bajo este fundamento, se puso en marcha la censura militar, por primera vez desde que diera comienzo la contienda, la cual constituía una pieza más dentro de un verdadero aparato de control informativo de las noticias sobre el conflicto africano, que anuló la

---

<sup>981</sup> Real Decreto de 23 de enero de 1913, Gaceta de Madrid, 25 enero de 1913.

libre emisión de ideas sobre la guerra en el territorio africano. El gobierno determinó que se intervendrían todas las publicaciones que atentaran contra la disciplina militar o la moral de las tropas, y las que llamasen a cometer delitos comprendidos en el Código de Justicia Militar. Se obligó a los censores a practicar la censura, independientemente de que el artículo o periódico considerado delictivo hubiese sido objeto de denuncia o sanción, autorizándose a los oficiales a realizar el secuestro de los ejemplares a posteriori, si bien solo en ese momento se podía dar orden al juez. Asimismo, se limitó la lectura de periódicos en los campamentos o fuertes militares, y se aconsejó a las autoridades militares que retiraran de la circulación los diarios más polémicos “con el mayor tacto posible”.<sup>982</sup>

Además de la férrea censura militar impuesta en la zona de conflicto sobre las publicaciones periódicas, las cabeceras españolas tenían que hacer frente a la censura telegráfica que se venía practicando desde el comienzo de las operaciones militares, en 1909. Así, los responsables del telégrafo retenían aquellos telegramas sospechosos de contener informaciones contrarias a los intereses estatales, dando conocimiento al jefe militar de la zona. Por otra parte, se incrementó la intervención de las publicaciones españolas que llegaban al norte de África por vía marítima y en paquetes precintados. Los responsables de la Administración de Correos de Melilla remitían a la autoridad correspondiente los ejemplares de aquellos periódicos que, por su ideología, ya estaban señalados por el gobierno, para que ésta, tras la lectura de los mismos, decidiera si se ponía a la venta el periódico en cuestión. En caso de prohibirse la venta del mismo se comunicaba directamente al vendedor, sin que se le reparara a éste la pérdida material, al no poder realizar su trabajo. Esta práctica generó muchas críticas, ya que, en última

---

<sup>982</sup> Carta fechada el 7 de julio de 1913. Archivo central del Servicio Histórico Militar de Madrid. Tercera sección. Fondos relativos a África. Censura de Prensa (periódicos, publicaciones y censura).

instancia, eran los directores los que debían reparar el daño, lo que constituía un verdadero abuso gubernamental. Las autoridades buscaron otras alternativas que no conllevaran estos perjuicios, como los pagos a los vendedores o la compra de todos los ejemplares que llevaban, lo que no generó las reclamaciones de los directores españoles, posiblemente porque el vendedor no daba parte a la empresa de lo sucedido.<sup>983</sup>

En definitiva, la guerra de Marruecos nos dio un ejemplo más de los cortes informativos ejercidos contra la prensa española por ambos partidos políticos, que volvieron a utilizar de pretexto un conflicto armado para silenciar a los órganos periodísticos que no estuvieran en sintonía directa con el Estado, lo que evidenció, una vez más, la desigualdad patente a la hora de garantizar el derecho a informar de unos y otros.

---

<sup>983</sup> MARTÍNEZ GALLEGO, F., Y RIUS SANCHÍS, I., “Los lápices rojos del africanismo: control informativo en la guerra de Marruecos”, pp. 825-850



## CONCLUSIONS

The 1883 Press Police Act offered the best protection and guarantee of press freedom in the history of Spanish constitutionalism. In practice however, during the period of the Bourbon Restoration (1874 to 1914), this fundamental right was systematically violated by the government. Both the Liberal and Conservative Parties, which took turns governing over the years, disregarded the guidelines set by the Press Act and adopted an information restriction policy that was mainly aimed at ensuring the stability of the newly established regime. Governmental insecurity regarding the political system, which was based on the distortion of votes, implied that despite an appropriate regulatory framework, there would be no effective recognition of the right allowing for a free and independent press. This reality was mainly reflected in the media that did not follow the guidelines set by the government, and endured the constant persecution of the public administration, which, either through legislation or other covert control mechanisms, attempted to silence newspapers in times of political and social upheaval.

This argument responds to the main hypothesis that was outlined at the outset. We shall proceed to further sum-up the steps that have led us to this conclusion. We began by stating that freedom of the press was effectively recognized in the 1883 Act, and that it innovatively and bravely broke with the information system that had been established by Cánovas and had rendered this fundamental right illusory. This was mainly due to the fact that the Conservative cabinet despised and silenced social opinion by means of restrictive rules that turned newspapers into a lucrative monopoly for ministerial power. Following the approval of the 1879 Act, which constituted the legal precedent of the future liberal legislation, the state was granted absolute power to control the media,

which only served to extend the foundations of the newly established regime. Sagasta, however, understood that the right to inform freely was based on the absolute lack of any kind of preventive measures that could impede or hinder its exercise, and should allow citizens to actively participate in society through journalistic entities, which he felt should spread the true opinion of the people. For this reason, the Liberal government drafted a Press Act that recognized an authentic freedom which was not restricted by the preventive measures and governmental obstacles that had characterized the previous years, and abandoned such practices as censorship, prior permission to publish newspapers, or their prior deposit before their publication –all of which represented mechanisms of authoritarian regimes that were incompatible with a social and democratic state under the rule of law, and therefore, a system of public liberties. The new legislative framework also put an end to the penalties of suspension and suppression of newspapers. There is thus no doubt that the intention of the new cabinet was to guarantee a broad freedom, which had not hitherto been enjoyed.

Nevertheless, the new legislation was not intended to allow for absolute and unlimited press freedom as advocated by the most radical sectors, and therefore, infringement responsibility was equally foreseen. This point is essential for understanding the legal framework under study, for the Act at last put an end to the special tribunals that had undermined the impartiality and independence of the judicial decisions adopted with regard to the press. However, to preserve other fundamental rights, all offenses were submitted to the 1870 Criminal Code. This extremely innovative measure was still controversial, because from that moment all offenses committed through the press would be regulated by the Criminal Code, which was incomplete in many cases and lacked legitimacy, having been widely criticized by the same party that simultaneously



was handing it all the competence in this area. Still, considering the historical context and the political circumstances of the time, the decision was more positive than any of the previous ones, and would under no circumstance seriously affect that freedom.

With the 1883 Act, information control was removed from government hands, and thereafter, it would be the ordinary courts that would have the final say in deciding when a penal precept had been violated. This constituted a breakthrough for the recognition of a genuine freedom of the press, especially because until then the existence of a special tribunal, whose members were appointed by the public administration, granted the latter the power to control all newspapers. However, even though the Liberal Party's position was one of complete trust in the discretion of the judges in prosecuting press matters, the Act still reserved minor competences to the authorities, which ran contrary to the independence and objectivity claimed by the Liberals. This attitude of continuing to attribute certain competences to the authorities can only be explained as the result of a certain insecurity of the government to totally relinquish control of the press in favor of the courts, due in large part to the importance that newspapers were acquiring at the time as an instrument for the transmission of public opinion, which could jeopardize and destabilize the recently established regime. In any case, the new law managed to break with the restrictive policy that the Conservatives had maintained with regard to the press, and provided a true spirit of freedom to the right of information, which led to an outburst of journalistic activity that enabled the development and consolidation of the Spanish press.

Although the 1883 Act developed and effectively recognized the freedom of the press that had been guaranteed in the 1876 Constitution, one cannot definitively conclude that

the Spanish society of the late nineteenth and early twentieth century fully enjoyed that freedom. The answer to our main hypotheses regarding the effective recognition of this right depends essentially on the manner in which the government implemented the liberal legislation. As mentioned earlier, despite the advantages of the 1883 Act, the public administration acted as an obstacle to all dissident ideas, turning newspapers into the subordinates of governmental dictates instead of a reflection of the plurality of the views that were present in Spanish society during that period.

Contrary to our initial assumption, the ideology of the party that ruled at different stages was not as decisive in determining the enjoyment of more or less freedom, albeit with a number of nuances that we will expose below, as were the circumstances of the moment. In light of the research we have carried out, it is undeniable that the policy of information control of both parties was marked by political and social events that unfolded over the years. The need to preserve the stability of the new regime when it was threatened led the government to restrict the freedom of newspapers at its convenience, by relying on the despotism that sustained it and provided the authorities with sufficient legal instruments to impose governmental will. Despite what was contained in the 1883 Act, the constant use of control mechanisms –both through legal means but occasionally too through illegal practices against newspaper writers or editors, or the exercise of indirect pressure against the courts of justice– was but a disguise employed by the state to manage the information transmitted to society, with the ultimate aim of retaining power and preserving the system in place.

This situation was mainly reflected in those periods of greater social and political conflict that determined the policy of government intervention in the activities of the

press. The wealth of social events that characterized the Restoration has enabled the analysis of direct and indirect government actions to control the Spanish press. Thus, as a consequence of two major problems that arose during those years, freedom of the press under the Restoration was particularly affected by the adoption of other laws that clashed directly with its recognition. Thus, to quell a series of attacks by Anarchists that shocked Spanish society in the early nineties, the government approved two anti-terrorism laws in 1894 and 1896. Under those laws severe penalties were established for journalists, the propaganda of ideas was equated with the commission of terrorist acts, and the freedom of the Spanish publications that did not agree with the ideas of the regime was particularly undermined. In the early twentieth century, the Jurisdiction Act of 1906 was adopted to address the regionalist movements that were emerging with force, especially in Catalonia, and, whose press agencies, which were openly opposed to the state institutions of the Restoration, constituted a threat to the stability of the central government. With this Act, the government granted the military courts jurisdiction to try offenses committed by journalists, even if they had no connection with the military body, and without there being extraordinary circumstances in the territory. This legislation constituted a great loss for the effective recognition of the freedom of newspapers, which, contrary to the liberal spirit of the 1883 Act, were constrained against issuing any comment on the Army.

Another instrument used by the government to oppress media companies was the intervention of their communication networks. Telegraph and telephone censorship was the first step taken by the government at the outbreak of the major international conflicts that erupted in Melilla (1893), Cuba (1895-1898) and Morocco (1909-1921). Through the “black cabinet” under the Minister of the Interior, telegrams that were suspected to

contain information contrary to the government's political interests were interrupted for a certain period, or the line was cut when the communication between the correspondent and the Spanish publication touched upon matters that were forbidden by the government. The latter thus handled at will all the information that was transmitted through those channels. The state monopoly on the communication channels of the press was also reflected in the control of the postal system, which was used arbitrarily by the authorities, who provoked the disappearance of the packages that were sent to the provinces of those newspapers that did not identify with governmental ideas.

Among all the government actions that harmed the freedom enshrined in the 1883 Act, the repeated suspension of the constitutional guarantees that were expressly recognized in Article 17 of the Constitution of 1876, stood out. It was carried out on numerous occasions on the pretext of preventing the alteration of public order in a particular territory. Despite being an exceptional measure, the speed and ease with which it could be resorted to, together with the progressive weakening of the Cánovas system, led both Conservatives and Liberals to increasingly resort to this constitutional mechanism over the years. The aim was to curb the social and political unrest that characterized the early years of the twentieth century, in which exceptional situations could last for years, as was the case of the suspension of constitutional guarantees decreed in Barcelona during the Tragic Week of 1909. The declaration of exceptional states throughout the Restoration period granted the government discretionary powers, which were used to curb the currents of opinion that were contrary to the system or the news that were published in the press and were unfavorable to it, thereby restricting the freedom of the press enshrined in the Press Act. Indeed, during those times of emergency, the administration had the power to forbid editors from addressing certain public issues

under threat of suspension or withdrawal of their publications, or to force them to insert the official version issued by the state, thus preventing them from freely and independently performing their role as media.

The central government also required judges and courts to be particularly severe if the newspapers did not comply with government instructions. These indications violated the judicial independence that had been announced by the Liberal government when drafting the Act, and led to strict decisions that fell in line with state policy, and by virtue of which any publication that denounced the political performance of a public office-holder was convicted of criminal defamation or contempt of public authority, even when the information was based on tangible facts. The abuse of the courts in applying the offenses contained in the Criminal Code became more evident when the suspension of guarantees only affected a specific territory. Under those circumstances, daily newspapers were condemned for reproducing articles that had been included in other newspapers that had not been denounced, or even speeches made in Parliament, the excuse being that this institution's special situation rendered the dissemination of certain information impossible. This jurisprudential stance reflects the inequality with which the intervention of information was carried out, and which encouraged a kind of territorial censorship over the provinces of greater social conflict, where the circulation of printed materials that addressed matters which could harm the interests of the central government was further prevented.

All those instruments of direct information control were used by the two alternating parties despite the fact that they held different visions regarding press freedom. However, it is important to stress that, in practice, the stance that each of the two parties

held with regards to this right exercised an influence on the strictness with which they resorted to those instruments to limit the press. The Liberal Party left a greater margin of freedom by adopting a more tolerant attitude, which contrasted with the restrictive and harsher approach adopted by the Conservatives. This liberal stance was especially evident during the first years after the promulgation of the Press Act, when the Liberal Party passed a measure prohibiting governors to make use of Article 22 of the Provincial Act with the purpose of imposing fines on all newspapers that criticized its political performance. The order of the Liberals had a very positive effect on the recognition of the freedom, for during the Conservative mandate, this power had been used in an arbitrary and discretionary fashion by the authorities, which ran against the liberal standard of the separation of powers.

The different degree of rigor with which both parties applied the Press Act was also made evident in the various social problems that the state had to deal with during those years. Regarding the Anarchist bombings, as mentioned above, two laws were passed against terrorism in 1894 and 1896 respectively. While both restricted the right to freely express ideas, the second, drafted by the Conservatives, established more severe penalties against the propaganda of revolutionary ideas and banned the circulation of all Anarchist newspapers in the Peninsula. It should also be noted that thanks to the Liberal Party, which had the support of the Republicans, the anti-terrorism law proposed by Maura in 1908 fell through. The draft law attacked press freedom in many ways, mainly because it granted the government the power to suppress newspapers without court intervention, and forced all Spanish publications to include only the official news when reporting on the attacks. Similarly, in the late nineteenth century, conflicts of jurisdiction confronted ordinary and military courts, which fought over the jurisdiction

over libel crimes committed against the military through the press. Some leaders of the Conservative government were of the opinion that martial courts could hear them, thus lending their support to the military institution to the detriment of civil authority, which was represented at that time by the Liberal Party. It is thus ironic that it would be the Liberal government that ultimately passed the measure which most restricted freedom of the press at the time: the Jurisdiction Act of 1906.

To cite one last example, during the wars of Cuba and Morocco, the difference in the stances between the two political groupings was also made clear. While in the early stages of both international disputes, the Conservative Party adopted a strict policy of repression against the newspapers that spread ideas contrary to the official line, when the government moved into liberal hands, the Liberal Party chose to grant more freedom to Spanish publications, including those that were circulated in those territories. In the Cuban War the differences between the two parties became evident, for as the American armed offensive against Spain began, newspapers could report with fewer obstacles than in the previous months under the leadership of the Conservatives, when the situation on the island was better. It is a pity that, finally, and despite the good intentions of the Liberals, a strict military censorship was imposed when the war in Cuba was over, which silenced the Spanish press for months. The same thing happened in the Moroccan War, where in 1913, the Liberal government established military censorship on the African territory and launched a harsh system of control over the war information that silenced the journalistic entities that were not in tune with the state.

Another aspect to be considered in our final conclusions is that the right to report freely was not only restricted by the parties that took turns governing, but also by other

important forces that shaped the Restoration period. This occurred when, at times of extreme gravity, the suspension of guarantees was attached to the declaration of a state of war, thus allowing the Army to impose military censorship on Spanish publications. Although the red pencil handled by officers was at all times controlled by civil authorities, mainly because both powers fed off each other and constituted the fundamental pillars upon which the regime rested, over the years, the military institution would increasingly demand more control on the press. The intervention of information by military authorities had a major influence on the effective development of press freedom during the period under study, which was increasingly limited by a series of actions carried out by the military establishment. Many of those actions were illegal, such as the violent attacks on newspaper newsrooms propagating anti-militarist ideas, which became increasingly common in the early twentieth century, without any of the two parties in charge punishing such abuses of power. At the end, with an increasingly weakened civil authority, the military would gain the jurisdiction over the control of the information that concerned them following the approval of the above-mentioned Jurisdiction Act. Although the role of the Army was more important during this period, we must not overlook the fact that the Catholic Church also influenced the implementation of the 1883 Act, especially regarding the measures that were introduced by the Conservative government, and the majority of which were aimed at preventing anticlerical publications. Furthermore, although the Catholic institution did not exercise direct control over the entire Spanish press, it did intervene indirectly in the recognition of the freedom of the press, through the ideological control over the newspapers that were read by the faithful.



The common purpose of all the agents who controlled the information was the protection of Cánovas' system against critical sectors of society, thus resulting in an uneven intervention in the Spanish press, which was more rigorous and strict against those newspapers that spread different ideas from those of the alternating political forces. Amongst them, those who suffered most from the persistent allegations of the authorities were the Republicans, who employed a more aggressive language than the rest, especially during the late nineteenth century, coinciding with the entry into the journalistic scene of the Republican Alejandro Lerroux. As of the new century, the publications of Catalonia –mainly Barcelona dailies– where government control was much stricter than in other locations, united. Therefore, the press that did not follow the tenets of government was only free in the dead letter of the 1883 Act, for in the exercise of that freedom, dissenting ideology and ideas were subject to government dictates. The persecution of newspapers on the basis of their ideology, which was incompatible with the concept of freedom of the press, became commonplace during the period of the Restoration. This situation hindered the activity of those newspapers, which could not reflect their true and free views on the matters that occupied the political and social landscape, because in doing so, all their issues were gathered and their circulation seized without prior notice, thus preventing them from reaching the provinces. In times of greatest conflict, persecution took place outside the law, and was carried about without the intervention of the courts, or even before the newspaper had seen the light. Throughout this period, many of those publications often found themselves forced to voluntarily suspend their circulation when intervention intensified, while others exercised self-censorship on the news they offered for fear of punishment and repression.

Government abuses against newspapers that did not follow the guidelines set by the state manifested themselves through various forms of indirect control by the provincial governors and mayors who governed the different territories. The patronage system that characterized that period led the authorities that were designated by means of rigged elections to subscribe the same political line as the ruling party, thus fostering an information control machinery that allowed for the multiplication of police measures aimed at silencing the newspapers of the opposition. In this strategy of limiting the news contrary to their political interests that was followed by both parties, ‘reptile funds’ subsidized by the Ministry of Interior, and which had already been employed by the Conservative Party before the adoption of the 1883 Act, played a fundamental role. The Liberal government maintained state aid, turning some newspapers into regime allies whom it subjected and guided according to its interests. Undoubtedly, these fraudulent practices adulterated information, hindering free public opinion and therefore, freedom of the press. In addition, other means were used to restrict freedom, which did not entail any costs for the authorities and managed to instill fear and a sense of vulnerability, while silencing critical voices in the territory. Consequently, during those years, journalists and directors of dissident publications were illegally detained and remained in custody indefinitely and without the right to pay bail; reporters were threatened not to report on certain issues; vendors were assaulted or their work made difficult on the street; or printing presses were pressured not to facilitate their use to those newspapers that did not express ideas that were in line with the government.

All those arbitrary and abusive actions became more frequent over the years, and gradually constricted the freedom and independence of the Spanish press, which, in turn, took different attitudes toward the information control by the government.

Ministerial newspapers were the only ones that defended the censorship practiced by the governments of both parties at all times. The Spanish publications with the widest circulation, which mostly supported the monarchical system of the Restoration, did not protest the imposition of government barriers to information, and even defended censorship in times of war, which they considered was positive for the safeguard of national interests. However, at specific times, they did criticize government arbitrariness in handling information intervention. Those papers were especially critical of the control exercised by Sagasta when he was in power, admonishing him for abandoning the liberal line with which he himself had established the new legal framework. In any case, it is difficult to determine the extent to which those newspapers avoided conflict with the public administration, considering that some of their writers received 'reptile funds', and, for fear of penalties, silenced some of the views they had on the government.

Undoubtedly, the newspapers that were most critical with the limitations imposed by censorship were the publications with a revolutionary ideology, which opposed the regime in place and were, in turn, those who most suffered from government abuses. Although those newspapers understood that the government had to guarantee their full freedom to express the thoughts and concerns of all sectors of society, they nevertheless employed various instruments that restricted opinions, hindering the function of those journalistic entities. In any case, although the authorities managed to occasionally silence dissenting ideas, the journalists themselves developed a new language, through which censorship was criticized between the lines and with which, at times, they managed to escape the strict government control. When their words were censored, they made use of other resources to make their voices heard, such as the press campaigns

they led against the government or senior military officials, or the voluntary attempts at collective suspension in protest against the obstacles introduced by the authorities, as occurred during the term of Canalejas.

The methods they employed to deliver their criticism of society were not limited to the newspapers. Thanks to the advantages of the 1883 Act, a large number of publications were established by intellectuals and political writers who were represented in Parliament, where a constant struggle to ensure broad freedom was led to avoid the stifling of journalists who held ideas different from those of the regime. Due to this fact, during the whole Restoration period, the protests of the Spanish press were transferred to Parliament, where the deputies and senators who were journalists defended the fundamental right to express their ideas freely, and fought to safeguard the guarantees achieved with the new legislation. Journalist deputies enjoyed certain immunities and privileges that allowed them to occasionally run newspapers without the constant harassment of the authorities, or publish information against information intervention without being punished for it. Likewise, the protests of those sectors were successfully transferred to books –a medium that was employed by most intellectuals of the time to freely disseminate their ideas and circumvent the censorship that applied to the press.

In any case, the fact that those publications that did not subscribe to monarchical ideology succeeded at times in circumventing censorship does not allow us to affirm that they were guaranteed the right to freely express their ideas. In my opinion, regardless of the excesses committed by newspapers, which at times transgressed in their views and information and were justly condemned, we cannot ignore that government authorities and other state forces abused their power and applied the Press

Act at their convenience, while disregarding the independence and freedom of the media. Thus, as we warned at the outset, there was no freedom of the press as it was guaranteed and protected in the 1883 Press Police Act. Still, considering that the Act remained in force in Spain until 1966, and that this study has been deliberately limited to the historical period contained between 1883 and 1914, it would be interesting to leave the door open to future research in which the implementation of the 1883 Press Act by the different political regimes that succeeded each other in Spain during the twentieth century would be compared, as would the way in which they influenced the manner in which the freedom of the press contained in it was interpreted. In doing so we could successfully address the question of whether, at the end, the Restoration was the historical period in which, despite restrictions on information, the press enjoyed the highest degree of freedom to perform its role.



## FUENTES CONSULTADAS

### FUENTES DOCUMENTALES

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados correspondientes a las legislaturas del período entre 1875 y 1914.

Diario de Sesiones del Senado correspondientes a las legislaturas del período entre 1875 y 1914.

Archivo Histórico Nacional (AHN).

### FUENTES NORMATIVAS

Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870. *Constitución política de la Monarquía española y Leyes complementarias: Orden Público. Ley de 23 de abril de 1870*, X edición, Madrid, Centro editorial de Góngora, 1922, pp. 177-196.

Código penal de 17 de junio de 1870. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Diccionario de la Administración Española. Compilación de la Novísima Legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la Administración pública*, 4º edición, tomo II, Madrid, Administración, 1886, pp.516-570.

Orden Circular de 4 de enero de 1874: “Mandando suspender la publicación de los periódicos carlistas y cantonales”. *Colección Legislativa de España*, Tomo CXII, pp. 23-24.

Orden Circular de 15 de enero de 1874: “Haciendo varias prevenciones a los Gobernadores con motivo de la suspensión y establecimiento de la Ley de Orden Público”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXII, pp. 75-76.

Orden Circular de 11 de junio de 1874: “A los gobernadores civiles, recordándoles la necesidad y los medios de corregir los abusos de la prensa”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXII, pp. 947-948.

Orden Circular de 13 de julio de 1874: “Declarando vigentes el de 22 de diciembre último y las Órdenes emanadas del Poder Ejecutivo sobre ejercicio de la libertad de imprenta”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXIII, pp. 77 y ss.

Decreto de 29 de enero de 1875: “Regularizando el ejercicio de la libertad de imprenta”. *Colección legislativa de España*. Tomo CXIV, pp. 140 y ss.

Real Decreto de 18 de mayo de 1875: “Autorizando a la prensa para plantear y discutir las cuestiones constitucionales y declarando vigentes las anteriores disposiciones sobre reuniones, asociaciones e imprenta, en cuanto no se opongan a la ejecución del presente Decreto”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXIV, pp. 791 y ss.

Real Decreto de 31 de diciembre de 1875: “Dictando reglas para reprimir los abusos que en el ejercicio de la libertad de imprenta cometan los periódicos, y creando Tribunales especiales para la aplicación de las penas en que aquellos puedan incurrir”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXVI, pp. 999 y ss.

Real Orden de 6 de febrero de 1876: “Dictando algunas disposiciones relativas a las faltas que pueden cometerse por medio de los periódicos y estableciendo además reglas de simple policía sobre la publicación de folletos, carteles y hojas sueltas”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXVI, pp. 126 y ss.

Constitución de 30 de junio de 1876. Publicado en la página Web del Congreso de los Diputados. *Área: Historia y Normas. Sección: Constituciones Españolas 1812 - 1978: Constitución de 1876.*

Ley de Imprenta de 7 de enero de 1879. *Colección legislativa de España*, Tomo CXXII, pp. 21 y ss.

Real Decreto de 25 de noviembre de 1880: “Indultando de la mitad de la pena de suspensión a los periódicos que por sentencia de los Tribunales de imprenta se encuentren extinguiéndola actualmente”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXXV, pp. 498-499.

Real Decreto de 14 de febrero de 1881: “Alzando a todos los periódicos la pena de suspensión que estén cumpliendo o deban cumplir por sentencia firme, dictada antes de la publicación del presente decreto”. *Colección legislativa de España*, Tomo CXXVI, pp. 572-573.

Ley Orgánica Provincial de 29 de agosto de 1882. *Gaceta de Madrid* de 1 de septiembre de 1882, Tomo III, p. 657.

Código de Enjuiciamiento criminal de 1882. *Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento criminal. Ministro de Gracia y Justicia.* BOE nº 260, de 17 de septiembre de 1882. Ref: BOE A 1882-6036.

Proyecto de ley sobre imprenta presentado por el ministro de la Gobernación Venancio González. Congreso, 22 de diciembre de 1882, Apéndice primero al nº15.

Dictamen de la Comisión relativo al Proyecto de Ley de Pío Gullón regulando el ejercicio del derecho a emitir ideas por medio de la imprenta. Congreso, 21 de febrero de 1883, Apéndice vigesimotercero al nº48, cif. 1.

Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883. “Sobre manifestación del pensamiento por medio de la imprenta, litografía, fotografía o por otro procedimiento mecánico”. *Gaceta de Madrid*, Lunes 30 de julio de 1883, número 211, pp. 189-190. *Boletín de la R.G.L.J.*, Tomo LXXI (1883), pp. 154 y ss.

Real Orden. Circular de 30 de julio de 1883 por la que se fijan los criterios que ha de mantener el Ministerio Fiscal para perseguir delitos de imprenta. Que la pena caiga sobre el auténtico culpable. *Gaceta de Madrid*, 31 de julio de 1883, número 212, p.206.



Circular del fiscal del Tribunal Supremo de 2 de octubre 1883 a los fiscales de las Audiencias, quienes contribuirán a que se respete la libertad de imprenta, pero persiguiendo sus abusos y lo que pueda constituir delito. *Gaceta de Madrid*, 6 de octubre de 1883, número 279, p.53.

Circular del fiscal del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1884, excitando el celo de los fiscales para que persigan los escritos que provoquen la rebelión. Publicado en la *Gaceta de Madrid*, 28 de julio de 1884. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo*, Anuario de 1884, pp. 556-559.

Real Orden de 29 de Octubre 1885 por la que se determina que los gobernadores civiles no tienen competencia para castigar, según el art.22 de la Ley Provincial, los delitos cometidos por la imprenta. *Gaceta de Madrid*, 30 de diciembre de 1885, nº364, p.1015.

Circular del 22 de septiembre de 1886 del capitán general de Madrid (Pavía), por el que se impone a la prensa fuertes restricciones por la sublevación de Villacampa. *El Liberal*, 23 de septiembre de 1886, p.1.

Ley de Imprenta para la Isla de Cuba y Puerto Rico de 8 de diciembre de 1886. *Gaceta de la Habana*, 9 de diciembre de 1886.

Circular de 8 de agosto de 1887 en la que se avisa a los gobernadores civiles para que vigilen los insultos y acciones de desprestigio a la autoridad militar por medio de la imprenta. *Gaceta de Madrid*, 10 de agosto de 1887, número 222, p.419.

Ley rebajando la tarifa de los telegramas que se publicaran en la prensa periódica. Congreso, 12 de abril de 1888, apéndice 6º al núm. 91.

Circular de 28 de diciembre 1888 por la que se prohíbe que los militares sean fundadores o directores de periódicos, así como redactores de los periódicos políticos. *Diario Oficial del Ministerio de la Guerra*, 28 de Diciembre de 1888, número 285, pp. 883-884.

Código de Justicia Militar de 27 de Septiembre de 1890. *Código de justicia militar de 27 de septiembre de 1890 y legislación complementaria del mismo*, Madrid, Talleres del depósito de guerra, 1906.

Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1893, en la que se castiga los delitos que por medio de la imprenta provoque delitos anarquistas. *Gaceta de Madrid*, 18 de noviembre de 1893, número 322, p.507.

Ley de 10 de julio de 1894 de “Represión de delitos cometidos por medio de explosivos”. Publicado en *Gaceta de Madrid*, nº 192 de 11 de julio de 1894, tomo III, p. 155.

Proposición de Ley del Sr. Martínez de Campos sobre reforma del art.7º del Código Justicia Militar. *Diario de las Sesiones de Cortes del Senado*, 28 de marzo de 1895, apéndice 8º, núm. 87.

Ley de 2 septiembre de 1896, de Represión del Anarquismo. *Gaceta de Madrid*, número 248 de 4 de septiembre de 1896, tomo III, p.825.

Circular de 13 de agosto de 1897 de la Fiscalía del Tribunal Supremo relativa a la represión del anarquismo. *Gaceta de Madrid*, 14 de agosto de 1897, número 226, pp. 502-503.

Real Orden. Circular de 10 de septiembre de 1897 por la que se recuerda la prohibición impuesta por el Código de Justicia Militar a las clases del Ejército de utilizar la imprenta para determinados fines. *Gaceta de Madrid*, 12 de septiembre de 1897, número 255, p.1084.

Real Decreto de 14 de julio de 1898 por la que se impone censura militar para la prensa con motivo de la guerra de Cuba. *La Vanguardia*, 16 de Julio de 1898, p.5.

Bando dictado por el Capitán general José Chinchilla en consonancia al Real Decreto de 14 de julio de 1898. *La Vanguardia*, 16 de Julio de 1898, p.5.

Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1899, dirigida a evitar que los periódicos penetren en el secreto del sumario o publiquen otro simultáneo al que formen las autoridades judiciales. *Gaceta de Madrid*, 22 de enero de 1899. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Apéndice de 1899*, pp. 9-10.

Ley de 1 de enero de 1900. Publicada en: *Código de Justicia Militar de 27 de septiembre de 1890 y legislación complementaria al mismo*. Madrid, Talleres del depósito de guerra, 1906. Apéndice Primero, Número 1. pp. 249-250.

Proyecto de ley contra la difamación. Senado, 23 de octubre de 1902, apéndice 2º al núm.40.

Real Orden circular de 9 de mayo de 1903, dictando las instrucciones a que los gobernadores deben atenerse para, entre otras cuestiones, reprimir las transgresiones que se comentan contra la libertad de imprenta. *Gaceta de Madrid*, 10 de mayo de 1903. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Apéndice de 1903*, p. 279.

Circular del Fiscal del Tribunal Supremo de 27 de agosto de 1903, para que se hagan efectivas las responsabilidades por los delitos de imprenta. *Gaceta de Madrid*, 28 de Agosto de 1903. Martínez Alcubilla, M., *Boletín jurídico administrativo. Apéndice 1903*, pp. 482-483.

Real orden relativa á la forma en que se ha de proceder el secuestro de los periódicos en que se publiquen artículos, noticias ó estampas que se estimen punibles. *Gaceta de Madrid*, 9 de septiembre de 1906, número 252, p. 997.

Ley de Jurisdicciones, por la que se castigan los delitos contra la patria y contra las instituciones armadas por medio de la imprenta. *Gaceta de Madrid*, Martes 24 de abril de 1906, número 114, tomo II (1906), pp. 317-318.

Real Orden tratando de matizar y mitigar el impacto de la Ley de Jurisdicciones en la opinión pública. *Gaceta de Madrid*, 24 de abril de 1906, número 114, Tomo II (1906), p. 318.

Real Orden circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 7 de septiembre de 1906 sobre el secuestro de los periódicos denunciados por delitos de imprenta. *Gaceta de Madrid*, 9 de septiembre de 1906. *Constitución política de la Monarquía española y Leyes complementarias*, pp. 134-137.

Proyecto de ley contra el terrorismo de 1908. *La Correspondencia de España*, 29 de marzo de 1908.

Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1908, exponiendo sucintamente el criterio a que el Ministerio Fiscal debe ajustar “la interpretación del texto legal, en relación especialmente con los anuncios o avisos que ven la luz pública en periódicos o revistas”. *Gaceta de Madrid*, 6 de mayo de 1908. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Apéndice de 1908*, pp. 195-196.

Ley de 23 de abril de 1909 concediendo la amnistía a los delitos cometidos por medio de la imprenta. *Gaceta de Madrid*, 24 de abril de 1909. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo de 1909*, pp.181-182

Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 7 de agosto de 1911. Publicado en *Constitución política de la Monarquía española y Leyes complementarias*, pp. 207-208.

Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1911, encaminada a poner coto a la excesiva y perniciosa tolerancia de la que disfruta la prensa no profesional para dar publicidad a los debates que, por razones de moralidad, se celebran a puerta cerrada. *Gaceta de Madrid*, 11 noviembre de 1911. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Apéndice de 1911*, pp. 792-793.

## FUENTES HEMEROGRÁFICAS

ABC  
BOLETÍN DE JUSTICIA MILITAR  
CIENCIA SOCIAL  
¡CU-CUT!  
DIARIO DE LA MARINA (CUBA)  
EL CORREO CATALÁN  
EL CORREO ESPAÑOL  
EL CORREO MILITAR  
EL CUBANO (CUBA)  
EL DEBATE  
EL DÍA  
EL DIARIO MERCANTIL  
EL DILUVIO  
EL ECO MILITAR  
EL EJÉRCITO ESPAÑOL



EL GLOBO  
EL GRITO DEL PUEBLO  
EL HERALDO DE MADRID  
EL IDEAL  
EL IMPARCIAL  
EL LIBERAL  
EL MERCANTIL VALENCIANO  
EL MOTÍN  
EL MUNDO  
EL NACIONAL  
EL NUEVO RÉGIMEN  
EL PAÍS  
EL POBLÉ CATALÁ  
EL PORVENIR NAVARRO  
EL PROGRESO  
EL PUEBLO  
EL RADICAL  
EL RECONCENTRADO (CUBA)  
EL RESUMEN  
EL REPUBLICANO  
EL SIGLO FUTURO  
EL SOCIALISTA  
ESPAÑA LIBRE  
ESPAÑA NUEVA  
EVENING POST (EEUU)  
LA AUTONOMÍA  
LA BANDERA FEDERAL VALENCIANA  
LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA  
LA CORRESPONDENCIA MILITAR  
LA DISCUSIÓN (CUBA)  
LA ÉPOCA  
LA GACETA DE MADRID  
LA GACETA DEL NORTE  
LA IBERIA  
LA IDEA LIBRE  
LA JUSTICIA  
LA LUCHA (CUBA)  
LA NUEVA PRENSA  
LA PUBLICIDAD  
LA REPÚBLICA  
LA REVISTA EUROPEA  
LA REVUE BLANCHE (FRANCIA)  
LA TRALLA  
LA TRIBUNA (CUBA)  
LA TRIBUNA LIBRE  
LA VANGUARDIA  
LA VEU DE CATALUNYA  
LA VOZ DE CUBA (CUBA)  
LA VOZ DE GALICIA  
LE PETIT JOURNAL (FRANCIA)

LE REVOLTÉ (FRANCIA)  
LE TEMPS (FRANCIA)  
L'INTRANSIGENT (FRANCIA)  
LOS DEBATES  
LUCIFER: THE LIGHT-BEARER (EEUU)  
NEW YORK HERALD (EEUU)  
NEW YORK JOURNAL (EEUU)  
REVISTA SOCIAL  
SIMPLICISSIMUS (ALEMANIA)  
SOLIDARIDAD OBRERA  
SUN (EEUU)  
TEMPS NOUVEAUX (FRANCIA)  
THE NEW YORK WORLD (EEUU)

### FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

AGUADO SÁNCHEZ, F., *Historia de la Guardia Civil. La guardia Civil en la Restauración y la Regencia (1874-1907)*, Madrid, Planeta, 1984.

ALONSO, C., "El auge de la prensa periódica", *Historia de la Edición y de la Lectura en España (1472-1914)*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003.

ALONSO DE LA CALLE, R., "La concesión de la autonomía colonial a Cuba en 1897: una visión desde la prensa madrileña", *Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea*, tomo 21, Madrid, UNED, 2009, pp. 289-314.

ALVARADO PLANAS, J., *Justicia, Libertad y Censura en la edad moderna*, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2007.

ÁLVAREZ AÑÑOS, M.A., "Sociedades patrióticas, germen de los futuros derechos. La libertad de expresión, de reunión, asociación e imprenta, 1820-1823: el trienio de las libertades", *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 12, Murcia, Universidad de Murcia, 2015, pp. 51-85.

ÁLVAREZ JUNCO, T., *La ideología política del anarquismo español (1868-1910)*, Madrid, Siglo Veintiuno, 1976.

ÁLVAREZ JUNCO, T., *Restauración y prensa de masas: Los engranajes de un sistema (1875-1883)*, Pamplona, Universidad de Navarra, 1981.

ÁLVAREZ JUNCO, T., *Estructura subterránea de la prensa de la Restauración. Madrid en la sociedad del siglo XIX*, Madrid, Revista Alfoz, 1986.

ÁLVAREZ, JUNCO, T., *Historia de los medios de comunicación en España, Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Barcelona, Ariel, 1989.

ÁLVAREZ JUNCO, J., *El Emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista*, Madrid, Alianza, 1990.

ANTÓN ONECA, J., *El Código Penal de 1870*, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1970.

ARTOLA, M., *Partidos y Programas políticos 1808-1936*, Madrid, Aguilar, 1975.

AVILÉS, J., “Milenarismo y propaganda por el hecho: la marcha anarquista sobre Jerez de 1892”, *Historia, política y cultura. Homenaje a Javier Tusell* (vol I), Madrid, UNED, 2009, pp. 183- 211.

AZAÑA, M., *Estudios de política francesa y contemporánea. La política militar*, Madrid, Saturnino Calleja, 1918.

AZCARATE, P., *La guerra del 98*, Madrid, Alianza Editorial, 1968.

BALLBÉ MALLOL, M., *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Madrid, Alianza, 1984.

BARRERA, C., *El periodismo español en su historia*, Barcelona, Ariel Practicum, 2000.

BASAIL RODRIGUEZ, A., *El lápiz rojo. Prensa, censura e identidad cubana (1875-195)*, La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana, 2004.

BERNAL, A.M., “Los procesos de la Mano Negra”, *Los grandes procesos de la Historia de España*, Madrid, Critica, 2002, pp. 410-432.

BLACKSTONE, W., *Commentaries on the Law of England*, IV, Londres, Dawsons of Pall Mall, 1966.

BORDIEU, P., “Censorship and the Imposition of Form”, *Language and Symbolic Power*, Cambridge y Massachusetts, Harvard University Press, 1991, pp. 137-166.

BOTREL, J.F., “La Iglesia católica y los medios de comunicación impresos en España de 1847 a 1917: Doctrinas y prácticas”, *Metodología de la historia de la prensa española*, Madrid, siglo XXI, 1982, pp. 119-176.

BOTREL, J.F., “La libertad de imprenta, entre la ley y las prácticas”, INFANTES DE MIGUEL, V., LÓPEZ, F., BOTREL, J.F., (coordinadores), *Historia de la Edición y de la Lectura en España (1472-1914)*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 523-530.

BRENAN, G., *El laberinto español: Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil*, Madrid, Planeta, 2008.

BRONSON REA, G., *Facts and fakes about Cuba*, New York, University of Michigan, 1897.

CABALLERO LÓPEZ, J., DELGADO IDARRETA, JM., SÁENZ DE PIAPON, C., *Entre Olózaga y Sagasta: Retorica, prensa y poder*, IER, Logroño, 2011.

CADALSO, F., *El anarquismo y los medios de represión*, Madrid, Romero, 1896.

CARDONA, G., *El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil*, Madrid, Siglo XXI, 1983.

CARRETERO GONZÁLEZ, C., *El derecho en los medios de comunicación*, Navarra, Aranzadi, 2013.

CASTRO FARIÑAS, J.A., *De la Libertad de Prensa*, Madrid, Fragua, 1971.

CENDAN PAZOS, F., *Historia del derecho español de prensa e imprenta (1502-1966)*, Madrid, Nacional, 1974.

CHAFEE, Z., *Free Speech in the United States*, Cambridge- Massachusetts, Harvard University Press, 1967.

CHRISTIAN LAURSEN, J., *Early french and german defenses of freedom of the press*, Boston, BRILL, 2003.

COLCLOUGH, S., WEEDON, A., *The History of the book in the west: 1800-1914. Volume IV*, Bedfordshire, University of Bedfordshire, 2012.

COMPANYS MONCLUS J., *La prensa amarilla norteamericana en 1898*, Madrid, Silex, 1998.

CRUZ DE SEOANE, M., DOLORES SAIZ, M., *Historia del Periodismo en España. El Siglo XX: 1898-1936*, Madrid, Alianza, 1996.

CRUZ SEOANE, M., DOLORES SAIZ, M., *Cuatro siglos de periodismo en España: de los avisos a los periódicos digitales*, Madrid, Alianza, 2007.

DE HARO DE SAN MATEO, M<sup>o</sup>V., *La Historia de la prensa a través de los periódicos y las revistas de información general*, Murcia, Diego Marín, 2011.

DEL VALLE, J.A., “La censura gubernativa de prensa en España (1914-1931)”, *Revista de Estudios políticos (Nueva Época)*, nº21, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981.

DESVOIS JM., *La prensa en España (1900-1931)*, Estudios de Historia Contemporánea Siglo XXI, Madrid, 1977.

DESVOIS, J.M., “El progreso técnico y la vida económica de la prensa en España de 1898-1936”, *España, 1898-1936: Estructuras y cambio*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1984.

DUÑAITURRIA LAGUARDA, A., “Se abrió la veda al morbo judicial: El crimen de la Calle Fuencarral a través del diario *La República*”, *El derecho de los Medios de Comunicación*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2013, pp. 43-68.

ESCOLAR, H., *La edición moderna. Siglos XIX y XX*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Rupiérrez, 1996.



FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., *Cánovas, su vida y su política*, Madrid, Ambos Mundos, 1951.

FERNÁNDEZ AREAL, M., *El control de la prensa en España*, Madrid, Guadiana, 1973.

FIESTAS LOZA, A., *Los delitos políticos (1808-1936)*, Salamanca, Cervantes, 1994.

FONER, P.S., *La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano 1895-1902*, Madrid, Akal, 1975.

FRANCISCO FUENTES, J. Y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., *Historia del Periodismo Español*, Madrid, Síntesis, 1998.

GARCÍA VENERO, M., *Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio. Una vida al servicio de España*, Madrid, Prensa Española, 1961.

GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo español: De la revolución de Septiembre al desastre colonial*, Madrid, Nacional, 1971.

GÓMEZ APARICIO, P., *Historia del Periodismo español: De las guerras coloniales a la dictadura*, Madrid, Nacional, 1974.

GÓMEZ REINO, E., *Aproximación histórica al Derecho de la Imprenta y de la Prensa en España (1480-1966)*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977.

GOMIS SANAHUJA, L., *El medio media. La función política de la prensa*, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1974.

GONZÁLEZ CALLEJA, E., *La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917)*, Madrid, CESIC, 1998.

GROTE, R., "Constitutionalization of Political Rule in Europe: Freedom of Speech, Press and Assembly", *Constitutionalism and Good Governance*, Munich, Nomos, 2014, pp. 303-317.

GURUCHARRI, S., *Bibliografía del anarquismo español (1869-1975)*, Barcelona, La Rosa de Foc, 2004.

GUTIÉRREZ MOLINA, J.L., *El Estado frente a la anarquía: Los grandes procesos contra el anarquismo español (1883-1982)*, Madrid, Síntesis, 2008.

HARGREAVES, R., *The First Freedom: A History of Free Speech*, Stroud, Sutton Publishing, 2002.

HERNÁNDEZ GUERRERO., J.A., "Oratoria y Periodismo", *Retórica, literatura y periodismo: actas del V seminario Emilio Castelar*, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2006, pp. 15-24.

JOVER ZAMORA, JM., *La época de la Restauración (1875-1902), volumen II Civilización y cultura*, Madrid, Espasa Calpe, 2002.



- JULIÁ, S., *Violencia política en la España del siglo XX*, Madrid, Santillana, 2000.
- JUSTIN GOLDSTEIN, R., *Censorship of Political Caricature in Nineteenth-Century France*, Kent, Ohio y Londres, The Kent State University Press, 1989.
- KOSS, S., *The Rise and Fall of the Political Press in Britain (vol I: The nineteenth century)*, Londres, Hamish Hamilton, 1981.
- LAGUNA PLATERO, A. y BORDERIA ORTIZ, E., “Al servicio del Imperio. Estrategias de desinformación en la guerra del norte de África”, *Comunicación y guerra en la historia*, Santiago de Compostela, Tórculo, 2004, pp. 663- 682.
- LEAL CRUZ, M., “Cuba 98: Guerra y prensa. Controversias y disfunciones en torno al Maine. Especial referencia a los rotativos norteamericanos”, *XIII Coloquio de Historia Canario-Americana*, 1998, Las Palmas de Gran Canaria, Casa Colón, 2000, pp. 296-322.
- LEÓN ROCH, *Setenta y cinco años de periodismo. Aportaciones para la historia del periodismo madrileño*, Madrid, Ramona Velasco, 1923.
- LEVEFERE, A., “Translation and Other Ways in Which one Literature Refracts Another”, *Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures*(volume nº38 ), Londres, Routledge, 1984, pp.127-142.
- LEVY, L.W., *Emergence of a free press*, Oxford, Ivan R. Dee, 1985.
- LEZCANO, R., *La ley de jurisdicciones 1905-1906: Una batalla perdida por la libertad de expresión*, Madrid, Akal Editor, 1978.
- LIDA, C.E., *Anarquismo y revolución en la España del Siglo XIX*, Madrid, Siglo XXI, 1972.
- LLEIXA, J., *Cien años de militarismo en España*, Barcelona, Anagrama, 1986.
- LLOVERÍAS, J., *Contribución a la historia de la prensa periódica*, La Habana, Archivo Nacional de Cuba, 1957.
- LÓPEZ DEL CORRAL, M., *La guardia civil en la Restauración (1875-1905). Militarismo contra la subversión y terrorismo anarquista*, Madrid, Actas, 2004.
- LOUIS HOROWITZ, I., *The Anarchists*, Madrid, Alianza, 1964.
- MADRID, F., VENZA, C., *Antología documental del anarquismo español. Organización y revolución: De la Primera Internacional al Proceso de Montjuich (1868-1896)*, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 2001.
- MARTÍ GILABERT, F., *Política religiosa de la Restauración (1875-1931)*, Madrid, Rialp, 1991.

MARTIN DE LA GUARDIA, R., *Cuestión de tijeras. La censura en la transición a la democracia*, Madrid, Síntesis, 2008.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Diccionario de la Administración Española. Compilación de la Novísima Legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la Administración pública*, tomo del I al VIII, Madrid, Administración, 1886-1887.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Boletín jurídico administrativo. Anuario de legislación y jurisprudencia*, Madrid, Administración Augusto Figueroa, 1883-1914.

MARTÍNEZ CUADRADO, M., *La burguesía conservadora (1874-1931)*, Madrid, Alianza Universidad, 1973.

MARTÍNEZ CUADRADO, M., *Historia de España dirigida por Miguel Artola. Restauración y crisis de la monarquía (1874-1931)*, Madrid, Alianza, 1991.

MARTÍNEZ GALLEGO, F., y RIUS SANCHIS, I., “Los lápices rojos del africanismo: control informativo en la guerra de Marruecos”, *Comunicación y guerra en la historia*, Santiago de Compostela, Tórculo, 2004, pp. 825-850.

MARTÍNEZ GUERRA, A., “Aeropagítica y su influencia en la Primera Enmienda Norteamericana. Un estudio a través de la jurisprudencia”, *Historia y comunicación social*, vol. 7, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 121-145.

MERKLE, D., SULLIVAN, C., DOORSLAER, L., WOLF, M., *The power of the pen: Translation & Censorship in Nineteenth-century Europe*, Berlin, LIT, 2010.

MERRILL, J., LEE, J., FRIEDLANDER, E., *Medios de comunicación social. Teoría y práctica en Estados Unidos y en el mundo*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Rupérez, 1992.

MOMMSEN, W. J., *La época del Imperialismo. Europa 1885-1918. Historia Universal Siglo XXI*, volumen 28, Madrid, Siglo Veintiuno de Argentina, 1971.

MONTERO F., *Historia de España. Restauración y Regencia. La España canovista (1875-1902)*, Madrid, Espasa Calpe, 1999.

MONTERO F., TUSELL J., *Historia de España: El Reinado de Alfonso XIII, El regeneracionismo borbónico y la crisis parlamentaria (1898-1923)*, Madrid, Espasa Calpe, 2004.

MUÑOZ MACHADO, S., *Libertad de prensa y procesos por difamación*, Barcelona, Ariel, 1987.

MONTERO F., TUSELL J., *Historia de España: El Reinado de Alfonso XIII, El regeneracionismo borbónico y la crisis parlamentaria (1898-1923)*, Madrid, Espasa Calpe, 2004.

NÚÑEZ FLORENCIO, R., *El terrorismo anarquista (1888-1909)*, 1983, Siglo XXI, Madrid.

NÚÑEZ FLORENCIO, R., *Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906)*, Madrid, CESIC, 1990.

NÚÑEZ FLORENCIO, R., *Tal y como éramos. España hace un siglo*, Madrid, Espasa Calpe, 1998.

PALOMARES IBÁÑEZ, JM., “Prensa y política en Galicia: la prensa periódica compostelana (1875-1936)”, *Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1893, pp. 391-430.

PASCUAL MARTÍNEZ, P., *Escritores y editores en la Restauración Canovista (1875-1923)*, tomo III, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992

PASCUAL MARTÍNEZ, P., *El compromiso intelectual del político. Ministros y escritores en la Restauración Canovista*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1999.

PAZOS, A.M., “La Buena Prensa”, *Hispania Sacra*, vol. XLIV, nº 89, Madrid, CSIC, 1992, pp. 139-160.

PELAZ LÓPEZ, J.V., “La importancia de la prensa de provincias en la España Liberal”, *Berceo. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades*, nº59, Logroño, IER, 2010, pp. 63-94.

PENA, A., *Comunicación y guerra en la historia*, Santiago de Compostela, Tórculo Edicions, 2004.

PFLANZE, O., *Bismarck and the Development of Germany, volume II. The Period of Consolidation (1871-1880)*, New Jersey y Oxford, Princeton University Press, 1990.

PIZARROSO QUINTERO, A., *Historia de la prensa*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994.

PIZARROSO QUINTERO, A., “Información, desinformación y conflicto”, *Comunicación y guerra en la historia*, Santiago de Compostela, Tórculo, 2004, p.17-56.

RABBAN, D., *Free Speech in its Forgotten Years*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

REVUELTA GONZÁLEZ, M., “Las creencias: contrastes ambientales en torno a las creencias religiosas”, *La época de la Restauración (1875-1902). Civilización y cultura*, Madrid, Espasa Calpe, 2002.

RINGROSE, D., *España: 1750-1900: el mito del fracaso*, Madrid, Alianza, 1996.

RUBIALES MORENO, F., *Periodistas sometidos: los perros del poder*, Madrid, Almuzara, 2009.

RUUD, C.A., *Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804-1906*, Toronto, University of Toronto Press, 1982.

SÁNCHEZ AGESTA, L., *Historia del Constitucionalismo Español*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1974.

SÁNCHEZ ARANDA, JJ., BARRERA DEL BARRIO, C., *Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta 1975* Pamplona, EUNSA, 1992.

SÁNCHEZ ILLÁN, J.C., *Prensa y política en la España de la Restauración: Rafael Gasset y El Imparcial*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999.

SANTOJA, G., *Del lápiz rojo al lápiz libre: La censura de prensa y el mundo del libro*, Barcelona, Hombre Anthropos, 1986.

SECO SERRANO, C., *Alfonso XIII y la crisis de la Restauración*, Barcelona, Horas de España, 1969.

SECO SERRANO, C., *Militarismo y civilismo en la España contemporánea*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984.

SECO SERRANO, C., “Gastos reservados = Fondos de reptiles”, NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M., MARTÍNEZ DE LAS HERAS, A., CAL MARTÍNEZ, R., (coordinadores), *Libro homenaje al profesor José Altabella*, Madrid, Universidad Complutense, 1997.

SECO SERRANO, C., *La España de Alfonso XII: el Estado, la política y los movimientos sociales*, Madrid, Espasa Calpe, 2002.

SEVILLA SOLER, R., *La Guerra de Cuba y la memoria colectiva. La crisis del 98 en la prensa sevillana*, Sevilla, CESIC, 1996.

SIMMONS, J., “The press and the book trade”, *The History of the Book in the West: 1800-1914* (volume IV), Oxford, ASHGATE, 2010. p. 395-413.

SMITH, A., “La Presse est Libre...” *The History of the Book in the West: 1800-1914* (volume IV), Oxford, ASHGATE, 2010, pp. 101- 142.

SORIA, C., “La ley española de Policía de Imprenta de 1883”, *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. IV, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1982, pp. 11-40.

STARK, G.D., *Banned in Berlin. Literary Censorship in Imperial Germany, 1871-1918. Monographs in German History, volume 25*, Nueva York y Oxford, Berghahn Books, 2009.

STRAUSS, D., “Freedom of speech and the Common-Law constitution”, *Eternally Vigilant: Free Speech in the Modern Area*, Chicago y Londres, The University of Chicago Press, 2002, pp. 33-59.

STUART MILL, J., *On Liberty*, London, Penguin Classics, 1985.

SUÁREZ CORTINA, M., “Élites republicanas y periodismo en la España de fines del siglo XIX”, *Les élites et la presse en Espagne et en Amérique latine: des Lumières à la seconde guerre mondiale*, Madrid-Bordeaux-Aix en Provence, Casa de Velázquez, 1997.

TIMOTEO ÁLVAREZ, J., *Restauración y prensa de masas: Los engranajes de un sistema (1875-1883)*, Pamplona, Universidad de Navarra, 1981.

TIMOTEO ÁLVAREZ, J., *Historia de los medios de comunicación en España, Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)*, Barcelona, Ariel, 1989.

THOGMARTIN, C., *The National Daily Press of France*, Birmingham-Alabama, Summa Publication, 1998.

TOBAJAS, M., *El periodismo español. Notas para su historia*, Madrid, Forja, 1984.

TUÑÓN DE LARA, M., *España, 1898-1936: Estructuras y cambio*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1984.

TUSELL GÓMEZ, X., *La España del Siglo XX: Desde Alfonso XIII a la muerte de Carrero Blanco*, Barcelona, Dopesa, 1975.

VALLS, J.F., *Prensa y burguesía en el Siglo XIX español*, Madrid, Anthropos, 1988.

VAN KLEY, D., *The french idea of freedom. The old regime and the declaration of rights of 1789*, California, Stanford University press, 1994.

VARELA ORTEGA, J., *Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900)*, Madrid, Alianza, 1977.

VIDAL COY, J.L., “Poder político y censura: la relación del establishment estadounidense con la información en los conflictos militares ultramarinos del siglo XX”, *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. 33, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, pp. 209-231.

VIQUEIRA HINOJOSA, A., *Historia y Anecdotario de la Policía española (1833-1931)*, Madrid, San Martín, 1989.

WOLF, M., “ÜbersetzerInnen als gatekeepers (Selbst-) Zensur als Voraussetzung für die Aufnahme in das literarische Feld der späten Habsburgermonarchie”, *The Power of the Pen: Translation & Censorship in Nineteenth-century Europe*, Berlin, LIT, 2010, pp. 29-53.





## APÉNDICE





## ANEXO N°1

### Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870

*Constitución política de la Monarquía española y Leyes complementarias: Orden Público. Ley de 23 de abril de 1870*, X edición, Madrid, Centro editorial de Góngora, 1922, pp. 177-196.

#### TÍTULO PRIMERO

#### DEL ESTADO DE PREVENCIÓN Y ALARMA

#### CAPÍTULO PRIMERO

##### Sección primera

Art. 1º. Las disposiciones de esta ley serán aplicadas únicamente cuando se haya promulgado la ley de suspensión de garantías, a que se refiere el art. 31 de la Constitución, y dejarán de aplicarse cuando dicha suspensión haya sido levantada por las Cortes.

Art. 2º. Son objeto de esta ley:

1º Las medidas gubernativas que las Autoridades civiles y militares pueden y deben adoptar para mantener y restablecer el orden público, y para prevenir los delitos contra la Constitución del Estado, contra la seguridad interior y exterior del mismo, y contra el orden público, que la vigente ley penal condena.

2º La competencia de los Jueces y Tribunales en las causas criminales que se formen sobre dichos delitos, y el procedimiento a que estas han de ajustarse.

Art.6º. Propondrá el Gobierno y en caso urgente acordará desde luego la suspensión de las publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión de los delitos de que hablar el artículo 2º de esta ley, y señaladamente los comprendidos en los artículos 167

y 174 del Código penal, dando cuenta al Gobierno de las determinaciones que sobre este punto adopte. Recogerá los ejemplares que encontrare de aquellas publicaciones, remitiéndolas con las personas responsables de los delitos expresados al Juzgado ordinario competente para los efectos de Justicia.

Con la aprobación del Código Penal de 1870 pasaron a ser los artículos 243 a 250, equivalentes a los citados en el precepto. Son los siguientes: Invasión violenta y con intimidación del Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores, si estuvieren en las Cortes reunidas; perturbación grave del orden de las sesiones de dichos Cuerpos; injuria o amenaza en los mismos actos a algún Diputado o Senador, por las opiniones manifestadas o por los votos emitidos en el Senado o en el Congreso; emplear fuerza, intimidación o amenaza grave para impedir a un Diputado o Senador asistir al Cuerpo Colegislador a que pertenezca, y por los mismos medios coartar la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto.

La suspensión y prohibición de que circule un periódico, ordenadas por un Alcalde, son actos gubernativos que le corresponden como Delegado del Poder público (Real Orden de 19 de febrero de 1896. Publicado en Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1896).

Art. 13º. Cuando la rebelión o sedición se manifiesten desde los primeros momentos, rompan el fuego los rebeldes o sediciosos, o comprenda la Autoridad civil la urgente necesidad de apelar a la fuerza y resignar el mando para dominarlos, se pondrá de acuerdo con la Autoridad judicial y la militar, y dispondrán la inmediata declaración del estado de guerra.

Si no hubiese acuerdo entre estas Autoridades, ni tiempo para tomarlo, se entrará desde luego provisionalmente en el estado de guerra en los dos primeros casos del párrafo anterior, dando directamente cuenta de todo al Gobierno y a las Autoridades superiores jerárquicas respectivamente.

Art. 15°. En la capital de la Monarquía y puntos donde residan el Rey o la Regencia del Reino, no podrá declararse el estado de guerra sin autorización del Gobierno.

El Gobierno cuando hayan ocurrido actos de rebelión o sedición en dos o más provincias, o se hayan presentado grupos considerables de rebeldes o sediciosos armados en ellas, determinará el territorio que queda sujeto al estado de guerra.

## TÍTULO SEGUNDO

### DEL ESTADO DE GUERRA

Art. 20°. Resignado el mando por la Autoridad civil en la militar, y en los casos a que se contrae el art. 13 de esta ley, quedará declarado en estado de guerra el territorio de la provincia en que ocurran aquellos sucesos, lo que se hará saber al público por medio de bandos y edictos que contengan las prevenciones y medidas oportunas.

Art. 26°. La Autoridad militar, a la vez que adopte las medidas comprendidas en los artículos procedentes y que restablezca el orden y el prestigio de la Autoridad a todo trance, dispondrá que inmediatamente se instruyan las causas a que haya lugar, y se formen los Consejos de guerra que han de fallar las que correspondan a la jurisdicción militar, según lo que expresan los artículos siguientes.



Art. 27º. Los Consejos de guerra ordinarios fallarán las causas en que, siendo la rebelión de carácter militar, aparezcan reos de estos delitos o sus anejos militares de mar y tierra en activo servicio, cualquiera que sean su situación y categoría.

Las causas a que se refiere el párrafo anterior se considerarán de carácter militar cuando los rebeldes o sediciosos estén en mandados por Jefes militares, y cuando el movimiento se inicie o sostenga por fuerzas armadas del Ejército o de la Milicia popular.



## ANEXO N°2

### Código Penal de 17 de junio de 1870

Martínez Alcubilla, M., *Diccionario de la Administración Española. Compilación de la Novísima Legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la Administración pública*, IV edición, tomo II, Madrid, Administración, 1886, pp.516-570.

#### LIBRO PRIMERO

#### TÍTULO I

#### DE LOS DELITOS Y FALTAS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL; LA ATENUAN O LA AGRAVAN

#### CAPÍTULO CUARTO

#### Circunstancias agravatorias de la responsabilidad penal

Art.10. Son circunstancias agravantes:

5° Realizar el delito por medio de la imprenta, litografía, fotografía u otro medio análogo que facilite la publicidad.

Esta circunstancia la tomarán en consideración los tribunales para apreciarla como agravante o atenuante, según la naturaleza del delito.

Art.12. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior (sobre la responsabilidad criminal) los delitos cometidos por medio de la imprenta, litografía, fotografía u otro medio análogo que facilite la publicidad. De dichos delitos responderán criminalmente sólo los autores.

Art.13. Se consideran autores:

1° Los que toman parte directa en la ejecución del hecho.

2° Los que fuerzan o inducen directamente a ejecutarlo.

3º Los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.

Art. 14. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, solamente se reputarán autores de los delitos mencionados en el art.12 los que realmente hayan sido del escrito o estampa publicados. Si éstos no fueren conocidos o no estuvieren domiciliados en España, o estuvieren exentos de responsabilidad criminal, con arreglo al art.8º de este Código, se reputarán autores los directores de la publicación que tampoco se hallen en ninguno de los tres casos mencionados. En defecto de éstos se reputarán autores los editores también conocidos y domiciliados en España y no exentos de responsabilidad criminal según el artículo anteriormente citado, y en defecto de éstos los impresores.

Se entiende por impresores para el efecto de este artículo los directores o jefes del establecimiento en que se haya impreso, grabado, o publicado por cualquiera otro medio, el escrito o estampa criminal.

## LIBRO SEGUNDO

### TÍTULO II

#### DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN

#### DE LAS FALTAS DE IMPRENTA Y CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

Art. 203. Incurrirán en pena de arresto mayor:

1º Los autores, directores, editores o impresores, en sus respectivos casos de publicaciones clandestinas.

2º Los directores, editores o impresores, también en los respectivos casos de publicaciones periódicas, que no hayan puesto en conocimiento de la autoridad local en nombre del director, antes de salir aquélla a la luz.

En la misma pena incurrirán los mencionados en este artículo cuando no pusieren en conocimiento de la autoridad local, antes de salir a la luz la publicación periódicos, el nombre del editor si aquella lo tuviere.

### TÍTULO III

#### DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

#### CAPÍTULO IV

De los desacatos, insultos, injurias y amenazas a la autoridad y de los insultos injurias y amenazas sus agentes y a los demás funcionarios públicos

Art. 266. Cometén desacato:

1º Los que, hallándose un Ministro de la Corona o una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, los calumniaren, injuriaren o insultaren de hecho o de palabra en su presencia o en escrito que les dirigieren o los amenazaren.

2º El funcionario público que, hallándose su superior jerárquico en el ejercicio de su cargo, lo calumniare, injuriare o insultare de hecho o de palabra en su presencia o en escrito que le dirigiese o lo amenazare.

Por consecuencia de lo dispuesto en los dos números anteriores, la publicación por la prensa periódica de los escritos en ellos mencionados, no constituirá por sí solo delito.

Art. 269. Los que hallándose un Ministro de la Corona o una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas dos calumniaren, injuriaren, insultaren de hecho de palabra, fuera de su presencia, o en escrito que no estuviere a ellos dirigido, serán castigados con la pena de arresto mayor.

## TÍTULO IX

### DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

#### CAPÍTULO III

##### Delitos de escándalo público

Art. 457. Incurrirán en la pena de multa de 125 a 1.250 pesetas los que expusieran o proclamaren, por medio de la imprenta y con escándalo, doctrinas contrarias a la moral pública.

## TÍTULO X

### DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR

#### CAPÍTULO I

##### Calumnia

Art. 468. La calumnia propagada por escrito y con publicidad, se castigará con las penas de prisión correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 500 a 5.000 pesetas cuando se imputare un delito grave y con las de arresto mayor y multa de 250 a 2.500 pesetas, si se imputare un delito menos grave.



## CAPÍTULO II

### Injuria

Art. 471. Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

Art. 472. Son injurias graves:

- 1º La imputación de un delito de los que no dan lugar a procedimientos de oficio.
  - 2º Los de vicio o falta de moralidad, cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o interés del agraviado.
  - 3º Las injurias que por su naturaleza, ocasión o circunstancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas.
  - 4º Las que racionalmente merezcan la calificación de graves atendiendo el estado, dignidad y circunstancias se castigarán con la pena de destierro en su grado medio al máximo y multa de 250 a 2.500 pesetas.
- No concurriendo aquellas circunstancias se castigarán con las penas de destierro en su grado mínimo al medio y multa de 125 a 1.250 pesetas.

## CAPÍTULO III

### Disposiciones generales

Art. 476. Se comete delito de calumnia o injuria no solo manifiestamente sino por medio de alegorías, caricaturas o emblemas o alusiones.

Art. 477. La calumnia y la injuria se reputarán hechas por escrito y con publicidad cuando se propagaren por medio de papeles impresos, litografiados o grabados, por carteles o pasquines fijados en los sitios públicos o por papeles manuscritos.

Art. 479. Los directores o editores de los periódicos en que se hubieren propagado las calumnias o injurias, insertarán en ellos dentro del término que señalen las leyes o el Tribunal en su defecto, la satisfacción o sentencia condenatoria, si lo reclamare el ofendido.

Art. 482. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria causada en juicio sin previa licencia del juez o Tribunal que de él conociere.

Nadie será penado de calumnia o injuria sino a querella de la parte ofendida, salvo cuando la ofensa se dirija contra la autoridad pública, corporaciones o clases determinadas del Estado y lo dispuesto en el cap. V del título III de este libro.

## TÍTULO XV

Art. 582. Los que provocaren directamente por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación a la perpetración de los delitos comprendidos en este Código, incurrirán en la pena inferior en dos grados a la señalada al delito.

Art. 583. Si la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, la pena de la provocación será inmediatamente inferior en grado a la que para aquél esté señalada

LIBRO TERCERO  
DE LAS FALTAS Y SUS PENAS  
TÍTULO PRIMERO  
DE LAS FALTAS DE IMPRENTA Y CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

Art. 584. Incurrirán en la pena de 25 a 125 pesetas de multa:

1º El director de un periódico en el cual se hubieren anunciado hechos falsos, si se negare a insertar gratis, dentro del término de tres días, la contestación que le dirija la persona ofendida o cualquier otra autorizada para ello, rectificándolos ó explicándolos, con tal de que la rectificación no excediere en extensión del doble del suelto o noticia falsa.

En el caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrán igual derecho sus hijos, padres, hermanos y herederos.

2º Los que por medio de la imprenta, litografía ú otro medio de publicación divulgaren maliciosamente hechos relativos a la vida privada que, sin ser injuriosos puedan producir perjuicios o graves disgustos en la familia a que la noticia se refiera.

3º Los que por los mismos medios publicaren maliciosamente noticias falsas de las que pueda resultar algún peligro para el orden público o daño a los intereses o al crédito del Estado.

4º Los que en igual forma, sin cometer delito, provocaren a la desobediencia de las leyes y de las autoridades constituidas, hicieren la apología de acciones calificadas por la ley de delito ú ofendieren a la moral, a las buenas costumbres o a la decencia pública.

5º Los que publicaren maliciosamente disposiciones, acuerdos o documentos oficiales sin la debida autorización antes que haya tenido publicidad oficial."

### ANEXO N°3

#### **Orden Circular de 4 de enero de 1874: “Mandando suspender la publicación de los periódicos carlistas y cantonales”.**

*Colección Legislativa de España, Tomo CXII, pp. 23-24.*

La gravedad de las circunstancias porque la Nación atraviesa obligan al Ministro que suscribe a tomar una determinación que, si lamenta como republicano, cree de imprescindible urgencia y necesidad, como amante de los caros intereses encargados a la custodia del Gobierno de la República. Ante la salvación del orden perturbado y de la sociedad amenazada, no vacila en acudir a los medios extraordinarios que la salud de la Patria hacen urgentes e imprescindibles para impedir la propagación de la funesta guerra civil carlista y cantonal que asola algunas provincias y para cortar de raíz un elemento perturbador que mantiene en continua alarma las más populosas ciudades.

La prensa carlista y cantonal, aquella enemiga declarada de las instituciones liberales del país, y esta amiga fingida y falaz de las instituciones republicanas, son objeto primordial de la atención del Ministro de la Gobernación de la República que, si hoy acude a un pasajero eclipse la libertad, es para asegurarla en el menos término posible un amplio porvenir; y si deja a un lado, momentáneamente también, los dogmas de la democracia, es para que mañana, salvada esta dolorosa crisis, pueden regir por completo sin la menor cortapisa. En su firmísimo propósito de consolidar las instituciones liberales no ha dudado en recurrir a este extremo que aplaudirán de seguro el país entero, todos los amantes de la integridad nacional y cuantos se interesan por la conservación de la sociedad y de las civilizadoras y liberales instituciones sobre que ésta se asienta.



Atendiendo a estas consideraciones, se servirá V.S., bajo su más estricta responsabilidad, suspender la publicación de los periódicos carlistas y cantonales en el territorio de su mando.

## ANEXO N°4

### **Orden Circular de 15 de enero de 1874: “Haciendo varias prevenciones a los Gobernadores con motivo de la suspensión y establecimiento de la Ley de Orden público”.**

*Colección legislativa de España, Tomo CXII, pp. 75-76.*

Suspendidas las garantías constitucionales que el Código fundamental de 1869 otorga a los ciudadanos españoles, creo de mi deber recordar a V.S. el precepto de las Constitución que dispone en su art. 31 el restablecimiento inmediato de la Ley de Orden público, cuando la seguridad del Estado pone al Gobierno en el duro trance de suspender temporalmente los derechos individuales, que en los tres primeros párrafos de su artículo 17 consigna la Constitución.

Objeto de la Ley de Orden publico citada son las medidas gubernativas que las Autoridades civiles y militares pueden y deben adoptar para mantener y restablecer el orden y contra la seguridad interior y exterior del mismo. Entre las medidas preventivas de esta ley está la que concede su artículo 6. ° a las Autoridades para suspender las publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión de los actos o delitos de que habla la ley misma en su art. 2°.

Pero aun cuando el Gobierno no encontrar disposiciones legales que le facultasen para conceder a V.S. la autorización de multar, suspender y suprimir los periódicos que por cualquiera manera contribuyan a mantener la alarma y la intranquilidad en las presentes circunstancias, se cree no obstante suficientemente fuerte y poderoso, como apoyado en la opinión del país, harto ya de trastornos y desórdenes, para sostener la autoridad de V.S. en el ejercicio de tan provechosas aunque sensibles facultades.

Cuando la sociedad está enferma necesita como el individuo la privación y la quietud, y no es posible ni lícito a los ciudadanos de un país devorando por la guerra y castigando por el espectáculo diario de su propia muerte vivir la vida de los pueblos libres ni respirar la atmósfera de todos los derechos. Ninguno más grande y respetable entre los que reconocen y consagra la democracia moderna que el derecho de difundir las ideas por medio de la prensa. Pero la prensa en muchos casos ha llegado a adulterar y desconocer su altísima misión entregándose a los partidos como alma de destrucción violenta en vez de servirlos, y servir sobre todo al país, siendo consejera y maestra de la opinión, de ningún modo trompeta de guerra ni pregón de alarma.

Diferentes disposiciones se han dictado para impedirlo por los Gobiernos anteriores, pero los periódicos han sabido burlarse de todas ellas, rebelándose con ingeniosa tramas contra la ley, contra el Gobierno y contra la paz pública.

Resuelto el Gobierno actual a que la ley se cumpla y cuidadoso de su prestigio, que estriba más que en nada en los presentes momentos en la conservación del orden público, faculta a V.S. para multar, suspender y suprimir las publicaciones que tiendan a impedir en los más mínimo este propósito del Gobierno, que le imponen de consumo un propio deber, la salud de la patria y la salvación de la República. Y a fin de que los periódicos que V.S. se vea en la dolorosa necesidad de suprimir, no escapen del rigor de tan sensible medida, cambiando por otro su título, entienda V.S. que toda nueva empresa periodística y todo periódico que desee mudar su nombre después de suprimido, ha de solicitar y obtener de V.S. la competente autorización para ver la luz pública, autorización que V. S. podrá negar o conceder de conformidad con



imprudencia y atendiendo al primordial interés, que persigue desde su fundación este Gobierno y que tengo manifestado a V. S. en la circular del 6 del mes corriente.

El Gobierno está firmemente decidido a que sus Autoridades no den en ningún caso muestras de apatía, ni ejecuten esta y todas sus órdenes con el tibio paso de una punible indolencia.



## ANEXO N°5

### **Orden Circular de 11 de junio de 1874: “A los gobernadores civiles, recordándoles la necesidad y los medios de corregir los abusos de la prensa”.**

*Colección legislativa de España, Tomo CXII, pp. 947-948.*

Los repetidos abusos de la prensa obligan al Gobierno a recordar a sus delegados la necesidad de proceder con todo rigor en la aplicación de las disposiciones vigentes en la materia, resuelto como está a restablecer a todo trance el orden, y convencido por la dolorosa experiencia de recientes sucesos de que el origen de nuestros mayores males es debido a la insensata propaganda que puso en grave riesgo las conquistas de la revolución, que fomenta diariamente el desorden moral, que lastima el crédito público, que trata de introducir la duda en los espíritus, que sugiera criminales sospechas, que tiende, en fin, a debilitar la Autoridad y a quebrantar los poderes públicos.

No es la oposición insistente y tenaz la que puede lastimar los grandes intereses sociales. No teme tampoco el Gobierno las acerbas censuras, casi siempre injustificadas, de que puedan hacerse eco las publicaciones periódicas, porque los altos móviles que le guían, los nobles sentimientos que le impulsan y los sanos principios que motivan su conducta, le hacen esperar tranquilo el fallo del país, que siempre es justo con los que inspiran sus propósitos en las exigencias de los tiempos y fundan sus actos en lo que imperiosamente reclama la pública opinión.

Debe V.S. estar prevenido principalmente contra las noticias falsas, contra las insidiosas observaciones sobre hechos supuestos, y contra la circulación de absurdos rumores hábilmente explotados por los que no tienen reparo en adoptar toda clase de medios para hacer la propaganda de ideas y doctrinas que, si no tienen hoy por fortuna eco en el país,

pervierten el sentido de las masas y crean en las inteligencias poco cultivadas imposibles aspiraciones.

El Gobierno, que está dispuesto a combatir con igual fuerza la anarquía que la reacción, y que no puede tolerar tomen fuerza y adquieran vigor las aspiraciones políticas que entrañan un atentado a la Soberanía Nacional, o han puesto en peligro en época no remota los altos intereses de la patria desea la libre discusión y la amplia polémica cuando la buena fe las inspira y no se pone la prensa al servicio de los conspiradores contra la paz pública y la seguridad del Estado, la represión de los abusos para que los enemigos del orden no encuentren apoyo directo ni indirecto en manifestaciones claramente subversivas o hipócritamente disfrazadas.

Por esto le encarezco la rigurosa aplicación del decreto de 22 de Diciembre último y de la circular de 15 de Enero que ofrecen a los Gobernadores eficaces medios de corregir los abusos de la prensa, escudando así los altos intereses sociales que, en representación del Gobierno, están bajo la protección de V.S.

## ANEXO N°6

### **Orden Circular de 13 de julio de 1874: “Declarando vigentes el de 22 de diciembre último y las Órdenes emanadas del Poder Ejecutivo sobre ejercicio de la libertad de imprenta”.**

*Colección legislativa de España, Tomo CXIII, pp. 77 y ss.*

Señor Presidente: Sólo cediendo al imperio de las circunstancias ha consentido el Gobierno en poner trabas al ejercicio de la libertad de imprenta, que considera como condición de vida de las sociedades modernas. Arde la guerra civil sostenida contenías empeño por los partidarios del absolutismo: no están aún calmadas las pasiones demagógicas que pusieron en peligro no ha mucho la existencia misma de nuestra gloriosa nacionalidad; y ante la urgencia de pacificar el país y consolidar el orden no han vacilado ni el Ministro que suscribe ni sus inmediatos antecesores en dictar medidas excepcionales encaminadas a evitar que la prensa se convierta en cátedra pública de rebelión o en instrumento de los que despedazan el seno de la patria. Por eso, al propio tiempo que se ha dejado a los periódicos libertad cumplida para examinar y censurar los actos de los Ministros, y para defender ante la opinión pública las máximas más conducentes a la común felicidad, se les ha prohibido dar noticias de que pudiera aprovecharse el enemigo, o capaces de infundir inmotivada alarma; calificar a los que mandan las tropas de manera que se amengüe la grande autoridad moral que han menester para el feliz desempeño de su cargo; perjudicar al crédito público, excitar a la desobediencia, atribuir al poder supremo otras intenciones en que la han puesto, primero el sistemático falseamiento del régimen representativo, y después las turbaciones promovidas por los que bastardearon el noble fin de la revolución de Septiembre.

No ha llegado el día tan anhelado por el Gobierno de que basten para resguardar los intereses sociales las leyes ordinarias; es necesario mantener aún en vigor las disposiciones preventivas que autorizan las penas pecuniarias, la recogida, las advertencias, la suspensión y hasta la supresión definitiva de los periódicos que no respeten las exigencias de la extraordinaria situación en que España se encuentra; pero ya que no sea posible suavizar el régimen a que está sometida la prensa, conviene aplicarlo equitativamente y con criterio uniforme para que no agrave su rigor la desigualdad en la calificación de los escritos. El Ministro que suscribe está altamente satisfecho de la discreción e imparcialidad con que los Gobernadores ejercen la vigilancia sobre los periódicos y de la fidelidad con que cumplen las órdenes superiores; pero es irremediable el que en ocasiones unos juzguen punible lo que otros inocente, y el que a causa de esta diferencia de apreciación se prohíba y castigue en una provincia lo que en otra circula sin dificultad; de suerte que la prensa sea más o menos severamente tratada, según el carácter del que tiene a su cargo precaver y corregir sus abusos.

El modo de evitar este inconveniente es reservar al Gobierno el derecho de imponer las penas más graves, lo cual puede hacerse sin peligro dejando a las Autoridades de las provincias la facultad de prohibir la circulación de los escritos cuya publicidad crean peligrosa y opuesta a las órdenes superiores, y la de imponer multas cuando se falte a las disposiciones vigentes, aunque no proceda, por innecesaria, la recogida del impreso. Así, sin alterar el fondo de las prescripciones a que por las necesidades de la situación está sometida la imprenta, se mejora el procedimiento para aplicarlas, de manera que haya desigualdades que, aun no siendo muchas ni graves, son denunciadas a la opinión como irritantes injusticias. Al inaugurar este nuevo sistema, el Gobierno quiere, seguro

de ser intérprete de los nobles sentimientos de V. E., dar claro testimonio de su rectitud, dejando sin efecto las advertencias impuestas hasta ahora; en la confianza de que los periódicos de generosidad a sostener sus opiniones con toda medida, y a respetar escrupulosamente las órdenes a que tienen obligación de arreglar su conducta.

Madrid 12 de Julio de 1874. = El Ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta.

### DECRETO

En atención a las razones expuestas por el Ministro de la Gobernación de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Artículo 1º. Se declaran en su fuerza y vigor el decreto de 22 de Diciembre último y las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo relativas al ejercicio de la libertad de imprenta.

Artículo 2º. Corresponde al Ministro de la Gobernación imponer advertencias y decretar la suspensión o supresión de los periódicos.

Artículo 3º. Los Gobernadores podrán imponer multas de 250 a 2.000 pesetas a los autores o editores de escritos en que se contravenga a las disposiciones de que se hace mérito en el artículo anterior, pero cuya circulación no ofrezca inconveniente.

Artículo 4º. Los Gobernadores podrán recoger los periódicos y demás escritos en que se contravenga a las disposiciones vigentes en materia de imprenta, remitiendo por el primer correo dos ejemplares al Ministerio de la Gobernación por si además procediere la aplicación de alguno de los extremos establecidos en el artículo 2º.



Artículo 5º. Quedan sin efecto las advertencias impuestas a los periódicos hasta la publicación del presente decreto.

## ANEXO N°7

### **Decreto de 29 de enero de 1875: “Regularizando el ejercicio de la libertad de imprenta”.**

*Gaceta de Madrid*, 30 de enero de 1875. *Colección legislativa de España*. Tomo CXIV, pp. 140 y ss.

El Ministro-Regencia, obligado por las condiciones en que ha recibido el poder, hallándose por una parte sin ley alguna en observancia que regule su ejercicio, y atento, por otra, a cumplir el manifiesto dado por S. M. el Rey en 1º del pasado Diciembre, reservando la resolución de todas las cuestiones políticas para el día en que puedan someterse a la Representación Nacional reunida en las Cortes, tiene que suplir provisionalmente la falta de disposiciones legales, dictando reglas que satisfagan las exigencias creadas por el estado excepcional que la Nación atraviesa, sin separarse de los principios que constituyen la esencia del régimen monárquico-constitucional que el Gobierno sirve y defiende.

No puede éste, por lo tanto, dejar de fijar su atención en las condiciones a que encuentra sometida la prensa periódica, único medio, en el estado actual de las cosas, de conocer los deseos y aspiraciones de la opinión pública, con cuyo apoyo quiere contar el Gobierno, y a cuya crítica justa e ilustrada no pretende en manera alguna sustraer sus actos.

En su sincero deseo de que la prensa halle todas las garantías que son necesarias a su independencia y dignidad para cumplir su nobilísima misión en los pueblos regidos por instituciones libres, el Gobierno se cree en el deber de abandonar el sistema observado en tan vital asunto por sus predecesores.

Desde el instante en que dos guerras civiles en la Península amenazaron consumir la total ruina del país, la gravedad y la inminencia del mal hicieron comprender a los que más habían ensalzado la absoluta libertad de imprenta que ésta podía comprometer, si no se la ponía freno, los más altos intereses y aún la seguridad del Estado. Y por una saludable, aunque exagerada reacción, todos los Gobiernos sometieron a la prensa a un régimen que excedía a los más restrictivos en la dureza de sus resultados, porque si bien no existían leyes que marcasen límites a su acción, ésta los encontraba en el incierto y vario arbitrario de las Autoridades, y no tardaba la pena, arbitraria también, en hacer sentir a la prensa, con grave perjuicio de las empresas, que no era ilimitada, sino muy estrecha la esfera de su acción. Tales son los precedentes que el Ministerio de Regencia encuentra seguidos y sancionados por el consentimiento unánime de todos los partidos políticos que han ejercido el poder de bastante tiempo a esta parte.

El establecimiento de reglas fijas y conocidas para el ejercicio de todos los derechos es más conforme con el espíritu liberal de las instituciones modernas, y más ajustado a sanas doctrinas de justicia que la arbitrariedad, sin límites por sola norma de conducta.

El Gobierno, conforme con sus antecesores en que es necesario restringir el círculo de acción de la prensa periódica mientras duran las actuales extraordinarias circunstancias, viene a favorecerla, sin embargo, determinado de una manera clara y precisa la órbita en que puede moverse con independencia.

De este modo la prensa sabrá lo que no le es permitido discutir; quedarán excluidas de su alcance las cuestiones que por todos se juzgaron de examen peligroso, con más aquellas que la índole de las nuevas instituciones y el ejemplo de todos los países regidos constitucionalmente no consienten que sean sometidas a discusión. Así hallarán



término de una vez las cuestiones que diariamente surgen con la prensa en la aplicación de cada pena por transgresiones imposibles de calificar, dada la previa censura, y no siendo anticipadamente conocidas las reglas o condiciones que deben limitar el ejercicio de su derecho; cuestiones en que pierden a un tiempo su prestigio el Gobierno y la prensa.

Por estas razones, el Rey, y en su nombre el Ministerio-Regencia, ha venido a decretar lo siguiente:

1º. Se permite la discusión doctrinal de todas las disposiciones administrativas, jurídicas y políticas, sin exceptuar las de Hacienda.

2º. Se prohíbe de un modo terminante y absoluto atacar directa o indirectamente, ni por medio de alegorías, metáforas o dibujos al sistema monárquico-constitucional, así como toda alusión a los actos, a las opiniones o a la inviolable persona del Rey ni a los de cualquier otro individuo de la familia Real.

3º. Se prohíbe también proclamar y sostener ninguna otra forma de Gobierno que la monárquico-constitucional no planteada por el Ministerio-Regencia que haya de ser resuelta por las Cortes del Reino.

4º. Se prohíbe toda discusión, alusión y noticia que pueda producir la discordia o antagonismo entre los distintos Cuerpos del Ejército y Armada, y cuanto tienda a quebrantar o poner en duda en lo más mínimo la obediencia absoluta y el respeto que

todo militar, cualquiera que sea su graduación y clase, debe al Rey y a su Gobierno responsable.

5°. Se prohíbe toda noticia de guerra que pueda favorecer las operaciones de los enemigos, o descubrir las que no hayan de ejecutar y no hubiesen ejecutado aún las tropas del Ejército.

6°. El periódico que falte a cualquiera de las disposiciones contenidas en los anteriores preceptos, sufrirá una suspensión cuyo plazo mínimo será de quince días. El periódico que haya sufrido tres suspensiones será definitivamente suprimido.

7°. Serán castigados con suspensión, que no pasará de ocho días:

Los insultos a las personas o cosas religiosas.

Los hechos a los Soberanos reinantes o a los poderes constituidos en otras naciones, así como a sus Representantes acreditados en esta Corte.

Las injurias a personas constituidas en Autoridad.

8°. Todo periódico está obligado a presentar, dos horas antes de su publicación, cuatro ejemplares al Gobierno civil de la provincia. La trasgresión de esta regla será castigada con ocho días de suspensión.

9°. Toda suspensión que se imponga a un periódico o impreso producirá la recogida de la tirada en el momento en que aquella se acuerde.



10º Por ahora queda prohibida la publicación de todo periódico nuevo sin obtener la previa licencia del Ministerio de la Gobernación, a la cual debe preceder informe favorable del Gobernador de la provincia.

11º. Mientras dure la observancia de las presentes disposiciones habrá en el Gobierno civil de cada provincia una oficina para revisar los periódicos y proponer al Gobierno las resoluciones que precedan respecto de ellos.

Madrid 22 de Enero de 1875.=El Presidente del Ministerio de Regencia, Antonio Cánovas del Castillo. = El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo.

## ANEXO N°8

**Real Decreto de 18 de mayo de 1875: “Autorizando a la prensa para plantear y discutir las cuestiones constitucionales y declarando vigentes las anteriores disposiciones sobre reuniones, asociaciones e imprenta, en cuanto no se opongan a la ejecución del presente Decreto”.**

*Gaceta de Madrid*, 19 de mayo de 1875. *Colección legislativa de España*, Tomo CXIV, pp. 791 y ss.

Señor: Estimulado por las generosas aspiraciones que V.M. hizo públicas en su manifiesto de 1 de Diciembre, muy grato hubiese sido a su primer Gobierno responsable que la feliz exaltación de V.M. al Trono de España hubiera sido inmediatamente seguida del planteamiento del sistema parlamentario y el ejercicio de la libertad. Pero las mismas causas que hicieron tan deseada y espontánea la proclamación de V.M. eran por de pronto invencible obstáculo a sus nobles propósitos.

El abuso de todos los derechos no consentía el libre ejercicio de ninguno. Holladas y suprimidas estaban a la sazón las garantías constitucionales. Las consecuencias acumuladas de los errores y atentados que se habían cometido, produciendo uno de los periodos más angustiosos de nuestra historia, caían sobre la Patria, y ya juzgaba impaciente que era tiempo de imponer silencio al absurdo y freno a las pasiones, y de hacer, en fin, que el interés egoísta de las parcialidades cediese el puesto a la conveniencia pública.

Si dictó medidas de represión en su circular sobre reuniones y asociaciones, bien claro demostró al aplicarlas que el Gobierno, en sus funciones de tal, desconoce el nombre de amigos y adversarios. La igualdad con que todos fueron a tratados debió convencerlos de que era el deber inflexible y no la conveniencia de un partido quien tales

resoluciones dictaba. Atento a la dignidad de la prensa, la sustrajo al vario criterio de las Autoridades, y trazando reglas fijas a su conducta, le ha creado toda la independencia que es compatible con el estado de la cosa pública. Basta leer las prescripciones que limitan la esfera de su acción, para comprender las altas razones que las han impuesto. Hasta en aquellas mismas disposiciones que, relativas a la Instrucción pública y al Matrimonio civil, reclamaba la necesidad de corregir abusos y reparar agravios, el Gobierno de V.M. ha sentado principios tan importantes que hacen evidente cuan libre está su conducta de resistencias temerarias y miedos pueriles, y hasta que punto comprenden todos los individuos que no en vano pasan por una Nación los años y los sucesos, y que la misión de los partidos conservadores consiste principalmente en quitar su crudeza a las reformas lícitas, facilitar la solución de los tiempos y defender a los contemporáneos de las rutas alternativas a que estarían expuestos si en el campo político ejercieran solos su influencia los fanáticos admiradores de los muertos y los ciegos apasionados por el bienestar de los que aún no han nacido.

Significada su tendencia, aguardaba el Gobierno que mejorasen algún tanto las circunstancias para avanzar en el camino de la libertad.

En efecto, Señor, todas las naciones de Europa, aun aquellas que son más lentas en sus procedimientos diplomáticos, han saludado con marcada benevolencia el advenimiento de V.M. y han estrechado sus relaciones con España. Y la gran República de América se ha expresado en términos tan afectuosos, que permiten esperar una cordial y duradera inteligencia, favorable a ambas naciones y muy especialmente a la pacificación de la infortunada Isla de Cuba.

Decidido el Gobierno a hacer justicia e la Iglesia, hoy se felicita sinceramente del restablecimiento de nuestras relaciones con la Santa Sede. La presencia en Madrid del Nuncio de Su Santidad es un fausto acontecimiento que llevará la calma a las conciencias y un nuevo desengaño a los que, poseídos de egoístas y rencorosas pasiones, intentan hacer inseparables la religión y el despotismo.

Libre y socorrida Pamplona con la gloriosa intervención de V.M.; poseída y sólidamente fortificada la línea de Arga; nutridas las filas del Ejército y aumentados en considerable número sus batallones; restablecido el principio monárquico y hereditario: desagraviado el sentimiento religioso con la concordia entablada con la Santa Sede, la causa de los rebeldes queda a los ojos del mundo de tal manera destituida de razón y de fuerza, que si persisten en su obstinación, más parecerá que pelean deseosos del exterminio de la Patria que inducidos de la esperanza de la victoria.

Acontecimientos tan graves han comenzado a producir sus naturales efectos. Frecuentes síntomas de descomposición se advierten ya entre los carlistas. No todos, que al fin son españoles, fundan su gloria en la destrucción del suelo en que han nacido. El más ilustre de sus antiguos caudillos, obedeciendo la voz del patriotismo, ha puesto su valerosa espada al servicio del Trono constitucional. Muchos le han imitado, y es de presumir que tan loable ejemplo economice lágrimas y sangre. El Gobierno, sin embargo, funda la seguridad de su triunfo en la constancia y bizarría del Ejército, próximo a entrar en nueva y acaso decisiva campaña.

Las vivas simpatías que en todas las clases sociales despierta la persona de V.M. presagian una feliz y constante inteligencia entre el pueblo y el Rey, único remedio a

tantos infortunios. Todos los partidos legales han manifestado su respeto y acatamiento al Trono constitucional. Y si algunas de estas adhesiones hoy sólo nacen del patriotismo, los que hemos tenido la alta honra de conocer de cerca de V.M., esperamos confiados que mañana nacerán también de entrañable afecto; que no es posible que en pechos generosos den otro fruto el amor que V.M. profesa a la libertad y a la justicia y los levantados designios que inspiran su conducta.

Estos Favorables sucesos contribuyen en gran manera a disipar las tinieblas del porvenir; aumentarán sin duda la posible mejoría que ya ha experimentado nuestro crédito, y consienten, sin nota de temeridad, apresurar el anhelado instante de convocar las Cortes del Reino.

Parecería, sin embargo, que el Gobierno intentaba obtener por sorpresa la resolución de todas las cuestiones, si pasase sin ningún género de preparación desde la dictadura a los comicios.

Abierta queda, previa la venia de V.M., el período preparatorio de las elecciones.

Libre será la prensa para plantear y discutir todos los problemas políticos cuya decisión ha de remitirse a las futuras Cortes, y libres los partidos legales para granjearse el apoyo de la opinión y acordar su conducta en públicas reuniones.

No tendrán estos derechos otra limitación que la impone forzosamente el restablecimiento de la Monarquía constitucional.

Inflexible será el Gobierno en su defensa. Harto sabemos y aun lloramos el resultado de todos los fanatismos. Ya no cabe la ofuscación ni es lícito el engaño. No hay nadie tan ciego a la luz de la experiencia que no conozca que sólo el orden, sólidamente establecido, puede garantizar el desarrollo del derecho. Fuera de la base de la Monarquía constitucional, la libertad conduce en nuestro suelo a todos los desastrosos efectos de la anarquía; pero no hay en cambio la desgracia, por grande y espantosa que sea, que pueda obligar al pueblo español a guarecerse bajo la bandera del despotismo.

La guerra que aún sostenemos, las ruinas y oprobios que hemos sufrido: la desmembración de que nos hemos visto amenazados y la misma prontitud con que V.M. halló franco el camino, cerrado siempre al pretendiente, para ascender al Trono de sus antepasados, dan testimonio de estas dos verdades, únicas que han resultado evidentes en medio de la confusión y trastorno de los últimos años.

Surge espontáneo y triunfante de tan arduas pruebas el sistema parlamentario, como el único capaz de remediar los males presentes y de asegurar el orden, sin paralizar la actividad ni oponer un dique insuperable a las justas aspiraciones del país. Providencialmente en período tan crítico de nuestra historia, para hacer injustificable la desconfianza y odioso el recelo, representa este principio V.M., que, apartado de nuestras desdichas, no ha intervenido en ellas de otro modo que con el ardiente deseo de remediarlas.

Restablecer en su vigor el sistema representativo; crear una legalidad que, inspirada y respetada por todos, cierre para siempre el disolvente periodo de las interinidades; tal es la aspiración suprema del Gobierno de V.M.



No fueran dignos los Ministros que suscriben de la confianza que los honra V.M., si, recordando sus diversos antecedentes, los convirtiesen en obstáculos y entorpecimiento de tan urgentes medidas. Unidos y fundidos en el mismo propósito aparecen a los ojos de su país: pequeño sacrificio, si se tiene en cuenta las circunstancias que lo han reclamado.

Igual efecto producirán, sin duda, en todos los amantes del bien público y el Trono constitucional.

Convalecida apenas de la pasada anarquía y presa actualmente de dos guerras civiles, la Patria empobrecida y desangrada muestra sus heridas a sus hijos. Acudamos todos a su remedio, que ningún sacrificio parecerá grande si se toma por medida la extensión de sus desventuras.

#### REAL DECRETO

Artículo 1º. Queda autorizada la prensa para plantear y discutir las cuestiones constitucionales.

Artículo 2º. Las Autoridades concederán su permiso a los partidos legales que lo soliciten para celebrar reuniones públicas.

Artículo 3º. Quedan vigentes las anteriores disposiciones sobre reuniones, asociaciones e imprenta, en cuanto no se opongan a la ejecución del presente decreto.

## ANEXO N°9

**Real Decreto de 31 de diciembre de 1875: “Dictando reglas para reprimir los abusos que en el ejercicio de la libertad de imprenta cometan los periódicos, y creando Tribunales especiales para la aplicación de las penas en que aquellos puedan incurrir”.**

*Gaceta de Madrid*, 1 de enero de 1876. *Colección legislativa de España*, Tomo CXVI, pp. 999 y ss.

Señor: Entre los derechos políticos reconocidos a los ciudadanos en los países constitucionales, descuella para su importancia la libertad de imprenta, fuente perenne de ilustración, garantía de intereses legítimos, freno y correctivo de abusos, noble palenque de las inteligencias y aun de las ambiciones lícitas, y auxiliar indispensable de la tribuna parlamentaria.

Mas si de tan preciada libertad se abusa; si la prensa, singularmente la periódica, se pone al servicio de intereses bastardos, de aviesas pasiones, de causas funestas y criminales, la historia política contemporánea enseña con terrible elocuencia los males que puede acarrear a las Naciones.

Por eso en todas partes se ha regulado por la Ley el ejercicio del derecho de escribir, ya bajo un sistema puramente represivo, más o menos garantido con ciertas precauciones, ya admitiendo la prevención para casos determinados, a fin de impedir que en un momento dado se ponga en peligro la tranquilidad pública, se favorezca una insurrección armada o se ataque el principio fundamental del Gobierno.

Preciso es reconocer que, después de numerosas leyes y reformas dentro y fuera de España, difícilísimo problema de la imprenta no ha tenido solución satisfactoria, que

armonice los respetables fueros de la libertad con los no menos respetables y sagrados del orden, de la seguridad pública y privada.

Abandonar a la ley penal común y al juicio criminal ordinario la represión de todos los abusos que por la imprenta pueden cometerse, es un sistema que a primera vista seduce por su sencillez, pero que no resiste a un examen detenido; pues si hay algunos que, como las injurias, calumnias y amenazas a particulares, las provocaciones al crimen y contados excesos, susceptibles de apreciación material, constituyen delitos y faltas comunes, y otros que, cual las ofensas comprendidas en el art. 162 del Código penal, son verdaderos atentados, los demás salen de esta esfera, y sin dejar ciertamente de presentar los caracteres necesarios para hacerlos merecedores de corrección, ni se amoldan bien a las doctrinas y definiciones del Código penal, ni se prestan a la aplicación de la crítica ordinaria en los juicios, ni a sus trámites y dilaciones, ni admiten tampoco la penalidad común, a no traspasar evidentemente los límites de la razón y la injusticia.

Bien patente se ofreció esta verdad en 1873, cuando los más ardientes partidarios de aquel sistema, se vieron obligados a reemplazar las prescripciones del Código con las penas nuevas de amonestación o advertencia, multa a la empresa y suspensión, que obedecen a la doctrina opuesta, y precisados a sustituir a la jurisdicción de los Tribunales ejercida con toda la solemnidad de las formas procesales, la autoridad de los Gobernadores civiles procediendo administrativa y sumarísimamente, porque no encontraron otro medio de defender a la sociedad y al Gobierno en circunstancias graves de los rudos y diarios ataques de una prensa desbordada.

El Ministerio de Regencia, que ejerció el poder en nombre de V.M. desde su universal proclamación hasta el feliz instante en que ocupó el Trono de sus mayores, sacó por el decreto de 29 de Enero, la prensa periódica del dominio del libérrimo arbitrio administrativo, enumerando y precisando o suprimidos los periódicos, y graduando racionalmente estas penas con relación a aquellos.

Al proponer hoy el Gobierno a V.M. un paso más en el camino de la libertad, mantiene sin embargo con profunda convicción la misma clase de penalidad para la prensa periódica, completándola con la adición de dos o tres casos en que también ha de aplicarse en debido complemento del sistema adoptado, no solo porque a ello le obligan los altísimos deberes que sobre él pesan por la muy honrosa confianza de V.M., atendidas las circunstancias que todavía atraviesa el país, en medio de dos guerras civiles, y no bien calmadas aun las pasiones, que se desencadenaron en los pasados días de anarquía, sino también porque considera preferible aquella penalidad a las anteriormente ensayadas.

Nuestras leyes o decretos del periodo constitucional fluctuaron entre las penas corporales y las pecuniarias, habiendo ofrecido aquellas el triste cuadro de los *editores responsables*, hombres desgraciados, que por precio vivían (nuevo género de esclavitud) bajo el peso de una serie interminable de condenas, por delitos que no habían cometido ni podido cometer y éstas el poco edificante ejemplo de una guerra entablada entre el dinero al servicio de las empresas periodísticas privilegiadas y el Gobierno de la Nación, bastardeándose la opinión pública, no recayendo tampoco las penas sobre los autores de los escritos condenados, y burlándose al fin la Ley con la fácil devolución de las multas. ¿No es más justo que la represión de las

extralimitaciones cometidas por una entidad anónima, como lo es el periódico, recaigan sobre esta misma entidad afectándole por medio de la suspensión o destruyéndole, si a tanto diere motivo con la reincidencia en los delitos más graves por la supresión después de dos o tres suspensiones?

Pero, al abrirse el período electoral con la solemne convocatoria de las Cortes, el Gobierno desea garantizar a los partidos legales el noble palenque de la imprenta, para que en él combatan en lucha pacífica de opiniones, doctrinas y aspiraciones patrióticas, ilustrando a los comicios; y al efecto tiene el honor de proponer a V.M. en el adjunto proyecto de decreto, la sustitución del libre arbitrio de la Autoridad gubernativa, para la aplicación de las penas de suspensión y supresión, por el criterio jurídico, sereno e imparcial de Tribunales colegiados, que, en virtud de denuncia de los Fiscales de imprenta, administren cumplida justicia a los periódicos en todas las capitales de distrito judicial.

La índole de las cuestiones internacionales, especialmente en el estado actual de España y de Europa, exige que sobre este punto, y solo sobre él, continúe la prensa sometida a la Autoridad del Gobierno, único modo de que éste cumpla sus altos y delicados deberes en tales materias, evitando que durante el curso de una negociación diplomática, revelaciones o apreciaciones indiscretas puedan comprometer el interés, el derecho o la dignidad del país. El Gobierno, responsable de todos sus actos ante las Cortes, dará en ellas cuenta, en el momento que se considere oportuno, como es de universal costumbre respecto a los asuntos exteriores, del uso que haya hecho de sus facultades.

Exige la especialidad de la materia en que los Tribunales de imprenta han de ejercer su importante ministerio que, al menos por ahora, se elijan para su formación los tres Magistrados que por sus antecedentes y estudios parezcan más competentes, entre los que componen la respectiva Audiencia, todos dignos, rectos e ilustrados.

El exceso considerable de trabajo que probablemente ha de pesar sobre el Tribunal de imprenta de Madrid, reclama una remuneración especial para sus individuos, la cual no puede ser extensiva a los de otras Audiencias por la razón contraria a la que en este capital la justifica.

Por idéntico motivo se hace indispensable el nombramiento de un Fiscal especial de imprenta en Madrid, mientras que en las restantes capitales de distrito judicial basta que se designe, para ejercer este cargo, uno de los funcionarios del Ministerio público adscritos a aquellos Tribunales superiores.

Claro es que, así como los Magistrados que en cada Audiencia han de formar el Tribunal de imprenta deben de ser designados por el Ministerio de Gracia y Justicia, al cual competen la organización y gobierno de todos los del Reino, con arreglo a las leyes, al de la Gobernación corresponde nombre o designar los Fiscales, como encargado de velar por los intereses públicos, cuya representación y defensa se les encomienda.

Así organizados los Tribunales de imprenta, sus procedimientos contendrán todas las garantías que la prensa puede apetecer, y que el Gobierno de V.M. desea darle de un modo serio y positivo. No habiendo necesidad de identificar la persona del autor del

hecho que se persigue, pues que sólo se trata de castigar al periódico, representado en juicio por su Director, las diligencias previas al juicio oral se simplifican considerablemente, reduciéndose al secuestro del número que es objeto de la denuncia, en conformidad con la misma Ley ordinaria de Enjuiciamiento criminal, y a la citación y emplazamiento del Director. En dicho juicio pueden los periódicos tener legítima representación y defensa, al igual del Ministerio público; y si el fallo les fuere desfavorable, les queda expedito el recurso de casación para ante el Tribunal Supremo.

Tal es la importante innovación que el Gobierno cree conveniente hacer en el régimen actual de la prensa. Los espíritus menos imparciales reconocerán que es un progreso en la senda de la libertad, que confirma su sincera y constante deseo de restablecer, secundando los altos designios de V.M., que las circunstancias generales del país lo van haciendo posible, como también de que a las próximas elecciones presida un alto espíritu de imparcialidad, facilitando a todas las opiniones legítimas los medios de hacer sentir su influencia sobre el cuerpo electoral, para que las próximas Cortes, llamadas a afianzar el Gobierno representativo sobre el cimiento del Trono augusto de V.M., sean expresión fiel y la verdadera de la voluntad de la Nación.

El Gobierno, al proponer a V.M. la aprobación del adjunto proyecto de decreto, no pretende establecer el régimen definitivo de la prensa periódica, y si únicamente proveer de un modo provisional y transitorio, a la necesidad del período político que comienza con el llamamiento de las Cortes. A estas con V.M. corresponde revisar después la obra actual del Gobierno, y dar la solución permanente que más convenga en tan delicada e importante materia.

## REAL DECRETO

Artículo 1º. Serán reprimidos por los medios que se establecen en el presente decretos los abusos que en el ejercicio de la libertad de imprenta cometan los periódicos y estén comprendidos en los párrafos siguientes:

1º Hacer alusiones ofensivas o irrespetuosas, ya sea directa, ya indirectamente, a los actos, o a las opiniones de la inviolable persona del Rey, o proferir expresiones depresivas para cualquiera otro individuo de la Real familia.

2º Atacar directa o indirectamente el sistema monárquico constitucional.

3º Injuriar a alguno de los Cuerpos Colegisladores o a sus Comisiones, o a cualquier Senador o Diputado en particular, por las opiniones manifestadas o por los votos emitidos en el Senado o en el Congreso, o amenazarlos para coartar el libre ejercicio de las atribuciones que les competen como Representantes de la Nación.

4º Dar noticias o promover discusiones que puedan producir discordia o antagonismo entre los distintos Cuerpos o Institutos del Ejército y la Armada, o entre sus Generales, Jefes, Oficiales o individuos de tropa, o en cualquier forma y por cualquier medio inducir al quebrantamiento de la disciplina militar.

5º Publicar noticias de guerra que puedan favorecer las operaciones del enemigo, o descubrir las que hayan de ejecutar las fuerzas del Ejército o la Armada.

6º Publicar noticias falsas de las que pueda resultar algún peligro para el orden público, o daño a los intereses o al crédito del Estado.

7º Provocar a la desobediencia de las leyes o de las Autoridades constituidas, aunque la provocación no haya sido seguida del acto criminal aconsejado, o hacer la apología de acciones calificadas de delitos o faltas por las leyes.

8º Inferir insultos a personas o cosas religiosas.



9º Ofender a los Soberanos reinantes, o a los poderes constituidos en otras naciones, así como a sus Representantes acreditados en esta Corte, siempre que este delito esté penado en la Nación respectiva.

10º Injuriar a personas constituidas en Autoridad.

Art 2º. Entiéndase por periódico, para los efectos de este decreto, toda publicación que salga a la luz en períodos ya determinados, ya inciertos, ya con el mismo título, ya con diverso, con tal que no exceda de 10 pliegos de impresión del tamaño del papel sellado.

Art 3º Por ahora continuara prohibida la publicación de todo periódico nuevo sin previa Real licencia, a la cual habrá de preceder informe favorable del Gobernador de la provincia donde haya de publicarse. Al solicitar dicha licencia, se designará la persona que haya de encargarse de la dirección que no tengan hecha esta designación lo verificarán dentro de los tres días siguientes a aquel en que se reciba en la población donde salgan a luz el número de la *Gaceta de Madrid* en que se publique este decreto.

Art 4º. Al periódico que incurra en alguno de los cinco primeros casos previstos en el art. 1º se le suspenderá por un plazo que no baje los veinte días ni exceda de dos meses; si reincidiere en el mismo abuso o hubiere sufrido ya dos condenas por actos comprendidos en dichos cinco casos, la suspensión será de uno a tres meses; y en caso de segunda reincidencia en el propio abuso, o de haber sufrido tres condenaciones por los comprendidos en el mismo grupo, será suprimido. Los abusos previstos en los cinco últimos párrafos del mismo artículo serán castigados con la pena de suspensión, por término de siete a veintiún días, y por doble tiempo la reincidencia en el mismo caso o el incurrir por tercera vez en abusos expresados en este segundo grupo.

Art 5º. Las penas señaladas en el artículo anterior serán aplicadas por un Tribunal compuesto por tres Magistrados de la Audiencia en cuyo territorio se publique el periódico, designados por el Ministerio de Gracia y Justicia. Los Magistrados de la Audiencia de Madrid que formen el Tribunal de imprenta, tendrán sobre su sueldo la gratificación anual de 2.500 pesetas.

Art 6º. Habrá en la Audiencia de Madrid un Fiscal especial de imprenta con los auxiliares necesarios para el desempeño de este servicio, nombrados uno y otros por el Ministerio de Gobernación; en las demás Audiencias desempeñará este cargo el Teniente Fiscal o un Abogado Fiscal designado por el mismo Ministerio. El Fiscal de imprenta de Madrid tendrá igual sueldo y categoría que el Teniente Fiscal de la misma Audiencia.

Art 7º. Si el periódico sale a luz en Madrid, se presentará en el momento de la publicación de cada número un ejemplar en la Fiscalía de imprenta, otro en la Presidencia del Consejo de Ministros, otro en el Ministerio de la Gobernación y otro en el Gobierno de la provincia; en las otras poblaciones donde hay Audiencia se presentará un ejemplar en la Fiscalía de imprenta y otro en el Gobierno de la provincia; en las demás capitales uno solo en el Gobierno civil, y en los restantes pueblos en la primera Alcaldía. Todos los ejemplares referidos deberán estar firmados por el director del periódico, a quien se dará recibo de la presentación. El periódico que dejare de presentar alguno de los ejemplares de que queda hecho mérito, incurrirá en la pena de suspensión de ocho a quince días, aplicable por el Tribunal de imprenta en virtud de denuncia fiscal, y sin otra prueba que la exhibición del número publicado y la falta de la Autoridad.

Art 8º. El Fiscal de imprenta ordenará por sí, o en virtud de mandato del Gobierno, y llevará a efecto el secuestro de la edición del número en que aparezca haberse cometido alguno de los abusos comprendidos en el art.1º; y esta medida se ejecutará, en cuanto a los ejemplares expedidos para otras poblaciones, por órdenes escritas o telegráficas a las respectivas Autoridades.

Art 9º. En el término de veinticuatro horas después de verificado el secuestro, presentará el Fiscal la denuncia al Tribunal de imprenta, el cual señalará desde luego día para la vista, que no podrá ser anterior al tercero ni posterior al sexto a contar desde la presentación de la denuncia. En la misma providencia ordenará la citación, emplazamiento y notificación del señalamiento al director del periódico, en el domicilio que este hubiese designado, conforme al art. 3º, cuya diligencia se verificará con entrega de copia de la denuncia, y por cédula en el caso de no ser habido el director en dicho domicilio.

Art 10º. El emplazado podrá comparecer por sí o por medio de Procurador con poder bastante, y asistido o no de Letrado, según su voluntad.

Art 11º. El Tribunal de imprenta reunirá en el día señalado para celebrar vista; este acto será público, a no ser que el Tribunal decida lo contrario por exigirlo así la decencia.

Art 12º. En el acto de la vista dará cuenta el Secretario de Sala o Relator de las actuaciones practicadas, acusará el Fiscal y defenderá el periódico un Letrado en ejercicio del respectivo Colegio, o de fuera, con tal que se halle habilitado en la forma

prescrita por las disposiciones vigentes. La vista se verificará aunque no asista el defensor del periódico.

Art 13°. Terminada la vista, el Tribunal dictará el fallo, que se publicará en la audiencia inmediata; si fuese condenatorio, se impondrán las costas al periódico; si absolutorio, se declararán de oficio.

Art 14°. Formará sentencia el voto de la mayoría; si sobre la aplicación de la pena u otro punto en que quepa diversidad de pareceres no hubiere mayoría, se estará al voto más favorable al periódico denunciado.

Art 15°. Cuando el proceso resultare que se ha cometido alguno de los delitos no comprendidos en este decreto y si en el Código penal vigente, el Tribunal de imprenta mandará pasar el oportuno tanto de culpa al competente Juez de primera instancia, para su persecución y castigo conforme a las leyes comunes.

Art 16°. Si el periódico fuese condenado, se inutilizará la edición secuestrada; si absuelto, se devolverá al director.

Art 17°. Contra el fallo del Tribunal de imprenta, no se dará otro recurso que el de casación por quebrantamiento de forma en la sustanciación del proceso, o por infracción de este decreto en la aplicación de la pena: podrán utilizar este recurso tanto el Fiscal como el director del periódico.

Art 18º. El recurso de casación se interpondrá, en el término improrrogable de tres días, ante el Presidente del Tribunal sentenciador para ante la Sala segunda del Tribunal Supremo; al deducirlo el director del periódico, acreditará haber consignado en la Caja general de Depósitos o en una de sus sucursales la cantidad de 1000 pesetas.

Art 19º. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Presidente del Tribunal de imprenta remitirá los autos al Supremo, citando y emplazando a las partes para que comparezcan en el término de ocho días, si el proceso se hubiese instruido en la Península; de doce si en las Islas Baleares, y de un mes si en las Islas Canarias.

Art 20º. El Tribunal Supremo comunicará los autos a las partes por su orden, para instrucción por término de tres días cada uno.

Art 21º. Instruidas las partes, señalará día para la vista, que se verificará en la forma prescrita en los artículos 11 y 12; y terminado este acto, se dictará la sentencia declarando haber o no lugar al recurso; la sentencia declarando haber o no lugar al recurso; la sentencia se publicará en la audiencia inmediata.

Art 22º. Si se estimase el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Tribunal Supremo determinará al propio tiempo el estado a que han de reponerse los autos. Si se casase la sentencia por infracción de este decreto en la aplicación de la pena, se impondrá en el fallo de casación la que se procedente.

Art 23º. La declaración de no haber lugar al recurso de casación, lleva consigo la condena en las costas al recurrente y la pérdida del depósito. Si el recurso que se

desestime hubiere sido interpuesto por el Fiscal, se satisfarán las costas con cargo al fondo que tiene este objeto especial.

Art 24°. La publicación de las defensas pronunciadas en los juicios de imprenta, se considerará como un número del periódico denunciado, y estará sujeta, por tanto, a las prescripciones de este decreto.

Art 25°. En las poblaciones donde no haya Audiencia, podrán el Gobernador y el Alcalde, en su caso, proceder al secuestro de los números en que a su juicio se haya cometido alguno de los abusos previstos en el art. 1º; pero deberán dar cuenta por el primer correo al Fiscal de imprenta del territorio, remitiéndole el ejemplar autorizado para que pueda denunciarlo. En estos casos, el término para formalizar la denuncia comenzará a correr desde que el Fiscal reciba el ejemplar del número secuestrado, y el del emplazamiento se prolongará un día por cada 50 kilómetros de distancia que medien entre el lugar donde se publique el periódico y la residencia del Tribunal de imprenta.

Art 26°. Las gratificaciones de los Magistrados de la Audiencia de Madrid que compongan el Tribunal de imprenta, los sueldos del Fiscal y sus auxiliares, se satisfarán con cargo al presupuesto del Ministerio de la Gobernación.

Art 27°. En las cuestiones de recusación, competencia y demás incidentes y actuaciones sobre que no contiene disposición especial el presente decreto, se estará a lo prescrito en las leyes comunes de procedimientos.

Art 28°. Teniendo en cuenta la importancia de las relaciones internacionales, el Gobierno queda, por ahora, facultado para que, previa advertencia especial sobre la inconveniencia de tratar determinadas cuestiones de esa clase, pueda suspender por primera y segunda vez y suprimir la tercera, en los términos del art. 4º de este decreto, los periódicos que continúen escribiendo sobre tales asuntos desentendiéndose de la advertencia.

Art 29°. Quedan derogadas las disposiciones relativas al ejercicio de la libertad de imprenta en cuanto se oponga a lo ordenador en el presente decreto, del cual se dará cuenta a las Cortes en la próxima legislatura.

## ANEXO N°10

**Real Orden de 6 de febrero de 1876: “Dictando algunas disposiciones relativas a las faltas que pueden cometerse por medio de los periódicos y estableciendo además reglas de simple policía sobre la publicación de folletos, carteles y hojas sueltas”.**

*Gaceta de Madrid*, 7 de febrero de 1876. *Colección legislativa de España*, Tomo CXVI, pp. 126 y ss.

El Real decreto de 31 de Diciembre último establece las penas y el procedimiento a que en la persecución de los delitos de imprenta deben atenerse los Tribunales especiales creados exclusivamente para entender en ellos; pero es preciso aún dictar algunas disposiciones relativas a las faltas que puedan cometerse por medio de los periódicos, y establecer además reglas de simple policía, en todo tiempo indispensables, con que completar el sistema. No puede negarse que los periódicos ofrecen garantías de responsabilidad y moralidad que no suelen ofrecer jamás los folletos, carteles y hojas sueltas, y es evidente que representan también intereses materiales y políticos mucho más respetables, por lo cual todas nuestras leyes constitucionales los han excluido de previa censura. Ninguna legislación en cambio ha considerado aquellos otros impresos de igual condición que los periódicos, ni les ha aplicado idénticos procedimientos.

Lejos de esto, la publicación de los folletos, carteles y hojas sueltas ha estado sometida siempre, aunque con más o menos rigor, a reglas de policía, de todo punto necesarias tratándose de impresos sin garantía propia, sin ningún carácter de responsabilidad, que no pueden servir a fines permanentes y graves del orden político, quedando por lo común sujetos a la previa autorización de las Autoridades gubernativas, las cuales, naturalmente, dejan correr todo documento de esa especie que se refiere a la industria, la



agricultura, el comercio, las artes y las ciencias, impidiendo solo las manifestaciones inmorales o subversivas que se han podido por este medio realizar o intentar.

No otra cosa es lo que ahora establece y formaliza, garantizándolo con la sanción penal necesaria para su exacto cumplimiento. Sin ella, la condición de los periódicos destinados por su naturaleza a propagar las ideas políticas y discutir libremente los actos de los Ministros responsables, sería mucho menos favorable que la de cualquier papel impreso falto de garantías de toda especie. También reclaman imperiosamente las reglas de buen gobierno y de policía urbana que se regularice, sujetándolos a previa autorización, el repartimiento y venta de toda clase de hojas sueltas, y aún de los periódicos, en las vías públicas y en los establecimientos públicos; garantía de moralidad y orden mucho tiempo hace establecida en la vecina nación, y muy recientemente confirmada bajo el Gobierno republicano que hoy la rige.

Notorios son los abusos ocasionados por la facilidad que se ha sólido impartir en tiempos anteriores el repartimiento de impresos por las calles y establecimientos públicos, propagando por este medio, escritos contrarios a la moral, la religión y las buenas costumbres, o ideas esencialmente hostiles al orden social. Por esa razón, lo propio los Gobiernos republicanos que los más de los Gobiernos monárquicos de Europa han tenido la necesidad de dictar disposiciones de policía que corten semejantes atentados; y para lograrlo se hace indispensable o que ningún impreso se venda sobre la vía pública y en lugares públicos sin previa autorización, como acontece en Francia, o que a ninguna persona le sea lícito repartir de ese modo impresos sin ciertas garantías personales o expresa autorización también de Autoridad gubernativa.

Por último, los reglamentos de policía suelen tener limitada la facultad de vender a voces por las calles las mercancías; y mayor razón hay para limitarlos también por lo que hace a los impresos, otorgándose únicamente dicha facultad respecto de aquellos que por sus títulos y condiciones no sean ofensivos a la moral ni produzcan alarma pública. Así y todo, se hará más en este punto de lo que suele consentirse en las demás naciones civilizadas, donde a nadie se concede el derecho de perturbar, bajo ningún pretexto, el sosiego público.

Teniendo presentes estas consideraciones, S.M. el Rey (Q.D.G), de acuerdo con su Consejo de Ministros, se ha servido resolver lo siguiente:

Artículo 1º. Las faltas definidas y penadas en el capítulo 1 del título 1º, libro 3 del Código Penal vigente, que expresamente trata de las que se cometen por medio de la imprenta, serán penadas con arreglo al mismo Código por los Gobernadores de provincia o por los Subgobernadores y Alcaldes de los puntos en que no residan aquellos funcionarios.

Art 2º. Se considerarán comprendidos en el caso 4 del artículo 584 del referido Código, los impresos, periódicos o no, que falten al debido respeto a la cosa juzgada, impugnando o desautorizando cualquier fallo concreto de los Tribunales de justicia. Esta disposición no se opone a la discusión abstracta, razonada y científica, de la doctrina legal contenida en los fundamentos de las sentencias judiciales.

Art 3º. Se prohíbe la publicación de todo impreso que no sea libro o periódico, sin previa autorización de la Autoridad superior gubernativa de la localidad de que se trate.

Para ser reputado libro, necesitará el impreso tener 200 o más páginas en un solo volumen.

Art 4º. De toda trasgresión a esta regla general serán responsables los impresores. Las imprentas en que sin permiso escrito de la Autoridad se impriman folletos, carteles u hojas sueltas que hayan de tener publicidad, serán cerradas por espacio de dos meses cuando el impreso no sea clandestino, y de seis si lo fuere.

Art 5º. Nadie podrá vender por las calles y plazas, en las estaciones de los ferrocarriles, ni en los establecimientos públicos, impresos de ninguna especie sin licencia de las Autoridades gubernativas. Los que contravengan de algún modo a este precepto serán castigados con la pena de arresto de uno a diez días y multa de 5 a 50 pesetas, que señala el caso 2º del art.586 del Código penal.

Art 6º. Los repartidores de los periódicos que sirven las suscripciones de los mismos por las casas, deberán llevar siempre consigo un documento firmado por los Directores, en que se haga constar que están autorizados para la repartición. Estos documentos se expedirán cada semana, y no servirán para la siguiente. Los que contravengan de cualquier modo a este precepto, serán castigados con multa de 5 a 25 pesetas y reprensión, con arreglo al art. 589 del Código penal.

Art 7º. Serán igualmente castigados con la multa que señala el caso 4º del art. 589 del Código los que vendan a voces en lugares públicos o sobre la vía pública impresos cuya venta no esté permitida especialmente, así como los que de cualquier modo alteren el título del impreso bajo el cual esté autorizada la venta.

Art 8º. Los insolventes quedarán sujetos a la responsabilidad personal subsidiaria que establece el art. 50 del Código penal.

Art 9º. Habrá en los Gobiernos de provincia o en los Subgobiernos y Alcaldías un registro donde consten con toda exactitud las licencias concedidas para repartir impresos, y el nombre, profesión y domicilio de las personas, cualquier edad y sexo, a quien se concedan. A los menores, irresponsables según el Código penal, no se les concederá semejante permiso sino a solicitud de persona mayor de edad, que quedará en tal caso responsable de las trasgresiones que aquellos cometan.

Toda trasgresión dará derecho para retirar temporal o definitivamente las licencias.

Art 10º. Los Gobernadores de provincia o los Subgobernadores y Alcaldes de los pueblos donde no residan aquellos funcionarios, quedan exclusivamente encargados de la ejecución de estas disposiciones.

## ANEXO N°11

### Constitución de 30 de junio de 1876

Página Web del [Congreso de los Diputados](#). Área: [Historia y Normas](#). Sección: [Constituciones Españolas 1812 - 1978](#): *Constitución de 1876*.

#### TITULO PRIMERO

#### DE LOS ESPAÑOLES Y SUS DERECHOS

Art. 13º. Todo español tiene derecho:

De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa.

Art. 17º. Las garantías expresadas en los artículos 4º, 5º, 6º y 9º, y los párrafos primero, segundo y tercero del 13, no podrán suspenderse en toda la Monarquía, ni en parte de ella, sino temporalmente y por medio de una ley, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en circunstancias extraordinarias. Sólo no estando reunidas las Cortes y siendo el caso grave y de notoria urgencia, podrá el Gobierno, bajo su responsabilidad, acordar la suspensión de garantías a que se refiere el párrafo anterior, sometiendo su acuerdo a la aprobación de aquellas lo más pronto posible.

Pero en ningún caso se suspenderán más garantías que las expresas en el primer párrafo de este artículo. Tampoco los jefes militares o civiles podrán establecer otra penalidad que la prescrita previamente por la ley.

## ANEXO N°12

### **Ley de Imprenta de 7 de enero de 1879**

*Gaceta de Madrid*, 8 de enero de 1879. *Colección legislativa de España*, Tomo CXXII, pp. 21 y ss.

#### TÍTULO I

##### *De los impresos y sus clases*

Artículo 1º. Es impreso para los efectos de esta ley, la manifestación del pensamiento con palabras fijadas sobre papel, tela o cualquier otra materia, por medio de letras de imprenta, litografía, fotografía, o por otro procedimiento de los empleados hasta el día, o que en adelante se emplearen.

Art 2º. Los impresos se dividen en libros, folletos, hojas sueltas, carteles y periódicos.

Se entiende por libro todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un solo volumen doscientas o más páginas.

Se entiende por folleto todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un solo volumen más de ocho páginas y menos de doscientas.

Es una hoja suelta todo impreso que, sin ser periódico, no exceda de ocho páginas.

Es cartel todo impreso destinado a fijarse en los parajes públicos.

Se entiende por periódico toda serie de impresos que salgan a la luz una o más veces al día, o por intervalos de tiempos regulares o irregulares que no excedan de treinta días, con título constante.

Art 3º. Todo impreso que no lleve pié de imprenta, o lo lleve supuesto, será considerado como clandestino y sus autores, directores, editores, impresores, quedarán sujetos a la responsabilidad que señala el art. 203 del Código penal.

## TÍTULO II

### *De los periódicos*

Art 4º. No podrá publicarse periódico político alguno sin que su fundador acuda previamente a la Autoridad gubernativa de la provincia si ha de ver la luz pública en la capital, o al Alcalde si en algún otro punto, exponiendo el título que ha de llevar, el establecimiento tipográfico en que haya de imprimirse y el nombre del fundador, propietario o de la Sociedad legalmente constituida que lo haya de fundar, y en este caso el nombre del gerente.

El fundador propietario, o el gerente en su caso, que se proponga publicar un periódico, ha de ser ciudadano español, mayor de edad, llevar dos años de vecindad por lo menos en un punto que el periódico se publique, pagar 250 pesetas de contribución territorial, o con dos años de antelación 500 pesetas de subsidio industrial, y estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Nadie podrá intentar ni realizar la publicación de más de un periódico político diario.

Art 5º. Para acreditar las circunstancias a que se refiere el artículo anterior con los documentos oportunos, se fija el plazo de cuarenta días desde que se solicite la publicación del periódico.

La Autoridad, examinando los documentos presentados resolverá en el plazo de otros veinte días si se han acreditado o no aquellas condiciones. En el primer caso, podrá publicarse el periódico desde luego; en el segundo, no podrá llevarse a cabo la publicación sin subsanar los defectos que en la documentación se observen.

Art 6º. De la negativa de la Autoridad podrá apelarse en el término de cinco días ante la Audiencia del territorio, la cual fallará en el de veinte días, y este fallo será ejecutorio.

Art 7º. Si trascurridos los cuarenta días que señala el art.5º no acreditara el propietario las circunstancias que exige el art. 4º, se entenderá que renuncia a la publicación del periódico.

Si cumplidos los sesenta días desde aquel en que se hizo la solicitud, la Autoridad nada hubiere resuelto, se entenderá justificada la aptitud del fundador propietario del periódico, y éste podrá publicarse.

Art 8º. Dos horas antes de repartirse un periódico tendrá obligación el fundador propietario, o el que debidamente autorizado haga sus veces, de presentar dos ejemplares en la Fiscalía de imprenta y otro en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de la Gobernación y en el Gobierno de provincia, si se publica en esta Corte.

En las demás poblaciones donde haya Audiencia se presentarán dos ejemplares en la Fiscalía de imprenta y dos en el Gobierno de provincia. En los pueblos restantes se presentarán cuatro ejemplares en la Alcaldía.



Dichos ejemplares serán firmados por el fundador propietario, Director gerente o editor del periódico.

La Fiscalía de imprenta, o la Alcaldía donde aquella no exista, sellará uno de los ejemplares presentados, devolviéndolo al encargado del periódico, para que éste pueda acreditar su presentación.

Art 9º. No podrá transmitirse, cederse ni enajenarse el derecho de la publicación de un periódico sin que el nuevo adquiriente acredite ante la Autoridad, y en la forma prescrita por el art.4º, las condiciones en el mismo exigidas.

En el caso de que falleciese o se incapacitase el fundador propietario o el gerente, su sucesor deberá cumplir los requisitos exigidos en el mismo art.4º, pero sin que por eso se suspenda la publicación del periódico. Si trascurrido un mes no se presentase solicitud ninguna con este fin, o presentada no se acreditasen en los cuarenta días las condiciones exigidas, cesará la publicación del periódico.

Art 10º. El derecho a publicar un periódico se pierde:

Primero. Si su fundador deja transcurrir ocho días sin realizar la publicación desde la fecha en que legalmente pueda hacerlo.

Segundo. Si deja voluntariamente de publicarse más de diez días en el espacio de un mes siendo diario, o dejarse de publicar cinco números cuando no lo sea, después de haber salido a luz.

Tercero. Si no continúa su publicación dentro de los ocho días siguientes a aquel en haya cumplido la pena de suspensión que los Tribunales le hubiesen impuesto.

Art 11º. Todo periódico está obligado a insertar en uno de los tres primeros números después de su entrega, la comunicación que la persona, Tribunal, Corporación o asociación autorizada por la ley que se creyesen ofendidas, o a quienes se hubiesen atribuido hechos falsos o desfigurados en el periódico, le dirigieren con el fin de vindicarse, o de negar, rectificar, aclarar o explicar los hechos.

Esta comunicación deberá insertarse en la primera plana de un periódico, o por lo menos en una plana y columna iguales a las en que se publicó el artículo contestado o rebatido; la inserción será gratuita siempre que no exceda del duplo del artículo; si excediese, deberá pagar el comunicante por el exceso el precio ordinario que tenga establecido el periódico; la comunicación se insertará íntegra y sin intercalación en su texto.

Del contenido de la comunicación responderá el que la suscriba. En caso de ausencia o muerte de la persona agraviada, tendrán igual derecho, y podrán usar de él, su cónyuge, hijos, padres, hermanos y herederos.

Art 12º. Si el Director, fundador, gerente o encargado del periódico se negase a insertar la comunicación a que el artículo anterior se refiere, el interesado podrá acudir al Juez municipal en juicio verbal, con arreglo al art. 1166 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si el fallo ejecutorio fuese favorable al comunicante, la inserción de su comunicado irá encabezada por la sentencia; no se acompañará observación alguna por parte del

periódico; y se hará la inserción en la primera plana de uno de los tres primeros números que se publiquen después de la citación o notificación.

Art 13º. Para la publicación de los periódicos que no sean políticos, bastará que se dé conocimiento al Gobernador en la capital de la provincia y al Alcalde de los demás pueblos.

### TÍTULO III

#### *De los delitos*

Art 14º. Para que haya delito de imprenta se necesita la publicación.

Art 15º. Se entiende realizada la publicación de un impreso:

Primero. Cuando se ha comenzado su repartición.

Segundo. Cuando se ha puesto en venta.

Tercero. Cuando se ha fijado en un paraje público o dejado en local o establecimiento del mismo género.

Cuarto. Cuando se han enviado los impresos al correo.

Art 16º. Constituye delito de imprenta:

Primero. Atacar directamente o ridiculizar los dogmas de la religión del Estado, el culto o los ministros de la misma, o de la moral cristiana.

Segundo. Hacer befa o escarnio de cualquiera otra que tenga prosélitos en España.

Tercero. Ofender, fuera de los casos previstos en el Código penal, la inviolable persona del Rey, aludiendo irrespetuosamente, ya de un modo directo o ya indirecto, a sus actos

y a sus opiniones; propalar máximas y doctrinas que induzcan a suponerle sujeto a responsabilidad, o que en alguna manera nieguen o desconozcan sus derechos, su dignidad y sus prerrogativas; insertar noticias respecto de su persona y dar cuenta de hechos o actos que tengan relación con ella o con la de cualquier miembro de la Real Familia, si al hacerlo pueden racionalmente considerarse publicadas unas y otras en su desprestigio.

Cuarto. Atacar directa o indirectamente la forma de gobierno o las instituciones fundamentales; proclamar máximas o doctrinas contrarias al sistema monárquico constitucional; conspirar directa o indirectamente contra el orden legal, suponiendo imposible su continuación o su ejercicio, y alentando de cualquier modo las esperanzas de los enemigos de la paz pública.

Quinto. Injuriar o ridiculizar a los Cuerpos Colegisladores o a alguna de las Comisiones, o negar y poner en duda la legitimidad de unas elecciones generales para Diputados o Cortes o para Senadores.

Los delitos a que se refieren los tres párrafos anteriores serán perseguidos y castigados, aunque para cometerlos se disfrace la intención con alegorías de personajes o países supuestos, o con recuerdos históricos, o por medio de ficciones, o de cualquier otra manera.

Sexto. Desfigurar maliciosamente las sesiones o los discursos de los Senadores o Diputados en los casos no previstos en el Código penal, ofendiéndoles o denigrándoles por las opiniones o doctrinas que sustenten o por los votos que emitan en el desempeño de sus cargos.

Séptimo. Atribuir a un Senador o Diputado, después de publicado en el *Diario de Sesiones*, palabras o conceptos que no consten en el mismo.

Octavo. Publicar noticias que puedan favorecer las operaciones del enemigo en tiempo de guerra civil o extranjera, o descubrir las que hayan de ejecutar las fuerzas del Ejército y Armada, u otras que promuevan discordia o antagonismo entre sus distintos cuerpos o institutos, o que se dirijan en cualquier forma y por cualquier medio al quebrantamiento de la disciplina militar.

Noveno. Defender o exponer doctrinas contrarias a la organización de la familia y de la propiedad, o que se encaminen a concitar unas clases contra otras, o a concertar coaliciones con el mismo objeto.

Décimo. Publicar noticias falsas de las que puedan resultar alarma para las familias, peligro para el orden público, o daño grave y manifiesto a los intereses y al crédito de Estado, así como insertar documentos oficiales desfigurando su sentido.

Undécimo. Provocar a la desobediencia de las leyes y de las Autoridades constituidas, o hacer apología de acciones calificadas por las leyes de delitos o faltas.

Duodécimo. Ofender o ridiculizar a los Monarcas o Jefes de otros Estados amigos, o a los Poderes constituidos en ellos, así como a los Representantes diplomáticos que tengan acreditados en la Corte de España, siempre que aquella ofensa o disfavor estén penados en la Nación respectiva.

Decimotercero. Atacar la inviolabilidad de la cosa juzgada, o tratar de coartar con amenazas o dictérios la libertad de los Jueces, Magistrados y funcionarios públicos encargados de perseguir y castigar los delitos.

Art 17º. Los periódicos que por medio del grabado o de la litografía incurran en los casos comprendidos en el artículo anterior, cometen delito de imprenta y se hallan sujetos a las prescripciones de la presente ley.

Art 18º. Comete delito de imprenta el periódico que, teniendo conocimiento de haber sido denunciado otro, inserte el artículo o el suelto objeto de denuncia.

Art 19º. Los delitos a que se refieren los títulos 1º y 2º del libro 2º en su secciones 1º, 2ª y 3ª del Código penal no están comprendidos en la presente ley; y si se cometiere alguno de ellos por medio de la imprenta, será juzgado por la jurisdicción ordinaria y castigado con arreglo a dicho Código. En este caso, la pena que el Tribunal ordinario imponga llevará necesariamente consigo, como accesoria, la suspensión del periódico por el término que aquel Tribunal considere conveniente, dentro de los plazos que esta ley señala para las penas en el título siguiente.

Art 20º. Los delitos de injuria y calumnia que se cometan contra los Ministros y demás personas constituidas en Autoridad, con ocasión del examen y crítica de los actos inherentes al cargo que ejerzan, así como los cargos que por otros conceptos se les dirijan, quedarán sujetos a la jurisdicción y procedimiento ordinario, y se aplicarán a ellos las disposiciones que contiene el título. 10 del libro 2º del Código penal, a instancia de parte o procediéndose de oficio. Los insultos que se dirijan a los Ministros y personas constituidas en Autoridad con ocasión de sus funciones, serán reputados delitos de imprenta y quedarán sujetos a la presente ley.

Art 21º. No están comprendidos en las disposiciones de la presente ley los impresos oficiales que emanen de las Autoridades constituidas o de las dependencias del Estado, la *Gaceta de Madrid*, *Diario Oficial de Avisos de Madrid*, mientras esté limitado a la inserción de documentos oficiales y de anuncios, *los Boletines* de los Ministerios, los oficiales de las provincias, los diocesanos de los Prelados del Reino que sólo publiquen

decisiones y documentos eclesiásticos, ni los escritos pastorales. Contra los delitos que se cometieren en los impresos mencionados en este artículo, se procederá con arreglo a lo que determinan las leyes sobre responsabilidad de los funcionarios públicos y las demás vigentes en el Reino, sin perjuicio de la acción penal que corresponda contra los particulares que resulten culpables de dichos delitos, y de la facultad del Gobierno para suspender o suprimir los impresos de que trata este artículo.

Art 22º. Los delitos comprendidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del art. 16 de la presente ley se castigarán suspendiendo la publicación del periódico por un plazo que no bajará de veinte días ni excederá de sesenta en los que vean la luz diariamente, o por el tiempo necesario para publicar desde veinte a sesenta números en los que salgan a luz en otros periodos.

Art 23º. Los delitos a que se refieren los número 8º, 9º, 10º, 11, 12 y 13 del art.16, los artículos 17 y 18, y el párrafo segundo del art.20, se castigarán con la suspensión del periódico por un plazo de quince a treinta días, o de quince a treinta número, según sea diaria o no la publicación.

Art 24º. Para las revistas que no sean exclusivamente políticas y que no publiquen más de dos números por mes, la suspensión será por el tiempo necesario para publicar de cuatro a ocho números si el delito fuera de los mencionados en el artículo 22, y de dos a cuatro números si fuera de los señalados en el art.23.

Art 25°. El periódico que sea castigado tres veces dentro del plazo de dos años con penas de las comprendidas en el artículo 22, será suprimido, y no podrá volver a publicarse.

El que sea castigado seis veces en igual período con penas de las comprendidas en el art. 23, será también suprimido; y si incurriera en condenas de ambas clases, se contarán para los efectos de la supresión cada dos de las segundas como una de las primeras.

Art 26°. En el caso del art.18, el periódico que copie o inserte el artículo o suelto denunciando quedará sujeto a la misma pena que se imponga a éste; pero no será suprimido hasta la tercera vez que sea castigado con penas de las comprendidas en el art. 22, o la sexta de las incluidas en el artículo 23.

## TÍTULO V.

*Del quebrantamiento de condena, y de las penas en que incurren los que la quebrantan.*

Art 27°. Se quebranta la condena impuesta a un periódico:

Primero. Si se publica antes de haberla extinguido.

Segundo. Si se publica no obstante haber sido suprimido.

Tercero. Si otro periódico sirve la suscripción del suspendido.

Cuarto. Si publicándose dos periódicos y aprovechando ambos para la impresión la misma caja o la mayor parte de ella, en caso de ser el uno condenado sirve el otro la suscripción de aquel.



Art 28º. Las penas que corresponden a los casos de quebrantamiento de condena contenidos en el artículo anterior, son los siguientes:

En el primer caso, el secuestro de la tirada y la suspensión por otro plazo igual al de la condena.

En el segundo caso, el secuestro del periódico y la multa al fundador propietario, o al gerente en su caso, en cantidad de 1000 pesetas.

En el tercer caso, la suspensión del periódico que sirva la subscripción del condenado, por un plazo igual al de éste.

En el cuarto caso, además del secuestro de la tirada, sufrirá el periódico una pena igual a la de suspensión o supresión que se haya impuesto a aquel cuya subscripción cubra.

Art 29º. La denuncia por quebrantamiento de condena de formulará por el Fiscal ante el Tribunal de imprenta, y producirá desde luego la suspensión de la publicación del periódico denunciado hasta que el Tribunal falle el juicio.

Art 30º. Las multas en que sea condenado el fundador-propietario del periódico, o en su caso el gerente, por causa de quebrantamiento de condena, se harán efectivas por la vía de apremio, y en su caso de insolvencia tendrá lugar la prisión subsidiaria que establece el art. 50 del Código.

## TÍTULO VI

### *De los Tribunales de Imprenta*

Art 31º. Conocerá de todos los delitos de imprenta un Tribunal compuesto de un Presidente de Sala y dos Magistrados de la Audiencia en cuyo territorio se publique el periódico, nombrados por el Gobierno.

Art 32º. Los Magistrados que compongan el Tribunal de Imprenta de Madrid disfrutarán sobre su sueldo la gratificación anual de 2.500 pesetas. Los que formen el Tribunal de Barcelona tendrán gratificación anual de 2.000 pesetas.

Art 33º. El Presidente y Magistrados podrán ser recusados por las mismas causas que los demás Magistrados de las Audiencias.

Art 34º. El escrito de recusación se presentará al Presidente del Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la denuncia.

Art 35º. En la tramitación de este incidente se estará a lo dispuesto en la legislación común.

## TÍTULO VII

### *De los Fiscales de imprenta*

Art 36º. En Madrid, en Barcelona y en cualquiera otra población donde lo haga necesario el número de periódicos, habrá Fiscales de imprenta nombrados por el Ministro de Gobernación.

Art 37º. Los Fiscales de imprenta de Madrid, Barcelona y demás poblaciones a que se refiere el artículo anterior, serán Letrados, y tendrán la categoría y sueldo de Fiscal de Audiencia de provincia.

Art 38º. El nombramiento de Fiscal de imprenta sólo podrá recaer en funcionario público, activo o cesante, que tenga la categoría expresada en el artículo anterior, o las condiciones necesarias para obtener con arreglo a la Ley provisional sobre organización del Poder judicial, el empleo y la categoría inmediatamente inferior a la señalada para el cargo de Fiscal de imprenta en el mencionado artículo, o haber desempeñado el empleo de Fiscal de imprenta y ejercido la Abogacía diez años.

Art 39º. Uno de los Abogados fiscales de la Audiencia designado por el Ministerio de la Gobernación, de acuerdo con el de Gracia y Justicia, suplirá al Fiscal de imprenta en ausencias y enfermedades. Podrá también nombrarse un Abogado fiscal especial para Madrid.

Los auxiliares que la Fiscalía de imprenta necesite habrán de ser Letrados; y su nombramiento, así como el de los demás empleados subalternos, se hará por el Ministerio de la Gobernación.

Los gastos que por personal y material exija la Fiscalía de imprenta de Madrid, de Barcelona y otros puntos, y la gratificación de los Magistrados a que se refiere el artículo 32, se consignarán en el presupuesto del Ministerio de la gobernación.

Art 40°. En las capitales de provincia comprendidas en el art. 36, donde haya Audiencia, desempeñará el cargo de Fiscal de imprenta el Teniente fiscal o un Abogado fiscal designado por el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el de Gracia y Justicia.

Art 41°. En todos los partidos judiciales desempeñará aquel cargo el Promotor fiscal, y en las capitales donde hubiere más de uno, turnarán.

Art 42°. Todas las acciones por delitos de imprenta serán ejercidas por el Fiscal especial.

Art 43°. Los Fiscales de imprenta tendrán la obligación de dar conocimiento a los Fiscales de sus respectivas Audiencias de los delitos que a su juicio se cometan por medio de los periódicos, y no sean de los comprendidos y penados por esta ley especial. Al efecto acompañarán, con la comunicación que a los Fiscales de Audiencia dirijan, un número del periódico en que el delito se cometa.

## TÍTULO VIII

### *Del Enjuiciamiento*

Art 44°. La acción penal para perseguir ante los Tribunales los delitos de imprenta prescribe a los ocho días de la publicación del impreso.

Art 45°. En el término fijado en el artículo anterior, el Fiscal de imprenta procederá a la denuncia del periódico que haya infringido las disposiciones de la presente ley,

ordenando, si lo juzga oportuno, el secuestro de los ejemplares del número denunciado, y poniéndolo en conocimiento del Gobernador de la provincia para que lo lleve a cabo.

El Fiscal de imprenta de Madrid se dirigirá con este objeto al Ministro de la Gobernación y al Director general de Correos y Telégrafos, que dictarán las disposiciones convenientes para que el secuestro y detención del periódico se verifique.

Art 46º. Inmediatamente que se presente la denuncia ante el Tribunal de imprenta, se pondrá en conocimiento de los directores de los demás periódicos que se publiquen en la localidad para que se abstengan de reproducirlo.

Art 47º. La denuncia fiscal contendrá las circunstancias siguientes:

Primera. Título del periódico.

Segunda. Nombre y domicilio del fundador propietario, o en su caso del gerente.

Tercera. Naturaleza del delito, citando el artículo o suelto que lo constituye, y el artículo de la ley en que se haya comprendido.

Art 48º. Presentada la denuncia en el término legal, el Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, señalará día para la vista, que no podrá verificarse antes del quinto día, ni después del octavo.

En la misma providencia se ordenará la citación y emplazamiento, debiendo hacerse la notificación del señalamiento al fundador propietario del periódico, o en su caso al gerente, con antelación por lo menos de cuarenta y ocho horas al señalado para la vista.

Art 49°. El emplazado podrá comparecer por sí o por medio de Procurador con poder bastante, y asistido o no de Letrado, según su voluntad.

Art 50°. El Tribunal de imprenta se reunirá en el día señalado para celebrar vista; este acto será público, a no ser que el Tribunal decida lo contrario por exigirlo así causas especiales.

Art 51°. En el acto de la vista dará cuenta el Secretario de la Sala o Relator de las actuaciones practicadas; acusará el Fiscal y defenderá el periódico un Letrado en ejercicio del respectivo Colegio, o de fuera, con tal que se halle habilitado en la forma prescrita por las disposiciones vigentes. La vista se verificará aunque no asista el defensor del periódico.

Art 52°. Terminada la vista, el Tribunal dictará el fallo, que se publicará en la audiencia inmediata; si el periódico fuera condenado, se impondrán las costas al periódico; si absuelto, se declararán de oficio.

Art 53°. Formará sentencia el voto de la mayoría; si sobre la aplicación de la pena u otro punto en que quepa diversidad de pareceres no hubiese mayoría, se estará al voto más favorable al periódico denunciado.

Art 54°. Cuando fuesen denunciados varios periódicos por la inserción de un mismo escrito, corresponderá el conocimiento y fallo del asunto al Tribunal de imprenta ante quien primero se hubiese entablado la denuncia.

Los efectos de la sentencia serán iguales para todos los periódicos denunciados.

Art 55°. Cuando el proceso resultase que se ha cometido alguno de los delitos no comprendidos en esta Ley, y sí en el Código penal vigente, el Tribunal de imprenta mandará pasar los autos al Juez de primera instancia para su continuación y para la aplicación de la pena que corresponda conforme a las leyes comunes.

Art 56°. Si el periódico fuese condenado, se inutilizará la edición secuestrada; si absuelto, se devolverá al fundador propietario.

Art 57°. Contra los fallos del Tribunal de imprenta condenando el impreso no habrá recurso alguno.

Procederá, sin embargo, el de casación en los casos siguientes:

Primero. Cuando se funde en la infracción de ley a que se refiere el art. 799 de la de Enjuiciamiento criminal.

Segundo. Cuando se funde en la infracción de ley a que se refiere el art. 804 de la citada Ley de Enjuiciamiento criminal.

Para que pueda resolverse con seguridad sobre las cuestiones a que dé lugar el caso 2º de dicho artículo, así la acusación como la defensa precisará en el acto de la vista los puntos que sean objeto de sus respectivos informes, y el Secretario del Tribunal los consignará fielmente en el acto de la vista.

Cuarto. Cuando se funde en que la sentencia no impone al procesado la pena que corresponde según esta ley al delito.

Art. 58º. El recurso de casación se interpondrá en el término improrrogable de tres días ante el Presidente del Tribunal sentenciador, y para ante la Sala segunda del Tribunal Supremo; al deducirlo, el fundador propietario del periódico acreditará haber consignado en la Caja general de Depósitos o en una de sus sucursales la cantidad de 500 pesetas.

Art 59º. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Presidente del Tribunal de imprenta remitirá los autos al Tribunal Supremo, citando y emplazando a las partes para que comparezcan en el término de ocho días si el proceso se hubiese instruido en la Península, de quince si en las Islas Baleares, y de un mes si en las Islas Canarias.

Art 60º. El Tribunal Supremo comunicará los autos a las partes por su orden para instrucción por término de tres días cada una.

Art 61º. Instruidas las partes, se señalará día para la vista, que no podrá ser anterior al quinto ni posterior al octavo.

Art 62º. La vista se verificará en la forma prescrita en los artículos 50 y 51; y una vez terminada, se dictará sentencia declarando haber o no lugar al recurso; la sentencia se publicará en la audiencia inmediata.

Art 63º. Si se estimase el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Tribunal Supremo determinará al propio tiempo el estado a que han de reponerse los autos. Si se casare la sentencia por infracción de esta ley en la aplicación de la pena, se impondrá en el fallo de casación la que sea precedente.



Art 64°. La declaración de no haber lugar al recurso de casación lleva consigo la condena en las costas al recurrente y la pérdida del depósito. Si el recurso que se desestime hubiese sido interpuesto por el Fiscal, se satisfarán las costas con cargo al fondo que tiene este objeto especial.

Art 65°. Si ocurriese que un periódico fuese denunciado teniendo interpuesto el recurso de casación contra condena anterior que determinase la supresión, siendo desechado el recurso antes del día señalado para la vista de la denuncia, ésta se suspenderá a petición del Fiscal que promoverá el sobreseimiento del Tribunal, y que se expida certificación de las sentencias condenatorias que determinen la supresión del periódico, para que el Ministro de la Gobernación la decrete en forma.

Art 66°. La publicación de las defensas pronunciadas en los juicios de imprenta estará sujeta a las prescripciones de la presente ley.

Art 67°. En las poblaciones en que no haya Audiencia ni Juzgado, el Alcalde remitirá por el primer correo al Fiscal de imprenta del territorio un ejemplar del periódico que a su juicio haya infringido lo dispuesto en la presente ley.

En estos casos, el término para formalizar la denuncia comenzará a correr desde que el Fiscal reciba el número denunciado, y el del emplazamiento se prolongará un día por cada 50 kilómetros de distancia que medien entre el lugar donde se publique el periódico y la residencia del Tribunal de imprenta.

## TÍTULO IX

### *Del libro y del folleto*

Art 68°. La publicación del libro no exigirá otro requisito que el pie de imprenta al que se refiere el art. 3°.

Art 69°. Los delitos que en el libro se cometan quedarán sujetos al procedimiento común y a la sanción que para ellos señale el Código penal.

Art 70°. Los folletos no políticos solo necesitarán para publicarse que se dé conocimiento de su publicación al Gobernador de la provincia en la capital, y al Alcalde en las demás poblaciones.

Art 71°. Los folletos políticos necesitarán además que quién haya de publicarlos justifique ante dichas Autoridades su personalidad como ciudadano español mayor de edad.

Art 72°. Esta justificación deberá hacerse en el plazo de diez días, y la Autoridad resolverá en el de cinco si está o no suficientemente acreditada.

Art 73°. En caso negativo, el que intente publicar el folleto político podrá en el término de cinco días recurrir en alzada del Alcalde ante el Gobernador, el cual resolverá dentro de otros ocho.

La apelación de esta resolución se interpondrá en el plazo de cinco días para ante el Ministro de la Gobernación, el cual resolverá definitivamente dentro de otros ocho días.

Art 74º. Los delitos que puedan cometerse en el folleto político, si son de los comprendidos en el título III de esta ley, serán juzgados por el Tribunal de imprenta, previa denuncia del Fiscal; pero a la pena de suspensión o supresión que establece el título IV se sustituirá una multa de 250 a 1.000 pesetas para los delitos comprendidos en el art.16 y de 100 a 500 pesetas para los comprendidos en el art.18 y en el párrafo segundo del art.20.

Art. 75º. En el caso de insolvencia tendrá lugar la prisión subsidiaria de que hablar el art. 50 del Código penal.

Art 76º. Serán castigados con arreglo a dicho Código, y por la jurisdicción ordinaria, los delitos que se cometan por medio del folleto político y no estén comprendidos en la presente ley.

## TÍTULO X

### *De las hojas sueltas y carteles*

Art 77º. La publicación de hojas sueltas y carteles no podrá hacerse sin previo permiso de la Autoridad.

De la negativa de ésta podrá apelarse en los términos que establece el art. 73.

Art 78º. El suplemento de cualquier periódico que se publique separadamente de él se considerará como hoja suelta.

Art 79º. Son infracciones de policía:

Primero. La publicación de todo impreso, sea cualquiera su clase, antes de haberse llenado los requisitos que para cada una de ellas señala esta ley.

Segundo. La publicación de cualquier periódico político después de haber dejado transcurrir sin publicarse ocho días si es diario, y cinco números si no lo es.

Tercero. La inserción de artículos y noticias políticas en periódicos o folletos que no tengan ese carácter.

Art 80º. La contravención a estas disposiciones se castigará por el Gobernador o por el Alcalde, según la localidad donde el impreso se publique, con el secuestro de la tirada y la multa de 50 a 1.000 pesetas al dueño de la imprenta o del establecimiento tipográfico en que se hubiese hecho la impresión.

En caso de insolvencia del multado, tendrá lugar la prisión subsidiaria que establece el art. 50 del Código penal, sin otra modificación que la de sufrir el insolvente un día de prisión por cada 10 pesetas de multa.

Art 81º. Cometan infracción de policía también los fundadores propietarios o gerentes de un periódico que dejen de enviar dos horas antes de su repartición los ejemplares del mismo que expresa el art.8º.

Art 82°. De igual modo la cometen los fundadores propietarios, o en su caso los gerentes, que condenados en juicio verbal a insertar la sentencia la comunicación a que se refiere el art. 12 dejen de hacerlo.

En este caso, y en el del artículo anterior, incurrirá el fundador propietario o el gerente en la multa de 25 a 500 pesetas, que se le exigirá por las mismas Autoridades que expresa el art. 80, y con la prisión subsidiaria si resultare insolvente.

Art 83°. Nadie podrá vender por las calles y plazas, en las estaciones de los ferrocarriles ni en los establecimientos públicos, impresos de ninguna especie sin licencia de las Autoridades gubernativas. Los que contravengan de algún modo a este precepto, serán castigados con la pena de arresto de uno a diez días, y multa a de 5 a 50 pesetas, que señala el caso 2º del art.586 del Código penal.

Art 84°. Los repartidores de los periódicos que sirvan las subscripciones de los mismos por las casas, deberán llevar siempre consigo un documento firmado por los Directores, en que se haga constar que están autorizados para la repartición. Estos documentos se expedirán cada mes y no servirán para el siguiente. Los que contravengan de cualquier modo a este precepto, serán castigados con multa de 5 a 25 pesetas y reprensión con arreglo al art. 589 del Código penal.

Art 85°. Serán igualmente castigados con la multa que señala el caso 4º del art. 589 del Código penal, los que vendan a voces en lugares públicos, o sobre la vía pública, impresos cuya venta no esté permitida especialmente, así como los que de cualquier modo alteren el título del impreso bajo el cual esté autorizada su venta.

Art 86°. Los insolventes quedarán sujetos a la responsabilidad personal subsidiaria que establece el art. 50 del Código penal.

Art 87°. Habrá en los Gobiernos de provincia o en las Alcaldías un registro donde consten con toda exactitud las licencias conducidas para repartir impresos, y el nombre, profesión y domicilio de las personas, de cualquier edad y sexo, a quienes se concedan. A los menores irresponsables, según el Código penal, no se les concederá semejante permiso sino a solicitud de persona mayor de edad, que quedará en tal caso responsable de las transgresiones que aquellos cometan.

Toda trasgresión dará derecho para retirar temporal o definitivamente las licencias.

Art 88°. La acción de la Autoridad contra las infracciones de policía castigadas en esta ley expira a los ocho días de haber cometido el hecho que la produce sin haberla intentado.

Art 89°. La imposición y exacción de las multas se entienden sin perjuicio del procedimiento que corresponda por los delitos que haya podido cometerse en los impresos que ocasionaron la falta.

## TÍTULO XII

### *De los dibujos, grabados, litografías, etc...*

Art 90°. Ningún dibujo, litografía, fotografía, grabado, estampa, medalla, viñeta, emblemas y cualquier otra producción de la misma índole, ya apareciesen solas, o ya en

el cuerpo de algún impreso, podrán anunciarse, exhibirse, venderse o publicarse sin el permiso previo del Gobernador o del Alcalde donde no residiese el Gobernador.

Este permiso exime de toda responsabilidad a los que hubiesen de incurrir en ella por el contenido de dichos objetos, y no es necesario para los grabados y litografías que forman parte de las publicaciones literarias, científicas o artísticas que no sean diarias.

Art 91º. El anuncio, venta, exhibición o publicación sin el permiso correspondiente de cualquiera de las producciones a que se refiere el artículo anterior, constituye caso de clandestinidad y sujeta los responsables a la jurisdicción ordinaria y a la pena que señala el art. 203 del Código penal.

Art 92º. En cualquier tiempo que aparezca que en alguna de las mencionadas producciones publicadas con el permiso competente se ha cometido cualquiera de los delitos definidos en esta ley, se prohibirá su circulación, y recogerán todos los interesados a reclamar daños y perjuicios contra la Autoridad que haya dado permiso.

Art 93º. Contra las resoluciones del Alcalde podrán recurrir los interesados al Gobernador, y contra las de esta Autoridad al Ministro de Gobernación.

### TÍTULO XIII

#### *De los impresos que se publiquen en el extranjero*

Art 94º. Queda autorizado el Gobierno para prohibir la introducción y circulación en territorio español de cualquier impreso de los que son objeto de esta ley.

Se exceptúan de esta disposición los libros impresos en idioma extranjero, cuya introducción y circulación no podrá prohibirse gubernativamente hasta que se haya incoado contra ellos querella o denuncia criminal; quedando sujetos, como los libros impresos y publicados en España, a la legislación común y a la sanción que para los delitos que en ellos se cometan señale el Código penal; entendiéndose que en los libros impresos en el extranjero se reputarán editores para los efectos del art.14 del Código los que verifiquen su expendición o circulación en territorio español.

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 95º. El Ministro de la Gobernación expedirá los reglamentos relativos a la policía de los ramos de imprenta, librería, anuncio, venta y distribución de los impresos, y el reglamento y las instrucciones convenientes para la ejecución de la presente ley en todas sus partes.

Art 96º. Los periódicos políticos que se publican en la actualidad deberán llenar los requisitos que exige el art. 4º en el plazo de sesenta días. Si no pudieran realizarlo dentro de este plazo por motivos bastante fundados, a juicio del Gobierno, podrá éste conceder nuevos plazos, sin exceder en ningún caso el término de seis meses.

Art 97º. Mientras que las Provincias Vascongadas y Navarra no paguen por cuotas individuales las contribuciones territorial e industrial, el fundador propietario, o gerente en su caso, que se proponga publicar un periódico político ha de ser ciudadano español, mayor de edad, llevar dos años de vecindad por lo menos en el punto en que el





periódico se publique, y acreditar tener un capital de 24.000 pesetas en inmuebles, cultivo o ganadería, o 48.000 en industria, comercio, profesión u oficio.

Art.98º. Quedan derogadas las disposiciones anteriores sobre imprenta que se opongan a la presente ley.

Por tanto: Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

## ANEXO N°13

**Real Decreto de 14 de febrero de 1881: “Alzando a todos los periódicos la pena de suspensión que estén cumpliendo o deban cumplir por sentencia firme, dictada antes de la publicación del presente decreto”.**

*Colección legislativa de España, Tomo CXXVI, pp. 572-573.*

Señor: Nada hay tan incompatible con las libertades públicas, y tan opuesto al ordenado ejercicio de los derechos individuales, como la violación de las leyes por aquellos a quienes especialmente incumbe el cuidado de su observancia.

Cualquiera que sea, por tanto, la opinión del Gobierno sobre alguna de las vigentes, tiene el decidido propósito de cumplirlas todas mientras los procedimientos constitucionales no sean oportunamente derogados.

La de imprenta es sin duda de las que por su espíritu restrictivo, más se oponen al desarrollo de la política que el Gobierno piensa inaugurar, aunque por fortuna la vaguedad de alguno de sus preceptos autoriza benignas interpretaciones, y abre paso a la censura y la contradicción propias del régimen representativo. Resuelto el Gobierno a reprimir con energía todo ataque o falta de respeto a los poderes permanentes e irresponsables y decidido a escucharlos con firme resolución, dejará por lo mismo ancho campo a la exposición de las ideas y entregará sus actos y los de sus subordinados al juicio de la opinión, verdadera garantía de los intereses generales y de las libertades públicas.

Pero su obra sería incompleta y sus propósitos se verían tal vez defraudados si no aconsejase a V.M., cuyos generosos sentimientos está seguro de interpretar, el más

amplio indulto a favor de las publicaciones periódicas de todas clases, condenadas ya por los Tribunales especiales de imprenta, o sometidas a los procedimientos de la jurisdicción ordinaria.

Al hacerlo así, el Gobierno abriga la esperanza de demostrar, contando con el patriotismo de los escritores públicos, que el pueblo español es digno de la libertad de que disfrutaban las naciones más adelantadas.

Fundando en estas consideraciones, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, el que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V.M. el siguiente proyecto de decreto.

#### REAL DECRETO

Artículo 1º. Se alza a todos los periódicos la pena de suspensión que estén cumpliendo o deban cumplir por sentencia firme, dictada antes de la publicación del presente decreto.

Art 2º. No se computarán para los efectos del art. 25 de la Ley de 7 de Enero de 1879 las penas de suspensión impuestas hasta el día.

Art 3º. Los Fiscales especiales de imprenta retirarán las denuncias pendientes antes los Tribunales creados por dicha ley.

Art 4º. Los escritores condenados por los Tribunales ordinarios como reos de delitos cometidos por medio de la imprenta quedan relevados de la pena que se les hubiese impuesto por sentencia firme.

Exceptúense tan sólo aquellos que, con arreglo al artículo 482 del Código penal y 15 de la ley de 18 de Junio de 1870, no pueden ser indultados sino mediando perdón de la parte ofendida.

Art 5º. Se sobreseerán las causas criminales pendientes ante los Tribunales ordinarios por delitos cometidos por medio de la imprenta.

Exceptúense aquellas que se estén instruyendo a querella de la parte ofendida, y las en que se persiguen los delitos de injuria y calumnia contra empleados públicos, cuando el procesado ofrezca probar sus imputaciones.

Art 6º. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no se aplicará a las causas criminales que se sigan o hayan seguido en desagravio de Soberanos y Príncipes de Naciones amigas o aliadas de Agentes diplomáticos de las mismas, o extranjeros con carácter público que según los Tratados disfruten de análoga consideración.

Tampoco se aplicará a las causas pendientes a instancia del Ministerio Público por ofensas hechas a personas constituidas en autoridad, si los ofendidos requeridos al efecto manifestasen el deseo de continuar persiguiendo en su propio nombre, y con arreglo a la ley común, las ofensas que creyeron haber recibido mientras ejercieron funciones públicas.



Art 7º. Los Jueces y Tribunales ante quienes pendan las causas acordarán el sobreseimiento. Los que hubiesen ejecutado la sentencia quedan encargados de la aplicación del indulto.

## ANEXO N°14

### **Código de Enjuiciamiento Criminal de 1882**

*Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento criminal.*

*Ministro de Gracia y Justicia. BOE nº 260, de 17 de Septiembre de 1882. Ref: BOE A 1882-6036.*

#### TITULO V

Del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro  
medio mecánico de publicación

Art. 816. Inmediatamente que se dé principio a un procedimiento por delito cometido por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación, el Juez o Tribunal acordará el secuestro de los ejemplares del impreso o de la estampa donde quiera que se hallaren y del molde de ésta.

Se procederá, así mismo, inmediatamente a averiguar quién haya sido el autor real del escrito o estampa con cuya publicación se hubiese cometido por delito.

Art. 817. Si el escrito o estampa se hubiese publicado en periódico, bien en el texto del mismo bien en la hoja aparte, se tomará declaración para averiguar quién haya sido el autor al Director o redactores de aquél y al Jefe o Regente del establecimiento tipográfico en que se haya hecho la impresión o grabado.

Para ello se reclamará el original de cualquiera de las personas que lo tenga en su poder, la cual, si no lo pusiere a disposición del Juez, manifestará la persona a quien lo haya entregado.

Art. 818. Si el delito se hubiese cometido por medio de la publicación de un escrito o de una estampa suelto, se tomará la declaración expresada en el artículo anterior al Jefe y dependientes del establecimiento en que se haya hecho la impresión o estampación.

Art. 819. Cuando no pudiese averiguarse quién sea el autor real del escrito o estampa, o cuando por hallarse domiciliado en el extranjero o por cualquier otra causa de las especificadas en el Código Penal no pudiese ser perseguido, se dirigirá el procedimiento contra las personas subsidiariamente responsables, por el orden establecido en el artículo respectivo del expresado Código.

Art. 820. No será bastante la confesión de un supuesto autor para que se le tenga como tal y para que no se dirija el procedimiento contra otras personas, de de las circunstancias de aquél o de las del delito resultaren indicios bastantes para creer que el confeso no fue el autor real del escrito o estampa publicados.

Pero una vez dictada sentencia firme en contra de los subsidiariamente responsables, no se podrá abrir nuevo procedimiento contra el responsable principal si llegare a ser conocido.

Art. 821º. Si durante el curso de la causa apareciere alguna persona que, por el orden establecido en el artículo respectivo del Código Penal, debe responder criminalmente del delito antes que el procesado, se sobreseerá las causas respecto a éste, dirigiéndose el procedimiento contra aquélla.

Art. 822º. No se considerarán como instrumentos o efectos del delito más que los ejemplares impresos del escrito o estampa y el molde de ésta.



Art. 823º. Unidos a la causa del impreso, grabado u otro medio mecánico de publicación que haya servido para la comisión del delito, y averiguado el autor o la persona subsidiariamente responsable, se dará por terminado el sumario.



## ANEXO N°15

### **Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883. “Sobre manifestación del pensamiento por medio de la imprenta, litografía, fotografía o por otro procedimiento mecánico”.**

*Gaceta de Madrid*, 30 de julio de 1883, número 211, pp. 189-190. *Boletín de la R.G.L.J.*, Tomo LXXI (1883), pp. 154 y ss.

Artículo 1º. Para el ejercicio del derecho que reconoce a todos los españoles el párrafo segundo del art. 13 de la Constitución de la Monarquía y para los efectos del pensamiento por medio de la imprenta, litografía, fotografía o por otro procedimiento mecánico de los empleados hasta el día, o que en adelante se emplearon para la reproducción de las palabras, signos y figuras sobre papel, tela o cualquiera otra materia.

Artículo 2º. Los impresos se dividen en libros, folletos, hojas sueltas, carteles y periódicos.

Tienen también la consideración de impresos los dibujos, litografías, fotografías, grabados, estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquier otra producción de esta índole, cuando aparecieron solas y no en el cuerpo de otro impreso.

Artículo 3º. Se entiende por libro todo impreso que, sin ser periódicos, reúna en un solo volumen 200 o más páginas.

Se entiende por folleto todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un solo volumen más de ocho páginas y menos de 200.

Es hoja suelta todo impreso que, sin ser periódico, no exceda de ocho páginas.

Es cartel todo impreso destinado a fijarse en los parajes públicos.

Se entiende por periódico toda serie de impresos que salgan a la luz con título constante una o más veces al día o por intervalos de tiempos regulares o irregulares que no excedan de 30. Los suplementos o números extraordinarios serán comprendidos en esta definición para los efectos de la ley.

Artículo 4º. Se entiende publicado un impreso cuando se hayan extraído más de seis ejemplares del mismo del establecimiento en que se haya hecho la tirada.

Los carteles se entenderán publicados desde el momento en que se fija alguno en cualquier paraje público.

Artículo 5º. La publicación del libro no exigirá más requisitos que llevar pie de imprenta.

Artículo 6º. Este mismo requisito se llevará en todo folleto, y además el de depositar en el Gobierno de provincia, o en la Delegación especial gubernativa, o Alcaldía de la población de que ven la luz, tres ejemplares del mismo en el acto de publicación.

Artículo 7º. Los mismos requisitos se llenarán al publicar una hoja suelta o cartel y además presentará el que los publique una declaración escrita y firmada que comprenda de los particulares siguientes:

1º El nombre, apellidos y domicilio del declarante.

2º La afirmación de hallarse éste en el pleno uso de los derechos civiles y políticos.

Los derechos civiles se adquieren plenamente a los 23 años, y los políticos a los 25.

(Arts. 320 del Código civil y Iº de la Ley electoral de 8 de agosto de 1907).

No será necesaria esta declaración para la publicación de las hojas o carteles de anuncios o prospectos exclusivamente comerciales, artísticos o técnicos.

Artículo 8º. La sociedad o particular que pretenda fundar un periódico lo pondrá en conocimiento de la primera Autoridad gubernativa de la localidad en que aquél haya de publicarse cuatro días antes de comenzar su publicación y una declaración escrita y firmada por el fundador que comprenda de los particulares siguientes:

1º El nombre, apellidos y domicilio del declarante.

2º La manifestación de hallarse éste en el pleno uso de los derechos civiles y políticos.

Acompañará además el recibo que acredite hallarse dicho establecimiento al corriente en el pago de la contribución de subsidio o cualquiera otro documento que pruebe hallarse abierto y habilitado para funcionar.

De esta declaración se dará al interesado recibo en el acto.

Artículo 9º. La representación de todo periódico ante las Autoridades y Tribunales corresponde al Director del mismo, y en su defecto, al propietario, sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal que puedan tener otras personas por delitos o faltas cometidos por medio del periódico.

El fundador se considerará propietario mientras no transmita a otro la propiedad.

Cuando una Sociedad legalmente constituida funda un periódico o adquiera su propiedad, tendrá la representación legal para todos los efectos el Gerente que aquella designe, quien gozará los mismos derechos y estará sujeto a iguales responsabilidades civiles y criminales que si fuese propietario único del periódico.

Artículo 10º. Los Directores de los periódicos deberán hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; la suspensión de éstos inhabilitará, mientras subsista, para publicar o dirigir el periódico.

Según Real orden circular de 28 de diciembre de 1888 (Diario de Oficial de Guerra) está prohibido a los militares dirigir periódicos y redactar los políticos.

En los arts. 300, núm. I, y 328, núm. 4º, en relación con el 215, nº1, del Código de Justicia Militar, se prohíbe igualmente a los militares utilizar la imprenta para publicar escritos concernientes a la disciplina, proyectos de ley de carácter militar y actos del Monarca, del Gobierno y de las Autoridades del Ejército. También alcanza esta prohibición a los Alcaldes, según la Real Orden de 30 de septiembre (Ley de reuniones de 15 de junio de 1880).

Artículo 11º. El Director de todo periódico deberá presentar en el acto de su publicación y autorizados con su firma, tres ejemplares de cada número y edición en el Gobierno de provincia, en la Delegación especial gubernativa o en la Alcaldía del pueblo en que se publicase. De los periódicos de Madrid se presentarán además otros tres ejemplares con las mismas formalidades, en el Ministerio de Gobernación: uno de los ejemplares citados será sellado y devuelto a la persona que los presente.

Artículo 12º. Cuando se transmita la propiedad de un periódico, su propietario dará conocimiento a la Autoridad gubernativa, presentando el adquiriente al mismo tiempo una declaración en los términos expresados en el artículo 8º, números 1º y 2º.

También se dará conocimiento a la Autoridad gubernativa cuando se varíe el establecimiento en que el periódico se imprima, manifestando que el nuevo se halla en las condiciones expresadas en el art.8º, y acompañando el documento a que esto se refiere.

Artículo 13º. Cesara en su publicación el periódico cuando por sentencia ejecutoria se prive sí que lo representa del uso de sus derechos civiles y políticos y hayan transcurrido cuatro días desde la notificación de la sentencia sin que un nuevo representante haya llenado los requisitos que establece el art.8º en lo que se refiere a la persona del fundador.

Artículo 14º. Todo periódico está obligado a insertar las aclaraciones o rectificaciones que le sean dirigidas por cualquiera Autoridad, Corporación o particular que se creyesen ofendidos por alguna publicación hecha en el mismo, o a quienes se hubieren atribuido falsos o desfigurados.

El escrito de aclaración o rectificación se insertara en el primer número que se publique cuando proceda de una Autoridad. Y en uno de los tres números siguientes a su entrega si procede de un particular o Corporación, en plana y columna iguales y con el mismo tipo de letra a los en que se publicó el artículo o suelto que lo motive, siendo gratuita la inserción siempre que no exceda del duplo de líneas de éste, pagando el exceso el comunicante al precio ordinario que tenga establecido el periódico.

El comunicado deberá en todo caso circunscribirse al objeto de la aclaración o rectificación.

Arts.: 10, 12, 13, 14, 203, 266, 457, 468, 473, 476, 477, 479, 582, 583 y 584 del Código Penal.

Arts. 6º y 7º de la Ley de explosivos de 10 de julio de 1894.

Art.12 de la Ley de Jurisdicciones de 1906 que autoriza a la Sala segunda del TS, en forma de recurso extraordinario, para suprimir las publicaciones y disolver las Asociaciones en donde se ataque reiteradamente la integridad o unidad de la Patria española.

Artículo 15º. El derecho a que se refiere el artículo anterior podría ejercitarse por los cónyuges, padres, hijos o hermanos de la personas agraviada en caso de ausencia, imposibilidad o autorización: y por los mismos, y además por sus herederos, cuando el agraviado hubiese fallecido.

Artículo 16º. Si el comunicado no se insertase en el plazo que fija el art.14º, podría la Autoridad o particular interesado demandar a juicio verbal, con arreglo a las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil, al representante del periódico.

El juicio versará exclusivamente sobre la obligación de insertar el comunicado. Si la sentencia fuese condenatoria, se impondrán siempre las costas al demandado, y se mandará insertar por cabeza del escrito en uno de los tres primeros números que se publiquen después de la notificación, en este caso, y si el comunicado procediese de una Autoridad, se impondrán siempre las costas al demandado y se mandará insertar por cabeza del escrito en uno de los tres primeros número que se publiquen después de la notificación en este caso, y si el comunicado procediese de una Autoridad, se impondrá, además, al representante del periódico una multa de 300 pesetas.

Artículo 17º. El impresor de todo periódico tendrá derecho a exigir que se le entreguen firmados los originales. De ellos no podrá usarse contra la voluntad de su autor, sino para presentarlos ante los Tribunales cuando éstos los reclamen, o en defensa del impresor que pretenda eximirse de la responsabilidad que pueda afectarle por la publicación.

Artículo 18º. Para los efectos que el Código penal señala serán considerados como clandestinos:

- 1º Todo impreso que no lleve pie de imprenta o lo lleve supuesto.
- 2º Toda hoja suelta, cartel o periódico que se publique sin cumplir los requisitos exigidos respectivamente por los artículos 7º y 8º de esta ley.
- 3º Todo periódico que se publique antes o después respectivamente del plazo de cuatro días que establecen los artículos 8º y 13.
- 4º La hoja suelta, cartel o periódico si resultase falsa en alguno de sus extremos la declaración hecho con arreglo a los artículos 7º y 8º respectivamente.

Art. 203 del Código Penal.

Artículo 19º. Las infracciones a lo prevenido en esta ley, que no constituyan delito con arreglo al Código penal, serán corregidas gubernativamente con las mismas penas que éste señala para las faltas cometidas por medio de la imprenta.

Circulares de 30 de julio y 2 de octubre de 1883, y 27 de julio de 1884.

De la imposición gubernativa de multas podrá apelarse en ambos efectos para ante el Juez de instrucción en término de tercer día, depositando previamente el importe de ellos, sin cuyo requisito no se admitirá la apelación. El Juez resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la multa, siguiendo la transmisión de las alzas en los juicios verbales de faltas, representando a la Autoridad el Fiscal municipal.

Art. 584 del Código Penal.

Estas infracciones o faltas prescribirán en el término de ocho días, a contar desde que se cometieron.

Artículo 20º. La introducción y circulación de dibujos, litografías, fotografías, grabados, estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquiera otra producción de esta índole, y las de folletos, hojas sueltas y periódicos escritos en idioma español e impresos en el extranjero podrá ser prohibida por acuerdo del Consejo de Ministros.

Artículo 21º. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones especiales relativas a la imprenta.

## ANEXO N°16

**Real Orden. Circular de 30 de Julio de 1883 por la que se fijan los criterios que ha de mantener el Ministerio Fiscal para perseguir delitos de imprenta. Que la pena caiga sobre el auténtico culpable.**

*Gaceta de Madrid*, 31 de Julio de 1883, número 212, p.206.

### CIRCULAR

Derogado por la ley del corriente la especial de 7 de Enero de 1879, el derecho común recobra todo su imperio, y los delitos que se cometen por medio de la imprenta, grabado u otro procedimiento análogo, caen bajo la jurisdicción de los Tribunales ordinarios, se persiguen según las reglas y formalidades de la ley en Enjuiciamiento criminal y su sancionan con los castigos previamente establecidos en el Código penal.

Compete, pues, a V.S. el ejercicio de las acciones a que cualquier exceso punible cometido por medio de la imprenta diere igual, en consonancia con lo dispuesto en el art.103 de la ley de Enjuiciamiento criminal, como le corresponde también la inspección de los sumarios dentro de los límites fijados por el art. 306 de la propia ley.

Sobre este último punto conviene no perder de vista, si han de cumplirse los fines de justicia, que el sumario, según los preceptos vigentes, ha de ser rápido, por cuanto los datos de instrucción, como antecedentes indispensables del juicio, presume la ley fundadamente que por su misma sencillez pueden recogerse con facilidad y suma prontitud.



El hecho que se considere punible de manifiesto se ofrece y resulta evidente del escrito, estampa o cualquier otro modo de expresión del pensamiento que dé origen al proceso criminal.

La presunta culpabilidad muy luego aparece o debe aparecer de las primeras e inmediatas diligencias; pues no es de tener que el autor real del escrito, contra el cual ante todo se dirige la ley, procure ampararse de cierta manera de inmunidad por donde terceras personas resulten responsables de actos que en verdad no ejecutaron por cuyo medio si el autor elude la sanción legal, de cierto no escapa a la moral de la pública opinión, que condena sin recurso a cuantos poco firmes en sus convicciones o penetrados quizá de sus errores, no vacilan, cuando las unas o los otros pueden constituir materia penable, en exponer las primeras o en propagar las segundas, fiados de la irresponsabilidad personal que declinan sobre un tercero que voluntaria o inconscientemente se presta a secundarlos en semejante empresa.

El Gobierno de S.M., que estima, reconoce y aplaude la noble actividad de los escritores públicos, confía y asegura que tales ardides no se producirán con frecuencia entre nosotros, como espera igualmente que la natural discreción de todos, la certeza de que el campo para manifestar las opiniones es vastísimo y la libertad del pensamiento apenas limitada, salvo en cuanto se refiere a las instituciones fundamentales, que deben ser por todos respetadas y acatadas, producirán el saludable y ejemplar resultado de que los procesos contra los escritores públicos sean rarísimos.

Más si contra esta fundada esperanza se hiciese menester en algún caso ejercitar la acción penal; si el objetivo de ésta, que es la persecución del verdadero culpable, se

pretendiera distraer por el modo y en la manera antes indicados, no olvide V.S. que el art.890 de la ley de Enjuiciamiento criminal provee de lo conveniente para que el error no se sobreponga a la verdad, para que la realidad no se desvanezca por la ficción.

Como tampoco se ha de omitir que la ley, en beneficio de la prensa práctica, reconoce las medidas de precaución y de garantía a los estrictamente preciso para sus fines propios, es a saber la recogida de los instrumentos o efectos del delito y la parsimonia característica de toda buena justicia en aquellos medios de rigor que no hagan indispensables la evitación del mal del delito, la prueba de su existencia y el reconocimiento del agente que lo cometió.

En resumen, la ley aplicada con la mayor presteza, el más exquisito cuidado y la más activa vigilancia para que los instituciones fundamentales no sean objeto de ataque alguno y la disciplina del Ejército y el orden público se conserven inalterables, son las únicas y especiales instrucciones que el Gobierno de S.M. se considera obligado a dirigir a V.S. En todo lo demás un criterio benigno sin debilidad, recto y desapasionado toda prevención política, de todo sentido de parcialidad, para que la acción pública encomendaba al Ministerio fiscal sea tan sólo la manifestación genuina del espíritu de la ley.

Lo que de Real Orden comunicó a V.S. para su inteligencia y efectos consiguientes.-  
Madrid 30 de Julio de 1883. Romero y Gullón.

## ANEXO N°17

**Circular del fiscal del Tribunal Supremo de 2 de Octubre 1883 a los fiscales de las Audiencias, quienes contribuirán a que se respete la libertad de imprenta, pero persiguiendo sus abusos y lo que pueda constituir delito.**

*Gaceta de Madrid*, 6 de Octubre de 1883, número 279, p.53.

### FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO

#### CIRCULAR

La Ley de 26 de julio del corriente año, que regula el ejercicio del derecho a emitir las ideas por medio de la imprenta, ha reconocido que la libertad del pensamiento, expresado por la palabra escrita, no debe depender de la voluntad de los gobiernos, y que la legislación sobre la prensa necesita (...) a facilitar la máxima eficacia de este derecho.

(...) Inspirándose en el espíritu de la Constitución de 1869, y con el mutuo acuerdo y leal consenso de los elementos que constituyen el Poder legislativo en este país, se ha verificado, bajo la monarquía constitucional de D. Alfonso XII, esa transformación de tanta importancia para la libertad, mediante la cual, el Poder ejecutivo no se mezcla ni conoce en cuanto se relaciona con el castigo de delitos y faltas que pueden cometerse por medio de la imprenta, y se conoce a ésta al amparo del Poder judicial, que es la más firme y sólida garantía de todos los derechos.

Al Ministerio público, llamado a velar por la observancia de las leyes en los asuntos judiciales, y a promover la acción de la justicia en lo que concierne al interés social,

corresponde prestar en primer término su valioso concurso para que el derecho que tiene todo ciudadano español a emitir libremente sus ideas, sea absolutamente respetado, sirviendo de escudo a la legítima manifestación del pensamiento, y persiguiendo, en su caso, los abusos que por medio de la prensa se cometan.

(...) El art. 13 de la Constitución al sancionar el derecho de todo español a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa, no señala restricción alguna en el ejercicio de ese derecho, que, como todos los consignados en la ley fundamental, tiene únicamente límites que su propia naturaleza le impone, subordinándole al respeto a las instituciones que la misma Constitución consagra, y a las naturales exigencias del derecho ajeno.

(...) Cuando no se halle comprendido en las disposiciones del Código penal es permitido al escritor. Pero todo aquello que sea una injuria o amenaza a la sagrada e inviolable persona del Rey, o signifique una provocación expresa a dicho delito, o a un cambio en la forma de Gobierno, o a cualesquiera de los hechos que constituyen la rebelión o sedición, y a los restantes delitos que se determinan en las indicadas disposiciones debe ser inflexiblemente objeto de persecución y castigo.

No de otra suerte se podrá seguir ejercitando el expresado derecho que, respondiendo a una necesidad de personalidad humana y a una exigencia de los pueblos cultos, no os ni debe ser incompatible con el poder social, las instituciones del país y los derechos de los demás.



Las dificultades que en algunos casos puedan ofrecerse para distinguir cuando procede el escritor dentro de la esfera de su derecho y cuando abusa de éste el efecto de ejercer la acción penal, serán vencidas por la ilustración de los funcionarios del Cuerpo fiscal con el estudio del artículo, suelto o noticia de que se trate, y la natural y sencilla aplicación de las prescripciones del Código penal en que pueda hallarse comprendido el caso.

## ANEXO N°18

### **Circular del fiscal del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1884, excitando el celo de los fiscales para que persigan los escritos que provoquen la rebelión.**

*Gaceta de Madrid*, 28 de julio de 1884. Martínez Alcubilla, M., *Boletín jurídico administrativo. Anuario de legislación y jurisprudencia*. Anuario de 1884, Madrid, Administración, 1884, pp. 556-559.

(...) Se ha dudado si el Código penal vigente define y castiga como delitos ciertos actos contra la Constitución y Poderes constitucionales, sólo cuando se ejecutan por alzamiento y con violencia, o si, por el contrario, define y pena también como tales delitos actos de aquella especie o con aquel objeto ejecutados, aunque a su perpetración no hayan concurrido medios de fuerza o la acción no haya traspasado en ellos quizás los límites de una provocación directa a su ejecución.

(...) el Código penal vigente definió en la sección 3º, capítulo I de su título II, bajo la denominación de “Delitos contra la forma de gobierno”, hechos que en el Código que reformaba no tenían esta denominación ni este sentido jurídico o no habían sido objeto de análoga penalidad.

(...) Definió y castigó en primer término, bajo este criterio, los hechos de fuerza ejecutados fuera de las vías legales (art. 181), encaminados directamente a conseguir, entre otros objetos, el de reemplazar el Gobierno monárquico constitucional por un Gobierno absoluto o republicano; y después (art. 185) definió y castigó también como delitos, si bien con pena menos grave, los mismos actos aunque se ejecutaren sin alzarse en armas y en abierta hostilidad contra el Gobierno. Es decir, que los actos o hechos directamente encaminados a reemplazar la forma de gobierno constituyen siempre delito, aunque de distinta importancia y gravedad, según se ejecuten por la fuerza o

fuera de las vías legales (art.181) o sin alzarse en armas y en abierta hostilidad contra el Gobierno (art. 185).

No necesitan interpretación preceptos tan terminantes, ni cabe admitir ni aplicar al caso la regla, ciertísima de fondo, de que en la duda debe estarse por lo favorable al reo; porque esto ha de entenderse de las dudas razonables, pero no de las puramente caprichosas. (...)

Tampoco puede ofrecerla la inteligencia de los artículos relativos al delito de rebelión que contienen preceptos análogos a los del delito contra las formas de Gobierno.

“Son reos de rebelión, dice el art. 243, los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquiera de los objetos” que el mismo determina y enumera; y lo son igualmente, añade el 248, “los que sin alzarse contra el Gobierno, cometieren por astucia o por cualquier otro medio, alguno de los delitos comprendidos en el 243”. Por donde se demuestra evidentemente que así los delitos contra la forma de Gobierno, esto es, contra la organización política en su ser, como los de rebelión, o sean ejecutados contra los poderes constituidos en su ejercicio pueden cometerse, según el Código, lo mismo alzándose en armas, en abierta hostilidad y ejecutando actos de violencia, que sin alzarse y sin abierta hostilidad, por medios de astucia o cualquiera otros que no sean los de fuerza.

Debo llamar igualmente la atención a V.S hacia el contenido del art. 182..., pues además de ofrecer nueva prueba las referidas prescripciones de la definición como delitos de los actos enumerados en el art. 181, aun no ejecutándolos por la fuerza, debe tenerse muy presente la distinción que de los mismos resulta respecto a los hechos en los dos

números del art. 182 definidos, según la cual, si para penar los vivas y gritos contra la formad de Gobierno no se exige la concurrencia de las circunstancias previstas en el número 1º, entre las cuales se advierte la de que el grito provoque aclamaciones de la reunión, bastan, respecto al 2º, el discurso o el escrito la ostentación del lema o de la bandera que provoque directamente a la ejecución de aquellos actos punibles, para que se reputé cometido el delito, y sus autores y demás personas responsables incurran en la sanción de penalidad.



## ANEXO N°19

**Real Orden de 29 de diciembre de 1885 por la que se determina que los gobernadores civiles no tienen competencia para castigar, según el Art. 22 de la Ley Provincial, los delitos cometidos por la imprenta.**

*Gaceta de Madrid*, 30 de Diciembre de 1885, número 364, p.1015.

### CIRCULAR

En vista del recurso de alzada interpuesto por Don Eduardo de la Peña, Director de *La Voz de Guipúzcoa*, contra la providencia de ese Gobierno, imponiéndole la multa de 250 pesetas por faltas a la Autoridad del Gobernador, cometidas en el núm. 195 de dicho periódico, correspondiente al día 15 de Julio último.

Considerando que la sanción que establece la ley Provincial vigente en su art. 22 por faltas a la moral o a la decencia pública y de la obediencia y respeto a la Autoridad del Gobernador, tiene por principal objeto procurar al Representante del Gobierno medios coercitivos de hacerse obedecer en determinadas circunstancias y facilitar su libre acción dentro de la esfera de sus atribuciones propias, así como también reprimir los actos que, sin tener establecida penalidad en el Código o en leyes especiales, afectan de algún modo al concepto de la moral, implicando su falta de corrección inmediata desprestigio o pérdida de fuerza moral para la Autoridad gubernativa.

Y considerando que las faltas y los delitos que se cometen por medio de la imprenta tienen su sanción penal en las leyes ordinarias, y que su conocimiento corresponde por tanto a los Tribunales, como se determina expresamente en la ley de Policía de imprenta de 26 de julio de 1883;

## ANEXO N°20

**Circular del 22 de Septiembre de 1886 del capitán general de Madrid (Pavía), por el que se impone a la prensa fuertes restricciones por la sublevación de Villacampa.**

*El Liberal*, 23 de Septiembre de 1886, p. 1.

El capitán general de Castilla la Nueva y el gobernador civil de Madrid han dirigido a los periódicos de la corte los dos oficios siguientes:

“Capitanía general de Castilla la Nueva.- Dikte usted las órdenes claras y precisas para que el periódico que usted dirige no se ocupe en absoluto de los procedimientos judiciales que están siguiendo para esclarecer los hechos ocurridos en la noche del 19, porque hallándose sub judice las causas que se siguen, está prohibido terminantemente por las leyes ordinarias y excepcionales, dar noticias directas ni indirectas sobre aquellas.

Además evitará usted que en absoluto se publiquen artículos, sueltos ni noticia alguna que se relacionen con la disciplina y orden público, y mucho menos se basen en noticias que no sean oficiales, muchas de aquellas falsas, y que sobre ellas se hagan comentarios de ninguna clase, absteniéndose de copiar artículos y discursos relativos a hechos históricos que tengan conexión con la disciplina y el orden público.

Espero que no se me pondrá en el caso de verme precisado a entregar al periódico a un Consejo de guerra, ni tampoco a suprimirlo si reincidiera.

Dios guarde a usted muchos años”.- Madrid, 22 de septiembre de 1886.- Pavía.



“Gobierno de la provincia de Madrid.- Secretaría.- Negociado de prensa núm.2.- A los efectos del artículo 11 de la ley de 26 de julio de 1883, sobre imprenta, prevengo a usted que mientras dure el estado de guerra de esta capital deberá presentar un ejemplar de su periódico en este Gobierno de provincia y otros dos en la Capitanía general, con las formalidades y en el tiempo y forma prevenidos en el artículo citado.

Dios guarde a usted muchos años”.- Madrid, 22 de septiembre de 1886.- Julián de Zugasti.

## ANEXO N°21

**Circular de 8 de Agosto de 1887 en la que se avisa a los gobernadores civiles para que vigilen los insultos y acciones de desprestigio a la autoridad militar por medio de la imprenta.**

*Gaceta de Madrid*, 10 de Agosto de 1887, número 222, p.419.

### CIRCULAR

Aun cuando este Ministerio ha recomendado diferentes veces a los Gobernadores de provincia la línea de conducta que deben seguir para la represión de ciertos delitos, sucesos últimamente ocurridos me obligan a dirigirme a V.S. para llamar su atención hacia la frecuencia con que en algunas provincias se trata de desprestigiar la Autoridad militar y hacia los síntomas de desorden moral que en otras han señalado los Gobernadores, haciendo notar el lenguaje desenfrenado de cierta parte de la prensa y los fines que al través de él se persiguieron. El primero de estos dos hechos requiere especialísima atención.

V.S. no ignore que ninguna Autoridad militar puede defenderse por medio de la prensa, porque a los militares está terminantemente prohibido el valerse de la prensa, ni siquiera para defenderse de cargos injustos y aun calumniosos, sin previa autorización de sus superiores; de donde resulta que los Jefes, y especialmente los que tienen mandos de fuerzas, están expuestos, sin defensa, a los ataques de todos aquellos que, para llevar a cabo sus intentos, necesitan antes el desprestigio de los que han de mantener la disciplina.

Deber, por tanto, y deber ineludible de la Autoridad civil es acudir con rapidez y energía a la defensa de los militares donde quiera que se cometa el delito, o aun sin cometerlo todavía se las trate de manera que sufran menoscabo su respetabilidad y su decoro. Diversos medios ofrece a V.S. para conseguir este propósito el cargo que le está confiado; pero en último término, y si aquellos no bastan, está la aplicación de la ley por ministerio de los Fiscales, cuya misión no es la de esperar en actitud pasiva que la Autoridad civil venga a reclamar su intervención, sino la de tomar por sí todas las iniciativas necesarias para amparar con las leyes la disciplina del Ejército y los respetos indispensables a sus Jefes para mantenerla incólume. Todo descuido en este punto, toda tibieza en resolver, toda vacilación en aceptar responsabilidades, comprometen la Autoridad y alientan el espíritu de rebelión y sedición, que de cuando en cuando se muestra en nuestro país con caracteres tan repugnantes.

No atienda, pues, V.S., ni a los precedentes, ni a las costumbres, un poco laxas, que en este punto existen en todas las provincias; inspírese solo en el saludable y vigoroso ejemplo de todo país libre, donde el Ejército está fuera y separado de la pasión política, y allí donde vea un ataque, un desprestigio, una manera cualquier de rebajar la Autoridad militar, allí acuda a contenerla, y solicite la intervención de los Tribunales llamados a aplicar la ley, los mismo cuando la disciplina militar está ofendida, que cuando se trata de delitos comunes y ordinarios. Los principios liberales de este Gobierno le imponen, más que a otros, el deber de vigilar por el cumplimiento de las leyes, y de aplicarlas en todo su rigor para la conservación, no sólo del orden material, sino para el respeto de la Autoridad, sin el cual queda en el acto indefenso el orden moral. (...)

## ANEXO N°22

**Circular de 28 de Diciembre 1888 por la que se prohíbe que los militares sean fundadores o directores de periódicos, así como redactores de los periódicos políticos.**

*Diario Oficial del Ministerio de la Guerra*, 28 de Diciembre de 1888, número 285, pp. 883-884.

### CIRCULAR

Excmo. Sr.: - Una exigua parte de la prensa política, que se aplica el dictado de militar, ha impresionado vivamente la opinión pública con artículos y sueltos que atacan, en términos injuriosos y denigrantes, a institutos y cuerpos del Ejército, cual si los autores de tales publicaciones se propusieran, con reprobados fines, crear divisiones y antagonismos entre las clases militares, en los momentos mismos en que el Gobierno se consagra con perseverancia y firmeza a resolver arduos e importantes problemas que interesan a la institución armada.

Esta misma opinión pública atribuye a militares la redacción de esos artículos, que, tendiendo a introducir el descontento y la perturbación en el Ejército, tan hondamente pueden afectar a la disciplina, y aunque en la esfera oficial no se compruebe esa aseveración, basta solo la sospecha para que el Gobierno se considere obligado a consignar, en términos claros y explícitos su inquebrantable y firme propósito de impedir que los militares infrinjan las leyes, y de aplicar ejemplar correctivo al que falte a sus deberes.

Para ser director de periódico es necesario, según el art.10 de la ley de 26 de julio de 1883, hallarse en el pleno uso de los derechos civiles y políticos, y como los individuos

del Ejército están sujetos también a las prescripciones de la Ordenanza, es evidente que no pueden dirigir periódicos, como tampoco fundarlos.

Carecen también de la facultad de ser redactores de los políticos, porque la prohibición de asistir a las reuniones de este carácter, consignada en el artículo 28 de la ley constitutiva del Ejército, y reproducida en sanción penal en el artículo 165 del código del mismo, obedece al propósito de separar a los militares, en bien del Ejército mismo, de las contiendas políticas que podrían llevar y llevarían la perturbación y el desorden a la fuerza armada; y todavía si esta razón poderosa y estos fundamentos legales no bastaran a demostrar la prohibición antedicha, alejarían toda duda las órdenes del Regente del Reino, de 6 de Agosto de 1841, 7 y 25 de Septiembre de 1842 y 21 de Diciembre de 1869, la real orden de 28 de agosto de 1848 y la del Gobierno de la República de 22 de Septiembre de 1873, en todas las cuales se consigna y recuerda tal prohibición que impide a los individuos del Ejército, cualquiera que sea su categoría, entrar en polémicas, por medio de la prensa periódica, sobre asuntos del servicio, o valerse de ella en forma alguna para tratar de los mismos, sin previa autorización de este Ministerios, solicitada por el conducto regular y debido.

Bastarían a justificar el laudable rigor de tan severas prescripciones los elevados propósitos en que se inspiran, si no estuviesen ya de antiguo consignadas en algunos de los preceptos de las Ordenanzas del Ejército, absoluta e íntegramente en vigor, y muy dignos de constante recuerdo por cuantos visten el honroso uniforme militar, puesto que en términos claros y precisos, y por modo elocuente e inspirado, cierra el camino a la crítica y murmuración en materias del servicio, y establecen los principios

fundamentales de la obediencia y el respeto al superior, en cuanto al mismo servicio interesa.

El Gobierno, inspirándose en tan claras y benéficas disposiciones, está firmemente resuelto a evitar que en el Ejército se introduzcan el descontento y las escisiones, por críticas o comentarios que sostengas los que viven al amparo y bajo el imperio de la Ordenanza, pues ante todo y sobre todo, precisa conservar la más severa disciplina en la fuerza armada y la unión indisoluble y bienhechora entre todos los cuerpos e institutos, que por igual merecen respeto y consideración, porque contribuyen por igual a representar digna y honrosamente la unidad y la integridad de la patria.

Para conseguir tan laudable y patriótico propósito, el Rey, y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que con el celo que distingue a V.E., y usando de todos los eficaces medios al alcance de su autoridad, impida que los militares a sus órdenes contravengan a las terminantes prescripciones antes citadas; en la inteligencia, que ha de entenderse tienen el carácter de asuntos del servicio las que se refieran a proyectadas reformas sometidas al estudio del Gobierno, a la deliberación de las Cámaras, o a informe de corporaciones oficiales en virtud de órdenes emanadas de este Ministerio.



## ANEXO N°23

### **Código de Justicia Militar de 27 de Septiembre de 1890.**

*Código de justicia militar de 27 de septiembre de 1890 y legislación complementaria del mismo*, Madrid,

Talleres del depósito de guerra, 1906.

#### TRATADO PRIMERO

Organización y atribuciones de los Tribunales militares

#### TÍTULO PRIMERO

#### DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE GUERRA

#### CAPÍTULO II

*De la competencia de la jurisdicción de Guerra en materia criminal.*

Art.7. Por razón del delito, la jurisdicción de guerra conoce las causas que contra cualquier persona se instruyan por:

7º Los de atentado y desacato a las autoridades militares, y los de injuria y calumnia a éstas y a las corporaciones o colectividades del Ejército, cualquiera que sea el medio para cometer el delito, siempre que éste se refiera al ejercicio del destino o mando militar, tienda a menoscabar su prestigio o a relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados”.

#### CAPITULO V

*Casos en que los militares quedan sujetos a otras jurisdicciones*

Art.13. Los militares y demás personas enumeradas en los arts. 5º y 6º y 10 serán juzgados por los Tribunales ordinarios en causas por delitos de:

7º Por los delitos de imprenta cuando no constituyan delito militar.



## TÍTULO VI

### DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y DEL EJÉRCITO

#### CAPÍTULO III

##### *Insulto a centinelas, salvaguardias y fuerza armada*

Art.258. El que de palabra, por escrito o en otra forma equivalente, injurie u ofenda clara o encubiertamente al Ejército o a las instituciones, armas o clases o cuerpos determinados del mismo, incurrirá en la pena de prisión correccional.

## TÍTULO VII

### DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR

#### CAPITULO IX

##### *Delitos contra el honor militar*

Art.300. Incurrirá en la pena de separación del servicio:

3º Que por segunda vez asista a manifestaciones políticas, o por segunda vez, también, acuda a la prensa sobre asuntos del servicio sin estar debidamente autorizado.

## TÍTULO VIII

### DELITOS CONTRA LOS FINES Y MEDIOS DE ACCIÓN DEL EJÉRCITO

#### Sección tercera

##### *De otras faltas graves*

Art.329º. Será castigado con arresto militar o suspensión del empleo.

4º. Que asista a manifestaciones políticas por primera vez, o por primera vez también acuda a la prensa sobre asuntos del servicio.

Se considerarán para este efecto comprendidos en el párrafo anterior.

Los escritos contrarios a la disciplina o al respecto debido a las Autoridades militares y superiores jerárquicos, cuando no constituyan responsabilidad más grave.

Las discusiones que susciten antagonismos entre los distintos cuerpos e institutos del Ejército o que promuevan disgustos o falta de armonía y fraternidad entre las clases militares.

La emisión de opiniones sobre actos del Monarca, del Gobierno y de las Autoridades y Jefes militares.

Las polémicas sobre proyectos de ley de carácter militar presentados a las Cortes, y, en general, sobre materias cuya resolución corresponda a los poderes del Estado.

Las peticiones por medio de la imprenta, y cuantas manifestaciones puedan considerarse comprendidas en el núm.1 del art.215.

## ANEXO N°24

**Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 17 de Noviembre de 1893, en la que se castiga los delitos que por medio de la imprenta provoque delitos anarquistas.**

*Gaceta de Madrid*, 18 de Noviembre de 1893, número 322, p.507.

### CIRCULAR

El art.582 del Código penal castiga como delincuentes a los que por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación provocan directamente a la perpetración de algún delito, y al núm. 4º de 581, como autores de falta, a quienes emplean iguales medios para hacer la apología de secciones calificadas también de delito.

Fanáticos secuaces de doctrinas servidas en nuestra Nación y fuera de ella por criminales empeños colectivos de desarraigar por el fuego y por el terror, condiciones perdurables de la sociedad, llevan su audacia hasta hacer gala en la prensa periódica de sus reprobables designios y de propósitos exterminadores de cuanto vive al amparo del derecho positivo. Validos de escritos propios o de conferencias a la imprenta destinadas, se atreven unas veces al público elogio de crímenes perpetrados y el ensalzamiento de sus autores, y llegan otras a excitar sin rebozo y a provocar sin respeto de la moral ni de la Ley a la ejecución de esos gravísimos delitos que execra la conciencia humana. Aumentan así, con doble quebranto del reposo social, la justa y extensa alarma y la piadosa pesadumbre que produce la vista de la fría maldad con que al azar se viste sangre inocente y de la asombrosa indiferencia con que se reparten sin provecho daños y males, lágrimas y lutos.

Tales aplausos y tales provocaciones no son solamente desvaríos de espíritus ciegos. Con esa imprudencia manifiestos, reclaman sanción penal. La ley se la señala. Y la ley ha de ser severamente cumplida. Es defensa de la sociedad y de los ciudadanos y una y otra tienen derecho a que esa realidad se cumpla.

Al Ministerio fiscal, ayudado, como es de esperar que lo sea, por las Autoridades gubernativas, toca cuidar asiduamente de su observancia y precaver olvido y desatención. Confío en que sus funcionarios serán fieles, sin vacilación y con energía, si es necesaria, a todos sus deberes. V.S. y sus inmediatos auxiliares al intervenir en los procesos por delito o promoviéndoles; V.S., además, poniendo en ejercicio su Autoridad, mediante instrucciones adecuadas que dictare para la dirección que la comete de los Fiscales municipales, en los que pertenezca a la esfera en que éstos sus subordinados actúan, y todos procurarán que, cuando se realicen las indicadas y cuantas acciones el Código penal declare punibles, la de nuestro ministerio se haga sentir tan inmediata como inexorable.

## ANEXO N°25

### **Ley de 10 de Julio de 1894 de “Represión de delitos cometidos por medio de explosivos”.**

*Gaceta de Madrid*, nº 192 de 11 de julio de 1894, tomo III, p. 155.

Art. 6º. El que, aun sin inducir directamente a otros a ejecutar cualesquiera de los delitos enumerados en los artículos anteriores, provocase de palabra, por escrito, por la imprenta, el grabado u otro medio de publicación a la perpetración de dichos delitos, incurrirá en la pena señalada a los autores respectivos, si a la provocación hubiera seguido la perpetración, y en la inferiores en un grado cuando no se realizase el delito.

Art. 7º. La apología de los delitos o de los delincuentes penados por esta ley, será castigada con presidio correccional.

## ANEXO N°26

### **Proposición de Ley del Sr. Martínez de Campos sobre reforma del artículo 7º del Código Justicia Militar.**

*Diario de las Sesiones de Cortes del Senado*, 28 de marzo de 1895, apéndice 8º, núm. 87.

El párrafo séptimo del art. 7º del Código penal militar hoy vigente atribuye, en opinión de los tribunales militares, de un modo expreso con la redacción, cualquiera que sea el medio de “cometer el delito”, todos los de atentado y desacato a las autoridades militares e injuria y calumnia a éstas y a las Corporaciones y colectividades del Ejército. Pero la misma forma absoluta del precepto que se expresó de esta manera por las Comisiones encargadas de redactar el proyecto y dar dictamen, creyendo comprender en el artículo todos los medios actuales y los que en adelante pudieran emplearse para la comisión de los delitos incluidos en el párrafo indicado, ha dado lugar a competencias de jurisdicción que en casi todos los casos se han resuelto a favor del conocimiento del Jurado, sin que en casi ninguno haya recaído sentencia condenatoria. No se ocultará al Senado la gravedad de este estado de cosas en asunto que toca a la disciplina del Ejército y el antagonismo a que da lugar entre los tribunales de las dos jurisdicciones, que naturalmente trasciende y se extiende a las clases civiles y militares, y la necesidad de acudir a un remedio en evitación de males irreparables; y, por lo tanto, el Senador que suscribe tiene el honor de proponer al Senado que el citado artículo se redacte en la forma que expresa la siguiente.

El párrafo séptimo del art.7º. del capítulo 2º del Código penal militar de 27 de Septiembre de 1890 se redactará de la manera siguiente:

“7º. Los de atentado y desacato a las autoridades militares, y los de injuria y calumnia a éstas y las Corporaciones o colectividades del Ejército, cualquiera que sea el medio para

cometer el delito, *aunque sea por la imprenta*, siempre que éste se refiera al ejercicio de destino o mando militar, tienda a menoscabar su prestigio o a relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados.

Son autoridades para este efecto los militares qué, por razón de su cargo y propia jurisdicción, ejerzan mando superior ó tengan atribuciones judiciales ó gubernativas en el territorio ó localidad de su destino, aunque funcionen con dependencia de otras autoridades principales.

Lo son también los auditores, jueces y fiscales, en el desempeño de su cargo ó con ocasión de él.

En tiempo de guerra, ó previniéndose para ella oficialmente, serán asimismo considerados como autoridades militares los comandantes de Cuerpo de Ejército, división, brigada y columna, operando Separadamente en lo que comprenda el territorio que ocupen de continuo ó accidentalmente, hasta donde alcance su acción militar, y los oficiales de cualquier clase destacados para algún servicio, siendo dentro de la localidad ó zona en que deban prestarlo, siempre que allí no exista una autoridad militar constituida.”



## ANEXO N°27

### **Ley de 2 Septiembre de 1896 de Represión del Anarquismo.**

*Gaceta de Madrid*, número 248 de 4 de septiembre de 1896, tomo III, p.825.

#### LEY

Art. 4º. El Gobierno podrá suprimir los periódicos y Centros anarquistas, y cerrar los establecimientos y lugares de recreo en donde los anarquistas se reúnan habitualmente para concertar sus planes o verificar su propaganda. También podrá hacer salir del reino a la persona que, de palabra o por escrito, por la imprenta, grabado u otro medio de publicidad, propaguen ideas anarquistas o formen parte de las Asociaciones comprendidas en el artículo 8º de la ley de julio de 1894. Si el extrañado en esta forma volviese a la Península, será sometido a los Tribunales y castigado, por haber quebrantado el extrañamiento, con la pena de relegación a una colonia lejana por el tiempo que los Tribunales fijen en cada caso, pero que nunca podrá ser menos de tres años, quedando allí sujeto al régimen disciplinario que, según la conducta que observe, consideren indispensable las Autoridades militares. Los acuerdos a que se refieren los párrafos anteriores se adoptarán en Consejo de Ministros y previo informe de la Junta de Autoridades de la capital de la respectiva provincia.

## ANEXO N°28

### **Circular de 13 de Agosto de 1897 de la Fiscalía del Tribunal Supremo relativa á la represión del anarquismo.**

*Gaceta de Madrid*, 14 de Agosto de 1897, número 226, pp. 502-503.

#### **CIRCULAR**

El atentado cometido en la persona del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que es causa en estos momentos de luto nacional, me impone el deber imperioso de dirigir mi voz a los Sres. Fiscales, no para rendir primero justo tributo a la memoria del gran estadista y patriota, víctima de infames maquinaciones fraguadas por esos nuevos enemigos de la sociedad, tanto más terribles y tanto más perversos cuanto que, haciendo del odio una religión, pretenden imponerse por el terror y emplean cobardemente, como único procedimiento, el crimen y el exterminio servido por la astucia, la simulación y el engaño; y para expresar después a todos mis subordinados la suprema necesidad de que contra tales sectarios, unidos por vínculos de solidaridad internacional en que encuentras a la vez su fuerza y su tristísima resonancia, hay que utilizar con la mayor constancia y la más decidida e inquebrantable energía cuantos recursos la ley pone a nuestra disposición, teniendo siempre en cuenta que a nuestro ministerio correspondiera mucha parte la defensa de los sagrados intereses, así colectivos como individuales, tan ruidosamente amenazados.

No se trata ya de los atentados que se cometan. Una vez realizados, la misión del funcionario fiscal está en las leyes perfectamente definida y clara; pero hay algo en que la diversidad de interpretaciones pudiera engendrar cierta confusión que, traduciéndose por auxilio moral, restaría fuerza a los poderes para realizar la obra de restaurar el orden

y la tranquilidad. Me refiero al daño que las publicaciones periódicas pueden causar por el afán de mantener el interés y ofrecer a sus lectores incentivos para la curiosidad. Ese afán. Seguramente lícito en otras ocasiones, sería en las presentes circunstancias indiscreto o imprudente, si no llegara, como llega, a constituir delito definido y penado por el legislador. A pretexto de dar cuenta de detalles relativos a los culpables, se forjan leyendas que, tal vez sin que eso sea el propósito, las presentan como mártires de unas ideas y como héroes que arrastran toda suerte de penalidades y hacen impávidos el sacrificio de su vida en aras del amor a los que llaman sus hermanos; ¡como si pudiera haber heroicidad en la tradición, ni amalgamarse el instinto, furor y sanguinario con los sentimientos de humanidad!

Comprenderá V.S que esa manera de ejercer el magisterio de la prensa es una cooperación a los fines del anarquismo, cosa que no cabe tolerar sin mengua del interés público y sin desprestigio de la ley. En la circular de esta Fiscalía de 17 de noviembre de 1893 se trazaba la línea de conducta que, los Sres. Fiscales deberían seguir en orden a esas transgresiones de tanta y tal vital transcendencia; pero de entonces acá la legislación ha cambiado. Lo que antes era punible como falta, ahora lo es como delito.

La ley de 10 de julio de 1894, declarada vigente por la de 2 de Septiembre de 1896, establece en su art.7º que, la apología de los delitos y de los delincuentes penados por aquellas será castigado con presidio correccional; y apología es, no sólo presentar el hecho criminal como laudable, y como meritoria, la conducta del que le ejecuta, sino disminuir la enormidad de los delitos presentando a sus autores con caracteres que tiendan a hacerles simpáticos y a disuadir el horror que sus inhumanos atentados deben inspirar. Todo, pues, lo que directa o indirectamente puede tener este objeto es punible

según la ley, y no cabe tolerarle sin que seamos infieles a nuestra misión y a la confianza que, como representantes del poder social se nos otorga.

Deberá V.S. vigilar la prensa periódica y toda clase de publicaciones, sean de la clase que fuera, y un momento que advierta que manifiesta o veladamente se hace la apología del anarquismo, de sus adeptos o de sus atentados, procederá a promover la formación de causa, inspeccionado personalmente el sumario y cuidando de que las diligencias se sigan con la mayor celeridad, para que la represión sea inmediata y el temor a la pena haga lo que la prudencia y el amor a la civilización debiera por si solos hacer.

Encargo a V.S el más puntual y exacto cumplimiento de que en la presente circular se ordena, abrigando la esperanza de que no me veré obligado a adoptar medidas de rigor por omisiones contra las cuales tengo como garantía el celo hasta aquí demostrado por los Sres. Fiscales.

## ANEXO N°29

**Real Orden. Circular de 10 de Septiembre de 1897 por la que se recuerda la prohibición impuesta por el Código de Justicia Militar a las clases del Ejército de utilizar la imprenta para determinados fines.**

*Gaceta de Madrid*, 12 de Septiembre de 1897, número 255, p.1084.

### CIRCULAR

El execrable atentado cometido en la persona del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que es causa en estos momentos de luto nacional, me impone el deber imperioso de dirigir mi voz a los Sres. Fiscales, no para recordarles textos legales y superiores instrucciones que conocen, sino para rendir primero justo tributo a la memoria del gran estadista y patriota, víctima de infames maquinaciones fraguadas por esos nuevos enemigos de la sociedad, tanto más terribles y tanto más perversos cuanto que, haciendo del odio una religión, pretenden imponerse por el terror y emplean y cobardemente, como único procedimiento, el crimen y el exterminio, servido por la astucia, la simulación y el engaño; y para expresar después a todos mis subordinados la suprema necesidad de que contra tales sectarios, unidos por vínculos de solidaridad internacional en que encuentran a la vez su fuerza y su tristísima resonancia, hay que utilizar con la mayor constancia y la más decidida e inquebrantable energía cuantos recursos la ley pone a nuestra disposición, teniendo siempre en cuenta que a nuestro ministerio corresponde en mucha parte la defensa de los sagrados intereses, así colectivos como individuales, tan traidoramente amenazados.

No se trata ya de los atentados que se cometan. Una vez realizados, la misión del funcionario fiscal está en las leyes perfectamente definida y clara; pero hay algo en que

la diversidad de interpretaciones pudiera engendrar cierta confusión que, traduciéndose por auxilio moral, restaría fuerza a los poderes para realizar la obra de restaurar el orden y la tranquilidad. Me refiero al daño que las publicaciones periódicas pueden causar por el afán de mantener el interés y ofrecer a sus lectores incentivos para la curiosidad. Ese afán, seguramente lícito en otras ocasiones, sería en las presentes circunstancias indiscretas e imprudentes, si no llegara, como llega, a constituir delito definido y penado, como llega, a constituir delito definido y penado por el legislador. A pretexto de dar cuenta de detalles relativos a los culpables, se forjan leyendas que, tal vez sin que ese sea el propósito, les presentan como mártires de una idea y como héroes que arrostran toda suerte de penalidades y hacen impávidos el sacrificio de su vida en aras del amor a los que llaman sus hermanos; ¡como si pudiera haber heroicidad en la traición, ni amalgamarse el instinto feroz y sanguinario con los sentimientos de humanidad!

Comprenderá V.S. que esa manera de ejercer el magisterio de la prensa es una cooperación a los fines del anarquismo, cosa que no cabe tolerar sin mengua del interés público y sin desprestigio de la ley. En la circular de esta Fiscalía de 17 de Noviembre de 1893 se trazaba la línea de conducta que los Sres. Fiscales deberían seguir en orden a esas transgresiones de tanta y tan vital trascendencia; pero de entonces acá la legislación ha cambiado. Lo que antes era punible como falta, ahora lo es como delito.

La Ley de 10 de Julio de 1894, declarada vigente por la de 2 de Septiembre de 1896, establece en su art.7º que la apología de los delitos y de los delincuentes penados por aquella será castigada con presidio correccional; y apología es, no sólo presentar el hecho criminal como laudable, y como meritoria la conducta del que lo ejecuta, sino

disminuir la enormidad de los delitos presentando a sus autores con caracteres que tiendan a hacerlos simpáticos y a disminuir el honor que sus inhumanos atentados deben inspirar. Todo, pues, lo que directa o indirectamente pueda tener este objeto, es punible según la ley, y no cabe tolerarlo, sin que seamos infieles a nuestra misión y a la confianza que, como representantes del poder social, se nos otorga.

Esto sentado, deberá V.S. vigilar la prensa periódica y toda clase de publicaciones, sean de la clase que fueren, y en el momento que advierta que manifiesta o veladamente se hace la apología del anarquismo, de sus adeptos o de sus atentados, procederá a promover la formación de causa, inspeccionando personalmente el sumario y cuidando de que las diligencias se sigan con la mayor celeridad , para que la represión sea inmediata y el temor a la pena haga lo que la prudencia y el amor a la civilización debiera por sí solos hacer.

Encargo a V.S. el más puntual y exacto cumplimiento de lo que en la presente circular se ordena, abrigando la esperanza de que no me veré obligado a adoptar medidas de rigor por omisiones contra las cuales tengo como garantía el celo hasta aquí demostrado por los Sres. Fiscales.

## ANEXO N°30

### **Real Decreto de 14 de julio de 1898 por la que se impone censura militar para la prensa con motivo de la guerra de Cuba.**

*La Vanguardia*, 16 de Julio de 1898, p.5.

## EXPOSICIÓN

Señora: Conocidas son las extraordinarias circunstancias en que por desgracia se encuentra el país, víctima de la perturbación que producen dos guerras coloniales y en la necesidad de defender el honor nacional ante otra inicua guerra con una nación poderosa.

(...) La lucha colosal que en el Archipiélago de las Filipinas y en Cuba sostiene nuestro glorioso ejército de tierra y mar contra todos los elementos y con un enemigo tan superior en fuerzas y recursos como desprovisto de razón y justicia, cubre de laureles nuestro ejército y nuestra armada: pero va acompañado de grandes contratiempos y de pérdidas considerables y dolorosas.

(...) Fundado en estas consideraciones, el Consejo de ministros tiene el honor de proponer a V.M. el siguiente Real decreto.

Madrid, 14 de julio de 1898. – Práxedes Mateo Sagasta.

## REAL DECRETO

A propuesta de mi Consejo de ministros, en nombre de mi augusto hijo el Rey don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, vengo a decretar lo siguiente:



Artículo 1º. Se suspenden temporalmente en todas la Península e islas adyacentes las garantías expresadas en los artículos: 4º, 5º, 6º, y 7º y párrafos 1º, 2º y 3º del 13 de la Constitución de la Monarquía.

Artículo 2º. Desde la publicación de este decreto se aplicará la ley de orden público de 23 de abril de 1870, salvo lo dispuesto en el título adicional de dicha ley, en relación al procedimiento en las causas criminales, que continuarán rigiéndose por las leyes y disposiciones vigentes, tanto en los procesos de que conozca la jurisdicción ordinaria como en los sometidos a las especiales de Guerra y Marina.

Artículo 3º. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso que haga del presente decreto.

## ANEXO N°31

### **Bando dictado por el Capitán general José Chinchilla en consonancia al Real Decreto de 14 de julio de 1898.**

*La Vanguardia*, 16 de Julio de 1898, p.5.

“Hago saber, que publicado el real decreto suspendiendo el ejercicio de las garantías constitucionales; declarada toda la Monarquía en estado de guerra; autorizado competentemente y haciendo uso de las facultades que me conceden las Ordenanzas y el Código de justicia militar, he dispuesto lo que sigue:

Art.1º. Continúa en su fuerza y vigor en todo el territorio de este distrito militar, el bando publicado bajo fecha 2 de mayo último.

Art.2º. En consonancia a lo mandado en dicho bando, no se permitirán manifestaciones ni reuniones públicas que no hayan sido previamente autorizadas por mi o por mis representantes.

Art.3º. Sin que se obtenga la autorización oportuna no se permitirá publicar artículos, grabados o dibujos, sea cual fuera el medio que se emplee para publicarlos o circularlos. La persona y empresa que desee publicar artículos, grabados o dibujos acudirá a Madrid a esta Capitanía general, y en las demás localidades a los gobernadores, o comandantes militares, y a falta de unos u otros a los alcaldes, acompañando tres ejemplares de aquéllos, y no los publicará hasta que le sea devuelto, con el correspondiente sello, uno de los tres ejemplares presentados, en la inteligencia de que el interesado deberá suprimir de la publicación toda aquella parte del escrito, dibujo o grabado que haya sido tachado.

Art4º. Las infracciones de lo dispuesto por el presente bando serán perseguidas con todo rigor, pudiendo llegar hasta la suspensión del periódico o publicación en los casos que prefija el art.6º de la ley de orden público.

La reconocida cordura y sensatez que siempre han venido observando los habitantes de esta región, me hacen esperar que será innecesario aplicar las durísimas penas de este bando.

En esta confianza fundado, cuento con la cooperación de todos para sostener el orden público ahora que, más que nunca, hace falta la serenidad de ánimo que ha de contribuir poderosamente a que la nación, unida en un solo pensamiento y en un solo esfuerzo, consiga en los difíciles momentos actuales ser respetada como el español, llevan su patriotismo hasta olvidar sus rencillas interiores, después de haber demostrado su heroísmo en los campos de batalla.

Si lo que no espero, hubiera alguien que olvidado de las desgracias presentes intentara aumentar las desdichas de la patria para lograr sus malvados fines, confío en que las personas pacíficas se separarán de los perturbadores, para que pueda con el uso de la fuerza reprimir rápida y enérgicamente toda la alteración de orden público”.

## ANEXO N°32

### **Proyecto de ley presentado por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia reformando varios artículos del Código penal: Proyecto de ley contra la difamación.**

Senado, 23 de octubre de 1902, apéndice 2º al núm.40.

#### A LAS CORTES

Siempre ha sido la defensa del honor y buen nombre de las personas ante el concepto público objeto de cuidado preferente entre los legisladores. Código alguno los dejó desamparados ante los ataques de la calumnia y la injuria, y en el nuestro de 1870, anticipándose a su época, se atendió con solícito interés a ese cuidado, dictándose los preceptos que en esta materia hoy rigen y son de todos conocidos.

Más desde entonces a los presentes tiempos las costumbres de los pueblos, en su evolución constante, se han ido modificando, y la criminalidad, que también experimenta evoluciones y transformaciones, bien fáciles de apreciar al observador atento, deriva hoy, y con tendencias decididamente francas, adoptando con singular preferencia las formas astutas y fraudulentas intelectuales. Cediendo a esa mutación constante, se advierte ya con bastante claridad, que si en los ambientes sociales atrasados en el campo y en las clases inferiores de las ciudades subsisten aun con harta y dolorosa frecuencia el homicidio y el asesinato, en cambio en las esferas más adelantadas estas formas criminales van siendo sustituidas por la difamación y el escándalo, a modo de verdaderos traumatismos morales, en los que las malas pasiones hieren, con mayor quebranto, en lo más íntimo y apreciado.

(...) El evidente afán que desgraciadamente predomina de formar densas nubes, que envolviéndolos oscurezcan los más sanos principios de moralidad y rectitud, al amparo de las trabas que a la rehabilitación ponen nuestras leyes actuales, en lo que al procedimiento se refiere, y la impunidad que representa el castigo con que al culpable se conmina en nuestro Código vigente, son los motivos principales que han inducido a acometer, con decidido empeño, esta reforma para que manteniéndose fielmente la libertad de la pluma y del decir en toda su extensión y términos, existan dentro de nuestras leyes, cual las necesidades de los tiempos reclamen, los medios adecuados para reprimir con seguridades de éxito los ataques calumniosos a la honra y honor, permitiendo a la vez y facilitando, incluso con el procedimiento de oficio, la persecución y castigo de los hechos que, envolviendo desprestigio personal para aquel a quien se imputan o solamente se refieren, constituyan delito ante el que la sociedad no debe permanecer jamás extraña o indiferente.

(...) Ampliase el concepto de calumnia, extendiéndole a la falsa imputación de hechos que darían lugar a procedimientos disciplinarios o gubernativos para corregir a su autor, créase el delito de insulto, como forma la más leve de los atentados contra el honor; establécese a más de la pena personal y de la satisfacción honoraria dada al ofendido con la publicación de la sentencia condenatoria del reo una sanción más, un pago de cantidad a la víctima en concepto de indemnización; créase, en fin, el delito de amenaza de escándalo, mediante la prensa o el escrito, y agravase, en todo caso, la represión, cuando por cualquier medio el delito consigne la publicidad, que en su efecto más deseado.

Se sostiene el principio de admitir la prueba al acusado de calumnia, sintiendo asimismo el principio razonable y justo de que proceda inmediatamente y de oficio contra el supuesto calumniado, si se demostrase la certeza del hecho origen de las actuaciones. Se admite, en fin, que la acción de calumnia, injuria, insulto o amenaza, tenga en el procedimiento su desarrollo, previa denuncia del ofendido, debiendo después ser sostenida y amparada por el fiscal de S.M.; pero sin olvidar jamás que semejantes delitos se borran y desaparecen con el perdón del agraviado, único dueño y árbitro para medir si su honor y honra hollados necesitan pública reparación y desagravio.

Estas son las líneas generales del proyecto que se somete a la deliberación de las Cortes. Atendiendo en él a las necesidades de nuestros tiempos; pero guardando el más escrupuloso respeto a las libertades individuales en lo que atañe y concierne a la expresión del pensamiento, se dota a nuestra legislación de medios más seguros y eficaces para que en ella encuentren los ciudadanos los medios adecuados para reivindicar su honor públicamente ofendido, y de reprimir los desmanes que con dolorosa frecuencia se cometen de palabra y por escrito, y no ciertamente por la prensa seria de España, cuya tendencia es noble y justa, sin que sea dable confundirla con sus degeneraciones vergonzosas o formas parasitarias que encubren con la apariencia del periódico o del libro, siempre respetables, instintos depravados y tendencias a la difamación y escándalo.

## PROYECTO DE LEY

Art.1º. Es calumnia la falsa imputación de un hecho determinado, que de ser cierto, daría lugar a procedimientos de oficio judicial, disciplinario o gubernativo, para castigar o corregir a su autor.

Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada con intento de producir molestia o mortificación o que revele menosprecio a otra persona.

Art.2º. La calumnia será grave:

2º. Cuando se propague por escrito o de cualquier manera se la dé publicidad.

Art. 4º. La calumnia grave será castigada con la pena de arresto mayor en su grado máximo o prisión correccional en el medio y multa de 500 a 5.000 pesetas. Del pago de la multa y de todas las costas, incluso las que ocasionen la publicación de la sentencia, serán subsidiariamente responsables el editor, el impresor, o la Empresa que hubiera facilitado el medio de propagación, a juicio del Tribunal sentenciador.

Art.8º. Son injurias graves:

3º. Las hechas por escrito con publicidad.

Art.10º. Las injurias graves serán castigadas con la pena de arresto mayor y la de destierro en su grado medio, y multa de 250 a 2500 pesetas.

Art.13º. Los insultos se castigarán según su gravedad como delitos, con multa de 125 a 1.250 pesetas, o como faltas con la señalada en el artículo anterior.

Art. 15°. Se comete el delito de calumnia, injuria o insulto, no sólo manifiestamente, sino por medio de alegoría, caricatura, emblema o alusiones.

Art.16°. La calumnia y la injuria se reputarán por escrito cuando se propaguen por papeles manuscritos, comunicados a más de diez personas y con publicidad cuando lo sean por impresos, litografiados o grabados, por carteles o pasquines fijados en sitios públicos.

Art.17°. Cuando la calumnia o la injuria fueren encubiertas o equívocas, podrá exigirse explicación satisfactoria. Si ésta se diere, el querellante tendrá derecho a dar publicidad a la explicación. En otro caso, el acusado será castigado como si la injuria o la calumnia fueren manifiestas.

Los directores o editores de periódicos en que se hubiesen propagado las calumnias o injurias, harán la inserción de que hablan los artículos: 7° y 10° dentro del término que señale el Tribunal, si lo pretendiere el ofendido. Si no lo hicieren, se procederá contra ellos por desobediencia a la autoridad.

Art. 24°. Incurrirán en la pena de 25 a 125 pesetas de multa:

1° El director de un periódico en el cual se hubieran anunciado hechos falsos, si se negare a insertar gratis, dentro del término de tres días, la contestación que le dirija la persona ofendida o cualquiera otra autorizada para ello, rectificándolos o explicándolos, con tal que la rectificación no excediese en extensión del doble del suelto o noticia falsa. En caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrán igual derecho sus hijos, padres, hermanos y herederos.



2º. Los que por medio de la imprenta, litografía u otro medio de publicación, divulgaran maliciosamente hechos relativos a la vida privada, que sin ser injuriosos puedan producir perjuicios o graves disgustos en la familia a que se refieran.

3º. Los que por los mismos medios publicaren maliciosamente noticia falsa de la que pueda resultar algún peligro para el orden público, o daño a los interesados o créditos del Estado.

4º. Los que en igual forma sin cometer delito, provocare a la desobediencia de las leyes y de las autoridades constituidas, hicieren la apología de acciones calificadas por la ley de delito, si ofendieren a la moral de las buenas costumbres o la decencia pública.

5º Los que publicaren maliciosamente disposiciones, acuerdos, autos o sentencias u otros documentos oficiales sin la debida autorización cuando sea necesaria, y en los que no lo sea antes de la publicidad en los periódicos oficiales.

6º. El director de empresas de publicidad o de periódico después de formularse ante la autoridad cometerte la denuncia de un hecho y de haber hecho pública una acusación contra la autoridad, Corporación o funcionarios públicos, se proponga producir y ocasione escándalo, con la insistencia del agravio, sin aguardar resolución del Tribunal competente que entienda en la denuncia.

Art.25º. Serán castigados con la pena de arresto mayor en su grado máximo a prisión correccional en su grado medio, y multa de 500 a 5.000 pesetas, lo que de palabra o por escrito no respeten la inviolabilidad del Rey o del Regente del Reino discutiendo y censurando sus actos, y los que de cualquier modo falten a la consideración social y el respeto debido a la persona del Regente del Reino, padre, madre, consorte actual o viuda, del Rey y Príncipe de Asturias.

## ANEXO N°33

### **Circular del Fiscal del Tribunal Supremo de 27 de agosto de 1903, para que se hagan efectivas las responsabilidades por los delitos de imprenta.**

*Gaceta de Madrid*, 28 de Agosto de 1903. Martínez Alcubilla, M., *Boletín jurídico administrativo. Anuario de legislación y jurisprudencia*. Anuario de 1903, Madrid, Administración, 1903, pp. 482-483.

## CIRCULAR

Extracto.- “Creo oportuno recordar a V.S. algunos preceptos vigentes ante la insistencia deplorable de hechos criminosos y la creciente habilidad con que suele eludirse la sanción penal, claramente establecida en el Código.

Dispone en su artículo 14 que solamente se reputará autor de los delitos o faltas que se cometan por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación al que realmente lo haya sido del escrito o estampa publicado.

Añade el artículo que cuando éste no fuera conocido o no estuviere domiciliado en España o estuviere exento de responsabilidad penal, con arreglo al art. 8º del Código, se reputará autor al director de la publicación que tampoco se halle en ninguno de los tres casos mencionados.

En defecto de éste se reputará autor al editor, también conocido y domiciliado en España, no exento de responsabilidad criminal y en defecto de éste a los impresores.

La ley de enjuiciamiento criminal, insistiendo en la necesidad jurídica de evitar los lazos que a los tribunales tienden las habilidades de los defensores, en el art. 816, después de preceptuar medidas preventivas y urgentes para los sumarios incoados a causa de los

delitos de imprenta, dispone que se proceda inmediatamente a averiguar quién haya sido el autor real del escrito o estampa en cuya publicación se haya cometido el delito.

En su art.819 establece que cuando no pudiere averiguarse quién sea el autor real del escrito o estampa, se dirigirá el procedimiento contra las personas subsidiariamente responsables por el orden establecido por el artículo que lo regular en el indicado Código; y como si esto no fuese bastante, la ley, en su deseo de encontrar las realidades y destruir los artificios, otorga a los tribunales la facultad de apreciación amplísima, en virtud de la cual según el art. 820, dispone que no son bastantes las confesiones de un supuesto autor para que se detenga como tal y para que no se dirija el procedimiento contra otra persona si de las circunstancias de aquel o de las de la causa resultare indicios suficientes para creer que el confeso no fue el autor del escrito o estampa publicado.

También es conveniente recordar las disposiciones de la ley de policía de imprenta de 26 de julio de 1883, que exigen determinados requisitos para que puedan publicarse los periódicos y acreditarse la personalidad del director o directores del mismo.

Todo ello habrá de tenerlo V.S. muy presente en los sumarios que se incoen por delitos cometidos por medio de la imprenta, inspirándose en los preceptos legales que se dejan citados y en la interpretación ajustada a su texto que se expresa en esta circular.

Deberá V.S. investigar con diligente esmero las circunstancias que en cada caso concurren para que, en ninguno de ellos resulte burlada la ley con artificios que causan escándalo en la conciencia pública y alientan a los autores a cometer impunidad efectiva que alcanzan y que se ha logrado en repetidas ocasiones con la presentación de

supuestos autores que gozan del amparo de la inmunidad parlamentario o de directores buscados, al sólo efecto de que en su indiferente pasividad se emboten los justos rigores del Código penal.

Ha de procurar V.S. que las responsabilidades sean efectivas para alcanzar la ejemplaridad del castigo y para evitar que la majestad de la ley sea hollada y escarnecida.

En tal sentido promoverá V.S. la acción de los tribunales, inspeccionará atentamente los sumarios que se incoen, interpondrá todos los recursos que procedan cuando entienda que los tribunales se apartan del camino que la ley les traza y me dará cuenta con la mayor urgencia cuando sus esfuerzos resulten vanos.

Sírvase además V.S. manifestar a ésta Fiscalía haber quedado enterado de la presente circular, cuya inserción en el Boletín Oficial de esa provincia deberá reclamar de las autoridades gubernativas”.

## ANEXO N°34

**Real Orden relativa á la forma en que se ha de proceder el secuestro de los periódicos en que se publiquen artículos, noticias ó estampas que se estimen punibles.**

*Gaceta de Madrid*, 9 de Septiembre de 1906, número 252, p. 997.

### REAL ORDEN CIRCULAR

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 810 de la ley de Enjuiciamiento criminal, inmediatamente que se da principio a un sumario por delito de imprenta, los Jueces de instrucción lo ponen en conocimiento de la Autoridad gubernativa y de la Administración de Correos para que sean secuestrados los ejemplares del impreso o de la estampa dondequiera que se hallaren; pero la ejecución del precepto legal cuando se trata de una simple hoja o de una estampa no produce las mismas consecuencias que, cuando se refiere a un periódico. En este caso, el secuestro alcanza lo mismo al artículo o noticia objeto de la sanción penal que a aquello que, lejos de constituir materia delictiva, puede ser motivo de general cultura y honesto pasatiempo. Por consiguiente, si el periódico, que ha de tener inmediatamente noticia de la incoación del sumario por la diligencia del secuestro del molde, retira lo que motiva el procedimiento, dicho se está que falta el fundamento del precepto legal, cuya finalidad es, sin duda, que el artículo o noticia punible no produzca u ocasione los efectos que se propusieron sus autores. Concurriendo esta circunstancia, es innegable que el respeto a la propiedad y el que se debe al periódico, elemento indiscutible de cultura y de progreso, exige de la recta y honrada interpretación y aplicación de las leyes que la acción penal no traspase del justo límite y que se procure no ocasionar quebrantos y perjuicios innecesarios e irrepetibles.

Por otra parte, cuando, en 17 de Septiembre de 1892, se promulgó la ley de Enjuiciamiento criminal, excepción hecha de algunos periódicos, la mayoría de ellos sólo publicaban una edición; ahora, a los veintiséis años transcurridos, por la mayor importancia de las Empresas periodísticas, por los adelantos de la Tipografía, por el incremento de las tiradas, por el afán plausible de servir al público con una información más próximo del suceso, se han multiplicado las ediciones, y la actual excepción es la de que un periódico solamente publique la edición en que se contenga el artículo o estampa punible; y claro está que si la orden de secuestro de ejemplares se limita a expresar que el periódico ha sido denunciado y debe impedirse su circulación, la Autoridad gubernativa o la Administración de Correos habrán de verificarlo, aun en el repetido caso de que de algunos de ellos hubiera sido retirado lo que originó la denuncia y sumario; y esto, sobre no ser equitativo, no puede estimarse legal. Tratándose, por ejemplo, de un delito de hurto o de robo, igualmente se ordena el secuestro de las cosas hurtadas o robadas donde se hallaren; pero al no verificarlo, la incautación no alcanza a aquellas que notoriamente no tienen relación alguna con el sumario, aunque se encuentren en poder del presunto culpable.

En su virtud, S.M el Rey (Q.D.C) se ha servido disponer que cuando se empieza un sumario por delito de imprenta, las órdenes que se dicten por los Jueces de imprenta, las órdenes que se dicten por los Jueces de instrucción para el secuestro del periódico deberán expresar de una manera clara y categórica al artículo o noticia o estampa motivo del proceso, que la incautación de ejemplares habrá de limitarse exclusivamente a la de aquellos que contengan el particular estimado punible, pudiendo circular libremente los que se presenten en las oficinas de Correos o se pongan a la venta una vez suprimida la parte denunciada.



Lo que de Real Orden tengo el honor de poner en conocimiento de V.L. para que se sirva dar las órdenes oportunas a fin de que tenga el debido cumplimiento por parte de los Jueces de instrucción de la jurisdicción de esa Audiencia. Dios guarde a V.L muchos años.

## ANEXO N°35

### **Ley de Jurisdicciones, por la que se castigan los delitos contra la patria y contra las instituciones armadas por medio de la imprenta.**

*Gaceta de Madrid*, Martes 24 de Abril de 1906, número 114, Tomo II (1906), pp. 317-318.

Artículo 1º. El español que tomara las armas contra la Patria bajo banderas enemigas o bajo las de quienes pugnaran por la independencia de una parte del territorio español, será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo a muerte.

Art. 2º. Los que de palabra, por escrito, por medio de la imprenta, grabado, estampas, alegorías, caricaturas, signos, gritos o alusiones, ultrajaren a la Nación, a su bandera, himno nacional u otro emblema de su representación, serán castigados con la pena de prisión correccional.

En la misma pena incurrirán los que cometan iguales delitos contra las regiones, provincias, ciudades y pueblos de España y sus banderas o escudos. Art. 3º. Los que de palabra o por escrito, por medio de la imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones injurien u ofendan clara o encubiertamente al Ejército o a la Armada o a instituciones, armas, clases o cuerpos determinados del mismo, serán castigados con la pena de prisión correccional.

Y con la de arresto mayor en sus grados medio y máximo a prisión correccional en su grado mínimo, los que de palabra, por escrito, por la imprenta, el grabado u otro medio de publicación instigaren directamente a la insubordinación en institutos armados o a apartarse del cumplimiento de sus deberes militares a personas que sirvan o están llamadas a servir en las fuerzas nacionales de tierra o de mar.



Art. 4º. La apología de los delitos comprendidos en esta ley, y la de los delincuentes, se castigarán con la pena de arresto mayor.

Art. 5º. Los tribunales ordinarios de derecho conocerán de las causas que se instruyan por cualquiera de los delitos a que se refieren los artículos 1º, 2º y 4º de esta ley, siempre que los encausados no pertenezcan al ejército de mar o de tierra y no incurrieren por el acto ejecutado en delito militar. De las causas a que se refiere el art. 3º conocerán los tribunales del fuero de Guerra y Marina.

Cuando se cometieren al mismo tiempo dos o más delitos previstos en esta ley, pero sujetos a distintas jurisdicciones, cada una de éstas conocerá del que le sea respectivo.

El párrafo 1º del caso 7º del art. 7º del Código de Justicia militar y el número 10 del art. 7º de la ley de organización y atribuciones de los tribunales de Marina quedan modificados en la siguiente forma :

a) Código de Justicia militar.

<<Art. 7º. Por razón del delito la jurisdicción de guerra conoce de las causas que contra cualquier persona se instruyan por...

Séptimo: los de atentado o desacato a las autoridades militares, los de injuria y calumnia a éstas y a las corporaciones o colectividades del Ejército, cualquiera que sea el medio empleado para cometer el delito, con inclusión de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación, siempre que dicho delito se refiera al ejercicio de destino o mando militar, tienda a menoscabar su prestigio o a relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados, y los de instigación a apartarse de sus deberes militares a quienes sirvan o están llamados a servir en aquella institución>>.

b) Ley de organización y atribución de los tribunales de Marina:

<<Art. 7º. Por razón del delito conocer la jurisdicción de Marina en las causas que contra cualquier persona se instruyan por los siguientes:

Art. 10º. Los de atentado y desacato a las autoridades de Marina, los de injuria y calumnia a éstas o a las corporaciones o colectividades de la Armada, cualquiera que sea el medio empleado para cometer el delito con inclusión de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación que dicho delito se refiera al ejercicio del destino o mando militar, tienda a menoscabar su prestigio o a relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los organismos armados. y en los de instigación a apartarse de sus deberes militares a quienes sirvan o están llamados a servir en las fuerzas navales>>.

Art. 6º. En las causas que según esta ley corresponda instruir y fallar a los tribunales ordinarios de derecho el fiscal no podrá pedir el sobreseimiento sin previa consulta y autorización del fiscal del Tribunal Supremo. Tampoco podrá retirar la acusación en el juicio oral sino en escrito fundado, previa consulta y autorización (si no asistiese al acto) del fiscal de la Audiencia respectiva. En los casos en que habiendo sostenido la acusación la sentencia sea absolutoria, deber preparar el recurso de casación.

Art. 7º. Practicadas las diligencias precisas para comprobar la existencia del delito, sus circunstancias y responsabilidad de los culpables, se declarará concluso el sumario, aunque no hubiese terminado la instrucción de las piezas de prisión y de aseguramiento de responsabilidades pecuniarias, elevándose la causa a la Audiencia, con emplazamiento de las partes por término de cinco días. La Sala continuará la tramitación de dichas piezas si no estuvieren terminadas.

Art. 8º. Confirmado, si así procede, el auto de terminación de sumario, se comunicará la causa inmediatamente por tres días al fiscal, y después por igual plazo al acusador privado si hubiere comparecido.

Una y otro solicitarán por escrito el sobreseimiento, la inhibición o la apertura del juicio. En este último caso formularán además las conclusiones provisionales y articularán la prueba de que intenten valerse. El plazo de tres días concedido al ministerio fiscal sólo se suspenderá a instancia de éste, cuando se eleve consulta al fiscal del Tribunal Supremo sobre la procedencia de la pretensión de sobreseimiento y hasta que la consulta sea resuelta.

Art. 9º. El término para preparar el recurso de casación por infracción de ley será el de tres días, contados desde el siguiente al de la notificación de la sentencia.

El recurso de quebrantamiento de forma se interpondrá en el mismo plazo, y en su caso, a la vez que se anuncie el de infracción de ley.

Dentro del término de emplazamiento, que será de diez días, se interpondrá el recurso por infracción de ley si estuviera anunciado o preparado. Ambos recursos, si se hubieran interpuesto, se sustanciarán conjuntamente en el Tribunal Supremo, y los autos se pondrán de manifiesto a las partes en dos traslados que procedan. El Tribunal Supremo sustanciará y resolverá estos recursos con preferencia a los demás, excepto los de pena de muerte, aun cuando sea en el período de vacaciones.

Art. 10º. Dentro de los cinco días siguientes al de haberse puesto en ejecución la sentencia. en caso de condena, o de ser firme la sentencia absolutoria, el Tribunal remitirá los autos originales a la Inspección especial de los servicios judiciales, a fin de que ésta los examine y manifieste por escrito, dentro de cinco días, a la Sala de

Gobierno del Tribunal Supremo, cuanto se le ofrezca sobre regularidad en el funcionamiento de los juzgados y tribunales, que hayan intervenido en cada proceso, observancia de los términos y conducta del personal de justicia. En su vista, dicha sala tomará las determinaciones que estime convenientes dentro de sus facultades, provocará la acción de los presidentes de los tribunales y de sus salas de gobierno para el ejercicio de sus respectivas atribuciones y expondrá al gobierno lo que además estime procedente.

Art. 11º. Los procesos sobre delitos definidos en esta ley para cuya perpetración se haya utilizado la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicidad, se dirigirán, cualquiera que sea la jurisdicción que de ellos conozca, contra la persona responsable, guardando el orden que establece el artículo 1º del Código Penal.

Para este efecto y los del art. 14 del Código Penal, los senadores o diputados mientras el respectivo cuerpo colegislador no haya dejado expedita la acción judicial, serán equiparados a los exentos de responsabilidad criminal.

Los procedimientos para la persecución de los delitos a que se refieren los arts. 2.º, 3.º y 4.º de esta ley sólo podrán incoarse dentro de los tres meses después de la fecha de su comisión.

Se entenderán sujetos a esta ley los impresos comprendidos en los artículos 2.0 y 3.0 de la ley de Policía de imprenta con excepción de los libros.

Art. 12º. Cuando se hubiesen dictado tres autos de procesamiento por delitos de los definidos en esta ley y cometidos por medio de la imprenta, el grabado o cualquiera otra forma de publicación o en asociaciones. por medio de discursos o emblemas, podrá la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a instancia del fiscal del mismo, y sea cualquiera

la jurisdicción que haya conocido de los procesos, decretará la suspensión de las publicaciones o asociaciones por un plazo menor de sesenta días, sin que sea obstáculo al ejercicio de esta facultad el que se promueva cuestión de competencia después de dictado el tercer procesamiento.

Si se hubieren dictado tres condenas por los expresados delitos, cometidos en una misma asociación o publicación, la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, a instancia del fiscal del mismo, y sea cualquiera la jurisdicción que haya conocido de los procesos, podrá decretar la disolución o la supresión, respectivamente, de aquéllas.

La sustanciación para acordar la suspensión y supresión a que se refieren los dos párrafos precedentes se sujetará a la forma establecida para el recurso de revisión en el art. 959 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Art. 13º. En todo lo que no sea objeto de disposición especial de esta ley se estará respectivamente a lo preceptuado en el Código Penal, en la ley de Enjuiciamiento Criminal del fuero ordinario y en las leyes penales y de procedimientos del fuero de Guerra y del de Marina.

Art. 14º. Quedan derogadas todas las disposiciones penales y de procedimiento en cuanto se opongan a lo preceptuado expresamente en la presente ley.

Art. 15º. La presente ley se aplicará en todas sus partes desde el día siguiente de su inserción en la Gaceta.

## ANEXO N°36

### **Real Orden tratando de matizar y mitigar el impacto de la Ley de Jurisdicciones en la opinión pública.**

*Gaceta de Madrid*, 24 de Abril de 1906, número 114, Tomo II (1906), p. 318.

#### REAL ORDEN

Excmo. Sr.; Las circunstancias en que ha sido discutida por las Cámaras la ley para la represión de los delitos contra la patria y el Ejército; el carácter completamente distinto que su examen ha revestido en cada una de las dos Cámaras; la atmósfera de apasionadas apreciaciones en que se la ha envuelto, llegándose a suponer unas veces que iba encaminada contra las manifestaciones de determinadas opiniones políticas, y otras que se dirigía contra tendencias especiales de algunas localidades, exigen que en el momento de comenzar su aplicación llame el Gobierno la atención de los encargados de cumplirla acerca de su verdadero y preciso carácter.

Este se desprende con entera claridad de su simple y atenta lectura. La esencia de la ley reside, en realidad, en sus tres primeros artículos, en los cuales se define un delito que antes no existía en el Código penal, y que circunstancias lamentables, no ciertamente exclusivas de España, sino más bien debidas a un movimiento general en Europa, han reclamado con imperiosa exigencia se incluya en la lista de los crímenes.

Esos artículos son tan precisos y terminantes, y han salido de la discusión tan analizados y estudiados, que el espíritu más preocupado no hallará en ellos la menor ambigüedad o la duda más pequeña para su recta aplicación: tan claro en el contenido de sus conceptos y tan cuidadosamente se ha aquilatado el valor de las palabras. Por eso, con sólo fijarse

en ellas queda alejada toda idea de persecución a la tendencia, de castigo a la doctrina, de delincuencia por el pensamiento. No hay delito más que en el hecho, y en el hecho definido, claro y terminante: en el ataque armado contra la Patria, en el ultraje contra la Nación, en la injuria u ofensa contra el Ejército o la Armada y en la apología de esos delitos.

Declámese, pues, cuanto se quiera, hágase alarde de supuestas condonaciones, el buen sentido del pueblo hará justicia a la rectitud de los legisladores, y los Tribunales mostrarán con sus fallos que si la ley ampara eficaz y vigorosamente la unidad de la Patria y la disciplina del Ejército, en nada empecé ni dificulta la libre predicación de las doctrinas, al defensa de los programas o la exposición de las aspiraciones regionales, cuya integridad ha sido expresamente reconocida en el párrafo 2º del art. 2º.

Y esa es toda la ley; fuera de éstas, el resto de sus disposiciones está consagrado al procedimiento y al propósito que guió al Gobierno al presentarla: de hacer que la averiguación del culpable sea cierta y seguro el inmediato castigo, sin lo cual la ley carecería de ejemplaridad y eficacia.

En este orden de ideas, y dado el estado de nuestra legislación, en especial lo consignado en el caso 7º del artículo 7º del Código de justicia militar fue requisito indispensable, no sólo la derogación de la excepción introducida por la ley de 1º de Enero de 1900, sino la introducción de los artículos 11 y 12, que se refieren a los delitos cometidos por medio de la imprenta. Esos artículos, que han sido objeto de cuidadosa redacción y estudio por las Comisiones de ambas Cámaras, exigen especial atención a los llamados a aplicarlos; porque si bien los delitos cometidos por los medios mecánicos

de publicidad mencionados en el artículo 11 son los que dieron origen a hechos que pusieron un momento en peligro el orden público y perturbaron la tranquilidad de muchas conciencias que nunca había sospechado pudieran herirse a un tiempo a la santidad de la Patria y a la disciplina del Ejército, en cuanto éste es la expresión de la Patria armada, no debe olvidarse que nuestra sociedad política está fundada en la libertad de imprenta y en el respeto a los derechos de la conciencia, y que por tanto las Autoridades dependientes de los respectivos Ministerios que han de intervenir en la aplicación de la ley se han de fijar desde el primer momento en las dos nociones que han presidido a su redacción, a saber: en la naturaleza y especialidad de los delitos que en ella se castigan y en la clara limitación de sus disposiciones, de manera que nunca puedan aplicarse o a ofensas que no estén taxativa y concretamente marcados en su texto.

Recuérdese que a este fin se hizo desaparecer de él el calificativo de indirecto, aun cuando esa noción aparece en varios artículos del Código penal; eliminación de un grande y lógico sentido, pues nada sería más detestable y digno de censura que confundir la salvación de la Patria y la defensa de la disciplina militar, ideas fundamentales y estrechamente enlazadas entre sí, con las habituales licencias de estilo y de pensamiento que, por desgracia, aparecen en la prensa periódica sin propósito deliberado de defender o de destruir aquellos principios fundamentales.

Téngase además en cuenta que esta ley en nada altera el sistema del Código penal o de las leyes especiales que a la imprenta y a la asociación se refieren. Las nuevas figuras de delito son claramente definidas y cuidadosamente apropiadas a hechos determinados y concretos, y la claridad con que se expone la doctrina ilumina también el procedimiento



y las excepciones que ha sido necesario introducir en éste para la eficacia de la ley; pero no por eso queda impune todo lo que no cae taxativamente bajo su acción, puesto que toda delincuencia sigue sujeta al Código penal.

Si en todo caso la aplicación de la ley exige la serenidad en el juicio y la prudencia en el procedimiento, a medida que las ofensas tienen mayor trascendencia y que las penalidades son más rigurosas se estrecha y acentúa la obligación de juzgador para ajustarse a la ley, cuidando especialmente de que en momentos de agitación y apasionamiento de la opinión no se confunda el delito con la violencia de la expresión o se mire como ofensa a la Patria lo que es tan solo a las reglas de la educación o de la convivencia social.

## ANEXO N°37

### **Real Orden circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 7 de Septiembre de 1906 sobre el secuestro de los periódicos denunciados por delitos de imprenta.**

*Gaceta de Madrid*, 9 de Septiembre de 1906. *Constitución política de la Monarquía española y Leyes complementarias: Real Orden circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 7 de septiembre de 1906*, X edición, Madrid, Góngora, 1922, pp. 134-137.

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 816 de la Ley de Enjuiciamiento criminal inmediatamente que se da principio a un sumario por delito de imprenta, los Jueces de instrucción lo ponen en conocimiento de la Autoridad gubernativa y la de la Administración de correos para que sean secuestrados los ejemplares del impreso o de la estampa donde quiera que se hallaren; pero la ejecución del precepto legal cuando se trata de una simple hoja o de una estampa no produce las mismas consecuencias que cuando se refiere a un periódico. En este caso, el secuestro alcanza lo mismo al artículo o noticia objeto de la acción penal que aquello que, lejos de constituir materia delictiva, puede ser motivo de general cultura y de honesto pasatiempo. Por consiguiente, si el periódico, que ha de tener inmediatamente noticias de la incoación del sumario por la diligencia de secuestro del molde, retira lo que motiva el procedimiento, dicho se está que falta el fundamento del precepto legal, cuya finalidad es, sin duda, que el artículo o noticia punible no produzca u ocasione los efectos que se propusieron sus autores. Concurriendo esta circunstancia, es innegable que el respeto a la propiedad y el que se debe al periódico, elemento indiscutible de cultura y progreso, exige la recta y honrada interpretación y aplicación de las leyes que la acción penal no traspase del justo límite y que se procure no ocasionar quebrantos y perjuicios innecesarios e irreparables.

Por otra parte, cuando, en 17 de septiembre de 1882, se promulgó la Ley de Enjuiciamiento criminal, excepción hecha de algunos periódicos, la mayoría de ellos sólo publicaban una edición; ahora, a los veintiséis años transcurridos, por la mayor importancia de las Empresas periodísticas, por los adelantos de la tipografía, por el incremento de las tiradas, por el afán plausible de servir al público con una información más próxima al suceso, se han multiplicado las ediciones, y la actual excepción es la de que un periódico solamente publique la edición en que se contenga el artículo o estampa punible; y claro está que si la orden de secuestro de ejemplares se limita a expresar que el periódico ha sido denunciado y debe impedirse su circulación, la Autoridad gubernativa o la Administración de Correos habrá de verificarlo, aun en el repetido caso de que alguno de ellos hubiera sido retirado lo que originó la denuncia y sumario; y esto, sobre no ser equitativo, no puede estimarse legal. Tratándose por ejemplo, de un delito de hurto o de robo, igualmente se ordena el secuestro de las cosas hurtadas o robadas donde se hallaren; pero al verificarlo, la incautación no alcanza a aquellas que notoriamente no tienen relación alguna con el sumario, aunque se encuentren en poder del presunto culpable.

En su virtud, S.M el Rey se ha servido en disponer que cuando se empieza un sumario por delito de imprenta, las órdenes que se dicten por los Jueces de Instrucción para el secuestro del periódico deberán expresar de una manera clara y categórica el artículo o noticia o estampa motivo del proceso, y que la incautación de ejemplares habrá de limitarse exclusivamente a la de aquellos que contengan el particular estimado punible, pudiendo circular libremente los que se presenten en las oficinas de Correos o se pongan a la venta una vez suprimida la parte denunciada.